CEPC
Boletín de Documentación
Nº 33

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2008

DOSSIER

Legislación electoral: Régimen jurídico de algunos elementos del sistema electoral

Presentación y coordinación:
Luis E Delgado del Rincón

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
Subdirección General de Publicaciones y Documentación
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO

EDITA: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Plaza de la Marina Española, nº 9 - 28071 Madrid
ISSN: 1139-2827
NIPO: 00-08-006-6

DOSSIER

Legislación electoral: Régimen jurídico de algunos elementos del sistema electoral

PRESENTACIÓN

El Boletín de Documentación que ahora se presenta está dedicado al régimen jurídico de algunos de los elementos del sistema electoral como la Administración electoral, la presentación de candidaturas por los partidos políticos, la campaña electoral; el acto de la votación; la circunscripción o la fórmula electoral. Su elaboración se debe, entre otros motivos, a la importancia que para un Estado democrático tiene el sistema electoral y a las iniciativas que, desde hace unos meses, han llevado a cabo algunos grupos parlamentarios para tratar de reformar determinados elementos del sistema electoral español.

Como ha expresado el profesor Rubio Llorente, las elecciones son "el centro de la democracia, el nexo que une a la sociedad con el Estado". La democracia representativa "gira en torno de un núcleo central invariable: la elección periódica de los representantes a los que, durante un tiempo predeterminado, se les va a confiar el poder de concretar, en nombre de la comunidad, el contenido de una voluntad ya existente".

El sistema electoral constituye "la espina dorsal" de los Estados contemporáneos, en los que impera el carácter eminentemente representativo de la forma de Estado democrático, ya que la actuación del pueblo por medio de representantes puede considerarse, hasta ahora, como "la forma más eficaz de encajar las diferentes piezas que componen el Estado constitucional: la soberanía popular, la división de poderes y el respeto a los derechos de la minoría" (Paloma Biglino Campos).

En un sentido amplio, por sistema electoral puede entenderse aquel "conjunto de reglas y procedimientos conforme a los cuales se convocan y celebran las elecciones, se asignan los escaños en función de los votos obtenidos por las candidaturas y se resuelven los recursos que puedan plantearse en este proceso" (Antonio Torres del Moral). En sentido estricto, el sistema electoral puede definirse —atendiendo exclusivamente a uno de los elementos anteriores—como aquel conjunto de mecanismos que tienden a convertir los votos en escaños.

Un sistema electoral es "una realidad compleja" configurada por la concurrencia e interrelación de los elementos estructurales que lo componen, entre los que pueden destacarse "la composición de la Cámara, la fórmula electoral, el sistema de circunscripciones electorales o la barrera electoral" (Alfonso Fernández Miranda).

En la forma de Estado democrático el sistema electoral adquiere una importancia fundamental ya que "influye en la conformación del sistema de partidos, al limitar el número de aquéllos que pueden acceder al Parlamento, al reducir todavía más el de los que pueden constituir grupo parlamentario y al dejar en uno o en muy pocos la opción de formar Gobierno"

(Antonio Torres del Moral). Ahora bien, además de simplificar la complejidad del multipartidismo, el sistema electoral influye también en la estabilidad del sistema político, facilitando o dificultando la formación de los Gobiernos.

La trascendencia del sistema electoral se refleja también en el conjunto de las normas jurídicas que lo regulan, así como en su forma y rango. Estas normas configuran una de las ramas que integran el Derecho constitucional, el Derecho electoral. Sobre esta rama del Derecho constitucional, como reconoce Enrique Arnaldo Alcubilla, se proyecta también con singular intensidad el principio democrático, ya que atraviesa todas y cada una de las normas que lo conforman. “Las elecciones son la realización primaria de la democracia y su actualización permanente”.

Las Constituciones de algunos países, entre los que se encuentra la nuestra, contienen numerosos preceptos en los que se establecen las bases del sistema electoral, dedicando, por ejemplo, varios artículos al procedimiento de elección de los órganos representativos. En el caso español, esta previsión revelaba ya la intención de los constituyentes de llegar a un consenso amplio para determinar las reglas esenciales del juego democrático. En opinión de la profesora Paloma Biglino Campos, “sin un sistema electoral que garantizase la adecuada formación de la voluntad popular en las urnas y su correcta traslación a la composición de los órganos representativos, no era posible crear una verdadera democracia”. Además de las normas constitucionales, el grueso de las normas que regulan el sistema electoral se contiene en las leyes que establecen la organización y el procedimiento de las elecciones, complementadas por los reglamentos de las cámaras parlamentarias y por otro tipo de normas que conformarían la denominada “legislación electoral de contorno” (Óscar Sánchez Muñoz). Sobre todas estas normas ejerce también su influencia el principio democrático.

La reforma de algunos de los elementos que integran el sistema electoral es un tema que surge de forma periódica y recurrente en los países democráticos. En este sentido, como ha manifestado Luis Gálvez Muñoz, basta con que aparezca un problema en un proceso electoral concreto, que un partido político no alcance las expectativas de poder que se había propuesto, o que se detecten algunas deficiencias en el funcionamiento del sistema político, para que se abra, con mayor o menor intensidad, un debate social, político y científico sobre la oportunidad o no de introducir algunas modificaciones en el sistema electoral. En España, desde la restauración del régimen democrático, se ha podido comprobar también cómo algunos representantes de partidos políticos, algunos medios de comunicación social o algunos juristas, particularmente tras la celebración de ciertos procesos electorales, se han mostrado partidarios de reformar determinados elementos del sistema electora. El tema de la reforma electoral es casi consustancial a nuestra democracia. De ahí que, para el profesor Gálvez Muñoz, se haya calificado también al Derecho electoral como un “Derecho esencialmente crítico”, teniendo presente que la formulación de críticas y propuestas de mejora sobre el régimen electoral no es “algo anómalo o disfuncional, expresivo de una grave patología” que aqueja a nuestra democracia, sino que, por el contrario, es representativo de “una buena salud y sensibilidad democrática”, así como de “un alto nivel de exigencia de nuestra sociedad sobre la articulación y el funcionamiento del sistema político”.

Ahora bien, ha de reconocerse también que los sistemas electorales en las democracias estables, en particular algunos de sus elementos, “tienen una clara tendencia inercial, muestran una acusada resistencia al cambio”. Esta tendencia inercial puede explicarse fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque aunque no todas las normas electorales forman parte de la Constitución en sentido formal, todas ellas son, sin embargo, “normas materialmente constitucionales, en el sentido de que están en el centro de cualquier Constitución política por tratarse de normas referidas, nada menos que a las reglas del juego para la legí-

tima conquista del poder". Esta peculiar naturaleza material de las normas electorales, que afectan directamente a las reglas del juego, hace que estén necesitadas, en todo caso, de un amplísimo consenso. El segundo motivo que explica esa tendencia inercial de los sistemas electorales viene determinado por el hecho de que "las leyes electorales, como todas las leyes, las hacen las mayorías parlamentarias, y las mayorías parlamentarias, de alguna manera, contribuyen a hacerlas las leyes electorales" (Alfonso Fernández Miranda). De ahí que, en nuestro ordenamiento jurídico, la reforma de algunos de los elementos del sistema electoral haya de llevarse a cabo por medio de Ley Orgánica, siendo incluso necesaria, para modificar otros elementos, la reforma de la Constitución.

A comienzos de esta legislatura, el 31 de julio de 2008, diferentes grupos parlamentarios solicitan que se convoque una sesión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a los efectos de que por ella se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional en la que se debata la solicitud de creación de una Subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general. Esta Subcomisión se constituye, en el seno de la Comisión Constitucional, el día 2 de octubre de 2008. Con anterioridad a la constitución de la Subcomisión, la Mesa del Congreso había admitido a trámite algunas proposiciones de Ley Orgánica para reformar determinados preceptos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985 (LOREG), presentadas por el Parlamento de Galicia y por diferentes grupos parlamentarios (Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Grupo Parlamentario Mixto; Grupo Parlamentario Popular). Las propuestas de reforma afectaban, entre otros, a los siguientes elementos del régimen electoral: la campaña institucional, la composición del Congreso, la circunscripción electoral o el derecho de voto de las personas residentes en el exterior. También se había admitido a trámite una proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOREG para establecer circunscripciones electorales en el ámbito autonómico en las elecciones al Parlamento europeo. Esta proposición de Ley, presentada por el Grupo parlamentario catalán (Convergencia i Unió), fue rechazada por el Pleno del Congreso. De igual modo, antes de la constitución de la Subcomisión, se había solicitado la comparecencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, ante la Comisión Constitucional, para que explicase la disposición del Gobierno de tramitar, con la máxima urgencia, un proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LOREG, que permitiese a los residentes ausentes poder ejercer su derecho de voto en una urna, con el fin de garantizar el carácter secreto del voto y evitar la suplantación de la identidad de los votantes en los procesos electorales. Por otro lado, el 9 de octubre de 2008, la Subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general acuerda solicitar del Gobierno un escrito de petición de Dictamen al Consejo de Estado sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En cumplimiento de esta petición, el Pleno del Consejo de Estado encarga a su Comisión de estudios la elaboración de un informe en el que se examinen algunas de las posibles reformas del sistema electoral.

La creación de la Subcomisión parlamentaria inicia un procedimiento formal destinado a valorar la posible reforma electoral desde unos planteamientos eminentemente políticos; mientras que la petición del Gobierno al Consejo de Estado de un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General implica que este órgano consultivo aborde dicho tema desde unos planteamientos eminentemente jurídicos. A partir de este momento, la reforma electoral adquiere una trascendencia política y jurídica.

Como se ha anticipado, dado el interés gubernamental y parlamentario que en esta legislatura ha adquirido la reforma de algunos de los elementos del sistema electoral, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha decidido también dedicar a este tema la elaboración del presente Boletín de Documentación.

Incluso, este organismo, en colaboración con el Consejo de Estado, ha organizado el mes de octubre pasado unas jornadas sobre "La reforma del régimen electoral general", en las que diferentes profesores, expertos en la materia, han examinado y debatido sobre algunas cuestiones relacionadas con diferentes elementos del sistema electoral como la inscripción en el Censo electoral, el derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, el voto de los residentes ausentes, los límites de la campaña institucional, la distribución de espacios electorales en los medios públicos de comunicación, la organización de los debates, la financiación de la campaña, el día de reflexión, la proporcionalidad del sistema de elección de los diputados, la elección directa de alcalde en las elecciones municipales y la circunscripción nacional o autonómica en las elecciones al Parlamento Europeo. Dentro de pocos meses, se publicará por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un libro en el que se recogerán las ponencias presentadas a estas Jornadas, junto con el informe del Consejo de Estado.

Pero es más, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en los últimos dos años, ha publicado varios libros que versan sobre algunos de los temas citados, haciéndose eco también del interés que los mismos han despertado en la doctrina. A este respecto, pueden citarse, entre otros, los siguientes: Juan Carlos Gavara de Cara, La homogeneidad de los regímenes electorales autonómicos (2007), en el que se trata de comprobar el grado de homogeneidad de los regímenes electorales de las Comunidades Autónomas, en relación con algunos elementos del sistema electoral como el procedimiento, la campaña, la organización, la fórmula electoral o el control judicial del proceso electoral; Óscar Sánchez Muñoz, La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales (2007), en el que se analiza detalladamente el concepto, contenido y garantías de este principio constitucional: la igualdad de oportunidades de los sujetos que compiten por la obtención del voto de los ciudadanos; Pablo Santolaya Machetti y Miguel Revenga Sánchez, Nacionalidad, extranjería y derecho de sufragio (2007), que es el resultado de un foro de debate celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre inmigración y ciudadanía, en el que a la ponencia del profesor Pablo Santolaya, que lleva el título del libro, se añade un trabajo del profesor Miguel Revenga sobre "El reto de la normalización del inmigrante"; este libro se verá completado con otro de Pablo Santolaya Machetti y María Díaz Crego, El sufragio de los extranjeros. Un estudio de Derecho comprado (2008), en el que se analiza críticamente la situación en los países de origen de los inmigrantes que residen en España y la regulación del ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los países miembros de la Unión Europea; Paloma Biglino Campos (ed.), Proclamación de candidatos y garantías electorales: propuestas de reforma. (2008), obra colectiva que contiene las ponencias de unas Jornadas celebradas, en diciembre de 2007, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, sobre "Contencioso-electoral y amparo electoral frente a proclamación de candidatos: perspectiva actual y propuesta de reforma", en las que se trataba de estudiar el procedimiento que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece para asegurar la legalidad de las decisiones de las Juntas Electorales a las que incumbe el examen y proclamación de candidatos.

En este momento, se hallan también en proceso de publicación dos obras del profesor Luis Gálvez Muñoz, La confección del voto y El Derecho electoral de las Comunidades Autónomas. Revisión y mejora. En la primera, el autor analiza los principios constitucionales que se proyectan sobre el sufragio y sobre el acto de confección del voto, así como algunas cuestiones interesantes relativas a las papeletas y sobres de votación, el voto electrónico, el uso las cabinas o los regímenes especiales de confección del voto. La segunda, es una obra colectiva (Luis Gálvez Muñoz, ed.), en la que se aborda el examen de los regímenes electorales de las Comunidades Autónomas, desde una perspectiva general o transversal, teniendo en cuenta los cambios producidos tras la apertura del último proceso de reformas estatutarias.

El Boletín de Documentación contiene textos y documentos jurídicos de algunos países de nuestro entorno cultural como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se han incluido también, por su trascendencia, algunos documentos de Derecho europeo, como el Código de buena conducta en materia electoral, elaborado por la Comisión de Venecia, por encargo de la Comisión permanente de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Se ha omitido la selección de los textos vigentes en el Derecho español, ya que a ellos se puede acceder a través de la página web del Ministerio del Interior, en el apartado "Elecciones y partidos políticos: normativa electoral". Los textos jurídicos seleccionados proceden de normas jurídicas de diferente rango y eficacia: Constituciones, leyes, reglamentos electorales o reglamentos de las cámaras parlamentarias. Dichos textos se complementan, en algunos casos, con jurisprudencia constitucional o informes jurídicos de cierta relevancia. También se incluye otra información que puede ser útil para los investigadores y otras personas interesadas, como la selección de una bibliografía o de otros recursos electrónicos.

Luis E. Delgado del Rincón
Subdirector General de Publicaciones y Documentación
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

SUMARIO*

* Los textos jurídicos y documentos que figuran en negrita se han reproducido íntegramente, salvo en aquellos casos en que, debido a su extensión, se ha procedido a seleccionar los preceptos que hacen referencia a temas relacionados con el sistema electoral como la Administración electoral; la presentación de candidaturas por los partidos políticos; la campaña electoral; el acto de la votación; el escrutinio; la circunscripción o la fórmula electoral.

I. Consejo de Europa

I.1. Códigos e informes

Code de bonne conduite en matière electoral

En noviembre del año 2001, la Comisión permanente de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la resolución 1264 (2001), por la que encomendaba a la Comisión de Venecia elaborar un "Código de buena conducta en materia electoral", que estableciera los principios que deben regular tanto el proceso preelectoral y electoral como el proceso posterior a la votación.

El Código consta de dos partes:

- ***Lignes directrices*** aprobadas por la Comisión en la 51 Sesión plenaria, celebrada en Venecia los días 5 y 6 de julio de 2002.
- ***Rapport explicatif*** aorbado por la Comisión en la 52 Sesión plenaria, celebrada en Venecia los días 18 y 19 de octubre de 2002.

La primera parte ***"Lignes directrices"***, se basa en los principios del patrimonio electoral europeo que son: el sufragio universal, igual, libre, secreto y directo, estos cinco principios constituyen el núcleo del ***"Code de Bonne Conduite en matière electoral",*** que se recoge íntegramente en el dossier.

El ***"Rapport explicatif"*** desarrolla los principios del patrimonio electoral europeo recogidos en ***"Lignes directrices"***, definiendo y precisando el contenido de los mismos y estableciendo recomendaciones para la aplicación de estos principios de acuerdo con las condiciones en que se realizan los procesos electorales.

Debido a su extensión en el dossier se han seleccionado los siguientes temas:

Remarques generales

I. Les principes du patrimoine électoral européen

1. Le suffrage universel

1.1. Règle et exceptions

2. Le suffrage égal

2.2. L'égalité de la force électorale

2.3. L'égalité des chances

3. Le suffrage libre

3.2.2. Les procédures de vote

3.2.2.1. Le vote par correspondance ou par procuration dans certaines circonstances

3.2.2.2. Le vote des militaires

3.2.2.3. Le vote mécanique et électronique

4. Le suffrage secret

5. Le suffrage direct

II. Les conditions de la mise en oeuvre des principes

3. Les garanties procédurales

3.1. L'organisation du scrutin par un organe impartial

LIGNES DIRECTRICES

Adoptés par la Commission lors de sa 51e session plénière (Venise, 5-6 juillet 2002)

Introduction

Remarques générales

I. Les principes du patrimoine électoral européen

Introduction: les principes et leur fondement juridique

1. Le suffrage universel

1.1. Règle et exceptions

1.2. Les listes electorales

1.3. La présentation des candidaturas

2. Le suffrage égal

2.1. L'égalité de décompte

2.2. L'égalité de la force électorale

2.3. L'égalité des chances

2.4. Egalité et minorités nationales

2.5. Egalité et parité des sexes

3. Le suffrage libre

3.1. La libre formation de la volonté de l'électeur

3.2. La libre expression de la volonté de l'électeur et la lutte contre la fraude électorale

3.2.1. En général

3.2.2. Les procédures de vote

3.2.2.1. Le vote par correspondance ou par procuration dans certaines circonstances

3.2.2.2. Le vote des militaires

3.2.2.3. Le vote mécanique et électronique

3.2.2.4. Le décompte

3.2.2.5. Le transfert des résultats

I. Les principes du patrimoine électoral européen

Les cinq principes du patrimoine électoral européen sont le suffrage universel, égal, libre, secret et direct. En outre, les élections doivent être périodiques.

1. Le suffrage universel

1.1. Règle et exceptions

Le suffrage universel implique en principe que tout être humain ait le droit de vote et soit éligible. Toutefois, un certain nombre de conditions peuvent ou doivent être prévues:

a. condition d'âge:

i. la capacité civique doit être soumise à un âge minimal;

ii. le droit de vote doit être acquis au plus tard avec la majorité civile;

iii. l'éligibilité devrait de préférence être acquise au même âge que le droit de vote, mais au plus tard à 25 ans, sous réserve de fonctions particulières (sénateur, chef de l'Etat).

b. condition de nationalité :

i. la condition de nationalité peut être prévue;

ii. il est toutefois souhaitable que, après une certaine durée de résidence, les étrangers disposent du droit de vote sur le plan local.

c. condition de résidence:

i. une condition de résidence peut être imposée;

ii. la résidence est comprise comme la résidence habituelle;

iii. une condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour les nationaux, que pour les élections locales ou régionales;

iv. cette durée ne devrait pas dépasser six mois; une durée plus longue peut être prévue uniquement en vue d'assurer la protection des minorités nationales;

v. le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé aux citoyens résidant à l'étranger.

d. exclusion du droit de vote et de l'éligibilité:

i. une exclusion du droit de vote et de l'éligibilité peut être prévue, mais elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes:

ii. elle doit être prévue par la loi;

iii. elle doit respecter le principe de la proportionnalité; l'exclusion de l'éligibilité peut être soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de vote;

iv. elle doit être motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations pénales pour des délits graves;

v. en outre, l'exclusion des droits politiques ou l'interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent être prononcées par un tribunal dans une décision spécifique.

1.2. Les listes électorales

Les conditions suivantes doivent impérativement être remplies pour que les listes électorales soient fiables:

i. il faut des listes électorales permanentes;

ii. il faut des mises à jour régulières, qui doivent être au moins annuelles. L'inscription des électeurs, lorsqu'elle n'est pas automatique, doit être possible pendant un laps de temps relativement long;

iii. les listes électorales doivent être publiées;

iv. il doit exister une procédure administrative —sujette à contrôle judiciaire—, ou une procédure judiciaire, permettant à l'électeur non mentionné de se faire inscrire; l'inscription ne doit pas avoir lieu au bureau de vote le jour de l'élection;

v. une procédure analogue devrait permettre à l'électeur de faire corriger les inscriptions erronées;

vi. une liste supplémentaire peut permettre aux personnes ayant changé de domicile ou ayant atteint l'âge légal du droit de vote depuis la publication définitive de la liste, de voter.

1.3. La présentation des candidatures

i. la présentation de candidatures individuelles ou de listes de candidats peut éter soumise à l'obtention d'un certain nombre de signatures;

ii. la loi ne devrait pas exiger la signature de plus de 1 % des électeurs de la circonscription;

iii. la procédure de vérification des signatures doit obéir à des règles claires, notamment en ce qui concerne les délais;

iv. la vérification doit porter en principe sur l'ensemble des signatures; toutefois, lorsqu'il est certain qu'un nombre suffisant de signatures a été atteint, il peut éter renoncé à la vérification des signatures restantes;

v. la validation des candidatures doit être terminée au début de la campagne électorale ;

vi. si une caution est demandée, elle doit être remboursée si le candidat ou le parti dépasse un certain nombre de suffrages ; son montant et le nombre de suffrages requis pour le remboursement ne doivent pas être excessifs.

2. Le suffrage égal

Le suffrage égal comprend:

2.1. L'égalité de décompte: chaque électeur a normalement une voix ; dans le cas où le système électoral accorde aux électeurs plus d'une voix, chaque électeur a le même nombre de voix.

2.2. L'égalité de la force électorale: les sièges doivent être répartis de manière égale entre les circonscriptions;

L'égalité de la force électorale:

i. doit s'appliquer en tout cas aux premières chambres, aux élections régionales et locales;

ii. implique une répartition égale et claire des sièges selon l'un des critères de répartition suivants : population, nombre de résidents ressortissants (y compris les mineurs), nombre d'électeurs inscrits, éventuellement nombre de votants; une combinaison appropriée de ces critères de répartition est envisageable.

iii. Le critère géographique et les délimitations administratives voire historiques peuvent être pris en considération.

iv. L'écart maximal admissible par rapport à la clé de répartition ne devrait pas dépasser 10 %, et en tout cas pas 15 %, sauf circonstance spéciale (protection d'une minorité concentrée, entité administrative à faible densité de population);

v. Afin d'assurer l'égalité de la force électorale, une nouvelle répartition des sièges doit avoir lieu au moins tous les dix ans et de préférence hors des périodes électorales.

vi. En présence de circonscriptions plurinominales, la nouvelle répartition se fera de préférence sans redécoupage des circonscriptions, et les circonscriptions correspondront si possible à des entités administratives.

vii. Lorsqu'un nouveau découpage est prévu —ce qui s'impose dans un système uninominal—, il doit:

- ne pas être partisan;
- ne pas défavoriser les minorités nationales;
- tenir compte d'un avis exprimé par une commission, comprenant en majorité des membres indépendants, et de préférence un géographe, un sociologue, une représentation équilibrée des partis et, le cas échéant, des représentants des minorités nationales.

2.3. L'égalité des chances

a. L'égalité des chances doit être assurée entre les partis et les candidats. Elle implique la neutralité des autorités publiques, en particulier relativement:

i. à la campagne électorale;

ii. à la couverture par les médias, notamment les médias publics;

iii. au financement public des partis et campagnes.

b. Selon les matières, l'égalité peut être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement ou de l'électorat ne soit prise en compte. Si elle est proportionnelle, les partis politiques doivent être traités en fonction de leurs résultats électoraux. L'égalité des chances porte notamment sur le temps de parole à la radio et à la télévision, les subventions publiques et les autres formes de soutien.

c. Dans le respect de la liberté d'expression, la loi devrait prévoir que les médias audiovisuels privés assurent un accès minimal aux différents participants aux élections, en matière de campagne électorale et de publicité.

d. Le financement des partis, des candidats et des campagnes électorales doit être transparent.

e. Le principe de l'égalité des chances peut, dans certains cas, conduire à limiter les dépenses des partis, notamment dans le domaine de la publicité.

2.4. Egalité et minorités nationales

a. Les partis de minorités nationales doivent être autorisés.

b. N'est pas contraire, en principe, à l'égalité du suffrage l'adoption de règles spécifiques garantissant aux minorités nationales des sièges réservés ou prévoyant une exception aux règles normales d'attribution des sièges (par exemple suppression du quorum) pour les partis de minorités nationales.

c. Les candidats et les électeurs ne doivent pas être contraints d'indiquer leur appartenance à une minorité nationale.

2.5. Egalité et parité des sexes

Les règles juridiques imposant un pourcentage minimal de personnes de chaque sexe parmi les candidats ne devraient pas être considérées comme contraires à l'égalité du suffrage, si elles ont une base constitutionnelle.

3. Le suffrage libre

3.1. La libre formation de la volonté de l'électeur

a. Les autorités publiques ont un devoir de neutralité. Celui-ci porte notamment sur:

i. les médias;

ii. l'affichage;

iii. le droit de manifester sur la voie publique;

iv. le financement des partis et des candidats.

b. Les autorités publiques ont des obligations positives et doivent notamment:

i. soumettre les candidatures déposées aux électeurs;

ii. permettre à l'électeur de connaître les listes et les candidats qui se présentent aux élections, par exemple par un affichage adéquat.

iii. L'information mentionnée aux points précédents doit être accessible aussi dans les langues des minorités nationales.

c. Les violations du devoir de neutralité et de la libre formation de la volonté de l'électeur doivent être sanctionnées.

3.2. La libre expression de la volonté de l'électeur et la lutte contre la fraude électorale

i. la procédure de vote doit être simple;

ii. dans tous les cas, le vote dans un bureau de vote doit être possible; d'autres modalités de vote sont admissibles aux conditions suivantes:

iii. le vote par correspondance ne doit être admis que si le service postal est sûr et fiable ; il peut être limité aux personnes hospitalisées, aux détenus, aux personnes à mobilité réduite et aux électeurs résidant à l'étranger; la fraude et l'intimidation ne doivent pas être possibles;

iv. le vote électronique ne doit être admis que s'il est sûr et fiable ; en particulier, l'électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le corriger, si nécessaire, dans le respect du secret du vote; la transparence du système doit être garantie;

v. le vote par procuration ne peut être autorisé que s'il est soumis à des règles très strictes; le nombre de procurations détenues par un électeur doit être limité;

vi. le recours à l'urne mobile ne doit être admis qu'à des conditions strictes, permettant d'éviter la fraude;

vii. deux paramètres au moins doivent être utilisés pour juger de la justesse du vote: le nombre d'électeurs qui ont participé au vote et le nombre de bulletins introduits dans l'urne;

viii. les bulletins ne doivent pas être manipulés ou annotés par les membres du bureau de vote;

ix. les bulletins non utilisés doivent rester en permanence dans le bureau de vote;

x. le bureau de vote doit compter des membres représentant plusieurs partis et les observateurs désignés par les candidats doivent pouvoir assister aux élections;

xi. les militaires doivent voter à leur lieu de résidence lorsque cela est possible; sinon, il est souhaitable qu'ils soient inscrits dans les bureaux de vote proches de leur caserne;

xii. le décompte devrait avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote;

xiii. le décompte doit être transparent ; la présence des observateurs, des représentants des candidats et des médias doit être admise ; les procès-verbaux doivent éter accessibles à ces personnes ;

xiv. la transmission des résultats au niveau supérieur doit avoir lieu de manière transparente ;

xv. l'Etat doit punir toute fraude électorale.

4. Le suffrage secret

a. Le secret du vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation pour l'électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le contenu a été révélé.

b. Le vote doit être individuel. Le vote familial et toute autre forme de contrôle d'un électeur sur le vote d'un autre doivent être interdits.

c. La liste des votants ne devrait pas être rendue publique.

d. La violation du secret du vote doit être sanctionnée.

5. Le suffrage direct

Doivent être élus au suffrage direct:

i. au moins une Chambre du Parlement national;

ii. les organes législatifs infra-nationaux;

iii. les assemblées locales.

6. La périodicité des élections

Les élections doivent avoir un caractère périodique ; le mandat des assemblées législatives ne doit pas dépasser cinq ans.

II. Les conditions de la mise en oeuvre des principes

1. Le respect des droits fondamentaux

a. Les élections démocratiques ne sont pas possibles sans respect des droits de l'homme, et notamment de la liberté d'expression et de la presse, de la liberté de circulation à l'intérieur du pays, ainsi que de la liberté de réunion et d'association à des fins politiques, y compris par la création de partis politiques.

b. Les restrictions à ces libertés doivent respecter les principes de la base légale, de l'intérêt public et de la proportionnalité.

2. Niveaux normatifs et stabilité du droit électoral

a. A l'exception des règles techniques et de détail —qui peuvent avoir un caractère réglementaire—, les règles du droit électoral doivent avoir au moins rang législatif.

b. Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et le découpage des

circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d'un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire.

3. Les garanties procédurales

3.1. L'organisation du scrutin par un organe impartial

a. Un organe impartial doit être compétent pour l'application du droit électoral.

b. En l'absence d'une longue tradition d'indépendance de l'administration face au pouvoir politique, des commissions électorales indépendantes et impartiales doivent être créées, du niveau national au niveau du bureau de vote.

c. La Commission électorale centrale doit être permanente.

d. La Commission électorale centrale devrait comprendre:
i. au moins un magistrat;
ii. des délégués des partis déjà représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un certain nombre de suffrages; ces personnes doivent avoir des compétences en matière électorale. Elle peut comprendre:
iii. un représentant du ministère de l'Intérieur;
iv. des représentants des minorités nationales.

e. Les partis politiques doivent être représentés de manière égale dans les commissions électorales ou doivent pouvoir observer le travail de l'organe impartial. L'égalité peut se comprendre de manière stricte ou proportionnelle (voir point I.2.3.b).

f. Les membres des commissions électorales ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes qui les ont nommés.

g. Une formation standardisée doit être assurée aux membres des commissions électorales.

h. Il est souhaitable que les décisions des commissions électorales se prennent à la majorité qualifiée ou par consensus.

3.2. L'observation des élections

a. La possibilité de participer à l'observation doit être la plus large possible, en ce qui concerne aussi bien les observateurs nationaux que les observateurs internationaux.

b. L'observation ne doit pas se limiter au jour de l'élection, mais comprendre la période d'enregistrement des candidats et, le cas échéant, des électeurs, ainsi que la campagne électorale. Elle doit permettre d'établir si des irrégularités se sont produites aussi bien avant l'élection que pendant celle-ci et après celle-ci. Elle doit en particulier être possible pendant le dépouillement.

c. La loi doit indiquer très clairement les lieux où les observateurs ne peuvent pas se rendre.

d. L'observation doit porter sur le respect par les autorités de leur obligation de neutralité.

3.3. L'existence d'un système de recours efficace

a. L'instance de recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance.

b. La procédure doit être simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la recevabilité des recours.

c. Les dispositions en matière de recours, et notamment de compétences et de responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la loi, afin d'éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. Ni les requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir choisir l'instance de recours.

d. L'instance de recours doit être compétente notamment en ce qui concerne le droit de vote —y compris les listes électorales— et l'éligibilité, la validité des candidatures, le respect des règles de la campagne électorale et le résultat du scrutin.

e. L'instance de recours doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le résultat. L'annulation doit être possible aussi bien pour l'ensemble de l'élection qu'au niveau d'une circonscription ou au niveau d'un bureau de vote. En cas d'annulation, un nouveau scrutin a lieu sur le territoire où l'élection a été annulée.

f. Tout candidat et tout électeur de la circonscription ont qualité pour recourir. Un quorum raisonnable peut être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux résultats des élections.

g. Les délais de recours et les délais pour prendre une décision sur recours doivent être courts (trois à cinq jours en première instance).

h. Le droit des requérants au contradictoire doit être sauvegardé.

i. Lorsque les commissions électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent pouvoir rectifier ou annuler d'office les décisions des commissions inférieures.

4. Le système électoral

Le choix du système électoral est libre, sous réserve du respect des principes mentionnés cidessus.

RAPPORT EXPLICATIF

Adopté par la Commission lors de sa 52e session plénière (Venise, 18-19 octobre 2002)

Remarques générales

1. La démocratie est, avec les droits de l'homme et la primauté du droit, l'un des trois piliers du patrimoine constitutionnel européen, aussi bien que du Conseil de l'Europe. Elle ne se conçoit pas sans des élections respectant un certain nombre de principes permettant de les considérer comme démocratiques.

2. Ces principes constituent un aspect spécifique du patrimoine constitutionnel européen, qu'il est légitime de dénommer patrimoine électoral européen. Le patrimoine électoral européen comprend deux aspects. D'une part, il s'agit du noyau dur du patrimoine électoral européen, à savoir les principes constitutionnels du droit électoral, tels que le suffrage universel, égal, libre, secret et direct. D'autre part, des élections véritablement démocratiques ne peuvent se tenir sans que soit respecté un certain nombre de conditions-cadres d'un Etat démocratique fondé sur la primauté du droit, telles que les droits fondamentaux, la stabilité du droit électoral et des garanties procédurales effectives. […]

1. Le suffrage universel

1.1. Règle et exceptions

6. Le suffrage universel comprend à la fois la capacité civique active (droit de vote), et la capacité civique passive (éligibilité). Le droit de vote et l'éligibilité peuvent être soumis à un

certain nombre de conditions qui sont énumérées ci-dessous de manière limitative. Les plus classiques sont les conditions d'âge et de nationalité.

a. Un âge minimal s'impose pour le droit de vote et l'éligibilité ; toutefois, l'obtention de la majorité civile, entraînant non seulement des droits, mais aussi des obligations dans le domaine civil, doit au moins conférer le droit de vote. Quant à l'éligibilité, il est concevable de prévoir un âge plus élevé ; sous réserve de fonctions particulières considérées comme liées à un certain âge (sénateur, chef de l'Etat), l'âge de 25 ans ne devrait pas être dépassé.

b. [...]

2. Le suffrage égal

10. L'égalité en matière électorale comprend divers aspects. Certains relèvent de l'égalité de suffrage, valeur commune au continent, d'autres vont plus loin et ne peuvent pas être considérés comme la traduction d'une norme générale. Les principes qui doivent être respectés dans tous les cas sont l'égalité de décompte, l'égalité de la force électorale et l'égalité des chances. Par contre, l'égalité des résultats, par la représentation proportionnelle des partis ou des sexes, par exemple, ne peut être imposée.

[...]

2.2. L'égalité de la force électorale

13. L'égalité de la force électorale implique que, dès lors que l'élection ne se déroule pas dans une circonscription unitaire, le découpage du territoire doit être organisé de telle manière que les sièges des premières chambres, qui représentent le peuple, soient répartis de manière égale entre ces circonscriptions, selon un critère de répartition déterminé, qui peut être le nombre de résidents de la circonscription, le nombre de résidents ressortissants (y compris les mineurs), le nombre d'électeurs inscrits, éventuellement celui des votants. Une combinaison appropriée de ces critères de répartition est envisageable. Les mêmes règles s'appliquent aux élections régionales et locales. Lorsque ce principe n'est pas respecté, il est question de géométrie électorale. La géométrie électorale est active lorsque la répartition des sièges entraîne des inégalités de représentation dès sa première application ; elle est passive lorsque l'inégalité résulte du maintien pendant une longue période d'une répartition territoriale des sièges inchangée. En outre, un autre type de manipulation, appelé charcutage électoral (gerrymandering), peut avoir lieu dans les systèmes qui ne sont pas parfaitement proportionnels, notamment les systèmes de scrutin majoritaire ; il consiste à découper les circonscriptions électorales de façon artificielle, au profit d'un parti donné.

14. Le découpage des circonscriptions peut encore prendre en considération le critère géographique et les délimitations administratives voire historiques, qui sont souvent fonction de la géographie.

15. L'écart maximal admissible par rapport au critère de répartition dépend de chaque situation ; il ne devrait pas dépasser 10 %, et en tout cas pas 15 %, sauf circonstance spéciale (unité administrative faiblement peuplée mais de même niveau que d'autres qui sont représentées par au moins un député, présence d'une minorité nationale concentrée)

16. Afin d'éviter la géométrie électorale passive, une nouvelle répartition devrait avoir lieu au moins tous les dix ans, et de préférence hors des périodes électorales, ce qui limite les risques de manipulations politiques.

17. En présence de circonscriptions plurinominales, la géométrie électorale peut être facilement évitée, par l'attribution régulière des sièges aux circonscriptions de manière conforme au critère de répartition. Les circonscriptions devraient alors correspondre à des entités administratives, et un redécoupage n'est pas souhaitable. Lorsqu'un système

majoritaire uninominal est appliqué, chaque nouvelle répartition des sièges implique un redécoupage des circonscriptions. Les incidences politiques du découpage des circonscriptions sont très importantes et il est donc essentiel qu'il ne soit pas partisan et ne défavorise pas les minorités nationales. Les anciennes démocraties abordent ce problème defaçons très différentes et travaillent sur des bases non moins différentes. Il convient que les nouvelles démocraties adoptent des critères simples et des procédures faciles à mettre en oeuvre. La meilleure solution serait de soumettre d'abord la question à une commission, comprenant en majorité des membres indépendants, et de préférence un géographe, un sociologue, une représentation équilibrée des partis et, le cas échéant, des représentants des minorités nationales. Ensuite, le Parlement statuerait sur la base des propositions de la commission, avec une possibilité de recours unique.

2.3. L'égalité des chances

18. L'égalité des chances doit être assurée entre les partis et les candidats et conduire l'Etat à se montrer impartial envers ceux-ci et à leur appliquer la même loi de manière égale. En particulier, l'exigence de neutralité s'applique à la campagne électorale et à la couverture par les médias, notamment les médias publics, ainsi qu'au financement public des partis et des campagnes. L'égalité peut alors être comprise de deux manières: égalité «stricte» et égalité «proportionnelle». L'égalité «stricte» signifie que les partis politiques sont traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement ou de l'électorat ne soit prise en compte. Elle doit s'appliquer à l'utilisation des infrastructures à des fins de propagande (par exemple à l'affichage, aux services postaux et analogues, aux manifestations sur la voie publique, à la mise à disposition de salles de réunion publiques). L'égalité «proportionnelle» implique que les partis politiques soient traités en fonction de leur nombre de voix. L'égalité des chances (stricte ou proportionnelle) porte notamment sur le temps de parole à la radio et à la télévision, les subventions publiques et les autres formes de soutien. Certaines mesures de soutien peuvent être pour partie soumises à une égalité stricte et pour partie à une égalité proportionnelle.

19. Le but essentiel est que les principales forces politiques puissent se faire entendre sur les grands médias du pays, et que toutes les forces politiques puissent organiser des réunions, y compris sur la voie publique, distribuer des documents, et disposer d'un droit d'affichage. Dans le respect de la liberté d'expression, tous ces droits doivent être clairement réglementés et leur non-respect, autant par les autorités que par les participants à la campagne, doit faire l'objet de sanctions appropriées. Des voies de recours rapides doivent permettre de remédier à ces violations avant les élections. Or, l'incapacité des médias à fournir des informations neutres sur la campagne électorale et les candidats est l'un des problèmes les plus frequents lors d'élections. La question la plus importante est de faire pour chaque pays le bilan des médias, et de veiller à ce que les candidats ou partis bénéficient de temps de parole ou d'espaces publicitaires suffisamment équilibrés, y compris au sein des radios et télévisions d'Etat.

20. Dans le respect de la liberté d'expression, la loi devrait prévoir que les médias audiovisuels privés assurent un accès minimal aux différents participants aux élections, en matière de campagne électorale et de publicité.

[…]

3. Le suffrage libre

26. Le suffrage libre comporte deux aspects : la libre formation de la volonté de l'électeur; la libre expression de cette volonté, soit le caractère libre de la procédure de vote et la réalité des résultats proclamés.

[…]

3.2.2. Les procédures de vote

29. Les procédures de vote jouent un rôle primordial dans l'ensemble du processus électoral car c'est lors du vote qu'une éventuelle fraude est la plus probable.

30. La mise en oeuvre de pratiques démocratiques nécessite, dans certains Etats, un changement de mentalité radical. Il appartient aux autorités de promouvoir un tel changement et de prendre des mesures pour mettre un terme à certains réflexes ou habitudes qui ont une influence négative sur les élections. A l'instar du «vote familial», la plupart de ces irrégularités ont lieu lors de la procédure de vote.

31. Toutes ces observations amènent à la conclusion suivante: *la procédure de vote doit être simple. Il est dès lors recommandé de se conformer aux critères définis dans les paragraphes suivants.*

32. Si les différentes sensibilités politiques sont équitablement représentées au sein du bureau de vote, on peut admettre que la fraude matérielle est difficile; dès lors, seuls deux paramètres principaux devraient être utilisés pour juger de la justesse du vote: le nombre d'électeurs qui ont participé au vote, comparé avec le nombre de bulletins introduits dans l'urne. Le premier paramètre peut être déterminé par le nombre de signatures portées sur le registre électoral. La nature humaine étant ce qu'elle est (et indépendamment de toute volonté de fraude), il est difficile de parvenir à une parfaite égalité entre ces deux paramètres ; un contrôle supplémentaire, comme celui des souches de bulletins numérotées ou encore une comparaison entre le total des bulletins retrouvés, des bulletins annulés et des bulletins non utilisés par rapport au nombre de bulletins à disposition du bureau de vote, peut avoir une valeur indicative, mais il ne faut pas se faire d'illusions sur la coïncidence parfaite des différents paramètres. Le risque est plutôt, en cas de multiplication de ceux-ci, que les différences de totaux, et finalement les véritables irrégularités, ne soient pas prises au sérieux. Mieux vaut un contrôle strict de deux paramètres qu'un contrôle lâche, et donc inefficace, d'un plus grand nombre de variables.

33. Les bulletins non utilisés doivent rester en permanence dans le bureau de vote et ne doivent pas être déposés ou conservés dans un autre local. Dès l'ouverture des bureaux de vote, tous les bulletins non encore utilisés doivent être placés en évidence, sur la table du Président par exemple. Aucun bulletin ne peut être stocké dans une armoire ou dans un autre local.

34. Les bulletins de vote ne doivent pas être signés ou tamponnés au moment où ils sont remis à l'électeur car la personne chargée de signer ou de tamponner les bulletins pourrait y mettre une marque permettant d'identifier l'électeur lors du décompte des suffrages, ce qui va à l'encontre du secret du vote.

35. A partir du moment où l'électeur prend son bulletin de vote, personne ne doit plus y toucher.

36. Il est important que le bureau de vote compte en son sein des membres représentant plusieurs partis et que des observateurs désignés par les candidats assistent aux élections.

37. Dans tous les cas, le vote dans un bureau de vote doit être possible; d'autres modalités de vote sont cependant admissibles à certaines conditions, comme indiqué ci-dessous.

3.2.2.1. Le vote par correspondance ou par procuration dans certaines circonstances

38. Dans les pays occidentaux, il est souvent possible de voter par correspondance et par procuration, bien que les modalités diffèrent largement d'un pays à l'autre. Ainsi, le vote par

correspondance peut être très répandu dans un pays et interdit dans un autre, en raison des risques de fraude. Il ne doit être admis que si le service postal est sûr —c'est-à-dire à l'abri des manipulations volontaires— et fiable, en ce sens qu'il fonctionne correctement. Le vote par procuration ne peut être autorisé que s'il est soumis à des règles très strictes, là aussi pour éviter la fraude ; le nombre de procurations détenues par un électeur doit être limité.

39. Ces pratiques ne doivent pas être encouragées si des problèmes d'organisation des services postaux s'ajoutent aux difficultés inhérentes à ce type de vote, notamment le risque accru de «vote familial». Le vote par correspondance peut toutefois être utilisé, avec certaines précautions, pour permettre de voter aux personnes hospitalisées, aux détenus, aux personnes à mobilité réduite et aux électeurs résidant à l'étranger, dans la mesure où les risques de fraude et d'intimidation sont éliminés. Cette solution éviterait d'avoirà transporter des urnes, avec les problèmes et les risques de fraude que cela comporte. Le vote par correspondance aurait lieu selon une procédure spéciale quelques jours avant les élections.

40. Le recours à l'urne mobile n'est en effet pas souhaitable, compte tenu des grands risques de fraude qu'il comporte. S'il est néanmoins retenu, il doit être soumis à des conditions strictes, permettant d'éviter la fraude, notamment par la présence auprès de l'urne mobile de plusieurs membres de la commission électorale du bureau de vote, représentant différentes tendances politiques.

3.2.2.2. Le vote des militaires

41. Lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de rentrer à leur domicile le jour du vote, il est souhaitable que les militaires soient inscrits dans les bureaux de vote proches de leur caserne. Le commandement local communique l'identité des militaires présents aux autorités municipales, qui procèdent à leur inscription sur les listes électorales. Il peut être fait exception à cette règle lorsque la caserne est trop éloignée du bureau de vote le plus proche. Des commissions spéciales devraient être constituées au sein des unités militaires pour superviser la période pré-électorale, afin d'éviter que les supérieurs imposent ou ordonnent des choix politiques.

3.2.2.3. Le vote mécanique et électronique

42. Plusieurs pays utilisent déjà les techniques de vote mécanique et électronique ou sont sur le point de le faire. Ces techniques présentent un avantage manifeste lorsque plusieurs élections ont lieu simultanément, même si certaines précautions doivent être prises pour limiter les risques de fraude, ce qui peut notamment se faire en permettant à l'électeur de contrôler immédiatement l'enregistrement de son vote. Il est bien sûr important de s'assurer que les bulletins de votes sont conçus de manière à éviter toute confusion. Pour permettre vérifications et recomptages en cas de réclamation, on peut aussi prévoir que la machine imprime automatiquement un bulletin comprenant le vote exprimé et range automatiquement les bulletins dans une boite fermée, afin qu'ils soient soustraits aux regards. Tous les moyens utilisés doivent permettre d'assurer la confidentialité du vote.

43. Le vote électronique doit être sûr et fiable. Il est sûr si le système peut résister aux attaques délibérées ; il est fiable si, par lui-même, il fonctionne, quelles que soient les déficiences du matériel ou du logiciel. En outre, l'électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le corriger, si nécessaire, dans le respect du secret du vote.

44. Par ailleurs, la transparence du système doit être garantie, en ce sens que son fonctionnement correct doit pouvoir être vérifié.

[…]

4. Le suffrage secret

52. Le secret du vote est un aspect de la liberté de vote, qui vise à soustraire l'électeur à toutes les pressions qui pourraient résulter de la connaissance de son choix par des tiers. Il s'impose à toutes les étapes de la procédure, et spécialement lors du scrutin proprement dit et du dépouillement. Il s'agit non seulement d'un droit, mais aussi d'une obligation pour l'électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le contenu a été révélé.

53. Le vote doit être individuel. Le vote familial —qui permet à l'un des membres de la famille de contrôler le vote des autres— est contraire au secret du vote ; c'est une violation du droit électoral fréquemment constatée. Toute autre forme de contrôle d'un électeur sur le vote d'un autre doit également être interdit. Est réservé le vote par procuration, qui est soumis à des conditions strictes.

54. En outre, comme l'abstention peut impliquer un choix politique, la liste des votants ne devrait pas être rendue publique.

55. Tout comme la violation des autres aspects de la liberté de vote, la violation du secret du vote doit être sanctionnée.

5. Le suffrage direct

56. L'élection populaire directe d'une des Chambres du Parlement national par le peuple est un élément du patrimoine constitutionnel commun à tout le continent. Sous réserve des règles spéciales applicables à l'éventuelle autre Chambre, l'élection directe devrait concerner les autres organes législatifs, auxquels s'applique l'article 3 du Protocole additionnel à laConvention européenne des droits de l'homme, comme les Parlements des Etats fédérés.

[…]

II. LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES

[…]

3. Les garanties procédurales

3.1. L'organisation du scrutin par un organe impartial

68. Seules la transparence, l'impartialité et l'indépendance à l'égard de toute manipulation politique assureront la bonne administration du processus électoral, de la période précédant les élections jusqu'à la fin du traitement des résultats.

69. Dans les Etats où existe une longue tradition d'indépendance de l'administration face au pouvoir politique, la fonction publique applique le droit électoral indépendamment des pressions du pouvoir politique. Il est dès lors d'usage, et admissible, que les opérations électorales soient organisées par l'administration, et notamment qu'elles soient supervisées par le ministère de l'Intérieur.

70. Par contre, là où l'expérience de l'organisation d'élections pluralistes est récente, le risque est trop grand que le pouvoir en place influence l'administration afin qu'elle agisse dans le sens qui lui convient. Cela vaut d'ailleurs non seulement pour le pouvoir central, mais aussi pour les pouvoirs locaux, y compris lorsqu'ils sont dirigés par l'opposition nationale.

71. Dès lors, la création de *commissions électorales indépendantes et impartiales,* du niveau national au niveau du bureau de vote, est indispensable pour garantir des élections régulières ou du moins pour que de lourds soupçons d'irrégularités ne pèsent pas sur le processus électoral.

72. Dans les rapports du Bureau de l'Assemblée sur l'observation d'élections, les insuffisances suivantes concernant les commissions électorales ont été relevées dans un

certain nombre d'Etats membres: manque de transparence dans les activités de la comisión électorale centrale, variations dans l'interprétation de la procédure de comptage; administration électorale politiquement polarisée; controverses sur la désignation des membres de la commission électorale centrale; nomination de membres de cette dernière par une institution d'Etat; position dominante du parti au pouvoir dans l'administration des élections.

73. Une commission électorale centrale doit être permanente en tant que structure administrative chargée de maintenir la liaison avec les autorités locales et les autres commissions inférieures, par exemple pour ce qui concerne l'établissement et la tenue à jour des listes électorales.

74. La composition d'une commission électorale centrale peut donner lieu à discussion et devenir l'enjeu politique essentiel dans l'élaboration d'une loi électorale. Le respect des lignes directrices suivantes devrait permettre d'assurer autant que possible l'impartialité et la compétence de la commission.

75. En règle générale, la commission devrait comprendre:

- un magistrat : dans le cas où un organe judiciaire est chargé d'administrer les élections, son indépendance doit être assurée par la transparence de la procédure; les magistrats désignés ne doivent pas dépendre des candidats qui se présentent;
- des délégués des partis déjà représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un certain pourcentage des suffrages. Les partis politiques doivent être représentés de manière égale dans la commission électorale centrale; l'égalité peut être comprise de manière stricte ou proportionnelle, c'est-à-dire tenir compte ou non de l'importance électorale relative des partis. En outre, les délégués des partis doivent avoir des compétences en matière électorale et il doit leur être interdit de faire campagne;

76. En outre, la commission électorale centrale peut comprendre:

- des représentants des minorités nationales ; la présence de ceux-ci est souhaitable lorsque la minorité nationale a une certaine importance sur le territoire concerné;
- un représentant du ministère de l'Intérieur. Toutefois, la présence d'un représentant du ministère de l'Intérieur au sein de la commission n'est pas toujours souhaitable pour des raisons propres à l'histoire du pays. Au cours de ses missions d'observation des élections, l'Assemblée s'est déclarée préoccupée, à plusieurs reprises, par le transfert des responsabilités précédemment attribuées à des commissions électorales multipartites et de plein droit à une institution qui relevait du pouvoir exécutif. Néanmoins, la coopération entre la commission électorale centrale et le ministère de l'Intérieur est possible, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, telles que le transport et le stockage des bulletins de vote et autres matériels. Pour le reste, l'exécutif ne doit pas pouvoir influer sur la composition des commissions électorales.

77. De manière générale, la révocation des membres des commissions électorales par les organes qui les ont nommés doit être évitée, car elle met en cause leur indépendance. Contrairement à la révocation discrétionnaire, une révocation pour faute disciplinaire voire pour incompétence est admissible, mais les motifs de révocation doivent alors être formulés clairement et restrictivement dans la loi (la référence vague à des «actions discréditant la commission» n'est par exemple pas admissible).

78. Dans les anciennes démocraties où il n'existe pas de commissions électorales, mais où un autre organe impartial est compétent en matière électorale, les partis politiques doivent pouvoir observer le travail de cet organe.

79. La composition de la commission électorale centrale a, certes, de l'importance, mais pas plus que son fonctionnement. Le règlement intérieur doit être précis car les présidents ont

règlement intérieur devrait prévoir un ordre du jour et un temps de parole limité pour chaque membre, par exemple un quart d'heure; autrement, des discussions interminables peuvent masquer les points essentiels.

80. La façon de prendre des décisions est multiple. Il est souhaitable que les décisions se prennent à la majorité qualifiée (par exemple, des 2/3) de façon à encourager le débat entre une majorité et au moins l'un ou l'autre parti de la minorité. Le recours au consensus est préférable.

81. Les réunions de la commission électorale centrale doivent être ouvertes à tous, y compris aux médias (c'est aussi pour cela que le temps de parole doit être limité). Les salles informatiques, liaisons téléphoniques, fax et scanners doivent pouvoir être visités.

82. Les autres commissions, régionales ou de circonscription, doivent avoir une composition analogue à celle de la commission électorale centrale. Dans le cas d'un scrutin majoritaire uninominal, les commissions de circonscription jouent un rôle important car elles déterminent le vainqueur lors des élections législatives. Les commissions de région jouent un rôle non moins important dans la transmission des résultats à la commission électorale centrale.

83. La tenue d'élections nécessite un personnel adéquat, doté de compétences spéciales. Les membres de la commission électorale centrale devraient être des juristes, des politologues, des mathématiciens ou d'autres personnes connaissant bien les questions électorales.

84. Les membres des commissions électorales, à tous les niveaux de l'administration électorale, doivent recevoir une formation standardisée. Cette formation doit être ouverte aux membres des commissions désignés par les partis politiques. On a pu remarquer l'absence de personnel formé et qualifié dans plusieurs cas.

85. La loi électorale doit comprendre un article disposant qu'il incombe aux autorités (à tous les niveaux) de satisfaire aux demandes et aux besoins de la commission électorale. Des instructions peuvent être données à différents ministères, à d'autres organes de l'administration publique, aux maires et au personnel municipal pour qu'ils aident l'administration électorale en se chargeant des opérations administratives et logistiques de préparation et de tenue des élections. Ils peuvent assumer l'établissement et la distribution des registres électoraux, des bulletins de vote, des urnes, des tampons officiels et de tout autre matériel nécessaire, et prendre les dispositions requises en matière d'entreposage, de distribution et de sécurité.

[…]

Conclusion

114. Le respect des cinq principes du patrimoine électoral européen (suffrage universel, égal, libre, secret et direct) est essentiel à la démocratie. Dans ce cadre, la démocratie peut s'exprimer sous des formes diverses, mais dans certaines limites. Ces limites relèvent d'abord de l'interprétation donnée aux principes ; le présent texte indique les règles minimales qui doivent être suivies pour qu'ils soient respectés. En second lieu, il ne suffit pas que le droit électoral au sens strict contienne des règles conformes au patrimoine électoral européen, mais celles-ci doivent être placées dans leur contexte : la crédibilité du processus électoral doit être assurée. D'abord, les droits fondamentaux doivent être respectés. Ensuite, la stabilité des règles doit écarter les soupçons de manipulations. Enfin, le cadre procédural doit permettre que les règles proclamées soient effectivement appliquées.

Code of good practice in the field of political parties

Adopted by the Venice Commissionat its 77th Plenary Session.-(Venice, 12-13 December 2008) http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)002-e.asp

I. Introduction

[…]

II. General principles

1. Definition

a. A specific type of association[1]

10. For the purpose of this Code a political party is an association[2] with the task of presenting candidates for elections in order to be represented in political institutions and to exercise political power on any level: national, regional and local or on all three levels.

11. Whilst a few countries lack specific legislation on political parties, most Member States of the Council of Europe do, and in virtually all these cases, legislation aims at differentiating between political parties and other associations, including those involved in politics. Legislation on political parties serves, in this way, for the recognition of their essential role in democratic politics.

b. Freedom of establishment

12. Political parties in democratic states are free associations, which are protected by Article 11 of the ECHR. This means that citizens may freely decide to constitute political parties, however, national legislations can limit this freedom in certain cases on the basis of principles consistent with the European Convention on Human Rights (hereinafter, the "ECHR") and the case law of the European Court of Human Rights. In a number of European states, there are no rules on prohibition of parties. In other states, there are rules on party prohibition, but these are strictly interpreted, and are only to be used with extreme restraint. In line with this common European democratic legacy, prohibition or enforced dissolution of political parties may only be justified in the case of parties which advocate the use of violence or use violence as a political means to overthrow the democratic constitutional order.

13. Political parties are not, in any Council of Europe Member State, the creation of public organs. The guideline that can be deduced from this practice is that State bodies should abstain from participating in the establishment of political parties and should not limit the right to establish political parties on a national, regional and local level[3].

c. Legal framework

14. Wherever a legal regulation of political parties exists it must be consistent with the ECHR and the case law of the European Court of Human Rights. Parties must comply with these

(1) During the first meetings of the Council for Democratic Elections it has been suggested by some of its members that the word "organisation" be used. This may be more suitable from an academic standpoint, but itemphasises the structural elements. "Association", on the other hand, is a legal concept, closely linked to theidea of free liaison among citizens. That is the reason for which this term is used in this Code.

(2) In some cases it is defined as an association of physical persons, citizens, etc.

(3) See also CDL-AD(2004)004, Report on the establishment, organisation and activities of political partiesadopted by the Venice Commission at its 57th Plenary Session (Venice, 12-13 December 2004).

norms. When challenging a legal framework which is considered incompatible with higher norms, political parties must always take recourse to the use of legal means.

2. Guiding principles for political parties

15. The rule of law, democracy and human rights are three pillars of the European and the Council of Europe's constitutional heritage. Therefore, provisions on democracy, the rule of law and human rights' protection alongside norms regulating the political system and the separation of powers, stand among the basic principles of the Council of Europe's Member States. Political parties are major actors in any democratic society, hence they enjoy the benefits of the guarantees of those principles by the State and, accordingly, they must also respect and promote these very same principles. The latter should be taken into account in the parties' organisation, functioning and financing.

a. Rule of law

16. Political parties must comply with the values expressed by international rules on the exercise of civil and political rights (UN Covenant and the ECHR). Parties must respect the Constitution and the law. However, nothing can prevent them from seeking to change both the Constitution and the legislation through lawful means[(4)].

b. Democracy

17. Parties are an integral part of a democracy, and their activities should ensure its good functioning. Hence, a commitment to internal democratic functioning reinforces this general function. Although few European states regulate this requirement in detail, several countries require the party's internal structure and operation to be democratic[(5)]. This positive experience could be shared between different Council of Europe Member States.

c. Non-discrimination

18. Political parties should not act against the values of the ECHR and the principle of equality. Parties must not discriminate against individuals on the basis of any ground prohibited by the ECHR.

d. Transparency and openness

19. The parties should offer access to their programmatic and ideological documents and discussions, to decision-making procedures and to party accounts in order to enhance transparency and to be consistent with sound principles of good governance.

III. Internal organisation of political parties

1. Membership

20. Everyone must be free to choose to be a member of a political party or not and to choose which party to join. Whilst this principle is universally acknowledged, it is also very common among European parties that they have specific admission procedures. This serves to secure

(4) See also CDL-INF(2000)001, Guidelines on prohibition and dissolution of political parties and analogousmeasures adopted by the Venice Commission at its 41st plenary session (Venice, 10 – 11 December, 1999).

(5) See Art. 26 of the Andorran Constitution; art. 21 of the German Constitution; Art. 51.5 of the PortugueseConstitution; Art. 6 of the Spanish Constitution. Similar provisions may be found in Albania, Armenia, the Czech Republic, Finland, Slovakia and Turkey. On a different level, the principle is reflected in EU Regulation2004/2003 on funding of political parties.

the necessary congruence between the views of the would-be member and the party. Best practices are those that clearly establish in party statutes the procedures andrequirements for joining and which clearly state the criteria to be fulfilled to be members.

21. Parties may withhold membership from any applicant who rejects the values they uphold or whose conduct goes against the values and ideals of the party. Best practice requires the existence of disciplinary bodies and clear procedures for reasoned decisions. Parties must ensure that their members comply with the legal order.

22. European best practices and legal frameworks share the principle of non discrimination. Hence, parties' adherence to this principle must be taken as proof of good practices, which have a number of specific applications. In some cases, such as gender discrimination, national and international legislation plainly prohibit these. In particular, discrimination on the basis of sex, race, colour, language, national or social origin, association with a national minority, property or birth should be avoided (cf. Article 14 ECHR).

23. Political parties must comply with any domestic legislation prohibiting affiliation to a party by specified officials (for instance, in cases of members of the army and police).

24. It is not unusual for parties to establish different forms of involvement of individuals in their activities such as members, recognised sympathisers, collaborators, campaigners, etc. These statuses mark different thresholds of personal commitment. Hence, in order to identify the kind of commitments and to respect personal choices, a good practice is for party statutes to clearly spell out the different rights and duties of each situation. Any person must be able to define freely his or her personal form of relationship with a party.

25. There is a well established practice among most European states, under the Council of Europe norms to grant voting rights, at least in local elections, to some or all their foreign residents(6). It is therefore fully in line with this development that, unless prohibited by domestic law, parties accept the accession of non nationals, who share their values. Nationality is not a solid ground on which to restrict the membership of non nationals, and the law should make this clear(7).

26. Whilst some parties may aim at promoting the interests of specific age groups (for instance, retired persons), no national legislation accepts membership discrimination based on age (except what is referred to as the legal voting age). On the contrary, inclusive practices that successfully include all age groups can be deemed an example of good practice. Moreover, it is a fairly common practice that parties create specific structures (for instance, for young people, particularly for those under the legal voting age) and develop specific programmes for integrating experienced members.

27. Transnational parties, which exist in the framework ofthe European Union, are organised as federations of national parties. In most cases, this excludes direct membership. Direct membership does not erode democratic principles, and may reinforce the legitimacy of transnational parties.

(6) Recommendation 1500 (2001) "Participation of immigrants and foreign residents in political life in theCouncil of Europe member states". It declares: democratic legitimacy requires equal participation by all groups ofsociety in the political process, and that the contribution of legally resident non-citizens to a country's prosperityfurther justifies their right to influence political decisions in the country concerned" (para. 4). In this connection thePACE "urges the governments of member states to grant the right to vote and stand in local elections to allmigrants legally established for at least three years irrespective of their origin."

(7) In a number of its opinions the Venice Commission has expressed its view that foreigners should have the right to participate in local political life. See also the European Convention on participation of Foreigners inPolitical Life.

2. Organisation

28. The general principles that inspire this Code also apply to the organisation of a political party. In particular:

- Representativeness and receptiveness. Applied within a party, these principles mean that the structure of the party and its procedures should represent the opinion of the members and they should be receptive towards these. Although this commitment may not entail a legally expressed obligation, their breach runs against the basic intuitive concept of democratic organisation.
- Responsibility and accountability. Organs (both collective and individual) should be held accountable and responsible to party members. Procedures should secure internal (and external) responsibility and rendering account of actions and policies. Although this commitment may not entail a legally expressed obligation, their breach runs against the basic intuitive concept of democratic organisation.
- Transparency. Parties should make public their statutes and their programme. Publishing financial reports improves transparency and public confidence in political parties. Even though this commitment may not entail a legally expressed obligation, their breach runs against the basic intuitive concept of democratic organisation.

29. The existence of party statutes is a legal requirement for recognising and/or registering them in several countries of the Council of Europe. Statutes must comply with constitutional and legal regulations and reflect the international rules contained in the ECHR. The lack of compliance with party statutes constitutes, in some legal systems, a violation that can be legally challenged in extra-party jurisdictions. To the extent that compliance may be legally required, legal force may be deduced from party statutes.

30. Party statutes normally regulate the rights and duties of their members, and the organs, organisation and procedures for decision making of the parties. In certain national legal systems, there is a legal requirement that party statutes must establish a procedure for changing them. When this legal requirement is further enriched with the explicit involvement of members aimed at seeking their support through voting procedures, it comes closer to being a paradigm of good practice.

31. As an internal norm, the statutes also have the very important function of setting disciplinary procedures that may affect the rights of members. In cases of failure to comply with these requirements or of serious infringements of party rules, disciplinary measures may be adopted, the severest measure being expulsion from the party. The measures must be governed by a procedure set out in the party statutes, with respect to the rights of the defence. In order to eliminate any impression of arbitrariness, the existence of redress mechanisms is an important element.

32. Wherever required by law, parties must define their national, regional or local organisation in their statutes. Wherever this is not required by law, these specifications contribute to enhance the good governance principles identified above. At each of these levels, bodies involving all members or their representatives, meeting on regular basis, must take the major decisions. Ideally, the supreme body (National congress or assembly) should meet at least once for each legislative term. In the interim periods the governing boards are usually responsible for decision-making. These boards, which are usually made up of members elected by the party membership, must be elected in accordance with the procedures set out in the party statutes.

33. The procedures for decision-making should be clearly specified in the statutes. When possible (i.e. on the local level), members should take decisions directly; otherwise, decisions should be taken on the basis of democratic delegation.

34. Party operational procedures should enable the opinions of grassroot members to be heard by party leaders.

3. Appointment of leaders and candidates for election

35. Whether directly or indirectly, party leaders must be democratically chosen at any given level (local, regional, national and European). This means that members must be able to vote for their selection. Bottom-up practices for the selection of nominees and candidates are a healthy expression of internal democracy which is very positively perceived by citizens.

36. Equally, whether directly or indirectly, candidates must be democratically chosen for elections at any level (local, regional, national and European).

37. According to international regulation and practice, parties must comply with the principle of non discrimination on the basis of gender both for party office and election candidatures. Several national legislations and practices of several European parties have gone a step further to introduce quotas to either improve gender balance or, more directly, achieve equal representation of women and men in the elected body. Whilst these practices are country and party specific, the introduction of measures for gender equality is progressively becoming the dominant trend. On the contrary, continued and repeated situations of gender unequal representation cannot, by any means, be considered proof of good practice.

IV. Funding

[…]

V. Political functions

1. Programme

45. One of the most important functions of political parties is the elaboration of a programme which in best practice results from the internal debate of party members and its approval according to established procedures. Programmes lead party action when the party is in power.

46. Party programmes are not legally binding contracts, their enforcement can not be legally demanded and all European states rely on the principle of representative democracy, which excludes the imperative mandate. Nevertheless, the programme provides guidelines for citizens to understand and identify the party policies on given issues. In this way, programmes do not only serve to enlighten citizens but they also reflect a sort of “soft contract” or moral commitment between parties and voters. Hence, the publication of the programme not only satisfies the principle of transparency but it also serves to further promote accountability. Moreover, its permanent availability, through the electoral mandate serves to check the adherence to the electoral promises.

47. A measure of good governance is if a party alters its programme after coming to power, it should explain why changes in the original programme have been introduced.

2. Training

48. Parties should provide civic and political training for their members. To that end, the party may set up a training institute, which may receive specific aid in addition to that earmarked for the party itself.

3. Elections

49. The Council of Europe Member States have different approaches to the regulation of political parties’ activities and their participation in political life, notably in elections. Specific

issues related to participation of political parties were treated in the report of the Venice Commission on the participation of political parties in elections[9]. In fact, political parties precisely aim to participate in the political process, mainly presenting candidates to elections. Of course, parties are important throughout the whole electoral process. But once the voters come directly into the scene, the fact of political representation loses part of its relevance. Once the elections have been held, and even during the election day, all the constitutional or legal rules (and, most particularly, those relating to the system of appeals and complaints) must provide for an equal treatment of all candidates and citizens.

50. It is widely acknowledged that the electoral system itself exercises an influence on the party's internal structure. For example, a candidate-based first past the post electoral systems hardly requires any party involvement in other issues than candidate's political backing and contribution to the campaign financing. On the contrary, in proportional systems with closed party lists, a party has very important prerogatives in defining, among other issues, the place of each given candidate on the list.

4. Performance in office and opposition

51. The general principles inspiring this Code apply also to performance in office and to situations where parties are in opposition

52. Party members should clearly distinguish between their allegiance to the party and their office duties. Implementation of the party programme is inherent to the notion of democratic election, but this must always be framed within the existing legislation concerning the exercise of public offices. Normally, national regulations prohibit public officers from abusing or seeking advantage of their ruling position to create discriminatory conditions for other political forces. But even when these obligations are not explicitly spelt out, their respect is consistent with the principles of this Code and their breach may be considered illegal.

53. Normally, the legal requirements of the function of opposition is lower than that for government or even non-existant. Opposition function implies scrupulous control, scrutiny and checks on authorities and officials behaviour and policies. However, good governance advises that parties in opposition (as well as ruling parties) refrain from practices that may erode the democratic debate and which, could eventually undermine the trust of citizens in politicians and parties.

54. Political corruption is generally considered to be a type of crime by all European legislations. Parties must therefore aim to fight corruption not only because of its criminal dimension, but also because widespread political corruption erodes the trust of citizens in parties in general. This threatens the whole democratic process[10]. Hence, mechanisms for the prevention of political corruption, such as ethical codes for party members in public offices, are welcome. Additionally, if the membership of a person who has been condemned on corruption charges is maintained, this will lead citizens to believe that the whole party is corrupt (and they may even extend this view to apply to all parties) and contributes to questioning the fairness of politics in general. Therefore, the exclusion from office of candidatures and from party membership of persons convincted for corruption is fully coherent with basic democratic principles.

---

(9) CDL-AD(2006)025 Report on the Participation of Political Parties in Elections adopted by the Council forDemocratic Elections at its 16th meeting (Venice, 16 March 2006) and the Venice Commission at its 67th plenary session (Venice, 9-10 June 2006).

(10) See also Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers of the Council of Europe tomember states on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns.

55. Representative mandate makes a representative independent from his or her party once it has been elected. This allows him or her to change party once in office. In some specific cases, there may be reasons that justify this (for instance, disappearance of political parties). In other cases, however, these practices may respond mainly to personal private interests or are a result of corruption. These erode the party system and undermine the trust of citizens in the electoral and political game. Even when the legal rules protect representatives, parties should be vigilant that these practices are not used in a fraudulent and counter-democratic way. Practices such as inter-party agreements to reject the inclusion of representatives elected on other party's lists have to be welcomed.

56. Parties should inform the civil society and voters about their action and adopt any possible measures and practices that would increase transparency, offer grounds for constructive criticism and provide a yardstick for measuring achievements.

5. International co-operation

57. The practice of international co-operation among parties sharing the same ideology is a widespread one. Some parties have projected further their international dimension by assisting sister parties in third countries. In the past, these practices assisted, for instance, the democratic consolidation in a number of European countries. Whenever this assistance is compatible with national legislation and in line with ECHR principles and European standards, it must be welcomed as a good practice, since it contributes to creating solid democratic party systems.

Report on electoral law and electoral administration in Europe

Synthesis study on recurrent challenges and problematic issues. - Adopted by the Council for Democratic Elections at its 17th meeting (Venice, 8-9 June 2006) and the Venice Commission at its 67th plenary session (Venice, 9-10 June 2006)

(http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)018-e.pdf)

II. Alemania

II.1. Ley Fundamental de Bonn (1949) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

II.2. Legislación federal

Bundeswahlgesetz BwahlG
Ley federal de régimen electoral (18 de marzo de 2008)

Bundeswahlordnung
Reglamento de elecciones federales (27 de marzo 2008)

Bundeswahlgeräteverordnung (BwahlGV). Verordnung über den Einsatz von Wahlgeräten bei Wahlen zum Deutschen Bundestag und der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
Decreto sobre la utilización de aparatos para votar en las elecciones al Bundestag y a los diputados de Parlamento Europeo de la República federal (20 de abril 1999)

Wahlprüfungsgesetz (WPrüfG)
Ley de verificación electoral (6 de junio 2008)

Abgeordnetengesetz (AbgG)
Ley de los diputados (23 de octubre de 2008)

Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz)
Ley de Partidos políticos (22 de diciembre de 2004)

II.3. Documentación parlamentaria

Bericht zu Prüfbitten zur Änderung von Wahlrechtsvorschriften.
16 de mayo de 2008
Informe sobre las propuestas de revisión de disposiciones de derecho electoral

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
23. 03. 2006 Proyecto de ley de modificación de la ley federal electoral

Empfehlungen der Ausschüsse in der 819. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 2006 zur Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes Antrag Land Rheinland Pfalz
Recomendaciones de la Comisión de Interior en el Sesión nº 819 del Bundesrat de 10 de febrero de 2006 al proyecto de ley de modificación de la Ley federal electoral Moción del Estado Federado de Renania-Palatinado

II.4. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 3 de julio de 2008
2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07.- “Negatives Stimmgewicht“= “Peso negativo del voto”

Resolución del Tribunal Constitucional federal de 14 de diciembre de 2006 sobre los votos por ordenador

Resolución del Tribunal Constitucional Federal de 24 de noviembre de 1981
BVerfGE 59, 119.- “Briefwahl“= “Voto por correo”

II.5. Bibliografía

II.6. Direcciones web

La Ley Fundamental de Bonn de 1949 garantiza, en su art. 38, los principios electorales constitucionales. Los diputados del Bundestag son elegidos por sufragio universal, directo, libre, igual y secreto. Todo ciudadano mayor de edad puede disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.

El régimen electoral no está regulado en la Ley Fundamental, sino en la Ley Electoral federal (**Bundeswahlgesetz BwahlG** (7 de mayo 1956) (última modificación 18.03.2008), en su Reglamento de desarrollo (**Bundeswahlordnung** (3 de septiembre 1975) y en la Ley de Verificación electoral (**Wahlprüfungsgesetz (WPrüfG)** (6 de junio 2008)). Los Estados Federados tienen sus propias leyes electorales.

En 1949, alcanzado un acuerdo político de compromiso, el Consejo Parlamentario elaboró la primera ley electoral federal para las primeras elecciones al Bundestag. El período legislativo es de cuatro años, aunque actualmente se discute la posibilidad de ampliarlo a cinco años.

La Ley y el Reglamento electorales han sufrido diversas modificaciones a lo largo de estos años, publicándose la última modificación en marzo de 2008 para las elecciones legislativas del 2009.

En Alemania no se ha establecido un sistema electoral mayoritario, ni uno proporcional puro, sino una combinación de ambos, que participa de las ventajas de uno y otro. See trata del denominado sistema proporcional personalizado, conforme al cual todo ciudadano mayor de edad posee dos votos. Con el primer voto elige, por mayoría relativa, a un candidato de su circunscripción electoral. Son escaños uninominales y resulta elegido el candidato que obtiene la mayoría relativa. Con el segundo voto, se elige la lista regional de un partido. Esta lista es cerrada y bloqueada.

El Bundestag cuenta desde las elecciones de 2002 con 598 escaños (con anterioridad eran 656).

Los escaños se distribuyen entre los respectivos partidos según la fórmula desarrollada por Hare/Niemeyer. El 24 de enero de 2008 el Bundestag decide, en la sesión plenaria número 139, sustituir el procedimiento de Hare/Niemeyer por el procedimiento divisor con redondeo estándar basado en el francés Sainte-Lagüe. Este procedimiento entra en vigor en marzo de 2008 con la modificación de la ley Electoral federal.

En la distribución de los escaños, los partidos necesitan un mínimo del cinco por ciento del segundo voto (representación proporcional) o tres mandatos por el primer voto (representación directa). Esta cláusula del cinco por ciento evita los grupos minoritarios.

El número de distritos de los distintos Estados Federados debe responder al porcentaje de su población. Por ello a lo largo de los años se ha modificado en cada elección el número de distritos. Desde la modificación de la Ley Electoral federal para las elecciones de 2002, existen 299 distritos electorales.

La ley de uso de ordenadores para el voto electrónico en las lecciones de 1999, actualmente en vigor, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional federal por dos votantes en las elecciones del año 2005, que se oponen a la utilización de determinados equipos informáticos de votación electrónica por problemas de seguridad en varios Estados Federados. La vista estaba prevista para octubre de 2008.

Por último, el Bundestag, de acuerdo con el art. 41.2 de la Ley Fundamental, es competente para determinar la validez de las elecciones generales. En 1951 se publica la Ley de Control

electoral, que regula el procedimiento de control electoral. Ha sido modificada en junio de 2008. Se crea la Comisión de verificación electoral cuyas decisiones pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional federal.

II.1. Ley Fundamental de Bonn (1949)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Artículo 20 [Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]

(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social.

(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho.

[…]

III. Der Bundestag

Artículo 38

(1) Los diputados del Bundestag Alemán serán elegidos por sufragio universal, directo, libre, igual y secreto. Son los representantes del pueblo en su conjunto, no ligados a mandatos ni instrucciones, y sujetos únicamente a su conciencia.

(2) Tiene derecho de voto quien haya cumplido dieciocho años de edad. Es elegible quien haya cumplido los años con los cuales se alcanza la mayoría de edad.

(3) La regulación se hará por una ley federal.

Artículo 39

(1) El Bundestag es elegido por cuatro años, salvo lo regulado en las disposiciones siguientes. Su legislatura termina con la constitución de un nuevo Bundestag. Las nuevas elecciones tendrán lugar nunca antes de cuarenta y seis meses y a más tardar cuarenta y ocho meses después del comienzo de la legislatura. En caso de disolución del Bundestag, las nuevas elecciones tendrán lugar dentro de los sesenta días siguientes.

(2) El Bundestag se constituirá a más tardar treinta días después de las elecciones.

(3) El Bundestag determinará la clausura y la reapertura de sus sesiones. Su Presidente podrá convocarlo para una fecha anterior. Deberá hacerlo cuando así lo exijan la tercera parte de sus miembros, el Presidente Federal o el Canciller Federal.

Artículo 41

(1) El control de las elecciones compete al Bundestag. Decide también si uno de sus miembros ha perdido su calidad de tal.

(2) Contra la decisión del Bundestag se admite el recurso de queja ante la Corte Constitucional Federal.

(3) La regulación se hará por una ley federal.

II.2. Legislación federal

Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung
Vom 27. März 2008
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 11, 31/03/2008

Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetenrechts
Vom 17. März 2008
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 10 20/03/2008

Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
de 18. März 2008
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 9 de 18/03/2008

Bundeswahlordnung
Von 27 März 2008
"Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S.1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. März 2008 (BGBl. I S.476)"

Verordnung über den Einsatz von Wahlgeräten bei Wahlen zum Deutschen Bundestag und der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
(Bundeswahlgeräteverordnung - BWahlGV)
vom 3. September 1975 (BGBl. I S. 2459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. April 1999

Wahlprüfungsgesetz
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 111-2,veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Juni 2008 (BGBl. I S. 994)"Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 6.6.2008 I 994

Abgeordnetengesetz (AbgG)
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 1996 (BGBl. I S. 326), zuletz geändert durch Art.2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 394)

Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz)
"Parteiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), zuletz geändert durch das Gesetz vom 22. December 2004 (BGBl I S. 3673)"

Bundeswahlgesetz BwahlG (texto consolidado)
Ley federal de régimen electoral

Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
18ª Ley de modificación de la Ley federal de régimen electoral

Ausfertigungsdatum: 07.05.1956
"Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 G. vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 394)"
Stand: Neugefasst durch Bek. v. 23.7.1993 I 1288, 1594;
zuletzt geändert durch Art. 1 G. v. 17.3.2008 I 394

Erster Abschnitt
Wahlsystem (§§ 1 bis 7)
Sistema electoral

§ 1 Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und Wahlrechtsgrundsätze
§ 2 Gliederung des Wahlgebietes
§ 3 Wahlkreiskommission und Wahlkreiseinteilung
§ 4 Stimmen
§ 5 Wahl in den Wahlkreisen
§ 6 Wahl nach Landeslisten
§ 7 Listenverbindung

Zweiter Abschnitt
Wahlorgane (§§ 8 bis 11)
Organos electorales

§ 8 Gliederung der Wahlorgane
§ 9 Bildung der Wahlorgane
§ 10 Tätigkeit der Wahlausschüsse und Wahlvorstände
§ 11 Ehrenämter

Dritter Abschnitt
Wahlrecht und Wählbarkeit (§§ 12 bis 15)
Derecho de sufragio activo y pasivo

§ 12 Wahlrecht
§ 13 Ausschluß vom Wahlrecht
§ 14 Ausübung des Wahlrechts
§ 15 Wählbarkeit

Vierter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl (§§ 16 bis 30)
Preparación de las elecciones

§ 16 Wahltag
§ 17 Wählerverzeichnis und Wahlschein
§ 18 Wahlvorschlagsrecht, Beteiligungsanzeige
§ 19 Einreichung der Wahlvorschläge
§ 20 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
§ 21 Aufstellung von Parteibewerbern
§ 22 Vertrauensperson
§ 23 Zurücknahme von Kreiswahlvorschlägen
§ 24 Änderung von Kreiswahlvorschlägen
§ 25 Beseitigung von Mängeln
§ 26 Zulassung der Kreiswahlvorschläge
§ 27 Landeslisten
§ 28 Zulassung der Landeslisten
§ 29 Ausschluß von der Verbindung von Landeslisten
§ 30 Stimmzettel

Fünfter Abschnitt
Wahlhandlung (§§ 31 bis 36)
El acto electoral

§ 31 Öffentlichkeit der Wahlhandlung
§ 32 Unzulässige Wahlpropaganda und Unterschriftensammlung, unzulässige Veröffentlichung von Wählerbefragungen

Erster Abschnitt
Wahlsystem
Sistema electoral

§ 1 Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und Wahlrechtsgrundsätze
Composición del Bundestag alemán y principios fundamentales del sistema electoral

(1) Der Deutsche Bundestag besteht vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden Abweichungen aus 598 Abgeordneten. Sie werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Deutschen nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt.

(2) Von den Abgeordneten werden 299 nach Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen und die übrigen nach Landeswahlvorschlägen (Landeslisten) gewählt.

§ 2 Gliederung des Wahlgebietes
División del territorio electoral

(1) Wahlgebiet ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlkreise ergibt sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

(3) Jeder Wahlkreis wird für die Stimmabgabe in Wahlbezirke eingeteilt.

§ 3 Wahlkreiskommission und Wahlkreiseinteilung
Comisión de demarcación electoral y división en circunscripciones electorales

(1) Bei der Wahlkreiseinteilung sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. die Ländergrenzen sind einzuhalten.

2. Die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern muß deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen. 2Sie wird mit demselben Berechnungsverfahren ermittelt, das nach § 6 Abs. 2 Satz 2 bis 7 für die Verteilung der Sitze auf die Landeslisten angewandt wird.

3. Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise nicht um mehr als 15 vom Hundert nach oben oder unten abweichen; beträgt die Abweichung mehr als 25 vom Hundert, ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen.

4. Der Wahlkreis soll ein zusammenhängendes Gebiet bilden.

5. Die Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte sollen nach Möglichkeit eingehalten werden.

Bei Ermittlung der Bevölkerungszahlen bleiben Ausländer (§ 2 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes) unberücksichtigt.

(2) Der Bundespräsident ernennt eine ständige Wahlkreiskommission. Sie besteht aus dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, einem Richter des Bundesverwaltungsgerichts und fünf weiteren Mitgliedern.

(3) Die Wahlkreiskommission hat die Aufgabe, über Änderungen der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet zu berichten und darzulegen, ob und welche Änderungen der Wahlkreiseinteilung sie im Hinblick darauf für erforderlich hält. Sie kann in ihrem Bericht auch aus anderen Gründen Änderungsvorschläge machen. Bei ihren Vorschlägen zur Wahlkreiseinteilung hat sie die in Absatz 1 genannten Grundsätze zu beachten; ergeben sich nach der Berechnung in Absatz 1 Nr. 2 mehrere mögliche Wahlkreiszuteilungen, erarbeitet sie hierzu Vorschläge.

(4) Der Bericht der Wahlkreiskommission ist dem Bundesministerium des Innern innerhalb von fünfzehn Monaten nach Beginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages zu erstatten. Das Bundesministerium des Innern leitet ihn unverzüglich dem Deutschen Bundestag zu und veröffentlicht ihn im Bundesanzeiger. Auf Ersuchen des Bundesministeriums des Innern hat die Wahlkreiskommission einen ergänzenden Bericht zu erstatten; für diesen Fall gilt Satz 2 entsprechend.

(5) Werden Landesgrenzen nach den gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren bei sonstigen Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes geändert, so ändern sich entsprechend auch die Grenzen der betroffenen Wahlkreise. Werden im aufnehmenden Land zwei oder mehrere Wahlkreise berührt oder wird eine Exklave eines Landes gebildet, so bestimmt sich die Wahlkreiszugehörigkeit des neuen Landesteiles nach der Wahlkreiszugehörigkeit der Gemeinde, des Gemeindebezirks oder des

gemeindefreien Gebietes, denen er zugeschlagen wird. Änderungen von Landesgrenzen, die nach Ablauf des 32. Monats nach Beginn der Wahlperiode vorgenommen werden, wirken sich auf die Wahlkreiseinteilung erst in der nächsten Wahlperiode aus.

§ 4 Stimmen
Votos por elector

Jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine Erststimme für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten, eine Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste.

§ 5 Wahl in den Wahlkreisen
Elección por circunscripciones electorales

In jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter gewählt. Gewählt ist der Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Kreiswahlleiter zu ziehende Los.

§ 6 Wahl nach Landeslisten
Elección por listas regionales (Land)

(1) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede Landesliste abgegebenen Zweitstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt werden dabei die Zweitstimmen derjenigen Wähler, die ihre Erststimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, der gemäß § 20 Abs. 3 oder von einer Partei, für die in dem betreffenden Lande keine Landesliste zugelassen ist, vorgeschlagen ist. Von der Gesamtzahl der Abgeordneten (§ 1 Abs. 1) wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber abgezogen, die in Satz 2 genannt oder von einer nach Absatz 6 nicht zu berücksichtigenden Partei vorgeschlagen sind.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landeslisten auf der Grundlage der nach Absatz 1 Sätze 1 und 2 zu berücksichtigenden Zweitstimmen wie folgt verteilt. Jede Landesliste erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung der Summe ihrer im Wahlgebiet erhaltenen Zweitstimmen durch einen Zuteilungsdivisor ergeben. Zahlenbruchteile unter 0,5 werden auf die darunter liegende ganze Zahl abgerundet, solche über 0,5 werden auf die darüber liegende ganze Zahl aufgerundet. Zahlenbruchteile, die gleich 0,5 sind, werden so aufgerundet oder abgerundet, dass die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze eingehalten wird; ergeben sich dabei mehrere mögliche Sitzzuteilungen, so entscheidet das vom Bundeswahlleiter zu ziehende Los. Der Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt so viele Sitze auf die Landeslisten entfallen, wie Sitze zu vergeben sind. Dazu wird zunächst die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten durch die Gesamtzahl der nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze geteilt. Entfallen danach mehr Sitze auf die Landeslisten als Sitze zu vergeben sind, ist der Zuteilungsdivisor so heraufzusetzen, dass sich bei der Berechnung die zu vergebende Sitzzahl ergibt; entfallen zu wenig Sitze auf die Landeslisten, ist der Zuteilungsdivisor entsprechend herunterzusetzen.

(3) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 eine Landesliste, auf die mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr abweichend von Absatz 2 Satz 2 bis 7 zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach zu vergebende Sitze werden nach Absatz 2 Satz 2 bis 7 zugeteilt.

(4) Von der für jede Landesliste so ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von der Partei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze abgerechnet. Die restlichen Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in

einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.

(5) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben einer Partei auch dann, wenn sie die nach den Absätzen 2 und 3 ermittelte Zahl übersteigen. In einem solchen Falle erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze (§ 1 Abs. 1) um die Unterschiedszahl; eine erneute Berechnung nach den Absätzen 2 und 3 findet nicht statt.

(6) Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens 5 vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten oder in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz errungen haben. Satz 1 findet auf die von Parteien nationaler Minderheiten eingereichten Listen keine Anwendung.

§ 7 Listenverbindung
Coalición de listas

(1) Landeslisten derselben Partei gelten als verbunden, soweit nicht erklärt wird, daß eine oder mehrere beteiligte Landeslisten von der Listenverbindung ausgeschlossen sein sollen.

(2) Verbundene Listen gelten bei der Sitzverteilung im Verhältnis zu den übrigen Listen als eine Liste.

(3) Die auf eine Listenverbindung entfallenden Sitze werden auf die beteiligten Landeslisten entsprechend § 6 Abs. 2 verteilt. 2§ 6 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

Nota a pie de página
§ 7 Abs. 3 Satz 2 iVm § 6 Abs. 5 Satz 2: Mit GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 10.4.1997 I 1340 - 2 BvF 1/95 -
§ 7 Abs. 3 Satz 2 iVm § 6 Abs. 4 u. 5: Verletzt nach Maßgabe der Entscheidungsformel Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gem. BVerfGE v. 3.7.2008 I 1286 - 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07 -

Zweiter Abschnitt
Wahlorgane
Órganos electorales

§ 8 Gliederung der Wahlorgane
División de los órganos electorales

(1) Wahlorgane sind der Bundeswahlleiter und der Bundeswahlausschuß für das Wahlgebiet, ein Landeswahlleiter und ein Landeswahlausschuß für jedes Land, in Kreiswahlleiter und ein Kreiswahlausschuß für jeden Wahlkreis, ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für jeden Wahlbezirk und mindestens ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für jeden Wahlkreis zur Feststellung des Briefwahlergebnisses.

Wieviel Briefwahlvorstände zu bilden sind, um das Ergebnis der Briefwahl noch am Wahltage feststellen zu können, bestimmt der Kreiswahlleiter.

(2) Für mehrere benachbarte Wahlkreise kann ein gemeinsamer Kreiswahlleiter bestellt und ein gemeinsamer Kreiswahlausschuß gebildet werden; die Anordnung trifft der Landeswahlleiter.

(3) Zur Feststellung des Briefwahlergebnisses können Wahlvorsteher und Wahlvorstände statt für jeden Wahlkreis für einzelne oder mehrere Gemeinden oder für einzelne Kreise innerhalb des Wahlkreises eingesetzt werden; die Anordnung trifft die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle.

§ 9 Bildung der Wahlorgane
Composición de los órganos electorales

(1) Der Bundeswahlleiter und sein Stellvertreter werden vom Bundesministerium des Innern, die Landeswahlleiter, Kreiswahlleiter und Wahlvorsteher sowie ihre Stellvertreter von der Landesregierung oder der von ihr bestimmten Stelle ernannt.

(2) Der Bundeswahlausschuß besteht aus dem Bundeswahlleiter als Vorsitzendem und acht von ihm berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern. Die übrigen Wahlausschüsse bestehen aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem und sechs von ihm berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern. Die Wahlvorstände bestehen aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und weiteren drei bis sieben vom Wahlvorsteher berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern; die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann anordnen, daß die Beisitzer des Wahlvorstandes von der Gemeindebehörde und die Beisitzer des Wahlvorstandes zur Feststellung des Briefwahlergebnisses vom Kreiswahlleiter, im Falle einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 von der Gemeindebehörde oder von der Kreisverwaltungsbehörde allein oder im Einvernehmen mit dem Wahlvorsteher berufen werden. Bei Berufung der Beisitzer sind die in dem jeweiligen Bezirk vertretenen Parteien nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

(3) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge und stellvertretende Vertrauenspersonen dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans bestellt werden.

(4) Die Gemeindebehörden sind befugt, personenbezogene Daten von Wahlberechtigten zum Zweck ihrer Berufung zu Mitgliedern von Wahlvorständen zu erheben und zu verarbeiten. Zu diesem Zweck dürfen personenbezogene Daten von Wahlberechtigten, die zur Tätigkeit in Wahlvorständen geeignet sind, auch für künftige Wahlen verarbeitet werden, sofern der Betroffene der Verarbeitung nicht widersprochen hat. Der Betroffene ist über das Widerspruchsrecht zu unterrichten. Im Einzelnen dürfen folgende Daten erhoben und verarbeitet werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, Zahl der Berufungen zu einem Mitglied der Wahlvorstände und die dabei ausgeübte Funktion.

(5) Auf Ersuchen der Gemeindebehörden sind zur Sicherstellung der Wahldurchführung die Behörden des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts verpflichtet, aus dem Kreis ihrer Bediensteten unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift zum Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahlvorstände Personen zu benennen, die im Gebiet der ersuchenden Gemeinde wohnen. Die ersuchte Stelle hat den Betroffenen über die übermittelten Daten und den Empfänger zu benachrichtigen.

§ 10 Tätigkeit der Wahlausschüsse und Wahlvorstände
Acividad de las Juntas electorales y de las Juntas locales

(1) Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände verhandeln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sitzung. 2Soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist, entscheidet bei den Abstimmungen Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(2) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellvertreter und die Schriftführer sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten verpflichtet.

§ 11 Ehrenämter
Carácter honorífico de los cargos electorales

(1) Die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme dieses Ehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte verpflichtet. Das Ehrenamt darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden.

(2) (weggefallen)

(3) (weggefallen)

Dritter Abschnitt
Wahlrecht und Wählbarkeit
Derecho de sufragio activo y pasivo

§ 12 Wahlrecht
Derecho de voto

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage

1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben,

2. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten,

3. nicht nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

(2) Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch diejenigen Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltag außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie nach dem 23. Mai 1949 und vor ihrem Fortzug mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben. Als Wohnung oder gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne von Satz 1 gilt auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet. Bei Rückkehr eines nach Satz 1 Wahlberechtigten in die Bundesrepublik Deutschland gilt die Dreimonatsfrist des Absatzes 1 Nr. 2 nicht.

(3) Wohnung im Sinne des Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. 2Wohnwagen und Wohnschiffe sind jedoch nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.

(4) Sofern sie in der Bundesrepublik Deutschland keine Wohnung innehaben oder innegehabt haben, gilt als Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 oder des Absatzes 2 Satz 1

1. für Seeleute sowie für die Angehörigen ihres Hausstandes das von ihnen bezogene Schiff, wenn dieses nach dem Flaggenrechtsgesetz in der jeweils geltenden Fassung die Bundesflagge zu führen berechtigt ist,

2. für Binnenschiffer sowie für die Angehörigen ihres Hausstandes das von ihnen bezogene Schiff, wenn dieses in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist,

3. für im Vollzug gerichtlich angeordneter Freiheitsentziehung befindliche Personen sowie für andere Untergebrachte die Anstalt oder die entsprechende Einrichtung.

(5) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 1 ist der Tag der Wohnungs- oder Aufenthaltsnahme in die Frist einzubeziehen.

§ 13 Ausschluß vom Wahlrecht
Personas excluidas del derecho de voto

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist,

1. wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,

2. derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt,

3. wer sich auf Grund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet.

4. (weggefallen)

§ 14 Ausübung des Wahlrechts
Ejercicio del derecho de voto

(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

(4) Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.

§ 15 Wählbarkeit
Requisitos de elegibilidad

(1) Wählbar ist, wer am Wahltage

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und

2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.

(2) Nicht wählbar ist,

1. wer nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder

2. wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

3. (weggefallen)

Vierter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl
Preparación de las elecciones

§ 16 Wahltag
Día de las elecciones

Der Bundespräsident bestimmt den Tag der Hauptwahl (Wahltag). Wahltag muß ein Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sein.

§ 17 Wählerverzeichnis und Wahlschein
Censo electoral y tarjeta del elector

(1) Die Gemeindebehörden führen für jeden Wahlbezirk ein Verzeichnis der Wahlberechtigten. Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, an den Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszeiten die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte während des in Satz 2 genannten Zeitraumes nur dann ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 4Das Recht zur Überprüfung gemäß Satz 3 besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist.

(2) Ein Wahlberechtigter, der im Wählerverzeichnis eingetragen ist, oder der aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

§ 18 Wahlvorschlagsrecht, Beteiligungsanzeige
Presentación de candidaturas y anuncio de concurrencia a las elecciones

(1) Wahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 von Wahlberechtigten eingereicht werden.

(2) Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am neunzigsten Tage vor der Wahl dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuß ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muß von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. 5Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen.

(3) Der Bundeswahlleiter hat die Anzeige nach Absatz 2 unverzüglich nach Eingang zu prüfen. Stellt er Mängel fest, so benachrichtigt er sofort den Vorstand und fordert ihn auf, behebbare Mängel zu beseitigen. Nach Ablauf der Anzeigefrist können nur noch Mängel an sich gültiger Anzeigen behoben werden. 4Eine gültige Anzeige liegt nicht vor, wenn

1. die Form oder Frist des Absatzes 2 nicht gewahrt ist,

2. die Parteibezeichnung fehlt,

3. die nach Absatz 2 erforderlichen gültigen Unterschriften und die der Anzeige beizufügenden Anlagen fehlen, es sei denn, diese Anlagen können infolge von Umständen, die die Partei nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig vorgelegt werden,

4. die Vorstandsmitglieder mangelhaft bezeichnet sind, so daß ihre Person nicht feststeht.

Nach der Entscheidung über die Feststellung der Parteieigenschaft ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen. 6Gegen Verfügungen des Bundeswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann der Vorstand den Bundeswahlausschuß anrufen.

(4) Der Bundeswahlausschuß stellt spätestens am zweiundsiebzigsten Tage vor der Wahl für alle Wahlorgane verbindlich fest,

1. welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren,

2. welche Vereinigungen, die nach Absatz 2 ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind. Für die Ablehnung der Anerkennung als Partei für die Wahl ist Zweidrittelmehrheit erforderlich.

(5) Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag und in jedem Land nur eine Landesliste einreichen.

§ 19 Einreichung der Wahlvorschläge
Entrega de las candidaturas

Kreiswahlvorschläge sind dem Kreiswahlleiter, Landeslisten dem Landeswahlleiter spätestens am sechsundsechzigsten Tage vor der Wahl bis 18 Uhr schriftlich einzureichen.

§ 20 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
Contenido y forma de las candidaturas en el distrito

(1) Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 genannten Parteien müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muß im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten.

(3) Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(4) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge ein Kennwort enthalten.

§ 21 Aufstellung von Parteibewerbern
Requisitos para la nominación como candidatos

(1) Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter. Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allgemein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte bestellte Versammlung.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten, die mehrere Wahlkreise umfassen, können die Bewerber für diejenigen Wahlkreise, deren Gebiet die Grenze des Kreises oder der kreisfreien Stadt nicht durchschneidet, in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreterversammlung gewählt werden.

(3) Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlen dürfen frühestens 32 Monate, für die Vertreterversammlungen frühestens 29 Monate nach Beginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages stattfinden; dies gilt nicht, wenn die Wahlperiode vorzeitig endet.

(4) Der Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, die Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, oder eine andere in der Parteisatzung hierfür vorgesehene Stelle können gegen den Beschluß einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. 3Ihr Ergebnis ist endgültig.

(5) Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlußfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Satzungen.

(6) Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides Statt zu versichern, dass die Anforderungen gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 beachtet worden sind. Der Kreiswahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt zuständig; er gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

§ 22 Vertrauensperson
Representantes o persona de confianza

(1) In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

(3) Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages an den Kreiswahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

§ 23 Zurücknahme von Kreiswahlvorschlägen
Retirada de candidaturas de la circunscripción

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden.

§ 24 Änderung von Kreiswahlvorschlägen
Modificación de candidaturas de la circunscripción

Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das

Verfahren nach § 21 braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach § 20 Abs. 2 und 3 bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Änderung ausgeschlossen.

§ 25 Beseitigung von Mängeln
Subsanación de defectos

(1) Der Kreiswahlleiter hat die Kreiswahlvorschläge unverzüglich nach Eingang zu prüfen. Stellt er bei einem Kreiswahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen.

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn

1. die Form oder Frist des § 19 nicht gewahrt ist,

2. die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 erforderlichen gültigen Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,

3. bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs. 2 erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise des § 21 nicht erbracht sind,

4. der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so daß seine Person nicht feststeht, oder

5. die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt.

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen.

(4) Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den Kreiswahlausschuß anrufen.

§ 26 Zulassung der Kreiswahlvorschläge
Aprobación de candidaturas electorales de la circunscripción

(1) Der Kreiswahlausschuß entscheidet am achtundfünfzigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge. Er hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie

1. verspätet eingereicht sind oder

2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, daß in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.

Die Entscheidung ist in der Sitzung des Kreiswahlausschusses bekanntzugeben.

(2) Weist der Kreiswahlausschuß einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuß eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwerde muß spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl getroffen werden.

(3) Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am achtundvierzigsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt.

§ 27 Landeslisten
Listas regionales (Land)

(1) Landeslisten können nur von Parteien eingereicht werden. Sie müssen von dem Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen, bei den in § 18 Abs. 2 genannten Parteien außerdem von 1 vom Tausend der Wahlberechtigten des Landes bei der letzten Bundestagswahl, jedoch höchstens 2.000 Wahlberechtigten, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages einer der in § 18 Abs. 2 genannten Parteien muß im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Landesliste nachzuweisen. Das Erfordernis zusätzlicher Unterschriften gilt nicht für Landeslisten von Parteien nationaler Minderheiten.

(2) Landeslisten müssen den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese enthalten.

(3) Die Namen der Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein.

(4) Ein Bewerber kann nur in einem Land und hier nur in einer Landesliste vorgeschlagen werden. In einer Landesliste kann nur benannt werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.

(5) § 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 sowie die §§ 22 bis 25 gelten entsprechend mit der Maßgabe, daß die Versicherung an Eides Statt nach § 21 Abs. 6 Satz 2 sich auch darauf zu erstrecken hat, daß die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber in der Landesliste in geheimer Abstimmung erfolgt ist.

§ 28 Zulassung der Landeslisten
Admisión de las listas regionales (Land)

(1) 1Der Landeswahlausschuß entscheidet am achtundfünfzigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Landeslisten. 2Er hat Landeslisten zurückzuweisen, wenn sie

1. verspätet eingereicht sind oder

2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, daß in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.

3Sind die Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber nicht erfüllt, so werden ihre Namen aus der Landesliste gestrichen. 4Die Entscheidung ist in der Sitzung des Landeswahlausschusses bekanntzugeben.

(2) 1Weist der Landeswahlausschuß eine Landesliste ganz oder teilweise zurück, so kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Bundeswahlausschuß eingelegt werden. 2Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson der Landesliste und der Landeswahlleiter. 3Der Landeswahlleiter kann auch gegen eine Entscheidung, durch die eine Landesliste zugelassen wird, Beschwerde erheben. 4In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. 5Die Entscheidung über die Beschwerde muß spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl getroffen werden.

(3) Der Landeswahlleiter macht die zugelassenen Landeslisten spätestens am achtundvierzigsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt.

§ 29 Ausschluß von der Verbindung von Landeslisten
Exclusión de la no coalición de listas regionales (Land)

(1) Der Ausschluß von der Listenverbindung (§ 7) ist dem Bundeswahlleiter von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson der Landesliste durch

gemeinsame schriftliche Erklärung spätestens am vierunddreißigsten Tage vor der Wahl bis 18 Uhr mitzuteilen.

(2) Der Bundeswahlausschuß entscheidet spätestens am dreißigsten Tage vor der Wahl über die Erklärungen nach Absatz 1. § 28 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Entscheidung ist in der Sitzung des Bundeswahlausschusses bekanntzugeben.

(3) Der Bundeswahlleiter macht die Listenverbindungen und die Landeslisten, für die eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben wurde, spätestens am sechsundzwanzigsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt.

§ 30 Stimmzettel
La papeleta de voto

(1) Die Stimmzettel und die zugehörigen Umschläge für die Briefwahl (§ 36 Abs. 1) werden amtlich hergestellt.

(2) Der Stimmzettel enthält

1. für die Wahl in den Wahlkreisen die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien außerdem die Namen der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort,

2. für die Wahl nach Landeslisten die Namen der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, sowie die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten.

(3) Die Reihenfolge der Landeslisten von Parteien richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die sie bei der letzten Bundestagswahl im Land erreicht haben. Die übrigen Landeslisten schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Parteien an. Die Reihenfolge der Kreiswahlvorschläge richtet sich nach der Reihenfolge der entsprechenden Landeslisten. Sonstige Kreiswahlvorschläge schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Parteien oder der Kennwörter an.

Fünfter Abschnitt
Wahlhandlung
Acto electoral

§ 31 Öffentlichkeit der Wahlhandlung
Carácter público del acto electoral

Die Wahlhandlung ist öffentlich. Der Wahlvorstand kann Personen, die die Ordnung und Ruhe stören, aus dem Wahlraum verweisen.

§ 32 Unzulässige Wahlpropaganda und Unterschriftensammlung, unzulässige Veröffentlichung von Wählerbefragungen
Propaganda electoral, recogida de firmas ilícitas y encuestas electorales ilícitas

(1) Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

(2) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig.

§ 33 Wahrung des Wahlgeheimnisses
Salvaguarda del secreto electoral

(1) Es sind Vorkehrungen dafür zu treffen, daß der Wähler den Stimmzettel unbeobachtet

kennzeichnen und falten kann. Für die Aufnahme der Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden, die die Wahrung des Wahlgeheimnisses sicherstellen.

(2) Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder der wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.

§ 34 Stimmabgabe mit Stimmzetteln
Votación mediante la papeleta de voto

(1) Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.

(2) Der Wähler gibt

1. seine Erststimme in der Weise ab, daß er durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

2. seine Zweitstimme in der Weise ab, daß er durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Wähler faltet daraufhin den Stimmzettel in der Weise, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und wirft ihn in die Wahlurne.

§ 35 Stimmabgabe mit Wahlgeräten
Votación electrónica

(1) Zur Erleichterung der Abgabe und Zählung der Stimmen können anstelle von Stimmzetteln und Wahlurnen Wahlgeräte benutzt werden.

(2) Wahlgeräte im Sinne von Absatz 1 müssen die Geheimhaltung der Stimmabgabe gewährleisten. Ihre Bauart muß für die Verwendung bei Wahlen zum Deutschen Bundestag amtlich für einzelne Wahlen oder allgemein zugelassen sein. Über die Zulassung entscheidet das Bundesministerium des Innern auf Antrag des Herstellers des Wahlgerätes. Die Verwendung eines amtlich zugelassenen Wahlgerätes bedarf der Genehmigung durch das Bundesministerium des Innern. Die Genehmigung kann für einzelne Wahlen oder allgemein ausgesprochen werden.

(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu erlassen über

1. die Voraussetzungen für die amtliche Zulassung der Bauart von Wahlgeräten sowie für die Rücknahme und den Widerruf der Zulassung,

2. das Verfahren für die amtliche Zulassung der Bauart,

3. das Verfahren für die Prüfung eines Wahlgerätes auf die der amtlich zugelassenen Bauart entsprechende Ausführung,

4. die öffentliche Erprobung eines Wahlgerätes vor seiner Verwendung,

5. das Verfahren für die amtliche Genehmigung der Verwendung sowie für die Rücknahme und den Widerruf der Genehmigung,

6. die durch die Verwendung von Wahlgeräten bedingten Besonderheiten im Zusammenhang mit der Wahl.

Die Rechtsverordnung ergeht in den Fällen der Nummern 1 und 3 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

(4) Für die Betätigung eines Wahlgerätes gilt § 33 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 entsprechend.

§ 36 Briefwahl
Voto por correo

(1) Bei der Briefwahl hat der Wähler dem Kreiswahlleiter des Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt worden ist, im verschlossenen Wahlbriefumschlag

a) seinen Wahlschein,

b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag seinen Stimmzettel so rechtzeitig zu übersenden, daß der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht. § 33 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die Hilfsperson gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides Statt zu versichern, daß der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden ist. Der Kreiswahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt zuständig; er gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

(3) Im Falle einer Anordnung der Landesregierung oder der von ihr bestimmten Stelle nach § 8 Abs. 3 tritt an die Stelle des Kreiswahlleiters in Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 2 die Gemeindebehörde, die den Wahlschein ausgestellt hat, oder die Verwaltungsbehörde des Kreises, in dem diese Gemeinde liegt.

(4) Wahlbriefe können von den Absendern bei einem vor der Wahl amtlich bekannt gemachten Postunternehmen als Briefsendungen ohne besondere Versendungsform unentgeltlich eingeliefert werden, wenn sie sich in amtlichen Wahlbriefumschlägen befinden. Bei Inanspruchnahme einer besonderen Versendungsform hat der Absender den das jeweils für die Briefbeförderung gültige Leistungsentgelt übersteigenden Betrag zu tragen. Der Bund trägt die Kosten für die unentgeltliche Wahlbriefbeförderung.

Sechster Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisse
Proclamación de los resultados electorales

§ 37 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
Proclamación del resultado electoral en el distrito electoral

Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand fest, wieviel Stimmen im Wahlbezirk auf die einzelnen Kreiswahlvorschläge und Landeslisten abgegeben worden sind.

§ 38 Feststellung des Briefwahlergebnisses
Proclamación del resultado del voto por correo

Der für die Briefwahl eingesetzte Wahlvorstand stellt fest, wieviel durch Briefwahl abgegebene Stimmen auf die einzelnen Kreiswahlvorschläge und Landeslisten entfallen.

§ 39 Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahlbriefen, Auslegungsregeln
Votos nulo, rechazo de votos por correo y normas de interpretación

(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. nicht amtlich hergestellt ist,

2. keine Kennzeichnung enthält,

3. für einen anderen Wahlkreis gültig ist,

4. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen läßt,

5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

In den Fällen der Nummern 1 und 2 sind beide Stimmen ungültig; im Fall der Nummer 3 ist nur die Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen anderen Wahlkreis in demselben Land gültig ist. Bei der Briefwahl sind außerdem beide Stimmen ungültig, wenn der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag oder in einem Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält, jedoch eine Zurückweisung gemäß Absatz 4 Nr. 7 oder 8 nicht erfolgt ist. Enthält der Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so ist die nicht abgegebene Stimme ungültig.

(2) Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; sonst zählen sie als ein Stimmzettel mit zwei ungültigen Stimmen.

(3) Ist der Stimmzettelumschlag leer abgegeben worden, so gelten beide Stimmen als ungültig.

(4) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,

2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt,

3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist,

4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist,

5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt versehener Wahlscheine enthält,

6. der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist,

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(5) Die Stimmen eines Wählers, der an der Briefwahl teilgenommen hat, werden nicht dadurch ungültig, daß er vor dem oder am Wahltage stirbt oder sein Wahlrecht nach § 13 verliert.

§ 40 Entscheidung des Wahlvorstandes
Resolución de la Junta electoral

Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen und über alle bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sich ergebenden Anstände. Der Kreiswahlausschuß hat das Recht der Nachprüfung.

§ 41 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis
Proclamación de los resultados electorales en la circunscripción electoral

Der Kreiswahlausschuß stellt fest, wieviel Stimmen im Wahlkreis für die einzelnen Kreiswahlvorschläge und Landeslisten abgegeben worden sind und welcher Bewerber als Wahlkreisabgeordneter gewählt ist. Der Kreiswahlleiter benachrichtigt den gewählten Bewerber und weist ihn darauf hin, dass er nach der abschließenden Feststellung des

Ergebnisses für das Wahlgebiet durch den Bundeswahlausschuss (§ 42 Abs. 2 Satz 1) die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag mit Eröffnung der ersten Sitzung nach der Wahl erlangt und eine Ablehnung des Erwerbs der Mitgliedschaft gegenüber dem Landeswahlleiter erfolgen muss.

§ 42 Feststellung des Ergebnisses der Landeslistenwahl
Proclamación del resultado electoral en las elecciones regionales (Land)

(1) Der Landeswahlausschuß stellt fest, wieviel Stimmen im Land für die einzelnen Landeslisten abgegeben worden sind.

(2) Der Bundeswahlausschuß stellt fest, wieviel Sitze auf die einzelnen Landeslisten entfallen und welche Bewerber gewählt sind. Der Landeswahlleiter benachrichtigt die gewählten Bewerber und weist sie darauf hin, dass sie nach der abschließenden Feststellung des Ergebnisses für das Wahlgebiet durch den Bundeswahlausschuss die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag mit Eröffnung der ersten Sitzung nach der Wahl erlangen und eine Ablehnung des Erwerbs der Mitgliedschaft gegenüber dem Landeswahlleiter erfolgen muss.

(3) (weggefallen)

[…]

Anlage (zu § 2 Abs. 2)
Anexos

Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Deutschen Bundestag der Bundesrepublik Deutschland
Distribución de las circunscripciones electorales para las elecciones al Bundestag
Fundstelle: BGBl. I 2008, 317 - 358

http://frei.bundesgesetzblatt.de/index.php?teil=I&jah3=2008&nr=9

Bundeswahlordnung
Reglamento de elecciones federales

"Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. März 2008 (BGBl. I S. 476)"

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Wahlorgane
Órganos electorales

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl
Preparación de las elecciones

Erster Unterabschnitt
Wahlbezirke
Distritos electorales

§ 12 Allgemeine Wahlbezirke
§ 13 Sonderwahlbezirke

Zweiter Unterabschnitt
Wählerverzeichnis
Censo electoral

§ 14 Führung des Wählerverzeichnisses
§ 15
§ 16 Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis
§ 17 Zuständigkeiten für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
§ 18 Verfahren für die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag
§ 19 Benachrichtigung der Wahlberechtigten
§ 20 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilungvon Wahlscheinen
§ 21 Einsicht in das Wählerverzeichnis
§ 22 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und Beschwerde
§ 23 Berichtigung des Wählerverzeichnisses
§ 24 Abschluss des Wählerverzeichnisses

Dritter Unterabschnitt
Wahlscheine
Tarjeta de elector

§ 25 Voraussetzungen für die Erteilung von Wahlscheinen
§ 26 Zuständige Behörde, Form des Wahlscheines
§ 27 Wahlscheinanträge
§ 28 Erteilung von Wahlscheinen
§ 29 Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte Personengruppen
§ 30 Vermerk im Wählerverzeichnis
§ 31 Einspruch gegen die Versagung des Wahlscheines und Beschwerde

Vierter Unterabschnitt
Wahlvorschläge, Stimmzettel
Presentación de candidaturas, papeletas de voto

§ 32 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
§ 33 Beteiligungsanzeige der in § 18 Abs. 2 des Gesetzes genannten Parteien, Beseitigung von Mängeln
§ 34 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
§ 35 Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge durch den Kreiswahlleiter
§ 36 Zulassung der Kreiswahlvorschläge
§ 37 Beschwerde gegen Entscheidungen des Kreiswahlausschusses
§ 38 Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge
§ 39 Inhalt und Form der Landeslisten
§ 40 Vorprüfung der Landeslisten durch den Landeswahlleiter
§ 41 Zulassung der Landeslisten
§ 42 Beschwerde gegen Entscheidungen des Landeswahlausschusses
§ 43 Bekanntmachung der Landeslisten
§ 44 Ausschluss von der Verbindung von Landeslisten
§ 45 Stimmzettel, Wahlumschläge

Fünfter Unterabschnitt
Wahlräume, Wahlzeit
Colegios electorales, jornada electoral

§ 46 Wahlräume
§ 47 Wahlzeit
§ 48 Wahlbekanntmachung der Gemeindebehörde

Dritter Abschnitt
Wahlhandlung
Acto electoral

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen
Disposiciones generales

§ 49 Ausstattung des Wahlvorstandes
§ 50 Wahlzellen
§ 51 Wahlurnen
§ 52 Wahltisch
§ 53 Eröffnung der Wahlhandlung
§ 54 Öffentlichkeit
§ 55 Ordnung im Wahlraum
§ 56 Stimmabgabe
§ 57 Stimmabgabe behinderter Wähler
§ 58 Vermerk über die Stimmabgabe
§ 59 Stimmabgabe von Inhabern eines Wahlscheines
§ 60 Schluss der Wahlhandlung

Zweiter Unterabschnitt
Besondere Regelungen
Normas especiales

§ 61 Wahl in Sonderwahlbezirken
§ 62 Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern und kleineren Alten- oder Pflegeheimen
§ 63 Stimmabgabe in Klöstern
§ 64 Stimmabgabe in sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten
§ 65
§ 66 Briefwahl

Vierter Abschnitt
Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse
Escrutinio y proclamación de los resultados electorales

§ 67 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
§ 68 Zählung der Wähler
§ 69 Zählung der Stimmen
§ 70 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 71 Schnellmeldungen, vorläufige Wahlergebnisse
§ 72 Wahlniederschrift
§ 73 Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen
§ 74 Behandlung der Wahlbriefe, Vorbereitung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
§ 75 Zulassung der Wahlbriefe, Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
§ 76 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis
§ 77 Ermittlung und Feststellung des Zweitstimmenergebnisses im Land
§ 78 Abschließende Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Landeslistenwahl

§ 79 Bekanntmachung der endgültigen Wahlergebnisse
§ 80 Benachrichtigung der gewählten Landeslistenbewerber
§ 81 Überprüfung der Wahl durch die Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter
[…]

Sechster Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
Disposiciones transitorias y finales

§ 85
§ 86 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 87 Zustellungen, Versicherungen an Eides statt
§ 88 Beschaffung von Stimmzetteln und Vordrucken
§ 89 Sicherung der Wahlunterlagen
§ 90 Vernichtung von Wahlunterlagen
§ 91 Stadtstaatklausel
§ 92
§ 93

Anlage 1
Anlage 2 (zu § 18 Abs. 5)
Anlage 3 (zu § 19 Abs. 1)
Anlage 4 (zu § 19 Abs. 2)
Anlage 5 (zu § 20 Abs. 1)
Anlage 6 (zu § 20 Abs. 2)
Anlage 7
Anlage 8 (zu § 24 Abs. 1)
Anlage 9 (zu § 26)
Anlage 10 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 3)
Anlage 11 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 4)
Anlage 12 (zu § 28 Abs. 3)
Anlage 13 (zu § 34 Abs. 1)
Anlage 14 (zu § 34 Abs. 4)
Anlage 15 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 1 und 3 Buchstabe b)
Anlage 16 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 2 und § 39 Abs. 4 Nr. 2)
Anlage 17 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 3 Buchstabe a)
Anlage 18 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 3 Buchstabe a)
Anlage 19 (zu § 36 Abs. 6)
Anlage 20 (zu § 39 Abs. 1)
Anlage 21 (zu § 39 Abs. 3)
Anlage 22 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 1)
Anlage 23 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 3)
Anlage 24 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 3)
Anlage 25 (zu § 44 Abs. 1)
Anlage 26 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 1)
Anlage 27 (zu § 48 Abs. 1)
Anlage 28 (zu § 71 Abs. 7 und § 75 Abs. 4)
Anlage 29 (zu § 72 Abs. 1)
Anlage 30 (zu §§ 72 Abs. 3, 75 Abs. 6, 76 Abs. 1 und 6, § 77 Abs. 1, § 78 Abs. 4)
Anlage 31 (zu § 75 Abs. 5)
Anlage 32 (zu § 76 Abs. 6)
Anlage 33 (zu § 77 Abs. 4)

Fußnote
Anlagen: Anlage 1 (weggefallen) Anlage 2 (zu § 18 Abs. 5) Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis von Wahlberechtigten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sowie Versicherung an Eides statt - Erst- und Zweitausfertigung - und Merkblatt zum Antrag Anlage 3 (zu § 19 Abs. 1) Wahlbenachrichtigung Anlage 4 (zu § 19 Abs. 2) Wahlscheinantrag Anlage 5 (zu § 20 Abs. 1) Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen Anlage 6 (zu § 20 Abs. 2) Bekanntmachung der Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag Anlage 7 (weggefallen) Anlage 8 (zu § 24 Abs. 1) Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses durch die Gemeindebehörde Anlage 9 (zu § 26) Wahlschein Anlage 10 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 3) Wahlumschlag für die Briefwahl - Vorder- und Rückseite - Anlage 11 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 4) Wahlbriefumschlag - Vorder- und Rückseite - Anlage 12 (zu § 28 Abs. 3) Merkblatt zur Briefwahl - Vorder- und Rückseite - Anlage 13 (zu § 34 Abs. 1) Kreiswahlvorschlag Anlage 14 (zu § 34 Abs. 4) Unterstützungsunterschrift und Bescheinigung des Wahlrechts (Kreiswahlvorschlag) Anlage 15 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 1 und 3 Buchstabe b) Zustimmungserklärung für Bewerber eines Kreiswahlvorschlages mit der Versicherung an Eides statt zur Parteimitgliedschaft für Bewerber eines Kreiswahlvorschlages einer Partei Anlage 16 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 2 und § 39 Abs. 4 Nr. 2) Bescheinigung der Wählbarkeit Anlage 17 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 3 Buchstabe a) Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung des Bewerbers für den Wahlkreis Anlage 18 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 3 Buchstabe a) Versicherung an Eides statt zur Bewerberaufstellung im Wahlkreis Anlage 19 (zu § 36 Abs. 6) Niederschrift über die Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Kreiswahlvorschläge Anlage 20 (zu § 39 Abs. 1) Landesliste Anlage 21 (zu § 39 Abs. 3) Unterstützungsunterschrift und Bescheinigung des Wahlrechts (Landesliste) Anlage 22 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 1) Zustimmungserklärung und Versicherung an Eides statt zur Parteimitgliedschaft für Bewerber einer Landesliste Anlage 23 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 3) Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewerber für die Landesliste Anlage 24 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 3) Versicherung an Eides statt zur Aufstellung der Landeslistenbewerber Anlage 25 (zu § 44 Abs. 1) Erklärung über den Ausschluss von der Verbindung von Landeslisten Anlage 26 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 1) Stimmzettel Anlage 27 (zu § 48 Abs. 1) Wahlbekanntmachung der Gemeindebehörde Anlage 28 (zu § 71 Abs. 7 und § 75 Abs. 4) Schnellmeldung über das Ergebnis der Wahl Anlage 29 (zu § 72 Abs. 1) Wahlniederschrift (Urnenwahl) Anlage 30 (zu § 72 Abs. 3, § 75 Abs. 6, § 76 Abs. 1 und 6, § 77 Abs. 1, § 78 Abs. 4) Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse der Wahl Anlage 31 (zu § 75 Abs. 5) Wahlniederschrift (Briefwahl) Anlage 32 (zu § 76 Abs. 6) Niederschrift über die Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis Anlage 33 (zu § 77 Abs. 4) Niederschrift über die Sitzung des Landeswahlausschusses zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Land

Erster Abschnitt
Wahlorgane
Órganos electorales

§ 1 Bundeswahlleiter
Comisario Electoral Federal

Der Bundeswahlleiter und sein Stellvertreter werden auf unbestimmte Zeit ernannt. Das Bundesministerium des Innern macht die Namen des Bundeswahlleiters und seines Stellvertreters sowie die Anschriften ihrer Dienststellen mit Telekommunikationsanschlüssen öffentlich bekannt.

§ 2 Landeswahlleiter
Comisarios Electorales regionales (Land)

Der Landeswahlleiter und sein Stellvertreter werden auf unbestimmte Zeit ernannt. Die ernennende Stelle teilt die Namen des Landeswahlleiters und seines Stellvertreters sowie die Anschriften ihrer Dienststellen mit Telekommunikationsanschlüssen dem Bundeswahlleiter mit und macht sie öffentlich bekannt.

§ 3 Kreiswahlleiter
Comisarios electorales de circunscripción electoral

(1) Die Kreiswahlleiter und deren Stellvertreter werden vor jeder Wahl ernannt. Spätestens hat die Ernennung alsbald nach der Bestimmung des Tages der Hauptwahl zu erfolgen. Die ernennende Stelle teilt die Namen und Anschriften ihrer Dienststellen mit Telekommunikationsanschlüssen dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter mit und macht sie öffentlich bekannt.

(2) Die Kreiswahlleiter und deren Stellvertreter üben ihr Amt auch nach der Hauptwahl, längstens bis zum Ablauf der Wahlperiode, aus.

§ 4 Bildung der Wahlausschüsse
Constitución de las Juntas electorales

(1) Der Bundeswahlleiter, die Landeswahlleiter und die Kreiswahlleiter berufen alsbald nach der Bestimmung des Tages der Hauptwahl die Beisitzer der Wahlausschüsse und für jeden Beisitzer einen Stellvertreter. Die Beisitzer der Landeswahlausschüsse und der Kreiswahlausschüsse sind aus den Wahlberechtigten des jeweiligen Gebietes zu berufen; sie sollen möglichst am Sitz des Wahlleiters wohnen.

(2) Bei der Auswahl der Beisitzer der Wahlausschüsse sollen in der Regel die Parteien in der Reihenfolge der bei der letzten Bundestagswahl in dem jeweiligen Gebiet errungenen Zahlen der Zweitstimmen angemessen berücksichtigt und die von ihnen rechtzeitig vorgeschlagenen Wahlberechtigten berufen werden.

(3) Die Wahlausschüsse bestehen auch nach der Hauptwahl, längstens bis zum Ablauf der Wahlperiode, fort.

§ 5 Tätigkeit der Wahlausschüsse
Actividad de las Juntas electorales

(1) Die Wahlausschüsse sind ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig.

(2) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen. Er lädt die Beisitzer zu den Sitzungen und weist dabei darauf hin, dass der Ausschuss ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig ist.

(3) Zeit, Ort und Gegenstand der Verhandlungen sind öffentlich bekannt zu machen.

(4) Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer; dieser ist nur stimmberechtigt, wenn er zugleich Beisitzer ist.

(5) Der Vorsitzende weist die Beisitzer und den Schriftführer auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin.

(6) Der Vorsitzende ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum zu verweisen.

(7) Über jede Sitzung ist vom Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen; sie ist vom Vorsitzenden, von den Beisitzern und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 6 Wahlvorsteher und Wahlvorstand
Delegados electorales y Juntas electorales locales

(1) Vor jeder Wahl sind, nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten der Gemeinde, für jeden Wahlbezirk ein Wahlvorsteher und sein Stellvertreter, im Falle des § 46 Abs. 2 mehrere Wahlvorsteher und Stellvertreter zu ernennen.

(2) Die Beisitzer des Wahlvorstandes sollen möglichst aus den Wahlberechtigten der Gemeinde, nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten des Wahlbezirks berufen werden.2Der Stellvertreter des Wahlvorstehers ist zugleich Beisitzer des Wahlvorstandes.

(3) Der Wahlvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Gemeindebehörde vor Beginn der Wahlhandlung auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hingewiesen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen während ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung hinweisendes Zeichen sichtbar tragen.

(4) Der Wahlvorsteher bestellt aus den Beisitzern den Schriftführer und dessen Stellvertreter.

(5) Die Gemeindebehörde hat die Mitglieder des Wahlvorstandes vor der Wahl so über ihre Aufgaben zu unterrichten, dass ein ordnungsmäßiger Ablauf der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gesichert ist.

(6) Der Wahlvorstand wird von der Gemeindebehörde oder in ihrem Auftrag vom Wahlvorsteher einberufen. 2Er tritt am Wahltage rechtzeitig vor Beginn der Wahlzeit im Wahlraum zusammen.

(7) Der Wahlvorstand sorgt für die ordnungsmäßige Durchführung der Wahl. 2Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes.

(8) Während der Wahlhandlung müssen immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwesend sein. Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein.

(9) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig während der Wahlhandlung, wenn mindestens drei Mitglieder, bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses, wenn mindestens fünf Mitglieder, darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwesend sind. Fehlende Beisitzer sind vom Wahlvorsteher durch Wahlberechtigte zu ersetzen, wenn es mit Rücksicht auf die Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes erforderlich ist. Sie sind vom Wahlvorsteher nach Absatz 3 auf ihre Verpflichtung hinzuweisen.

(10) Bei Bedarf stellt die Gemeindebehörde dem Wahlvorstand die erforderlichen Hilfskräfte zu Verfügung.

§ 7 Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstand
Comisario para el voto por correro y Junta de voto por correo

Für die Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstände gilt § 6 entsprechend mit folgenden Maßgaben:

1. Bei der Bildung mehrerer Briefwahlvorstände nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes für einen Wahlkreis und bei der Bildung von Briefwahlvorständen nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes für einzelne oder mehrere Gemeinden oder für einzelne Kreise innerhalb eines Wahlkreises darf die Zahl der auf einen Briefwahlvorstand entfallenden Wahlbriefe nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben; auf einen Briefwahlvorstand sollen mindestens 50 Wahlbriefe entfallen.

2. Wieviel Briefwahlvorstände im Falle einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes zu bilden sind, um das Ergebnis der Briefwahl noch am Wahltage feststellen zu können, entscheidet die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle.

3. Wird im Rahmen einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes für mehrere Gemeinden ein Briefwahlvorstand gebildet, ist eine dieser Gemeinden mit der Durchführung der Briefwahl zu betrauen.

4. Die Mitglieder der Briefwahlvorstände für die einzelnen Wahlkreise sind nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlkreises zu berufen, die am Sitz des Kreiswahlleiters wohnen, bei Bildung von Briefwahlvorständen für einzelne oder für mehrere Gemeinden oder für einzelne Kreise innerhalb eines Wahlkreises nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten, die in den jeweiligen Gemeinden oder Kreisen wohnen.

5. Der Kreiswahlleiter macht Ort und Zeit des Zusammentritts des Briefwahlvorstandes öffentlich bekannt, weist den Briefwahlvorsteher und seinen Stellvertreter auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin, unterrichtet den Briefwahlvorstand über seine Aufgaben und beruft ihn ein; Entsprechendes gilt bei der Einsetzung mehrerer Briefwahlvorstände für einen Wahlkreis. Werden Briefwahlvorstände für einzelne oder mehrere Gemeinden oder für einzelne Kreise innerhalb eines Wahlkreises gebildet, nimmt die jeweilige oder die nach Nummer 3 betraute Gemeindebehörde oder die Verwaltungsbehörde des jeweiligen Kreises diese Aufgaben wahr.

6.Der Briefwahlvorstand ist beschlussfähig bei der Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe nach § 75 Abs. 1 und 2, wenn mindestens drei Mitglieder, bei der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses nach § 75 Abs. 3, wenn mindestens fünf Mitglieder, darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwesend sind.

§ 8 Beweglicher Wahlvorstand
Juntas electorales móviles

Für die Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern, kleineren Alten- oder Pflegeheimen, Klöstern, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten sollen bei entsprechendem Bedürfnis und soweit möglich bewegliche Wahlvorstände gebildet werden. Der bewegliche Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher des zuständigen Wahlbezirks oder seinem Stellvertreter und zwei Beisitzern des Wahlvorstandes. Die Gemeindebehörde kann jedoch auch den beweglichen Wahlvorstand eines anderen Wahlbezirks der Gemeinde mit der Entgegennahme der Stimmzettel beauftragen.

§ 9 Ehrenämter
Cargos honoríficos

Die Übernahme eines Wahlehrenamtes können ablehnen

1.Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung,

2.Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder eines Landtages,

3.Wahlberechtigte, die am Wahltage das 65. Lebensjahr vollendet haben,

4.Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert,

5.Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden beruflichen Gründen oder durch Krankheit oder Gebrechen oder aus einem sonstigen wichtigen Grunde gehindert sind, das Amt ordnungsmäßig auszuüben.

§ 10 Auslagenersatz für Inhaber von Wahlämtern, Erfrischungsgeld
Indemnización de gastos a los titulares de cargos electorales y dietas

(1) Wahlleiter, Beisitzer der Wahlausschüsse und Mitglieder der Wahlvorstände erhalten, wenn sie außerhalb ihres Wahlbezirks tätig werden, Ersatz ihrer notwendigen Fahrkosten in

entsprechender Anwendung der §§ 4 und 5 Abs. 1 des Bundesreisekostengesetzes; wenn sie außerhalb ihres Wohnortes tätig werden, erhalten sie außerdem Tage- und Übernachtungsgelder nach dem Bundesreisekostengesetz.

(2) Ein Erfrischungsgeld von je 16 Euro, das auf ein Tagegeld nach Absatz 1 anzurechnen ist, kann gewährt werden den Mitgliedern der Wahlausschüsse für die Teilnahme an einer nach § 5 einberufenen Sitzung und den Mitgliedern der Wahlvorstände für den Wahltag.

§ 11 Geldbußen
Multas

Geldbußen nach § 49a Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes fließen in die Kasse der Gemeinde, in der der Betroffene in das Wählerverzeichnis einzutragen ist, Geldbußen nach § 49a Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes in die Kasse des Bundes.

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl
Preparación de la elección

Erster Unterabschnitt
Wahlbezirke
Distrito electoral

§ 12 Allgemeine Wahlbezirke
Distritos electorales generales

(1) Gemeinden mit nicht mehr als 2.500 Einwohnern bilden in der Regel einen Wahlbezirk. Größere Gemeinden werden in mehrere Wahlbezirke eingeteilt. Die Gemeindebehörde bestimmt, welche Wahlbezirke zu bilden sind.

(2) Die Wahlbezirke sollen nach den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt werden, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Kein Wahlbezirk soll mehr als 2.500 Einwohner umfassen. Die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben.

(3) Die Wahlberechtigten in Gemeinschaftsunterkünften wie Lagern, Unterkünften der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Polizei sollen nach festen Abgrenzungsmerkmalen auf mehrere Wahlbezirke verteilt werden.

(4) Der Kreiswahlleiter kann kleine Gemeinden und Teile von Gemeinden des gleichen Verwaltungsbezirks zu einem Wahlbezirk und Teile von Gemeinden, die von Wahlkreisgrenzen durchschnitten werden, mit benachbarten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden eines anderen Verwaltungsbezirks zu einem Wahlbezirk vereinigen. Dabei bestimmt er, welche Gemeinde die Wahl durchführt.

§ 13 Sonderwahlbezirke
Distritos electorales especiales

(1) Für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Einrichtungen mit einer größeren Anzahl von Wahlberechtigten, die keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, soll die Gemeindebehörde bei entsprechendem Bedürfnis Sonderwahlbezirke zur Stimmabgabe für Wahlscheininhaber bilden.

(2) Mehrere Einrichtungen können zu einem Sonderwahlbezirk zusammengefasst werden.

(3) Wird ein Sonderwahlbezirk nicht gebildet, gilt § 8 entsprechend.

Zweiter Unterabschnitt
Wählerverzeichnis
Censo electoral

§ 14 Führung des Wählerverzeichnisses
Confección del censo electoral

(1) Die Gemeindebehörde legt vor jeder Wahl für jeden allgemeinen Wahlbezirk (§ 12) ein Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Familiennamen und Vornamen, Tag der Geburt und Wohnung an. 2Das Wählerverzeichnis kann auch im automatisierten Verfahren geführt werden.

(2) 1Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender Nummer in der Buchstabenfolge der Familiennamen, bei gleichen Familiennamen der Vornamen, angelegt. Es kann auch nach Ortsteilen, Straßen und Hausnummern gegliedert werden. Es enthält je eine Spalte für Vermerke über die Stimmabgabe und für Bemerkungen.

(3) Die Gemeindebehörde sorgt dafür, dass die Unterlagen für die Wählerverzeichnisse jederzeit so vollständig vorhanden sind, dass diese vor Wahlen rechtzeitig angelegt werden können.

(4) Besteht ein Wahlbezirk aus mehreren Gemeinden oder Teilen mehrerer Gemeinden, so legt jede Gemeindebehörde das Wählerverzeichnis für ihren Teil des Wahlbezirks an.

§ 15
(weggefallen) derogado

§ 16 Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis
Inscripción de las personas con derecho de voto en el censo electoral

(1) Von Amts wegen sind in das Wählerverzeichnis alle Wahlberechtigten einzutragen, die am 35. Tage vor der Wahl (Stichtag) bei der Meldebehörde gemeldet sind

1. für eine Wohnung,

2. auf Grund eines Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses als Kapitän oder Besatzungsmitglied für ein Seeschiff, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen (§ 12 Abs. 4 Nr. 1 des Gesetzes),

3. für ein Binnenschiff, das in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist (§ 12 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes),

4. für eine Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung (§ 12 Abs. 4 Nr. 3 des Gesetzes).

(2) Auf Antrag sind in das Wählerverzeichnis einzutragen Wahlberechtigte

1. nach § 12 Abs. 1 des Gesetzes,

a) (weggefallen)

b) die ohne eine Wohnung innezuhaben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhalten,

c) die sich in einer Justizvollzugsanstalt oder entsprechenden Einrichtung befinden und nicht nach Absatz 1 Nr. 4 von Amts wegen in das Wählerverzeichnis einzutragen sind,

2. nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes, die nicht nach Absatz 1 Nr. 1 von Amts wegen in das Wählerverzeichnis einzutragen sind.

(3) Verlegt ein Wahlberechtigter, der nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, seine Wohnung und meldet er sich vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis (§

17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes) bei der Meldebehörde des Zuzugsortes an, so wird er in das Wählerverzeichnis der Gemeinde des Zuzugsortes nur auf Antrag eingetragen. in nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, der sich innerhalb derselben Gemeinde für eine Wohnung anmeldet, bleibt in dem Wählerverzeichnis des Wahlbezirks eingetragen, für den er am Stichtag gemeldet war. Der Wahlberechtigte ist bei der Anmeldung über die Regelung in den Sätzen 1 und 2 zu belehren. Erfolgt die Eintragung auf Antrag, benachrichtigt die Gemeindebehörde des Zuzugsortes hiervon unverzüglich die Gemeindebehörde des Fortzugsortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wählerverzeichnis streicht. Wenn im Falle des Satzes 1 bei der Gemeindebehörde des Fortzugsortes eine Mitteilung über den Ausschluss vom Wahlrecht vorliegt oder nachträglich eingeht, benachrichtigt sie hiervon unverzüglich die Gemeindebehörde des Zuzugsortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wählerverzeichnis streicht; der Betroffene ist von der Streichung zu unterrichten.

(4) Für Wahlberechtigte, die am Stichtag nicht für eine Wohnung gemeldet sind und sich vor dem Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde für eine Wohnung anmelden, gilt Absatz 3 Satz 1 und 3 entsprechend.

(5) Bezieht ein Wahlberechtigter, der nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, in einer anderen Gemeinde eine weitere Wohnung, die seine Hauptwohnung wird, oder verlegt er seine Hauptwohnung in eine andere Gemeinde, so gilt, wenn er sich vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde anmeldet, Absatz 3 entsprechend.

(6) Welche von mehreren Wohnungen eines Wahlberechtigten seine Hauptwohnung ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Melderechts.

(7) Bevor eine Person in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, ist zu prüfen, ob sie die Wahlrechtsvoraussetzungen des § 12 des Gesetzes erfüllt und ob sie nicht nach § 13 des Gesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. 2Erfolgt die Eintragung in das Wählerverzeichnis nur auf Antrag, ist außerdem zu prüfen, ob ein frist- und formgerechter Antrag gestellt ist.

(8) Gibt eine Gemeindebehörde einem Eintragungsantrag nicht statt oder streicht sie eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Person, hat sie den Betroffenen unverzüglich zu unterrichten. Gegen die Entscheidung kann der Betroffene Einspruch einlegen; er ist auf diese Möglichkeit hinzuweisen. § 22 Abs. 2, 4 und 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 22 Abs. 4 Satz 1) und für die Beschwerdeentscheidung (§ 22 Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn der Einspruch vor dem zwölften Tage vor der Wahl eingelegt worden ist.

(9) Die Gemeindebehörde hat spätestens am Stichtag den Leiter der sich in ihrem Gemeindebezirk befindenden Justizvollzugsanstalt oder der entsprechenden Einrichtung auf Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe c und die Notwendigkeit der Unterrichtung der betroffenen Personen hinzuweisen, wenn nach dem Landesmelderecht eine Meldepflicht für die sich in den Einrichtungen aufhaltenden Personen nicht besteht.

§ 17 Zuständigkeiten für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
Autoridades competentes para la inscripción en el censo electoral

(1) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des

1.§ 16 Abs. 1 Nr. 1 die für die Wohnung zuständige Gemeinde, bei mehreren Wohnungen die für die Hauptwohnung zuständige Gemeinde,

2.§ 16 Abs. 1 Nr. 2 die für den Sitz des Reeders zuständige Gemeinde,

3.§ 16 Abs. 1 Nr. 3 die für den Heimatort des Binnenschiffes zuständige Gemeinde,

4.§ 16 Abs. 1 Nr. 4 die für die Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung zuständige Gemeinde.

(2) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des

1. (weggefallen)

2.§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b die Gemeinde, in der der Wahlberechtigte seinen Antrag stellt,

3.§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c die für die Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung zuständige Gemeinde,

4. (weggefallen)

5.§ 16 Abs. 2 Nr. 2 die Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland, in der der Wahlberechtigte nach seiner Erklärung vor seinem Fortzug aus dem Wahlgebiet zuletzt gemeldet war. Satz 1 gilt auch für Seeleute, die seit dem Fortzug aus dem Wahlgebiet auf Schiffen unter fremder Flagge fahren, sowie für Binnenschiffer, deren Schiff nicht in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist, und für die Angehörigen ihres Hausstandes. Für Seeleute, die von einem Seeschiff, das die Bundesflagge zu führen berechtigt war, abgemustert haben und im Anschluss daran auf einem Seeschiff unter fremder Flagge fahren, ist die Gemeinde am Sitz des ehemaligen Reeders zuständig. Für Binnenschiffer, die zuletzt auf einem in der Bundesrepublik Deutschland im Schiffsregister eingetragenen Binnenschiff gefahren sind und im Anschluss daran auf einem Binnenschiff, das nicht im Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist, oder auf einem Seeschiff unter fremder Flagge fahren, ist die Gemeinde nach Absatz 1 Nr. 3 zuständig.

(3) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des

1.§ 16 Abs. 3 die Gemeinde des Zuzugsortes,

2.§ 16 Abs. 4 die Gemeinde, in der sich der Wahlberechtigte für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die Hauptwohnung, gemeldet hat,

3.§ 16 Abs. 5 die Gemeinde der neuen Hauptwohnung.

§ 18 Verfahren für die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag
Procedimiento para la inscripción en el censo electoral a instancias del interesado

(1) Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis spätestens zum 21. Tage vor der Wahl bei der zuständigen Gemeindebehörde zu stellen. Er muss Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt und die genaue Anschrift des Wahlberechtigten enthalten. Sammelanträge sind, abgesehen von den Fällen des Absatzes 5, zulässig; sie müssen von allen aufgeführten Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich hierbei der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 57 gilt entsprechend.

(2) (weggefallen)

(3) In den Fällen des § 16 Abs. 2 Nr. 1 sind Wahlberechtigte bis zum Wahltage im Wählerverzeichnis der Gemeinde zu führen, die nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 zuständig ist, auch wenn nach dem Stichtag eine Neuanmeldung bei einer anderen Meldebehörde des Wahlgebietes erfolgt. Sie sind bei der Anmeldung entsprechend zu unterrichten.

(4) (weggefallen)

(5) In den Fällen des § 16 Abs. 2 Nr. 2 hat der Wahlberechtigte in seinem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis nach Anlage 2 der Gemeindebehörde gegenüber durch Abgabe einer Versicherung an Eides statt den Nachweis für seine Wahlberechtigung zu erbringen und zu erklären, dass er in keiner anderen Gemeinde im Wahlgebiet einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt hat. Vordrucke und Merkblätter für die Antragstellung können bei den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der

Bundesrepublik Deutschland im Ausland, beim Bundeswahlleiter und bei den Kreiswahlleitern angefordert werden. Bestehen Zweifel an Angaben des Antragstellers, hat die Gemeindebehörde den Sachverhalt unverzüglich aufzuklären. Der Bundeswahlleiter ist von der Eintragung in das Wählerverzeichnis unverzüglich durch Übersendung der Zweitausfertigung des Antrages nach Anlage 2, auf der die Eintragung in das Wählerverzeichnis vermerkt ist, zu unterrichten. Erhält der Bundeswahlleiter Mitteilungen verschiedener Gemeindebehörden über die Eintragung desselben Antragstellers in das Wählerverzeichnis, so hat er diejenige Gemeindebehörde, deren Unterrichtung über die Eintragung in das Wählerverzeichnis nach der ersten Mitteilung eingeht, unverzüglich von der Eintragung des Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis der zuerst mitteilenden Gemeinde zu benachrichtigen. Die vom Bundeswahlleiter benachrichtigte Gemeindebehörde hat den Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis zu streichen und ihn davon zu unterrichten.

(6) Kehrt ein Wahlberechtigter nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 des Gesetzes in das Wahlgebiet zurück und meldet er sich dort nach dem Stichtag, aber vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis für eine Wohnung an, so wird er nur auf Antrag und nur dann in das Wählerverzeichnis der Gemeinde des Zuzugsortes eingetragen, wenn er noch keinen Antrag nach Absatz 5 gestellt und dies der Gemeindebehörde versichert hat. Der Wahlberechtigte ist bei der Anmeldung darüber zu belehren. Die Gemeindebehörde hat den Bundeswahlleiter unverzüglich von der Eintragung eines solchen Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis zu unterrichten. Absatz 5 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 19 Benachrichtigung der Wahlberechtigten
Notificación a los electores

(1) Spätestens am Tage vor der Bereithaltung des Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme benachrichtigt die Gemeindebehörde jeden Wahlberechtigten, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, nach dem Muster der Anlage 3. Die Mitteilung soll enthalten

1. den Familiennamen, den Vornamen und die Wohnung des Wahlberechtigten,

2. die Angabe des Wahlraumes,

3. die Angabe der Wahlzeit,

4. die Nummer, unter der der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen ist,

5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur Wahl mitzubringen und den Personalausweis oder Reisepass bereitzuhalten,

6. die Belehrung, dass die Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein nicht ersetzt und daher nicht zur Wahl in einem anderen als dem angegebenen Wahlraum berechtigt,

7. die Belehrung über die Beantragung eines Wahlscheines und über die Übersendung von Briefwahlunterlagen. 2Sie muss mindestens Hinweise darüber enthalten,

a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen ist, wenn der Wahlberechtigte in einem anderen Wahlraum seines Wahlkreises oder durch Briefwahl wählen will,

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahlschein erteilt wird (§ 25 Abs. 1 und § 27 Abs. 4 Satz 3) und

c) dass der Wahlschein von einem anderen als dem Wahlberechtigten nur beantragt werden kann, wenn die Berechtigung zur Antragstellung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3).

Erfolgt die Eintragung eines Wahlberechtigten, der nach § 16 Abs. 2 bis 5 auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, nach der Versendung der Benachrichtigungen gemäß Satz 1, hat dessen Benachrichtigung unverzüglich nach der Eintragung zu erfolgen.

(2) Auf die Rückseite der Benachrichtigung nach Absatz 1 ist ein Vordruck für einen Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines nach dem Muster der Anlage 4 aufzudrucken.

(3) Auf Wahlberechtigte, die nach § 16 Abs. 2 nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung.

(4) Stellt ein Landeswahlleiter fest, dass die fristgemäße Benachrichtigung nach Absatz 1 infolge von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt gestört ist, bestimmt er, dass sie in dem betroffenen Gebiet später erfolgen kann. Wenn zu besorgen ist, dass die Benachrichtigung nach Absatz 1 nicht bis zum sechsten Tag vor der Wahl erfolgen kann, bestimmt er, dass die Wahlberechtigten in anderer geeigneter Weise über die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, 3, 5 bis 7 zu benachrichtigen sind. Der Landeswahlleiter kann hierzu im Einzelfall ergänzende Regelungen zur Anpassung an die besonderen Verhältnisse treffen. Er macht die Gründe für die Störung, das betroffene Gebiet, die von ihm für den Einzelfall getroffenen Regelungen und die Art der Benachrichtigung in geeigneter Weise bekannt.

§ 20 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
Anuncio de la publicación de las listas del censo electoral y la expedición de las tarjetas electorales

(1) Die Gemeindebehörde macht spätestens am 24. Tage vor der Wahl nach dem Muster der Anlage 5 öffentlich bekannt,

1. von wem, zu welchen Zwecken und unter welchen Voraussetzungen, wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das Wählerverzeichnis eingesehen werden kann,

2. dass bei der Gemeindebehörde innerhalb der Einsichtsfrist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis eingelegt werden kann (§ 22),

3. dass Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis spätestens zum 21. Tage vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung zugeht und dass Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, keine Wahlbenachrichtigung erhalten,

4. wo, in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Wahlscheine beantragt werden können (§§ 25ff.),

5. wie durch Briefwahl gewählt wird (§ 66).

(2) Die diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland machen unverzüglich nach der Bestimmung des Wahltages öffentlich bekannt,

1. unter welchen Voraussetzungen im Ausland lebende Deutsche an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen können,

2. wo, in welcher Form und in welcher Frist dieser Personenkreis, um an der Wahl teilnehmen zu können, die Eintragung in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland beantragen muss.

Die Bekanntmachung ist nach Anlage 6 von den Botschaften durch mindestens eine deutschsprachige Anzeige in jeweils einer überregionalen Tages- und Wochenzeitung, von den Berufskonsulaten durch mindestens eine deutschsprachige Anzeige in einer regionalen Tageszeitung vorzunehmen. 3Kann die Bekanntmachung in begründeten Einzelfällen nicht erfolgen oder erscheint sie nicht gerechtfertigt, so ist sie durch Aushang im Dienstgebäude der Vertretung und, soweit möglich, durch Unterrichtung der einzelnen bekannten Betroffenen vorzunehmen.

§ 21 Einsicht in das Wählerverzeichnis
Consulta del censo electoral

(1) Die Gemeindebehörde hält das Wählerverzeichnis mindestens am Ort der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit. Wird das Wählerverzeichnis im automatisierten Verfahren geführt, kann die Einsichtnahme durch ein Datensichtgerät ermöglicht werden. Es ist sicherzustellen, dass Bemerkungen (§ 23 Abs. 3) im Klartext gelesen werden können. Das Datensichtgerät darf nur von einem Bediensteten der Gemeindebehörde bedient werden.

(2) (weggefallen)

(3) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

§ 22 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und Beschwerde
Recurso y reclamación contra el censo electoral

(1) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist Einspruch einlegen.

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde einzulegen. 2Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Einspruchsführer die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

(3) Will die Gemeindebehörde einem Einspruch gegen die Eintragung eines anderen stattgeben, so hat sie diesem vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Die Gemeindebehörde hat ihre Entscheidung dem Einspruchsführer und dem Betroffenen spätestens am zehnten Tage vor der Wahl zuzustellen und auf den zulässigen Rechtsbehelf hinzuweisen. Einem auf Eintragung gerichteten Einspruch gibt die Gemeindebehörde in der Weise statt, dass sie dem Wahlberechtigten nach Berichtigung des Wählerverzeichnisses die Wahlbenachrichtigung zugehen lässt. In den Fällen des § 18 Abs. 5 und 6 unterrichtet sie unverzüglich die zuständigen Stellen von der Eintragung.

(5) Gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde kann binnen zwei Tagen nach Zustellung Beschwerde an den Kreiswahlleiter eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde einzulegen. Die Gemeindebehörde legt die Beschwerde mit den Vorgängen unverzüglich dem Kreiswahlleiter vor. Der Kreiswahlleiter hat über die Beschwerde spätestens am vierten Tage vor der Wahl zu entscheiden; Absatz 3 gilt entsprechend. Die Beschwerdeentscheidung ist den Beteiligten und der Gemeindebehörde bekannt zu geben. Sie ist vorbehaltlich anderer Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren endgültig.

§ 23 Berichtigung des Wählerverzeichnisses
Rectificación del censo electoral

(1) Nach Beginn der Einsichtsfrist ist die Eintragung oder Streichung von Personen sowie die Vornahme sonstiger Änderungen im Wählerverzeichnis nur noch auf rechtzeitigen Einspruch zulässig. § 16 Abs. 2 bis 5, § 18 Abs. 5 Satz 6 und Abs. 6 Satz 4 sowie § 30 bleiben unberührt.

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig oder unvollständig, so kann die Gemeindebehörde den Mangel auch von Amts wegen beheben. Dies gilt nicht für Mängel, die Gegenstand eines Einspruchsverfahrens sind. § 22 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 22 Abs. 4 Satz 1) und für die Beschwerdeentscheidung

(§ 22 Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn die von Amts wegen behebbaren Mängel vor dem zwölften Tage vor der Wahl bekannt werden.

(3) Alle vom Beginn der Einsichtsfrist ab vorgenommenen Änderungen sind in der Spalte “Bemerkungen” zu erläutern und mit Datum und Unterschrift des vollziehenden Bediensteten, im automatisierten Verfahren anstelle der Unterschrift mit einem Hinweis auf den verantwortlichen Bediensteten zu versehen.

(4) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses können Änderungen mit Ausnahme der in Absatz 2 und in § 53 Abs. 2 vorgesehenen Berichtigungen nicht mehr vorgenommen werden.

§ 24 Abschluss des Wählerverzeichnisses
Cierre del censo electoral

(1) Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tage vor der Wahl, jedoch nicht früher als am dritten Tage vor der Wahl, durch die Gemeindebehörde abzuschließen. Sie stellt dabei die Zahl der Wahlberechtigten des Wahlbezirks fest. Der Abschluss wird nach dem Muster der Anlage 8 beurkundet. Bei automatisierter Führung des Wählerverzeichnisses ist vor der Beurkundung ein Ausdruck herzustellen.

(2) Wählerverzeichnisse mehrerer Gemeinden oder Gemeindeteile, die zu einem Wahlbezirk vereinigt sind, werden von der Gemeindebehörde, die die Wahl im Wahlbezirk durchführt, zum Wählerverzeichnis des Wahlbezirks verbunden und abgeschlossen.

Dritter Unterabschnitt
Wahlschein
Tarjetas electorales

§ 25 Voraussetzungen für die Erteilung von Wahlscheinen
Requisitos para la expedición de tarjetas electorales

(1) Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein,

1. wenn er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhält,

2. wenn er seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt und nicht in das Wählerverzeichnis des neuen Wahlbezirks eingetragen worden ist,

3. wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.

(2) Ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein,

1. wenn er nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 oder die Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 versäumt hat,

2. wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Fristen nach § 18 Abs. 1 oder § 22 Abs. 1 entstanden ist,

3. wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

§ 26 Zuständige Behörde, Form des Wahlscheines
Autoridades competentes y forma de las tarjetas electorales

Der Wahlschein wird nach dem Muster der Anlage 9 von der Gemeindebehörde erteilt, in deren Wählerverzeichnis der Wahlberechtigte eingetragen ist oder hätte eingetragen werden müssen.

§ 27 Wahlscheinanträge
Solicititudes de las tarjetas electorales

(1) Die Erteilung eines Wahlscheines kann schriftlich oder mündlich bei der Gemeindebehörde beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 57 gilt entsprechend.

(2) Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines glaubhaft machen.

(3) Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

(4) Wahlscheine können bis zum zweiten Tage vor der Wahl, 18.00 Uhr, beantragt werden. In den Fällen des § 25 Abs. 2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann; in diesem Fall hat die Gemeindebehörde vor Erteilung des Wahlscheines den für den Wahlbezirk des Wahlberechtigten zuständigen Wahlvorsteher davon zu unterrichten, der entsprechend § 53 Abs. 2 zu verfahren hat.

(5) Bei Wahlberechtigten, die nach § 16 Abs. 2 nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden, gilt der Antrag zugleich als Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines, es sei denn, der Wahlberechtigte will vor dem Wahlvorstand seines Wahlbezirks wählen.

(6) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind unbearbeitet mit den dazugehörigen Briefumschlägen zu verpacken und vorläufig aufzubewahren.

§ 28 Erteilung von Wahlscheinen
Distribución de las tarjetas electorales

(1) Wahlscheine dürfen nicht vor Zulassung der Wahlvorschläge durch den Landes- und den Kreiswahlausschuss nach den §§ 26 und 28 des Gesetzes erteilt werden.

(2) Der Wahlschein muss von dem mit der Erteilung beauftragten Bediensteten eigenhändig unterschrieben werden und mit dem Dienstsiegel versehen sein. Das Dienstsiegel kann eingedruckt werden. Wird der Wahlschein mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellt, kann abweichend von Satz 1 die Unterschrift fehlen; stattdessen kann der Name des beauftragten Bediensteten eingedruckt werden.

(3) Ergibt sich aus dem Antrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so sind dem Wahlschein beizufügen

1. ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises nach dem Muster der Anlage 26,

2. ein amtlicher Wahlumschlag nach dem Muster der Anlage 10,

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag nach dem Muster der Anlage 11, auf dem die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Gemeindebehörde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind, und

4. ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem Muster der Anlage 12.

Der Wahlberechtigte kann die Briefwahlunterlagen nachträglich bis spätestens am Wahltage, 15.00 Uhr, anfordern.

(4) An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 27 Abs. 4 Satz 3)

ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden können. § 27 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Postsendungen sind von der Gemeindebehörde freizumachen. Die Gemeindebehörde übersendet dem Wahlberechtigten Wahlschein und Briefwahlunterlagen mit Luftpost, wenn sich aus seinem Antrag ergibt, dass er aus einem außereuropäischen Gebiet wählen will, oder wenn dieses sonst geboten erscheint.

(5) Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeindebehörde ab, so soll ihm Gelegenheit gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. Es ist sicherzustellen, dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt werden kann.

(6) Über die erteilten Wahlscheine führt die Gemeindebehörde ein Wahlscheinverzeichnis, in dem die Fälle des § 25 Abs. 1 und die des Absatzes 2 getrennt gehalten werden. Das Verzeichnis wird als Liste oder als Sammlung der Durchschriften der Wahlscheine geführt. Auf dem Wahlschein wird die Nummer eingetragen, unter der er im Wahlscheinverzeichnis vermerkt ist, sowie die Nummer, unter der der Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis geführt wird, oder der vorgesehene Wahlbezirk. Bei nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten wird auf dem Wahlschein vermerkt, dass dessen Erteilung nach § 25 Abs. 2 erfolgt ist und welchem Wahlbezirk der Wahlberechtigte zugeordnet wird. Werden nach Abschluss des Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine erteilt, so ist darüber ein besonderes Verzeichnis nach den Sätzen 1 bis 3 zu führen.

(7) Wird einem Wahlberechtigten ein Wahlschein nach § 25 Abs. 2 erteilt, hat die Gemeindebehörde bei Wahlberechtigten nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzes unverzüglich den Bundeswahlleiter zu unterrichten. § 18 Abs. 5 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.

(8) Wird ein Wahlberechtigter, der bereits einen Wahlschein erhalten hat, im Wählerverzeichnis gestrichen, so ist der Wahlschein für ungültig zu erklären. Die Gemeindebehörde führt darüber ein Verzeichnis, in das der Name des Wahlberechtigten und die Nummer des für ungültig erklärten Wahlscheines aufzunehmen ist; sie hat das Wahlscheinverzeichnis zu berichtigen. Die Gemeindebehörde verständigt den Kreiswahlleiter, der alle Wahlvorstände des Wahlkreises über die Ungültigkeit des Wahlscheines unterrichtet. In den Fällen des § 39 Abs. 5 des Gesetzes ist im Wahlscheinverzeichnis und im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter Form zu vermerken, dass die Stimme eines Wählers, der bereits an der Briefwahl teilgenommen hat, nicht ungültig ist.

(9) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses übersendet die Gemeindebehörde, sofern sie nicht selbst oder eine andere Gemeindebehörde oder die Verwaltungsbehörde des Kreises für die Durchführung der Briefwahl zuständig ist, dem Kreiswahlleiter auf schnellstem Wege das Verzeichnis nach Absatz 8 Satz 2 und Nachträge zu diesem Verzeichnis oder eine Mitteilung, dass Wahlscheine nicht für ungültig erklärt worden sind, so rechtzeitig, dass sie dort spätestens am Wahltage vormittags eingehen. 2Ist eine andere Gemeindebehörde nach § 7 Nr. 3 mit der Durchführung der Briefwahl betraut worden oder ist die Verwaltungsbehörde des Kreises zuständig, hat die Gemeindebehörde das Verzeichnis und die Nachträge oder eine Mitteilung entsprechend Satz 1 der beauftragten Gemeindebehörde oder der Verwaltungsbehörde des Kreises zu übersenden.

(10) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden; Absatz 8 Satz 1 bis 3 und Absatz 9 gelten entsprechend.

§ 29 Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte Personengruppen
Expedición de tarjetas electorales a categorías determinadas

(1) Die Gemeindebehörde fordert spätestens am achten Tage vor der Wahl von den Leitungen

1. der Einrichtungen, für die ein Sonderwahlbezirk gebildet worden ist (§ 13),

2. der kleineren Krankenhäuser, kleineren Alten- oder Pflegeheime, Klöster, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten, für deren Wahlberechtigte die Stimmabgabe vor einem beweglichen Wahlvorstand vorgesehen ist (§§ 8 und 62 bis 64), ein Verzeichnis der wahlberechtigten Personen aus der Gemeinde, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind und die am Wahltage in der Einrichtung wählen wollen. Sie erteilt diesen Wahlberechtigten Wahlscheine und übersendet sie der Leitung der Einrichtung zur unverzüglichen Aushändigung.

(2) Die Gemeindebehörde veranlasst die Leitungen der Einrichtungen spätestens am 13. Tage vor der Wahl,

1. die wahlberechtigten Personen, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind und die in Wählerverzeichnissen anderer Gemeinden des gleichen Wahlkreises geführt werden, zu verständigen, dass sie in der Einrichtung nur wählen können, wenn sie sich von der Gemeindebehörde, in deren Wählerverzeichnis sie eingetragen sind, einen Wahlschein beschafft haben,

2. die wahlberechtigten Personen, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind und die in Wählerverzeichnissen von Gemeinden anderer Wahlkreise geführt werden, zu verständigen, dass sie ihr Wahlrecht nur durch Briefwahl in ihrem Heimatwahlkreis ausüben können und sich dafür von der Gemeindebehörde, in deren Wählerverzeichnis sie eingetragen sind, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beschaffen müssen.

(3) Die Gemeindebehörde ersucht spätestens am 13. Tage vor der Wahl die Truppenteile, die ihren Standort im Gemeindegebiet haben, die wahlberechtigten Soldaten entsprechend Absatz 2 Nr. 2 zu verständigen.

§ 30 Vermerk im Wählerverzeichnis
Anotación en el censo electoral

Hat ein Wahlberechtigter einen Wahlschein erhalten, so wird im Wählerverzeichnis in der Spalte für den Vermerk über die Stimmabgabe "Wahlschein" oder "W" eingetragen.

§ 31 Einspruch gegen die Versagung des Wahlscheines und Beschwerde
Recurso contra la negativa a expedir tajeta electoral

Wird die Erteilung eines Wahlscheines versagt, so kann dagegen Einspruch eingelegt werden. § 22 Abs. 2, 4 und 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 22 Abs. 4 Satz 1) und für die Beschwerdeentscheidung (§ 22 Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn der Einspruch vor dem zwölften Tage vor der Wahl eingelegt worden ist.

Vierter Unterabschnitt
Wahlvorschläge, Stimmzettel
Listas de candidaturas, papeleta de voto

§ 32 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Requerimiento para la presentación de listas electorales

(1) Nachdem der Wahltag bestimmt ist, fordern die Kreis- und Landeswahlleiter durch öffentliche Bekanntmachung zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf und weisen auf die Voraussetzungen für die Einreichung von Wahlvorschlägen nach § 18 Abs.

2 des Gesetzes hin. Sie geben bekannt, wo und bis zu welchem Zeitpunkt die Anzeigen nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes und die Wahlvorschläge eingereicht werden müssen und weisen auf die Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge, auf die Zahl der in bestimmten Fällen beizubringenden Unterschriften und Nachweise sowie auf die mit den Wahlvorschlägen vorzulegenden Erklärungen, Niederschriften und Versicherungen hin (§§ 20, 21 und 27 des Gesetzes).

(2) Der Bundeswahlleiter macht öffentlich bekannt, wo und in welcher Frist und Form der Ausschluss von der Listenverbindung einer Partei erklärt werden kann (§§ 7 und 29 des Gesetzes).

§ 33 Beteiligungsanzeige der in § 18 Abs. 2 des Gesetzes genannten Parteien, Beseitigung von Mängeln
Anuncio de participación de los partidos mencionados en el parágrafo 18.2 de la Ley electoral, subsanación de defectos

(1) Der Bundeswahlleiter vermerkt auf jeder Beteiligungsanzeige den Tag des Eingangs und prüft unverzüglich, ob sie den Anforderungen des Gesetzes entspricht. Stellt er Mängel fest, so benachrichtigt er sofort den Vorstand der Partei und fordert ihn auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen; dabei hat er darauf hinzuweisen, dass nach der Bestimmung des § 18 Abs. 3 des Gesetzes

1. nach Ablauf der Anzeigefrist nur noch Mängel an sich gültiger Anzeigen behoben werden können,

2. nach der Entscheidung über die Feststellung der Parteieigenschaft jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen ist,

3. der Vorstand der Partei gegen Verfügungen des Bundeswahlleiters den Bundeswahlausschuss anrufen kann.

(2) Der Bundeswahlleiter lädt die Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben, zu der Sitzung, in der über ihre Anerkennung als Partei für die Wahl entschieden wird. Er legt dem Bundeswahlausschuss die Beteiligungsanzeigen vor und berichtet über das Ergebnis der Vorprüfung. Vor der Beschlussfassung ist den erschienenen Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Im Anschluss an die Feststellung nach § 18 Abs. 4 des Gesetzes gibt der Bundeswahlleiter die Entscheidung des Bundeswahlausschusses in der Sitzung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt. Die Entscheidung ist vom Bundeswahlleiter öffentlich bekanntzumachen.

§ 34 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
Contenido y formato de las listas electorales en las circunscripciones

(1) Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 eingereicht werden. Er muss enthalten

1. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,

2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 des Gesetzes) deren Kennwort.

Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und

handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt.

(3) Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13) selbst zu leisten. 2Absatz 4 Nr. 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

1. Der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei; er kann sie auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Landesmeldegesetzen eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 des Gesetzes zu bestätigen. Der Kreiswahlleiter hat die in den Sätzen 2 bis 4 genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 2 und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt.

4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen ungültig.

5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

(5) Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen

1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat,

2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist,

3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien

a) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 des Gesetzes auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 des Gesetzes vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden;

b) eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Gesetzes entsprechend,

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Absatz 4 Nr. 2 und 3), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.

(6) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz 4 Nr. 3) und die Bescheinigung der Wählbarkeit (Absatz 5 Nr. 2) sind kostenfrei zu erteilen. Die Gemeindebehörde darf für jeden Wahlberechtigten die Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu einem Kreiswahlvorschlag erteilen; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.

(7) 1Für Bewerber, die keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehaben und sich dort auch sonst nicht gewöhnlich aufhalten, erteilt das Bundesministerium des Innern die Wählbarkeitsbescheinigung. Sie ist bei der für den Wohnort des Bewerbers zuständigen diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, sonst unmittelbar unter Vorlage der erforderlichen Nachweise zu beantragen.

§ 35 Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge durch den Kreiswahlleiter
Examen previo de las candidaturas de la crircunscripción por el Comisario de circunscripción electoral

(1) Der Kreiswahlleiter vermerkt auf jedem Kreiswahlvorschlag den Tag und bei Eingang am letzten Tage der Einreichungsfrist außerdem die Uhrzeit des Eingangs und übersendet dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter sofort je einen Abdruck. Er prüft unverzüglich, ob die eingegangenen Kreiswahlvorschläge vollständig sind und den Erfordernissen des Gesetzes und dieser Verordnung entsprechen.

(2) Wird dem Kreiswahlleiter bekannt, dass ein im Wahlkreis vorgeschlagener Bewerber noch in einem anderen Wahlkreis vorgeschlagen worden ist, so weist er den Kreiswahlleiter des anderen Wahlkreises auf die Doppelbewerbung hin.

(3) Wird der Kreiswahlausschuss nach § 25 Abs. 4 des Gesetzes im Mängelbeseitigungsverfahren angerufen, hat er über die Verfügung des Kreiswahlleiters unverzüglich zu entscheiden. Der Vertrauensperson des betroffenen Kreiswahlvorschlages ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§ 36 Zulassung der Kreiswahlvorschläge
Admisión de las listas electorales

(1) Der Kreiswahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge zu der Sitzung, in der über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entschieden wird.

(2) Der Kreiswahlleiter legt dem Kreiswahlausschuss alle eingegangenen Kreiswahlvorschläge vor und berichtet ihm über das Ergebnis der Vorprüfung.

(3) Der Kreiswahlausschuss prüft die eingegangenen Kreiswahlvorschläge und beschließt über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Vor einer Entscheidung ist der erschienenen Vertrauensperson des betroffenen Wahlvorschlages Gelegenheit zur Äußerung zu geben.(4) Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den in § 34 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben fest. Fehlt bei einem anderen Kreiswahlvorschlag (§ 20 Abs. 3 des Gesetzes) das Kennwort oder erweckt es den Eindruck, als handele es sich um den Kreiswahlvorschlag einer Partei, oder ist es geeignet, Verwechslungen mit einem früher eingereichten Kreiswahlvorschlag hervorzurufen, so erhält der Kreiswahlvorschlag den Namen des Bewerbers als Kennwort. Geben die Namen mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnungen zu Verwechslungen Anlass, so fügt der Kreiswahlausschuss einem der Wahlvorschläge eine Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der Landeswahlausschuss eine Unterscheidungsregelung getroffen (§ 41 Abs. 1), so gilt diese.

(5) Der Kreiswahlleiter gibt die Entscheidung des Kreiswahlausschusses in der Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf hin.

(6) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 5 Abs. 7) ist nach dem Muster der Anlage 19 zu fertigen; der Niederschrift sind die zugelassenen Kreiswahlvorschläge in der vom Kreiswahlausschuss festgestellten Fassung beizufügen.

(7) Nach der Sitzung übersendet der Kreiswahlleiter dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter sofort eine Ausfertigung der Niederschrift und weist dabei auf ihm bedenklich erscheinende Entscheidungen besonders hin. Er ist verpflichtet, dem Bundeswahlleiter auf Verlangen alle für die Einlegung einer Beschwerde erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Feststellungen zu treffen.

§ 37 Beschwerde gegen Entscheidungen des Kreiswahlausschusses
Recursos contra las resoluciones de la Juntas de circunscripción

(1) Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Kreiswahlausschusses ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreiswahlleiter einzulegen. Der Bundeswahlleiter hat seine Beschwerde beim Kreiswahlleiter, der Kreiswahlleiter seine Beschwerde beim Landeswahlleiter einzulegen. 3Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Telefax als gewahrt. Der Kreiswahlleiter unterrichtet unverzüglich den Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter über die eingegangenen Beschwerden und verfährt nach den Anweisungen des Landeswahlleiters.

(2) Der Landeswahlleiter lädt die Beschwerdeführer, die Vertrauenspersonen der betroffenen Kreiswahlvorschläge sowie den Kreiswahlleiter und den Bundeswahlleiter zu der Sitzung, in der über die Beschwerde entschieden wird. Den Vertrauenspersonen ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Der Landeswahlleiter gibt die Entscheidung des Landeswahlausschusses in der Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und teilt sie sofort dem Bundeswahlleiter mit.

§ 38 Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge
Proclamación de las listas electorales de circunscripción electoral

Der Kreiswahlleiter ordnet die zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter fortlaufenden Nummern in der Reihenfolge, wie sie durch § 30 Abs. 3 Satz 3 und 4 des Gesetzes und durch die Mitteilung des Landeswahlleiters nach § 43 Abs. 2 bestimmt ist, und macht sie öffentlich

bekannt. Parteien, für die eine Landesliste, aber kein Kreiswahlvorschlag zugelassen ist, erhalten eine Leernummer. Die Bekanntmachung enthält für jeden Kreiswahlvorschlag die in § 34 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums ist jedoch jeweils nur das Geburtsjahr des Bewerbers anzugeben. Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Kreiswahlleiter nach, dass für ihn im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Landesmeldegesetzen eingetragen ist, ist anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Der Kreiswahlleiter unterrichtet unverzüglich den Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter über die Erreichbarkeitsanschrift.

§ 39 Inhalt und Form der Landeslisten
Contenido y forma de las listas del Land

(1) Die Landesliste soll nach dem Muster der Anlage 20 eingereicht werden. Sie muss enthalten

1. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese,

2. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber.

Sie soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

(2) Die Landesliste ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so ist die Landesliste von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen, dem Satz 1 gemäß zu unterzeichnen. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände beibringt.

(3) Die in § 18 Abs. 2 des Gesetzes genannten Parteien haben die nach § 27 Abs. 1 des Gesetzes weiter erforderliche Zahl von Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 21 zu erbringen. Der Landeswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei; er kann sie auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung ist der Name der Partei, die die Landesliste einreichen will, und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese anzugeben. Der Landeswahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. Im Übrigen gilt § 34 Abs. 4 entsprechend.

(4) Der Landesliste sind beizufügen

1. die Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerber, dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und für keine andere Landesliste ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben haben, sowie eine Versicherung an Eides statt gegenüber dem Landeswahlleiter, dass sie nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei sind, jeweils nach dem Muster der Anlage 22; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Gesetzes entsprechend,

2. die Bescheinigungen der zuständigen Gemeindebehörden nach dem Muster der Anlage 16, dass die vorgeschlagenen Bewerber wählbar sind,

3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerber aufgestellt worden sind und ihre Reihenfolge auf

der Landesliste festgelegt worden ist, mit der nach § 21 Abs. 6 des Gesetzes vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt, wobei sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken hat, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber in der Landesliste in geheimer Abstimmung erfolgt ist; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 23 gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 24 abgegeben werden,

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Absatz 3 Satz 5), sofern es sich um einen Landeswahlvorschlag einer in § 18 Abs. 2 des Gesetzes genannten Partei handelt.

(5) § 34 Abs. 6 und 7 gilt entsprechend.

§ 40 Vorprüfung der Landeslisten durch den Landeswahlleiter
Examen previo de las listas regionales (Land) por los Comisarios electorales regionales

(1) Der Landeswahlleiter vermerkt auf jeder Landesliste den Tag und bei Eingang am letzten Tage der Einreichungsfrist außerdem die Uhrzeit des Eingangs und übersendet dem Bundeswahlleiter sofort einen Abdruck. Er prüft unverzüglich, ob die eingegangenen Landeslisten vollständig sind und den Erfordernissen des Gesetzes und dieser Verordnung entsprechen.

(2) Wird dem Landeswahlleiter bekannt, dass ein auf einer Landesliste vorgeschlagener Bewerber noch auf einer anderen Landesliste vorgeschlagen worden ist, so weist er den Landeswahlleiter des anderen Landes auf die Doppelbewerbung hin.

(3) Wird der Landeswahlausschuss nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes in Verbindung mit § 25 Abs. 4 des Gesetzes im Mängelbeseitigungsverfahren angerufen, gilt § 35 Abs. 3 entsprechend.

§ 41 Zulassung der Landeslisten
Admisión de las listas regionales (Land)

(1) Der Landeswahlausschuss stellt die zugelassenen Landeslisten mit den in § 39 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben und mit der maßgebenden Bewerberreihenfolge fest. Geben die Namen mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnungen im Land zu Verwechslungen Anlass, so fügt der Landeswahlausschuss einer Landesliste oder mehreren Landeslisten eine Unterscheidungsbezeichnung bei.

(2) Für das Verfahren gilt § 36 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 entsprechend. Der Niederschrift sind die zugelassenen Landeslisten in der vom Landeswahlausschuss festgestellten Fassung beizufügen. Der Landeswahlleiter übersendet dem Bundeswahlleiter sofort eine Ausfertigung der Niederschrift und ihrer Anlagen.

§ 42 Beschwerde gegen Entscheidungen des Landeswahlausschusses
Recurso contra las resoluciones de las Juntas electorales regionales (Land)

(1) Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Landeswahlausschusses ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landeswahlleiter einzulegen; der Landeswahlleiter hat seine Beschwerde beim Bundeswahlleiter einzulegen. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Telefax als gewahrt. 3er Landeswahlleiter unterrichtet unverzüglich den Bundeswahlleiter über die eingegangenen Beschwerden und verfährt nach dessen Anweisungen.

(2) Der Bundeswahlleiter lädt die Beschwerdeführer, die Vertrauenspersonen der betroffenen Landeslisten und den Landeswahlleiter zu der Sitzung, in der über die Beschwerde entschieden wird. 2Den Vertrauenspersonen ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Der Bundeswahlleiter gibt die Entscheidung des Bundeswahlausschusses in der Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt.

§ 43 Bekanntmachung der Landeslisten
Proclamación de las listas regionales (Land)

(1) Der Landeswahlleiter ordnet die endgültig zugelassenen Landeslisten in der durch § 30 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Gesetzes bestimmten Reihenfolge unter fortlaufenden Nummern und macht sie öffentlich bekannt. Die Bekanntmachung enthält für jede Landesliste die in § 39 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums ist jedoch nur das Geburtsjahr der Bewerber anzugeben. Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Landeswahlleiter nach, dass für ihn im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Landesmeldegesetzen eingetragen ist, ist anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Der Landeswahlleiter unterrichtet unverzüglich den Bundeswahlleiter über die Erreichbarkeitsanschrift.

(2) Gleichzeitig teilt der Landeswahlleiter den Kreiswahlleitern die Reihenfolge der Landeslisten und die Familiennamen und Vornamen der ersten fünf Bewerber mit.

§ 44 Ausschluss von der Verbindung von Landeslisten
Exclusión de la coalición entre listas regionales (Land)

(1) Die Erklärung darüber, dass eine oder mehrere beteiligte Landeslisten derselben Partei von der Listenverbindung ausgeschlossen sein sollen (§ 7 des Gesetzes), ist gemeinsam von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson der jeweiligen Landesliste gegenüber dem Bundeswahlleiter nach dem Muster der Anlage 25 abzugeben. Sie muss die Bezeichnung der nicht zu verbindenden Landeslisten unter Angabe der Partei (Kurzbezeichnung) und des Landes enthalten und von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson der jeweiligen Landesliste persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

(2) Der Bundeswahlleiter vermerkt auf der Ausschlusserklärung den Tag und bei Eingang am letzten Tage der Erklärungsfrist außerdem die Uhrzeit des Eingangs. Er prüft unverzüglich die eingegangenen Ausschlusserklärungen. Hat der Bundeswahlleiter Bedenken gegen eine Ausschlusserklärung, so teilt er dies der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson der Landesliste mit. 4§ 25 des Gesetzes gilt entsprechend.

(3) Lehnt der Bundeswahlausschuss einen Ausschluss von der Listenverbindung ab, so teilt der Bundeswahlleiter dies der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson der jeweiligen Landesliste mit.

§ 45 Stimmzettel, Wahlumschläge
Papeleta de voto, sobres electorales

(1) Der Stimmzettel ist mindestens 21 x 29,7 cm (DIN A4) groß und aus weißem oder weißlichem Papier. Das Papier muss so beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Faltung durch den Wähler andere Personen nicht erkennen können, wie er gewählt hat. Der Stimmzettel enthält nach dem Muster der Anlage 26 je in der Reihenfolge und unter der Nummer ihrer Bekanntmachung

1. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, Berufs oder Standes und der Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie des Namens der Partei, sofern sie eine

Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, oder des Kennworts bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 des Gesetzes) und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung; bei einem Nachweis nach § 38 Satz 4 ist anstelle der Anschrift (Hauptwohnung) die Erreichbarkeitsanschrift anzugeben,

2. für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die zugelassenen Landeslisten unter Angabe des Namens der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, sowie der Familiennamen und Vornamen der ersten fünf Bewerber und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Jeder Wahlkreisbewerber und jede Landesliste erhält ein abgegrenztes Feld. Die Stimmzettel müssen in jedem Wahlbezirk von gleicher Farbe und Beschaffenheit sein.

(2) (weggefallen)

(3) Die Wahlumschläge für die Briefwahl sollen 11,4 x 16,2 cm (DIN C6) groß und blau und nach dem Muster der Anlage 10 beschriftet sein.

(4) Die Wahlbriefumschläge sollen etwa 12 x 17,6 cm groß und rot und nach dem Muster der Anlage 11 beschriftet sein.

(5) Muster der Stimmzettel werden unverzüglich nach ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die ihre Bereitschaft zur Herstellung von Stimmzettelschablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt. Der Kreiswahlleiter weist den Gemeindebehörden die Stimmzettel zur Weitergabe an die Wahlvorsteher zu. Er liefert den Gemeindebehörden die erforderlichen Wahlbriefumschläge und Wahlumschläge für die Briefwahl.

Fünfter Unterabschnitt
Wahlräume, Wahlzeit
Colegios electorales, tiempo de votación

§ 46 Wahlräume
Colegios electorales

(1) Die Gemeindebehörde bestimmt für jeden Wahlbezirk einen Wahlraum. Soweit möglich, stellen die Gemeinden Wahlräume in Gemeindegebäuden zur Verfügung. Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlberechtigten, insbesondere Behinderten und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Die Gemeindebehörden teilen frühzeitig und in geeigneter Weise mit, welche Wahlräume barrierefrei sind.

(2) In größeren Wahlbezirken, in denen sich die Wählerverzeichnisse teilen lassen, kann gleichzeitig in verschiedenen Gebäuden oder in verschiedenen Räumen desselben Gebäudes oder an verschiedenen Tischen des Wahlraumes gewählt werden. Für jeden Wahlraum oder Tisch wird ein Wahlvorstand gebildet. Sind mehrere Wahlvorstände in einem Wahlraum tätig, so bestimmt die Gemeindebehörde, welcher Vorstand für Ruhe und Ordnung im Wahlraum sorgt.

§ 47 Wahlzeit
Duración de la elección

(1) Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

(2) Der Landeswahlleiter kann im Einzelfall, wenn besondere Gründe es erfordern, die Wahlzeit mit einem früheren Beginn festsetzen.

§ 48 Wahlbekanntmachung der Gemeindebehörde
Anuncio de la votación por las autoridades municipales

(1) Die Gemeindebehörde macht spätestens am sechsten Tage vor der Wahl nach dem Muster der Anlage 27 Beginn und Ende der Wahlzeit sowie die Wahlbezirke und Wahlräume öffentlich bekannt; an Stelle der Aufzählung der Wahlbezirke mit ihrer Abgrenzung und ihren Wahlräumen kann auf die Angaben in der Wahlbenachrichtigung verwiesen werden. Dabei weist die Gemeindebehörde darauf hin,

1. dass der Wähler eine Erststimme und eine Zweitstimme hat,

2. dass die Stimmzettel amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten werden,

3. welchen Inhalt der Stimmzettel hat und wie er zu kennzeichnen ist,

4. in welcher Weise mit Wahlschein und insbesondere durch Briefwahl gewählt werden kann,

5. dass nach § 14 Abs. 4 des Gesetzes jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben kann,

6. dass nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht.

(2) Die Wahlbekanntmachung oder ein Auszug aus ihr mit den Nummern 1, 3, 4 und 6 der Anlage 27 ist vor Beginn der Wahlhandlung am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum befindet, anzubringen.2Dem Auszug ist ein Stimmzettel als Muster beizufügen.

Dritter Abschnitt
Wahlhandlung
Acto de la elección

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen
Disposiciones generales

§ 49 Ausstattung des Wahlvorstandes
Documentación para la Junta electoral local

Die Gemeindebehörde übergibt dem Wahlvorsteher eines jeden Wahlbezirks vor Beginn der Wahlhandlung

1. das abgeschlossene Wählerverzeichnis,

2. das Verzeichnis der eingetragenen Wahlberechtigten, denen nach Abschluss des Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine erteilt worden sind,

3. amtliche Stimmzettel in genügender Zahl,

4. Vordruck der Wahlniederschrift,

5. Vordruck der Schnellmeldung,

6. Abdrucke des Bundeswahlgesetzes und dieser Verordnung, die die Anlagen zu diesen Vorschriften nicht zu enthalten brauchen,

7. Abdruck der Wahlbekanntmachung oder Auszug aus ihr mit den Nummern 1, 3, 4 und 6 der Anlage 27,

8. Verschlussmaterial für die Wahlurne,

9. Papierbeutel oder Packpapier und Siegelmaterial zum Verpacken der Stimmzettel und Wahlscheine.

§ 50 Wahlzellen
Cabinas electorales

(1) In jedem Wahlraum richtet die Gemeindebehörde eine Wahlzelle oder mehrere Wahlzellen mit Tischen ein, in denen der Wähler seinen Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und falten kann. Die Wahlzellen müssen vom Tisch des Wahlvorstandes aus überblickt werden können. Als Wahlzelle kann auch ein nur durch den Wahlraum zugänglicher Nebenraum dienen, wenn dessen Eingang vom Tisch des Wahlvorstandes aus überblickt werden kann.

(2) In der Wahlzelle soll ein Schreibstift bereitliegen.

§ 51 Wahlurnen
Urna electoral

(1) Die Gemeindebehörde sorgt für die erforderlichen Wahlurnen.

(2) Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen sein. Ihre innere Höhe soll in der Regel 90 cm, der Abstand jeder Wand von der gegenüberliegenden mindestens 35 cm betragen. Im Deckel muss die Wahlurne einen Spalt haben, der nicht weiter als 2 cm sein darf. Sie muss verschließbar sein.

(3) Für die Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken und vor einem beweglichen Wahlvorstand können kleinere Wahlurnen verwendet werden.

§ 52 Wahltisch
Mesa electoral

Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nimmt, muss von allen Seiten zugänglich sein. An oder auf diesen Tisch wird die Wahlurne gestellt.

§ 53 Eröffnung der Wahlhandlung
Apertura del acto alectoral

(1) Der Wahlvorsteher eröffnet die Wahlhandlung damit, dass er die Beisitzer auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten hinweist.

(2) Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigt der Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis nach dem Verzeichnis der etwa nachträglich ausgestellten Wahlscheine (§ 28 Abs. 6 Satz 5), indem er bei den in diesem Verzeichnis aufgeführten Wahlberechtigten in der Spalte für den Stimmabgabevermerk “Wahlschein” oder “W” einträgt. Er berichtigt dementsprechend die Abschlussbescheinigung des Wählerverzeichnisses in der daneben vorgesehenen Spalte und bescheinigt das an der vorgesehenen Stelle. Erhält der Wahlvorsteher später die Mitteilung von der Ausstellung von Wahlscheinen nach § 27 Abs. 4 Satz 3, verfährt er entsprechend den Sätzen 1 und 2.

(3) Der Wahlvorstand überzeugt sich vor Beginn der Stimmabgabe davon, dass die Wahlurne leer ist. Der Wahlvorsteher verschließt die Wahlurne. Sie darf bis zum Schluss der Wahlhandlung nicht mehr geöffnet werden.

§ 54 Öffentlichkeit
Publicidad del acto

Während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses hat jedermann zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

§ 55 Ordnung im Wahlraum
Orden en el colegio electoral

Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum. Er ordnet bei Andrang den Zutritt zum Wahlraum.

§ 56 Stimmabgabe
Votación

(1) Wenn der Wähler den Wahlraum betritt, erhält er einen amtlichen Stimmzettel. Der Wahlvorstand kann anordnen, dass er hierzu seine Wahlbenachrichtigung vorzeigt.

(2) Der Wähler begibt sich in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn dort in der Weise, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Der Wahlvorstand achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler und dieser nur so lange wie notwendig in der Wahlzelle aufhält.

(3) Danach tritt der Wähler an den Tisch des Wahlvorstandes und gibt seine Wahlbenachrichtigung ab. Auf Verlangen, insbesondere wenn er seine Wahlbenachrichtigung nicht vorlegt, hat er sich über seine Person auszuweisen.

(4) Sobald der Schriftführer den Namen des Wählers im Wählerverzeichnis gefunden hat, die Wahlberechtigung festgestellt ist und kein Anlass zur Zurückweisung des Wählers nach den Absätzen 6 und 7 besteht, gibt der Wahlvorsteher die Wahlurne frei. Der Wähler wirft den gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne. Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis. Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind dabei, wenn nicht die Feststellung der Wahlberechtigung es erfordert, nicht befugt, Angaben zur Person des Wählers so zu verlautbaren, dass sie von sonstigen im Wahlraum Anwesenden zur Kenntnis genommen werden können.

(5) (weggefallen)

(6) Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der

1. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt,

2. keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im Wählerverzeichnis ein Wahlscheinvermerk (§ 30) befindet, es sei denn, es wird festgestellt, dass er nicht im Wahlscheinverzeichnis eingetragen ist,

3. bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat (§ 58), es sei denn, er weist nach, dass er noch nicht gewählt hat,

4. seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle gekennzeichnet oder gefaltet hat oder

5. seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist, oder ihn mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat, oder

6. für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder einen nicht amtlich hergestellten Stimmzettel abgeben oder mit dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen will.

Ein Wähler, bei dem die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 vorliegen und der im Vertrauen auf die ihm übersandte Benachrichtigung, dass er im Wählerverzeichnis eingetragen ist, keinen Einspruch eingelegt hat, ist gegebenenfalls bei der Zurückweisung darauf hinzuweisen, dass er bei der Gemeindebehörde bis 15.00 Uhr einen Wahlschein beantragen kann.

(7) Glaubt der Wahlvorsteher, das Wahlrecht einer im Wählerverzeichnis eingetragenen Person beanstanden zu müssen oder werden sonst aus der Mitte des Wahlvorstandes Bedenken gegen die Zulassung eines Wählers zur Stimmabgabe erhoben, so beschließt der Wahlvorstand über die Zulassung oder Zurückweisung. Der Beschluss ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(8) Hat der Wähler seinen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar gemacht oder wird der Wähler nach Absatz 6 Nr. 4 bis 6 zurückgewiesen, so ist ihm auf Verlangen ein

neuer Stimmzettel auszuhändigen, nachdem er den alten Stimmzettel im Beisein eines Mitglieds des Wahlvorstandes vernichtet hat.

§ 57 Stimmabgabe behinderter Wähler
Votación de personas minusválidas

(1) Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder der wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu werfen, bestimmt eine andere Person, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein.

(2) Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist.

(3) Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erlangt hat.

(4) Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen.

§ 58 Vermerk über die Stimmabgabe
Anotación de la votación

Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe neben dem Namen des Wählers im Wählerverzeichnis in der dafür bestimmten Spalte.

§ 59 Stimmabgabe von Inhabern eines Wahlscheines
Votación de los titulares de tarjeta electoral

Der Inhaber eines Wahlscheines nennt seinen Namen, weist sich aus und übergibt den Wahlschein dem Wahlvorsteher. Dieser prüft den Wahlschein. Entstehen Zweifel über die Gültigkeit des Wahlscheines oder über den rechtmäßigen Besitz, so klärt sie der Wahlvorstand nach Möglichkeit und beschließt über die Zulassung oder Zurückweisung des Inhabers. Der Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu vermerken. Der Wahlvorsteher behält den Wahlschein auch im Falle der Zurückweisung ein.

§ 60 Schluss der Wahlhandlung
Cierre de la votación

Sobald die Wahlzeit abgelaufen ist, wird dies vom Wahlvorsteher bekanntgegeben. Von da ab dürfen nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich im Wahlraum befinden. Der Zutritt zum Wahlraum ist so lange zu sperren, bis die anwesenden Wähler ihre Stimme abgegeben haben; § 54 ist zu beachten. Sodann erklärt der Wahlvorsteher die Wahlhandlung für geschlossen.

Zweiter Unterabschnitt
Besondere Regelungen
Normas especiales

§ 61 Wahl in Sonderwahlbezirken
Elección en distritos electorales especiales

(1) Zur Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken (§ 13) wird jeder in der Einrichtung anwesende Wahlberechtigte zugelassen, der einen für den Wahlkreis gültigen Wahlschein hat.

(2) Es ist zulässig, für die verschiedenen Teile eines Sonderwahlbezirks verschiedene Personen als Beisitzer des Wahlvorstandes zu bestellen.

(3) Die Gemeindebehörde bestimmt im Einvernehmen mit der Leitung der Einrichtung einen geeigneten Wahlraum. Für die verschiedenen Teile eines Sonderwahlbezirks können verschiedene Wahlräume bestimmt werden. Die Gemeindebehörde richtet den Wahlraum her.

(4) Die Gemeindebehörde bestimmt die Wahlzeit für den Sonderwahlbezirk im Einvernehmen mit der Leitung der Einrichtung im Rahmen der allgemeinen Wahlzeit nach dem tatsächlichen Bedürfnis.

(5) Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtigten den Wahlraum und die Wahlzeit am Tage vor der Wahl bekannt und weist auf die Möglichkeit der Stimmabgabe nach Absatz 6 hin.

(6) Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter und zwei Beisitzer können sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne und der erforderlichen Stimmzettel auch in die Krankenzimmer und an die Krankenbetten begeben. Dort nehmen sie die Wahlscheine entgegen und verfahren nach den §§ 59 und 56 Abs. 4 bis 8. Dabei muss auch bettlägerigen Wählern Gelegenheit gegeben werden, ihre Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und zu falten. Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter weist Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen wollen, darauf hin, dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes als Hilfsperson in Anspruch nehmen können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind die verschlossene Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum des Sonderwahlbezirks zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des Wahlvorstandes verschlossen zu verwahren. Danach wird ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen Wahlurne vermengt und zusammen mit den übrigen Stimmen des Sonderwahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(7) Die Öffentlichkeit der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses soll noch Möglichkeit durch die Anwesenheit anderer Wahlberechtigter gewährleistet werden.

(8) Die Leitung der Einrichtung ist für die Absonderung von Kranken verantwortlich, die ansteckende Krankheiten haben.

(9) Das Wahlergebnis des Sonderwahlbezirks darf nicht vor Schluss der allgemeinen Wahlzeit ermittelt werden.

(10) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 62 Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern und kleineren Alten- oder Pflegeheimen
Votación en hospitales, asilos y en residencias de ancianos de capacidad reducida

(1) Die Gemeindebehörde soll bei entsprechendem Bedürfnis und soweit möglich im Benehmen mit der Leitung eines kleineren Krankenhauses oder eines kleineren Alten- oder Pflegeheimes zulassen, dass dort anwesende Wahlberechtigte, die einen für den Wahlkreis gültigen Wahlschein besitzen, vor einem beweglichen Wahlvorstand (§ 8) wählen.

(2) Die Gemeindebehörde vereinbart mit der Leitung der Einrichtung die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allgemeinen Wahlzeit. Die Leitung der Einrichtung stellt, soweit erforderlich, einen geeigneten Wahlraum bereit. Die Gemeindebehörde richtet ihn her. Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt.

(3) Der bewegliche Wahlvorstand begibt sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne und der erforderlichen Stimmzettel in das Krankenhaus oder in das Alten- oder Pflegeheim, nimmt die Wahlscheine entgegen und verfährt nach den §§ 59 und 56 Abs. 4 bis 8. Der

Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter weist Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen wollen, darauf hin, dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes als Hilfsperson in Anspruch nehmen können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind die verschlossene Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum des Wahlbezirks zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des Wahlvorstandes verschlossen zu verwahren. Danach wird ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen Wahlurne vermengt und zusammen mit den Stimmen des Wahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(4) 1§ 61 Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 63 Stimmabgabe in Klöstern
Votación en los conventos

Die Gemeindebehörde soll bei entsprechendem Bedürfnis und soweit möglich im Benehmen mit der Leitung eines Klosters die Stimmabgabe im Kloster entsprechend § 62 regeln.

§ 64 Stimmabgabe in sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten
Votación en instituciones terapéuticas-sociales y penitenciarias

(1) In sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten soll die Gemeindebehörde bei entsprechendem Bedürfnis und soweit möglich Gelegenheit geben, dass die in der Anstalt anwesenden Wahlberechtigten, die einen für den Wahlkreis gültigen Wahlschein besitzen, in der Anstalt vor einem beweglichen Wahlvorstand (§ 8) wählen.

(2) Die Gemeindebehörde vereinbart mit der Leitung der Anstalt die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allgemeinen Wahlzeit. Die Anstaltsleitung stellt einen Wahlraum bereit. Die Gemeindebehörde richtet ihn her. Die Anstaltsleitung gibt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt und sorgt dafür, dass sie zur Stimmabgabe den Wahlraum aufsuchen können.

(3) § 62 Abs. 3 und § 61 Abs. 6 bis 8 gelten entsprechend. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 65
(weggefallen)

§ 66 Briefwahl
Voto por correo

(1) Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen Wahlumschlag und verschließt diesen, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe des Ortes und Tages, steckt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag, verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet den Wahlbrief durch die Post rechtzeitig an die nach Absatz 2 zuständige, auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle. Der Wahlbrief kann bei dieser Stelle auch abgegeben werden. Nach Eingang des Wahlbriefes bei der zuständigen Stelle darf er nicht mehr zurückgegeben werden.

(2) Die Wahlbriefe müssen bei dem Kreiswahlleiter des Wahlkreises, für den der Wahlschein gültig ist, eingehen. Sind auf Grund einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes Briefwahlvorstände für einzelne oder mehrere Gemeinden innerhalb eines Wahlkreises gebildet, müssen die Wahlbriefe bei der Gemeindebehörde eingehen, die die Wahlscheine ausgestellt hat; sind Briefwahlvorstände für einzelne Kreise innerhalb eines Wahlkreises

gebildet, müssen die Wahlbriefe bei der Verwaltungsbehörde des Kreises eingehen, in dem die Gemeinden liegen, die die Wahlscheine ausgestellt haben.

(3) Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Wahlumschlag zu legen; § 56 Abs. 8 gilt entsprechend. Für die Stimmabgabe behinderter Wähler gilt § 57 entsprechend. 3Hat der Wähler den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat.

(4) In Krankenhäusern, Altenheimen, Altenwohnheimen, Pflegeheimen, Erholungsheimen, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten sowie Gemeinschaftsunterkünften ist Vorsorge zu treffen, dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt werden kann. Die Leitung der Einrichtung bestimmt einen geeigneten Raum, veranlasst dessen Ausstattung und gibt den Wahlberechtigten bekannt, in welcher Zeit der Raum für die Ausübung der Briefwahl zur Verfügung steht. 3§ 56 Abs. 8 gilt entsprechend.

(5) Die Gemeindebehörde weist die Leitungen der Einrichtungen in ihrem Gemeindegebiet spätestens am 13. Tage vor der Wahl auf die Regelung des Absatzes 4 hin.

Vierter Abschnitt
Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse
Escrutinio y proclamación de los resultados electorales

§ 67 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
Escrutinio y proclamación de los resultados electorales en distritos electorales

Im Anschluss an die Wahlhandlung ermittelt der Wahlvorstand ohne Unterbrechung das Wahlergebnis im Wahlbezirk und stellt fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Erststimmen,
4. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,
5. die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen,
6. die Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen.

§ 68 Zählung der Wähler
Recuento de los electores

Vor dem Öffnen der Wahlurne werden alle nicht benutzten Stimmzettel vom Wahltisch entfernt. Sodann werden die Stimmzettel der Wahlurne entnommen, entfaltet und gezählt. Zugleich werden die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und die Zahl der eingenommenen Wahlscheine festgestellt. Ergibt sich dabei auch nach wiederholter Zählung keine Übereinstimmung, so ist dies in der Wahlniederschrift zu vermerken und, soweit möglich, zu erläutern.

§ 69 Zählung der Stimmen
Recuento de los votos

(1) Nachdem die Stimmzettel sowie die Stimmabgabevermerke und die Wahlscheine gezählt worden sind, bilden mehrere Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers folgende Stimmzettelstapel, die sie unter Aufsicht behalten:

1. nach Landeslisten getrennte Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen die Erst- und Zweitstimme zweifelsfrei gültig für den Bewerber und die Landesliste derselben Partei abgegeben worden ist,

2. einen Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen die Erst- und Zweitstimme zweifelsfrei gültig für Bewerber und Landeslisten verschiedener Träger von Wahlvorschlägen abgegeben worden ist, sowie mit den Stimmzetteln, auf denen nur die Erst- oder Zweitstimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht abgegeben worden ist,

3. einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln.

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, werden ausgesondert und von einem vom Wahlvorsteher hierzu bestimmten Beisitzer in Verwahrung genommen.

(2) Die Beisitzer, die die nach Landeslisten geordneten Stimmzettel (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) unter ihrer Aufsicht haben, übergeben die einzelnen Stapel nacheinander zu einem Teil dem Wahlvorsteher, zum anderen Teil seinem Stellvertreter. Diese prüfen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels gleichlautet, und sagen zu jedem Stapel laut an, für welchen Bewerber und für welche Landesliste er Stimmen enthält. Gibt ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher oder seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so fügen sie diesen den nach Absatz 1 Satz 2 ausgesonderten Stimmzetteln bei.

(3) Hierauf prüft der Wahlvorsteher die ungekennzeichneten Stimmzettel (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3), die ihm hierzu von dem Beisitzer, der sie in Verwahrung hat, übergeben werden. Der Wahlvorsteher sagt an, dass hier beide Stimmen ungültig sind.

(4) Danach zählen je zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer nacheinander die vom Wahlvorsteher und seinem Stellvertreter nach den Absätzen 2 und 3 geprüften Stimmzettelstapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermitteln die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Stimmen. Die Zahlen werden als Zwischensummen in die Wahlniederschrift übertragen.

(5) Sodann übergibt der Beisitzer, der den nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 gebildeten Stimmzettelstapel unter Aufsicht hat, diesen Stapel dem Wahlvorsteher. Der Wahlvorsteher legt die Stimmzettel zunächst getrennt nach Zweitstimmen für die einzelnen Landeslisten und liest bei jedem Stimmzettel laut vor, für welche Landesliste die Zweitstimme abgegeben worden ist. Bei den Stimmzetteln, auf denen nur die Erststimme abgegeben worden ist, sagt er an, dass die nicht abgegebene Zweitstimme ungültig ist. Gibt ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher Anlass zu Bedenken, fügt er diesen den nach Absatz 1 Satz 2 ausgesonderten Stimmzetteln bei. Dann werden die vom Wahlvorsteher gebildeten Stapel entsprechend Absatz 4 gezählt. Anschließend ordnet der Wahlvorsteher die Stimmzettel nach abgegebenen Erststimmen neu, und es wird entsprechend den Sätzen 2 bis 5 verfahren. Die jeweiligen Stimmenzahlen werden als Zwischensummen in die Wahlniederschrift übertragen.

(6) Zum Schluss entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausgesonderten Stimmzetteln abgegeben worden sind. Der Wahlvorsteher gibt die Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei gültigen Stimmen an, für welchen Bewerber oder für welche Landesliste die Stimme abgegeben worden ist. Er vermerkt auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob beide Stimmen oder nur die Erststimme oder nur die Zweitstimme für gültig oder ungültig erklärt worden sind und versieht die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. Die jeweiligen Stimmenzahlen werden als Zwischensummen in die Wahlniederschrift übertragen.

(7) Die nach den Absätzen 4 bis 6 ermittelten Zahlen der ungültigen und für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen werden vom Schriftführer in der Wahlniederschrift zusammengezählt. Zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer überprüfen die

Zusammenzählung. Beantragt ein Mitglied des Wahlvorstandes vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, so ist diese nach den Absätzen 1 bis 6 zu wiederholen. Die Gründe für die erneute Zählung sind in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(8) Die vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzer sammeln

1. die Stimmzettel, auf denen die Erststimme und die Zweitstimme oder nur die Erststimme abgegeben worden sind, getrennt nach den Bewerbern, denen die Erststimme zugefallen ist,

2. die Stimmzettel, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden ist,

3. die ungekennzeichneten Stimmzettel,

4. die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gegeben haben je für sich und behalten sie unter Aufsicht.

§ 70 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Proclamación de los resultados electorales

Im Anschluss an die Feststellungen nach § 67 gibt der Wahlvorsteher das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in dieser Vorschrift bezeichneten Angaben mündlich bekannt. Es darf vor Unterzeichnung der Wahlniederschrift (§ 72) anderen als den in § 71 genannten Stellen durch die Mitglieder des Wahlvorstandes nicht mitgeteilt werden.

§ 71 Schnellmeldungen, vorläufige Wahlergebnisse
Notificaciones inmediatas; resultados provisionales

(1) Sobald das Wahlergebnis im Wahlbezirk festgestellt ist, meldet es der Wahlvorsteher der Gemeindebehörde, die die Wahlergebnisse aller Wahlbezirke der Gemeinde zusammenfasst und dem Kreiswahlleiter meldet. Ist in der Gemeinde nur ein Wahlbezirk gebildet, meldet der Wahlvorsteher das Wahlergebnis dem Kreiswahlleiter. Der Landeswahlleiter kann anordnen, dass die Wahlergebnisse in den kreisangehörigen Gemeinden über die Verwaltungsbehörde des Kreises gemeldet werden.

(2) Die Meldung wird auf schnellstem Wege (z. B. telefonisch oder auf sonstigem elektronischen Wege) erstattet. Sie enthält die Zahlen

1. der Wahlberechtigten,

2. der Wähler,

3. der gültigen und ungültigen Erststimmen,

4. der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,

5. der für jeden Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen,

6. der für jede Landesliste abgegebenen gültigen Zweitstimmen.

(3) Der Kreiswahlleiter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Gemeindebehörden das vorläufige Wahlergebnis im Wahlkreis. Er teilt unter Einbeziehung der Ergebnisse der Briefwahl (§ 75 Abs. 4) das vorläufige Wahlergebnis auf schnellstem Wege dem Landeswahlleiter mit; dabei gibt er an, welcher Bewerber als gewählt gelten kann. Der Landeswahlleiter meldet dem Bundeswahlleiter die eingehenden Wahlkreisergebnisse sofort und laufend weiter.

(4) Der Landeswahlleiter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Kreiswahlleiter das vorläufige zahlenmäßige Wahlergebnis im Land und meldet es auf schnellstem Wege dem Bundeswahlleiter.

(5) Der Bundeswahlleiter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Landeswahlleiter das vorläufige Wahlergebnis im Wahlgebiet.

(6) Die Wahlleiter geben nach Durchführung der ohne Vorliegen der Wahlniederschriften möglichen Überprüfungen die vorläufigen Wahlergebnisse mündlich oder in geeigneter anderer Form bekannt.

(7) Die Schnellmeldungen der Wahlvorsteher, Gemeindebehörden und Kreiswahlleiter werden nach dem Muster der Anlage 28 erstattet. Der Landeswahlleiter kann Anordnungen zur Art und Weise der Übermittlung treffen. Er kann auch anordnen, dass die Wahlergebnisse der Wahlbezirke und der Gemeinden gleichzeitig dem Kreiswahlleiter und ihm mitzuteilen sind. Die mitgeteilten Ergebnisse darf der Landeswahlleiter erst dann bei der Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses im Land berücksichtigen, wenn die Mitteilung des Kreiswahlleiters nach Absatz 3 Satz 2 vorliegt.

§ 72 Wahlniederschrift
Acta electoral

(1) Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist vom Schriftführer eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 29 zu fertigen. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu genehmigen und zu unterzeichnen. Verweigert ein Mitglied des Wahlvorstandes die Unterschrift, so ist der Grund hierfür in der Wahlniederschrift zu vermerken. Beschlüsse nach § 56 Abs. 7, § 59 Satz 3 und § 69 Abs. 6 sowie Beschlüsse über Anstände bei der Wahlhandlung oder bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind in der Wahlniederschrift zu vermerken. Der Wahlniederschrift sind beizufügen die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand nach § 69 Abs. 6 besonders beschlossen hat, sowie die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach § 59 Satz 3 besonders beschlossen hat.

(2) Der Wahlvorsteher hat die Wahlniederschrift mit den Anlagen unverzüglich der Gemeindebehörde zu übergeben.

(3) Die Gemeindebehörde übersendet dem Kreiswahlleiter die Wahlniederschriften ihrer Wahlvorstände mit den Anlagen auf schnellstem Wege. Besteht die Gemeinde aus mehreren Wahlbezirken, so fügt sie eine Zusammenstellung der Wahlergebnisse der einzelnen Wahlbezirke nach dem Muster der Anlage 30 bei.

(4) Wahlvorsteher, Gemeindebehörden und Verwaltungsbehörden der Kreise sowie Kreiswahlleiter haben sicherzustellen, dass die Wahlniederschriften mit den Anlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.

§ 73 Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen
Transmisión y custoria de las actas electorales

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgaben erledigt, so verpackt der Wahlvorsteher je für sich

1. die Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach Wahlkreisbewerbern, nach Stimmzetteln, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden ist, und nach ungekennzeichneten Stimmzetteln,

2. (weggefallen)

3. die eingenommenen Wahlscheine,

soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind, versiegelt die einzelnen Pakete, versieht sie mit Inhaltsangabe und übergibt sie der Gemeindebehörde. Bis zur Übergabe an die Gemeindebehörde hat der Wahlvorsteher sicherzustellen, dass die unter den Nummern 1 bis 3 aufgeführten Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.

(2) Die Gemeindebehörde hat die Pakete zu verwahren, bis die Vernichtung der Wahlunterlagen zugelassen ist (§ 90). Sie hat sicherzustellen, dass die Pakete Unbefugten nicht zugänglich sind.

(3) Der Wahlvorsteher gibt der Gemeindebehörde die ihm nach § 49 zur Verfügung gestellten Unterlagen und Ausstattungsgegenstände sowie die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen zurück.

(4) Die Gemeindebehörde hat die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen auf Anforderung dem Kreiswahlleiter vorzulegen. Werden nur Teile eines Pakets angefordert, so bricht die Gemeindebehörde das Paket in Gegenwart von zwei Zeugen auf, entnimmt ihm den angeforderten Teil und versiegelt das Paket erneut. Über den Vorgang ist eine Niederschrift zu fertigen, die von allen Beteiligten zu unterzeichnen ist.

§ 74 Behandlung der Wahlbriefe, Vorbereitung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
Tratamiento del voto por correo, preparación del escrutinio y prolamación del resultado del voto por correo

(1) Die für den Eingang der Wahlbriefe zuständige Stelle (§ 66 Abs. 2) sammelt die Wahlbriefe ungeöffnet und hält sie unter Verschluss. Sie vermerkt auf jedem am Wahltage nach Schluss der Wahlzeit eingegangenen Wahlbrief Tag und Uhrzeit des Eingangs, auf den vom nächsten Tag an eingehenden Wahlbriefen nur den Eingangstag.

(2) (weggefallen)

(3) Die zuständige Stelle, in den Fällen der Bildung eines Briefwahlvorstandes für mehrere Gemeinden nach § 7 Nr. 3 die mit der Durchführung der Briefwahl betraute Gemeindebehörde, verteilt die Wahlbriefe auf die einzelnen Briefwahlvorstände, übergibt jedem Briefwahlvorstand das Verzeichnis über die für ungültig erklärten Wahlscheine sowie die Nachträge dazu oder die Mitteilung, dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt worden sind (§ 28 Abs. 9), sorgt für die Bereitstellung und Ausstattung des Wahlraumes und stellt dem Briefwahlvorstand etwa notwendige Hilfskräfte zur Verfügung.

(4) Ist für mehrere Gemeinden ein Briefwahlvorstand gebildet, haben die Gemeindebehörden der mit der Durchführung der Briefwahl betrauten Gemeindebehörde alle bis zum Tage vor der Wahl bei ihnen eingegangenen Wahlbriefe bis 12.00 Uhr am Wahltage zuzuleiten und alle anderen noch vor Schluss der Wahlzeit bei ihnen eingegangenen Wahlbriefe auf schnellstem Wege nach Schluss der Wahlzeit zuzuleiten.

(5) Verspätet eingegangene Wahlbriefe werden von der zuständigen Stelle angenommen, mit den in Absatz 1 vorgeschriebenen Vermerken versehen und ungeöffnet verpackt. Das Paket wird von ihr versiegelt, mit Inhaltsangabe versehen und verwahrt, bis die Vernichtung der Wahlbriefe zugelassen ist (§ 90). Sie hat sicherzustellen, dass das Paket Unbefugten nicht zugänglich ist.

§ 75 Zulassung der Wahlbriefe, Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
Admisión de los votos por correo, escrutinio y proclamación del resultado del voto por correo

(1) Ein vom Briefwahlvorsteher bestimmtes Mitglied des Briefwahlvorstandes öffnet die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den Wahlschein und den Wahlumschlag.2Ist der Wahlschein in einem Verzeichnis für ungültig erklärter Wahlscheine aufgeführt oder werden Bedenken gegen die Gültigkeit des Wahlscheines erhoben, so sind die betroffenen Wahlbriefe samt Inhalt unter Kontrolle des Briefwahlvorstehers auszusondern und später entsprechend Absatz 2 zu behandeln. Die aus den Übrigen Wahlbriefen entnommenen Wahlumschläge werden ungeöffnet in die Wahlurne geworfen; die Wahlscheine werden gesammelt.

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, so beschließt der Briefwahlvorstand über die Zulassung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist vom Briefwahlvorstand

zurückzuweisen, wenn ein Tatbestand nach § 39 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 bis 8 des Gesetzes vorliegt. Die Zahl der beanstandeten, der nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen und die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe sind in der Wahlniederschrift zu vermerken. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszusondern, mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen und fortlaufend zu numerieren. Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben (§ 39 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes).

(3) Nachdem die Wahlumschläge den Wahlbriefen entnommen und in die Wahlurne geworfen worden sind, jedoch nicht vor Schluss der allgemeinen Wahlzeit, ermittelt und stellt der Briefwahlvorstand das Wahlergebnis mit den in § 67 unter den Nummern 2 bis 6 bezeichneten Angaben fest. Die §§ 68 bis 70 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Wahlumschläge zunächst ungeöffnet zu zählen sind und leere Wahlumschläge entsprechend § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3 und 8 Nr. 3 sowie Wahlumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten oder Anlass zu Bedenken geben, entsprechend § 69 Abs. 1 Satz 2, Abs. 6 und 8 Nr. 4 zu behandeln sind.

(4) Sobald das Briefwahlergebnis festgestellt ist, meldet es der Briefwahlvorsteher auf schnellstem Wege dem Kreiswahlleiter. Sind auf Grund einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes Briefwahlvorstände für einzelne oder mehrere Gemeinden gebildet worden, meldet der Briefwahlvorsteher das Briefwahlergebnis der für ihn zuständigen Gemeindebehörde, die es in die Schnellmeldung für den Bereich der Gemeinde übernimmt; sind Briefwahlvorstände für einzelne Kreise innerhalb eines Wahlkreises gebildet worden, meldet es der Briefwahlvorsteher der Verwaltungsbehörde des Kreises, die die Briefwahlergebnisse zusammenfasst und dem Kreiswahlleiter weitermeldet. Die Schnellmeldungen werden nach dem Muster der Anlage 28 erstattet.

(5) Über die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses ist vom Schriftführer eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 31 zu fertigen. Dieser sind beizufügen

1. die Stimmzettel und Wahlumschläge, über die der Briefwahlvorstand entsprechend § 69 Abs. 6 besonders beschlossen hat,

2. die Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zurückgewiesen hat,

3. die Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, ohne dass die Wahlbriefe zurückgewiesen wurden.

(6) Der Briefwahlvorsteher übergibt die Wahlniederschrift mit den Anlagen unverzüglich dem Kreiswahlleiter. Sind Briefwahlvorstände für einzelne oder mehrere Gemeinden oder für einzelne Kreise innerhalb eines Wahlkreises gebildet worden, ist die Wahlniederschrift mit den Anlagen der Gemeindebehörde oder der mit der Durchführung der Briefwahl betrauten Gemeindebehörde oder der Verwaltungsbehörde des Kreises zu übergeben. Die zuständige Gemeindebehörde oder die Verwaltungsbehörde des Kreises übersendet dem Kreiswahlleiter die Wahlniederschriften der Briefwahlvorstände mit den Anlagen und fügt, soweit erforderlich, Zusammenstellungen der Briefwahlergebnisse nach dem Muster der Anlage 30 bei. 4§ 72 Abs. 4 gilt entsprechend.

(7) Der Briefwahlvorsteher verpackt die Wahlunterlagen entsprechend § 73 Abs. 1 und übergibt sie dem Kreiswahlleiter, der sie verwahrt, bis ihre Vernichtung zugelassen ist (§ 90). Sind Briefwahlvorstände für einzelne oder mehrere Gemeinden oder für einzelne Kreise innerhalb eines Wahlkreises gebildet worden, übergibt der Briefwahlvorsteher die Unterlagen der Stelle, die den Briefwahlvorstand einberufen hat. Diese verfährt nach § 73 Abs. 2 bis 4. 4§ 72 Abs. 4 gilt entsprechend.

(8) Im Übrigen gelten für die Tätigkeit des Briefwahlvorstandes die für den Wahlvorstand geltenden Bestimmungen entsprechend.

(9) Das Wahlergebnis der Briefwahl wird vom Kreiswahlleiter in die Schnellmeldung nach § 71 Abs. 3 und in die Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses des Wahlkreises nach § 76 übernommen.

(10) Stellt der Bundeswahlleiter fest, dass im Wahlgebiet die regelmäßige Beförderung von Wahlbriefen infolge von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt gestört war, gelten die dadurch betroffenen Wahlbriefe, die nach Behebung des Ereignisses, spätestens aber am 22. Tag nach der Wahl bei der zuständigen Stelle (§ 66 Abs. 2) eingehen, als rechtzeitig eingegangen, wenn sie ohne die Störung spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingegangen wären. Dabei gelten im Wahlgebiet abgesandte Wahlbriefe mit einem Poststempel spätestens vom zweiten Tag vor der Wahl als rechtzeitig eingegangen. Die als rechtzeitig eingegangen geltenden Wahlbriefe sind auf schnellstem Wege dem zuständigen Briefwahlvorstand zur nachträglichen Feststellung des Briefwahlergebnisses zu überweisen, sofern der Kreiswahlleiter feststellt, dass die nach § 7 Nr. 1 erforderliche Zahl von Wahlbriefen erreicht ist. Wird diese Zahl für einzelne Briefwahlvorstände unterschritten, bestimmt der Kreiswahlleiter, welchem Briefwahlvorstand des Wahlkreises die durch das Ereignis betroffenen Wahlbriefe überwiesen werden; wird die nach § 7 Nr. 1 erforderliche Zahl von Wahlbriefen im Wahlkreis unterschritten, bestimmt der Kreiswahlleiter, welcher Briefwahlvorstand über die Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe entscheidet und welcher Briefwahlvorstand des Wahlkreises über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen entscheidet und die nachträgliche Feststellung des Briefwahlergebnisses trifft. Im Übrigen kann der Landeswahlleiter Regelungen zur Anpassung an die besonderen Verhältnisse im Einzelfall treffen.

§ 76 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis
Escrutinio y proclamación de los resultados electorales en las circunscripciones electorales

(1) Der Kreiswahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Wahlvorstände auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Er stellt nach den Wahlniederschriften das endgültige Ergebnis der Wahl im Wahlkreis und der Wahl nach Landeslisten wahlbezirksweise und nach Briefwahlvorständen geordnet nach dem Muster der Anlage 30 zusammen. Dabei bildet der Kreiswahlleiter für die Gemeinden und Kreise Zwischensummen, im Falle einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes auch für die Briefwahlergebnisse. Ergeben sich aus der Wahlniederschrift oder aus sonstigen Gründen Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts, so klärt sie der Kreiswahlleiter soweit wie möglich auf.

(2) Nach Berichterstattung durch den Kreiswahlleiter ermittelt der Kreiswahlausschuss das Wahlergebnis des Wahlkreises und stellt fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Erststimmen,
4. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,
5. die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen,
6. die Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen.

Der Kreiswahlausschuss ist berechtigt, rechnerische Feststellungen des Wahlvorstandes und fehlerhafte Zuordnungen gültig abgegebener Stimmen zu berichtigen sowie über die Gültigkeit abgegebener Stimmen abweichend zu beschließen. 3Ungeklärte Bedenken vermerkt er in der Niederschrift.

(3) Der Kreiswahlausschuss stellt ferner fest, welcher Bewerber im Wahlkreis gewählt ist.

(4) Ist bei der Wahl im Wahlkreis der Bewerber eines anderen Kreiswahlvorschlages (§ 20 Abs. 3 des Gesetzes) oder der Bewerber einer Partei, für die im Land keine Landesliste zugelassen ist, gewählt worden, so fordert der Kreiswahlleiter von allen Gemeindebehörden die für diesen Bewerber abgegebenen Stimmzettel ein und fügt ihnen die durch Briefwahl abgegebenen sowie die bei den Wahlniederschriften befindlichen, auf diesen Bewerber lautenden Stimmzettel bei. Der Kreiswahlausschuss stellt fest, wieviel Zweitstimmen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes unberücksichtigt bleiben und bei welchen Landeslisten sie abzusetzen sind.

(5) Im Anschluss an die Feststellung gibt der Kreiswahlleiter das Wahlergebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 sowie in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Angaben mündlich bekannt.

(6) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 5 Abs. 7) ist nach dem Muster der Anlage 32 zu fertigen. Die Niederschrift und die ihr beigefügte Zusammenstellung des Wahlergebnisses nach dem Muster der Anlage 30 sind von allen Mitgliedern des Kreiswahlausschusses, die an der Verhandlung teilgenommen haben, und von dem Schriftführer zu unterzeichnen.

(7) Der Kreiswahlleiter benachrichtigt den Gewählten nach der mündlichen Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses mittels Zustellung (§ 87) und weist ihn auf die Vorschriften des § 45 des Gesetzes hin.

(8) Der Kreiswahlleiter übersendet dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter auf schnellstem Wege eine Ausfertigung der Niederschrift des Kreiswahlausschusses mit der dazugehörigen Zusammenstellung.

(9) Der Kreiswahlleiter teilt dem Landeswahlleiter, dem Bundeswahlleiter und dem Präsidenten des Deutschen Bundestages sofort nach Ablauf der Frist des § 41 Abs. 2 des Gesetzes mit, an welchem Tag die Annahmeerklärung des gewählten Bewerbers eingegangen ist oder ob dieser die Wahl abgelehnt hat. Im Falle des § 45 Satz 2 des Gesetzes teilt er mit, an welchem Tag die Benachrichtigung zugestellt worden ist.

§ 77 Ermittlung und Feststellung des Zweitstimmenergebnisses im Land
Escrutinio y proclamación de los resultados electorales de los segundos votos en cada Land

(1) Der Landeswahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Kreiswahlausschüsse und stellt danach die endgültigen Wahlergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen des Landes (§ 76 Abs. 2 und 4) nach dem Muster der Anlage 30 zum Wahlergebnis des Landes zusammen.(2) Nach Berichterstattung durch den Landeswahlleiter ermittelt der Landeswahlausschuss das Zweitstimmenergebnis im Land und stellt fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

2. die Zahl der Wähler,

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,

4. die Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen und

5. im Falle des § 6 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes die Zahlen der für die Sitzverteilung zu berücksichtigenden Zweitstimmen der einzelnen Landeslisten (bereinigte Zahlen).

Der Landeswahlausschuss ist berechtigt, rechnerische Berichtigungen an den Feststellungen der Wahlvorstände und Kreiswahlausschüsse vorzunehmen.

(3) Im Anschluss an die Feststellung gibt der Landeswahlleiter das Wahlergebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Angaben mündlich bekannt.

(4) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 5 Abs. 7) ist nach dem Muster der Anlage 33 zu fertigen. 2§ 76 Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Der Landeswahlleiter übersendet dem Bundeswahlleiter eine Ausfertigung der Niederschrift mit der Feststellung des Zweitstimmenergebnisses sowie eine Zusammenstellung der Wahlergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen des Landes (Absatz 1).

§ 78 Abschließende Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Landeslistenwahl
Escrutinio y proclamación de los resultados electorales de las listas regionales (Land)

(1) Der Bundeswahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Landeswahlausschüsse. Er stellt nach den Niederschriften der Landes- und Kreiswahlausschüsse

1. die Zahlen der Zweitstimmen der Landeslisten jeder Partei zusammen und ermittelt

2. die Gesamtzahl der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen,

3. den Vom-Hundert-Satz des Stimmenanteils der einzelnen Parteien im Wahlgebiet an der Gesamtzahl der gültigen Zweitstimmen,

4. die Zahl der von den einzelnen Parteien im Wahlgebiet errungenen Wahlkreissitze,

5. die bereinigten Zweitstimmenzahlen der Landeslisten und Listenverbindungen jeder Partei,

6. die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber, die nach § 6 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes von der Gesamtzahl der Abgeordneten abzuziehen sind.

Er berechnet nach Maßgabe des § 6 des Gesetzes die Stimmenzahlen der einzelnen Landeslisten und Listenverbindungen der Parteien und verteilt die Sitze auf die Landeslisten und Listenverbindungen. Entsprechend errechnet er, wie sich die auf eine Listenverbindung entfallenden Sitze auf die einzelnen Landeslisten verteilen (§ 7 Abs. 3 des Gesetzes).

(2) Nach Berichterstattung durch den Bundeswahlleiter ermittelt der Bundeswahlausschuss das Gesamtergebnis der Landeslistenwahl und stellt für das Wahlgebiet fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

2. die Zahl der Wähler,

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,

4. die Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen gültigen Zweitstimmen,

5 .die Parteien, die nach § 6 Abs. 6 des Gesetzes

a) an der Verteilung der Listensitze teilnehmen,

b) bei der Verteilung der Listensitze unberücksichtigt bleiben,

6. die bereinigten Zahlen der auf die einzelnen Listenverbindungen entfallenen Zweitstimmen,

7. die Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Listenverbindungen und Landeslisten entfallen,

8. welche Landeslistenbewerber gewählt sind.

Der Bundeswahlausschuss ist berechtigt, rechnerische Berichtigungen an den Feststellungen der Landeswahlausschüsse vorzunehmen.

(3) Im Anschluss an die Ermittlung und Feststellung gibt der Bundeswahlleiter das Wahlergebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 bezeichneten Angaben mündlich bekannt. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass er die Feststellung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 durch Aushang im Sitzungsraum bekanntgibt.

(4) § 76 Abs. 6 findet entsprechende Anwendung.

(5) Der Bundeswahlleiter teilt den Landeswahlleitern mit, welche Landeslistenbewerber gewählt sind.

§ 79 Bekanntmachung der endgültigen Wahlergebnisse
Proclamación de los resultados electorales definitivos

(1) Sobald die Feststellungen abgeschlossen sind, machen

1. der Kreiswahlleiter das endgültige Wahlergebnis für den Wahlkreis mit den in § 76 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Angaben und dem Namen des gewählten Wahlkreisbewerbers,

2. der Landeswahlleiter das endgültige Wahlergebnis für das Land mit den in § 76 Abs. 2 Satz 1 unter den Nummern 3 und 5 und in § 77 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Angaben, gegliedert nach Wahlkreisen, und den Namen der im Land gewählten Bewerber,

3. der Bundeswahlleiter das endgültige Wahlergebnis für das Wahlgebiet mit den in § 78 Abs. 2 Satz 1 unter den Nummern 1 bis 7 bezeichneten Angaben, der Verteilung der Sitze auf die Parteien und anderen Träger von Wahlvorschlägen, gegliedert nach Ländern, sowie den Namen der im Wahlgebiet gewählten Bewerber öffentlich bekannt.

(2) Eine Ausfertigung ihrer Bekanntmachungen übersenden der Landeswahlleiter dem Bundeswahlleiter und der Bundeswahlleiter dem Präsidenten des Deutschen Bundestages.

§ 80 Benachrichtigung der gewählten Landeslistenbewerber
Notiificación a los candidatos electos de las listas regionales

Der Landeswahlleiter benachrichtigt die vom Bundeswahlausschuss für gewählt erklärten Landeslistenbewerber nach der mündlichen Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses durch den Bundeswahlleiter mittels Zustellung (§ 87) und weist sie auf die Vorschriften des § 45 des Gesetzes hin. Er teilt dem Bundeswahlleiter und dem Präsidenten des Deutschen Bundestages sofort nach Ablauf der Frist des § 42 Abs. 3 des Gesetzes mit, an welchen Tagen die Annahmeerklärungen der gewählten Bewerber eingegangen sind und welche Bewerber die Wahl abgelehnt haben. Im Falle des § 45 Satz 2 des Gesetzes teilt er mit, an welchen Tagen die Benachrichtigungen zugestellt worden sind.

§ 81 Überprüfung der Wahl durch die Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter
Supervisión de las votaciones por los Comisiarios regionales y por el Comisario electoral federal

(1) Die Landeswahlleiter und der Bundeswahlleiter prüfen, ob die Wahl nach den Vorschriften des Bundeswahlgesetzes, dieser Verordnung und der Bundeswahlgeräteverordnung vom 3. September 1975 (BGBI. I S. 2459) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt worden ist. Nach dem Ergebnis ihrer Prüfung entscheiden sie, ob Einspruch gegen die Wahl einzulegen ist (§ 2 Abs. 2 des Wahlprüfungsgesetzes).

(2) Auf Anforderung haben die Kreiswahlleiter dem Landeswahlleiter und über diesen dem Bundeswahlleiter die bei ihnen, den Gemeinden und Verwaltungsbehörden der Kreise vorhandenen Wahlunterlagen zu übersenden. Der Bundeswahlleiter kann verlangen, dass ihm die Landeswahlleiter die bei ihnen vorhandenen Wahlunterlagen übersenden.

Fünfter Abschnitt
Nachwahl, Wiederholungswahl, Berufung von Listennachfolgern
Elecciones retrasadas, repetidas y designación como candidatos electorales de los nombres siguientes en la lista

§ 82 Nachwahl
Elecciones retrasada

(1) Sobald feststeht, dass die Wahl wegen Todes eines Wahlkreisbewerbers, infolge höherer Gewalt oder aus sonstigem Grunde nicht durchgeführt werden kann, sagt der Kreiswahlleiter

die Wahl ab und macht öffentlich bekannt, dass eine Nachwahl stattfinden wird. Er unterrichtet unverzüglich den Landeswahlleiter und dieser den Bundeswahlleiter.

(2) Stirbt der Bewerber eines zugelassenen Kreiswahlvorschlags vor der Wahl, so fordert der Kreiswahlleiter die Vertrauensperson auf, binnen einer zu bestimmenden Frist schriftlich einen anderen Bewerber zu benennen. Der Ersatzvorschlag muss von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Das Verfahren nach § 21 des Gesetzes braucht nicht eingehalten zu werden; der Unterschriften nach § 20 Abs. 2 und 3 des Gesetzes bedarf es nicht.

(3) Bei der Nachwahl wird mit den für die Hauptwahl aufgestellten Wählerverzeichnissen, vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 2 nach den für die Hauptwahl zugelassenen Wahlvorschlägen, in den für die Hauptwahl bestimmten Wahlbezirken und Wahlräumen und vor den für die Hauptwahl gebildeten Wahlvorständen gewählt.

(4) Findet die Nachwahl wegen Todes eines Wahlkreisbewerbers statt, so haben die für die Hauptwahl erteilten Wahlscheine für die Nachwahl keine Gültigkeit. Sie werden von Amts wegen ersetzt. § 28 Abs. 3 ist anzuwenden. Neue Wahlscheine werden nach den allgemeinen Vorschriften erteilt. 5Wahlbriefe mit alten Wahlscheinen, die bei den nach § 66 Abs. 2 zuständigen Stellen eingegangen sind, werden von diesen gesammelt und unter Beachtung des Wahlgeheimnisses vernichtet.

(5) Findet die Nachwahl statt, weil die Wahl infolge höherer Gewalt oder aus sonstigem Grund nicht durchgeführt werden konnte, so behalten die für die Hauptwahl erteilten Wahlscheine für die Nachwahl Gültigkeit. Neue Wahlscheine dürfen nur von Gemeinden des Gebietes, in dem die Nachwahl stattfindet, erteilt werden.

(6) Der Landeswahlleiter kann im Einzelfall Regelungen zur Anpassung an besondere Verhältnisse treffen.

(7) Der Landeswahlleiter macht den Tag der Nachwahl öffentlich bekannt.

§ 83 Wiederholungswahl
Elección repetida

(1) Das Wahlverfahren ist nur insoweit zu erneuern, als das nach der Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren erforderlich ist.

(2) Wird die Wahl nur in einzelnen Wahlbezirken wiederholt, so darf die Abgrenzung dieser Wahlbezirke nicht geändert werden. Auch sonst soll die Wahl möglichst in denselben Wahlbezirken wie bei der Hauptwahl wiederholt werden. Wahlvorstände können neu gebildet und Wahlräume neu bestimmt werden.

(3) Findet die Wiederholungswahl infolge von Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung und Behandlung von Wählerverzeichnissen statt, so ist in den betroffenen Wahlbezirken das Verfahren der Aufstellung, Einsichtnahme, Berichtigung und des Abschlusses des Wählerverzeichnisses neu durchzuführen, sofern sich aus der Wahlprüfungsentscheidung keine Einschränkungen ergeben.

(4) Wähler, die seit der Hauptwahl ihr Wahlrecht verloren haben, sind im Wählerverzeichnis zu streichen. Wird die Wahl vor Ablauf von sechs Monaten nach der Hauptwahl nur in einzelnen Wahlbezirken wiederholt, so können Wahlberechtigte, denen für die Hauptwahl ein Wahlschein erteilt wurde, nur dann an der Wahl teilnehmen, wenn sie ihren Wahlschein in den Wahlbezirken abgegeben haben, für die die Wahl wiederholt wird.

(5) Wahlscheine dürfen nur von Gemeinden in dem Gebiet, in dem die Wiederholungswahl stattfindet, erteilt werden. Wird die Wahl vor Ablauf von sechs Monaten nach der Hauptwahl

nur in einzelnen Wahlbezirken wiederholt, so erhalten Personen, die bei der Hauptwahl in diesen Wahlbezirken mit Wahlschein gewählt haben, auf Antrag ihren Wahlschein mit Gültigkeitsvermerk für die Wiederholungswahl zurück, wenn sie inzwischen aus dem Gebiet der Wiederholungswahl verzogen sind.

(6) Wahlvorschläge können nur geändert werden, wenn sich dies aus der Wahlprüfungsentscheidung ergibt oder wenn ein Bewerber gestorben oder nicht mehr wählbar ist.

(7) Der Landeswahlleiter kann im Rahmen der Wahlprüfungsentscheidung Regelungen zur Anpassung des Wiederholungswahlverfahrens an besondere Verhältnisse treffen.

§ 84 Berufung von Listennachfolgern
Designación como electos de nombres siguientes en la lista

(1) Liegen die Voraussetzungen für eine Listennachfolge vor, so benachrichtigt der Landeswahlleiter den nächsten Listenbewerber mittels Zustellung (§ 87 Abs. 1) und weist ihn auf die Vorschrift des § 45 Abs. 3 des Gesetzes hin. Er fordert ihn auf, ihm innerhalb einer Woche schriftlich zu erklären, ob er die Nachfolge annimmt, und an Eides statt zu versichern, dass er nicht aus der die Liste einreichenden Partei ausgeschieden oder Mitglied einer anderen Partei geworden ist. Für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Gesetzes entsprechend.

(2) Der Landeswahlleiter teilt dem Bundeswahlleiter und dem Präsidenten des Deutschen Bundestages Familienname, Vornamen, Beruf oder Stand und Anschrift (Hauptwohnung) des Listennachfolgers sowie den Tag, an dem seine Annahmeerklärung eingegangen ist, sofort mit. Der Landeswahlleiter verfährt entsprechend, wenn ein Wahlkreisabgeordneter ausscheidet und kein Listenbewerber nachfolgt. Im Falle des § 45 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes teilt er mit, an welchem Tag die Benachrichtigung zugestellt worden ist.

(3) Der Bundeswahlleiter macht öffentlich bekannt, welcher Bewerber in den Deutschen Bundestag eingetreten ist, und übersendet Abschrift der Bekanntmachung an den Präsidenten des Deutschen Bundestages. Der Bundeswahlleiter verfährt entsprechend, wenn ein Wahlkreisabgeordneter ausscheidet und kein Listenbewerber nachfolgt. Weist ein Listennachfolger bis spätestens vier Tage nach Eingang seiner Annahmeerklärung beim zuständigen Landeswahlleiter gegenüber dem Bundeswahlleiter nach, dass für ihn im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Landesmeldegesetzen eingetragen ist, ist anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.(4) Ein nicht gewählter Bewerber verliert seine Anwartschaft als Listennachfolger, wenn er dem Landeswahlleiter schriftlich seine Ablehnung erklärt. Die Ablehnung kann nicht widerrufen werden.

Sechster Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
Disposiciones transitorias y finales

§ 85
(weggefallen)

§ 86 Öffentliche Bekanntmachungen
Publicación oficial de los resultados electorales

(1) Die nach dem Gesetz und dieser Verordnung vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen durch das Bundesministerium des Innern im Bundesanzeiger, den Bundeswahlleiter im Bundesanzeiger, die Landeswahlleiter im Staatsanzeiger oder

Ministerial- oder Amtsblatt der Landesregierung oder des Innenministeriums, die Kreiswahlleiter und Verwaltungsbehörden des Kreises in den Amtsblättern oder Zeitungen, die allgemein für Bekanntmachungen der Kreise und kreisfreien Städte des Wahlkreises bestimmt sind, die Gemeindebehörden in ortsüblicher Weise.

(2) Für die öffentliche Bekanntmachung nach § 5 Abs. 3 genügt Aushang am oder im Eingang des Sitzungsgebäudes mit dem Hinweis, dass jedermann Zutritt zu der Sitzung hat.

§ 87 Zustellungen, Versicherungen an Eides statt
Citaciones judiciales

(1) Für Zustellungen gilt das Verwaltungszustellungsgesetz des Bundes in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Für die nach § 18 Abs. 5 Satz 1 und § 34 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 abzugebende Versicherung an Eides statt ist die jeweilige Gemeindebehörde zur Abnahme zuständig.

§ 88 Beschaffung von Stimmzetteln und Vordrucken
Suministro de papeletas de voto y de formularios

(1) Der Kreiswahlleiter beschafft

1. die Wahlscheinvordrucke (Anlage 9), soweit nicht die Gemeindebehörde diese im Benehmen mit dem Kreiswahlleiter beschafft,

2. die Wahlumschläge für die Briefwahl (Anlage 10),

3. die Wahlbriefumschläge (Anlage 11), wenn nur an seinem Sitz das Briefwahlergebnis festzustellen ist,

4. die Merkblätter für die Briefwahl (Anlage 12),

5. die Vordrucke für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge (Anlage 13),

6. die Formblätter für Unterstützungsunterschriften für Kreiswahlvorschläge (Anlage 14),

7. die Vordrucke für Zustimmungserklärungen der vorgeschlagenen Wahlkreisbewerber (Anlage 15),

8. die Stimmzettel (Anlage 26),

9. die Vordrucke für Schnellmeldungen (Anlage 28),

10. die Vordrucke für die Zusammenstellung der endgültigen Wahlergebnisse (Anlage 30),

11. die Vordrucke für die Wahlniederschriften zur Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses (Anlage 31)

für seinen Wahlkreis, soweit nicht der Landeswahlleiter die Beschaffung übernimmt.

(2) Der Landeswahlleiter beschafft

1. (weggefallen)

2. die Vordrucke für die Einreichung der Landeswahlvorschläge (Anlage 20),

3. die Formblätter für Unterstützungsunterschriften für Landeswahlvorschläge (Anlage 21),

4. die Vordrucke für Zustimmungserklärungen der vorgeschlagenen Landeslistenbewerber (Anlage 22),

5. die Vordrucke für die Bescheinigung der Wählbarkeit der vorgeschlagenen Bewerber (Anlage 16),

6. die Vordrucke für die Niederschriften über die Aufstellung der Bewerber (Anlagen 17 und 23),

7. die Vordrucke für die Versicherung an Eides statt zur Bewerberaufstellung (Anlagen 18 und 24).

(2a) Der Landeswahlleiter kann zur Kosteneinsparung den Druck oder den Versand der Wahlbenachrichtigung oder beides nach § 19 Abs. 1 Satz 1 ganz oder teilweise übernehmen. Die Gemeindebehörden übermitteln dem Landeswahlleiter oder der von ihm benannten Stelle rechtzeitig die hierfür benötigten Daten und Unterlagen.

(3) Der Bundeswahlleiter beschafft die Anträge für außerhalb des Wahlgebietes lebende Wahlberechtigte zur Teilnahme an der Wahl zum Deutschen Bundestag (Anlage 2) nebst den Merkblättern hierzu (noch Anlage 2) sowie die Vordrucke für die Erklärung über den Ausschluss von der Verbindung von Landeslisten (Anlage 25).

(4) Die Gemeindebehörde beschafft die für die Wahlbezirke und Gemeinden erforderlichen Vordrucke, soweit nicht Bundes-, Landes- oder Kreiswahlleiter die Lieferung übernehmen.

(5) Die Beschaffung der Vordrucke und Formblätter nach den Anlagen 2, 5, 8, 9, 13 bis 25, 27 bis 29 und 31 bis 33 kann auch durch elektronische Bereitstellung erfolgen.

§ 89 Sicherung der Wahlunterlagen
Seguridad de las actas electorales

(1) Die Wählerverzeichnisse, die Wahlscheinverzeichnisse, die Verzeichnisse nach § 28 Abs. 8 Satz 2 und § 29 Abs. 1, die Formblätter mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge sowie eingenommene Wahlbenachrichtigungen sind so zu verwahren, dass sie gegen Einsichtnahme durch Unbefugte geschützt sind.

(2) Auskünfte aus Wählerverzeichnissen, Wahlscheinverzeichnissen und Verzeichnissen nach § 28 Abs. 8 Satz 2 und § 29 Abs. 1 dürfen nur Behörden, Gerichten und sonstigen amtlichen Stellen des Wahlgebiets und nur dann erteilt werden, wenn sie für den Empfänger im Zusammenhang mit der Wahl erforderlich sind. Ein solcher Anlass liegt insbesondere bei Verdacht von Wahlstraftaten, bei Wahlprüfungsangelegenheiten und bei wahlstatistischen Arbeiten vor.

(3) Mitglieder von Wahlorganen, Amtsträger und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete dürfen Auskünfte über Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge nur Behörden, Gerichten und sonstigen amtlichen Stellen des Wahlgebiets und nur dann erteilen, wenn die Auskunft zur Durchführung der Wahl oder eines Wahlprüfungsverfahrens oder zur Aufklärung des Verdachts einer Wahlstraftat erforderlich ist.

§ 90 Vernichtung von Wahlunterlagen
Destrucción de las actas electorales

(1) Die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen sind unverzüglich zu vernichten.

(2) Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse nach § 28 Abs. 8 Satz 2 und § 29 Abs. 1 sowie Formblätter mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

(3) Die übrigen Wahlunterlagen können 60 Tage vor der Wahl des neuen Deutschen Bundestages vernichtet werden. Der Landeswahlleiter kann zulassen, dass die Unterlagen früher vernichtet werden, soweit sie nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

§ 91 Stadtstaatklausel
Régimen especial en varias ciudades

In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg bestimmt der Senat, welche Stellen die Aufgaben wahrnehmen, die im Gesetz und in dieser Verordnung der Gemeindebehörde übertragen sind.

§ 92
(Änderung der Bundeswahlgeräteverordnung)

§ 93
(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Anlage 1
(weggefallen)

Anlage 2 (zu § 18 Abs. 5)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_2_109.html

Anlage 3 (zu § 19 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_3_110.html

Anlage 4 (zu § 19 Abs. 2)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_4_111.html

Anlage 5 (zu § 20 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_5_112.html

Anlage 6 (zu § 20 Abs. 2)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_6_113.html

Anlage 7
(weggefallen)

Anlage 8 (zu § 24 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_8_115.html

Anlage 9 (zu § 26)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_9_116.html

Anlage 10 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 3)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_10_117.html

Anlage 11 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 4)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_11_118.html

Anlage 12 (zu § 28 Abs. 3)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_12_119.html

Anlage 13 (zu § 34 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_13_120.html

Anlage 14 (zu § 34 Abs. 4)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_14_121.html

Anlage 15 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 1 und 3 Buchstabe b)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_15_122.html

Anlage 16 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 2 und § 39 Abs. 4 Nr. 2)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_16_123.html

Anlage 17 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 3 Buchstabe a)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_17_124.html

Anlage 18 (zu § 34 Abs. 5 Nr. 3 Buchstabe a)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_18_125.html

Anlage 19 (zu § 36 Abs. 6)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_19_126.html

Anlage 20 (zu § 39 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_20_127.html

Anlage 21 (zu § 39 Abs. 3)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_21_128.html

Anlage 22 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_22_129.html

Anlage 23 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 3)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_23_130.html

Anlage 24 (zu § 39 Abs. 4 Nr. 3)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_24_131.html

Anlage 25 (zu § 44 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_25_132.html

Anlage 26 (zu § 28 Abs. 3 und § 45 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_26_133.html

Anlage 27 (zu § 48 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_27_134.html

Anlage 28 (zu § 71 Abs. 7 und § 75 Abs. 4)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_28_135.html

Anlage 29 (zu § 72 Abs. 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_29_136.html

Anlage 30 (zu §§ 72 Abs. 3, 75 Abs. 6, 76 Abs. 1 und 6, § 77 Abs. 1, § 78 Abs. 4)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_30_137.html

Anlage 31 (zu § 75 Abs. 5)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_31_138.html

Anlage 32 (zu § 76 Abs. 6)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_32_139.html

Anlage 33 (zu § 77 Abs. 4)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/anlage_33_140.html

Bundeswahlgeräteverordnung - BWahlGV

Verordnung über den Einsatz von Wahlgeräten bei Wahlen zum Deutschen Bundestag und der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland

Decreto sobre la utilización de aparatos para votar en las elecciones al Bundestag y a los diputados de Parlamento Europeo de la República federal

"Bundeswahlgeräteverordnung vom 3. September 1975 (BGBl. I S. 2459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. April 1999 (BGBl. I S. 749)"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 20.4.1999 I 749

Fußnote
Textnachweis Geltung ab: 15.11.1979
Überschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 1 V v. 20.4.1999 I 749 mWv 24.4.1999

Eingangsformel
Fórmula de entrada

Auf Grund des § 35 Abs. 3 und des § 52 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 2325) wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft verordnet:

Erster Abschnitt
Amtliche Zulassung und Genehmigung der Verwendung von Wahlgeräten
Homologación oficial y autorización para el uso de aparatos para votar

§ 1 Zulassungspflicht
Homologación obligatoria

Mechanisch oder elektrisch betriebene einschließlich rechnergesteuerte Geräte, die bei Wahlen der Abgabe und Zählung der Wählerstimmen dienen (Wahlgeräte), dürfen bei Wahlen zum Bundestag nur eingesetzt werden, wenn ihre Bauart zugelassen und ihre Verwendung genehmigt ist.

§ 2 Erteilung der Bauartzulassung
Otorgamiento de la homologación

(1) Die Bauartzulassung wird für Wahlgeräte einer bestimmten Bauart vom Bundesministerium des Innern auf Antrag des Herstellers erteilt. Durch die Bauartzulassung wird festgestellt, daß Wahlgeräte einer bestimmten Bauart für die Verwendung bei Wahlen zum Bundestag allgemein oder für einzelne Wahlen geeignet sind.

Aus der Bauartzulassung kann kein Anspruch auf Genehmigung der Verwendung solcher Wahlgeräte bei einer Wahl hergeleitet werden.

(2) Die Bauartzulassung kann erteilt werden, wenn das Wahlgerät nach einer auf Kosten des Antragstellers vorgenommenen Prüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt den Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten nach Anlage 1 entspricht. Der Antragsteller ist verpflichtet, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt neben Beschreibung, Bauplan und Bedienungsanleitung ein Muster des Wahlgerätes und auf Verlangen weitere Unterlagen zu überlassen sowie Einsichtnahme in Entwicklungs- und Herstellungsprozesse zu gewähren.

(3) Ist eine Bauartzulassung erteilt worden, sind ihrem Inhaber (Hersteller) Änderungen in der Konstruktion und den technischen Eigenschaften des Wahlgerätes nur gestattet, wenn dem Bundesministerium des Innern nach einer auf Kosten des Antragstellers vorgenommenen Prüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt nachgewiesen wird, daß das Wahlgerät mit den vorgenommenen Änderungen ebenfalls den Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten nach Anlage 1 entspricht. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Besteht Anlaß zu der Annahme, daß an Wahlgeräten, für die eine Bauartzulassung erteilt worden ist, Änderungen vorgenommen wurden, die Einfluß auf den Vorgang der Abgabe und Zählung der Wählerstimmen besitzen, ohne daß eine neue Bauartzulassung beantragt oder ein Prüfungsergebnis nach Absatz 3 vorgelegt worden ist, kann das Bundesministerium des Innern die betreffenden Wahlgeräte auf Kosten der Gerätebesitzer von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt prüfen lassen. Das Prüfungsergebnis wird den Gerätebesitzern und dem Hersteller mitgeteilt.

(5) Das Bundesministerium des Innern macht die Bauartzulassung im Bundesanzeiger bekannt.

(6) Ist die Bauartzulassung eines Wahlgerätes erteilt, muß der Inhaber der Bauartzulassung jedem in den Verkehr gebrachten Wahlgerät eine Erklärung über die Baugleichheit des mit dem in der Bauartzulassung nach Absatz 5 identifizierten, von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt geprüften Baumusters (Baugleichheitserklärung) beifügen.

§ 3 Rücknahme, Erlöschen und Widerruf der Bauartzulassung
Retirada, caducidad y revocación de la homolgación

(1) Das Bundesministerium des Innern kann die Bauartzulassung zurücknehmen, wenn bei ihrer Erteilung die in § 2 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen nicht vorgelegen haben.

(2) Die Bauartzulassung erlischt für Wahlgeräte, an denen oder an Teilen von denen Änderungen vorgenommen wurden, die Einfluß auf den Vorgang der Abgabe und Zählung der Wählerstimmen besitzen.

(3) Das Bundesministerium des Innern kann die Bauartzulassung widerrufen, wenn die Wahlgerätebauart den Rechtsvorschriften für Wahlen zum Bundestag nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann auch ausgesprochen werden, wenn sich nachträglich herausstellt, daß die Wahlgerätebauart den Erfordernissen der Durchführung von Wahlen zum Bundestag nicht entspricht.

(4) Für die Rücknahme, das Erlöschen und den Widerruf einer Bauartzulassung gilt § 2 Abs. 5 entsprechend.

§ 4 Genehmigung der Verwendung von Wahlgeräten
Autorización para el uso de aparatos para votar

(1) Die Verwendung von Wahlgeräten mit zugelassener Bauart bedarf vor jeder Wahl der Genehmigung. Über die Genehmigung der Verwendung von Wahlgeräten einer bestimmten Ein Bauart entscheidet das Bundesministerium des Innern nach Bestimmung des Wahltages. Die Genehmigung gilt auch für Nachwahlen, Wiederholungswahlen und Ersatzwahlen. Sie kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden.

(2) Das Bundesministerium des Innern teilt die Entscheidung über die Verwendung von Wahlgeräten den Innenministern/-senatoren der Länder mit und macht sie im Bundesanzeiger bekannt.

Zweiter Abschnitt
Durchführung der Wahl zum Bundestag und zum Europäischen Parlament mit Wahlgeräten
Desarrollo de la elección al Bundestag y al Parlamento Europeo con los aparatos para votar

§ 5 Geltung der Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung
Validez del reglamento de elecciones federales y el de las elecciones al Parlamento europeo

Soweit sich aus den Vorschriften dieser Verordnung nicht etwas anderes ergibt, gelten auch bei der Verwendung von Wahlgeräten die Vorschriften der Bundeswahlordnung oder der Europawahlordnung.

§ 6 Wahlbekanntmachung der Gemeindebehörden
Anuncio de elecciones de las autoridades municipales

Die Gemeindebehörde weist in der Wahlbekanntmachung über § 48 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder § 41 Abs. 1 der Europawahlordnung hinaus darauf hin, in welchen Wahlbezirken Wahlgeräte verwandt werden. Dem Abdruck der Wahlbekanntmachung ist neben dem Stimmzettel eine Abbildung der Seite des Wahlgerätes, an der der Wähler seine Stimme abgeben kann, nebst gerätespezifischer Darstellung der Wahlvorschläge (§ 8 Abs. 2) beizufügen.

§ 7 Überprüfung der Wahlgeräte und Einweisung der Wahlvorsteher
Prueba de los aparatos para votar e instrucción del Comisario electoral local

(1) Die Gemeindebehörde darf am Wahltag nur Wahlgeräte verwenden, die nach Bestimmung des Wahltages an Hand der Bedienungsanleitungen und Wartungsvorschriften vom Hersteller oder der Gemeinde überprüft worden sind und deren Funktionstüchtigkeit festgestellt worden ist. Setzt die ordnungsgemäße Inbetriebnahme eines rechnergesteuerten Wahlgerätes den Einsatz externer Datenträger voraus, so hat die Gemeindebehörde für deren ordnungsgemäße Verwendung Sorge zu tragen.

(2) Der Kreiswahlleiter oder sein Beauftragter kann die von der Gemeindebehörde zur Wahl vorgesehenen Wahlgeräte und externe Datenträger überprüfen, die Beseitigung von Mängeln anordnen oder einzelne Wahlgeräte für die Verwendung sperren.

(3) In Wahlbezirken, in denen Wahlgeräte verwandt werden, hat die Gemeindebehörde die Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter vor der Wahl mit den Wahlgeräten vertraut zu machen und sie in deren Bedienung einzuweisen.

§ 8 Ausstattung des Wahlvorstandes
Asignación de materiales para la Junra electoral local

(1) Die Gemeindebehörde übergibt dem Wahlvorsteher vor Beginn der Wahlhandlung außer den in § 49 der Bundeswahlordnung oder § 42 der Europawahlordnung aufgeführten Gegenständen

1. die benötigten Wahlgeräte mit den jeweils dazugehörenden Schlüsseln und dem sonstigen Zubehör,

2. eine Abbildung der Seite des Wahlgerätes, an der der Wähler seine Stimme abgeben kann, nebst gerätespezifischer Darstellung der Wahlvorschläge und einer Anleitung zur Stimmabgabe mit dem Wahlgerät,

3. die benötigten Exemplare der Bedienungsanleitung,

4. Material zum Versiegeln jedes Wahlgerätes und des Zubehörs,

5. einen Abdruck dieser Verordnung,

6. eine Baugleichheitserklärung des Herstellers nach § 2 Abs. 6.

(2) Jedes Wahlgerät, im besonderen alle Einstellungen und Vorrichtungen, muß sich in dem für den Beginn einer Wahl ordnungsgemäßen Zustand befinden und dem amtlichen Stimmzettel entsprechend beschriftet sein, wobei auf die Möglichkeit der Abgabe ungültiger Stimmen hingewiesen sein muß.

§ 9 Wahlzelle
Cabina electoral

(1) Jedes Wahlgerät ist in der Wahlzelle so aufzustellen, daß jeder Wähler seine Stimmen unbeobachtet abgeben kann.

(2) Die gerätespezifische Darstellung der Wahlvorschläge bei Bundestagswahlen ist so anzuordnen, daß sich die Wahlvorschläge für die Erststimmen vom Wähler aus gesehen links oder oben befinden.

§ 10 Eröffnung der Wahlhandlung
Iniciación del acto electoral

(1) Der Wahlvorstand stellt vor Beginn der Stimmabgabe fest, daß

1. der Inhalt der gerätespezifischen Darstellung der Wahlvorschläge mit dem amtlichen Stimmzettel übereinstimmt,

2. eine Abbildung der Seite des Wahlgerätes, an der der Wähler seine Stimme abgeben kann, nebst gerätespezifischer Darstellung der Wahlvorschläge und einer Anleitung zur Stimmabgabe mit dem Wahlgerät im Wahlraum aufgehängt sind,

3. sämtliche Zähl- und Speichervorrichtungen für die Stimmabgabe auf Null stehen oder gelöscht sind,

4. nicht benötigte Zähl- und Speichervorrichtungen für die Stimmabgabe gesperrt sind und

5. die zur Aufnahme von Wahlmarken bestimmten Behälter leer sind, soweit bei der Benutzung des Gerätes Wahlmarken verwendet werden.

(2) Der Wahlvorsteher verschließt das benötigte Wahlgerät oder dessen Zähl- und Speichervorrichtungen. Ein Verwenden der Schlüssel ist bis zum Schluß der Wahlhandlung nicht gestattet, außer wenn das Wahlgerät zum Zwecke der Fortsetzung der Wahl ohne Gefahr des Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen gemäß Bedienungsanleitung in einen Grundzustand gebracht werden muß. Dies gilt auch für die zur Aufnahme von Wahlmarken bestimmten Behälter. Die Schlüssel für das Wahlgerät oder dessen Zähl- und Speichervorrichtungen sind bis zur Beendigung der Wahlhandlung getrennt vom Wahlvorsteher und anderen Mitgliedern des Wahlvorstandes aufzubewahren.

§ 11 Stimmabgabe und Vermerk über Stimmabgabe
Emisión de votos y apunte de la emisión del voto

(1) Für die Stimmabgabe an den Wahlgeräten gelten die §§ 56 und 58 der Bundeswahlordnung oder die §§ 49 und 51 der Europawahlordnung mit den in den Absätzen 2 bis 5 genannten Maßgaben.

(2) Nach Betreten des Wahlraumes begibt sich der Wähler an den Tisch des Wahlvorstandes und nennt seinen Namen. Dabei soll er die Wahlbenachrichtigung abgeben. Auf Verlangen hat er sich über seine Person auszuweisen.

(3) Sobald der Schriftführer den Namen des Wählers im Wählerverzeichnis gefunden und die Wahlberechtigung festgestellt hat, gibt der Wahlvorsteher oder das von ihm bestimmte Mitglied des Wahlvorstandes die Vorrichtungen zur Stimmabgabe frei, wenn der vorausgegangene Wähler die Wahlzelle verlassen hat. Nach der Freigabe begibt sich der Wähler in die Wahlzelle und gibt seine Stimme(n) ab. Gleichzeitig vermerkt der Schriftführer im Wählerverzeichnis die Stimmabgabe in der dafür bestimmten Spalte. Für dieselbe Wahl muß immer dieselbe Spalte benutzt werden. Der Wahlvorstand achtet darauf, daß sich immer nur ein Wähler und dieser nur solange wie notwendig in der Wahlzelle aufhält.

(4) Der Wahlvorsteher oder das von ihm bestimmte Mitglied des Wahlvorstandes überprüft an Hand der Kontrollvorrichtungen, ob der Wähler gewählt hat und die Vorrichtungen zur Stimmabgabe sodann wieder gesperrt sind. Unterbleibt die Stimmabgabe, so ist der Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis zu streichen und in der Spalte Bemerkungen "Nichtwähler" oder "N" einzutragen. Unterbleibt bei Bundestagswahlen die Abgabe der Erst-

oder der Zweitstimme, so gilt die nichtabgegebene Stimme als ungültig. Über diese nichtabgegebenen Erst- und Zweitstimmen ist je eine Zählliste zu führen.

(5) Werden an einem Wahlgerät während der Wahl Funktionsstörungen angezeigt, die ohne Gefahr eines vorzeitigen Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen behoben werden können, so kann der Wahlvorstand solche Störungen gemäß Bedienungsanleitung beheben. Treten an einem Wahlgerät während der Wahl Störungen auf, die gemäß Bedienungsanleitung nicht auf einfache Weise und nicht ohne Gefahr für das Bekanntwerden oder Löschen der bereits abgegebenen Stimmen behoben werden können, so kann der Wahlvorstand die Fortsetzung der Wahl mit einem anderen Wahlgerät beschließen, wenn dies ohne nennenswerte Verzögerung und ohne Gefährdung des Wahlgeheimnisses möglich ist. Jede Störung an einem Wahlgerät oder die Fortsetzung der Wahl mit einem anderen Wahlgerät ist in der Wahlniederschrift zu vermerken. § 8 Abs. 2 und § 10 finden Anwendung. Andernfalls ist die Wahl mit Stimmzetteln nach den allgemeinen Vorschriften fortzusetzen. In diesem Fall ist ein Wahlgerät gegen jede weitere Stimmabgabe zu sperren und die Sperrung, sofern diese rückgängig gemacht werden kann, zu versiegeln.

§ 12 Schluß der Wahlhandlung
Cierre del acto del voto

Der Wahlvorsteher hat nach Schließung der Wahlhandlung jedes Wahlgerät oder die Stimmenspeicher gegen jede weitere Stimmabgabe zu sperren und die Sperrung, sofern diese rückgängig gemacht werden kann, zu versiegeln.

§ 13 Zählung der Wähler
Recuento de votantes

Vor dem Ablesen der einzelnen Anzeigen der von einem Wahlgerät gezählten Stimmen werden zur Feststellung der Zahl der Wähler die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und die Zahl der eingenommenen Wahlscheine zusammengezählt. Sodann werden an jedem verwendeten Wahlgerät die insgesamt angezeigten Zahlen für die Erst- und Zweitstimmen abgelesen und die sich aus den Zähllisten ergebenden Zahlen der nichtabgegebenen Erst- und Zweitstimmen (§ 11 Abs. 4 Satz 3 und 4) jeweils hinzugezählt. Ergibt sich auch nach wiederholter Zählung eine Abweichung zwischen der Zahl der Stimmabgabevermerke einschließlich der eingenommenen Wahlscheine und den nach Satz 2 festgestellten Erst- und Zweitstimmen, so ist dies in der Wahlniederschrift zu vermerken, und, soweit möglich, zu erläutern

§ 14 Zählung der Stimmen
Recuento de votos

(1) Der Schriftführer trägt die an jedem verwendeten Wahlgerät angezeigten oder ausgedruckten Zahlen der Reihenfolge nach in die Zählkontrollvermerke der Wahlniederschrift ein, soweit nicht ein Ausdruck selbst als Zählkontrollvermerk zu verwenden ist.

(2) Die Zählung der Stimmen erfolgt nach den Maßgaben der Nummer 3 der Anlage 2 oder 3.

(3) Der Wahlvorsteher oder das von ihm bestimmte Mitglied des Wahlvorstandes stellt sodann durch lautes Ablesen der einzelnen Anzeigen fest die Zahl der an den Wahlgeräten

1. insgesamt abgegebenen Erststimmen,

2. insgesamt abgegebenen Zweitstimmen,

3. für jeden Bewerber abgegebenen Stimmen (Erststimmen),

4. für jede Landesliste abgegebenen Stimmen (Zweitstimmen),

5. abgegebenen ungültigen Erst- und Zweitstimmen.

In entsprechender Reihenfolge werden die für die Wahlen zum Europäischen Parlament abgegebenen Stimmen festgestellt. Die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes überzeugen sich von der Richtigkeit dieser Feststellung und ihrer Übertragung in die Wahlniederschrift.

(4) Den abgegebenen ungültigen Erst- und Zweitstimmen (Absatz 3 Satz 1 Nr. 5) sind die in der Zählliste aufgeführten gemäß § 11 Abs. 4 Satz 3 ungültigen Stimmen hinzuzurechnen.

(5) Stimmt die Summe der angezeigten einzelnen Zählergebnisse nicht mit der angezeigten Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen überein, so hat der Wahlvorstand die Verschiedenheit unter Zuhilfenahme der Kontrollvorrichtung des Wahlgerätes und der Bedienungsanleitung darzustellen und in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(6) (weggefallen)

§ 15 Wahlniederschrift
Escrutinio electoral

(1) Über die Wahlhandlung, die Ermittlung und die Feststellung des Wahlergebnisses ist vom Schriftführer eine Wahlniederschrift nach dem Muster der Anlage 2 oder 3 zu erstellen. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu genehmigen und von ihnen zu unterschreiben. Verweigert ein Mitglied des Wahlvorstandes die Unterschrift, so ist der Grund hierfür in der Wahlniederschrift zu vermerken. Beschlüsse nach § 11 Abs. 5 und nach § 56 Abs. 7 der Bundeswahlordnung oder § 49 Abs. 7 der Europawahlordnung sowie Beschlüsse über Anstände bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sind in der Wahlniederschrift zu vermerken. Der Wahlniederschrift sind beizufügen:

1. Zähllisten für die nichtabgegebenen Erst- oder Zweitstimmen (§ 11 Abs. 4 Satz 3 und 4),

2. Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat (§ 59 der Bundeswahlordnung oder § 52 der Europawahlordnung) und

3. Zählkontrollvermerke oder die von einem Wahlgerät ausgedruckten Ergebnisse (§ 14 Abs. 1).

(2) Wird die Wahl mit Stimmzetteln fortgesetzt (§ 11 Abs. 5), so ist hierüber eine besondere Wahlniederschrift nach dem Muster der Anlage 28 der Bundeswahlordnung oder Anlage 25 der Europawahlordnung aufzunehmen. Die Wahlniederschrift nach Absatz 1 ist nach Schluß der Wahlhandlung abzuschließen; ihr Ergebnis ist in die Wahlniederschrift nach Satz 1 zu übernehmen.

(3) Nach Ermittlung des Wahlergebnisses ist jedes Wahlgerät zu schließen und zu versiegeln. Bei Geräten oder bei herausnehmbaren Stimmenspeichern, bei denen eine Entsperrung in geschlossenem Zustand nicht möglich ist, genügt die Versiegelung und Kennzeichnung des Behältnisses, in dem sich die Schlüssel oder Stimmenspeicher befinden.

§ 16 Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen und der Wahlgeräte
Transferencia y custodia de actas electorales y aparatos para votar

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgaben beendet, so gibt der Wahlvorsteher der Gemeindebehörde

1. die Wahlgeräte nebst Schlüsseln und Zubehör,

2. das Wählerverzeichnis und

3. die ihm sonst zur Verfügung gestellten Gegenstände und Unterlagen,

4. die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen

zurück und händigt ihr die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die eingenommenen Wahlscheine aus.

(2) Wahlvorsteher, Gemeindebehörde und Kreiswahlleiter haben sicherzustellen, daß die eingesetzten Wahlgeräte oder deren herausgenommene Stimmenspeicher und die Wahlniederschrift mit den Anlagen bis zur Aufhebung der Sperrung und Versiegelung der eingesetzten Wahlgeräte oder der herausgenommenen Stimmenspeicher Unbefugten nicht zugänglich sind.

§ 17 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis
Proclamación de los resultados electorales en la circunscripción electoral

(1) Ergeben sich Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts, der Wahlergebnisermittlung oder der Wahlniederschrift, hat der Kreiswahlleiter selbst oder durch einen Beauftragten vor der Feststellung des Wahlergebnisses durch den Kreiswahlausschuß die Übereinstimmung der angezeigten oder ausdruckbaren Zählergebnisse mit den Eintragungen in der Wahlniederschrift in Gegenwart von mindestens zwei Zeugen zu überprüfen und dies in der Wahlniederschrift zu bescheinigen. Danach sind die Geräte oder die Stimmenspeicher wieder zu versiegeln. § 15 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Der Kreiswahlleiter hat die in den Fällen des § 14 Abs. 4 vom Wahlvorstand getroffene Entscheidung zu überprüfen. Der Kreiswahlausschuß kann abweichend von der Entscheidung des Wahlvorstandes beschließen. Ungeklärte Bedenken vermerkt er in der Niederschrift über die Sitzung des Kreiswahlausschusses.

(3) Nach Feststellung des Wahlergebnisses kann der Landeswahlleiter zulassen, daß die Sperrung und Versiegelung der Wahlgeräte oder der Stimmenspeicher aufgehoben werden, wenn die Zählergebnisse der Wahlgeräte nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren von Bedeutung sein können.

§ 18 Übergangsbestimmung
Disposiciones transitorias

Für Wahlgeräte einer Bauart, die bereits für die Wahlen zum 14. Deutschen Bundestag oder die Europawahlen 1994 zugelassen worden ist, gilt die Bauartzulassung im Rahmen des jeweiligen Zulassungserlasses des Bundesministeriums des Innern allgemein für Wahlen zum Deutschen Bundestag oder Europawahlen als erteilt. § 8 Abs. 1 Nr. 6 ist auf diese Wahlgeräte nicht anzuwenden.

§ 19
(weggefallen)

§ 20 Inkrafttreten
Entrada en vigor

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Anlage 1 (zu § 2) Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten
Directrices para la construcción de aparatos para votar
http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlgv/anlage_1_24.html

Anlage 2 (zu § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 1 Satz 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlgv/anlage_2_25.html

Anlage 3 (zu § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 1 Satz 1)
http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlgv/anlage_3_26.html

Wahlprüfungsgesetz (WPrüfG)
Ley de control electoral

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 111-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. April 1995 (BGBl. I S. 582, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 6.6.2008 I 994

§ 1

(1) Über die Gültigkeit der Wahlen zum Bundestag entscheidet vorbehaltlich der Beschwerde gemäß Artikel 41 Abs. 2 des Grundgesetzes der Bundestag.

(2) Soweit eine Wahl für ungültig erklärt wird, sind die sich daraus ergebenden Folgerungen festzustellen.

§ 2

(1) Die Prüfung erfolgt nur auf Einspruch.

(2) Den Einspruch kann jeder Wahlberechtigte, jede Gruppe von Wahlberechtigten und in amtlicher Eigenschaft jeder Landeswahlleiter, der Bundeswahlleiter und der Präsident des Bundestages einlegen.

(3) Der Einspruch ist schriftlich beim Bundestag einzureichen und zu begründen; bei gemeinschaftlichen Einsprüchen soll ein Bevollmächtigter benannt werden.

(4) Der Einspruch muß binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem Wahltag beim Bundestag eingehen. Werden dem Präsidenten des Bundestages nach Ablauf dieser Frist in amtlicher Eigenschaft Umstände bekannt, die einen Wahlmangel begründen könnten, kann er innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden dieser Umstände Einspruch einlegen.

(5) Die Vorschriften gelten entsprechend beim späteren Erwerb der Mitgliedschaft.

(6) Wird der Einspruch zurückgenommen, kann der Bundestag das Verfahren einstellen.

§ 3

(1) Die Entscheidung des Bundestages wird durch den Wahlprüfungsausschuß vorbereitet.

(2) Der Wahlprüftungsausschuß besteht aus neun ordentlichen Mitgliedern, neun Stellvertretern und je einem ständigen beratenden Mitglied der Fraktionen, die in ihm nicht durch ordentliche Mitglieder vertreten sind. Der Bundestag kann aus der Mitte einer Vereinigung von Mitgliedern des Bundestages, die nach der Geschäftsordnung des Bundestages als parlametarische Gruppe anerkannt ist, zusätzlich ein beratendes Mitglied wählen. Der Wahlprüfungsausschuß wird vom Bundestag für die Dauer der Wahlperiode gewählt.

(3) Der Wahlprüfungsausschuß wählt mit Stimmenmehrheit aus seiner Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ältesten Mitglieds.

§ 4

Der Wahlprüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

§ 5

(1) Der Vorsitzende bestimmt für jeden Einspruch einen Berichterstatter.

(2) Der Ausschuß tritt in eine Vorprüfung ein, insbesondere darüber, ob der Einspruch form- und fristgerecht eingelegt ist. Durch die Vorprüfung ist der Verhandlungstermin so vorzubereiten, daß möglichst nach einem einzigen Verhandlungstermin die Schlußentscheidung erfolgen kann.

(3) Im Rahmen der Vorprüfung ist der Ausschuß berechtigt, Auskünfte einzuziehen und nach Absatz 4 Zeugen und Sachverständige vernehmen und beeidigen zu lassen, soweit deren Anwesenheit im Verhandlungstermin nicht erforderlich ist oder nicht zweckmäßig erscheint.

(4) Alle Gerichte und Verwaltungsbehörden haben dem Ausschuß Rechts- und Amtshilfe zu leisten. Bei Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen sind die Beteiligten des § 6 Abs. 2 eine Woche vorher zu benachrichtigen; sie haben das Recht, Fragen stellen zu lassen und den Vernommenen Vorhalte zu machen.

§ 6

(1) Vor der Schlußentscheidung ist in jeder Anfechtungssache Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen, wenn nicht alle Beteiligten nach Absatz 4 auf Anberaumung eines solchen Termins verzichtet haben.

(1a) Abweichend von Absatz 1 kann der Ausschuß von einer mündlichen Verhandlung absehen, wenn die Vorprüfung ergibt, daß

1. der Einspruch nicht fristgerecht eingelegt worden ist,

2. der Einspruch den Vorschriften des § 2 Abs. 3 nicht entspricht und dem Mangel innerhalb einer vom Auschußvorsitzenden zu setzenden Frist nicht abgeholfen worden ist, oder 3. der Einspruch offensichtlich unbegründet ist.

(2) Zu den Verhandlungsterminen sind mindestens eine Woche vorher derjenige, der den Einspruch eingelegt hat, und der Abgeordnete, dessen Wahl angefochten ist, zu laden. Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich Einspruch eingelegt haben, genügt die Ladung eines Bevollmächtigten (§ 2 Abs. 3) oder eines der Antragsteller.

(3) Von dem Verhandlungstermin sind gleichzeitig zu benachrichtigen:

a) der Präsident des Bundestages,

b) der Bundesminister des Innern,

c) der Bundeswahlleiter,

d) der zuständige Landeswahlleiter,

e) die Fraktion des Bundestages, der der Abgeordnete angehört, dessen Wahl angefochten ist.

(4) Die nach den Absätzen 2 und 3 genannten Personen sind Beteiligte an dem Verfahren. Sie haben ein selbständiges Antragsrecht.

(5) Alle Beteiligten haben das Recht auf Akteneinsicht im Büro des Bundestages.

§ 7

(1) Zu Beginn der mündlichen Verhandlung trägt der Berichterstatter die Sachlage vor und berichtet über das Ergebnis der Vorprüfung. Alsdann erhalten auf Verlangen der Einsprechende (bei mehreren der Bevollmächtigte gemäß § 2 Abs. 3), die sonstigen Beteiligten und der Abgeordnete, dessen Wahl angefochten ist, das Wort.

(2) Etwa geladene Zeugen und Sachverständige sind zu hören und, falls der Ausschuß dies für geboten hält, zu beeidigen. Die Beteiligten haben das Recht, Zeugen und Sachverständigen Fragen vorlegen zu lassen. Nach Abschluß einer etwaigen Beweisaufnahme

ist den Beteiligten Gelegenheit zu Ausführungen zu geben. Das Schlußwort gebührt dem Anfechtenden.

(3) Über die Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen wiederzugeben sind.

§ 8

(1) Die mündliche Verhandlung findet öffentlich statt.

(2) Für die mündliche Verhandlung gilt § 4, doch sollen an ihr alle Mitglieder oder ihre Stellvertreter teilnehmen.

(3) Der Vorsitzende hat in der mündlichen Verhandlung dle Befugnisse, die sich aus dersinngemäßen Anwendung der für den Zivilprozeß geltenden Bestimmungen ergeben.

§ 9

Für das gesamte Verfahren sind die für den Zivilprozeß geltenden Bestimmungen entsprechend anzuwenden auf Fristen, Ladungen, Zustellungen, Vereidigungen und die Rechte und Pflichten von Zeugen und Sachverständigen.

§ 10

(1) Der Wahlprüfungsausschuß berät geheim über das Ergebnis der Verhandlung.

(2) An der Schlußberatung können nur diejenigen ordentlichen und beratenden Mitglieder des Ausschusses oder ihre Stellvertreter teilnehmen, die der mündlichen Verhandlung beigewohnt haben.

(3) Bei der Schlußentscheidung gilt Stimmenthaltung als Ablehnung.

§ 11

Der Beschluß des Ausschusses ist schriftlich niederzulegen; er muß dem Bundestag eine Entscheidung vorschlagen. Diese muß über die Gültigkeit der angefochtenen Wahl und die sich aus einer Ungültigkeit ergebenden Folgerungen bestimmen. Der Beschluß hat die wesentlichen Tatsachen und Gründe, auf denen die Entscheidung beruht, anzugeben. Wegen der Einzelheiten ist eine Bezugnahme auf den Aktenitihalt zulässig.

§ 12

Der Beschluß ist als Antrag des Wahlprüfungsausschusses an den Bundestag zu leiten und spätestens drei Tage vor der Beratung im Bundestag an sämtliche Abgeordnete zu verteilen. Bei der Beratung kann der Antrag durch mündliche Ausführungen des Berichterstatters ergänzt werden.

§ 13

(1) Der Bundestag beschließt über den Antrag des Ausschusses mit einfacher Mehrheit. Soweit er ihm nicht zustimmt, gilt er als an den Ausschuß zurückverwiesen. Dabei kann der Bundestag dem Ausschuß die Nachprüfung bestimmter tatsächlicher oder rechtlicher Umstände aufgeben.

(2) Der Ausschuß hat nach emeuter mündlicher Verhandlung dem Bundestag einen neuen Antrag vorzulegen. Dieser Antrag kann nur als gelehnt werden durch Annahme eines anderen Antrags, der den Vorschriften des § 11 genügt.

(3) Der Beschluß des Bundestages ist den Beteiligten (§ 6 Abs. 2 und 3) mit einer Rechtsmittel-belehrung zuzustellen.

§ 14

Ergeben sich Zweifel, ob ein Abgeordneter im Zeitpunkt der Wahl wählbar war, so kann auch nach Ablauf der Einspruchsfrist (§ 2 Abs. 4) der Präsident des Bundestages Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl einlegen. Er muß dies tun, wenn eine Minderheit von einhundert Abgeordneten es verlangt.

§ 15

Nach den Vorschriften dieses Gesetzes ist auch zu verfahren, wenn darüber zu entscheiden ist, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft nachträglich verloren hat (Artikel 41 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes). Der Antrag auf Entscheidung des Bundestages kann mit Ausnahme der Fälle, in denen der Ältestenrat oder der Präsident des Bundestages über den Verlust der Mitgliedschaft entschieden hat (§ 47 Abs. 1 und 3 des Bundeswahlgesetzes), jederzeit gestellt werden.

§ 16

(1) Stellt der Bundestag in den Fällen, in denen über den Verlust der Mitgliedschaft im Wahlprüfungsverfahren zu entscheiden ist (§ 47 Abs. 1 Nr.1 und 3 des Bundeswahlgesetzes), den Verlust fest, so behält der Abgeordnete seine Rechte und Pflichten bis zur Rechtskraft der Entscheidung.

(2) Der Bundestag kann jedoch mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschließen, daß der Abgeordnete bis zur Rechtskraft der Entscheidung nicht an den Arbeiten des Bundestages teilnehmen kann.

(3) Wird gegen die gemäß Absatz 1 ergangene Entscheidung des Bundestages Beschwerde eingelegt, so kann das Bundesverfassungsgericht auf Antrag des Beschwerdeführers den gemäß Absatz 2 ergangenen Beschluß durch einstweilige Anordnung aufheben oder, falls ein solcher Beschluß nicht gefaßt worden ist, auf Antrag einer Minderheit des Bundestages, die wenigstens ein Zehntel seiner Mitglieder umfaßt, eine Anordnung gemäß Absatz 2 treffen.

§ 17

(1) Von der Beratung und Beschlußfassung im Wahlprüfungsverfahren ist der Abgeordnete ausgeschlossen, dessen Wahl zur Prüfung steht.

(2) Dies gilt nicht, wenn in einem Verfahren die Wahl von mindestens zehn Abgeordneten angefochten wird.

§ 18

Für die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht.

§ 19

(1) Die Kosten des Verfahrens beim Bundestag trägt der Bund.

Dem in nichtamtlicher Eigenschaft Einsprechenden können notwendige Auslagen erstattet werden, wenn dem Einspruch stattgegeben oder der Einspruch nur deshalb zurückgewiesen wurde, weil der geltend gemachte Mangel keinen Einfluß auf das Wahlergebnis gehabt hat.

(2) Über die Erstattung von Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 ist in dem Beschluß des Bundestages zu entscheiden.

§ 20

(gestrichen)

§ 21

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

II.3. Documentación parlamentaria

Bericht zu Prüfbitten zur Änderung von Wahlrechtsvorschriften
Informe sobre las propuestas de revisión de disposiciones de derecho electoral

16. Wahlperiode 16. 05. 2008
16ª Legislatura, 16 de mayo de 2008

Zugeleitet mit Schreiben des Innern vom 14. Mai 2008 gemäß Beschluss vom 5. Juli 2007 (Bundestagsdrucksachen 16/1800 und 16/5700).

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Das Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetenrechts vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 394) enthält die unfangreichste Novellierung des Bundeswahlgesetzes in den letzten 20 Jahren. Der Gesetzgeber hat damit zum Ausdruck gebracht, welche Änderungen des Rechts der Bundestagswahl er auf der Gesetzesebene für erforderlich hält. Die nachfolgenden Ausführungen gehen daher verstärkt auf Prüfbitten ein, die sich auf Maßnahmen unterhalb der Gesetzesebene beziehen.

Zu den Prüfbitten auf Bundestagsdrucksache 16/1800:

Zur Prüfbitte gem. 1. Anstrich, ob durch geeignete Maßnahmen – etwa durch einen Beitritt zum CIEC-Übereinkommen Nr. 8 vom 10. September 1964, den Abschluss sonstiger zum Austausch von Einbürgerungsmitteilungen verpflichtender völkerrechtlicher Verträge oder die Einführung einer Mitteilungspflicht für Deutsche, die eine ausländische Staatsangehörigkeit angenommen haben – sichergestellt werden kann, dass keine Personen an Bundestagswahlen teilnehmen, die gemäß § 25 Abs. 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes durch Erlangung einer ausländischen Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit und damit das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag verloren haben.

Seit dem 1. November 2007 sind Personen, die eine ausländische Staatsangehörigkeit erwerben, verpflichtet, dies den deutschen Behörden anzuzeigen; eine Verletzung der Anzeigepflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Dies ist eine Folge der Neuregelungen in § 15 Nr. 4 und § 25 Abs. 2 Nr. 3 des Passgesetzes (PassG) durch das Gesetz zur Änderung des Passgesetzes und anderer Gesetze vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1566). Diese Bestimmungen tragen nunmehr zu einer Verbesserung der Kenntnislage deutscher Behörden hinsichtlich des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit bei.

Zu dem Problem des Rückerwerbs der früheren ausländischen Staatsangehörigkeit durch eingebürgerte Deutsche im Inland mit der Folge des automatischen Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit (§ 25 Abs. 1 Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes [StAG]) ist weiterhin beabsichtigt, mit der Türkei als dem wichtigsten Herkunftsstaat von Einbürgerungsbewerbern ein Regierungsabkommen über den Austausch von Einbürgerungsmitteilungen zu schließen. Der Bundesminister des Innern hat dies anlässlich seiner Reise in die Türkei vom 3. bis 5. Februar 2008 gegenüber der türkischen Regierung angesprochen. Es wurde vereinbart, dass bereits begonnene fachliche Delegationsgespräche über ein entsprechendes bilaterales Abkommen fortgesetzt werden.

Einen Beitritt zum CIEC-Übereinkommen Nr. 8 vom 10. September 1964 hält das Bundesministerium des Innern nicht für erstrebenswert. Die Türkei hat dieses Übereinkommen am 9. Januar 2008 gekündigt. Bei den übrigen Vertragsstaaten handelt es

sich um EU-Mitgliedstaaten, bei deren Staatsangehörigkeitserwerb die deutsche Staatsangehörigkeit nicht verloren geht (§ 25 Abs. 1 Satz 2 StAG), so dass sich die Frage des Beitritts Deutschlands zu diesem Übereinkommen gar nicht mehr stellt. Ob aus der Kündigung des CIEC-Übereinkommens durch die Türkei Rückschlüsse auf die Bereitschaft der Türkei zum Abschluss eines bilateralen Abkommens mit Deutschland über den Austausch von Einbürgerungsmitteilungen gezogen werden kann, werden erst die kommenden Delegationsgespräche ergeben.

Zur Prüfbitte gem. 2. Anstrich, ob § 30 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG), § 45 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) dahin gehend zu ändern sind, dass aus den Angaben auf dem Stimmzettel auch das Geschlecht der Wahlbewerber eindeutig erkennbar wird.

Eine Kenntlichmachung des Geschlechts ist nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern allenfalls bei Wahlkreisbewerbern und -bewerberinnen zu erwägen. Deren Wahl mit der Erststimme ist in besonderem Maße personenbezogen, während bei der Wahl der Landesliste mit der Zweitstimme in erster Linie eine bestimmte Partei gewählt wird. Die hinter dem Wahlvorschlag stehenden Personen spielen hier eine weniger wichtige Rolle, was auch daran deutlich wird, dass nur die ersten fünf Drucksache 16/9253 –Bewerber namentlich auf dem Stimmzettel aufgeführt werden müssen und die Angabe von Beruf und Adresse – im Gegensatz zu den Kreiswahlvorschlägen – fehlt.

Bei den Kreiswahlvorschlägen geht im Regelfall bereits aus dem Vornamen des Bewerbers oder der Bewerberin das Geschlecht eindeutig hervor. Jedenfalls bei solchen mit deutscher Herkunft muss der Vorname, ggfs. in Verbindung mit einem weiteren Vornamen, das Geschlecht erkennen lassen (§ 262 Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden). Bleiben dennoch Zweifel, so ergibt sich häufig aus der bei den Kreiswahlvorschlägen aufzunehmenden Berufsbezeichnung das Geschlecht. Zudem dürften den Wählerinnen und Wählern die Wahlkreisbewerber und -bewerberinnen in der Regel durch Wahlwerbung bekannt sein, vielfach werden sie sich auch gezielt Informationen über sie einholen. Die Situation, dass Wählerinnen und Wähler sich an einer informierten Stimmabgabe gehindert sehen, weil sie auf dem Stimmzettel das Geschlecht eines Kreiswahlvorschlages nicht erkennen, dürfte in der Praxis kaum vorkommen. Allerdings könnten in Zukunft wegen des geänderten Staatsangehörigkeitsrechts und des damit verbundenen leichteren Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit vermehrt Bewerberinnen und Bewerber antreten, die einen Namen führen, der für den durchschnittlich informierten Wähler nicht ohne weiteres als weiblich oder männlich zu erkennen ist. In Verbindung mit einer geschlechtsneutralen Berufsbezeichnung ist in diesen Fällen das Geschlecht des Bewerbers aus dem Stimmzettel nicht erkennbar.

Das Bundesministerium des Innern wird dies weiter beobachten, sieht gegenwärtig aber keinen Regelungsbedarf. Zur Prüfbitte gem. 3. Anstrich, ob durch geeignete Maßnahmen, insbesondere Informationskampagnen, der unter den Wählerinnen und Wählern weit verbreiteten Unsicherheit über den konkreten Wahlvorgang, insbesondere über den Umgang mit Wahlschein und Wahlbrief bei der Urnenwahl, entgegengewirkt werden kann.

Aus Sicht des Bundesministeriums des Innern bedarf es keiner weitergehenden Information der Wählerinnen und Wähler über den Umgang mit Wahlschein und Wahlbrief bei der Urnenwahl. Die Informationen auf dem Wahlschein (Anlage 9 zu § 26 BWO) und auf dem Merkblatt zur Briefwahl (Anlage 12 zu § 28 Abs. 3 BWO) erteilt werden, sind eindeutig.

Auf dem Wahlschein heißt es:

„Herr/Frau … wohnhaft in … kann mit diesem Wahlschein an der Wahl in dem oben genannten Wahlkreis teilnehmen

1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des oben genannten Wahlkreises oder

2. durch Briefwahl."

Der Text auf dem Merkblatt zur Briefwahl lautet:

„Sie können an der Wahl teilnehmen:

1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises oder Reisepasses durch Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des auf dem Wahlschein bezeichneten Wahlkreises oder

2. gegen Einsendung des Wahlscheines an die für Sie zuständige, auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle des auf dem Wahlschein bezeichneten Wahlkreises durch Briefwahl." (Hervorhebungen im Original) Nach diesen Hinweisen sollte klar sein, dass eine Abgabe des Wahlbriefes im Wahllokal nicht zulässig ist. Weitergehende Informationen der Wählerinnen und Wähler über die Möglichkeiten der Wahlteilnahme mittels Wahlschein und Wahlbrief bei der Urnenwahl erscheinen auch deshalb nicht angezeigt, weil die Urnenwahl mit Wahlschein ausgesprochen selten vorkommt. Bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag 2005 haben lediglich 0,08 Prozent der Wahlberechtigten mit Wahlschein an der Urnenwahl teilgenommen. Personen, die wegen erwarteter Abwesenheit am Wahltag Briefwahlunterlagen beantragen, nehmen in aller Regel auch durch Absendung des Wahlbriefes an der Briefwahl teil, selbst wenn beispielsweise eine geplante Reise doch nicht stattfindet.

Wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang, dass die ehrenamtlichen Wahlhelfer auch in derartigen Sonderfällen in der Regel kompetent und hilfsbereit reagieren, was in dem der Prüfbitte zugrunde liegenden Fall offenbar geschehen ist. Das Bundesministerium des Innern wird, wie bei vorangegangenen Wahlen, auch vor der nächsten Wahl den Bundeswahlleiter sowie die Innenressorts der Länder bitten, auf eine wählerorientierte Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindebehörden sowie der ehrenamtlichen Wahlhelfer hinzuwirken. Zur Prüfbitte gem. 4. Anstrich, ob durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung der Vorgaben des § 32 Abs. 1 BWG, insbesondere des Verbots der Wahlwerbung unmittelbar vor dem Zugang zum Wahlraum, besser sichergestellt werden kann.

Das Bundesministerium des Innern sieht keinen Bedarf für ein Tätigwerden des Gesetz- oder Verordnungsgebers. Der Wortlaut des § 32 Abs. 1 BWG ist hinreichend normenklar; darüber hinaus waren diese Vorschrift sowie vergleichbare Vorschriften der Länder Gegenstand zahlreicher Entscheidungen der Wahlprüfungsausschüsse und der Gerichte (vgl. die Nachweise bei Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 7. Auflage 2002, § 32 BWG). Es ist nicht ersichtlich, dass eine Gesetzesänderung zu einer verbesserten Rechtsanwendung führen könnte.

Um die Befolgung der Vorschrift zu verbessern, käme eine Bußgeldbewehrung von Verstößen in Betracht. Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt allerdings, dass Tat und Sanktion in einem gerechten Verhältnis stehen müssen (BVerfGE 105, 135, 154 m. w. N.). Mittel des Ordnungswidrigkeitenrechts sollten nur bei solchen Rechtspflichten als Sanktion eingesetzt werden, aus deren nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Erfüllung sich erhebliche Nachteile für wichtige Gemeinschaftsinteressen ergäben (Leitsätze zur Erforderlichkeit bußgeldrechtlicher Sanktionen, insbesondere im Verhältnis zu Maßnahmen des Verwaltungszwangs, vom 2. März 1983, abgedruckt im Handbuch der Rechtsförmlichkeit, herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, 2. Auflage 1999, Anhang 2).

Zwar stellt die unbeeinflusste Stimmabgabe ein erhebliches Gemeinschaftsinteresse dar, durch die Wahlwerbung im unmittelbaren Zugangsbereich eines Wahlraumes doren allerdings

keine erheblichen Nachteile für dieses Gemeinschaftsinteresse, die eine Bußgeldbewehrung erforderlich machten. Dies zeigt insbesondere der Vergleich mit § 49a Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 32 Abs. 2 BWG. Nachdieser Vorschrift ist die Veröffentlichung von Wählerbefragungenvor Ablauf der Wahlzeit bußgeldbewehrt. Hintergrund ist, dass eine Veröffentlichung solcher Befragungen durch Massenmedien eine deutlich größere Zahl von Wählern beeinflussen kann als eine gegen § 32 Abs. 1 BWG verstoßende Wahlwerbung an einem Wahllokal und damit erhebliche Nachteile für wichtige Gemeinschaftsinteressen drohen.

Das Bundesministerium des Innern wird diese Prüfbitte zum Anlass nehmen, die Länder zu bitten, gegenüber den zuständigen Stellen auf eine strikte Einhaltung des § 32 Abs. 1 BWG zu drängen.

Zu den Prüfbitten auf Bundestagsdrucksache 16/5700: Zur Prüfbitte gem. 1. Anstrich, ob durch gesetzgeberische oder andere Maßnahmen die Ausübung des Wahlrechts für sich im Ausland aufhaltende Wahlberechtigte – etwa durch eine stärkere Einbindung der deutschen Auslandsvertretungen in die Vorbereitung und Durchführung der Wahl – vereinfacht werden kann.

Das Bundesministerium des Innern hat im Anschluss an die Bundestagswahl 2005 eingehend geprüft, welche Möglichkeiten es gibt, um die Wahlteilnahme für sich im Ausland aufhaltende Wahlberechtigte zu erleichtern. Nach seiner Auffassung wäre eine Urnenwahl in den Auslandsvertretungen mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand nicht nur für die Auslandsvertretungen, sondern vor allem für die wahlberechtigten Auslandsdeutschen verbunden. Für die meisten von ihnen ist die Wahlteilnahme per Briefwahl deutlich einfacher als eine Wahl in Botschaften oder Konsulaten, da so eine unter Umständen weite Anreise zu den Auslandsvertretungen entfällt. Für die wenigen Auslandsdeutschen, denen eine Stimmabgabe in einer Auslandsvertretung leichter fiele als eine Briefwahl, würde sich der hohe organisatorische Aufwand nicht rechtfertigen.

Die Wahl der Auslandsdeutschen müsste unter Zuordnung der Stimmzettel zu den Bundestagswahlkreisen erfolgen.

Logistisch problematisch wäre dabei, dass alle 226 Auslandsvertretungen genügend Stimmzettel für alle 299 Wahlkreise und darüber hinaus aktuelle Wählerverzeichnisse bereithalten müssten. Weiterhin müsste, um doppelte Stimmabgaben zu vermeiden, entweder vorher ein Wahlschein beantragt und bei der Wahl abgegeben werden oder aber die Auslandsvertretungen untereinander vernetzt werden, um die bereits erfolgten Stimmabgaben abzugleichen. Zudem müsste die Wahl früher abgeschlossen werden als in Deutschland, sofern nicht Verzögerungen bei der Ermittlung des vorläufigen amtlichen Ergebnisses in Kauf genommen werden.

Überlegungen, im Ausland lebenden Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen unmittelbar und ohne Antrag auf Eintragung in ein Wählerverzeichnis zuzusenden, führen nicht weiter. Bisher wird durch die vor jeder Wahl neu zu beantragende Aufnahme eines Wählers ins Wählerverzeichnis am letzten inländischen Wohnort sichergestellt, dass einige Wochen danach – bei der Versendung der Briefwahlunterlagen – eine aktuelle Anschrift verzeichnet ist. Der automatische Versand von Briefwahlunterlagen ohne vorher zu beantragende Eintragung in das Wählerverzeichnis würde voraussetzen, dass der für die Versendung der Briefwahlunterlagen zuständigen deutschen Stelle vor jeder Wahl die jeweils aktuelle Auslandsanschrift des Wählers bekannt ist. Dies bedürfte jedoch der Einführung einer gesetzlichen Meldepflicht für Auslandsdeutsche und der Einrichtung bzw. Bestimmung einer Behörde für deren Vollzug. Derzeit sind im Ausland lebende Deutsche nicht verpflichtet, Umzüge, Geburten eines Kindes oder Sterbefälle deutschen Behörden zu melden. Selbst wenn eine Meldepflicht für Auslandsdeutsche eingeführt würde, liefe sie mangels

Durchsetzbarkeit ins Leere. Das Instrumentarium des Ordnungswidrigkeitenrechts könnte, wenn überhaupt, nicht mit derselben Wirkung eingesetzt werden wie im Inland. Eine hinreichende Verlässlichkeit der Registerdaten wäre somit nicht gegeben. Es müsste befürchtet werden, dass ein Teil der versandten Briefwahlunterlagen seine Adressaten aufgrund veralteter Anschriften nicht erreicht und eventuell sogar in falsche Hände gerät. Auf einen vor jeder Wahl zu stellenden Antrag des Wählers auf Eintragung ins Wählerverzeichnis sollte daher nicht verzichtet werden.

Denkbar sind jedoch verbesserte Informationen für Auslandsdeutsche, um eine frühzeitige Stellung des Antrags auf Eintragung in das Wählerverzeichnis und rechtzeitige Absendung des Wahlbriefes zu ermöglichen. Hier werden derzeit zwei Möglichkeiten geprüft:

Zum einen entwickelt das Auswärtige Amt derzeit das Projekt „ELEFAND“ (elektronische Erfassung von Auslandsdeutschen). Ziel des Projektes ist die Erfassungmöglichst genauer, aktueller und rasch abrufbarer Daten der deutschen Staatsangehörigen, die im Bezirk der jeweiligen Auslandsvertretung leben. Die Datensammlung dient in erster Linie der Krisenvorsorge, d. h. der Information über Hilfsmaßnahmen im Katastrophenfall und der Vorbereitung und Koordinierung von Rettungsmaßnahmen Den Deutschen soll ermöglicht werden, die Eintragung online vorzunehmen. Es ist geplant, in die Antragsmaske eine Rubrik „Weitere Angaben“ aufzunehmen, mit denen das Einverständnis für die Verwendung der persönlichen Daten für eine persönliche Unterrichtung über die Voraussetzungen zur Teilnahme an jeweils bevorstehenden Wahlen zum Deutschen Bundestag sowie zum Europäischen Parlament erklärt wird. Auf diese Weise wird es möglich sein, die in ELEFAND erfassten Auslandsdeutschen nicht nur durch öffentliche Bekanntmachungen, sondern gezielt persönlich über bevorstehende Wahlen und Teilnahmemodalitäten zu unterrichten. Zum anderen wird infolge des Übergangs der Kompetenz für das Meldewesen auf den Bund durch die Föderalismusreform I bei den Überlegungen zu einem Bundesmeldegesetz geprüft, inwieweit auf der Grundlage von Meldedaten Deutsche auch nach ihrem Wegzug ins Ausland über Wahlen in Deutschland und die Möglichkeiten der Teilnahme unterrichtet werden können.

Ob sich beide Vorhaben realisieren lassen, und inwieweit sie bei einer nur freiwilligen Teilnahme Auslandsdeutscher zu wirklichen Erleichterungen bei der Wahlteilnahme führen, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Zur Prüfbitte gem. 2. Anstrich, ob das Wahlrecht dahingehend geändert werden sollte, dass bei Wahlen infolge einer Auflösung des Bundestages für einen Wahlvorschlag weniger Unterstützungsunterschriften beigebracht werden müssen als bei Wahlen nach dem regulären Ablauf der Wahlperiode.

In der Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses auf Bundestagsdrucksache 16/900 (dort Anlage 15) ist ausführlich und zutreffend dargelegt, dass die gegenwärtigen Regelungen des Bundeswahlgesetzes zu Quoren bei Unterstützungsunterschriften verfassungskonform sind. Eine Absenkung oder gar ein Verzicht auf Unterschriftenquoren stünde dem Gesetzgeber wohl grundsätzlich frei, wie es das Bundesverfassungsgericht für den ähnlich gelagerten Fall der Sperrklauseln entschieden hat (BVerfGE 82, 322, 338; vgl. auch Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 7. Auflage 2002, § 6 Rnr. 17). Das Landeswahlrecht in Schleswig-Holstein sieht im Falle von vorgezogenen Landtagswahlen ein um die Hälfte abgesenktes Quorum für Unterstützungsunterschriften vor (§ 35 LWG-SH).

Allerdings würde mit einer Absenkung des Quorums dessen Ziel, nicht ernsthafte und von vornherein aussichtslose Bewerbungen auszuschließen, um so einer Stimmenzersplitterung entgegenzuwirken, nicht mehr im gegenwärtigen Umfang erreicht. In diesem Zusammenhang

ist auch zu berücksichtigen, dass die Unterschriftensammlung dem Nachweis eines bereits vorhandenen Rückhalts in der Bevölkerung dienen soll. Die Unterstützung aus der Bevölkerung soll nicht erst anlässlich der Unterschriftensammlung kurz vor der Wahl erarbeitet werden. Insofern ist der Zeitraum, der für die Beschaffung der Unterschriften zur Verfügung steht, nicht von entscheidender Bedeutung.

Denn sowohl Parteien als auch Einzelbewerber, deren Ziel die Teilnahme an einer Bundestagswahl ist, müssen über einen längeren Zeitraum politische Arbeit leisten und dabei langfristig um Unterstützung durch die Bevölkerung werben. Die Gewinnung von Parteimitgliedern, Unterstützern und Interessenten ist eine Daueraufgabe.

Verfügt die Partei oder ein Einzelbewerber in diesem Sinne über ausreichend Rückhalt in der Bevölkerung, so ist die Sammlung von Unterschriften auch in einem kurzen Zeitraum möglich. Gelingt die Unterschriftensammlung dagegen nicht, so begründet dies auch bei kurzen Fristen die Vermutung, dass der ausreichende Rückhalt in der Bevölkerung nicht vorhanden ist, so dass der Ausschluss der Wahlbewerbung gerade dem Sinn des Unterschriftenerfordernisses entspricht. Jedenfalls haben bei der Bundestagswahl 2005 von 26 politischen Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Bundestagswahl beim Bundeswahlleiter angezeigt hatten und als Parteien anerkannt worden waren, 18 das Unterschriftserfordernis in einem oder mehreren Ländern erfüllt; bei der Bundestagswahl 2002 waren dagegen nur 23 Vereinigungen als Parteien anerkannt, von denen 17 das Unterschriftenquorum erfüllt haben. Außerdem wurden bei der Bundestagswahl 2005 von 2062 Kreiswahlvorschlägen insgesamt 283 Unterschriftenpflichtige zugelassen; 2002 waren dies 405 von 1 944.

Der Deutsche Bundestag hat in dem Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetengesetzes vom 17. März 2008 keine Absenkung der Unterschriftenquoren bei vorgezogenen Neuwahlen vorgesehen. Dies ist, wie ausgeführt, verfassungskonform und nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern auch sachgerecht.

Zur Prüfbitte gem. 3. Anstrich, ob das Wahlrecht dahin gehend geändert werden sollte, dass die Aufnahme von Parteifremden in Wahlvorschläge einer Partei ausgeschlossen oder stärker eingeschränkt wird oder zumindest ihre Grenzen klarer definiert werden. Das Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetengesetzes vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 394) sieht vor, dass sowohl als Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvorschlag als auch als Listenbewerber nur benannt werden kann, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist (§ 21 Abs. 1 Satz 1 BWG, sowie § 27 Abs. 5 i. V. m. § 21 Abs. 1 Satz 1 BWG). Die Aufstellung parteiloser Bewerber ist dagegen nach wie vor möglich. Zur Prüfbitte gem. 4. Anstrich, ob gesetzgeberische oder andere Maßnahmen angezeigt sind, um den in Wahleinsprüchen deutlich gewordenen Vorbehalten in Bezug auf den Einsatz von elektronischen Wahlgeräten Rechnung zu tragen.

An der grundsätzlichen Möglichkeit des Einsatzes von lokal eingesetzten Wahlgeräten sollte im Interesse der Städte und Gemeinden, die diese in Zeiten immer schwierigerer Gewinnung von Wahlhelfern einsetzen wollen, festgehalten werden. Wahlgeräte werden mit großer Akzeptanz bei Wählern und Wahlhelfern bereits seit 1961 – elektronische Geräte seit 1999 – eingesetzt. Erst seit der Bundestagswahl 2005 ist die Verwendung von Wahlgeräten in der Kritik, obwohl es keine nachgewiesenen oder auch nur ernsthaft behaupteten Manipulationen oder Manipulationsversuche an Wahlgeräten in Deutschland gab.

Aus der in den Niederlanden 2006 gelungenen Manipulation in experimenteller Umgebung kann nicht auf tatsächliche Manipulationen von realen Wahlen, nicht einmal auf reale Manipulationsmöglichkeiten in Deutschland geschlossen werden.

Einen absoluten technischen Schutz vor Wahlmanipulationen wird es nie geben. Jede Art der Wahl ist theoretisch manipulierbar, insbesondere wenn man – wie die Wahlgerätekritiker – von

einem so genannten Innentäter ausgeht, der über genügend finanzielle Mittel, technisches Know-how, Mittäter und ausreichend kriminelle Energie verfügt. Die wahlrechtlichen Regelungen sehen daher für jede Art der Wahl ein ganzes Bündel technischer und organisatorischer Sicherungsmaßnahmen vor, die ständiger Überprüfung und gegebenenfalls Verbesserung unterliegen.

Auf der Grundlage der in neun Jahren mit dem Einsatz elektronischer Wahlgeräte in Deutschland gesammelten Erfahrungen wird die Bundeswahlgeräteverordnung derzeit evaluiert und eine Novellierung vorbereitet. Die Novelle wird die Sicherheit des Einsatzes von Wahlgeräten weiter steigern. So ist u.a. derzeit vorgesehen,

– die Versiegelung/Verplombung der Wahlgeräte bzw. allgemein die gerätegebundenen Sicherungen zu verbessern und sie zwingend dauerhaft vorzuschreiben;

– die Geräte mit einem Begleitheft zur Protokollierung gerätebezogener Informationen und Aktivitäten auszustatten;

– die dauerhafte sichere Lagerung und den sicheren Transport der versiegelten oder verplombten bzw. Allgemein gesicherten Geräte und ihres Zubehörs zu regeln.

Bei der Novellierung wird möglichst auch die für dieses Jahr erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einer Wahlprüfungsbeschwerde zum Einsatz von Wahlgeräten bei der Bundestagswahl 2005 berücksichtigt werden.

Zur Prüfbitte gem. 5. Anstrich, ob zukünftig unter Berücksichtigung der derzeitigen Sach- und Rechtslage auch in elektronischer Form eingehende Wahleinsprüche als zulässig erachtet werden sollten.

I. § 2 Abs. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WahlPrG) sieht vor, dass der Wahleinspruch schriftlich eingelegt wird. Welche Anforderungen dabei an die Schriftform gestellt werden und ob auch elektronische Wahleinsprüche diesem Erfordernis genügen, ist nicht ausdrücklich geregelt. § 9 WPrüfG ordnet zwar in einer abschließenden Aufzählung die entsprechende Anwendung der Zivilprozessordnung (ZPO) für bestimmte Verfahrensaspekte an, allerdings sind Formvorschriften dabei nicht genannt. Der Wahlprüfungsausschuss hat das Schriftformerfordernis grundsätzlich als gewahrt angesehen, wenn der Einspruch per eigenhändig unterschriebenem Telefax eingegangen ist (Nachweise bei Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 7. Aufl., § 49, Rn. 18). Per E-Mail eingelegte Einsprüche wurden dagegen als unzulässig zurückgewiesen (mit ausführlicher Begründung in Bundestagsdrucksache 15/4250).

Eine allgemeine Definition der Schriftform gibt es nicht. Die entscheidenden Kriterien sind jedoch das Merkmal der eigenhändigen Unterschrift und die Verkörperung in einem Schriftstück. Allerdings werden insbesondere vom Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift allgemein Ausnahmen zugelassen. Entscheidend ist dann jeweils, dass der Urheber des Textes und die Ernstlichkeit seines Antrags aus dem Text hinreichend deutlich hervorgehen. So werden neben dem Brief in verschiedenen Bereichen auch andere Übermittlungsformen als schriftformwahrend angesehen, wie z.B. Telegramm, Telefax, Computerfax oder Funkfax (GemS-OBG NJW 2000, 2340, [2341]; Beschluss des BVerwG vom 30.03.2006, Az. 8 B 8/06; Zöller, Zivilprozessordnung Kommentar, 26. Auflage 2007, § 130 Rn. 18 ff.; Schoch/ Schmidt-Aßmann/Pietzner, Verwaltungsgerichtsordnung Kommentar, 15. Ergänzungslieferung 2007, § 81, Rn. 8 f.).

II. 1. Im Gegensatz zum Wahlprüfungsrecht ist in vielen anderen Rechtsgebieten ausdrücklich geregelt, welche Formen der elektronischen Kommunikation die Schriftform wahren. Teilweise hat eine Öffnung gegenüber der elektronischen Kommunikation stattgefunden, wobei regelmäßig besondere Anforderungen an das elektronische Dokument gestellt werden.

a. Im Wahlrecht wurde durch das Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetenrechts vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 394) in § 54 Abs. 2 BWG klargestellt, dass, soweit in dem Gesetz oder in der Bundeswahlordnung nichts anderes bestimmt ist, vorgeschriebene Erklärungen persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein und bei der zuständigen Stelle im Original vorliegen müssen. Die einzige Regelung zu elektronischer Kommunikation – abgesehen von den elektronischen Schnellmeldungen nach § 71 Abs. 2 BWO – enthält § 27 Abs. 1 BWO, wonach ein Wahlschein u. a. durch „E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form" beantragt werden kann.

b. Für den Bereich des Zivilrechts regelt § 126 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), dass die Schriftform grundsätzlich durch die elektronische Form ersetzt werden kann, es sei denn dies wird durch Gesetz ausgeschlossen.

Die elektronische Form ist in § 126a BGB geregelt. Ein Erfordernis der elektronischen Form ist, dass das elektronische Dokument mit einer elektronischen Signatur versehen werden muss.

c. Gleiches gilt im Verwaltungsverfahrensrecht (§ 3a Abs. 2 des erwaltungsverfahrensgesetzes [VwVfG]), und in einigen Bereichen des besonderen Verwaltungsrechts (z. B. § 11 Abs. 6 des Melderechtsrahmengesetzes, § 95a des Markengesetzes). In bestimmten Bereichen des Verwaltungsrechts ist dagegen die einfache E-Mail neben der Schriftform zugelassen (z. B. § 37 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, § 20 des Wehrpflichtgesetzes). Eine einfache E-Mail ist typischerweise dann zulässig, wenn auf die besondere Sicherheit der elektronischen Signatur verzichtet werden kann, weil Missbrauchsfälle und Schadensfolgen unwahrscheinlich sind (Schmitz, NVwZ 2003, 1437 [1439]).

d. Im Prozessrecht regeln die jeweiligen Verfahrensordnungen die Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form uneinheitlich. Voraussetzung hierfür ist zunächst die Zulassung dieser Form der Kommunikation durch Rechtsverordnung, etwa im Justizkommunikationsgesetz (JKomG vom 22. März 2005). Die Einreichung elektronischer Dokumente ist an allen fünf obersten Bundesgerichten (Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht), beim Bundespatentgericht (u. a. auf Grundlage des § 125a des Patentgesetzes) sowie bei einigen Landesgerichtsbarkeiten zugelassen. § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung,

§ 65a des Sozialgerichtsgesetzes und § 52a der Finanzgerichtsordnung sehen dabei zwingend die Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur oder eines „anderen sicheren Verfahrens" vor. § 130a ZPO und § 46b des Arbeitsgerichtsgesetzes enthalten hingegen lediglich eine Sollvorschrift in Bezug auf die Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur.

Im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gibt es keine die Schriftform des § 23 Abs. 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) ergänzende Vorschrift zur elektronischen Form. Die Einreichung von verfahrenseinleitenden Schriftsätzen vor dem Bundesverfassungsgericht per E-Mail wird in der Verwaltungspraxis des Bundesverfassungsgerichts und nach überwiegender Ansicht in der Literatur nicht als schriftformwahrend angesehen (Klein/Sennekamp, NJW 2007, 945, 954; a. A. Hartmann, NJW 2006, 1390 ff.).

e. Eine Sonderstellung nimmt in diesem Zusammenhang das Petitionsverfahren ein, als dort trotz eines ausdrücklichen (verfassungs-)rechtlichen Schriftformerfordernisses ohne Sonderbestimmungen zu elektronischer Kommunikation elektronisch eingereichte Petitionen als formwahrend angesehen werden. Artikel 17 des Grundgesetzes (GG) verlangt die Schriftform der Petition, was nach den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages grundsätzlich eine Namensunterschrift verlangt („Grundsätze des

Petitionsausschusses über die Behandlung von Bitten und Beschwerden [Verfahrensgrundsätze]“, 16. Wahlperiode, vom 6. April 2006, Nr. 4 [1]). Unter Ergänzung der Verfahrensgrundsätze hat der Petitionsausschuss allerdings zusätzlich einen Weg zur elektronischen Kommunikation eröffnet, indem über die Homepage des Deutschen Bundestages ein Online-Formular abrufbar ist, mit dem formwirksam eine Petition eingereicht werden kann. Der Petent hat dabei, ebenso wie bei einer Petition per Brief, seine Adresse anzugeben und am Ende des Formulars in bestimmte Textfelder Vor- und Familiennamen einzugeben; diese Textfelder stellen einen Ersatz für die handschriftliche Unterschrift dar. Das ausgefüllte Formular ist dann als Anhang einer E-Mail an den Deutschen Bundestag zu senden. Der Petitionsausschuss erkennt eine E-Mail, die das Online-Formular nicht enthält, nicht als formgerecht an (Verfahrensgrundsätze, Nr. 4 [1]). Allerdings wäre er wohl auch nicht gehindert, einfache E-Mails als ausreichend anzusehen (Schmitz, a. a. O., S. 1439., eingehend zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an Petitionen in elektronischer Form, Guckelberger, Neue Erscheinungen des Petitionsrechts – E-Petitionen und öffentliche Petitionen, DÖV 2008, 85 ff.). Das ausgefüllte Online- Formular hat gegenüber einer einfachen E-Mail keine formalen Besonderheiten, sondern sichert lediglich im Interesse der leichteren Bearbeitung der Petition das Vorliegen aller erforderlichen Angaben.

2. Der Umgang mit elektronischer Kommunikation ist somit für viele Rechtsgebiete und Verfahrensarten rechtlich geregelt. Nach diesen Regelungen wahren einfache E-Mails die Schriftform grundsätzlich nicht, sie sind jedoch zugelassen, wo die Schutzfunktion einer qualifizierten Signatur entbehrlich ist. Als einzig hier bekannte Ausnahme sind im Petitionsverfahren ohne weitere gesetzliche Regelung trotz Schriftformerfordernisses einfache, wenngleich formal standardisierte, E-Mails zugelassen.

III. Bei einer Prüfung, ob das Schriftformerfordernis in § 2 Abs. 3 WahlPrG dahingehend ausgelegt werden kann, dass auch eine einfache E-Mail formwahrend wirkt, muss sowohl das Wesen des Wahlprüfungsverfahrens als auch der Sinn und Zweck des Schriftformerfordernisses in Betracht gezogen werden.

1. Bei dem Wahlprüfungsverfahren handelt es sich um ein parlamentarisches Verfahren objektiver Rechtskontrolle, das grundsätzlich nicht auf die Überprüfung der Verletzung subjektiver Rechte abzielt (Kretschmer in:

Schmidt-Bleibtreu/ Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz, 11. Auflage 2008, Artikel 41, Rn. 4 f.). Es handelt sich um ein gesondertes Verfahren mit verfassungsrechtlichem Charakter, das nicht Artikel 19 Abs. 4 GG unterliegt (BVerfGE 14, 154, 155; 34, 81, 94; 66, 232, 234; Schreiber, a. a. O., § 49 Rn. 1 bis 5 m. w. N.;Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, Dissertation Köln, 1997, S. 347; a. A. Achterberg/ Schulte in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz Kommentar Bd. II, 5. Auflage 2005, Artikel 41, Rn. 12). Auch stellt es kein gerichtliches Verfahren i. S. v. Artikel 92 GG dar (Achterberg/ Schulte, a. a. O., Artikel 41 Rn. 53),zumal die Abgeordneten des Wahlprüfungsausschusses ineigener Angelegenheit tätig werden, so dass es an der richterlicher Tätigkeit immanenten Neutralität und Distanz fehlt (BVerfGE 103, 111, 139 f). Das Wahlprüfungsverfahren ist daher weder mit einem Artikel 19 Abs. 4 und 92 GG unterliegenden Gerichtsverfahren noch mit einem Verwaltungsverfahren vergleichbar. Mit dem Petitionsverfahren ist das Wahlprüfungsverfahren insofern vergleichbar, als es sich in beiden Fällen um Rechtswahrungunmittelbar durch den Deutschen Bundestag als Verfassungsorgan handelt. Allerdings dient das Wahlprüfungsverfahren der Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführungvon Wahlen und der korrekten Zusammensetzung des Deutschen Bundestags. Es stellt insoweit ein spezielles Sicherungsinstrument der Volkssouveränität dar (BVerfGE 85, 148, 158; Morlok in Dreier, Kommentar zum GG, 2. Auflage 2006, Artikel 41 Rn. 7) und hat damit per se einen Gegenstand von höchster Bedeutung.

Auch deswegen ist es, im Gegensatz zum Petitionsverfahren, nach einem gesetzlich geregelten Verfahren durchzuführen.

2. Wenn demnach das Wahlprüfungsverfahren mit den anderen unter I. genannten Rechtsgebieten und Verfahren nicht oder nur sehr eingeschränkt vergleichbar ist, so ist dadurch gleichwohl nicht ausgeschlossen, dass der Sinn und Zweck des Schriftformerfordernisses in § 2 Abs. 3 WahlPrG auch durch eine E-Mail erfüllt werden kann.

Bei Verfahrensanträgen ist Zweck der Schriftlichkeit insbesondere der Identitätsnachweis, d. h. der Nachweis, dass die Erklärung tatsächlich von dem Antragsteller stammt, und der Nachweis, dass die Erklärung mit seinem Willen in den Rechtsverkehr gebracht wurde und keinen unvollständigen Entwurf darstellt (GemS-OBG, a. a. O). Verfahrensvorschriften sind jedoch kein Selbstzweck und Ausnahmen sind daher möglich, sofern sich der Zweck der Vorschrift auf andere Weise erfüllen lässt (BVerwG, NJW 1995, 2121 [2122]). Grundsätzlich kann eine E-Mail die Funktionen einer Schriftform wohl ebenso erfüllen wie ein Brief oder ein Telefax. Auch bei diesen Übertragungsverfahren besteht immer die Gefahr, dass die enthaltene Erklärung nicht von dem angegebenen Verfasser herrührt oder das Verfahren nicht ernsthaft betrieben wird. Eine handschriftliche Unterschrift beseitigt diese Gefahren jedenfalls nicht. Dass bei einer E-Mail (zunächst) keine dauerhafte Wiedergabe in einem Schriftstück vorliegt, dürfte in Anbetracht der technischen Entwicklung ohne Bedeutung sein. Auch Telefaxe werden heutzutage zunächst elektronisch gespeichert, und können dann, ebenso wie eine E-Mail, ausgedruckt werden. Die Existenz bzw. das Absenden der E-Mail kann der Absender unter Umständen sogar durch die Einstellungen in seinem E-Mail- Programm nachweisen, was bei einem einfachen Brief in der Regel nicht der Fall ist. Auch in dieser Hinsicht ist eine E-Mail nicht weniger sicher als ein Brief oder Telefax.

Dort trägt der Absender ebenfalls das Risiko, dass sein Schreiben nicht bzw. nicht rechtzeitig ankommt.

IV. Trotz des Umstandes, dass es sich bei der Wahlprüfung um ein Verfahren sui generis handelt, dürfte eine E-Mail, die den Absender eindeutig erkennen lässt, in rechtlicher Hinsicht die wesentlichen Funktionen des Schriftformerfordernisses erfüllen. Es erscheint daher möglich, das Formerfordernis in § 2 Abs. 3 WahlPrG dahingehend auszulegen, dass es durch einen Wahleinspruch per E-Mail grundsätzlich gewahrt wird. Sofern sich der Wahlprüfungsausschuss dieser Auffassung anschließt, wäre eine entsprechende Klarstellung im Gesetz nahe liegend.

Zur Prüfbitte gem. 6. Anstrich, ob und ggfs. wie die Schulung der Wahlvorstände über den ordnungsgemäßen Ablauf der Urnenwahl und die anschließende Ermittlung des Wahlergebnisses verbessert werden könnte.

§ 6 Abs. 5 BWO bestimmt, dass die Gemeindebehörde die Mitglieder des Wahlvorstandes vor der Wahl so über ihre Aufgaben zu unterrichten hat, dass ein ordnungsmäßiger Ablauf der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gesichert ist. Nach Ansicht des Bundesministeriums des Innern ist die Rechtsvorschrift hinreichend klar gefasst.

Die Gemeinden kommen der Aufgabe der Schulung der Wahlhelferinnen und -helfer gewissenhaft nach. Allerdings muss bei der Planung von Schulungen berücksichtigt werden, dass die Wahlhelfer ein Ehrenamt ausüben und hierbei nicht über Gebühr belastet werden sollten.

Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der immer schwerer werdenden Gewinnung von Wahlhelfern. Die Schulung kann sich daher nicht mit allen nur denkbaren Fallkonstellationen befassen, sondern muss sich auf die erwartbaren Problemstellungen beschränken. Bei speziellen Sonderfragen können am Wahltag die jeweiligen Gemeindebehörden oder Kreis-,

Landes- und Bundeswahlleiter telefonisch kontaktiert werden. Zum anderen richtet sich der Schulungsbedarf nach dem Vorwissen der Wahlhelfer, so dass umfangreiche Schulungen nicht immer erforderlich sind (vgl. z. B. den in Anlage 17 zu Bundestagsdrucksache 15/5700 geschilderten Fall).

Das Bundesministerium des Innern wird diese Prüfbitte dennoch zum Anlass nehmen, bei den Gesprächen mit dem Bundeswahlleiter und den Landeswahlleitern vor der nächsten Bundestagswahl auf das Erfordernis einer gründlichen und effizienten Schulung der Wahlhelfer hinzuweisen.

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
Proyecto de ley de modificación de la ley federal electoral

Deutscher Bundestag Drucksache 16/1036

16. Wahlperiode 23. 03. 2006
16ª Legislatura, 23 de marzo de 2006

A. Problem und Ziel

Bei der letzten Bundestagswahl hat sich gezeigt, dass die wahlrechtlichen Folgen des Todes einer Wahlkreisbewerberin oder eines Wahlkreisbewerbers nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl, unbefriedigend geregelt sind.

Die nach dem geltenden Recht für diesen Fall im Wahlkreis vorgeschriebene Nachwahl als Erst- und Zweitstimmenwahl verzögert die Ermittlung und Feststellung derWahlergebnisse. Ferner wird in der Öffentlichkeit geltend gemacht, die Wählerinnen und Wähler dieses Wahlkreises hätten einen Informationsvorsprung und könnten deshalb durch taktisches Stimmverhalten stärker als die übrige Wählerschaft das Gesamtergebnis der Wahl beeinflussen.

Diese Probleme sind durch eine Änderung der Nachwahlregelungen im Bundeswahlgesetz lösbar. Mit der Änderung kann eine Fortentwicklung der Bestimmungen über die Bewerberaufstellung und die Nachfolge von Abgeordneten verbunden werden.

B. Lösung

Um die Notwendigkeit todesfallbedingter Nachwahlen möglichst weitgehend auszuschließen, wird den Parteien und sonst Wahlvorschlagsberechtigten die Möglichkeit eingeräumt, neben der Wahlkreisbewerberin oder dem Wahlkreisbewerber eine Ersatzbewerberin oder einen Ersatzbewerber zu benennen. Eine Nachwahl findet nur statt, wenn die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber und die Ersatzperson nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor derWahl sterben.Wird auf die Benennung einer Ersatzbewerberin oder eines Ersatzbewerbers verzichtet, so nimmt derWahlvorschlag mit der verstorbenen Wahlkreisbewerberin oder dem verstorbenen Wahlkreisbewerber nicht an derWahl teil. Die auf diesen Kreiswahlvorschlag entfallenden Stimmen sind ungültig.

Die Funktion der Ersatzbewerberin oder des Ersatzbewerbers ist nicht auf den Fall des Todes derWahlkreisbewerberin oder desWahlkreisbewerbers und nicht auf die Phase bis zurWahl beschränkt. Die Ersatzperson tritt auch dann an, wenn die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber die Wählbarkeit verliert oder die Annahme derWahl ablehnt oder wenn eine imWahlkreis gewählte Abgeordnete oder ein im Wahlkreis gewählter Abgeordneter nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet.

C. Alternativen

Die vorgeschlagene fakultative Ersatzbewerberlösung könnte um die Komponente ergänzt werden, dass bei Tod oder Verlust der Wählbarkeit derWahlkreisbewerberin oder des Wahlkreisbewerbers, für die oder den keine Ersatzperson benannt wurde, eine Nachwahl ausnahmsweise dann stattfindet, wenn diese noch am Tag der Hauptwahl durchgeführt werden kann.

Die Gefahr, dass Nachwahlen notwendig werden, kann auch durch andere Änderungen des Bundeswahlgesetzes, zum Beispiel durch die Verpflichtung zur Benennung von Ersatzpersonen, reduziert werden.Weiteren denkbaren Alternativen, um vorstellbare weitergehende Einflussmöglichkeiten von Nachwählerinnen und Nachwählern auf das Gesamtwahlergebnis einzuschränken, stehen rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegen.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte Nachwahlen verursachen durch den damit verbundenen Personal- und Sachaufwand erhebliche Kosten. Die vorgeschlagene Ersatzbewerberlösung führt zu einer beträchtlichen Verringerung des Nachwahlrisikos und damit des Kostenrisikos.

E. Sonstige Kosten

Keine

Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Bundeswahlgesetzes

Das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 48 wie folgt gefasst:

„§ 48 Berufung von Ersatzpersonen und Ersatzwahlen".

2. In § 9 Abs. 3 Satz 2 wird nach dem Wort „Wahlbewerber," das Wort „Ersatzbewerber," eingefügt.

3. § 20 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Neben dem Bewerber kann ein Ersatzbewerber aufgeführt werden. Jeder Bewerber oder Ersatzbewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden.

Als Bewerber oder Ersatzbewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich."

4. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bewerber" die Wörter „oder Ersatzbewerber" eingefügt.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Bewerber" die Wörter „und Ersatzbewerber" eingefügt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Die Bewerber und Ersatzbewerber sowie die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in geheimer Abstimmung gewählt."

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Bewerbern" die Wörter „und Ersatzbewerbern" eingefügt.

d) In Absatz 5 werden nach dem Wort „Bewerbers“ die Wörter „und Ersatzbewerbers“ eingefügt.

e) In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Bewerbers“ die Wörter „und Ersatzbewerbers“ eingefügt.

5. In § 24 Satz 1 werden nach dem Wort „Bewerber“ die Wörter „oder Ersatzbewerber“ eingefügt.

6. § 25 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültigerWahlvorschlag liegt nicht vor, wenn

1. die Form oder Frist des § 19 nicht gewahrt ist,

2. die nach § 20 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 erforderlichen gültigen Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die derWahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden, oder

3. bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs. 2 erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise des § 21 nicht erbracht sind.

Ist ein Bewerber oder Ersatzbewerber so mangelhaft bezeichnet, dass seine Person nicht feststeht, oder fehlt die Zustimmungserklärung, so ist der Wahlvorschlag insoweit ungültig. Ist der Wahlvorschlag hinsichtlich des Bewerbers ungültig, so tritt an seine Stelle der Ersatzbewerber.“

7. In § 30 Abs. 2 Nr. 1 werden nach demWort „Bewerber“ die Wörter „und Ersatzbewerber“ eingefügt.

8. Dem § 39 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Falls ein Wahlkreisbewerber, für den kein Ersatzbewerber benannt ist, nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl stirbt oder seine Wählbarkeit verliert, sind die auf ihn entfallenden Stimmen ungültig.“

9. § 41 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Ist der Bewerber des Kreiswahlvorschlages, auf den die meisten Stimmen entfallen sind, nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl verstorben oder hat er seine Wählbarkeit verloren, so ist, falls für ihn ein Ersatzbewerber benannt wurde, der Ersatzbewerber als Wahlkreisabgeordneter gewählt.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

10. § 43 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: „(1) Eine Nachwahl findet statt,

1. wenn in einem Wahlkreis oder in einem Wahlbezirk die Wahl nicht durchgeführt worden ist,

2. wenn ein Wahlkreisbewerber und der für ihn benannte Ersatzbewerber nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl sterben oder ihre Wählbarkeit verlieren.“

11. In § 44 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 41 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 41 Abs. 3“ ersetzt.

12. In § 45 Satz 1 wird die Angabe „§ 41 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 41 Abs. 3“ ersetzt.

13. § 46 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach demWort „Listennachfolger“ die Wörter „sowie Ersatzbewerber“ eingefügt.

b) In Satz 2 Halbsatz 2 werden nach dem Wort „Bewerber" die Worte „oder Ersatzbewerber" eingefügt.

c) In Satz 4 wird die Angabe „§ 48 Abs. 1" durch die Angabe „§ 48 Abs. 1 und 3" ersetzt.

14. § 48 wird wie folgt gefasst: „§ 48 Berufung von Ersatzpersonen und Ersatzwahlen

(1) Wenn ein über die Landesliste gewählter Bewerber stirbt, seine Wählbarkeit verliert oder die Annahme derWahl ablehnt oder wenn ein über die Landesliste gewählter Abgeordneter stirbt oder sonst nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet, so wird der Sitz aus der Landesliste derjenigen Partei besetzt, für die der Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. Bei der Nachfolge bleiben diejenigen Listenbewerber unberücksichtigt, die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung der Landesliste aus dieser Partei ausgeschieden sind. Ist die Liste erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt.

(2) Wenn ein im Wahlkreis gewählter Bewerber stirbt, seine Wählbarkeit verliert oder die Annahme der Wahl ablehnt oder wenn ein im Wahlkreis gewählter Abgeordneter stirbt oder sonst nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet, so ist der im Kreiswahlvorschlag benannte Ersatzbewerber als Ersatzperson zu berufen. Ist ein Ersatzbewerber nicht benannt oder ist der Ersatzbewerber verstorben oder hat er seine Wählbarkeit verloren oder dieWahl nicht angenommen oder scheidet er nachträglich aus dem Deutschen Bundestag aus, so findet Absatz 1 entsprechende Anwendung; ist der Ausgeschiedene als Wahlkreisabgeordneter einer Wählergruppe oder einer Partei gewählt, für die im Land keine Landesliste zugelassen worden war, so findet Ersatzwahl imWahlkreis statt. Die Ersatzwahl muss spätestens 60 Tage nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens stattfinden. Die unterbleibt, wenn feststeht, dass innerhalb von sechs Monaten ein neuer Deutscher Bundestag gewählt wird. Die Ersatzwahl wird nach den allgemeinen Vorschriften durchgeführt.

(3) Die Feststellung des Ersatzbewerbers obliegt dem Kreiswahlleiter, die Feststellung des nachfolgenden Listenbewerbers und die Bestimmung des Wahltages der Ersatzwahl obliegt dem Landeswahlleiter. § 41 Abs. 3, § 42 Abs. 3 und § 45 gelten entsprechend." 15. In § 52 Abs. 1 Satz 2 Nr. 16 wird dasWort „Listennachfolgern" durch das Wort „Ersatzpersonen" ersetzt.

Artikel 2 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

BEGRÜNDUNG

A. Allgemeines

1. Problem

Am 7. September 2005, elf Tage vor der Bundestagswahl am 18. September 2005, verstarb die für den Wahlkreis 160 (Dresden I) zugelassene Wahlkreisbewerberin der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes musste für diesen Wahlkreis die Bundestagswahl am 18. September 2005 abgesagt und am 2. Oktober 2005 eine Nachwahl als Erst- und Zweitstimmenwahl durchgeführt werden.

Durch die Nachwahl imWahlkreis 160 wurde die Ermittlung und Feststellung des Gesamtergebnisses derWahl verzögert.

Darüber hinaus wurde in der Öffentlichkeit kritisiert, die Wählerinnen und Wähler diesesWahlkreises hätten einen Informationsvorsprung und könnten deshalb durch taktisches Stimmverhalten stärker als die übrige Wählerschaft das Gesamtergebnis der Wahl beeinflussen.

2. Denkbare Problemlösungen

Die öffentliche Kritik wurde zum Anlass genommen, Alternativen zu prüfen, wie die mit einer Nachwahl nach dem geltenden Recht verbundenen Probleme beseitigt oder zumindest reduziert werden können, und auf dieser Grundlage einen Vorschlag zur Änderung des Bundeswahlgesetzes zu unterbreiten.

2.1 Trennung von Erst- und Zweitstimmenwahl Die Bedeutung der Nachwahl könnte dadurch verringert werden, dass sie auf die Abgabe der Erststimme für dieWahl einer Wahlkreisbewerberin oder eines Wahlkreisbewerbers beschränkt wird. Die Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste würde (wie im gesamten übrigen Wahlgebiet auch) am Tage der Hauptwahl abgegeben und ausgewertet.

Gegen diese Alternative spricht, dass sie in denWahlkreisen ausscheidet, in denen Bewerberinnen und Bewerber von Wahlberechtigten oder von einer Partei, für die in dem betreffenden Land keine Landesliste zugelassen ist, vorgeschlagen sind. Für diesen Fall schreibt nämlich § 6 Abs. 1 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes zur Sicherung der Erfolgswertgleichheit aller Stimmen vor, dass die Zweitstimmen derjenigen Wählerinnen und Wähler, die die erfolgreiche Einzelbewerberin oder den erfolgreichen Einzelbewerber gewählt haben, bei der Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze nicht berücksichtigt werden. Eine Nichtberücksichtigung dieser Zweitstimmen ist nur dann möglich, wenn Erst- und Zweitstimme auf einem einzigen Stimmzettel abgegeben werden. Nur dann kann festgestellt werden, welche Zweitstimmen von den Wählerinnen und Wählern stammen, die mit ihrer Erststimme die erfolgreiche Einzelbewerberin oder den erfolgreichen Einzelbewerber gewählt haben. Soweit die getrennte Stimmabgabe im Übrigen, das heißt inWahlkreisen ohne derartige Einzelbewerbungen, zulässig wäre, müsste als Nachteil in Kauf genommen werden, dass auch dann noch überdurchschnittliche Einflussmöglichkeiten der Wählerinnen und Wähler im Nachwahlkreis bleiben.

Zu denken ist an die Konstellation, dass der Ausgang der Wahl in diesem Wahlkreis zu einem Überhangmandat führen könnte, weil eine Partei ihren Verhältnisanteil an Mandaten bereits durch den Gewinn von Direktmandaten in anderen Wahlkreisen ausgeschöpft hat (bei der Nachwahl in Dresden ist diese Konstellation Realität geworden). Denkbar ist auch der Versuch, eine Wahlkreisbewerberin oder einen Wahlkreisbewerber, die oder der nicht auf einem nach der Auszählung der Hauptwahl sicheren Listenplatz steht, nur deshalb zu wählen, um damit dem Wahlkreis eine größere personelle Repräsentanz im Parlament zu sichern.

2.2 Beschränkung der Nachwahl auf Briefwählerinnen und Briefwähler

Denkbar wäre auch, die Nachwahl auf die Wählerinnen und Wähler zu beschränken, die im Zeitpunkt der entsprechenden Feststellung bereits – wegen des Todesfalles – überholte Briefwahlunterlagen erhalten haben. Diese Lösung scheidet jedoch aus praktischen Gründen oftmals aus. Sie setzt voraus, dass der Nachwahlfall so frühzeitig eintritt, dass noch vor der Hauptwahl eine neue Kandidatin oder ein neuer Kandidat aufgestellt und neue Stimmzettel gedruckt werden können. Todesfälle kurz vor dem Wahltag müssten – wie bisher – zu einer vollständigen Nachwahl führen.

2.3 Nichtveröffentlichung von Wahlergebnissen am Tag der Hauptwahl

In Betracht gezogen werden könnte, am Tag der Hauptwah bereits ermittelte Wahlergebnisse nicht zu veröffentlichen. Gegen diese Alternative bestehen jedoch vornehmlich praktische Bedenken. Ein bereits ermitteltesWahlergebnis dürfte trotz entsprechender Verpflichtungen oder sogar Strafandrohungen schwerlich bis zum Tag der Nachwahl, der bis zu sechsWochen nach dem Tag der Hauptwahl liegen kann, geheim gehalten werden können.

2.4 Ermittlung der Wahlergebnisse der Hauptwahl erst am Tag der Nachwahl

Rechtlich zulässig wäre auch, die Wahlergebnisse bundesweit nicht am Tag der Hauptwahl, sondern erst am Tag der Nachwahl zu ermitteln. Eine solche Lösung würde jedoch einen beträchtlichen organisatorischen und finanziellen Aufwand verursachen. Insbesondere müssten die Wahlurnen bis zu sechs Wochen sicher aufbewahrt und sämtlicheWahlvorstände zur Ergebnisermittlung am Tag der Nachwahl nochmals einberufen werden.

2.5 Obligatorische Aufstellung von Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerbern

Auch nach dem hessischen Landtagswahlgesetz hat jede Wählerin und jeder Wähler zwei Stimmen, eine Wahlkreisstimme für dieWahl einer oder einesWahlkreisabgeordneten und eine Landesstimme für die Wahl einer Landesliste. Anders als das Bundestagswahlrecht schreibt das hessische Landtagswahlgesetz jedoch die Aufstellung von Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerbern zwingend vor. Diese werden von den Kreiswahlausschüssen mit zugelassen und auf den Stimmzetteln aufgeführt. Stirbt eine Wahlkreisbewerberin oder ein Wahlkreisbewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlages, aber noch vor der Wahl, so steht kraft Gesetzes die Ersatzperson zur Wahl. Eine Nachwahl findet – abgesehen von den Fällen höherer Gewalt – nur noch dann statt, wenn sowohl die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber als auch die Ersatzbewerberin oder der Ersatzbewerber in dem genannten Zeitraum sterben oder ihre Wählbarkeit verlieren.

Die Ersatzperson wird durch die individuelle Wahlentscheidung demokratisch legitimiert. Ihre Ersatzbewerberfunktion ist daher nicht auf die Phase bis zum Wahltag beschränkt, sondern die Nachrückerfunktion besteht darüber hinaus für die gesamte Wahlperiode.
Gegen die obligatorische Ersatzbewerberlösung wird geltend gemacht, dass es für viele Parteien und Gruppierungen eine über das vertretbare Maß hinausgehende Erschwernis bedeuten kann, für jede Wahlkreisbewerberin und jeden Wahlkreisbewerber eine Ersatzperson zu benennen, dass die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber und die Ersatzperson sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sein könnten, mit der Folge, dass der Wahlkampf und die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler ihre bisherige Klarheit verlieren, oder dass die Möglichkeit der Störung des Parteifriedens durch Druck auf die Erstkandidatin oder den Erstkandidaten bestehe (vgl. hierzu Schreiber, Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. Auflage 2002, Rdnr. 3 zu § 43).

2.6 Fakultative Aufstellung von Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerbern
Nach dem rheinland-pfälzischen Landeswahlgesetz, das ebenfalls ein Zweistimmenwahlrecht statuiert (eine Stimme für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten und eine Stimme für die Wahl einer Landes- oder Bezirksliste), ist die Aufstellung einer Ersatzbewerberin oder eines Ersatzbewerbers zwar möglich, aber nicht zwingend vorgeschrieben (so genannte fakultative Ersatzbewerbung). Wurde eine Ersatzbewerberin oder ein Ersatzbewerber benannt und stirbt die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber, erfolgt keine Nachwahl. Eine Nachwahl findet jedoch zum einen statt, wenn sowohl eine Wahlkreisbewerberin oder ein Wahlkreisbewerber als auch die benannte Ersatzperson nach der Zulassung desWahlvorschlages, aber noch vor derWahl sterben oder ihre Wählbarkeit verlieren. Dasselbe gilt, wenn von der Möglichkeit der Benennung einer Ersatzbewerberin oder eines Ersatzbewerbers kein Gebrauch gemacht wird. Somit verhindert nur das Gebrauchmachen von der Möglichkeit der Benennung einer Ersatzbewerberin oder eines Ersatzbewerbers eine Nachwahl in den Fällen, in denen die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber zwischen Zulassung und Wahl stirbt.

Auch nach dem rheinland-pfälzischen Landeswahlgesetz erhält die Ersatzbewerberin oder der Ersatzbewerber mit dem Wahlakt eine unmittelbar auf die Wählerschaft zurückführbare Legitimation für die gesamte Wahlperiode. Sie oder er wird als Ersatzperson berufen, wenn

eine im Wahlkreis gewählte Bewerberin oder ein im Wahlkreis gewählter Bewerber stirbt, die Wählbarkeit verliert oder die Annahme der Wahl ablehnt oder wenn eine im Wahlkreis gewählte Abgeordnete oder ein imWahlkreis gewählter Abgeordneter stirbt oder sonst nachträglich aus dem Landtag ausscheidet. Gegenüber der obligatorischen Ersatzbewerberregelung hat die rheinland-pfälzische den Vorteil, dass sie die Wahlvorschlagsberechtigten nicht zur Benennung einer Ersatzbewerberin oder eines Ersatzbewerbers zwingt. Allerdings verhindert auch nur das Gebrauchmachen von der Möglichkeit der Benennung einer Ersatzbewerberin oder eines Ersatzbewerbers eine Nachwahl in den Fällen, in denen die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber zwischen der Zulassung und der Wahl stirbt. Wird nur eine Wahlkreisbewerberin oder ein Wahlkreisbewerber benannt und stirbt diese Person, so findet eine Nachwahl statt.

3. Vorschlag für eine Neuregelung

Kernpunkte des vorliegenden Gesetzentwurfs sind die folgenden Regelungen:

– In einem Kreiswahlvorschlag kann neben der Wahlkreisbewerberin oder dem Wahlkreisbewerber eine Ersatzbewerberin oder ein Ersatzbewerber aufgeführt werden.

  – Ist die Bewerberin oder der Bewerber eines Kreiswahlvorschlages, auf den die meisten Stimmen entfallen sind, nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor derWahl verstorben oder hat sie oder er die Wählbarkeit verloren, so ist, falls eine Ersatzbewerberin oder ein Ersatzbewerber benannt wurde, diese Ersatzperson gewählt.

  – Falls eine Wahlkreisbewerberin oder ein Wahlkreisbewerber, für die oder den keine Ersatzperson benannt ist, nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor derWahl stirbt oder die Wählbarkeit verliert, sind die auf sie oder ihn entfallenden Stimmen ungültig.

  – Eine todesfallbedingte Nachwahl findet nur noch dann statt, wenn eine Wahlkreisbewerberin oder ein Wahlkreisbewerber und die für sie oder ihn benannte Ersatzperson nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl sterben.

– Wenn eine im Wahlkreis gewählte Bewerberin oder ein imWahlkreis gewählter Bewerber stirbt, die Wählbarkeit verliert oder die Annahme der Wahl ablehnt oder eine Wahlkreisabgeordnete oder ein Wahlkreisabgeordneter stirbt, die Wählbarkeit verliert oder sonst nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet, so ist die im Kreiswahlvorschlag benannte Ersatzperson zu berufen.

Ist eine Ersatzperson nicht benannt oder verstorben oder hat sie ihre Wählbarkeit verloren oder die Wahl nicht angenommen oder scheidet sie nachträglich aus dem Deutschen Bundestag aus, so findet eine Listennachfolge statt.

Der Neuregelungsvorschlag beruht zunächst auf der Überlegung, dass die Ersatzbewerberlösung gegenüber den dargestellten anderen Alternativen vorzugswürdig ist, weil sie nicht nur darauf abzielt, theoretisch vorstellbare überdurchschnittliche Einflussmöglichkeiten von Wählerinnen und Wählern im Nachwahlkreis auf das Gesamtergebnis einzuschränken. Durch die Aufstellung von Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerbern können Nachwahlen infolge des Tods der Bewerberin oder des Bewerbers von vornherein weitgehend ausgeschlossen werden. Schon bisher waren der Hauptwahl zeitlich folgende Nachwahlen bei Bundestagswahlen selten (1961: 1 Fall, 1965: 2 Fälle, 2005: 1 Fall). Ferner vermeidet die vorgeschlagene Ersatzbewerberlösung die mit anderen vorstellbaren Nachwahlmodifikationen verbundenen Nachteile.

Der Neuregelungsvorschlag berücksichtigt auch, dass den Landeswahlleitungen in Hessen und Rheinland-Pfalz nicht bekannt geworden ist, dass die Aufstellung von

Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerbern bei den Wahlvorschlagsberechtigten anlässlich zurückliegender Landtagswahlen zu Schwierigkeiten geführt hat. Ferner ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es zwar grundsätzlich nicht Aufgabe des Wahlgesetzgebers ist, bereits gegebene Unterschiede in den Strukturen und auch in der Leistungsfähigkeit von Parteien und Wählergruppen durch entsprechende Wahlrechtsbestimmungen auszugleichen. Der Wahlgesetzgeber kann jedoch solche Unterschiede bei der Ausgestaltung des Wahlrechts berücksichtigen.

Der vorliegende Gesetzentwurf greift die Vorteile der hessischen und der rheinland-pfälzischen Ersatzbewerberlösung auf und versucht deren Nachteile zu vermeiden. Kern des Gesetzentwurfs ist die Überlegung, einerseits die Wahlvorschlagsberechtigten nicht zur Benennung einer Ersatzbewerberin oder eines Ersatzbewerbers zu verpflichten, ihnen andererseits aber das Risiko aufzuerlegen, nicht an derWahl im Wahlkreis teilnehmen zu können, falls keine Ersatzbewerberin oder kein Ersatzbewerber benannt wird und die Bewerberin oder der Bewerber vor der Wahl stirbt. Diese Lösung ist gegenüber der obligatorischen Ersatzbewerberlösung für den Wahlvorschlagsberechtigten weniger belastend und eröffnet ihm die politische Option, eine Ersatzbewerberin oder einen Ersatzbewerber zu benennen. Gegenüber der fakultativen Ersatzbewerberlösung nach rheinland-pfälzischem Vorbild besteht der Vorteil, dass sie den Eintritt eines todesfallbedingten Nachwahlfalls noch unwahrscheinlicher macht, weil der Tod der alleinigen Bewerberin oder des alleinigen Bewerbers nicht zur Nachwahl führt.

Soweit sich gegen die vorgeschlagene Ersatzbewerberlösung der Einwand erheben ließe, dass der Wahlvorschlagsberechtigte, der von seinem Recht, eine Ersatzbewerberin oder einen Ersatzbewerber zu benennen, keinen Gebrauch macht, bei Tod der alleinigen Bewerberin oder des alleinigen Bewerbers keineWahlkreiskandidatin oder keinenWahlkreiskandidaten hat, kann dem entgegengehalten werden, dass dies Folge einer – in seinen Verantwortungsbereich fallenden – unzureichenden Ausschöpfung des Wahlrechts ist.

Aus der Sicht der Wählerinnen und Wähler muss bei der vorgeschlagenen Lösung in Kauf genommen werden, dass bei Ausfall der alleinigen Bewerberin oder des alleinigen Bewerbers noch vor der Wahl die für ihn eventuell bereits abgegebenen Briefwahlstimmen ungültig sind. Dies erscheint jedoch als Folge der wahlrechtlichen Regelung im Interesse des verfolgten Regelungsziels hinnehmbar, zumal die Briefwählerinnen und Briefwähler mit einem solchen Ereignis rechnen müssen, wenn „ihre“ Wahlkreisbewerberin oder „ihr“ Wahlkreisbewerber nicht durch eine Ersatzbewerberin oder einen Ersatzbewerber abgesichert ist. Auch dem geltenden Wahlrecht sind Ungültigkeitsgründe dieser Art nicht völlig fremd. Nach dem Bundeswahlrecht ist die Wahl einer Bewerberin oder eines Bewerbers ungültig, die oder der nachder Zulassung, aber noch vor der Wahl das passive Wahlrecht verliert. Durch geeignete Informationsmöglichkeiten (zum Beispiel durch einen Hinweis bei den Briefwahlunterlagen, durch öffentliche Bekanntmachung oder einen Aushang am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum befindet) kann verhindert werden, dass Wählerinnen und Wähler, die nach dem Tod einerWahlkreisbewerberin oder einesWahlkreisbewerbers durch Briefwahl oder am Wahltag von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, ihre Stimme für eine verstorbene und damit nicht mehr zur Wahl stehende Bewerberin oder für einen verstorbenen und damit nicht mehr zur Wahl stehenden Bewerber abgeben.

Für die Wählerinnen und Wähler ist die „Ersatzbewerberlösung“ insbesondere deshalb vorteilhaft, weil von Anfang an Klarheit darüber besteht, welche Person im Falle des Todes oder in anderen Fällen des Ausscheidens der Wahlkreisbewerberin oder des Wahlkreisbewerbers als Ersatzperson eintritt. Bei der Listennachfolge besteht eine solche Klarheit nicht.

Die Funktion der Ersatzbewerberin oder des Ersatzbewerbers ist nicht auf den Fall des Todes der Wahlkreisbewerberinoder des Wahlkreisbewerbers und nicht auf die Phase bis zur Wahl

beschränkt. Die Ersatzperson tritt auch dann ein, wenn die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber die Wählbarkeit verliert oder die Annahme derWahl ablehnt oder wenn eine imWahlkreis gewählte Abgeordnete oder ein imWahlkreis gewählter Abgeordneter sonst nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet. Nur für den Fall, dass für denWahlkreis keine Ersatzbewerberin oder kein Ersatzbewerber berufen werden kann, findet eine Listennachfolge statt.

4. Kosten

Nachwahlen verursachen durch die damit verbundenen Personal- und Sachaufwendungen erhebliche Kosten. Die vorgeschlageneErsatzbewerberlösung führt zu einer beträchtlichen Verringerung des Nachwahlrisikos und damit des Kostenrisikos.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundeswahlgesetzes)

Vorbemerkung

Da das geltende Bundeswahlgesetz nur verallgemeinernde männliche Bezeichnungen verwendet, sind im vorgeschlagenen Änderungstext sowie in der nachstehenden Einzelbegründung hierzu entsprechende Bezeichnungen in verallgemeinernder männlicher Form eingesetzt worden.

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Wegen der neuen Überschrift des § 48 ist eine Anpassung der Inhaltsübersicht erforderlich.

Zu Nummer 2 (§ 9)

Auch Ersatzbewerber sollen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans bestellt werden können.

Zu Nummer 3 (§ 20)

Der neu gefasste § 20 Abs. 1 trifft in Satz 2 die Grundsatzregelung, dass neben dem Bewerber ein Ersatzbewerber aufgeführt werden kann. Ferner wird in den erweiterten Sätzen 3 und 4 geregelt, dass auch jeder Ersatzbewerber nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt und als Ersatzbewerber nur vorgeschlagen werden kann, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat.

Zu Nummer 4 (§ 21)

§ 21 enthält Regelungen über die Aufstellung von Kreiswahlvorschlägen. In die bisher nur für Wahlkreisbewerber geltenden Regelungen des § 21 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 Satz 1 und 3 und Abs. 5 und 6 Satz 1 werden auch die Ersatzbewerber einbezogen.

Zu Nummer 5 (§ 24)

Nach § 24 Satz 1 kann ein Kreiswahlvorschlag nach Ablauf der Einreichungsfrist bis zur Entscheidung über seine Zulassung dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Diese Regelungen sollen auch für den Ersatzbewerber gelten.

Zu Nummer 6 (§ 25)

§ 25 Abs. 2 statuiert in seinem Satz 1 den Grundsatz, dass nach Ablauf der Einreichungsfrist nur noch Mängel an sich gültigerWahlvorschläge behoben werden können. Im Satz 2 ist festgelegt, in welchen Fällen ein gültiger Wahlvorschlag nicht vorliegt. Dies ist unter anderem auch der Fall, wenn der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, sodass seine Person nicht feststeht, oder die Zustimmung des Bewerbers fehlt.

Der neue Satz 3 bezieht den Ersatzbewerber in die Regelung ein. Im Hinblick auf das Erforderlichkeitsprinzip greift die Ungültigkeit des Wahlvorschlages aber nur insoweit, als die Bezeichnung mangelhaft ist oder die Zustimmungserklärung fehlt. Liegt also beispielsweise

nur die Zustimmungserklärung des Ersatzbewerbers nicht vor, so ist aus diesem Grund nicht auch der Wahlvorschlag hinsichtlich des Bewerbers ungültig.

Nach dem neuen Satz 4 tritt kraft Gesetzes der Ersatzbewerber an die Stelle des Bewerbers, wenn der Kreiswahlvorschlag hinsichtlich des Bewerbers ungültig ist. In diesem Fall wird im Kreiswahlvorschlag als Bewerber der frühere Ersatzbewerber zugelassen.

Zu Nummer 7 (§ 30)

Durch die Ergänzung wird angeordnet, dass auf dem Stimmzettel nicht nur die Namen der Wahlkreisbewerber sondern auch die der Ersatzbewerber aufzuführen sind. Die Aufführung eines Ersatzbewerbers entfällt, wenn der Wahlvorschlagsberechtigte von der Möglichkeit, eine solche Person zu benennen, keinen Gebrauch gemacht hat.

Zu Nummer 8 (§ 39)

§ 39 regelt, unter welchen Voraussetzungen Stimmen ungültig sind oder nicht. Die Bestimmung wirdumeinen neuen Absatz 6 ergänzt, der die Ungültigkeit der auf einen Wahlkreisbewerber entfallenden Stimmen für den Fall anordnet, dass einWahlkreisbewerber, für den kein Ersatzbewerber benannt ist, nach der Zulassung der Kreiswahlvorschläge, aber noch vor der Wahl stirbt oder seine Wählbarkeit verliert. Damit wird deutlich, dass der Wahlvorschlagsberechtigte, der auf die Aufstellung eines Ersatzbewerbers verzichtet, das Risiko des Todes oder des Wählbarkeitsverlustes des Wahlkreisbewerbers in dem vorerwähnten Zeitraum trägt. Im Gegensatz zur geltenden Rechtslage (§ 43 Abs. 1 Nr. 2) findet in diesem Fall keine Nachwahl statt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im allgemeinen Teil der Begründung verwiesen.

Zu Nummer 9 (§ 41)

Die Neuregelung, dass der Ersatzbewerber gewählt ist, falls der Wahlkreisbewerber des Kreiswahlvorschlages, auf den die meisten (gültigen) Stimmen entfallen sind, nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl verstorben ist oder seine Wählbarkeit verloren hat, macht die Stellung des Ersatzbewerbers besonders deutlich. Er wird durch den Wahlakt, falls der Wahlkreisbewerber zum Zeitpunkt der Wahl bereits verstorben ist, unmittelbar als Wahlkreisabgeordneter demokratisch legitimiert.

Zu Nummer 10 (§ 43)

Durch den neu gefassten § 43 Abs. 1 Nr. 2 wird das eigentliche Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs, todesfallbedingte Nachwahlen weitgehend auszuschließen, erreicht. Eine Nachwahl aus diesem Grund findet nur noch statt, wenn sowohl der Wahlkreisbewerber als auch der für ihn benannte Ersatzbewerber nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl sterben. Im Gegensatz zum geltenden Recht gilt dies auch bei Verlust der Wählbarkeit. Dies ist in Anbetracht der Auffangfunktion des Ersatzbewerbers sinnvoll. Stirbt der Wahlkreisbewerber vor der Wahl oder verliert er seine Wählbarkeit, so tritt der zugelassene Ersatzbewerber kraft Gesetzes an seine Stelle. Stirbt der Ersatzbewerber, so nimmt nur der Wahlkreisbewerber an der Wahl teil. Ist kein Ersatzbewerber zugelassen, so nimmt der Kreiswahlvorschlag mit dem verstorbenen Wahlkreisbewerber nicht an derWahl teil. Auf die Ausführungen im allgemeinen Teil der Begründung sowie in den vorstehenden Einzelbegründungen wird verwiesen.

Denkbar ist, bei Tod oder Verlust der Wählbarkeit desWahlkreisbewerbers, für den keine Ersatzperson benannt wurde, eine Nachwahl ausnahmsweise dann vorzusehen, wenn diese noch am Tag der Hauptwahl stattfinden kann. Diese Alternative widerspricht nicht der vorgeschlagenen fakultativen Ersatzbewerberlösung. Sie könnte als zusätzliche Komponente in die Regelungen des § 43 Abs. 1 aufgenommen werden. Die Verwirklichung dieser Komponente soll der Diskussion im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens vorbehalten bleiben.

Zu den Nummern 11 und 12 (§§ 44 und 45)

Redaktionelle Folgeänderungen zu der in Nummer 9 vorgesehenen Änderung des § 41.

Zu Nummer 13 (§ 46)

Durch die punktuellen Änderungen werden Regelungen über die Folgen der Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei oder der Teilorganisation einer Partei auch auf Ersatzbewerber bezogen.

Zu Nummer 14 (§ 48)

Die Funktion des Ersatzbewerbers ist nicht auf die Phase bis zur Wahl beschränkt. Sie besteht während der gesamten Wahlperiode. Dies wird besonders deutlich an dem neu gefassten § 48, der in seinem Absatz 1 Regelungen über die Berufung von Ersatzpersonen für über die Landesliste gewählte Bewerber und Abgeordnete und in seinem Absatz 2 Regelungen über die Berufung von Ersatzpersonen für im Wahlkreis gewählte Bewerber und Abgeordnete trifft.

Für die Nachfolge von Personen, die über die Landesliste gewählt wurden, bleibt es in Absatz 1 weitgehend bei den bisher geltenden Regelungen, allerdings tritt Listennachfolge auch dann ein, wenn der erfolgreiche Landeslistenbewerber seine Wählbarkeit verliert.

Dagegen bestimmt der neue Absatz 2 Satz 1 den im Kreiswahlvorschlag benannten Ersatzbewerber als Ersatzperson für die Fälle, dass ein im Wahlkreis gewählter Bewerber stirbt, seine Wählbarkeit verliert oder die Annahme derWahl ablehnt oder ein imWahlkreis gewählter Abgeordneter stirbt oder sonst nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet.Ist kein Ersatzbewerber vorhanden, so findet nach Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 Listennachfolge statt. Ist der Ausgeschiedene als Wahlkreisabgeordneter einer Wählergruppe oder einer Partei gewählt, für die im Land keine Landesliste zugelassen worden war, so scheidet eine Listennachfolge aus. Ist in diesem Fall kein Ersatzbewerber vorhanden, so hat nach Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 eine Ersatzwahl im Wahlkreis stattzufinden. Die Regelungen über die Ersatzwahl entsprechen den geltenden Regelungen.

In Absatz 3 sind die bisher an verschiedenen Stellen der Bestimmung zu findenden Zuständigkeitsregelungen und Verweisungen unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen zusammengefasst.

Zu Nummer 15 (§ 52)

Durch die Änderung wird die Ermächtigungsgrundlage für die Bundeswahlordnung um den Regelungsgegenstand „Berufung von Ersatzpersonen“, der weiter ist als der wegfallende Regelungsgegenstand „Berufung von Listennachfolgern“, ergänzt.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes.

Anlage 2

Stellungnahme der Bundesregierung

Die Bundesregierung lehnt den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundes-wahlgesetzes ab. Die vorgeschlagene Lösung zur Vermeidung von Nachwahlen beim Tod vonWahlkreisbewerbern überzeugt nicht, weil sie die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Teils der bei einer Wahl abgegebenen Stimmen davon abhängig macht, ob die betroffene Partei Ersatzbewerber aufgestellt hat oder nicht. Hat eine Partei keinen Ersatzbewerber aufgestellt, sollen die für den Wahlkreisbewerber abgegebenen Stimmen ungültig sein. Die Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmen ist damit in das Belieben der Parteien gestellt. Für die vor dem Tag der Hauptwahl stattfindende Briefwahl wäre zudem nicht zu vermeiden, dass Stimmen für einen Bewerber abgegeben werden, der am Wahltag verstorben sein wird. Bei der Urnenwahl

am Tag der Hauptwahl könnten, da keine neuen Stimmzettel zu fertigen wären, Stimmabgaben für einen verstorbenen Bewerber auch durch Informationen in der Presse und im Wahllokal letztendlich nicht verhindert werden.

Um ungültige Stimmen zu vermeiden, sollte es entweder bei der bestehenden Regelung verbleiben oder es sollten andere Alternativen in Erwägung gezogen werden.

Um Nachwahlen beim Tod von Wahlkreisbewerbern zwar nicht vollständig, aber zumindest in einem wesentlichen Umfang zu vermeiden, kann entsprechend den Regelungen in einigen Landeswahlgesetzen eine fakultative Regelung zur Aufstellung von Ersatzbewerbern ohne eine Regelung zur Ungültigkeit von Stimmen geschaffen werden, so dass eine Nachwahl nur dann erforderlich wird, wenn kein Ersatzbewerber aufgestellt wurde. Das bedeutete eine Verbesserung zur derzeitigen Situation.

Überzeugender ist die im hessischen Landeswahlgesetz getroffene obligatorische Verpflichtung zur Aufstellung von Ersatzbewerbern. Danach ist nur in dem ganz seltenen Ausnahmefall eine Nachwahl erforderlich, in dem nicht nur der Wahlkreisbewerber, sondern auch der Ersatzbewerber in dem maßgeblichen Zeitraum stirbt. Eine Regelung zur Gültigkeit oder Ungültigkeit von Wählerstimmen ist nicht erforderlich.

Die Wahlorganisation wird dadurch entlastet, dass sie die Wähler nicht auf verstorbene Wahlbewerber hinweisen muss. Da in der Begründung des Gesetzentwurfs darauf hingewiesen wird, dass den Landeswahlleitungen in Hessen und Rheinland-Pfalz aufgrund der Erfahrungen mit den Landesregelungen keine Schwierigkeiten bei der Aufstellung von Ersatzbewerbern bekannt geworden seien, wird dies erst recht für Bundestagswahlen gelten können, die eine größere politische Aufmerksamkeit erfahren.

Die mit dem Entwurf verbundene Entschließung, mit der die Bundesregierung um eine umfassende Evaluierung des Bundeswahlgesetzes und um die zügige Vorlage eines darauf aufbauenden Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundeswahlgesetzes gebeten wird, nimmt die Bundesregierung zur Kenntnis und weist darauf hin, dass Gesetzentwürfe zur Änderung des Bundeswahlgesetzes in der Vergangenheit im allgemeinen nicht als Regierungsentwürfe, sondern aus der Mitte des Bundestages eingebracht worden sind. Die Bundesregierung geht davon aus, dass so auch in der 16. Wahlperiode verfahren wird. Gleichwohl hat sich die Bundesregierung bereits in der vergangenen Wahlperiode mit einem Teil der im Antrag angesprochenen Fragen befasst. Durch die vorgezogene Neuwahl sind neue hinzugekommen. Die Bundesregierung wird das ihr Mögliche beitragen.

zur im Kontext stehenden Entscheidung: WP 211/02

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht zur Änderung von Wahlrechtsvorschriften aufgrund von gegen die Gültigkeit der Wahl zum 15. Deutschen Bundestag eingegangenen Wahleinsprüchen unter Einbeziehung der im Rahmen des Erfahrungsaustausches mit den Ländern und dem Bundeswahlleiter zur Bundestagswahl 2002 gewonnenen Erkenntnisse

A. Stellungnahme zu den Prüfbitten des Deutschen Bundestages aufgrund der Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses zu den Wahleinsprüchen gegen die Bundestagswahl 2002 (Bundestagsdrucksachen 15/1150 und 15/1850)

1. Zu der Prüfbitte, ob die Wahlrechtsvorschriften dahin gehend zu ändern sind, dass ein für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählter Wahlbezirk aus datenschutzrechtlichen Gründen mehr als mindestens 400 Wahlberechtigte (§ 3 Satz 3 Wahlstatistikgesetz) umfassen muss (der Bundesbeauftragte für den Datenschutz soll hierbei beteiligt werden):

Die Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik bei der Bundestagswahl 2002 zur Stimmabgabe nach Geschlecht und fünf Altersgruppen hat keine durchgreifenden Hinweise darauf ergeben, dass es wegen der Sicherung des Wahlgeheimnisses erforderlich wäre, die Abschneidegrenze von 400 Wahlberechtigten bzw. 400 Wählern bei der Auswahl der Stichprobenwahlbezirke heraufzusetzen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz war beteiligt.

Die repräsentative Wahlstatistik bei der Bundestagswahl 2002 für die Feststellung der Stimmabgabe nach Geschlecht und Altersgruppen beruhte auf den Wahlergebnissen in 2 971 repräsentativen Wahlbezirken (2 599 Urnenwahlbezirke und 372 Briefwahlbezirke) von den insgesamt rd. 90 000 Wahlbezirken einschließlich der Briefwahlbezirke (Statistisches Bundesamt, Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002, Heft 4, Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der Männer und Frauen nach dem Alter, Seiten 6, 97).

Eine Gefährdung des Wahlgeheimnisses wäre allenfalls in den ausgewählten Wahlbezirken mit dem geringsten Anteil von Wahlberechtigten bzw. Wählerinnen und Wählern in Betracht gekommen. Zur Vorbereitung dieses Berichts hat daher das Statistische Bundesamt die Datensätze der Statistischen Landesämter von Wahlbezirken mit 400 bis 499 Wahlberechtigten (Urnenwahl) bzw. 400 bis 499 Wählerinnen und Wählern (Briefwahl) ausgewertet. Es hat festgestellt, dass es unter diesen 289 Urnen und 39 Briefwahlbezirken sowohl Urnen- als auch Briefwahlbezirke gab, in denen in einer Auszählgruppe (Gruppe von Wählern nach Geschlecht und Altersgruppe) keine Stimmabgabe erfolgte, lediglich zwei Stimmen oder nur drei bis zehn Stimmen abgegeben wurden sowie zwei bis maximal 18mal übereinstimmend gewählt wurde (vgl. im Einzelnen die Anlage, Seite 7).

Den Mitgliedern der Wahlvorstände dürfte es jedoch grundsätzlich auch in diesen besonders ermittelten Wahlbezirken nicht möglich gewesen sein, aufgrund der Kenntnisnahme der Angaben im Wählerverzeichnis (Name, Vorname, Tag der Geburt), aufgrund der Ausgabe der Stimmzettel oder aufgrund der persönlichen Kenntnis von Wählern oder Wählerinnen einerseits und der Auszählung der Stimmzettel mit Unterscheidungsmerkmalen nach Geschlecht und Altersgruppe andererseits einen Rückschluss auf das Wahlverhalten einer einzelnen Wählerin oder eines einzelnen Wählers zu ziehen.

Denn zum einen würden die Stimmzettel für die Auszählung der Stimmen von den mindestens fünf Mitgliedern des Wahlvorstandes (Wahlvorsteher, sein Stellvertreter und drei bis sieben Beisitzer) nach Öffnung der Wahlurne jeweils nur zufallsbedingt in die Hand genommen werden, um u. a. getrennte Stapel in Abhängigkeit der Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge zu bilden und die Gültigkeit der Stimmabgabe zu prüfen. Ein Suchen nach einem bestimmten Stimmzettel durch Mitglieder des Wahlvorstandes ist wegen der gegenseitigen Kontrolle im Wahlvorstand und wegen des Zeitdrucks der öffentlichen Auszählung nicht möglich.

Es hat zum anderen keinen Wahlbezirk gegeben, in dem in einer Auszählgruppe nur eine Person eine Stimme abgegeben hat. Eine Gefährdung des Wahlgeheimnisses wäre im Übrigen selbst in einem solchen Falle praktisch nicht zu befürchten, da den Mitgliedern des Wahlvorstandes, die diesen Stimmzettel zufallsbedingt in die Hand genommen hätten, andernfalls hätte bekannt sein müssen, dass es in dieser Auszählgruppe keine weitere Wählerin oder keinen weiteren Wähler gab. Dies ist praktisch auszuschließen. Zwar kann jedes Mitglied eines Wahlvorstandes bei der Zuordnung der Stimmzettel, die er in die Hand nimmt, den Aufdruck mit den Unterscheidungsmerkmalen nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe zur Kenntnis nehmen. Der Rückschluss auf eine bestimmte Wählerin oder einen bestimmten Wähler wäre aber nur dann möglich, wenn das jeweilige Mitglied erstens genaue Kenntnis über die Zahl der Wählerinnen oder Wähler in dieser Auszählgruppe erlangt hätte

und zweitens auch alle Stimmzettel dieser Auszählgruppe sichten könnte. Dies wird grundsätzlich schon deshalb auszuschließen sein, weil erst mit Schließung des Wahllokals feststeht, wie viele Wahlberechtigte einer Auszählgruppe von ihrem Wahlrecht tatsächlich Gebrauch gemacht haben, eine entsprechende Auswertung des Wählerverzeichnisses durch den Wahlvorstand aber nicht erfolgt, und weil eine gezielte Kenntnisnahme aller Stimmzettel einer Auszählgruppe im Ablauf der Stimmauszählung praktisch nicht möglich ist. In dem Fall, dass innerhalb einer Auszählgruppe zwei Stimmen an unterschiedliche Parteien vergeben wurden, stellt sich diese Frage umso weniger (Feststellungen zur Fallgruppe 1). Erst recht war für die Wahlbezirke mit mehr als drei Stimmabgaben innerhalb einer Auszählgruppe eine Zuordnung zu einem bestimmten Wähler nicht möglich (Fallgruppe 2).

Aus den gleichen Gründen ist auch auszuschließen, dass Mitgliedern des Wahlvorstandes eine übereinstimmende Stimmabgabe in einer Auszählgruppe zur Kenntnis gelangen konnte (Feststellungen zur Fallgruppe 3), um daraus auf das Wahlverhalten einer einzelnen Wählerin oder eines einzelnen Wählers dieser Gruppe rückschließen zu können.

Im Übrigen hat zwar der Wahlvorsteher bei jedem Stimmzettel laut vorzulesen, für welche Landesliste die Zweitstimme abgegeben worden ist und deshalb jeden Stimmzettel in die Hand zu nehmen; für die Erststimmen ist dieser Verfahrensschritt zu wiederholen (§ 69 Abs. 5 Bundeswahlordnung). Aufgrund dieses zügig durchzuführenden Verfahrensschrittes wird es dem Wahlvorsteher aber grundsätzlich nicht möglich sein, gleichzeitig die Unterscheidungsmerkmale gezielt wahrzunehmen, um damit eine bestimmte Stimmabgabe erkennen und zuordnen zu können, auch wenn im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Wahlvorsteher mit einer überdurchschnittlichen Aufnahme- und Merkfähigkeit in der Lage sein könnte, einen Stimmzettel mit bestimmten Unterscheidungsmerkmalen in Kombination mit der Stimmabgabe wahrzunehmen. Eine Zuordnung zu einer bestimmten Wählerin oder zu einem bestimmten Wähler würde ihm aber nur dann möglich sein, wenn er über das zusätzliche Wissen verfügte, dass in dieser Auszählgruppe nur eine Stimme abgegeben wurde oder alle Stimmen für ein- und dieselbe Partei abgegeben wurden. Dies ist praktisch auszuschließen.

Mangels Zweifel an einer Gefährdung des Wahlgeheimnisses ist es nicht erforderlich, dass ein für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählter Wahlbezirk mehr als mindestens 400 Wahlberechtigte bzw. 400 Wähler umfassen muss. Die Zahl der potenziell für die repräsentative Wahlstatistik geeigneten Wahlbezirke würde sich durch die Erhöhung der Abschneidegrenze weiter verringern.

Das Ziel der repräsentativen Wahlstatistik, das tatsächliche Stimmverhalten der Wähler nach Alter und Geschlecht sowie die Zusammensetzung der Wählerschaft mit hoher Genauigkeit zu ermitteln, würde durch die Erhöhung der Mindestzahl von Wahlberechtigten bzw. Wählern in einem ausgewählten Wahlbezirk bedroht werden. Eine höhere Abschneidegrenze birgt die Gefahr, dass es zu Verzerrungen bei den Ergebnissen kommt. Wahlbezirke mit einer geringen Anzahl von Wahlberechtigten bzw. Wähler, die meist in ländlichen Gebieten liegen, könnten nicht mehr in ausreichendem Maße in die Stichprobe einbezogen werden. Je höher die Mindestzahl der Wahlberechtigten bzw. Wählern je Wahlbezirk festgelegt wird, desto eher ist die Repräsentativität der wahlstatistischen Ergebnisse beeinträchtigt. Das Ergebnis würde nicht den Durchschnitt aller Wahlbezirke und Wahlberechtigten erfassen, sondern unproportional zu den tatsächlichen Verhältnissen vermehrt auf die bevölkerungsreicheren Gebiete abstellen.

Eine Berechnung im Jahr 1999 zur Wiedereinführung der repräsentativen Wahlstatistik bei Bundestagswahlen bei gleichzeitiger Erhöhung der Abschneidegrenze von 300 auf 400 Wahlberechtigte je ausgewähltem Wahlbezirk hatte ergeben, dass bei diesen Anforderungen

21 Prozent aller Urnenwahlbezirke nicht in das Auswahlverfahren der Wahlbezirke für die Wahlstatistik einbezogen werden konnten; 5,6 Prozent dieser Wahlbezirke waren aufgrund der Anhebung von 300 auf 400 Wahlberechtigte auszunehmen.

Eine Abwägung der Interessen am effektiven Schutz des Wahlgeheimnisses und der Gewinnung von aussagekräftigen repräsentativen Ergebnissen muss zudem berücksichtigen, dass auch die Anhebung der Mindestanzahl der Wahlberechtigten bzw. Wähler nicht garantieren könnte, dass in den ausgewählten Wahlbezirken ähnliche, im Hinblick auf die Wahrung des Wahlgeheimnisses zu diskutierende Wahlbeteiligungen wie zur Bundestagswahl 2002 vermieden würden. Auch bei einer höheren Abschneidegrenze wäre nicht auszuschließen, dass beispielsweise in einbezogenen Wahlbezirken in einzelnen Auszählgruppen jeweils nur zwei Wähler ihre Stimme für denselben Wahlvorschlag abgäben.

2. Zu der Prüfbitte, ob die Wahlrechtsvorschriften dahin gehend zu ändern sind, dass – im Sinne einer klarstellenden Regelung – eine Nachwahl auch am Tage der Hauptwahl stattfinden kann:

Das Bundesministerium des Innern befürwortet eine klarstellende Regelung in § 43 BWG, dass eine Nachwahl im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 (Wahlkreisbewerber stirbt nach der Zulassung des Kreiswahlvorschlages, aber noch vor der Wahl) auch am Tag der Hauptwahl stattfinden kann. Es können damit vorgebrachte Zweifel darüber ausgeräumt werden, ob es mit dem Wortlaut der bestehenden Vorschrift vereinbar ist, eine Nachwahl am Tag der Hauptwahl durchzuführen. Für die klarstellende Regelung spricht neben dem Ausräumen dieser Zweifel, dass eine erforderliche Nachwahl, die am Tag der Hauptwahl durchgeführt werden kann, gegenüber einer Nachwahl, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, die nicht auszuschließende Möglichkeit „reaktiven" Wahlverhaltens vermeidet.

§ 43 Abs. 2 könnte wie folgt gefasst werden:

„Die Nachwahl soll im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 spätestens drei Wochen nach dem Tag der Hauptwahl stattfinden. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 kann sie am Tag der Hauptwahl stattfinden; sie soll spätestens sechs Wochen nach dem Tag der Hauptwahl stattfinden. Den Tag der Nachwahl bestimmt der Landeswahlleiter."

Eine Nachwahl am Tag der Hauptwahl kann in Betracht kommen, wenn noch rechtzeitig ein neuer Kreiswahlvorschlag eingereicht und vom Kreiswahlausschuss zugelassen werden kann sowie, wenn noch keine Wahlscheine und Stimmzettel ausgegeben worden sind. Soweit erforderlich, kann das Bundesministerium des Innern notwendige Einzelheiten auf der Grundlage von § 52 Abs. 1 Satz 2 Nr. 16 BWG in der Bundeswahlordnung regeln.

3. Zu der Prüfbitte, ob die Wahlrechtsvorschriften dahin gehend zu ändern sind, dass im Hinblick auf den Verzicht auf amtliche Wahlumschläge für die Stimmzettel eine Papierqualität vorgesehen wird, die eine Erkennbarkeit der Markierungen auf der Rückseite des Stimmzettels ausschließt:

Das Bundesministerium des Innern sieht keine Notwendigkeit, die wahlrechtlichen Vorschriften zu ergänzen. Die Anforderungen an die Papierqualität sind hinreichend präzise beschrieben, ebenso wie die Vorkehrungen, die der Wähler beim Falten des Stimmzettels zu treffen hat, damit das Wahlgeheimnis gewahrt ist: Der Stimmzettel ist „aus weißem oder weißlichem Papier", und dieses muss zur Wahrung des Wahlgeheimnisses so beschaffen sein, dass „nach Kennzeichnung und Faltung durch den Wähler andere Personen nicht erkennen können, wie er gewählt hat" (§ 45 Abs. 1 Satz 1 und 2 BWO). Der Wähler hat den Stimmzettel in der Weise zu falten, „dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und wirft ihn in die Wahlurne" (§ 34 Abs. 2 Satz 2 BWG).

Eine weiter gehende verbindliche Festschreibung der einzuhaltenden Anforderungen nach flächenbezogener Masse, Dicke, etc. erschwerte es den Kreis- und Landeswahlleitern, örtlich flexibel im Rahmen der wahlrechtlichen Anforderungen das Papier für die Stimmzettel zu beschaffen und bedrucken zu lassen. Auch war die empfohlene und verwendete Papierqualität nach Überzeugung des Wahlprüfungsausschusses (z. B. Beschlussempfehlung zum Wahleinspruch WP 195/02, Bundestagsdrucksache 15/1150, Anlage 22) jedenfalls bei doppelter Faltung des Stimmzettels auch in hellen Räumen ausreichend, um das Wahlgeheimnis und die Wahlfreiheit zu gewährleisten.

4. Zu der Prüfbitte, ob die Wahlrechtsvorschriften dahin gehend zu ändern sind, dass im Sinne einer einheitlichen Praxis sichergestellt wird, dass die Wahlbenachrichtigung bei bestehendem Nachsendeantrag des Empfängers nicht an die Gemeindebehörde zurückgesandt, sondern dem Empfänger nachgesandt wird:

Einer Änderung von Wahlvorschriften bedarf es nicht. Das Muster für die Wahlbenachrichtigung (Anlage 3 zur BWO) wird im Sinne einer einheitlichen Praxis bei der Novellierung der Bundeswahlordnung entsprechend der Anlage 3 zur EuWO ergänzt.

Bis zur Bundestagswahl 1998 sah das Muster für die Wahlbenachrichtigung (Anlage 3 zur BWO) zwei Vorausverfügungen vor:

„Wenn unzustellbar, zurück!

Wenn Empfänger verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurück!"

Da die zweite Vorausverfügung von der Deutschen Post AG seit April 2001 nicht mehr angeboten wird, verzichtete die Neufassung der Anlage 3 auf diese Vorausverfügung (Siebte Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung vom 12. Februar 2002, BGBl. I S. 620).

In Vorbereitung der Bundestagswahl 2002 wurde mit den Ländern vereinbart, dass die neue Vorausverfügung

„Bei Umzug Anschriftenberichtigungskarte!"

zusätzlich aufgenommen wird. Diese Vorausverfügung führt dazu, dass bei Vorliegen eines umzugsbedingten Nachsendeantrages die Wahlbenachrichtigung unmittelbar dem Wahlberechtigten nachgesandt sowie zusätzlich gesondert und kostenpflichtig die Gemeinde über die neue Anschrift informiert wird. Das Nachsenden der Wahlbenachrichtigung an den Wahlberechtigten vermeidet Zeitverlust, und die Mitteilung der neuen Anschrift ermöglicht es der Wahlorganisation, den bis dahin nicht registrierten Umzug eines Wahlberechtigten zu überprüfen sowie den Wahlberechtigten ggf. über umzugsbedingte Veränderungen zu informieren. Dem entsprechend wurden in das Muster für die Wahlbenachrichtigung bei Europawahlen (Anlage 3 zur EuWO) sowohl die Vorausverfügung „Wenn unzustellbar, zurück!" als auch die Vorausverfügung „Bei Umzug Anschriftenberichtigungskarte!" aufgenommen (Vierte Verordnung zur Änderung der Europawahlordnung vom 12. Dezember 2003, BGBl. I S. 2551).

5. Zu der Prüfbitte, ob gegenüber den Wahlbehörden und den Wahlvorständen in geeigneter Weise auf einen bürgerfreundlichen Umgang mit den Wählerinnen und Wählern u. a. bei der Erteilung von Auskünften zum richtigen Wahllokal hingewirkt werden kann:

Das Bundesministerium des Innern ist davon überzeugt, dass die Tausende ehrenamtlicher Wahlhelfer und -helferinnen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindebehörden ihre Auskünfte mit Engagement, nach bestem Wissen und auch bürgerfreundlich erteilen. Gleichwohl kann bei der hohen Zahl der Wahlberechtigten anlässlich einer Bundestagswahl, so z. B. 61,4 Millionen Wahlberechtigte bei der Wahl vom September 2002, nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass insbesondere am Tag der Wahl

aufgrund der Arbeitsbelastung bei hohem Wählerandrang und dem Erfordernis, den störungsfreien Ablauf der Wahl sicherzustellen, in Einzelfällen unzureichende Auskünfte z. B. zum richtigen Wahllokal erteilt werden. Um auch in diesem Bereich den Bürgerservice verbessern zu helfen, wird sich das Bundesministerium des Innern aufgrund dieser Prüfbitte vor der nächsten Wahl an den Bundeswahlleiter sowie an die Länder wenden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindebehörden sowie die ehrenamtlichen Wahlhelfer noch stärker für ein bürgerorientiertes Bewusstsein zu sensibilisieren.

6. Zu der Prüfbitte, ob – ggf. durch eine Änderung von Wahlrechtsvorschriften – darauf hingewirkt werden kann, dass bei der Briefwahl die ausgegebenen Wahlscheine einheitlich einen Hinweis auf das Mindestalter einer bei Bedarf mitwirkenden Hilfsperson enthalten (Muster in Anlage 9 zu § 26 Bundeswahlordnung):

Um sicherzustellen, dass die ausgegebenen Wahlscheine einheitlich einen Hinweis auf das Mindestalter einer bei Bedarf mitwirkenden Hilfsperson enthalten, soll § 66 Abs. 3 Satz 3 BWO um den Zusatz ergänzt werden, dass die Hilfsperson das 16. Lebensjahr vollendet haben muss.

Zuvor sollte § 52 Abs. 1 Satz 2 BWG entsprechend der Regelung in § 25 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 EuWG dahin gehend ergänzt werden, dass das Bundesministerium des Innern dazu ermächtigt wird, in der Bundeswahlordnung Rechtsvorschriften über „die Abgabe und Aufnahme von Versicherungen an Eides statt" zu treffen.

7. Zu der Prüfbitte, ob ein gesonderter Rechtsbehelf im Bundeswahlgesetz oder in der Bundeswahlordnung gegen die Berufung in Wahlvorstände statt einer teilweise bejahenden Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte geschaffen werden kann:

Das Bundesministerium des Innern empfiehlt, von einem gesonderten Rechtsbehelf im Bundeswahlgesetz oder in der Bundeswahlordnung gegen die Berufung in Wahlvorstände abzusehen:

In der Wahlpraxis hat es sich bisher nicht als notwendig erwiesen, ein förmliches Verfahren gegen die Berufung zu einem Wahlvorstand einzurichten. Da nach § 49 BWG Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, nur mit den in diesem Gesetz und in der Bundeswahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen sowie im Wahlprüfungsverfahren angefochten werden können, bleibt für die Überprüfung der Berufung zu einem Wahlvorstand grundsätzlich das Wahlprüfungsverfahren.

Allerdings sieht ein Teil der Verwaltungsgerichte die Berufung der Wahlorgane nicht als einen Vorgang an, der sich unmittelbar auf das Wahlverfahren im Sinne des § 49 BWG bezieht, sondern ordnet ihn der Vorbereitung und Organisation dieses Verfahrens zu. Folgerichtig bewerten diese Gerichte die Berufung in das Wahlehrenamt und deren Aufrechterhaltung nach Versagung der Anerkennung eines Ablehnungsgrundes als einen in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren überprüfbaren Verwaltungsakt, sodass sie Klagen einschließlich Fortsetzungsfeststellungsklagen gegen die Berufung zum Wahlvorstand als zulässig ansehen (u. a. BVerwG, Urteil vom 10. April 2002, NJW 2002, 2263, zur entsprechenden Regelung in § 26 Abs. 4 EuWG; OVG Lüneburg, Urteil vom 28. Oktober 1997, 5 L 7377/95, NJW 1998, 1732 L, Gründe: Rechtsprechungsdatenbank, www.dbovg.niedersachsen.de, zu § 51 des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes, der entsprechend § 49 BWG formuliert ist; VG Düsseldorf, Urteil vom 4. Juni 1999, NWVBI. 1999, 435).

Ein Rechtsbehelfsverfahren hätte für die betroffenen Wahlorgane einen erheblichen zusätzlichen Aufwand bei der Vorbereitung der Wahl zur Folge. Sofern Einspruch eingelegt würde, hätte die Gemeinde einen Bescheid zu fertigen, diesen mit dem zulässigen

Rechtsbehelf zu versehen, zuzustellen, und, sofern Beschwerde eingelegt würde, wäre eine nochmalige Entscheidung durch den Kreiswahlleiter zu treffen. Innerhalb des kurzen Zeitrahmens, der für eine ordnungsgemäße und termingerechte Vorbereitung der Wahl zur Verfügung steht, sollte die Belastung der Wahlorgane mit förmlichen Rechtsbehelfsverfahren aber auf die Gewährleistung des aktiven und passiven Wahlrechts (§§ 22, 31 BWO; §§ 26 Abs. 2, 28 Abs. 2 BWG) beschränkt bleiben. Zudem würde sich, um auf jeden Fall die Durchführung der Wahl sicherzustellen, die berufende Stelle schon mit Eingang des Einspruchs um ein Ersatzmitglied bemühen. Dies ist aber schon bisher der Fall, um eine zeitgerechte Besetzung der Wahlvorstände sicherzustellen.

Zudem handelte es sich bei einem solchen Rechtsbehelfsverfahren um ein „verwaltungsinterne(s) Widerspruchsverfahren“ (Bundestagsdrucksache 15/1850, Anlage 33, Seite 131, 133), was in der Tat bedeutete, dass „die ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Wahl von der Intensität der Inanspruchnahme“ (a. a. O.) dieses Rechtsschutzverfahrens abhinge. Hingegen ist es derzeit hinnehmbar, wenn Verwaltungsgerichte über die Berufung in ein Wahlehrenamt nach dem Bundeswahlgesetz und nach dem Europawahlgesetz entscheiden. Die Anfechtung und Prüfung im Wahlprüfungsverfahren ist damit nicht infrage gestellt. Aufgrund der bekannten und zahlenmäßig geringen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte zu Berufungen von Beisitzern von Wahlvorständen ist nicht zu erkennen, dass die ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Wahl gefährdet wäre. Die Verwaltungsgerichte haben in ihren Entscheidungen, soweit bekannt, regelmäßig die Berufungen in das Wahlehrenamt bestätigt. So hat z. B. das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 10. April 2002, NJW 2002, 2263) entschieden, dass § 4 Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes, wonach ein Richter Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt und Aufgaben der gesetzgebenden oder der vollziehenden Gewalt nicht zugleich wahrnehmen darf, einer Berufung in ein Wahlehrenamt nicht entgegensteht (a. A. noch VG Koblenz, NVwZ-RR 1994, 226f). Da Entscheidungen zu Berufungen in ein Wahlehrenamt keinen Einfluss auf das Wahlergebnis haben und deshalb auch nicht mandatsrelevant sein können, und da es sich, wenn sie nicht rechtmäßig erfolgen, um die Verletzung subjektiver Rechte handelt, wird ein Wahlberechtigter, dessen Einspruch vom Bundestag verworfen worden ist, auch in diesen Fällen eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht nur dann einlegen können, wenn seiner Beschwerde mindestens einhundert Wahlberechtigte beitreten (§ 48 Abs. 1 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht). Wegen dieser hohen Hürde zur abschließenden Prüfung eines solchen subjektiven Rechts wird auch eine Ergänzung von § 11 BWG entsprechend der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes (angefügt durch Artikel 1 Nr. 15 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes vom 24. April 2004, Nds. GVBl. S. 138, Begründung Niedersächsischer Landtag, Drucksache 14/3100, Seite 8f), dass die Berufung in ein Wahlehrenamt nur im Wahlprüfungsverfahren angefochten werden kann, nicht zu empfehlen sein, weil es auch damit bei dem erforderlichen Beitritt von einhundert Wahlberechtigten verbliebe.

Im Übrigen könnte die Einführung neuer Rechtsbehelfe auch als falsches Signal dahingehend verstanden werden, der Berufung in ein Ehrenamt komme nicht die Verpflichtung zu, die § 11 BWG grundsätzlich statuiert.

B. Erkenntnisse aus dem Erfahrungsaustausch mit den Ländern und dem Bundeswahlleiter nach der Bundestagswahl 2002

1. Ergänzende Hinweise zur Prüfbitte unter Abschnitt A.2 (Nachwahl am Tag der Hauptwahl, § 43 BWG):

Der Bundeswahlleiter regt eine klarstellende Regelung zur Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses und der vorläufigen Berechnung der Sitzverteilung am Tag der

Hauptwahl für den Fall an, dass die Nachwahl nicht am Tag der Hauptwahl stattfindet. Eine Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses erst nach Abschluss der Nachwahl wäre mit den Regelungen zur Öffentlichkeit der Wahlhandlung, die die Auszählung der Stimmen und die Bekanntgabe der Ergebnisse in den Wahlbezirken einbezieht, nicht zu vereinbaren und würde dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit nicht gerecht. Die lokalen Ergebnisse ermöglichten es, Hochrechnungen mit Ergebnissen für das ganze Wahlgebiet zu erstellen und noch am Abend der Hauptwahl zu veröffentlichen. Das Bundesministerium des Innern schließt sich den Anregungen des Bundeswahlleiters an und wird auf der Grundlage von § 52 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 15 und 16 BWG in der Bundeswahlordnung die notwendigen Einzelheiten klarstellen.

Darüber hinaus wird von einigen Ländern zur Vermeidung von Nachwahlen angeregt, bei der Bewerberaufstellung für die Kreiswahlvorschläge, so wie es in einigen Landeswahlgesetzen geregelt und bei der Aufstellung der Listenwahlvorschläge für die Europawahl möglich ist, Ersatzbewerber mitzuwählen.

2. Briefwahl (§ 36 BWG)

Von einem Teil der Länder wird anlässlich der erneuten Zunahme des Anteils der Briefwähler vorgeschlagen, die Regelungen zur Briefwahl zu überdenken. Der Anteil der Briefwähler bei Bundestagswahlen, zuletzt 18 Prozent bei der Bundestagswahl 2002, hat seit der dritten Bundestagswahl 1957, als die Briefwahl erstmals möglich war, regelmäßig zugenommen: 1957: 4,9 Prozent; 1961: 5,8 Prozent; 1965: 7,3 Prozent; 1969: 7,1 Prozent; 1972: 7,2 Prozent; 1976: 10,7 Prozent; 1980: 13,0 Prozent; 1983: 10,5 Prozent; 1987: 11,1 Prozent; 1990: 9,4 Prozent (10,9 Prozent); 1994: 13,4 Prozent; 1998: 16,0 Prozent (Der Bundeswahlleiter, Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002, Heft 5, Textliche Auswertung der Wahlergebnisse, Seite 37). Eine weitere Zunahme ist zu erwarten.

Die Briefwahl steht im Spannungsverhältnis zwischen dem Bestreben, möglichst allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen und dem verfassungsrechtlichen Erfordernis, die Wahlrechtsgrundsätze, hier insbesondere die Grundsätze der freien und geheimen Wahl, bestmöglich zu sichern und zu gewährleisten. Die dazu im Einzelnen im Bundeswahlgesetz und insbesondere in der Bundeswahlordnung getroffenen Regelungen dienen deshalb auch dazu, Missbrauch von vornherein auszuschließen. Werden die Anforderungen an die Antragstellung und Durchführung der Briefwahl erhöht, sind Wahlberechtigte dadurch möglicherweise gehindert oder davon abgehalten, an der Wahl teilzunehmen; Erleichterungen bei der Antragstellung und Durchführung der Briefwahl können hingegen zu einem weiteren Anstieg der Briefwähler führen und eröffnen gegebenenfalls auch Wege zum Missbrauch. Verfassungsrechtlich ist es zwar nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber mit der Einführung der Briefwahl dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen, die Wahrung der Freiheit der Wahl und des Wahlgeheimnisses in weiterem Umfange als bei der Stimmabgabe im Wahllokal dem Wähler anvertraut hat (BVerfGE 59, 119 <125>). Damit ist der Gesetzgeber jedoch nicht der Verpflichtung entbunden, auch künftig für eine bestmögliche Sicherung und Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze zu sorgen (BVerfGE 59, 119 <127>). Es bedarf deshalb sorgfältiger Prüfung und Abwägung, ob und welche Änderungen überhaupt in Betracht kommen. Vorgeschlagen wird einerseits, auf die Notwendigkeit der Angabe von Gründen für die Teilnahme durch Briefwahl (§ 25 Abs. 1 BWO) zu verzichten, wie es in einigen Ländern bereits der Fall ist; andererseits wird vorgeschlagen, die erforderliche Glaubhaftmachung für das Vorliegen dieser Gründe durch eine strafbewehrte Versicherung an Eides statt zu ersetzen. Da mit der Zunahme des Briefwähleranteils für die Beschaffung der Briefwahlunterlagen und insbesondere für die Durchführung der Briefwahl entsprechend höhere Sach- und

insbesondere Personalkosten entstehen, ist, auch um die Wähler zur Urnenwahl anzuhalten, vorgeschlagen worden, die Kosten für die Briefwahlunterlagen einschließlich der Kosten für ihre Versendung an die Antragsteller diesen aufzuerlegen, sowie, die unentgeltliche Beförderung durch die Deutsche Post AG (§ 36 Abs. 4 BWG) aufzuheben. Diese und weitere Vorschläge werden unter Leitung des Bundesministeriums des Innern in einer Arbeitsgruppe, zu der Vertreter der Länder, des Bundeswahlleiters sowie der kommunalen Spitzenverbände eingeladen werden, auf ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit und Praktikabilität geprüft werden. Anregungen für Änderungen der wahlrechtlichen Vorschriften dürften spätestens zur übernächsten Bundestagswahl realisierbar sein.

3. Gültigkeit der Zweitstimme bei Verwendung des Stimmzettels eines anderen Wahlkreises

Wird bei der Wahl ein Stimmzettel verwendet, der für einen anderen Wahlkreis gültig ist, sind Erst- und Zweitstimme ungültig (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BWG). Da es trotz sorgfältiger Vorbereitung der Wahl durch die Wahlorgane in einem geringen Umfange insbesondere in Großstädten mit mehreren Wahlkreisen vorgekommen ist, dass Stimmzettel eines anderen Wahlkreises ausgegeben wurden, befürwortet der Bundeswahlleiter und befürworten die Länder mehrheitlich, zukünftig für diese Fälle die Gültigkeit der Zweitstimme beizubehalten. Damit könne dem Wählerwillen in größtmöglichen Umfang zur Geltung verholfen werden. Das Bundesministerium des Innern teilt grundsätzlich diese Auffassung und wird dies bei der Vorbereitung der Vorschläge für die nächste Gesetzesänderung berücksichtigen, sofern das Wahlgeheimnis auch in dem Falle gewahrt werden kann, dass nur wenige für einen anderen Wahlkreis gültige Stimmzettel ausgegeben werden. Wenn es allerdings zu Verwechselungen von Stimmzetteln mit denen eines anderen Bundeslandes käme, muss es bei der derzeitigen Regelung verbleiben, da die Landeslisten der Parteien auf den Stimmzetteln in den einzelnen Bundesländern nicht deckungsgleich sind und da sich die Verteilung der Sitze auch nach der Zahl der Zweitstimmen richtet, die eine Landesliste erhalten hat.

4. Erfrischungsgeld

Das Bundesministerium des Innern wird prüfen, ob der Bitte der Länder, Gemeinden und der Kommunalen Spitzenverbände entsprochen werden kann, das so genannte Erfrischungsgeld in Höhe von derzeit 16 Euro, das jedem Mitglied der Wahlausschüsse und der Wahlvorstände für seine Tätigkeit gewährt werden kann (§ 10 Abs. 2 BWO), deutlich anzuheben. Gegenüber den Ländern haben insbesondere die größeren Gemeinden geltend gemacht, dass das Erfrischungsgeld zu niedrig sei, um genügend geeignete Wahlhelfer zu gewinnen, und dass die Wahlhelfer mit diesem Betrag ihre Tätigkeit nicht als ausreichend entschädigt ansähen. Um einen Anreiz zu setzen, hätten viele Gemeinden zulasten der kommunalen Haushalte in Höhe der Differenz Beträge von bis zu 30 Euro, einzelne Gemeinden auch noch höhere Beträge von bis zu 80 Euro gezahlt. Vereinzelt gäbe es aber auch Gemeinden, die kein Erfrischungsgeld zahlten oder kleinere Gemeinden, in denen die Wahlhelfer auf ihre Entschädigung verzichteten. Die Gemeinden argumentieren, dass von einer Erhöhung ein positives Signal ausgehen könne, um die Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Wahlhelfern zu reduzieren. Teilweise wird vorgeschlagen, das Erfrischungsgeld nach der im Wahlvorstand ausgeübten Funktion zu differenzieren. Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter sollten ein höheres Erfrischungsgeld erhalten, um ihre besondere Verantwortung für den ordnungsgemäßen Wahlablauf zu unterstreichen.

Anlage zu der Prüfbitte auf Seite 1 (Abschnitt A.1)

Das Statistische Bundesamt hat für die 289 Wahlbezirke mit 400 bis 499 Wahlberechtigten (Urnenwahl) und die 39 Wahlbezirke mit 400 bis 499 Wählerinnen und Wähler (Briefwahl) festgestellt, in wie vielen Fällen je Auszählgruppe keine oder bis zu zwei Stimmen (1.

Fallgruppe), in wie vielen Fällen je Auszählgruppe 3 bis 10 Stimmen (2. Fallgruppe) abgegeben wurden und in wie vielen Fällen alle Wählerinnen und Wähler übereinstimmend gewählt haben (3. Fallgruppe).

In der 1. Fallgruppe wurden bundesweit 4 Urnenwahlbezirke und 1 Briefwahlbezirk ermittelt: in der weiblichen Geburtsjahresgruppe 1978 bis 1984 2 Urnenwahlbezirke mit weniger als 3 abgegebenen Stimmen (jeweils 2 Wählerinnen, davon einmal übereinstimmend) und 1 Briefwahlbezirk mit weniger als 3 abgegebenen Stimmen (2 Wählerinnen nicht übereinstimmend) sowie in der weiblichen Geburtsjahresgruppe 1943 bis 1957 2 Urnenwahlbezirke mit keiner Stimmabgabe.

In der 2. Fallgruppe wurden bei den Urnenwahlbezirken 193, bei den Briefwahlbezirken 25 Wahlbezirke ermittelt. In den Urnenwahlbezirken gab es 3 Wahlbezirke mit jeweils 3, 9 Wahlbezirke mit jeweils 4 und 10 Wahlbezirke mit jeweils 5 Stimmen in einer Auszählgruppe; die weiteren Urnenwahlbezirke hatten jeweils zwischen 6 und 10 Stimmen je Auszählgruppe. Für die Briefwahlbezirke der 2. Fallgruppe wurde Folgendes festgestellt: 2 Briefwahlbezirke mit jeweils 3, kein Briefwahlbezirk mit jeweils 4 und 3 Briefwahlbezirke mit jeweils 5 Stimmen in einer Auszählgruppe; die weiteren Briefwahlbezirke hatten jeweils zwischen 6 und 10 Stimmen je Auszählgruppe.

In der 3. Fallgruppe wurden bundesweit 7 Urnenwahlbezirke ermittelt. In einem dieser Wahlbezirke hatten in der männlichen Geburtsjahresgruppe 1968 bis 1977 alle 4 Wähler übereinstimmend gewählt; in den 6 weiteren Fällen hatten in der weiblichen Geburtsjahresgruppe 1978 bis 1984 jeweils 2, 3, 4, 5, 10 und 18 Wählerinnen übereinstimmend gewählt. Bei den Briefwahlbezirken wurde kein entsprechender Fall festgestellt.

Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 27. September 2004 gemäß Beschluss des Deutschen Bundestages vom 26. Juni 2003 und vom 6. November 2003 (Bundestagsdrucksache 15/1150, 15/1850).

Empfehlungen der Ausschüsse In zu Punkt ... der 819. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 2006

Recomendaciones de la Comisión de Interior en el Pleno del Bundesrat de 10 de febrero de 2006 al proyecto de ley de modificación de la Ley federal electoral

Antrag des Landes Rheinland-Pfalz

Moción del Estado Federado de Renania Palatinado

A.

1. Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 des Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen.

B.

2. Der Ausschuss schlägt dem Bundesrat ferner vor, Herrn Staatsminister Karl Peter Bruch

Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz gemäß § 33 der Geschäftsordnung des Bundesrates zum Beauftragten des Bundesrates für die Beratung des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag und seinen Ausschüssen zu bestellen.

Empfehlungen, 789/1/05 - 2 -

[…]

C.

3. Der Ausschuss empfiehlt dem Bundesrat weiterhin, nachfolgende Entschließung zu fassen:

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung - gestützt auf die Erfahrungen der Länder und der Wahlorgane - um eine umfassende Evaluierung des Bundeswahlgesetzes und die zügige Vorlage eines darauf aufbauenden Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. Trotz der kontinuierlichen Aktualisierung des aus dem Jahre 1956 stammenden Gesetzes haben sich zahlreiche Fragestellungen ergeben, deren Lösung insgesamt so zeitig in Angriff genommen werden sollte, dass das geänderte Regelwerk einschließlich der erforderlichen Ausführungsbestimmungen rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl zur Verfügung steht.

Nach Auffassung des Bundesrates kommen dabei insbesondere folgende Schwerpunkte in Betracht:

a) Die Notwendigkeit todesfallbedingter Nachwahlen soll weitestgehend ausgeschlossen werden. Neben dem vom Bundesrat auf Initiative von Rheinland-Pfalz unterbreiteten Vorschlag - BR-Drucksache 789/05 (Beschluss) - sollen weitere Lösungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das im hessischen Landtagswahlrecht verankerte Modell mit obligatorischen Ersatzbewerbern, ebenso in die Prüfung einbezogen werden wie Varianten, bei denen die Ersatzbewerberfunktion auf die Zeit bis zur Wahl beschränkt wird.

b) Die Frage nach Zulässigkeit und Grenzen der Aufnahme parteifremder Bewerberinnen und Bewerber in Wahlvorschläge bedarf einer gesetzgeberischen Klarstellung. Der Gesetzgeber selbst muss entscheiden, ob bei der Aufstellung und Zulassung von Landeslisten und Kreiswahlvorschlägen ein Homogenitätsgebot zu beachten sein soll und es bejahendenfalls so ausgestalten, dass es in der Kürze der Wahlvorbereitungszeit von den Parteien und Wahlorganen rechtssicher angewendet werden kann.

- 3 - Empfehlungen, 789/1/05

c) Das Regelwerk für die Briefwahl bedarf vor dem Hintergrund eines kontinuierlich ansteigenden Briefwähleranteils einer umfassenden Überprüfung; dabei muss im Interesse eines Beitrages für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung geklärt werden, ob die bisher überwiegend verfassungsrechtlich motivierten Restriktionen beibehalten werden müssen und nach Vereinfachungsmöglichkeiten für die Praxis gesucht werden.

d) Die Rechtsfolge der irrtümlichen Verwendung von Stimmzetteln aus einem fremden Wahlkreis desselben Landes soll korrigiert werden; die derzeit angeordnete vollständige Ungültigkeit der Stimmabgabe erscheint nicht gerechtfertigt.

e) Das aufwändige Verfahren der Mandatsannahme soll durch eine Regelung ersetzt werden, nach der die Rechtsstellung eines Abgeordneten kraft Gesetzes erworben wird.

f) Die Regelung der Wahlkostenerstattung bedarf vor allem im Interesse der Kommunen, die die Hauptlast bei der Vorbereitung und Durchführung von Bundestagswahlen zu tragen haben, einer Aktualisierung.

g) Aus der Mitte des 15. Deutschen Bundestags sind in Form von Gesetzentwürfen und Prüfbitten aufgrund von Beschlussempfehlungen des Wahlprüfungsausschusses Themen benannt worden, die möglicherweise einer Neuregelung bedürfen. Der Bundesrat geht davon aus, dass auch diese Punkte, wie zum Beispiel das Sitzverteilungsverfahren, mit in die erbetene Prüfung einbezogen werden.

II.4. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 3 de julio de 2008

2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07

Negatives Stimmgewicht
Peso negativo del voto

Urteil vom 3. Juli 2008

2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07

LEITSATZ:

§ 7 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absätze 4 und 5 des Bundeswahlgesetzes verletzt die Grundsätze der Gleichheit und der Unmittelbarkeit der Wahl, soweit hierdurch ermöglicht wird, dass ein Zuwachs an Zweitstimmen zu einem Verlust an Sitzen der Landeslisten oder ein Verlust an Zweitstimmen zu einem Zuwachs an Sitzen der Landeslisten führen kann.

In den Verfahren über die Wahlprüfungsbeschwerden

1. des Herrn Dr. F…
– Bevollmächtigter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Meyer,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin –
gegen
den Beschluss des Deutschen Bundestages vom 14. Dezember 2006 – WP 162/05 – (BTDrucks 16/3600) –
– 2 BvC 1/07 –,

2. des Herrn Z…
– Bevollmächtigter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Meyer,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin –
gegen
den Beschluss des Deutschen Bundestages vom 14. Dezember 2006 – WP 179/05 – (BTDrucks 16/3600) –
– 2 BvC 7/07 –,

hat das Bundesverfassungsgericht – Zweiter Senat – unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter

Vizepräsident Hassemer, Broß, Osterloh, Di Fabio, Mellinghoff, Lübbe-Wolff, Gerhardt, Landau

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. April 2008 durch

URTEIL

für Recht erkannt:

Entscheidungsformeln

1. § 7 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absätze 4 und 5 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung des Siebzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 11. März 2005 (Bundesgesetzblatt I Seite 674) verletzt Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes, soweit hierdurch ermöglicht wird, dass ein Zuwachs an Zweitstimmen zu einem Verlust an Sitzen der Landeslisten oder ein Verlust an Zweitstimmen zu einem Zuwachs an Sitzen der Landeslisten führen kann.

2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 2011 eine verfassungsgemäße Regelung zu treffen.

3. Im Übrigen werden die Wahlprüfungsbeschwerden zurückgewiesen.

4. Die Bundesrepublik Deutschland hat die notwendigen Auslagen dieses Verfahrens dem Beschwerdeführer zu 1. vollumfänglich und dem Beschwerdeführer zu 2. zur Hälfte zu erstatten.

http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/21398153_kw27_ueberhangmandate/index.html

Resolución del Tribunal Constitucional federal de 14 de diciembre de 2006 sobre los votos por ordenador

Beschluss Zum Wahleinspruch

des Herrn Dr. U. W.,

– WP 145/05 –

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005

hat der Wahlprüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 30. November 2006 beschlossen,

dem Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Entscheidungsformel:

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen.

Tatbestand:

Mit Schreiben vom 6. November 2005 hat der Einspruchsführer gegen die Bundestagswahl am 18. September 2005 Einspruch eingelegt. Der Einspruch betrifft die Durchführung der Wahl mittels elektronischer Wahlgeräte.

Der Einspruch ist nach Darstellung des Einspruchsführers in seiner Begründung sowie der Schilderung des Sachverhalts im Wesentlichen inhaltsgleich mit einem Wahleinspruch in derselben Sache (WP 108/05). Abweichungen gebe es in der Antragsstellung sowie im Abschnitt Mandatsrelevanz.

Der Einspruchsführer beantragt, die Stimmbezirke und die genaue Anzahl der mit NEDAP-Geräten abgegebenen Stimmen zu ermitteln und die Wahl in den betroffenen Wahlbezirken zu wiederholen. Er beantragt festzustellen, dass die eingesetzten Geräte nicht den Anforderungen des BWG hinsichtlich der öffentlichen Kontrolle von Wahlen sowie den Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten (Anlage 1 zu § 2 der Bundeswahlgeräteverordnung [BWahlGV]) entsprochen hätten und dass nicht mehr festzustellen sei, ob die eingesetzten Geräte fehlerfrei programmiert gewesen seien. Er beantragt ferner, die durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) erstellten Prüfberichte zu veröffentlichen oder ihm zu überlassen sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Gutachter für die Bewertung der Sicherheit der eingesetzten Software und einen Staatsrechtler als Gutachter für die Bewertung der wahlrechtlichen Problematik beizuziehen.

Den Bundestag fordert der Einspruchsführer auf, durch Konkretisierung von § 35 des Bundeswahlgesetzes (BWG) die Sicherstellung der verfassungs- und wahlrechtlichen Grundsätze auch bei Wahlen mit Wahlgeräten zu gewährleisten. Der Deutsche Bundestag soll zudem sicherstellen, dass bei zukünftigen Wahlen mit softwaregesteuerten Wahlgeräten die zum Einsatz kommenden Geräte einschließlich ihrer Software in einem öffentlichen Zulassungsverfahren begutachtet werden, die gutachterlichen Prüfberichte der Öffentlichkeit

zugänglich sind, die Authentizität der eingesetzten Software im Wahllokal bei jedem einzelnen Gerät unmittelbar vor dem Wahlgang öffentlich verifiziert wird und entweder die geräteunabhängige Verifizierbarkeit des Wahlergebnisses möglich ist oder alle Prüfunterlagen aus dem Zulassungsverfahren einschließlich der Konstruktionsunterlagen, des Quellcodes der zum Einsatz kommenden Software der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Zur Begründung seines Einspruchs trägt er im Wesentlichen vor, dass die verwendeten Wahlgeräte des Typs NEDAP ESD 1 und ESD 2 „in ihrer derzeitigen Hardware-Architektur, der Software und in ihren Funktionen nicht denjenigen Erfordernissen (genügen), die erfüllt sein müssen, um das verfassungsrechtlich und wahlrechtlich gebotene Öffentlichkeitsprinzip technisch, apparativ und funktional zu verwirklichen“. Der Vorgang der Ergebnisfeststellung mit diesen Geräten stelle eine geheime Auszählung dar, der von Anfang an gesetzeswidrig sei. Zudem entsprächen die Geräte, insbesondere hinsichtlich der Manipulationssicherheit, nicht dem Stand der Technik. Schließlich lasse sich aufgrund der Bauart der Geräte nachträglich nicht mehr feststellen, ob das Wahlergebnis rechtmäßig zustande gekommen ist.

I.

Die bei der Bundestagswahl 2005 eingesetzten Wahlgeräte der niederländischen Firma NEDAP (Nederlandsche Apparatenfabriek) bestehen aus dem eigentlichen Wahlgerät, an dem der Wähler seine Wahl vollzieht, und einer per Kabel fest mit dem Wahlgerät verbundenen Bedieneinheit, die sich in der Obhut des Wahlvorstandes befindet. Diese Bedieneinheit enthält u. a. zwei Schlösser mit Schlüsseln, über die die Betriebszustände „Wählen“ und „Wahlauswertung“ eingestellt werden, sowie Tasten, über die das Wahlgerät für jeden einzelnen Wähler freigegeben wird. Das eigentliche Wahlgerät besteht aus einem großen Tastentableau mit einem oder mehreren Stimmzetteln, einem kleinen Display zur Kontrolle für den Wähler und einem Funktionstastenfeld, das nur vom Wahlvorstand während der Wahlauswertung benutzt wird und sonst durch eine Klappe abgedeckt ist. Des Weiteren befinden sich auf der Rückseite des Wahlgeräts ein Drucker und ein Steckplatz für ein Speichermodul (eine Art Kassette) sowie die Elektronikeinheit. In der Elektronikeinheit befinden sich zwei Speicherchips (auch als Speicherbausteine bzw. Speichermodule bezeichnet), die gemeinsam das Softwareprogramm enthalten. Diese zwei Speicherchips werden Eproms genannt.

Das Softwareprogramm auf den Eproms bestimmt den generellen Ablauf der Wahl, also die Schritte Freigabe, Auswahl der Erststimme und der Zweitstimme, ggf. Korrektur der Stimmen, endgültige Stimmabgabe, Stimmspeicherung und Sperrung des Geräts sowie die Auswertung der Wahl. Das Speichermodul enthält hingegen die Daten der Stimmzettel, die Zuordnung der einzelnen Tasten zu Listen, Parteien oder Bewerbern sowie einige konkrete Angaben zur Wahl wie Wahldatum und Wahllokal und dient damit vor allem, weil es die Daten über die abgegebenen Stimmen enthält, als „Urne“. Das Wahlgerät kann nur mit einem eingesteckten und gefüllten Speichermodul für eine Wahl verwendet werden. Die Eproms mit dem Softwareprogramm sind integraler Bestandteil des Wahlgeräts, während die Speichermodule ein Zubehör sind.

Die Firma NEDAP baut das Gerät und liefert es an den Kunden aus. Durch eine auf der Rückseite des Geräts aufgeklebte Baugleichheitserklärung versichert der Hersteller, dass das Gerät baugleich zu dem angegebenen zugelassenen Baumuster ist. Das Wahlgerät enthält im Auslieferungszustand kein Speichermodul und ist damit nicht für eine Wahl verwendbar. Leere Speichermodule werden dem Kunden als Zubehör mitgeliefert.

Für die Wähler stellt sich der Ablauf wie folgt dar: Der Wahlvorstand kontrolliert die Wahlberechtigung wie üblich und gibt dann, statt dem Wähler einen Stimmzettel auszuhändigen, das Wahlgerät über eine Taste auf der Bedieneinheit frei. Der Wähler kann

nun an das Wahlgerät herantreten und seine Stimmen durch Tastendruck (anstelle durch Ankreuzen) auf einer Folientastatur auswählen, die dem Erscheinungsbild eines Stimmzettels nachgebildet ist. Das digitale Textdisplay bestätigt die getroffene Auswahl und fordert zum nächsten Schritt auf. Der Wähler kann also seine Auswahl auf dem Display kontrollieren, ggf. über die Korrekturtaste berichtigen und dann seine Stimmen endgültig abgeben, indem er die dafür vorgesehene Stimmabgabetaste drückt. Dieser letzte Schritt (Abgabe einer gültigen bzw. ungültigen Stimme) entspricht dem Einwurf des Stimmzettels in die Urne. Der Schriftführer vermerkt im Wählerverzeichnis die Stimmabgabe. Die Stimmen werden redundant und mit Sicherheitsmaßnahmen versehen an einer zufällig ausgewählten Stelle des Speichermoduls gespeichert. Nach der Speicherung der Stimmen ist das Wahlgerät für weitere Stimmabgaben gesperrt. Der Wähler verlässt das Wahlgerät. Die Anzeige auf der Bedieneinheit des Wahlvorstandes über die Zahl der Wähler erhöht sich um eins. Diese Anzeige dient dem Wahlvorstand für die Entscheidung, ob der Wähler seine Wahl ordnungsgemäß abgeschlossen hat. Das Wahlgerät bleibt gesperrt, bis es für den nächsten Wähler wieder freigegeben wird.

II.

Im Einzelnen bemängelt der Einspruchsführer folgende Aspekte des Einsatzes von Wahlgeräten:

Das verfassungsrechtliche Fundament des Wahlsystems bilde das Demokratie-Prinzip. Ihm entsprächen die Grundsätze unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen (Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 GG). In diesem Zusammenhang verfassungsrechtlicher Grundentscheidungen stellten parlamentarische Wahlen Staatsakte des Volkes dar, verkörpert in allen seinen wahlberechtigten Individuen. Die Verletzung des Demokratie-Prinzips und aller daraus resultierender Wahlrechtsnormen und -vorschriften stelle deshalb unmittelbar eine Verletzung der grundgesetzlich garantierten Rechte des einzelnen Wahlbürgers dar. Somit seien Verletzungen der einfachgesetzlichen Normen auch Verletzungen der Verfassung und damit des Rechtsstaatsprinzips.

Aus dem Demokratie-Prinzip werde das Öffentlichkeitsprinzip abgeleitet: „‚Die Öffentlichkeit übt gegenüber den Wahlorganen eine Kontrollfunktion aus'". ‚Geheime … Auszählungen sind danach gesetzwidrig' (Schreiber, Handbuch des Wahlrechts, 7. Auflage, 2002, S. 249 f., Rn. 1 mit Verweis auf BVerfGE 89, 291, 302 f.)". So habe jedermann auch Zutritt zu den Sitzungen der Wahlausschüsse und Wahlvorstände (ebenda), d. h., jeder könne Wahlhandlungen sowie die Ermittlung und Feststellung von Wahlergebnissen beobachten. Diese höchstrichterliche Rechtsprechung und Rechtsmeinung sei grundlegend für seine Beschwerde, dass beim Einsatz von Wahlgeräten der Vorgang eines Teiles der Wahlhandlung (nämlich keine Kontrolle der Dokumentation der abgegebenen Stimmen im Gerät, vergleichbar der Ablage der Stimmen beim Urneneinwurf) sowie die Ermittlung und Feststellung der Ergebnisse im Inneren des Gerätes stattfänden und deswegen nicht beobachtet werden könnten.

Die Kontrollfunktion der Öffentlichkeit solle gewährleisten, dass die Wahlen rechtmäßig durchgeführt würden und somit das Parlament richtig zusammengesetzt sei.

Die Stimmabgabe mit Wahlgeräten erlaube und regele § 35 BWG. Dort werde zwar die Beachtung des Grundsatzes der Geheimhaltung gefordert (Absatz 2), nicht jedoch der Grundsatz freier Wahlen, aus dem das Öffentlichkeitsprinzip zwingend hervorgehe – und auch nicht der Grundsatz der Wahlgleichheit. § 35 BWG sei somit in der Wiederholung grundgesetzlicher Prinzipien defizitär.

§ 34 BWG organisiere das individuelle Wahlgeheimnis mit Stimmzetteln, mache zugleich aber den äußeren Ablauf transparent: „Der Wähler faltet daraufhin den Stimmzettel in der Weise, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist und wirft ihn in die Wahlurne." Der Stimmzettel-Einwurf in die Urne sei also ein öffentlich zu beobachtender Teil der Wahlhandlung, dessen

Öffentlichkeit nicht das Erfordernis des Wahlgeheimnisses beeinträchtige. Die eingesetzten NEDAP-Geräte aber organisierten dieses Erfordernis der Öffentlichkeit, nämlich der beobachtbaren Stimmen-Ablage – vergleichbar mit dem Einwurf in die Urne – eben nicht und entsprächen deshalb nicht dem Öffentlichkeitsgebot. § 37 BWG impliziere die unbestrittene Öffentlichkeit der Stimmenauszählung. Die in den §§ 67 bis 70 der Bundeswahlordnung (BWO) geregelten öffentlichen Ermittlungshandlungen fehlten bei Wahlgeräten, bzw. es werde bei diesen nicht erkennbar, dass die Dokumentation und Feststellung innerhalb der Geräte manipulationsfrei vor sich gehe.

In der „Disparatheit" der Bundeswahlgeräteverordnung zwischen detaillierten apparatetechnischen Anweisungen einerseits und ihrer nur allgemeinen Forderung nach Geltung der Bundeswahlordnung andererseits – und damit sinngemäß des BWG – liege wohl der Grund für die Tatsache, dass die Prüf- und Zulassungsverfahren sich vornehmlich oder sogar ausschließlich auf die technischen Vorschriften konzentrierten.

Gegenstand seines Einspruches sei es, die Verfassungsund Wahlrechtswidrigkeiten derartiger Zusammenhänge im Einzelnen herauszuarbeiten und – jenseits des eigentlichen Einspruchs – auch eine Korrektur de lege ferenda einzufordern. Dazu trägt er folgende Mängel vor, die aus seiner Sicht bestehen:

Fehlende Kontrollmöglichkeit

Die durch das BWG für Wahlgang und Wahlgeschäft vorgeschriebene „Öffentlichkeit" sei ein Kontrollmechanismus, der die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen gewährleiste. Werde der Kontrollmechanismus „Öffentlichkeit" im Wahlgeschäft oder Wahlgang teilweise eingeschränkt, so müsse er durch andere entsprechend wirksame Kontrollmechanismen ersetzt werden. Diese äquivalenten Kontrollmechanismen müssten transparent und öffentlich verifizierbar sein, wenn sie wirksam die Manipulation von Wahlen verhindern sollen. Bei den NEDAP-Wahlgeräten handele es sich um Wahlcomputer, auf denen ein komplexes Softwareprogramm installiert sei. Da die Stimmabgabe geheim erfolge und die Funktionsweise der Software nicht transparent – also vom Wähler nicht unmittelbar einsehbar – sei, sei es prinzipiell nicht möglich, die ordnungsgemäße Speicherung und Zählung der Stimmen zu kontrollieren. Vorstellbar sei z. B., dass eine fehlerhafte Software einen bestimmten Anteil der abgegebenen Stimmen unabhängig von der Wahl des jeweiligen Wählers einer bestimmten Partei zuweise, oder dass eine manipulierte Software lediglich die abgegebenen Stimmen zähle und nach einem vorgegebenen Verhältnis auf die zur Wahl stehenden Parteien verteile. Daher sei es für die NEDAP-Geräte erforderlich, die ordnungsgemäße Wahldurchführung durch einen alternativen Kontrollmechanismus sicherzustellen.

Gefährdungspotential durch Manipulation

Bei Wahlen mit softwaregesteuerten Wahlgeräten gehe eine besondere Gefahr von dem Umstand aus, dass der Gerätehersteller einen zentralen Angriffspunkt darstelle und dass sich Wahlen über eine Manipulation der Software noch vor der Auslieferung der Geräte (also noch beim Gerätehersteller) wesentlich wirkungsvoller als bei Urnenwahlen manipulieren ließen. Eine solche Manipulation könne etwa von einem – durch Drohungen oder politisch oder finanziell motivierten – Insider beim Hersteller praktiziert werden. Ein Angriff auf den Hersteller sei auch von außen denkbar, etwa über Viren oder Trojaner, die Dritten (z. B. einer politischen Gruppierung oder einem ausländischen Geheimdienst) einen Zugang auf die Rechner des Herstellers ermöglichten. Wegen der Komplexität der eingesetzten Software mit über zweihunderttausend Zeilen Quellcode könne eine solche Manipulation auch bei sorgfaltiger Qualitätskontrolle seitens des Herstellers unentdeckt bleiben. Der Wähler als Souverän habe einen Anspruch darauf, dass von den mit der Durchführung der Wahl beauftragten Organen wirksame Mittel ergriffen werden, um solche Manipulationen auszuschließen. Solche

Kontrollmöglichkeiten habe die Öffentlichkeit derzeit aber nicht; sie sei im Gegenteil von der Kontrolle der eingesetzten Software derzeit völlig ausgeschlossen. Die jetzige Praxis stelle nicht nur keine Manipulationssicherheit her. sondern sie mache es sogar unmöglich, Manipulationen überhaupt seitens deutscher Behörden verhindern zu können.

Fehlendes verifizierbares Protokoll

Einen wirksamen Kontrollmechanismus könne z. B. ein verifizierbares, vom Wähler einsehbares Papierprotokoll der abgegebenen Stimmen darstellen, das die Möglichkeit einer Überprüfung des Wahlergebnisses bietet (engl. Voter-Verifiable Audit-Trail [VVPAT]). Damit sei ein System gemeint, bei dem ein in das Wahlgerät integrierter Drucker die Wahlentscheidung des Wählers protokolliere. Dieses Protokoll sei vom Wähler hinter Glas einsehbar. Um das Wahlgeheimnis sicherzustellen, fielen diese Quittungen einzeln in eine Wahlurne und stünden gegebenenfalls nach Ende der Wahl für eine manuelle Kontrollzählung zur Verfugung. Die NEDAP-Geräte verfügten hingegen über keinerlei Kontrollmöglichkeit und seien deshalb per se anfällig für Manipulationen. Die Bedeutung der fehlenden Kontrollmöglichkeit sei analog verständlich an einem Beispiel aus dem Geldgeschäft: Einer Bank, die ihren Kontoinhabern zwar monatlich die Zahl der Umsätze auf deren Girokonten und die neuen Kontosalden mitteile, ihren Kunden aber Kontoauszüge mit verifizierbaren Umsatzinformationen vorenthielte, würde man zu Recht nicht vertrauen wollen. Eben dieses Vertrauen werde aber vom Wähler beim Einsatz der NEDAP-Geräte verlangt.

Vertrauenswürdigkeit/Verifizierbarkeit der Software

Aus dem Verzicht auf eine alternative Kontrollmöglichkeit der Stimmenspeicherung folge unmittelbar, dass an die Vertrauenswürdigkeit der Software besonders hohe Maßstäbe anzulegen seien. Dabei könne es – verfassungsrechtlich und wahlrechtlich – keinesfalls ausreichend sein, dass die eingesetzte Software dem Bundesministerium des Innern (BMI) als oberster Wahlbehörde vertrauenswürdig erscheine. Das Öffentlichkeitsprinzip und die implizierte Kontrollfunktion durch die Öffentlichkeit erforderten vielmehr, dass die Vertrauenswürdigkeit der Software allgemein verifizierbar sei. Eine solche Verifizierbarkeit sei derzeit jedoch nicht gegeben, da das Zulassungsverfahren für die Geräte einschließlich der Prüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt nichtöffentlich und schon deshalb nicht verifizierbar sei, die NEDAP-Geräte einschließlich der eingesetzten Software der interessierten Öffentlichkeit nicht für eine unabhängige Überprüfung zur Verfügung stünden und die Software der Geräte nicht quelloffen („Open Source“) sei, obwohl die Verfügbarkeil des Ouellcodes für eine Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit unabdingbar sei. Diese Forderung finde sich auch in der Anlage 1 zu § 2 der BWahlGV wieder, die eine Vorlage des Quellcodes im Rahmen des Zulassungsverfahrens erfordere.

Authentizität der Software

Ein prinzipielles Problem bei der Vertrauenswürdigkeit von Software sei die Frage, ob die vom Anwender eingesetzte Kopie der Software mit einer ursprünglich geprüften Software identisch und damit frei von Manipulationen sei. Zur Authentifizierung von Software gebe es verschiedene etablierte Verfahren. Wesentlich bei solchen Prüfverfahren sei, dass der Prüfalgorithmus und die zu prüfende Kopie der Software nicht aus derselben Quelle stammten, da sonst die Vertrauenswürdigkeit des Prüfalgorithmus mitgeprüft werden müsse. Genau diese Anforderung erfüllten die NEDAP-Geräte nicht, da die beim Gerätestart angezeigten und auch ausgedruckten Prüfsummen von der eingesetzten Software selbst berechnet würden und deshalb nicht geeignet seien, eine Manipulation der Software zu verhindern. Sie könnten allenfalls dazu dienen, den versehentlichen Einsatz einer falschen oder unvollständigen Software-Version zu verhindern.

Authentizität des vorgelegten Quellcodes

Für die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit einer komplexen Software sei in der Regel ein Einblick in den Quellcode der Software erforderlich. Diese Hinschätzung finde sich in Abschnitt B.I der „Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten“ (Anlage 1 zu § 2 BWahlGV) wieder, der neben der Vorlage des lauffähigen Programms (Objektcode) auch die Vorlage des kommentierten Quellcodes verlange. Um die Vertrauenswürdigkeit des lauffähigen Programms zu gewährleisten, sei aber die gleichzeitige Vorlage von Objekt- und Quellcode nicht ausreichend. Es müsse auch geprüft werden, ob sich das lauffähige Programm tatsächlich aus dem vorgelegten Quellcode erzeugen lasse. Soweit sich der Prüfansatz der PTB aus der BWahlGV erschließen lasse, erfolge eine solche Überprüfung jedoch nicht. Daher sei nicht sichergestellt, dass der PTB nicht bereits ein manipulierter Objektcode vorgelegt werden könne, in dem sich etwa irgendeine „Hintertür“ oder ein „Trojaner“ befänden.

Authentizität der eingesetzten Software

Die BWahlGV verlange vom Hersteller der Wahlgeräte die Abgabe einer Baugleichheitserklärung (§ 2 Abs. 6) für jedes in den Verkehr gebrachte Gerät. Eine über das Vorliegen dieser Baugleichheitserklärung hinausgehende Prüfung der ausgelieferten Wahlgeräte erfolge nicht. Insbesondere erfolge keine Authentifizierung der eingesetzten Software, so dass sich die mit der Durchführung der Wahl befassten Organe auf eine wirksame Qualitätssicherung beim Hersteller vertrauensvoll verlassen müssten sowie darauf, dass die Software nach der Herstellerüberprüfung nicht mehr manipuliert worden sei. Die Authentifizierung der eingesetzten Software ausschließlich dem Hersteller zu überlassen, sei aber ebenso grotesk wie es allein schon der Gedanke wäre, die Auszählung der Stimmen bei einer Urnenwahl nichtöffentlich durch einen privaten Dienstleister ausführen zu lassen.

Technische und konstruktive Mängel

Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des Systems

Die eingesetzten Geräte entsprächen hinsichtlich ihrer Manipulations-Sicherheit nicht dem „Stand der Technik“, wie dieses durch die Richtlinien zur BWahlGV (Buchstabe B, Ziffer 2.1.) rechtlich geboten sei. Eine von der Regierung der Republik Irland am 1. März 2004 eingesetzte Kommission zu elektronischen Wahlen (Commission on Electronic Voting [CEV]) habe in ihrem Bericht vom Dezember 2004 erhebliche Sicherheitsbedenken gegen die irische Variante der Geräte geäußert und sich gegen eine Verwendung der Geräte in Irland ausgesprochen. Die CEV habe sich nicht in der Lage gesehen, den Gebrauch des auch bei der Bundestagswahl verwendeten Systems zu empfehlen, weil das System bisher nicht habe nachweisen können, dass es (trotz mannigfacher apparativer und funktionaler Vorzüge) den von der Kommission gesetzten Standards (Terms of Reference) zu genügen vermöge.

Es sei für Deutschlands wahlrechtliche Verhältnisse völlig unakzeptabel, dass ein Wahlsystem, das auf eine systemunabhängige Verifizierbarkeit des Wahlergebnisses verzichte, in seinem Sicherheitsansatz nicht den allgemein anerkannten Konzepten und Standards folge und entgegen der BWahlGV nicht „unter Beachtung der für Systeme mit schwerwiegenden Schadensfolgen bei Fehlverhalten (hohe Kritikalität) anerkannten Regeln der Technik aufgebaut“ sei. Der Einsatz der NEDAP-Geräte und die dabei zustande gekommenen Wahlergebnisse seien schon deshalb rechtswidrig.

Mangelhafte Gerätesicherheit

Nach der Auslieferung der Geräte hänge die Vertrauenswürdigkeit der Geräte wesentlich davon ab, ob unbefugter Zugang zu den Geräten wirksam verhindert werde und ob Manipulationen an den Geräten erkennbar seien. Nach Einschätzung von Experten lasse sich

der Speicherbaustein, auf dem die Wahlsoftware gespeichert ist, innerhalb von zwei Minuten auswechseln. Deshalb sei es unerlässlich, dass die Geräteelektronik vor Manipulation gesichert sei. Die Elektronik befinde sich auf der Rückseite des Gerätes unter einer verschraubten Abdeckung und sei durch zwei vom Hersteller angebrachte – also durch nichtamtliche – Siegel gesichert. Diese Siegel könnten offenbar ohne große Schwierigkeit entfernt werden. Somit bestehe kein ausreichender Schutz gegen eine Manipulation des Wahlgerätes. Wie inkonsistent und lückenhaft das Sicherheitskonzept des Herstellers sei, zeige sich daran, dass vor und nach dem Wahlgang die Geräte über zwei farbig markierte Schlüssel in einen anderen Betriebszustand versetzt würden, der die Konfiguration und das Auslesen der Stimmenspeicher ermögliche. Diese Schlüssel seien, zumindest in Irland, bei allen Geräten identisch, wodurch der unautorisierte Zugang zu solchen Schlüsseln erheblich erleichtert werde.

Mangelhaft gesicherter Stimmenspeicher

Die Stimmen würden in den Stimmenspeichern unverschlüsselt abgelegt. Bei den Stimmenspeichern handele es sich um einfachste Bauelemente aus Standardkomponenten, deren Spezifikation öffentlich verfügbar sei. Die Bausteine seien ohne weitere Beschädigung zu öffnen und wieder zu schließen. Da die Stimmen in den Stimmenspeichern unverschlüsselt abgelegt würden, bestehe die einzige Sicherungsmaßnahme der Speicher gegen ein bösartiges Manipulieren der Speicher allein in allen NEDAP-spezifischen Steckverbindungen, über die die Speicher mit den Wahlgeräten bzw. Lesegeräten verbunden würden.

Sicherheitsmängel der Auswertecomputer

Die Wahlgeräte würden über besonders gesicherte Personalcomputer für die Wahlen konfiguriert. Diese gesicherten PCs würden auch für die Auswertung der Stimmenspeicher im Wahlamt eingesetzt. Die irische CEV habe bei diesen gesicherten Computern erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt, die das Aushebeln der Sicherheitsmaßnahmen ermöglichten.

Organisatorische Mängel

Fachliche Zuständigkeit:

BMI – PTB – Bundesamt für Sicherheit

Es sei offensichtlich, dass die BWahlGV und die Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten unter Mitwirkung der PTB entstanden seien. Das lasse sich aus der Reduktion der wahlrechtlichen Anforderungen auf den apparatetechnischen Bereich (Belastbarkeit, Haltbarkeit, Rückwirkungsfreiheit, Energieversorgung) sowie aus den lediglich funktionalen Anforderungen erschließen, die sich im Kompetenzbereich der PTB befänden. Bei den NEDAP-Geräten handele es sich aber um Computer mit einer komplexen Software, die auf über zweihunderttausend Zeilen Quellcode beruhe. Eine Beschränkung der Zulassungsprüfung auf apparattechnische Kriterien sei daher völlig unangemessen. Das für Software-Sicherheit zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hätte in die Gestaltung der BWahlGV und in das Zulassungsverfahren von Wahlgeräten einbezogen werden müssen.

Sicherheitsmängel in der Organisation des Wahlgeschäfts

Aufgrund der erheblichen Probleme, die durch unautorisierten Zugang zu den Geräten, zu Zubehör und Software entstehen könnten, sehe die irische Kommission für elektronisches Wählen die dringende Notwendigkeit, unautorisierten Zugang zu den Geräten auch zwischen verschiedenen Wahlen durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern. Eine solche Kontrolle finde aber in Deutschland nicht statt, und es seien auch keine angemessenen Regelungen in Kraft, die eine solche Zugangskontrolle sicherstellen könnten. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Geräte in der Regel ausschließlich am Wahltag versiegelt würden.

Dies sei aber nicht ausreichend.

Mandatsrelevanz

In 13 Wahlkreisen, die der Einspruchsführer auflistet, sei ausschließlich oder überwiegend mit den NEDAP-Geräten gewählt worden. Die beanstandeten Mängel bei der Wahldurchführung seien hier offensichtlich mandatsrelevant, weil nicht überprüft werden könne, ob das Erstimmenergebnis in diesen Wahlkreisen rechtmäßig zustande gekommen sei.

Angesichts von etwa 2 000 eingesetzten NEDAP-Wahlgeräten dürfe die Zahl der betroffenen Stimmen deutlich über 2 Millionen betragen. Dies entspreche etwa 5 Prozent der abgegebenen Stimmen und damit etwa 15 der 300 Listenmandate. Somit seien die beanstandeten Mängel offensichtlich mandatsrelevant hinsichtlich des Zweitstimmenergebnisses. Soweit der Einspruchsführer insoweit die betreffenden Wahlkreise aufzählt, wird auf die Akten verwiesen.

III.

Zu dem Vortrag des Einspruchsführers hat das Bundesministerium des Innern (BMI) unter Einbeziehung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und des Bundeswahlleiters – ebenso wie zu weiteren Einsprüchen, die sich auf das Thema der elektronischen Wahlgeräte beziehen – mit Schreiben vom 3. Mai 2006 Stellung genommen.

Danach sei der vorliegende Einspruch zurückzuweisen. Die Wahlgeräte seien insbesondere hinreichend manipulationssicher und auch ein Papierprotokoll erhöhe die Manipulationssicherheit nicht. Auch eine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes habe nicht vorgelegen. Selbst wenn man Wahlfehler annehmen würde, seien sie nicht mandatsrelevant.

Zum besseren Verständnis der technischen Seite der Einsprüche werden in der Stellungnahme zunächst allgemein der weitere Ablauf der Wahl mit Wahlgeräten (Nummer 1) sowie die Prüfung durch die PTB beschrieben (Nummer 2). Sodann folgt die Stellungnahme zu den vom Einspruchsführer gerügten Aspekten der Wahl mit Wahlgeräten (Nummer 3 bis 5).

1. Ablauf der Wahl mit Wahlgeräten

Einige Wochen vor der Wahl, wenn aufgrund der Entscheidung der Wahlausschüsse die Kreiswahlvorschläge und Landeslisten der Parteien und damit der Inhalt der Stimmzettel feststehen würden, programmiere die Gemeindebehörde für jedes Wahlgerät ein Speichermodul mit den Daten der Stimmzettel und den anderen konkreten Angaben der Wahl. Mit den gleichen Daten werde ein Geräte-Stimmzettel bedruckt. Der Geräte-Stimmzettel werde von der Gemeindebehörde auf dem Tastentableau des Wahlgeräts angebracht. Das programmierte Speichermodul werde auf der Rückseite des Wahlgeräts eingesteckt. Erst mit dem Speichermodul sei das Wahlgerät prinzipiell für eine Wahl einsetzbar. Nach dem Einstecken des programmierten Speichermoduls erfolge ein Funktionstest des Wahlgeräts durch die Gemeindebehörde. Dabei werde unter anderem kontrolliert, ob das Wahlgerät und sein Softwareprogramm sich korrekt identifizierten, ob alle Tasten richtig programmiert seien und ob sich keine Stimmen im Speichermodul befänden. Bei neueren Bauarten werde außerdem die Unversehrtheit der Versiegelung, die vom Hersteller an der Elektronikeinheit angebracht worden sei, kontrolliert. Sei der Funktionstest erfolgreich, werde das Gerät verschlossen und im verschlossenen Zustand amtlich versiegelt.

Am Wahltag kontrolliere der Wahlvorstand die Unversehrtheit der amtlichen Siegel, erbreche sie, baue das Wahlgerät auf und schalte es ein. Der Wahlvorstand kontrolliere die Identifikation des Wahlgeräts und seines Softwareprogramms, das Wahldatum und den Wahlbezirk bzw. -kreis und die Anzeige „0“ für die Zahl der abgegebenen Wählerstimmen. Die durchzuführenden Kontrollen seien detailliert im Handbuch sowie überblicksartig in der

Kurzanleitung für die Wahlvorstände beschrieben. Der Wahlvorstand stelle das Wahlgerät mit Hilfe eines Schlüssels auf den Betriebszustand „Wählen“ ein und verriegele diesen Betriebszustand durch einen zweiten Schlüssel. Die beiden Schlüssel würden während des Wahltages bei zwei verschiedenen Mitgliedern des Wahlvorstands aufbewahrt. Der Wahlvorstand gebe das Wahlgerät frei und die einzelnen Wähler gäben ihre Stimmen ab. Am Ende des Wahltages entriegele der Wahlvorstand mit Hilfe der beiden Schlüssel den Betriebszustand „Wählen“ und stelle den Betriebszustand „Wahlauswertung“ ein.

Zur Feststellung der Zahl der Wähler würden die Zahl der Stimmabgabevermerke und der eingenommenen Wahlscheine mit den vom Wahlgerät angezeigten Zahlen der Stimmabgaben verglichen und in der Wahlniederschrift vermerkt. Der Wahlvorstand wähle nun am Wahlgerät die Funktion „Wahlauswertung per Drucker“ und gewinne so das vom Wahlgerät errechnete Ergebnis. In dem Moment, in dem dieses Ergebnis ausgedruckt werde, könnten keine weiteren Stimmen mehr hinzugefügt werden.

Der Ausdruck des Wahlergebnisses werde in die Wahlniederschrift aufgenommen. Der Wahlvorsteher stelle die Zahl der insgesamt abgegebenen Erst- und Zweitstimmen und der für jeden Bewerber und jede Liste abgegebenen Stimmen fest und kontrolliere, ob die Summe der einzelnen Ergebnisse mit der Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen übereinstimme. Sollte der Drucker defekt sein, könne entweder das Wahlergebnis am Display angezeigt und von dort in die Wahlunterlagen übertragen werden oder das Speichermodul mit den Stimmen werde in ein anderes Wahlgerät eingesteckt und mit diesem werde der Ergebnisausdruck angefertigt. Der Wahlvorstand entferne das Speichermodul mit den Stimmen und übergebe es verpackt und versiegelt der Gemeindebehörde. Das Wahlgerät werde ebenfalls verschlossen und zurücktransportiert.

Die Speichermodule könnten jederzeit nach Ablauf des Wahltages erneut in ein Wahlgerät eingesteckt werden, um das Ergebnis noch einmal (bzw. beliebig oft) zu gewinnen. Darüber hinaus könnten die Speichermodule im Rahmen einer Wahlprüfung ausgelesen werden. Dabei könne festgestellt werden, ob die Stimmen, die vierfach redundant gespeichert würden, Defekte aufwiesen. Das Speichermodul enthalte, ebenso wie ein Stimmzettel, auch Informationen über Stimmenkoppelungen (Erst- und zugehörige Zweitstimme). Über die Anwendungssoftware könnten alle gespeicherten Stimmen als Stimmzettel mit den entsprechenden Kreuzen ausgedruckt und von Hand nachgezählt werden. Seien alle Einspruchsfristen verstrichen, würden die Speichermodule nach Freigabe durch den Bundeswahlleiter komplett gelöscht und könnten mit den Daten der nächsten Wahl programmiert werden.

Schließlich enthalte auch das Wahlgerät selbst umfangreiche Diagnosefunktionen und führe mit Hilfe dieser Funktionen beim Gerätestart, während des laufenden Betriebs sowie vor und nach der Speicherung von Stimmen Selbsttests durch.

2. Ablauf der Prüfung bei der PTB

Bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt werde ein Mustergerät geprüft. Die Prüfung orientiere sich an der Bundeswahlgeräteverordnung und der Anlage 1 zu § 2 BWahlGV, den Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten. Diese schrieben die zu prüfenden Anforderungen vor.

Die Anforderungen gliederten sich in konstruktionstechnische, funktionale und einige ergonomische Anforderungen. Anforderungen bezüglich der Sicherheit seien implizit ebenfalls enthalten.

Bei der Prüfung würden verschiedene Prüfmethoden verwendet. Anforderungen wie z. B. die, dass das Wahlgerät in seiner Konstruktion dem Stand der Technik entsprechen müsse, würden durch Inspektionen der technischen Unterlagen und durch Sichtprüfungen am Gerät

geprüft. Anforderungen wie z. B. die nach bestimmten Funktionen oder Abläufen würden durch Funktionstests am Wahlgerät geprüft. Dabei würden generell auch Fehlersituationen, Defekte, falsche Handhabung, Stromausfälle usw. berücksichtigt. Anforderungen an die Verträglichkeit gegenüber bestimmten Umwelteinflüssen würden durch Klimakammertests, Vibrations- und Falltests, Messungen der Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern, Stromschwankungen u. Ä. geprüft. Auch die elektromagnetische Abstrahlung der Wahlgeräte werde kontrolliert. Parallel zu diesen Prüfungen erfolgten die gründliche Inspektion des Quellcodes des in den Wahlgeräten verwendeten Softwareprogramms, dynamische Funktionstests des Softwareprogramms sowie Reviews der Entwicklungsdokumentation, der Testdokumentation und der Bedienungsanleitung. Die Softwareprüfung nehme in der Regel 90 Prozent des zeitlichen Aufwands der Baumusterprüfung in der PTB in Anspruch.

Die Baumusterprüfung werde durch eine Arbeitsgruppe der PTB durchgeführt, die langjährige Erfahrungen mit Wahlgeräteprüfungen habe und als Softwareprüfstelle akkreditiert sei. Die Arbeitsgruppe stütze sich bei der Baumusterprüfung auch auf externe, akkreditierte Prüflaboratorien, z. B. bei den mechanischen Tests.

An bestimmten Stellen lege die Bundeswahlgeräteverordnung ein spezielles Sicherheitsniveau fest, wie z. B. beim allgemeinen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsniveau, bei der Rückwirkungsfreiheit usw. Wo die BWahlGV keine besonderen Festlegungen treffe, werde bei der Prüfung der Wahlgeräte ein Maßstab angelegt, mit dem mindestens ein vergleichbares Sicherheitsniveau gewährleistet werde wie bei der konventionellen Wahl.

Bei der Prüfung und Bewertung werde als Voraussetzung angenommen, dass sich das Wahlgerät am Wahltag permanent unter der Kontrolle des Wahlvorstandes befinde und dass die Speichermodule, die die Stimmen enthielten, mit der gleichen Sorgfalt behandelt würden wie Stimmzettel und Urnen bei der konventionellen Wahl.

Die konventionelle Wahl mit den gesetzlich festgelegten Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Wahlvorstände habe sich über eine lange Zeit bewährt. Genau diese Rolle der Wahlvorstände bleibe beim Einsatz von Wahlgeräten erhalten.

3. Technische Aspekte des Einspruchs

3.1 Identifikation der Hardware und des Softwareprogramms

Die Hardware der Wahlgeräte werde über einen Namen und eine Versionsnummer identifiziert. Der Name befinde sich auf dem Typenschild an der Vorderseite der Geräte. Name und Versionsnummer könnten darüber hinaus vom Gerät auf Anforderung angezeigt und ausgedruckt werden. Sie könnten somit jederzeit mit den Angaben auf der Baugleichheitserklärung verglichen werden.

Soweit der Einspruchsführer kritisiert, dass das Softwareprogramm nicht ausreichend identifizierbar sei und dass die Identifikation des Softwareprogramms nicht ausreichend geprüft werde, stellt das BMI fest:

Das Softwareprogramm identifiziere sich über eine Versionsnummer und zwei Prüfsummen. Die Prüfsummen würden durch das Gerät selbst gebildet, indem ein im Softwareprogramm enthaltener Prüfsummenalgorithmus verwendet werde. Der Prüfsummenalgorithmus werde im Rahmen der Baumusterprüfung geprüft. Dabei werde festgestellt, ob der Algorithmus korrekt arbeite, ob er das gesamte Softwareprogramm einbeziehe, ob er nicht ausgeschaltet oder umgangen werden könne und ob seine Ergebnisse unverändert an den Drucker und das Display übergeben würden.

Die Versionsnummer und die beiden Prüfsummen der Software könnten jederzeit, auch während des Wahltags und im Beisein von Wählern, am Gerät angezeigt und ausgedruckt

werden und mit der Baugleichheitserklärung verglichen werden. Das Softwareprogramm sei damit jederzeit identifizierbar.

Vor der Verwendung der Geräte fänden zwei Kontrollen der Softwareidentifikation statt, und zwar durch die Gemeindebehörde einige Wochen vor der Wahl und durch die Wahlvorstände am Tag der Wahl.

Die Gemeindebehörde komplettiere die Wahlgeräte, indem die Speichermodule mit den konkreten Angaben zur Wahl programmiert und in die Wahlgeräte eingesteckt würden. Die Gemeindebehörde führe anschließend einige Kontrollen aus. Dabei werde u. a. geprüft, ob die Softwareidentifikation des Seriengerätes mit der des zugelassenen Baumusters übereinstimme. Die Softwareidentifikation des Baumusters werde in der Verwendungsgenehmigung veröffentlicht und mittels eines Aufklebers auf dem Gerät angebracht.

Nach der Kontrolle der Softwareidentifikation (und weiteren Prüfungen) würden die Wahlgeräte verschlossen und amtlich gesiegelt. In diesem Zustand verblieben sie bis zum Aufbau durch den Wahlvorstand am Morgen des Wahltags. Der Wahlvorstand sei angewiesen, vor dem Aufbau die Unverletztheit der Siegel zu überprüfen.

Nach dem Aufbau der Geräte führe der Wahlvorstand ebenfalls eine Kontrolle der Softwareidentifikation durch.

Bei allen Schritten würden nicht nur die Anzeigen kontrolliert, sondern auch Ausdrucke angefertigt, die für nachträgliche Überprüfungen zur Verfügung stünden.

Die Prüfungen der Softwareidentifikation durch die Gemeindebehörde und durch den Wahlvorstand seien in der Bedienungsanleitung der Wahlgeräte vorgeschrieben. Die Bedienungsanleitung sei Bestandteil der Bauart, sie sei ebenfalls durch die PTB geprüft worden und stelle eine verbindliche Vorschrift für die Handhabung der Wahlgeräte dar.

3.2 Authentifizierung des Softwareprogramms

Zur Vermutung des Einspruchsführers, dass es möglich sei, die Eproms mit dem Softwareprogramm zu ändern oder auszutauschen, ohne dass dies bemerkt werde, wird wie folgt Stellung genommen:

Die Frage sei, ob die in den Seriengeräten befindlichen Eproms tatsächlich Kopien der bei der Baumusterprüfung geprüften Eproms seien, ob also das Softwareprogramm auf den Eproms der Seriengeräte authentisch (echt) sei.

3.2.1 Prüfsummen und andere informationstechnische Mittel

Die durch das Wahlgerät angezeigten oder ausgedruckten Prüfsummen seien nicht dazu geeignet und deshalb auch nicht dafür vorgesehen, die Authentizität des Softwareprogramms zu sichern. Es sei theoretisch möglich, Eproms zu schaffen, die ein verändertes Softwareprogramm enthielten und trotzdem auf Nachfrage die ursprünglichen, erwarteten Prüfsummen lieferten, indem neben dem Softwareprogramm auch der Prüfsummenalgorithmus manipuliert werde. Die Prüfsummen dienten deshalb allein der Identifikation, nicht der Authentifizierung. Sie schützten vor unabsichtlichen Veränderungen, aber nur beschränkt vor beabsichtigten Manipulationen.

Würden die bisher verwendeten Prüfsummen durch andere informationstechnische Verfahren ersetzt, dann ändere sich an dieser Situation grundsätzlich nichts. Solange für die Erzeugung und Anzeige dieser Werte ein Algorithmus verwendet werde, der Bestandteil des Wahlgerätes ist, könne zusammen mit dem Softwareprogramm auch der Algorithmus manipuliert werden. Er könne so verändert werden, dass der ursprüngliche Wert vorgespiegelt werde. Alle Werte, die durch Bauteile oder Softwareprogramme des (eventuell manipulierten) Wahlgerätes bereitgestellt werden, seien für eine Authentifizierung nur beschränkt geeignet bzw. sogar ungeeignet.

Eine Authentifizierung über solche Verfahren könne nur vollständig sein, wenn die Eproms bei jedem einzelnen Seriengerät entnommen und außerhalb des Wahlgeräts mit unabhängigen Hilfsmitteln geprüft würden. Seien die Werte unabhängig ermittelt worden, könnten sie mit den Werten des Baumusters verglichen werden.

Auch bei einer Stückprüfung aller ausgelieferten Eproms könne es weitere Manipulationsmöglichkeiten geben. So könne z. B. die Elektronikeinheit so geändert werden, dass nicht mehr die kontrollierten und als korrekt befundenen Eproms benutzt werden, sondern neu hinzugefügte, verändert programmierte Eproms.

Bestünden also berechtigte Zweifel daran, dass die vom Hersteller produzierten Seriengeräte mit dem Baumuster übereinstimmen, dann müsse eine Stückprüfung aller ausgelieferten Geräte erfolgen, bei denen nicht nur die Baugleichheit der Eproms, sondern auch die Baugleichheit der Elektronikeinheit und aller anderen wichtigen Bestandteile der Wahlgeräte überprüft werden müsse.

Dies wäre grundsätzlich machbar, aber mit erheblichem zusätzlichem Aufwand verbunden.

3.2.2 Zugriffsmöglichkeiten auf das Softwareprogramm

Falls das Softwareprogramm des Wahlgeräts durch ein manipuliertes ersetzt werden solle, dann müsse dieses manipulierte Softwareprogramm die Funktionstests vor der Wahl bestehen. Es müsse sich also größtenteils wie das korrekte Softwareprogramm verhalten. Außerdem müsse es mit der Hardware der Wahlgeräte zusammenarbeiten, da sonst Tasten, Displays usw. nicht funktionieren würden. Es erscheine deshalb unrealistisch, das Softwareprogramm komplett neu zu schreiben; eher sei eine Modifikation des bestehenden Softwareprogramms denkbar.

Um das bestehende Softwareprogramm modifizieren zu können, müsste der Quellcode verfügbar sein. Dieser liege nur beim Hersteller NEDAP sowie beim Prüflaboratorium in der PTB vor. Beide Stellen seien durch standardmäßige Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls, Virenschutz, Rechtevergabe und Zugangskontrollen vor dem Eindringen unbefugter Dritter geschützt.

3.2.3 Auswirkungen geänderter oder ausgetauschter Eproms

Das Wahlgerät einschließlich seines auf den Eproms befindlichen Softwareprogramms funktioniere nur als Wahlgerät, wenn ein korrekt programmiertes Speichermodul eingesteckt werde. Während das Softwareprogramm den generellen Ablauf des Wählens und des Auswertens der Wahl bestimme, enthalte das Speichermodul die Daten der Stimmzettel und die anderen konkreten Daten der Wahl.

Die Eproms mit dem Softwareprogramm seien durch den Hersteller produziert, in das Wahlgerät eingebaut und dieses dann ausgeliefert worden. Die Daten der Stimmzettel und die anderen konkreten Wahldaten stünden erst einige Wochen vor dem Wahltermin fest und werden erst dann unabhängig vom Hersteller von der Gemeindebehörde in die Speichermodule einprogrammiert.

Würden nun die Eproms beim Hersteller oder nach der Auslieferung manipuliert, dann seien nur Manipulationen ohne genaue Kenntnis der Tastenbelegung und der Nummerierung von Bewerbern möglich. Es sei zum Beispiel nur möglich, das Softwareprogramm so zu ändern, dass der Bewerber 3 einen Teil der Stimmen des Bewerbers 4 bekommt oder dass Stimmen mit einem festen Verhältnis auf die Listen der Parteien 7 und 8 aufgeteilt werden. Welche Bewerber sich am Wahltag unter den Nummern 3 und 4 verbergen oder welche Listen am Wahltag die Nummern 7 und 8 haben werden, sei bis einige Wochen vor der Wahl in der Regel nicht bekannt. Die Belegung der Tasten ändere sich außerdem von Wahl zu Wahl. Manipulationen müssten also in der Regel „blind“ erfolgen und würden sich dann auf alle Wahlen in gleicher Art und Weise auswirken.

Gezielte Manipulationsversuche seien damit in der Regel schwierig, solange sie sich auf die Manipulation der Eproms beschränken. Sie seien nur sinnvoll, wenn die Manipulation auch die gefüllten Speichermodule mit den Daten für eine bestimmte Wahl umfasse. Sobald diese aber vorliegen, eingesteckt und überprüft worden seien, seien die Wahlgeräte verschlossen, amtlich versiegelt und besonders geschützt aufbewahrt.

Zusammenfassend sei zu sagen, dass die Authentizität des Softwareprogramms bei den Wahlgeräten durch eine Gesamtheit von Gegebenheiten und flankierenden Maßnahmen gewährleistet werde. Hierzu zähle vor allem die Tatsache, dass für eine Manipulation der Zugriff auf den Quellcode des Softwareprogramms und der Zugriff auf die gefüllten Speichermodule nötig seien. Der Zugriff auf den Quellcode würde strafbare Handlungen, wie ein unbefugtes Eindringen beim Hersteller oder der PTB voraussetzen. Ein Zugriff auf die Speichermodule sei erst dann sinnvoll, wenn die Wahlgeräte bereits auf die Wahlämter verteilt, dort komplettiert und versiegelt worden seien. Zu diesem Zeitpunkt seien sie aber besonders geschützt aufbewahrt, so dass ein Zugriff ebenso unwahrscheinlich erscheine wie ein Zugriff auf die von der Gemeindebehörde aufbewahrten Stimmzettel.

3.3 Übereinstimmung von Quellcode und Softwareprogramm

Die Einspruchsführer hätten vermutet, dass der bei der PTB geprüfte Quellcode nicht mit dem Softwareprogramm übereinstimmen könne, das in den Wahllokalen zum Einsatz komme.

Dieses Problem bestehe aus zwei Teilen: a) Gehören der in der PTB geprüfte Quellcode und das in der PTB als Bestandteil des Baumusters geprüfte Softwareprogramm zusammen? b) Entsprechen die in den Wahllokalen eingesetzten Seriengeräte mit ihren Softwareprogrammen dem Baumuster? Problem a) werde im folgenden Ablauf dargestellt, während Problem b) die in Punkt 3.2 bereits behandelte Authentifizierung des eingesetzten Softwareprogramms betreffe.

Der Quellcode werde beim Hersteller der Wahlgeräte durch die Programmierer geschrieben. Aus ihm gehe durch einen Übersetzungsvorgang das Softwareprogramm hervor, das sich auf den Eproms im Inneren des Wahlgeräts befinde. Der Hersteller sende ein Wahlgerät einschließlich der Eproms mit dem Softwareprogramm für die Baumusterprüfung bei der PTB ein. Gleichzeitig reiche er auch den Quellcode ein, aus dem das Softwareprogramm hervorgegangen sei. Der Hersteller versichere verbindlich, dass das Softwareprogramm aus genau dem Quellcode hervorgegangen sei, der zur Prüfung vorgelegt wird. Da die Funktionalität des Wahlgerätes sowohl am Baumuster mit dem darin enthaltenen Softwareprogramm als auch durch eine Inspektion des Quellcodes geprüft werde, würden Abweichungen zwischen beiden mit großer Wahrscheinlichkeit während der Prüfung entdeckt werden. Zu solchen Abweichungen sei es bisher nicht gekommen.

Als zusätzliche vertrauensbildende Maßnahme würde außerdem im Rahmen der ersten Baumusterprüfungen durch die PTB ein Audit der Softwareentwicklung beim Hersteller durchgeführt.

3.4 Sicherung der Stimmen im Speichermodul

Der Einspruchsführer habe angeführt, dass die Stimmen im Speichermodul nicht verschlüsselt abgelegt sind, und vermute, dass diese einfach geändert oder gelöscht werden können.

Die Stimmen seien im Speichermodul nur insoweit unverschlüsselt abgelegt, als man unter Verschlüsselung die Anwendung eines kryptografischen Algorithmus verstehe. Sie seien keineswegs einfach ablesbar im Speichermodul abgelegt. Um sie zu ändern, sei neben dem Zugriff auf das (geschützt bei den Gemeindebehörden aufbewahrte) Speichermodul und ein passendes Programmiergerät auch die Information erforderlich, wie die Stimmen im

Speichermodul abgelegt werden müssen, damit das Wahlgerät sie beim Zählen berücksichtigt. Die Stimmen würden außerdem redundant und mit einigen Sicherungsmaßnahmen abgelegt, so dass sie bei der Auswertung hinsichtlich ihrer Integrität geprüft werden könnten. Verletzten die manipulierten Stimmen eine der Integritätsregeln, würden sie nicht gezählt und eine Fehlermeldung erscheine.

Eine Offenlegung des Quellcodes würde die Integritätsbedingungen allgemein bekannt machen und damit Ansatzpunkte für Manipulationsversuche bieten.

Einfacher als die gezielte Manipulation einzelner oder aller Stimmen sei die Löschung von Stimmen, sofern Zugriff auf die Speichermodule und ein passendes Programmiergerät bestehe. Um dies zu verhindern, würden die Speichermodule während der Wahl beaufsichtigt und nach der Wahl genauso sicher aufbewahrt wie ausgefüllte Stimmzettel.

3.5 Sicherheitsmängel der Auswertecomputer

Der Einspruchsführer habe auf die zahlreichen Probleme, die in Irland mit den PCs und der speziellen Software aufgetreten seien, die für die Wahlauswertung verwendet worden seien, verwiesen.

Das irische Wahlsystem lege fest, dass die Inhalte mehrerer Wahlurnen vor der Auszählung gemischt werden müssten. Damit sei es in Irland erforderlich, die Speichermodule mehrerer Wahlgeräte an einer zentralen Stelle zusammenzuführen und (in einer Datenbank auf einem PC) zu mischen, bevor die Wahlauswertung stattfinden darf. Das Ergebnis werde also mit Hilfe eines PCs und darauf befindlicher spezieller Software gewonnen.

Diese Situation bestehe in Deutschland nicht. In jedem Wahllokal stelle der Wahlvorstand mit Hilfe des Wahlgeräts am Ende des Wahltages das Wahlergebnis des Wahlbezirkes fest.

Die Wiederholung der Wahlauswertung in der Gemeindebehörde sei demgegenüber keine Feststellung des amtlichen Endergebnisses.

Im Wahlamt würden in der Regel die Speichermodule aus den einzelnen Wahllokalen noch einmal gelesen, die Ergebnisse auf einem PC gesammelt und dann addiert. Stattdessen oder parallel dazu könnten jedoch auch die von den Wahlvorständen ermittelten Ergebnisse aus den Wahllokalen verwendet und diese manuell oder mit einem Taschenrechner addiert werden.

Die in Irland für die Umrechnung der Stimmen in Sitze verwendete und ebenfalls von der irischen Kommission kritisierte spezielle Software sei nur für so genannte STV-Wahlen (Single Transferable Vote Elections) geeignet, die in Deutschland keine Verwendung fänden.

Da das in den Wahlämtern zum Addieren verwendete Verfahren und demzufolge auch die dafür verwendeten PCs und ihre spezielle Software für die Gewinnung des amtlichen Endergebnisses nicht relevant seien, unterlägen sie keinen speziellen Anforderungen. Sie seien nicht Bestandteil der Bauart und würden nicht geprüft.

3.6 Fehlen eines verifizierbaren Protokolls

Zur Kritik des Einspruchsführers, dass die Verwendung von Wahlgeräten ohne (Papier-) Protokollfunktion dazu führe, dass eine Auszählung nicht überprüfbar sei, wird wie folgt Stellung genommen:

Ein denkbares, bei Geräten der Firma NEDAP aber nicht erstelltes, Papierprotokoll (auch engl. Voter Verifiable Paper Audit Trail [VVPAT] genannt) werde durch das Wahlgerät vor der endgültigen Stimmabgabe ausgedruckt, dem Wähler hinter Glas präsentiert und nach der Bestätigung durch den Wähler und damit endgültiger Stimmabgabe in eine angeschlossene Urne geworfen.

Die Verwendung von VVPATs habe Vor- und Nachteile und sei in der Fachwelt nicht unumstritten. Insbesondere sei durch die Verwendung eines VVPAT keine unabhängige Verifikation möglich. So könne der VVPAT, wie jedes Papierprodukt, manipuliert werden. Es gebe ungezählte Möglichkeiten, professionell aussehende Drucksachen herzustellen. Für das zusätzlich erforderliche Zerstören oder Austauschen von Stimmzetteln seien keinerlei besondere Fähigkeiten nötig. Im Gegensatz dazu erfordere das Manipulieren elektronischer Daten spezielle Kenntnisse. Aus diesen Gründen sei der VVPAT grundsätzlich unzuverlässiger als die elektronischen Daten. Der VVPAT sei auch nicht unabhängig. Er könne nicht das mangelnde Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Wahlgeräts ersetzen, da er vom Wahlgerät erzeugt werde. Nachdem der Wähler die Wahlkabine verlassen habe, könne das Wahlgerät z. B. den gerade erzeugten VVPAT als ungültig markieren und einen neuen drucken. Dies könne zwar mit Tests entdeckt werden. Der VVPAT solle aber gerade deswegen verwendet werden, weil den Tests des Wahlgeräts kein Vertrauen entgegengebracht werde. Werde der VVPAT um verschlüsselte Merkmale ergänzt, um das Einfügen zusätzlicher Papierquittungen oder das Ersetzen von Papierquittungen zu verhindern, dann könne er wiederum nicht mehr durch den Wähler überprüft werden. Der Wähler sei dann nicht mehr in der Lage zu entscheiden, ob der ihm präsentierte VVPAT korrekt markiert worden sei und später mitgezählt werde. Weiter sei für die Realisierung ein Drucker nötig, der nicht nur ausfallen könne, sondern während des Wahltages auch kleinere Probleme wie Papierstau, auslaufende Tinte usw. verursachen könne. Zudem sei es bei Wahlen mit vielen Stimmen möglich, dass der Wähler seine Auswahl teilweise vergesse und fälschlicherweise annehme, dass der VVPAT nicht korrekt sei. Dies erhöhe unberechtigterweise die Zweifel gegenüber dem Wahlgerät und könne zu einer überflüssigen Nachzählung führen. Schließlich sei es sehr schwierig, VVPATs so zu gestalten, dass auch behinderte Wähler mit ihnen zurecht kämen. So könnten z. B. Sehschwache wieder auf Hilfe angewiesen sein, um ihren VVPAT zu kontrollieren. Abschließend verweist das BMI auf eine kleine Studie des Massachusetts Institute of Technology, eines der renommiertesten Technologie-Forschungsinstitute der USA, die ergeben habe, dass der größte Teil der Testwähler den VVPAT ungelesen bestätige oder, wenn er ihn gelesen und als fehlerhaft empfunden habe, trotzdem bestätige (in der Annahme, dass das Papier nicht lügen könne).

Das VVPAT könne allerdings u. U. auch Vorteile haben. Bisher fehlten jedoch praktische Erfahrungen mit diesem Hilfsmittel. In den nächsten Jahren stünden mehrere Wahlen im Ausland mit VVPAT bevor, die wissenschaftlich untersucht werden sollten. Die PTB werde die weitere Entwicklung auf diesem Gebiet beobachten. Derzeit spreche nichts dafür, dass ein VVPAT die ohnehin schon hohe Sicherheit der Wahlgeräte noch erhöhen würde. Ein generelles Misstrauen der Bevölkerung in die Sicherheit der Wahlgeräte sei ebenfalls nicht ersichtlich, so dass auch dieser Aspekt nicht die Einführung des VVPAT angeraten erscheinen lasse.

4. Rechtliche Aspekte des Einspruchs

4.1 Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes

Eine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes liege nicht vor.

Das Öffentlichkeitsprinzip werde nach herrschender Auffassung aus dem Demokratieprinzip im Sinne von Artikel 20 Abs. 1 GG abgeleitet (Schreiber, Kommentar zum BWG, 7. Auflage, 2002, § 10 Rn. 1; Karpen, Elektronische Wahlen? Einige verfassungsrechtliche Fragen, 2005, S. 31). Die Öffentlichkeit der Wahl sei eine Grundvoraussetzung für eine demokratische politische Willensbildung. Die Öffentlichkeit übe gegenüber den Wahlorganen eine Kontrollfunktion aus; geheime Auszählungen oder Beratungen seien daher unzulässig. Das Öffentlichkeitsprinzip diene damit dem Schutz vor Wahlfälschungen und dem Vertrauen der Bürger in manipulationsfreie Wahlen (Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen, NVwZ 1991, S. 1175, 1179; Oberverwaltungsgericht Koblenz, NVwZ 1991, 598, 600).

Einfachrechtlich sei das Öffentlichkeitsprinzip in den §§ 10, 31 des Bundeswahlgesetzes und § 54 BWO geregelt. Gemäß § 10 BWG finde die Verhandlung, Beratung und Entscheidung der Wahlausschüsse und Wahlvorstände in öffentlicher Sitzung statt. Der gesamte Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, der zu der Feststellung des Ergebnisses für den Wahlbezirk führt, müsse im Lichte der Öffentlichkeit geschehen. § 54 BWO konkretisiere dies dahingehend, dass während der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung jedermann Zutritt zu den Wahlräumen habe, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich sei.

Allerdings sei das Öffentlichkeitsprinzip nicht grenzenlos gewährleistet. Ebenso wenig wie die in Artikel 38 Abs. 1 GG ausdrücklich geregelten Wahlrechtsgrundsätze könne es in voller Reinheit verwirklicht werden. Das Ziel der Wahl, in kurzer Zeit eine handlungsfähige Volksvertretung zu bilden, stehe mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz in Konflikt. Insofern gelte für die herkömmliche Urnen- und Briefwahl dasselbe wie für die Wahl an elektronischen Wahlgeräten. Auch dort werde das Öffentlichkeitsprinzip nicht in letzter Konsequenz verwirklicht.

4.2 Öffentlichkeit der Stimmabgabe

Der Einspruchsführer habe bemängelt, dass bei der Wahl mit Wahlgeräten die Stimmabgabe nicht öffentlich sei.

§ 31 Satz 1 BWG bestimme, dass die Wahlhandlung öffentlich sei. Die Wahlhandlung umfasse den gesamten Wahlvorgang vom Zusammentritt des Wahlvorstandes, dem Betreten des Wahllokals durch die Wähler, die Überprüfung der Wähler durch den Wahlvorstand, dem Einwurf des Stimmzettels in die Urne bis zur Erklärung des Wahlvorstehers, dass die Wahlhandlung beendet sei. Ausnahmen seien gemäß § 31 Satz 2 BWG lediglich für Personen gestattet, die die Ordnung und Ruhe stören. Gemäß § 54 BWO sei der Zutritt der Wahlräume insoweit gestattet, wie dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich sei.

Die Öffentlichkeit der Wahlhandlung diene mehreren Zwecken. Zum einen werde vertreten, dass die öffentliche Wahl ein wichtiger Integrationsfaktor sei (OVG NW, NVwZ 1991, S. 1175, 1179). Die Wahl stelle einen symbolisch-rituellen Akt dar, durch den der Bürger sich öffentlich als Souverän erfahre (Karpen, a. a. O., S. 31). Zum anderen diene die öffentliche Wahlhandlung der Kontrollierbarkeit der Wahlhandlung. Die Öffentlichkeit soll überwachen können, dass nur Wähler, die vom Wahlvorstand daraufhin kontrolliert worden seien, ob sie tatsächlich im Wählerverzeichnis eingetragen gewesen seien, einen (einzigen) Stimmzettel einwerfen. Der öffentliche Einwurf des Stimmzettels in die Wahlurne – im Gegensatz zum geheimen eigentlichen Wahlakt – diene aber auch der Kontrolle durch die Wahlvorstände, dass der Wähler tatsächlich den – und nur diesen einen – Stimmzettel einwerfe.

Unter Berücksichtigung dieser Ziele sei der Öffentlichkeitsgrundsatz bei der Wahl mit Wahlgeräten nicht verletzt.

Bei der Wahl mit Wahlgeräten erfolge das Betreten des Wahlraumes durch die Wähler und die Überprüfung der Wähler durch den Wahlvorstand in gleicher Weise wie bei der Urnenwahl. Lediglich der Einwurf der Stimme in die Wahlurne (= Drücken der Taste „Stimmabgabe“) erfolge jedenfalls bei der Wahl mit NEDAP-Wahlgeräten noch in der Wahlkabine, da die Kennzeichnung des Stimmzettels und die Stimmabgabe an einem einzigen Gerät erfolgten. Die Kontrolle, dass jeder Wähler, der seine Wahlbenachrichtigungskarte abgegeben hat, auch tatsächlich – und nur einmal – gewählt habe, kontrolliere der Wahlvorstand durch Ablesen der Bedieneinheit.

Der Integrationsfaktor der Wahl sei demnach bei der Wahl mit Wahlgeräten in gleicher Weise gegeben wie bei der Urnenwahl.

Das Ziel der Kontrollierbarkeit der Wahlteilnahme werde bei der Wahl mit elektronischen Wahlgeräten ebenfalls erreicht: dass nur berechtigten Wählern der Zugang zur Wahlkabine gewährt werde, könne die Öffentlichkeit ebenso kontrollieren wie bei der Urnenwahl.

Im Übrigen sei der Öffentlichkeitsgrundsatz auch bei der Urnenwahl und der Briefwahl nicht in voller Reinheit verwirklicht. Zum einen regelten § 31 BWG und § 54 BWO, das durch die Verwirklichung des Öffentlichkeitsgrundsatzes der ordnungsgemäße Ablauf der Wahl nicht gestört werden dürfe. Das Ziel der Wahl, in kurzer Zeit ein handlungsfähiges Parlament zu bilden, dürfe durch die Gewährung der Öffentlichkeit nicht beeinträchtigt werden. Das Bundeswahlgesetz messe damit dem Ziel, die Wahl zeitgerecht ablaufen zu lassen und das Wahlergebnis in angemessener Zeit zu ermitteln, eine größere Bedeutung bei als der minutiösen Kontrolle durch die Öffentlichkeit.

Der Öffentlichkeitsgrundsatz unterliege noch weiteren Einschränkungen: zur Wahrung des informationellen Selbstbestimmungsrechts dürften andere Wahlberechtigte oder Beobachter der Wahl Angaben zur Person anderer Wähler grundsätzlich nicht zur Kenntnis nehmen. Der Einblick in das Wählerverzeichnis zu anderen Personen sei daher nur ausnahmsweise gestattet (§ 17 BWG), und der Wahlvorstand dürfe grundsätzlich Angaben zur Person des Wählers nur so verlautbaren, dass sie von anderen im Wahlraum anwesenden Personen nicht vernommen werden können (§ 54 Abs. 4 Satz 2 BWO). Damit entfalle weitgehend die Möglichkeit einer Kontrolle der Wahlberechtigung eines Wählers durch die Öffentlichkeit. Eine hierauf gerichtete Kontrolle müsse sich auf die Überprüfung beschränken, ob der Wahlvorstand die Wahlberechtigung der Wähler überprüft.

Die Öffentlichkeit der Stimmabgabe sei z. B. auch bei der Briefwahl stark eingeschränkt. Bei dieser Form der Wahl fehle es gänzlich an dem integrierenden Faktor der Wahl, da die eigentliche Wahlhandlung in der Privatsphäre und nicht im öffentlichen Raum stattfinde. Damit entfalle bei der Briefwahl auch die Kontrollierbarkeit der Wahlhandlung durch die Öffentlichkeit. Denn die Öffentlichkeit habe naturgemäß keinen Einblick, ob z. B. bestimmte Personen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hätten oder nicht.

4.3 Öffentlichkeit der Stimmenauszählung

Hinsichtlich der Öffentlichkeit der Stimmenauszählung weist das BMI darauf hin, dass der Ausdruck des vom Wahlgerät errechneten Ergebnisses des Wahlbezirks durch den Wahlvorstand nach Abschluss der Wahlhandlung und die Übernahme des Ergebnisses in die Wahlniederschrift ohne weiteres durch die Öffentlichkeit kontrollierbar sei.

Der Wahlvorstand und jeder Wahlbeobachter könnten durch Kontrolle und Gegenüberstellung der Stimmabgabevermerke in dem Wählerverzeichnis mit den vom Gerät registrierten gültigen und ungültigen Erst- und Zweitstimmen feststellen, ob das Gerät alle Stimmabgaben erfasst und korrekt addiert habe. Denn die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis müsse identisch sein mit der jeweiligen Summe von gültigen und ungültigen Erst- bzw. Zweitstimmen. Beim Wahlgerät könne der Wähler seine Erst- und Zweitstimme nur korrekt abgeben oder bewusst die Taste ungültig drücken. Wenn er – was kaum vorkommen dürfe – sich zwar zum Wahlgerät begibt, aber dort nicht beide Stimmen gültig oder ungültig abgebe, sehe der Wahlvorstand an der Bedieneinheit, dass keine Stimme abgegeben worden sei, so dass kein Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis eingetragen werden dürfe.

Darüber hinaus werde jede Stimme einzeln im Speichermodul – mehrfach gesichert – gespeichert und könne jederzeit reproduziert werden. Im Falle eines Speicherfehlers enthalte das Speichermodul auch hierzu Informationen. Das Speichermodul enthalte, ebenso wie ein Stimmzettel, auch Informationen über Stimmenkoppelungen (Erst- und zugehörige Zweitstimme). Über die Anwendungssoftware seien alle gespeicherten Stimmen als Stimmzettel mit den entsprechenden Kreuzen ausdruckbar und von Hand nachzählbar.

Es fehle allerdings an der körperlichen Erfassbarkeit der einzelnen Stimmen, so dass es an einer für die Allgemeinheit nachvollziehbaren Summenbildung fehle.

Dies sei jedoch auch nicht erforderlich. Der Schutz vor Verfälschungen des Wahlergebnisses werde durch eine Reihe anderer Maßnahmen gewährleistet.

Zum einen werde das Wahlgerät vor seiner Zulassung durch die PTB gründlich daraufhin untersucht, ob es einwandfrei funktioniere, auch unter widrigen Umständen (kurzfristige Stromausfälle, falsche Handhabung), ob es dem Stand der Technik entspreche usw. Im Vorfeld der Wahl werde das Gerät durch die Gemeindebehörde, die das Speichermodul programmiert, einer umfassenden Prüfung unterzogen. Auch der Wahlvorstand habe beim und nach dem Aufbau des Geräts umfangreiche Funktionskontrollen durchzuführen, die öffentlich erfolgten.

Der Ausdruck des Ergebnisses des jeweiligen Wahlbezirks finde in dem Wahllokal statt. Durch die dezentrale Ergebnisgewinnung entfalle die Möglichkeit einer Manipulation an dem Speichermodul während des Transports des Wahlgeräts oder während der Auslesung in einem zentralen Wahlamt. Die dezentrale Ergebnisgewinnung gewährleiste auch, dass Manipulationen Einzelner allenfalls auf das Wahlergebnis im jeweiligen Wahlbezirk Auswirkungen haben könnten.

Durch diese umfangreichen gesetzlichen Vorkehrungen werde bei der Wahl mit Wahlgeräten eine mindestens ebensolche Zuverlässigkeit des Ergebnisses erreicht wie bei der Urnenwahl.

Bei der Prüfung einer etwaigen Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes bei der Wahl mit Wahlgeräten sei wiederum ein Vergleich mit der Verwirklichung des Öffentlichkeitsgrundsatzes bei der Urnenwahl anzustellen.

Auch bei der Urnenwahl sei der Öffentlichkeitsgrundsatz nicht in letzter Konsequenz verwirklicht. Wahlbeobachtern sei nur eine eingeschränkte Kontrolle der Wahl möglich, die sich auf das beschränke, was ein einzelner Beobachter erfassen könne, ohne den Ablauf der Auszählung zu stören. Auch für die Öffentlichkeit bei der Auszählung der Stimmen und Beratung durch die Wahlvorstände gelte, dass dieser Grundsatz mit dem Ziel, zügig ein funktionsfähiges Parlament zu bilden, in Einklang gebracht werden müsse.

Es sei auch nicht erforderlich, den Öffentlichkeitsgrundsatz bei der Auszählung der Stimmen stärker zur Geltung zu bringen. Denn dem Ziel, das Vertrauen der Bevölkerung in manipulationsfreie Wahlen zu stärken, dienten noch weitere Vorkehrungen im Bundeswahlgesetz und in der Bundeswahlordnung. Bei der Auszählung gelte durchgängig ein Mehr-Augen-Prinzip, so dass die Ergebnisse der Wahl jeweils von mehreren Mitgliedern des Wahlvorstands kontrolliert würden (§ 69 BWO). Die Stimmzettel seien für eine gewisse Zeit aufzubewahren, so dass eine Nachzählung möglich sei (§ 73 BWO). Die Auszählung der Stimmen finde, wie auch bei der Ergebnisgewinnung bei der Wahl mit Wahlgeräten, dezentral im Wahllokal statt; dadurch entfalle die Möglichkeit von Manipulationen an der Urne während des Transports. Durch die dezentrale Auszählung beschränkten sich die Auswirkungen von Manipulationen auf das Wahlergebnis im jeweiligen Wahlbezirk.

Bei der Verhinderung von Unregelmäßigkeiten bei der Wahl sei die öffentliche Kontrolle nur ein – wenn auch wichtiger – Faktor unter vielen. Keine Maßnahme könne für sich genommen Manipulationen oder unbeabsichtigte Verfälschungen des Wahlergebnisses verhindern. Sämtliche Maßnahmen gemeinsam gewährleisten jedoch einen weitestgehenden Schutz der Wahl vor Wahlfälschungen.

4.4 Vorverlagerung der Öffentlichkeit durch öffentliche Prüfung des Geräts/Veröffentlichung des Prüfergebnisses

Da der Öffentlichkeitsgrundsatz bei der Wahlhandlung und dem Wahlgeschäft nicht verletzt sei, sei eine „Vorverlagerung“ der Öffentlichkeit in der Weise, dass die Öffentlichkeit Einblick

in die Prüfergebnisse der PTB oder den Quellcode des Wahlgeräts nehmen müsse, nicht erforderlich. Aber selbst wenn man davon ausginge, dass es bei der Wahl mit Wahlgeräten ein Öffentlichkeitsdefizit gäbe, könnte dieses durch eine Veröffentlichung des Quellcodes nicht behoben werden.

Wie oben dargestellt, gelte der Grundsatz der Öffentlichkeit nicht schrankenlos. Dem demokratischen Staat des Grundgesetzes sei zwar die Öffentlichkeit wesenseigen. Die grundsätzliche Öffentlichkeit schließe jedoch notwendige Geheimhaltung nicht aus (Sachs, Kommentar zum GG, 3. Auflage, Artikel 20 Rn. 18; instruktiv Jestaedt, AöR 126 [2001], S. 205 ff.). Sie sei unter anderem dort gesetzlich beschränkt, wo es um Rechte Dritter gehe. So dürfe der Staat um der Öffentlichkeit willen weder die Individualsphäre des Einzelnen noch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verletzen. Der Vorrang des Schutzes von privaten sowie Geschäftsdaten vor dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit werde in vielen Vorschriften deutlich: so sei, wie oben dargestellt, die grundsätzliche Öffentlichkeit des gesamten Wahlgeschäfts und der Wahlvorbereitung insoweit eingeschränkt, als Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis nur bezüglich der eigenen Daten möglich sei; die Kenntnis von Daten fremder Personen sei nur ausnahmsweise zulässig (§§ 17 BWG, 56 Abs. 4 Satz 4 BWO). Die für Gerichtsverhandlungen grundsätzlich vorgeschriebene Öffentlichkeit könne zum Schutz von privaten oder Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ausgeschlossen werden (§ 172 Nr. 2 und 3 GVG, § 52 ArbGG, § 55 VwGO). Das gemäß Artikel 42 Abs. 1 Satz 1 GG grundsätzlich öffentlich tagende Plenum des Deutschen Bundestages könne mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausschließen (Satz 2). Ein solcher Ausschluss der Öffentlichkeit komme namentlich bei nach der Geheimschutzordnung geheimhaltungsbedürftigen Angelegenheiten in Betracht (Schmidt-Bleibtreu/Klein-Kretschmer, Kommentar zum GG, 10. Auflage, Artikel 42 Rn. 7). Zu den geheimhaltungsbedürftigen Angelegenheiten zählen auch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (§ 2a GeheimschutzO BT).

Die grundsätzliche Öffentlichkeit der Wahlvorbereitung und des Wahlgeschäfts könne mithin aus Gründen des Schutzes privater Daten oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen eingeschränkt werden. Ebenso wenig wie der Öffentlichkeitsgrundsatz uneingeschränkt die Einsichtnahme in private Daten anderer Personen im Wählerverzeichnis rechtfertigen könne, könne die Einsichtnahme in die Konstruktionsunterlagen und den Quellcode der Wahlgeräte der Firma NEDAP verlangt werden.

Der Schutz der Betriebsgeheimnisse der Firma NEDAP müsse dem Interesse der Öffentlichkeit an der Offenlegung dieser Geheimnisse auch insbesondere deshalb vorgehen, weil die Geheimhaltung der Betriebsgeheimnisse zusammen mit anderen Faktoren zur Sicherheit des Wahlgeräts und damit der Wahl beitrage. Die Bauartzulassung sowie die Prüfungen der Wahlgeräte vor ihrer Zulassung durch die PTB sowie die abschließende Prüfung durch die Gemeinden ersetzen insoweit zulässigerweise die Kontrolle durch die Öffentlichkeit.

5. Mandatsrelevanz

Ein Wahlfehler sei nicht festzustellen. Aber auch wenn von einem Wahlfehler ausgegangen werde, wäre dieser jedenfalls nicht mandatsrelevant. Ein Wahlfehler sei nur dann relevant, wenn nach den gegebenen Umständen des Falles eine konkrete Wahrscheinlichkeit bestehe, dass sie auf das Wahlergebnis und damit auf die Sitzverteilung von Einfluss gewesen sein könne. Ein mandatsrelevanter Wahlfehler bei der Wahl mit Wahlgeräten sei nur dann gegeben, wenn Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass eine alternativ durchgeführte Urnenwahl zu anderen Wahlergebnissen geführt hätte. Dafür hätte der Einspruchsführer keinen hinreichenden, konkreten und greifbaren Anhalt angegeben.

Dem Bundeswahlleiter seien zudem bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag keine Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Wahl mit Wahlgeräten bekannt geworden. Eine Abfrage bei den Länderinnenministerien habe hierfür ebenfalls keine Anhaltspunkte ergeben. Hinweise auf gezielte Manipulationen oder unbeabsichtigte Veränderungen an den eingesetzten Wahlgeräten lägen nicht vor. Ein entsprechender konkreter Verdacht sei bisher auch von anderer Seite nicht geäußert worden.

IV.

Die Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern ist dem Einspruchsführer bekannt gegeben worden. Er hat hierauf mit Schreiben vom 19. Juni 2006 seine bereits geltend gemachten Einwände bekräftigt und sich u. a. wie folgt geäußert:

Entgegen der Auffassung des BMI würden eine öffentliche Kontrolle des Wahlgangs und eine Überprüfung des Wahlergebnisses durch die eingesetzten Wahlcomputer wirksam verhindert. Gleichwertige Kontrollmechanismen gäbe es nicht.

Die alleinige Sicherstellung des ordentlichen Wahlablaufs durch technische Maßnahmen und die Vorverlagerung der Überprüfung dieser Maßnahmen in ein nichtöffentliches Zulassungsverfahren durch das BMI und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt sei unzulässig.

Selbst wenn die faktische Beschränkung der Kontrolle des ordentlichen Wahlablaufs auf PTB und BMI zulässig wäre, stelle sie einen ordnungsgemäßen Wahlablauf nicht sicher, weil eine systematische und fachgerechte Überprüfung der Manipulationssicherheit der eingesetzten Geräte unterbleibe.

Die Schlussfolgerungen des BMI, das die von ihm gerügten sicherheitstechnischen Mängel der Geräte sachlich im Wesentlichen bestätigt hätte, seien unzutreffend. Die eingesetzten Geräte erlaubten Manipulationen des Wahlergebnisses, die unentdeckt bleiben müssten.

Zu Einzelheiten der Stellungnahme wird auf die Akten verwiesen.

In einer weiteren Stellungnahme vom 7. Oktober 2006 hat der Einspruchsführer auf einen Pressebericht hingewiesen, demzufolge es der niederländischen Bürgerinitiative „Wij vertrouwen stemcomputers niet (Wir vertrauen elektronischen Wahlgeräten nicht)" im Oktober 2006 in den Niederlanden gelungen sei, durch Austausch der auf einem NEDAP-Wahlgerät installierten Software das Gerät so zu manipulieren, dass es ein gewünschtes Wahlergebnis geliefert habe. Bei den Geräten handelt es sich nach Darstellung des Einspruchsführers um einen Typ, der bei Wahlen in Deutschland nicht eingesetzt werde. Es komme in Deutschland auch eine andere Software zum Einsatz. Die Aussagen ließen sich aber auf die in Deutschland verwendeten Geräte übertragen. Hinsichtlich der Manipulationssicherheit zeige sich daher, dass die Geräte nicht den Anforderungen der BWahlGV genügten.

V.

Der Wahlprüfungsausschuss hat nach Prüfung der Sach- und Rechtslage beschlossen, gemäß § 6 Abs. 1a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPrüfG) von einer mündlichen Verhandlung abzusehen.

Entscheidungsgründe

Der Einspruch ist zulässig, jedoch offensichtlich unbegründet.

Ein Wahlfehler ist in dem Einsatz elektronischer Wahlgeräte bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag nicht zu erkennen.

Die Stimmabgabe mit Wahlgeräten ist nach § 35 BWG ebenso wie die Stimmabgabe mit Stimmzetteln (§ 34 BWG), die den Regelfall bildet, und die Briefwahl (§ 36 BWG) gesetzlich vorgesehen.

Soweit der Einspruchsführer die Verfassungsmäßigkeit einzelner Vorschriften bezweifelt, müssen nähere Ausführungen zu dieser Frage hier unterbleiben. Nach der ständigen Praxis des Deutschen Bundestages und des Wahlprüfungsausschusses sehen sich diese nicht berufen, die Verfassungswidrigkeit von Wahlrechtsvorschriften unter Einbeziehung des § 35 BWG oder der BWahlGV festzustellen. Diese Kontrolle ist stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten worden (so zuletzt in der laufenden 16. Wahlperiode in der Zweiten Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses vom 22. Juni 2006 – Bundestagsdrucksache 16/1800, S. 229 u. a.; vgl. auch BVerfGE 89, 291, 300). Insoweit kann eine Überprüfung durch den Ausschuss nicht erfolgen. Gleiches gilt für die vom Einspruchsführer behauptete Verfassungswidrigkeit des Artikels 41 GG.

Im Übrigen haben bei Wahleinsprüchen gegen die Wahl zum 15. Deutschen Bundestag der Wahlprüfungsausschuss und der Deutsche Bundestag hinsichtlich der grundsätzlichen Zulässigkeit des Einsatzes von Wahlgeräten festgestellt, dass keine Zweifel daran bestehen, dass der Gesetzgeber unter Wahrung der Wahlrechtsgrundsätze auch die Stimmabgabe mit Wahlgeräten vorsehen kann. Es gibt danach auch keinen Anlass, die Verfassungskonformität des § 35 BWG zu hinterfragen. Beim Einsatz von Wahlgeräten wird die Einhaltung der Wahlrechtsgrundsätze, insbesondere der Grundsätze der freien, gleichen und geheimen Wahl, durch ein vielschichtiges System von Kontroll- und Informationspflichten in gleichem Maße gewährleistet wie bei der Urnenwahl (Bundestagsdrucksache 15/1150 vom 6. Juni 2003 [Anlage 19, S. 60 und Anlage 36, S. 116]). Auch in der Kommentarliteratur wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass § 35 Abs. 2 Satz 1 BWG gewährleistet, dass die Wahlgerätewahl hinsichtlich der Wahrung des Wahlgeheimnisses und des Ausschlusses von Manipulationsmöglichkeiten die gleichen Sicherungen erfährt wie die Wahl mit Stimmzetteln (Schreiber, Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. Auflage, 2002, § 35 Rn. 4). Der Wahlprüfungsausschuss und der Deutsche Bundestag haben weiter festgestellt, dass bei der Durchführung der Stimmabgabe mit elektronischen Wahlgeräten nicht in schematischer Art und Weise darauf geachtet werden muss, dass jede typischerweise mit Stimmzetteln verbundene Besonderheit auf die Stimmabgabe mit Wahlgeräten übertragen wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Stimmabgabe mit Wahlgeräten die Stimmabgabe unter einem bestimmten Gesichtspunkt vereinfacht (Bundestagsdrucksache 15/1150, Anlage 19, S. 60).

Auch der Einwand, dass die die Wahl mit Wahlgeräten regelnden Vorschriften nicht an elektronische Geräte angepasst worden seien, trifft nicht zu. § 1 BWahlGV erwähnt ausdrücklich die Stimmabgabe mittels „rechnergesteuerter Geräte“ (vgl. Schreiber, a. a. O., § 35 Anm. 1). Zudem entsprechen die bekannt gemachten Bauartzulassungen für elektronische Geräte dem § 2 Abs. 5 BWahlGV. Für elektronische Geräte vom Typ NEDAP ist die Zulassung durch Entscheidung des BMI vom 31. Mai 1999 erfolgt.

Soweit der Einspruchsführer davon ausgeht, dass die genannten Vorschriften zwar auf elektronische Wahlgeräte anwendbar seien, aber höherrangigen Anforderungen nicht genügten, betrifft diese Rüge wiederum die Frage der Verfassungsmäßigkeit von Wahlrechtsvorschriften, auf die der Wahlprüfungsausschuss nicht näher eingehen kann.

Schließlich begegnet auch die konkrete Ausgestaltung der Wahl mit Wahlgeräten keinen Bedenken.

So entsprechen die bei der Bundestagswahl 2005 eingesetzten Wahlgeräte der Firma NEDAP den gesetzlichen Vorgaben. § 35 BWG regelt i. V. m. der BWahlGV, die das Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie auf der Grundlage von § 35 Abs. 3 BWG erlassen hat (VO vom 3. September 1975, BGBl. I S. 2459 mit späteren Änderungen, vgl. dazu Schreiber, a. a. O., S. 824), die Voraussetzungen und das Verfahren der Stimmabgabe mit Wahlgeräten. Somit können anstelle von

Stimmzetteln und Urnen bei einer Wahl auch mechanisch oder elektrisch betriebene einschließlich rechnergesteuerter Geräte eingesetzt werden (§ 1 BWahlGV).

Das in § 35 BWG vorgeschriebene Verfahren und die Zuständigkeiten beim Einsatz von Wahlgeräten der Firma NEDAP sind bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag eingehalten worden. Die gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 BWG erforderliche Bauartzulassung wurde erteilt und im Bundesanzeiger bekannt gegeben. Die Verwendungsgenehmigung gemäß Absatz 2 Satz 4 und 5 liegt ebenfalls vor.

Anlage 1 der BWahlGV (Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten, BGBl. I 1999, S. 749, 753) setzt für die Bauartzulassung voraus, dass die Geräte den dort gestellten Anforderungen insbesondere an die Identifizierbarkeit, den technischen Aufbau und die Funktionsweise genügen, was durch Inspektionen der technischen Unterlagen, Sichtprüfungen am Gerät sowie unterschiedliche Funktionstests nachgewiesen wird. Diesen Anforderungen ist ausweislich der überzeugenden Stellungnahme des BMI und der PTB voll entsprochen worden.

Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes

Ein Verstoß gegen das Öffentlichkeitsprinzip kann in dem Einsatz der Wahlgeräte nicht gesehen werden.

Einfachrechtlich ist das Öffentlichkeitsprinzip in den §§ 10, 31 BWG und in § 54 BWO verankert. Es ist nicht zu erkennen, dass bei der Bundestagswahl 2005 beim Einsatz von NEDAP-Wahlgeräten gegen die genannten Vorschriften verstoßen worden ist. Gemäß § 10 BWG verhandeln, beraten und entscheiden die Wahlausschüsse und Wahlvorstände in öffentlicher Sitzung. § 31 Satz 1 BWG bestimmt: „Die Wahlhandlung ist öffentlich". § 54 BWO konkretisiert dies dahingehend, dass während der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung jedermann Zutritt zu den Wahlräumen hat, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

§ 5 BWahlGV verweist auf die Anwendbarkeit der BWO. Somit gilt auch bei der Wahl mit Wahlgeräten, dass die Verhandlungen, Beratungen, Abstimmungen und Entscheidungen der Wahlausschüsse und -vorstände für Jedermann zugänglich sind. Damit findet der gesamte Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, der zu der Feststellung des Ergebnisses für den Wahlbezirk führt, im Lichte der Öffentlichkeit statt. Auch der öffentliche Zugang zum Wahlraum ist bei der Wahl mit Wahlgeräten gewährleistet. Schließlich finden, unter Beachtung des Grundsatzes der Geheimheit der Wahl, auch die Wahlhandlung (§ 54 BWO) sowie die Stimmauszählung (§ 67 ff. BWO) beim Einsatz von Wahlgeräten öffentlich statt. Es existiert daher keine rechtliche Beschränkung der Öffentlichkeit bei der Wahl mit Wahlgeräten.

Soweit der Einspruchsführer ein über die Erfordernisse der genannten Normen hinausgehendes Öffentlichkeitsprinzip behauptet, ist dies nicht zu erkennen. Insbesondere ist nicht zu sehen, aus welchen Bestimmungen sich dieses ergeben soll und welchen Inhalt es haben soll. Darüber hinaus wird auch nicht klar, inwieweit Vorschriften über das Öffentlichkeitsprinzip bei der Wahl mit Wahlgeräten verletzt worden sein sollen. Nach Auffassung des Wahlprüfungsausschusses ist die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen unter Einschluss des Öffentlichkeitsgrundsatzes beim Einsatz von Wahlgeräten beachtet worden. Soweit das Öffentlichkeitsprinzip, wie vom BMI dargestellt, ebenso wenig wie die in Artikel 38 Abs. 1 GG ausdrücklich geregelten Wahlrechtsgrundsätze in voller Reinheit verwirklicht werden könne, gilt dies für die herkömmliche Urnenwahl und die Wahlgerätewahl in gleichem Maße. Zum Öffentlichkeitsgrundsatz gehört jedenfalls nicht, dass jede einzelne Handlung der Einzelkontrolle unterliegt, da sonst bei der herkömmlichen Wahl per Stimmzettel der misstrauische Bürger vor jedem Einwurf eines Wahlzettels bezweifeln könnte, dass sich in der Urne nicht schon manipulierte Wahlzettel befinden.

Auch bei der Briefwahl ist die Öffentlichkeit der Stimmabgabe, wie vom BMI zutreffend dargestellt, stark eingeschränkt. Da die Wahlhandlung in der Privatsphäre und nicht im öffentlichen Raum stattfindet, fehlt es bei dieser Wahlart an dem integrierenden Faktor der Wahl. Auch die Kontrollierbarkeit der Wahlhandlung durch die Öffentlichkeit entfällt, da die Öffentlichkeit keinen Einblick hat, ob z. B. bestimmte Personen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben oder nicht.

Bei den NEDAP-Wahlgeräten erfolgt der Wahlablauf grundsätzlich in gleicher Weise wie bei der Urnenwahl. Der Wähler betritt den Wahlraum und wird durch den Wahlvorstand überprüft, so dass nur berechtigte Wähler den Zugang zur Wahlkabine erhalten. Lediglich der Einwurf der Stimme in die Wahlurne geschieht durch Drücken der Taste „Stimmabgabe“. Da die Kennzeichnung des Stimmzettels und die Stimmabgabe an einem einzigen Gerät vorgenommen werden, findet der Akt der Stimmabgabe an diesem Gerät in der Wahlkabine statt. Für den Wahlvorstand und die Öffentlichkeit ist dieser Akt dennoch transparent, da nur der Wähler, der seine Wahlbenachrichtigungskarte abgegeben hat, an dem Wahlgerät wählen darf. Durch die Technik ist sichergestellt, dass z. B. eine „doppelte Stimmabgabe“ nicht möglich ist.

In der Rechtswirklichkeit steht die konkrete Wahlhandlung der Stimmabgabe beim Einsatz von Wahlgeräten somit im Spannungsfeld des Prinzips der geheimen Wahl und des Öffentlichkeitsgrundsatzes. Vor diesem Hintergrund ist es hinnehmbar, dass beim Einsatz rechnergesteuerter Wahlgeräte nicht jeder Teilakt des Stimmenregistrierungsverfahrens für Jedermann transparent ist. Es gehört zu den Besonderheiten der fortschreitenden Technisierung, dass von der Funktionsfähigkeit der eingesetzten Systeme ausgegangen wird, wenn sie vor ihrem Einsatz in einem speziellen Verfahren geprüft worden ist. Dies gilt umso mehr, als in allen anderen Verfahrensschritten die erforderliche Kontrolle stattfindet und dadurch die erlangten Ergebnisse auf ihre Plausibilität überprüft werden können.

Es kann also nur darauf ankommen, dass die Öffentlichkeit die grundsätzliche Möglichkeit hat, sich von der Funktionsfähigkeit des Wahlverfahrens zu überzeugen. Dem trägt das Wählen mit Wahlgeräten Rechnung, da der Wähler sich in einem amtlichen Verfahren befindet. So wird er in einem öffentlichen Wahllokal vom bestellten Wahlvorstand über seinen amtlich ausgestellten Wahlschein persönlich identifiziert, das Abgeben seiner Stimme wird am Wahlcomputer individuell registriert – und kann von ihm korrigiert werden – und das Wahlergebnis wird unter Berücksichtigung seiner Wahlentscheidung veröffentlicht. Bei Zweifeln an der Richtigkeit des Verfahrens kann er die Wahl anfechten. Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen kann eine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes bei der Wahl mit Wahlgeräten nicht festgestellt werden.

Dies gilt umso mehr, als vorliegend im Wahlablauf die Beachtung der insoweit spezielleren Vorschriften des § 35 BWG i. V. m. der BWahlGV festzustellen ist. Soweit ein Vergleich mit den Vorschriften über die herkömmliche Urnenwahl ergibt, dass typischerweise mit Stimmzetteln verbundene Besonderheiten nicht deckungsgleich auf die Stimmabgabe mit Wahlgeräten übertragen worden sind, ist darauf hinzuweisen, dass dies auch nicht gefordert wird (Bundestagsdrucksache 15/1150, Anlage 19, S. 60).

Zudem ist weder festgestellt noch von dem Einspruchsführer vorgetragen worden, dass ein amtliches Organ durch Missachtung der Vorgaben des § 31 BWG oder des § 54 BWO einen Wahlfehler begangen hätte. Vielmehr ergibt sich aus dem Fehlen eines solchen Vorbringens, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Beachtung des Öffentlichkeitsgrundsatzes durch den betreffenden Wahlvorstand sichergestellt war.

Die Öffentlichkeit kann auch den Ausdruck des vom Wahlgerät errechneten Ergebnisses des Wahlbezirks nach Beendigung der Wahlhandlung sowie die Übernahme des Ergebnisses in

die Wahlniederschrift und damit die Auszählung insgesamt kontrollieren. Durch den von § 14 BWahlGV vorgeschriebenen Abgleich der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis mit den vom Gerät registrierten gültigen und ungültigen Erst- und Zweitstimmen kann auch kontrolliert werden, ob das Wahlgerät alle Stimmabgaben erfasst und korrekt addiert hat. Zudem können alle gespeicherten Stimmen als Stimmzettel mit den entsprechenden Kreuzen ausgedruckt und von Hand nachgezählt werden. Das in § 14 BWahlGV geregelte Verfahren der Stimmenauszählung ist somit nicht zu beanstanden. Soweit der Einspruchsführer darüber hinaus bei der Stimmenauszählung durch Wahlgeräte einen Verstoß gegen das Öffentlichkeitsprinzip sieht, verkennt er, dass der Wahlprüfungsausschuss nur einen eventuellen Verstoß gegen diese Spezialnorm feststellen könnte. Die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift ist, wie erwähnt, dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten.

Die vom Einspruchsführer aufgezählten bloßen Möglichkeiten, dass bei der Wahl mit Wahlgeräten Manipulationen vorgenommen werden können, stehen den tatsächlich feststellbaren Nachteilen der Urnenwahl gegenüber. So sind die bei der herkömmlichen Wahl festzustellenden Fehler eines (unbeabsichtigten) Falsch-Wählens bei der Stimmabgabe oder eines Falsch-Zählens bei der Stimmauswertung apparativ nahezu vollständig ausgeschlossen (vgl. dazu Schreiber, a. a. O., § 35 Rn. 2).

Schließlich ist auch in dem Verfahren der Bauartzulassung gemäß den §§ 1 bis 3 BWahlGV durch das BMI und die PTB kein Wahlfehler zu erkennen. Die PTB führt eine „gründliche Inspektion des Quellcodes“ des in den Wahlgeräten verwendeten Softwareprogramms durch, das durch standardmäßige Sicherheitsmaßnahmen vor dem Eindringen unbefugter Dritter geschützt ist. Ein vom Einspruchsführer behaupteter Anspruch auf Einblick in diesen Quellcode besteht nicht. Auch der Grundsatz der Öffentlichkeit kann nicht dazu führen, unbegrenzt in andere Rechte wie z. B. den Schutz von privaten Daten oder von Betriebsgeheimnissen einzugreifen.

Der Schutz der Betriebsgeheimnisse der Firma NEDAP überwiegt das Interesse der Öffentlichkeit an der Offenlegung dieser Geheimnisse, zu denen auch der Quellcode gehört. Insoweit kann die vom Einspruchsführer angebotene Selbstverpflichtung, mit der er die Nichtweitergabe aller von der Firma NEDAP übermittelten Daten zusichert, nicht zu einer abweichenden Beurteilung führen. Die den Einspruchsführer bei Verstoß gegen die Erklärung erwartenden rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen stehen in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der durch die Kenntniserlangung dieser Informationen durch Unbefugte entsteht. Insbesondere trägt auch diese Geheimhaltung der Betriebsgeheimnisse der Firma NEDAP zur Sicherheit des Wahlgeräts und damit der Wahl bei. Die Bauartzulassung sowie die Prüfungen der Wahlgeräte vor ihrer Zulassung durch die PTB sowie die abschließende Prüfung durch die Gemeinden ersetzen somit in zulässiger Weise die Kontrolle durch die Öffentlichkeit.

Mängel der Hardware und Software der Wahlgeräte

Nach überzeugender Darstellung des BMI entspricht die Geräteprüfung den Bestimmungen der BWahlGV, der Anlage 1 zu § 2 BWahlGV und den Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten (BGBl. I 1999, S. 749, 753). So entsprechen die Geräte in ihrer Konstruktion dem Stand der Technik, was durch Inspektionen der technischen Unterlagen, Sichtprüfungen am Gerät sowie unterschiedliche Funktionstests nachgewiesen wird.

Auch der im Juli 2006 veröffentlichte Zweite Bericht der irischen CEV bestätigt, dass die betreffenden Wahlgeräte, also die Hardware, von „guter Qualität“ und „zuverlässig“ seien. Die Software sei von angemessener Qualität. Der Einsatz der NEDAP-Geräte könne somit „vertrauensvoll empfohlen werden“. Insgesamt gebe es nur „geringfügigen“ (im engl. Original:

minor) Änderungsbedarf. Die an der in Irland benötigten Spezialsoftware geäußerte Kritik ist für Wahlen nach deutschem Wahlrecht nicht einschlägig (vgl. zur Kritik Sietmann, E-Voting: Ja, aber …“, in: c't 2006, S. 54), da in Irland die Speichermodule mehrerer Wahlgeräte an einer zentralen Stelle zusammengeführt und (in einer Datenbank auf einem PC) gemischt werden müssen, bevor die Wahlauswertung stattfinden darf. Das Ergebnis wird dort also, anders als in Deutschland, mit Hilfe eines PCs und darauf befindlicher spezieller Software gewonnen. Vor diesem Hintergrund ist auch das Ergebnis der CEV zu sehen, die den Einsatz nur dieser (in Irland erforderlichen) Software nicht empfehlen kann. Im Vergleich mit der herkömmlichen Stimmabgabe kommt die Kommission weiter zu dem Ergebnis, dass dieses Verfahren in den Bereichen Geheimhaltung und Genauigkeit der Wahl mit Wahlgeräten, wenn auch teilweise nur unbedeutend, überlegen sei, das elektronische Verfahren aber das Potenzial für größere Genauigkeit innehabe.

Das BMI hat überzeugend dargestellt, dass das im irischen Wahlsystem geforderte Mischen der Inhalte mehrerer Wahlurnen vor der Auszählung nicht mit dem deutschen Wahlsystem vergleichbar ist. Die in Irland für die Umrechnung der Stimmen in Sitze verwendete spezielle Software findet daher in Deutschland keine Verwendung, so dass die genannten Probleme hier auch nicht auftreten können. In Deutschland stellt der Wahlvorstand mit Hilfe des Wahlgeräts am Ende des Wahltages das Wahlergebnis des Wahlbezirkes fest. Das in den Wahlämtern zum Addieren verwendete Verfahren und demzufolge auch die dafür verwendeten PCs und ihre spezielle Software sind somit, anders als in Irland, für die Gewinnung des amtlichen Endergebnisses nicht relevant. Da bei der ebenfalls möglichen Addition der Ergebnisse mittels Taschenrechner an diese ebenfalls keine besonderen Anforderungen gestellt werden, unterliegen auch die verwendeten PCs und die Software keiner Bauartprüfung.

Die NEDAP-Wahlgeräte arbeiten zudem im Offline-Betrieb und sind somit von externen Beeinflussungen während der Wahl weitgehend geschützt. Die (Stimm-)Daten werden auf einem speziellen Datenträger (Stimmenmodul) gespeichert und auf einem anderen Gerät ausgezählt. Es handelt sich also um ein weitgehend Hardware-gestütztes System, so dass die Bauartzulassung als geeignetes Kontrollmoment erscheint.

Soweit der Einspruchsführer rügt, dass die Zulassungsprüfung der PTB auf apparattechnische Kriterien beschränkt sei, ist diese Annahme durch die Ausführungen des BMI widerlegt. Die Baumusterprüfung erfolgt danach durch eine Arbeitsgruppe der PTB, die in der Prüfung von Wahlgeräten erfahren und als Softwareprüfstelle akkreditiert ist. Die von der PTB durchgeführte Softwareprüfung nimmt 90 Prozent des zeitlichen Aufwands der Baumusterprüfung in Anspruch. Das BMI hat konkret mitgeteilt, dass neben einer gründlichen Inspektion des Quellcodes „dynamische Funktionstests des Softwareprogramms“ stattfinden. Auch der aktuelle Bericht der irischen CEV empfiehlt den Einsatz der Software (von der in Deutschland nicht eingesetzten irischen Spezial-Software abgesehen) wegen ihrer Zuverlässigkeit. Die Annahme des Einspruchsführers, dass die Software nicht ausreichend überprüft werde, ist damit widerlegt.

Zudem wird die Software der Geräte vor der Verwendung zweimal kontrolliert und die festgestellte Identifikation wird mittels eines Aufklebers auf dem Gerät versichert. Anschließend werden die amtlich gesiegelten Geräte sicher aufbewahrt und vor der Verwendung am Wahltag erneut überprüft. Bei all diesen Schritten werden Ausdrucke angefertigt, die für nachträgliche Überprüfungen zur Verfügung stehen. Schließlich ist die Softwareidentifikation auch in der Bedienungsanleitung der Wahlgeräte vorgeschrieben, die als Bestandteil der Bauart ebenfalls durch die PTB geprüft worden ist und eine verbindliche Vorschrift für die Handhabung der Wahlgeräte darstellt.

Manipulationsgefahren

Das BMI hat festgestellt, dass Manipulationen zwar theoretisch möglich, in der Praxis aber kaum vorstellbar sind. Solange sie sich allein auf die Eproms beschränken, wäre eine gezielte Beeinflussung des Wahlaktes nicht möglich, da bis einige Wochen vor der Wahl aufgrund der sich von Wahl zu Wahl ändernden Tastenbelegung nicht bekannt ist, welcher Kandidat mit welcher Taste gewählt wird. In diesem Fall ist also nur eine Sabotage des Wahlaktes möglich, nicht dagegen eine gezielte Manipulation zugunsten eines bestimmten Kandidaten. Eine Manipulation der Software setzt voraus, dass der Täter auf den Quellcode des Softwareprogramms oder auf die gefüllten Speichermodule Zugriff hätte. Da der Quellcode ebenso wie Speichermodule nach ihrer Komplettierung und Versiegelung gesichert aufbewahrt werden, ist die Manipulation in dem gleichen Maße möglich oder unmöglich wie bei den von der Gemeindebehörde aufbewahrten Stimmzetteln bei der Urnenwahl. Jedenfalls aber würde ein unbefugter Zugriff aufgrund der erbrochenen Siegel und der nach der Inbetriebnahme des Gerätes erscheinenden Fehlermeldung nicht unbemerkt bleiben. In diesem Falle würde das betreffende Gerät nicht eingesetzt. Theoretisch sind zwar auch Manipulationen möglich, die direkt beim Hersteller vorgenommen werden. Neben den vertraglichen Vereinbarungen und der entsprechenden schriftlichen Versicherung der Firma NEDAP bietet aber auch das eingeführte Audit eine hohe Gewähr für einen Schutz vor internen Eingriffen.

Es ist aber nicht festzustellen und wurde vom Einspruchsführer auch nicht vorgetragen, dass bei der Bundestagswahl 2005 entgegen § 7 BWahlGV ein Wahlgerät eingesetzt worden ist, dessen Funktionstüchtigkeit nicht festgestellt worden war.

Dem Bundeswahlleiter sind bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag keine Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Wahl mit Wahlgeräten bekannt geworden. Eine Abfrage bei den Länderinnenministerien hat nach Auskunft des BMI vom 3. Mai 2006 hierfür ebenfalls keine Anhaltspunkte ergeben. Hinweise auf gezielte Manipulationen oder unbeabsichtigte Veränderungen an den eingesetzten Wahlgeräten liegen nicht vor. Ein entsprechender konkreter Verdacht wurde bisher auch von anderer Seite nicht geäußert.

Auch der Einspruchsführer führt keine konkreten Anhaltspunkte dafür an, dass in bestimmten Wahlräumen aufgrund des Einsatzes von Wahlgeräten andere Wahlergebnisse erzielt wurden als dies bei einer Urnenwahl der Fall gewesen wäre. Er hält eine nicht korrekte Arbeitsweise oder Manipulationen der Geräte oder der Software lediglich theoretisch für möglich. Die generelle Befürchtung, es könne an den Geräten zu Manipulationen kommen, genügt aber nicht für die Feststellung eines Wahlfehlers. Manipulationen sind, wie auch bei der herkömmlichen Stimmabgabe per Wahlzettel, zwar auch hier nicht auszuschließen. Der Einspruchsführer hat aber über die von ihm mitgeteilten theoretisch-mathematischen Erwägungen hinaus keine überprüfbaren Tatsachen angegeben, die für eine Manipulation sprechen würden.

Somit ist festzustellen, dass zwar keine der angesprochenen Sicherungen für sich genommen Manipulationen oder Verfälschungen des Wahlergebnisses verhindern kann. Sämtliche Maßnahmen gemeinsam gewährleisten jedoch einen so weit gehenden Schutz der Wahl vor Wahlfälschungen, dass von einer insgesamt sehr hohen Manipulationssicherheit beim Einsatz von Wahlgeräten auszugehen ist.

Dem Einspruchsführer ist zuzustimmen, dass die Speicherung der Stimmen im Speichermodul insoweit unverschlüsselt geschieht, als ein kryptografischer Algorithmus nicht angewendet wird. Jedoch sind zur Änderung der abgelegten Stimmen der Zugriff auf das (geschützt bei den Gemeindebehörden aufbewahrte) Speichermodul und ein passendes Programmiergerät erforderlich sowie die Information, wie die Stimmen im Speichermodul

abgelegt werden müssen, damit das Wahlgerät sie beim Zählen berücksichtigt. Da die Stimmen zudem mit einigen Sicherungsmaßnahmen abgelegt werden, erscheint bei Verletzung einer dieser Maßnahmen eine Fehlermeldung und die Stimme wird nicht gezählt. Um einen Zugriff auf die Speichermodule zu verhindern, werden diese während der Wahl beaufsichtigt und nach der Wahl genauso sicher aufbewahrt wie ausgefüllte Stimmzettel. Ein Wahlfehler liegt somit nicht vor.

Auch soweit holländischen Hackern im Oktober 2006 der Manipulationsversuch an einem in den Niederlanden eingesetzten Typ der NEDAP-Wahlgeräte gelungen sein soll (vgl. die Pressemitteilung der PTB vom 9. Oktober 2006), ist darauf hinzuweisen, dass dies nicht unter den Bedingungen einer Bundestagswahl stattgefunden hat. Für die hier vorzunehmende Wahlprüfung ist die Manipulation zudem schon deshalb unerheblich, weil sie im Oktober 2006 stattgefunden haben soll und daher keinen Einfluss auf die Bundestagswahl 2005 gehabt haben kann. Der Einspruchsführer behauptet auch nicht, dass es bei der Bundestagswahl 2005 zu einer Manipulation des Softwareprogramms der eingesetzten NEDAP-Geräte gekommen ist.

Ohnehin geht der Deutsche Bundestag davon aus, dass BMI und PTB entsprechend den Vorgaben der BWahlGV die weitere Entwicklung im Bereich des möglichen Einsatzes von Wahlgeräten beobachten, um ggf. erkennbar werdenden Risiken für eine ordnungsgemäße Wahl in geeigneter Weise begegnen zu können.

Fehlende Kontrollmöglichkeiten/VVPAT

Entgegen der Auffassung des Einspruchsführers ist auch in dem Fehlen eines Stimmabgabeprotokolls in Papierform (VVPAT) kein Wahlfehler zu erkennen.

Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 BWahlGV kann die Bauartzulassung erteilt werden, „wenn das Wahlgerät nach einer (…) Prüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt den Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten nach Anlage 1 entspricht“. Die Zählung der Stimmen ist in § 14 der BWahlGV geregelt. Es ist festzustellen, dass ein Papierprotokoll gesetzlich nicht vorgesehen ist und damit keine Voraussetzung für die Bauartzulassung darstellt.

Die Auszählung geschieht beim Einsatz von Wahlgeräten vielmehr in der Weise, dass „der Schriftführer die an dem verwendeten Wahlgerät angezeigten oder ausgedruckten Zahlen der Reihenfolge nach in die Zählkontrollvermerke der Wahlniederschrift (einträgt), soweit nicht ein Ausdruck selbst als Zählkontrollvermerk zu verwenden ist“. Anschließend stellt „der Wahlvorsteher (…) durch lautes Ablesen der einzelnen Anzeigen“ die Zahl der an den Wahlgeräten abgegebenen Stimmen fest. Bei der Feststellung werden die insgesamt abgegebenen Erst- bzw. Zweitstimmen, die für jeden Bewerber bzw. für jede Landesliste abgegebenen Erst- und Zweitstimmen und die abgegebenen ungültigen Erst- und Zweitstimmen gesondert festgestellt.

Zudem hat die Verwendung von VVPATs nach überzeugender Darstellung des BMI Vor- und Nachteile und ist in der Fachwelt keineswegs, wie der Einspruchsführer behauptet, unumstritten. Insbesondere ist durch die Verwendung eines VVPAT keine unabhängige Verifikation möglich, da ein VVPAT, wie jedes andere Papierprodukt auch, manipuliert werden kann. Er kann auch mangelndes Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Wahlgeräts nicht ersetzen, da er vom Wahlgerät selbst erzeugt wird. Daneben kann der erforderliche Drucker zusätzliche technische Probleme bereiten. Sofern eine Manipulation der Software stattfinden soll, ist davon auszugehen, dass der potenzielle Täter auch die Prüfausdrucke manipuliert, um die Manipulation nicht sofort offenkundig werden zu lassen. Es muss also davon ausgegangen werden, dass gegen jede zusätzliche Sicherung ein neues Mittel gefunden wird, diese Sicherung zu überwinden. Da aber das Manipulieren elektronischer Daten spezielle

Kenntnisse erfordert, ist der Papierausdruck grundsätzlich unzuverlässiger als die elektronischen Daten. Der Papierausdruck (VVPAT) bietet somit keine Garantie für eine zuvor ordnungsgemäß erfolgte Stimmabgabe.

Schließlich ist die Kontrolle der abgegebenen Stimmen nach Auskunft des BMI jederzeit und beliebig oft möglich, indem die Speichermodule nach Ablauf des Wahltages erneut in ein Wahlgerät eingesteckt werden. Außerdem können die Speichermodule im Rahmen einer Wahlprüfung ausgelesen werden. Dabei kann festgestellt werden, ob Stimmen Defekte aufweisen. Schließlich können alle gespeicherten Stimmen als Stimmzettel mit den entsprechenden Kreuzen ausgedruckt und von Hand nachgezählt werden.

Vor diesem Hintergrund erscheint es hinnehmbar, dass der Vorgang der Abgabe und Zählung der Stimmen aufgrund des Einsatzes der Elektronik nicht für jeden Bürger vollständig nachvollziehbar sein mag. Es ist ausreichend, dass das Wahlverfahren insgesamt für den Wähler verständlich ist. Dies ist durch das normierte Verfahren der Wahl mit Wahlgeräten der Fall.

Den bloßen Möglichkeiten, dass bei der Wahl mit Wahlgeräten Manipulationen vorgenommen werden können, steht der tatsächlich feststellbare Nachteil der Urnenwahl gegenüber. So sind die bei der herkömmlichen Wahl festzustellenden Fehler eines (unbeabsichtigten) Falsch-Wählens bei der Stimmabgabe oder eines Falsch-Zählens bei der Stimmauswertung apparativ nahezu vollständig ausgeschlossen (vgl. dazu Schreiber, a. a. O., § 35 Rn. 2).

Da die Stimmauszählung also den Vorgaben des § 35 BWG und der §§ 2 und 14 BWahlGV entspricht und ein Papierprotokoll nicht vorgeschrieben ist, stellt das Fehlen eines VVPAT bei der Bundestagswahl 2005 keinen Wahlfehler dar.

Organisatorische Mängel

Soweit der Einspruchsführer rügt, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nicht in den Prüfprozess einbezogen wird, ist festzustellen, dass dies nicht der Rechtslage gemäß § 2 Abs. 2 BWahlGV entspricht. Danach ist, wie vor dem Einsatz der Wahlgeräte bei der Bundestagswahl 2005 geschehen, die PTB für diese Prüfung zuständig.

Zur Manipulierbarkeit stellen die vom Einspruchsführer selbst angeführten Fachleute fest, dass eine Manipulation der Geräte „theoretisch" sei. Ein dazu erforderlicher Austausch der Software während der Wahl erscheint, auch wenn er „innerhalb von zwei Minuten" vorzunehmen sein sollte, extrem unwahrscheinlich, da der Wahlvorstand sich in geringer Entfernung zu den Wahlgeräten befindet und das Gerät in einem öffentlich zugänglichen und von Wählerinnen und Wählern besuchten Raum steht. Zudem befindet sich die Software, wie der Einspruchsführer selbst mitteilt, hinter einer durch Schrauben gesicherten und mit zwei Siegeln versehenen Abdeckung. Manipulationen, so sie denn theoretisch vorkommen können, würde der Wahlvorstand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bemerken. Es ist also davon auszugehen, dass niemand mit einem Schraubendreher zwei Minuten an der Rückseite eines Wahlgerätes unbemerkt manipulieren könnte. Die Tatsache, dass die Siegel „unbemerkt entfernt" werden könnten, dürfte auf Siegel grundsätzlich zutreffen. Entscheidend ist hier, dass schon das Erbrechen und gerade das Entfernen des Siegels bei der nach § 7 BWahlGV vorgeschriebenen Kontrolle auffallen würden. Dass die Siegel, um die Manipulation nicht offenbar werden zu lassen, von den Tätern anschließend durch neue Siegel ersetzt werden würden, ist wiederum praktisch kaum vorstellbar. Dass es tatsächlich zu einer solchen Manipulation oder auch nur zum Versuch einer Manipulation gekommen ist, behauptet auch der Einspruchsführer nicht.

Gleiches gilt für den Vortrag des Einspruchsführers bezüglich der Manipulationsmöglichkeiten am Stimmenspeicher oder am Auswertecomputer. Auch hier behauptet der Einspruchsführer nicht, dass eine Manipulation stattgefunden hätte.

Soweit der Einspruchsführer eine Verlagerung staatlicher Aufgaben auf Private sieht, stellt diese, die Richtigkeit des Vortrages unterstellt, keinen Wahlfehler dar. Insbesondere zwingt die Tatsache, dass es sich bei der Wahlvorbereitung und -durchführung um eine öffentliche Aufgabe handelt, nicht zu dem Schluss, dass alle notwendigen Handlungen nur von Amtspersonen durchgeführt werden dürfen. Vorliegend ist die erforderliche Kontrolle durch die staatliche Hand sichergestellt. So wird eine von amtlicher Seite zu erteilende Baugleichheitserklärung gesetzlich nicht gefordert. § 2 BWahlGV sieht vor, dass der Inhaber der Bauartzulassung die Baugleichheit für jedes einzelne Wahlgerät erklärt. Auch kann die Wartung der Wahlgeräte, wie in § 7 BWahlGV vorgesehen, durch den Hersteller durchgeführt werden. Die vom Hersteller erstellte Bedienungsanleitung enthält nach Ziffer 4 Nr. 7 der Richtlinien für die Bauart von Wahlgeräten Hinweise zur Wartung und Instandhaltung, die von den amtlichen Stellen zu beachten sind.

Des Weiteren stellt auch die Nichtherausgabe der Prüfunterlagen der PTB an den Einspruchsführer keinen Wahlfehler dar.

Soweit der Einspruchsführer einen entsprechenden Antrag an den Deutschen Bundestag richtet, wird hier kein Anlass gesehen, entsprechende Unterlagen anzufordern, da nach Auffassung des Wahlprüfungsausschusses die für dieses Verfahren erforderliche Sachaufklärung durch den Bericht des BMI erfolgt ist. Zu weiteren Schritten bestand kein Anlass. Die weitergehende Frage, ob der Ermittlungsführer gegebenenfalls einen unmittelbaren Informationsanspruch gegenüber der PTB besitzt, ist hier nicht zu entscheiden.

Mandatsrelevanz

Da somit unter keinem Gesichtspunkt ein Wahlfehler feststellbar ist, bedarf es auch keines Eingehens auf eine etwaige Auswirkung auf das Stimmenergebnis und damit die Verteilung der Sitze im Deutschen Bundestag.

Resolución del Tribunal Constitucional Federal de 24 de noviembre de 1981 BVerfGE 59, 119

Briefwahl

Voto por correo

Beschluss vom 24. November 1981 2 BvC 1/81 BVerfGE 59, 119

LEITSÄTZE:

Zur Verfassungsmäßigkeit der Briefwahl

Sobre la constitucionalidad del voto por correo

Beschluss des Zweiten Senats vom 24. November 1981 – 2 BvC 1/81 –

in dem Verfahren über die Beschwerde

1. des Herrn F…

2. des Herrn G…

gegen

den Beschluß des Deutschen Bundestages vom 7. Mai 1981 (BTDrucks. 9/316) wegen Einspruchs gegen die Gültigkeit der Wahl zum 9. Deutschen Bundestag vom 5. Oktober 1980.

Entscheidungsformel:

Die Wahlprüfungsbeschwerde wird verworfen.

Der Bundestag hat durch Erlaß des § 6 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes vom 7. Mai 1956 (BGBl. I S. 383) nicht gegen die Artikel 3, 21 und 38 des Grundgesetzes verstoßen.

Gründe:

I.

1. Die Beschwerdeführer haben gemäß § 2 Wahlprüfungsgesetz vom 12. März 1951 (BGBl. I S. 166, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 1975, BGBl. I S. 1593 – WahlprüfG) die Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980 angefochten und ihren Einspruch im wesentlichen wie folgt begründet:

In Mayen hätten 2345 Bürger (16,24 %) durch Briefwahl gewählt, von denen etwa ein Drittel sich die Briefwahlunterlagen von einigen wenigen Vertretern einer Partei ins Haus habe bringen lassen. Einer Aufstellung des Kreiswahlleiters zufolge befänden sich unter den 15 Personen, denen jeweils mehr als 10 Briefwahlunterlagen ausgehändigt worden seien, einzelne, die 155, 144, 121, 101, 72 und 63 Unterlagen in Empfang genommen hätten. Manipulationen seien nicht auszuschließen. Diese könnten von Einfluß auf die Sitzverteilung im Bundestag gewesen sein.

2. Die Stadtverwaltung Mayen hat zum Einspruch der Beschwerdeführer wie folgt Stellung genommen:

Sie habe in jedem Einzelfall, in dem Briefwahlunterlagen nicht vom Wähler selbst beantragt oder abgeholt worden seien, schriftliche Vollmachten verlangt. Diese seien auch in jedem Einzelfall von den „Helfern“ vorgelegt worden.

In einem Fernschreiben vom 26. September 1980 habe der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz den Kreiswahlleitern zur Briefwahlwerbung mitgeteilt: „Ich halte es ... für vertretbar und unter Umständen sogar für geboten, daß in den geschilderten Fällen, d. h. wenn immer ein Wahlhelfer eine Vielzahl von Vollmachten vorlegt, die auf systematische Besuche ganzer Straßenzüge schließen lassen, die Briefwahlunterlagen entgegen der erteilten Vollmacht direkt an den Wahlberechtigten in der sonst üblichen Weise zugestellt werden.“ Ein hierauf bezogenes Schreiben des Kreiswahlleiters mit der Empfehlung, entsprechend zu verfahren, habe sie am 1. Oktober 1980 erhalten. Von diesem Zeitpunkt an seien nur noch Einzelanträge eingegangen.

3. Der Deutsche Bundestag hat den Einspruch durch Beschluß vom 7. Mai 1981 als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen.

Die in § 36 Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1975 (BGBl. I S. 2325, geändert durch Gesetz vom 20. Juli 1979, BGBl. I S. 1149 – BWahlG) vorgesehene Briefwahl diene dem Ziel, möglichst allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl offenzuhalten. Dem trage § 19 Abs. 2 Bundeswahlordnung vom 8. November 1979 (BGBl. I S. 1805 – BWO) Rechnung, der vorschreibe, daß der Benachrichtigung an den Wahlberechtigten, er sei in das Wählerverzeichnis eingetragen, ein Vordruck für einen Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines beizufügen sei. Andererseits müsse das Verfahren die Gewähr dafür bieten, daß die Verfassungsgrundsätze der freien und geheimen Wahl nicht verletzt würden. Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung enthielten zahlreiche Vorschriften, die auf die Begrenzung des Kreises der Briefwahlberechtigten und die Verhinderung von Manipulationen abzielten (vgl. §§ 27 Abs. 2 und 3, 25 Abs. 1, 28 Abs. 4 S. 1 BWO, 36 Abs. 2 Satz 1 BWahlG i.V.m. der Strafandrohung des § 156 StGB).

Ob mit den Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung alle Möglichkeiten erschöpft seien, um Unkorrektheiten bei der Briefwahl in ausreichendem Maße zu begegnen, könne dahingestellt bleiben. Die Stadtverwaltung Mayen habe jedenfalls alles Erforderliche getan, um eine Einhaltung der wahlrechtlichen Bestimmungen zu erreichen. Sie habe kaum unterstellen können, daß mit jeder Besorgung von Briefwahlunterlagen durch Wahlhelfer eine Wahlbeeinflussung verbunden sei.

Die Beschwerdeführer stützten ihren Einspruch nur auf Vermutungen, ohne auch nur für einen konkreten Fall der Verletzung der Grundsätze der freien und geheimen Wahl Beweis anzubieten.

4. Gegen diesen Beschluß haben die Beschwerdeführer am 3. Juni 1981 Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben und dieser mehr als 100 Beitrittserklärungen beigefügt.Zur Begründung tragen die Beschwerdeführer im wesentlichen vor:

Der massive Einsatz von Briefwahlwerbern begegne verfassungsrechtlichen Bedenken.
Das Bundesverfassungsgericht habe zwar in dem Beschluß vom 15. Februar 1967 (BVerfGE 21, 200) die Ausgestaltung der Briefwahl als verfassungsmäßig erachtet. In der Zwischenzeit hätten sich indes die Verhältnisse derart geändert, daß die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht mehr aus den in jener Entscheidung genannten Gründen entkräftet werden könnten. Die Briefwahlbeteiligung sei in einer Weise gestiegen, daß man von einer Ausnahmeerscheinung nicht mehr sprechen könne. Auch könne nicht mehr, wie 1967 in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aus dem (geringen) Umfang der Briefwahlbeteiligung geschlossen werden, daß die Bestimmungen über die Briefwahl offensichtlich geeignet seien, einer Ausweitung und einem Mißbrauch der Briefwahl vorzubeugen.

Im einzelnen seien unter anderem die folgenden Möglichkeiten der Einflußnahme auf die Wahlentscheidung eines Briefwählers nicht zu übersehen: Der Werber könne noch im Moment der Wahl die Vorzüge seiner Partei schildern. Der Briefwähler scheue sich, den Werber beim Ausfüllen des Stimmzettels aus dem Zimmer zu weisen und wage womöglich in dessen Gegenwart nicht, eine andere Partei zu wählen. Es sei auch denkbar, daß der Werber bei der Gemeindebehörde abgeholte Briefwahlunterlagen nicht zum Wähler bringe. Diese Unterlagen stünden zur freien Verfügung. Nehme der Werber den Wahlbrief gleich wieder mit, so hänge dessen Schicksal von der Vertrauenswürdigkeit des Werbers ab.

Es treffe auch nicht zu, daß die Stadtverwaltung Mayen alles getan habe, um eine Einhaltung der Wahlrechtsbestimmungen zu erreichen. Die Stadtverwaltung habe selbst Bedenken gegen den Einsatz von Briefwahlwerbern gehabt; andernfalls hätte sie nicht die erfolgreichsten Werber namentlich und unter Erfassung ihrer „Erfolge" festgehalten.

Eines konkreten Beweises von Wahlrechtsverletzungen habe es angesichts des nachgewiesenen massiven Einsatzes von Briefwahlwerbern nicht mehr bedurft, zumal offenbar auch der Landeswahlleiter die Befürchtungen der Beschwerdeführer geteilt habe.

Es sei nicht auszuschließen, daß die bezeichneten Mängel die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag beeinflußt hätten.

II.

Die Beschwerde ist zulässig.

Sie ist jedoch nicht begründet.

1. Das Wahlprüfungsverfahren nach Art. 41 GG dient dem Schutz des objektiven Wahlrechts, d. h. der gesetzmäßigen Zusammensetzung des Deutschen Bundestages (BVerfGE 37, 84 <89> m.w.N.; 48, 271 <280>). Es führt nur dann zum Erfolg, wenn Wahlfehler behauptet und festgestellt werden, die auf die Mandatsverteilung hätten von Einfluß sein können. Deshalb muß ein Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum Deutschen Bundestag, der gemäß § 2 Abs. 3 WahlprüfG zu begründen ist, einen Tatbestand, der sich als Wahlfehler qualifizieren läßt, erkennen lassen und durch genügend substantiierte Tatsachen belegen (vgl. BVerfGE 40, 11 <30>; 48, 271 <276>).

Der Deutsche Bundestag hat zutreffend festgestellt, daß der Einspruch der Beschwerdeführer diesen Anforderungen nicht genügt. Die Beschwerdeführer haben Wahlfehler nicht einmal behauptet, geschweige denn substantiiert dargetan. Sie halten sie nur für möglich.

Die Beschwerdeführer haben lediglich dargelegt, daß die Wähler in Mayen in erheblichem Umfange von der Möglichkeit der Briefwahl und der in der Bundeswahlordnung vorgesehenen Möglichkeit der Bevollmächtigung eines Dritten zur Beantragung des Wahlscheines (§ 27 Abs. 3 BWO) wie zur Abholung des Wahlscheines und der Briefwahlunterlagen (§ 28 Abs. 4 Satz 1 BWO) Gebrauch gemacht haben. Daran knüpfen sie, ohne daß sie dazu weitere Tatsachen vortragen, die Mutmaßung, einzelne von zahlreichen Briefwählern Bevollmächtigte hätten dabei gegen die Wahlvorschriften verstoßen, um das Wahlergebnis in einem von ihnen gewünschten Sinne zu beeinflussen. Sie führen indes kein Beispiel für die von ihnen selbst nur für möglich gehaltenen Wahlfehler an. Sie benennen auch keinen Fall, in dem die Grundsätze der freien und geheimen Wahl beeinträchtigt, in dem eine Vollmacht erschlichen oder gefälscht, ein Wahlbrief nicht oder verspätet, unvollständig oder verändert weitergeleitet worden wäre. Das aber wäre nach dem Gesetz erforderlich gewesen. Die Substantiierungslast nach § 2 Abs. 3 WahlprüfG ist dem Einspruchsberechtigten nicht deshalb nachzulassen, weil ihre Erfüllung im Einzelfall Schwierigkeiten insbesondere im tatsächlichen Bereich begegnen mag (BVerfGE 40, 11 <32>).

2. Auch die von den Beschwerdeführern im Hinblick auf die Gefährdung der Wahlfreiheit und der Wahrung des Wahlgeheimnisses gegen die Verfassungsmäßigkeit der Briefwahl ins Feld geführten Bedenken greifen nicht durch.

a) Das Grundgesetz schreibt in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 lediglich vor, daß die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen sind, legt in Art. 38 Abs. 2 das Wahlalter für das aktive und passive Wahlrecht fest und überläßt im übrigen die Ausgestaltung des Wahlrechts einem Bundesgesetz (Art. 38 Abs. 3). Die dem Bundesgesetzgeber anvertraute Aufgabe erschöpft sich nicht in der Regelung technischer Einzelheiten. Sie erfordert vielmehr schon im Hinblick auf die Auswahl des Wahlsystems und dessen Durchführung im einzelnen vielfältige Entscheidungen von großer Tragweite. Dem Bundesgesetzgeber ist daher insoweit ein weiter Gestaltungsspielraum gewährt. Insbesondere bringt es die Natur der Sache mit sich, daß nicht jeder der verfassungsrechtlich festgelegten Wahlrechtsgrundsätze in voller Reinheit verwirklicht werden kann. Ob und inwieweit Abweichungen von einzelnen Wahlrechtsgrundsätzen im Interesse der Einheitlichkeit des ganzen Wahlsystems und zur Sicherung der mit ihm verfolgten, demokratischen Prinzipien entsprechenden staatspolitischen Ziele geboten sind, hat hiernach zunächst der Gesetzgeber zu entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht prüft nur nach, ob der Gesetzgeber sich in den Grenzen des ihm vom Grundgesetz eingeräumten Gestaltungsspielraums gehalten oder ob er durch Überschreitung dieser Grenzen gegen einen verfassungskräftigen Wahlgrundsatz verstoßen hat. Dagegen ist es nicht Aufgabe des Gerichts zu prüfen, ob der Gesetzgeber innerhalb seines Ermessensbereichs zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat (vgl. BVerfGE 3, 19 <24 f.>; 3, 383 <394>; 5, 77 <81>).

Mit der Einführung der Briefwahl hat der Bundesgesetzgeber den ihm offenstehenden Gestaltungsspielraum nicht überschritten.

Die Briefwahl eröffnet auch solchen Wahlberechtigten, die sich sonst aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen Gründen gehindert sähen, ihre Stimme im Wahllokal abzugeben, die Teilnahme an der Wahl. Sie trägt dadurch dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl, der besagt, daß grundsätzlich alle Staatsbürger an der Wahl sollen teilnehmen können, in erhöhtem Maße Rechnung. Wenn der Gesetzgeber mit der Einführung der Briefwahl dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen, ein besonderes Gewicht beigemessen und damit zugleich die Wahrung der Freiheit der Wahl und des Wahlgeheimnisses in weiterem Umfange als bei der Stimmabgabe im Wahllokal dem Wähler anvertraut hat, so ist das verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BVerfGE 21, 200

<204>). Das Bundesverfassungsgericht könnte dieser Entscheidung des Gesetzgebers nur entgegentreten, wenn sie mit einer übermäßigen Einschränkung oder Gefährdung der Grundsätze der unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl verbunden wäre. Das ist nicht der Fall.

b) Voraussetzung für die Teilnahme an der Briefwahl ist, daß der Wähler einen Wahlschein besitzt (§ 36 BWahlG). Einen Wahlschein erhält nur, wer sich entweder am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhält oder seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt und nicht in das Wählerverzeichnis des neuen Wahlbezirks eingetragen worden ist oder aus beruflichen Gründen, infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann (§ 25 Abs. 1 BWO). Diese Gründe sind glaubhaft zu machen (§ 27 Abs. 2 BWO). Wer für einen anderen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines stellt, muß durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, daß er dazu berechtigt ist (§ 27 Abs. 3 BWO). Entsprechendes gilt für die Aushändigung der Briefwahlunterlagen an einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich (§ 28 Abs. 4 Satz 1 BWO). Der Wähler hat dem Kreiswahlleiter des Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt worden ist, in einem verschlossenen Wahlbriefumschlag seinen Wahlschein und in einem besonderen verschlossenen Umschlag seinen Stimmzettel zu übersenden (§ 36 Abs. 1 BWahlG). Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Wahlumschlag zu legen (§ 66 Abs. 3 Satz 1 BWO). Auf dem Wahlschein hat der Wähler an Eides Statt zu versichern, daß er den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat (§ 36 Abs. 2 BWahlG).

Diese Regelung verletzt nicht die Grundsätze der freien und geheimen Wahl. Sie überläßt es zwar weitgehend dem Wahlberechtigten, in seinem Bereich selbst für die Wahrung des Wahlgeheimnisses und der Wahlfreiheit Sorge zu tragen. Dies wird ihm indes in aller Regel keine Schwierigkeiten bereiten. Ist eine Beeinträchtigung der Wahlfreiheit und des Wahlgeheimnisses durch die Anwesenheit eines Dritten zu befürchten, so kann und soll er diesen auf sein Recht zur freien und geheimen Ausübung der Wahl und auf seine Verpflichtung hinweisen, den Stimmzettel unbeobachtet auszufüllen und in den Wahlumschlag zu legen sowie an Eides Statt zu versichern, daß er den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat. Bittet er im Hinblick darauf, ihn beim Ausfüllen des Stimmzettels und dem Verschließen des Wahlumschlags allein zu lassen, so wird dem der Dritte regelmäßig Folge leisten. Hält der Wahlberechtigte es im Einzelfall nicht für möglich, auf diese oder andere Weise das Wahlgeheimnis und seine Entschließungsfreiheit zu wahren, so kann er davon absehen, sich die Briefwahlunterlagen, die ihm nur auf Antrag zur Verfügung gestellt werden, zu beschaffen oder zu benutzen und, wenn ihm die Umstände ausnahmsweise keine andere Wahl lassen, sich – ebenso wie das auch vor der Einführung der Briefwahl der Fall war – gezwungen sehen, auf die Stimmabgabe zu verzichten.

c) War der Gesetzgeber nach alledem nicht gehindert, sich für die Einführung der Briefwahl in ihrer gegenwärtigen Gestalt zu entscheiden, weil ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken nicht entgegenstehen, so enthebt ihn dies nicht der Verpflichtung, auch künftig für eine bestmögliche Sicherung und Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze zu sorgen. Gesetz- und Verordnungsgeber haben vielmehr die bisherige Regelung und Handhabung der Briefwahl ständig in Anbetracht neu auftretender Entwicklungen, die unvorhergesehene Gefahren für die Integrität der Wahl mit sich bringen können, zu überprüfen. Treten dabei Mißbräuche zutage, die geeignet sein können, die Freiheit der Wahl oder das Wahlgeheimnis mehr als unumgänglich zu gefährden, so erwächst daraus die verfassungsrechtliche Pflicht, die ursprüngliche Regelung im Wege der Nachbesserung zu ergänzen oder zu ändern (vgl. BVerfGE 25, 1 <12 f.>; 49, 89 <130>; 50, 290 <335>; 55, 274 <308>; 56, 54 <78 ff.>).

Ebenso sind die zum Vollzug der Regelungen berufenen Wahlorgane und Gemeindebehörden gehalten, darüber zu wachen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür zu sorgen, daß bei der Briefwahl das Wahlgeheimnis und die Freiheit der Wahl gewährleistet bleiben.

Die von den Beschwerdeführern beanstandeten Formen der Briefwahlwerbung stehen zwar, wenn sie korrekt gehandhabt werden, mit den Vorschriften des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung nicht in Widerspruch. Sie lassen indes, wie die Beschwerdeführer im einzelnen dargelegt haben, für Gefährdungen der Freiheit der Wahl und des Wahlgeheimnisses, mehr als vom Sinn und Zweck der Briefwahl geboten, Raum und sind zumindest geeignet, einen bösen Schein zu wecken. Wenn bei einem Anstieg des Anteils der Briefwähler auch das Ausmaß der beanstandeten Formen der Briefwahlwerbung zunimmt, wächst das verfassungsrechtliche Gewicht dieser Gefährdungen. Um den im Zusammenhang mit der Briefwahlwerbung nicht ohne weiteres von der Hand zu weisenden Mißbrauchs- und Manipulationsmöglichkeiten entgegenzuwirken, ließe sich etwa daran denken, künftig von der nach § 28 Abs. 4 Satz 1 BWO möglichen Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten abzusehen und diese statt dessen dem Wahlberechtigten auf dem Postwege oder in anderer Weise von Amts wegen unmittelbar zuzuleiten. Außerdem könnte durch eine verstärkte Bildung von Sonderwahlbezirken für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Einrichtungen (§ 13 i.V.m. § 61 BWO) sowie den gesteigerten Einsatz von beweglichen Wahlvorständen gemäß § 8 i.V.m. §§ 62 bis 65 BWO erreicht werden, daß jedenfalls für einen großen Teil der auf fremde Hilfe angewiesenen Wahlberechtigten die Notwendigkeit der Briefwahl entfällt.

Zeidler, Rinck, Wand, Dr. Dr. h.c. Niebler, Steinberger, Träger, Mahrenholz

Der Richter Rottmann ist an der Unterschrift verhindert. Zeidler

Resolución del Tribunal Constitucional de 2 de septiembre de 2005 Beschluss vom 2. September –2 BvQ 25/05–

Bundesverfassungsgericht - Pressestelle -
Pressemitteilung Nr. 81/2005 vom 7. September 2005
Zum Beschluss vom 2. September 2005 – 2 BvQ 25/05 –

II. Información de prensa del Tribunal Constitucional federal

Keine einstweilige Anordnung gegen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit

III. Ninguna medida cautelar frente a la pérdida de la nacionalidad alemana

Die 1. Kammer des Zweiten Senats hat einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt, mit dem die Antragstellerin sich – auch mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl – gegen eine Regelung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts über den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit wandte.

Zum Sachverhalt:

Die in Deutschland lebende Antragstellerin (Ast) wurde nach Entlassung aus der türkischen Staatsangehörigkeit im Juni 1999 in den deutschen Staatsverband eingebürgert. Im Juli 1999 beantragte sie den Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit, die ihr im Februar 2001 erneut verliehen wurde.

Gemäß § 25 Absatz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) in der seit dem 1. Januar 2000 geltenden Fassung verliert ein Deutscher grundsätzlich seine Staatsangehörigkeit, wenn er auf

seinen Antrag eine ausländische Staatsangehörigkeit erwirbt. Nach der zuvor geltenden Gesetzesfassung trat der Staatsangehörigkeitsverlust nur unter der weiteren Voraussetzung ein, dass der Betroffene seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland hatte. Diese so genannte Inlandsklausel wurde durch das Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 mit Wirkung zum 1. Januar 2000 gestrichen. Schätzungen zufolge ist von dieser Gesetzesänderung eine große Zahl in Deutschland lebender und hier eingebürgerter Personen betroffen, die nach der hiesigen Einbürgerung ihre frühere ausländische Staatsangehörigkeit auf Antrag zurück erworben haben.

Die Ast, die die Neuregelung unter anderem wegen des Fehlens einer Übergangsregelung für verfassungswidrig hält, hat beim Verwaltungsgericht eine Klage auf Feststellung ihrer deutschen Staatsangehörigkeit erhoben, über die noch nicht entschieden ist. Im Hinblick auf die am 18. September 2005 anstehenden Wahlen zum Deutschen Bundestag hat sie beim Verwaltungsgericht überdies beantragt, im Wege der einstweiligen Anordnung festzustellen, dass sie die Voraussetzung zur Teilnahme an der Bundestagswahl hinsichtlich der deutschen Staatsangehörigkeit erfülle. Das Verwaltungsgericht hat den Eilrechtsschutzantrag abgelehnt. Mit ihrem beim Bundesverfassungsgericht gestellten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verfolgt die Ast ihr Begehren weiter.

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:

Die gebotene Folgenabwägung ergibt jedenfalls nicht das erforderliche Überwiegen der Gründe, die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechen. Erginge die einstweilige Anordnung nicht, erwiese sich aber eine in der Hauptsache erhobene Verfassungsbeschwerde später als begründet, wäre der Ast bis dahin die Behandlung als deutsche Staatsangehörige zu Unrecht vorenthalten worden; die aus der deutschen Staatsangehörigkeit folgenden Rechte hätte sie vorläufig nicht wahrnehmen können. Als konkret drohender Nachteil ist insoweit vor allem zu berücksichtigen, dass ihr die Ausübung des Wahlrechts bei der auf den 18. September 2005 angesetzten Bundestagswahl versagt bliebe, obwohl sie gemäß § 12 Absatz 1 Bundeswahlgesetz wahlberechtigt wäre. Weitere konkrete und gewichtige Nachteile, die bereits in näherer Zukunft eintreten könnten, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. Vor allem ist der weitere Aufenthalt der Ast gesichert.

Erginge die einstweilige Anordnung, bliebe der Ast aber in der Hauptsache der Erfolg versagt, so würde sie vorläufig zu Unrecht weiter als deutsche Staatsangehörige behandelt. Vor allem könnte sie bei den Wahlen zum 16. Deutschen Bundestag das Wahlrecht ausüben, obwohl ihr dieses in Wahrheit nicht zustünde.

Die Nachteile im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl wögen in beiden Fällen gleich schwer: Es käme jeweils zu einem Wahlfehler, der im Wahlprüfungsverfahren geltend gemacht werden könnte, zur Ungültigkeit der Wahl indes nur bei Mandatserheblichkeit führen würde. An diesem “Bewertungspatt” ändert sich auch dann nichts, wenn man bei der Einschätzung der jeweils drohenden Nachteile nicht allein den Fall der Ast berücksichtigt, sondern auch die Folgen in den Blick nimmt, die sich bei gleicher Behandlung anderer, möglicherweise zahlreicher, gleichgelagerter Fälle ergeben.

Stehen somit die jeweiligen Nachteile der abzuwägenden Folgekonstellationen einander in etwa gleichgewichtig gegenüber, gebietet es die gegenüber der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers notwendige Zurückhaltung des Gerichts, die Anwendung der mittelbar angegriffenen Vorschrift nicht zu hindern, bevor geklärt ist, ob sie vor der Verfassung Bestand hat.

Beschluss vom 2. September 2005 – 2 BvQ 25/05 –
Karlsruhe, den 7. September 2005

Otras sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional federal en materia electoral

Véase http://www.wahlrecht.de/wahlpruefung/index.htm

II.5. Bibliografía

1. AKALIN, Oguz, (red.): *Derecho electoral : materiales sobre política y sociedad en la República Federal de Alemania.* Bonn: Inter Nationes, 1980.

2. ANDERSON, Christopher J. y ZELLE, Carsten, (eds.): *Stability and change in german elections : how electorales merge, convergence, or collide.* Westport [etc.]: Praeger, 1998.

3. BAWN, Kathleen: “Voter responses to electoral complexity : ticket splitting rational voters and representation in the Federal Republic of Germany”, en *British Journal of Political Science,* v. 29, nº 3, july, 1999; pp.487-505.

4. BIRKENHEIER, Manfred: *Wahlrecht für Ausländer : Zugleich ein Beitrag zum Volksbegriff des Grundgesetzes.* Berlin: Duncker und Humblot, 1976. (Schriften zum öffentlichen Recht ; Bd. 287).

5. BUCKING, Kai: *Die Beteiligung von Ausländern an Wahlen zum deutschen Bundestag, zu den Parlamenten der Länder und den kommunalen Vertretungskorperschaften unter besonderer Berückssichtigung der Wahlen zu den hamburgischen Bezirksversammlungen.* Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 1992. (Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; Bd. 1223).

6. CAPOCCIA, Giovanni: “Rappresentanza proporcionale ed elezione uninominale : un ‘ analisi del sistema elettorale tedesco”, en *Quaderni di Scienza Politica,* nº 1, aprile, 2001; pp.99-163.

7. CRUZ VILLALÓN, Pedro: “Legislación electoral y circunstancias excepcionales : la igualdad de oportunidades de los partidos políticos en las primeras elecciones generales de la nueva RFA : sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 29 de septiembre de 1990”, en *Revista Española de Derecho Constitucional,* nº 30, sep.-dic., 1990; pp.129-132.

8. CHAPIN, Wesley D.: “Explaininig the electoral success of the new right : the german case”, en *West European Politics,* v. 20, nº 2, april, 1997; pp.53-72.

9. DÜLMER, H. y KLEIN, M.: “Extreme right-wing voting in Germany in a multilevel perspective : a rejoinder to Lubbers and Scheepers”, en *European Journal of Political Research,* v. 44, nº 2, march, 2005; pp.p. 243-263.

10. FRANCIA. SÉNAT. CELLULE DE LÉGISLATION COMPARÉE: “L’election des parlements nationaux en Europe”, en *Sénat [Études],* nº 28, janvier, 1992

11. FUCHS, Dieter y ROHRSCHNEIDER, Robert: “Postmaterialism and electoral choice before and after german unification”, en *West European Politics,* v. 21, nº 2, april, 1998; pp.95-116.

12. GIAMMUSSO, Valeria, (ed.): *Par condicio : disciplina della comunicazione politica ed elettorale sui mass-media in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e in altri paesi.* Roma: Servizio Studi del Senato della Repubblica, 1995. (Quaderni di documentazione ; 28).

13. GSCHWEND, Thomas: "Split-ticket patterns in mixed-member proportional election systems : estimates and analyses of their spatial variation at the german federal election, 1998", en *British Journal of Political Science,* v. 33, nº 1, january, 2003; pp.109-127.

14. ——-: "Ticket-splitting and strategic voting under mixed electoral rules : evidence from Germany", en *European Journal of Political Research,* v. 46, nº 1, january, 2007; pp.1-23.

15. HELMS, Ludger: "The federal election in Germany, September 2002", en *Electoral Studies,* v. 23, nº 1, march, 2004; pp.143-149.

16. HOFFMANN-LANGE, Ursula y RILKE, Johann de: "16 jährige Wähler - erwachsen genug?", en *Zeitschrift für Parlamentsfragen,* nº 4, November, 1996; pp.572-584.

17. HOLZHACKER, Ronald L.: "Campaign communication and strategic responses to change in the electoral environment : Germany after reunification", en *Party Politics,* v. 5, nº 4, october, 1999; pp.439-469.

18. HUBER, Peter M.: "Der Prüfungsmaßstab von Wahlorganen bei der Zulassung von politischen Parteien und Wahlervereinigungen ", en *Die Öffentliche Verwaltung,* nº 6, märz, 1991; pp.229-237.

19. INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, (ed. lit.): *La legislación electoral alemana.* [S. l.]: [S. n.], [1987?]. (Instituto de Estudios para la Transición Democrática ; 3).

20. JAMES, Peter: *The German electoral system.* Aldershot (Hampshire), [etc.]: Ashgate, 2003.

21. JEFFERY, Charlie: "Electoral reform : learning from germany", en *The Political Quarterly,* v. 69, nº 3, july-september, 1998; pp.241-251.

22. JESSE, Eckhard: "The electoral system : more continuity then change", en Ludger Helms (ed.): *Institutions and Institutional Change in the Federal Republic of Germany.* Houndmills (Basingstoke): Macmillan Press [etc.], 2000; pp.124-142.

23. KARP, Jeffrey A.: "Political knowledge about electoral rules : comparing mixed member proportional systems in Germany and New Zealand", en *Electoral Studies* : An International Journal, v. 25, nº 4, december, 2006; pp.714-730.

24. KREUZER, Marcus: "Germany : partisan engineering of personalized proportional representation", en Josep M. Colomer (ed.): *Handbook of Electoral System Choice.* Houndmills (Basingstoke): Palgrave Macmillan, 2004; pp.222-236.

25. LANGE, Erhard H. M.: *Wahlrecht und Innenpolitik : Entstehungsgeschichte und Analyse der Wahlgesetzgebung und Wahlrechtsdiskussion im westlichen Nachkriegsdeutschland 1945-1956.* Meisenheim am Glan: Anton Main, 1975. (Marburger Abhandlungen zur Politischen Wissenschaft ; Bd. 25).

26. LEES, Charles: *Party politics in Germany : a comparative politics approach.* Houndmills (Basingstoke): Palgrave Macmillan, 2005. (New perspectives in German studies).

27. LUCIANI, Massimo: "Constitution et élections. XIXe Table ronde internationale des 12 et 13 septembre 2003", en *Annuaire International de Justice Constitutionnelle,* 2003; pp.201-225.

28. NAGELSCHMITZ, Helmut, (red.): *El sistema electoral alemán : ¿por qué reglas se rigen las eleciones al Bundestag?* Bonn: Inter-Nationes, 1998. (Basis-Info : política interior, justicia; 21).

29. NOHLEN, Dieter: "El sistema electoral alemán : un estudio comparativo", en *El Sistema Electoral a Debate : veinte años de rendimientos del sistema electoral español, 1977-1997.* Madrid [etc.]: CIS [etc.], 1998; pp.129-145.

30. PAPPI, Franz Urban y THURNER, Paul W.: "Electoral behaviour in a two-vote system : incentives for ticket splitting in German Bundestag elections ", en E*uropean Journal of Political Research,* v. 41, nº 2, march, 2002; pp.207-232.

31. PAULY, Walter: "Das Wahlrecht in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts", en *Archiv des Öffentlichen Rechts,* nº 2, juni, 1998; pp.232-285.

32. PIEROTH, Bodo: "Öffene oder geheime Wahlen und Abstimmungen?", en *Juristische Schulung,* nº 2, 1991; pp.89-97.

33. ROBERTS, Geoffrey: *German electoral politics.* Manchester: Manchester University Press, 2006. (Issues in German politics).

34. ROBERTS, Geoffrey K.: "Selection, voting and adjudication : the politics of legislative membership in the Federal Republik of Germany", en *Government and Opposition,* v. 37, nº 2, 2002; pp.231-249.

35. SAALFELD, Thomas: "Germany : multiple veto points, informal coordination, and problems of hidden action", en Kaare Strom y Wolfgang C. (eds.): *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies.* Oxford: Oxford University Press, 2003; pp.347-375.

36. ——-: "Germany : stability and strategy in a mixed-member proportional system", en Michael Gallagher y Paul Mitchell (eds.): *The Politics of Electoral Systems.* Oxford: Oxftord University Press, 2005; pp.209-229.

37. SCARROW, Susan Edith: "Germany : the mixed-member system as a political compromise", en Matthew Soberg Shugart y Martin P. Wattenberg (eds.): *Mixed-Member Electoral Systems : the best of both worlds?* Oxford: Oxford University Press, 2001; pp.55-69.

38. SCHMITT-BECK, Rüdiger; WEICK, Stefan, y CHRISTOPH, Bernhard: "Shaky attachments : individual-level stability and change of partisanship among west German voters, 1984-2001", en *European Journal of Political Research,* v. 45, nº 4, june, 2006; pp.581-608.

39. SCHOEN, Harald: "Split-ticket voting in German Federal elections, 1953-1990 : an example of sophisticated balloting?", en *Electoral Studies,* v. 18, nº 4, december, 1999; pp.473-496.

40. SCHREIBER, Wolfgang: "Die Neueinteilung der Wahlkreise für die Wahl zum 14. deutschen Bundestag - Verfassungswidrig", en *Zeitschrift für Rechtspolitik,* nº 3, märz, 1997; pp.105-110.

41. ——-: *Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag : Kommentar zum Bundeswahlgesetz unter Einbeziehung der Bundeswahlordnund, der Bundeswahlgeräteverordnung und sonstiger wahlrechtlicherNebenvorschriften.* Köln [etc.]: Carl Heymanns, 1990.

42. ——-: “Novellierung des Bundestagswahlrechts “, en *Neue Juristische Wochenschrift,* nº 25, 1985; pp.1433-1439.

43. ——-: “Reformbedarf im Bundestagswahlrecht? : Überlegungen zur Novellierung des Bundeswahlgesetzes “, en *Deutsches Verwaltungsblatt,* nº 6, 1999; pp.345-356.

44. SCHWENGLER, Bernard: “Le clivage électoral catholique-protestant revisité : France, Allemagne Fédérale, Suisse “, en *Revue Française de Science Politique,* v. 55, nº 3, juin, 2005; pp.381-413.

45. STRATMAN, Thomas y BAUR, Martin: “Plurality rule, proportional representation, and the german bundestag : how incentives to pork-barrel differ across electoral systems”, en *American Journal of Political Science,* v. 46, nº 3, july, 2002; pp.506-514.

46. VIDAL PRADO, Carlos: “Elecciones al Parlamento Alemán, Bundestag, de 27 de septiembre de 1998”, en *Revista de Derecho Político,* nº 44, 1998; pp.383-400.

47. WALTHER, Christoph J.: *Wahlkampfrecht*. Baden-Baden: Nomos Verlagasgesellschaft, 1989. (Schriften zum Parteienrecht ; Bd. 3).

48. WEIDES, Peter: “Bestimmung des Wahltages von Parlamentswahlen”, en *Einigkeit und Recht und Freiheit : Festschrift für Karl Carstens.* Köln [etc.]: Carl Heymanns, 1984; pp.933-951.

49. WENNER, Ulrich: *Sperrklauseln im Wahlrecht der Bundesrepublik Deutschland.* Frankfurt: Peter Lang, 1986. (Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; Bd. 522).

II.6. Direcciones web

Ace Electoral Knowledge Network
http://aceproject.org/main/espanol/em/emd02.htm

Bundestag
http://www.bundestag.de/index.html

Bundesverfassungsgericht
http://www.bundesverfassungsgericht.de/

Bundeswahlleiter
http://www.bundeswahlleiter.de/

Bundeszentrale für politische Bildung
http://www.bpb.de/themen/MD4PLB,0,0,Die_Wahl_2005.html

Derecho electoral
http://www.wahlrecht.de/

Elections and electoral systems by country
http://www.psr.keele.ac.uk/election.htm

Electoral Reform Society
http://www.electoral-reform.org.uk/

Mehr Demokratie
http://www.mehr-demokratie.de/

Parteien und wahlen in Europa
http://www.parties-and-elections.de/

Wahlen heute
http://www.wahlen-heute.de/

Wahlen in Deutschland
http://www.election.de/cgi-bin/news1.pl

Wahlprüfungen
http://www.wahlrecht.de/wahlpruefung/index.htm

Wahlreform
http://www.wahlreform.de/

III. Francia

III.1. Textos Fundamentales

Constitución (1958)
Arts. 3, 4, 6, 7, 12, 24, 58, 59 y 72

III.2. Códigos

Code Électoral (Version au 1 janvier 2009)

SECTION III: Inscription en dehors des périodes de révision (Articles L30 à L35)

SECTION IV: Contrôle des inscriptions sur les listes électorales (Articles L36 à L40)

CHAPITRE V: Propagande (Articles L47 à L52)

SECTION II: Opérations de vote (Articles L54 à L68)

SECTION III: Vote par procuration (Articles L71 à L78)

III.3. Textos Legislativos e Informes

III.3.1. Leyes y Decretos

Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.- JORF n°56 du 7 mars 2007

Décret nº 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universe.- JORF n°58 du 9 mars 2001

Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative a la publication et a la diffusion de certains sondages d'opinion. [Version consolidée au 22 février 2007].- JORF du 20 juillet 1977

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république.[Version consolidée au 6 avril 2006].- JORF du 1 février 1976

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel . [Version consolidée au 22 février 2007].- JORF du 7 novembre 1962

III.3.2. Informes y Decisiones

Rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2007).- JORF n°235 du 10 octobre 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-281 du 24 avril 2007** relative aux conditions de production et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 6 mai 2007.- JORF n°100 du 28 avril 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-282 du 27 avril 2007** fixant la durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République, portant répartition de

cette durée en nombre et durée d'émissions et fixant les horaires de programmation de ces émissions sur les antennes des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, RFO (radio et télévision), Radio France (France Inter) et RFI.-JORF n°101 du 29 avril 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-115 du 20 mars 2007** relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le premier tour de scrutin le 22 avril 2007.-JORF n° 69 du 22 mars 2007

Recommandation n° 2006-7 du 7 novembre 2006 du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle.-JORF n° 262 du 11 novembre 2006

III.4. Jurisprudencia

Conseil Constitutionnel

Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 sur la Loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution (Non conformité partielle)

Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 sur la Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (Non conformité partielle)

Décision Observations CC législatives 2007 du 29 mai 2008.-Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007. Journal Officiel nº 129 de 4 Juin 2008

Décision Observations CC présidentielle 2007 du 07 juin 2007.- Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007. Journal Officiel de 12 juin 2007

Décision du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

Décision. Déclaration du 25 avril 2007 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République

Décision du 19 avril 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Jean-Claude Galland

Décision du 5 avril 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Gérard Schivardi

Décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle

Décision du 07 juin 2007 Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007

Décision du 3 mai 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Pascal JAN

III.5. Otros documentos

Recommandation du Forum des droits sur l'internet «Internet et communication électorale»

Recommandation du Forum des droits sur l'internet «Le vote électronique et la modernisation du processus électoral: les machines à voter»

III.6. Bibliografía

III.7. Direcciones web

El régimen francés es semipresidencialista, convive un parlamentarismo fuerte que determina la figura del Primer Ministro competente en asuntos de política interna y un Presidente competente en materia militar, en política exterior, llamado a plebiscitos, posibilidad de disolver el parlamento, etc. Puede escoger al Primer Ministro, pero éste debe ser refrendado por la Asamblea, en caso de cohabitación (el Presidente de la República es de distinto color político que la Asamblea Nacional), su papel más relevante es en política exterior.

De acuerdo con la Constitución de la V República y desde 1962, se elige al Presidente de la República por sufragio universal directo y en una votación mayoritaria a dos vueltas. Después del referéndum del 2000, la duración del mandato es de cinco años y renovable. Hasta entonces era de siete años también renovable.

En la primera vuelta el candidato deberá obtener la mayoría absoluta de los sufragios manifestados. Si ningún candidato obtiene esta mayoría, se procede a una segunda vuelta, en la que sólo se presentan los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos durante la primera. Este sistema impulsa a los dos principales ganadores de la primera a armar coaliciones y a buscar el apoyo de fuerzas políticas que estén más cercanas a sus proyectos.

Las condiciones para ser candidato a Presidente de la República son: tener la nacionalidad francesa, 23 años cumplidos y “dignidad moral”; ser presentado por al menos 500 representantes elegidos por el pueblo para los diversos puestos de responsabilidad en la administración: diputados, senadores, alcaldes, consejeros generales de los departamentos, etc.

Además debe cumplir con dos requisitos. El candidato debe entregar al Consejo Constitucional una declaración de su situación patrimonial, y durante el mes que precede el término del mandato presidencial deberá ser presentada nuevamente para comprobar cuáles han sido las variaciones de su patrimonio. También, deberá presentar un balance de las cuentas de su campaña durante los dos meses siguientes a la elección.

El Consejo Constitucional, instituido por la Constitución de la V República de 4 de octubre de 1958, vela por la regularidad de la elección del Presidente de la republica y de las operaciones de referéndum de las que proclama los resultados. Es también juez de la regularidad de la elección, de los regímenes de elegibilidad y de las incompatibilidades de los parlamentarios, controla, asimismo, la financiación de los gastos electorales.

La Comisión Nacional de Control de la campaña electoral vigila el buen desarrollo de la campaña y el respeto de igualdad de trato entre los candidatos. Recibe el apoyo de las comisiones locales de control, implementadas en cada departamento.

En el ámbito audiovisual (televisión y radio), corresponde al Consejo Superior del Audiovisual (CSA) velar por el respeto del principio de igualdad de trato entre candidatos, contabilizando, en particular, el tiempo de los que toman la palabra y que la presentación y los comentarios relativos a cada una de las candidaturas no vayan en detrimento de ninguna de ellas. Los contenidos que los candidatos pongan en línea por Internet no se contabilizan para el tiempo dedicado a la toma de palabra.

Se ha procedido a una selección de determinadas normas. Algunas contienen el texto completo, otras una parte del mismo, todas ellas actualizadas al año 2009. Las normas seleccionadas se refieren básicamente a las elecciones presidenciales, aunque también se mencionan algunas normas que rigen para las elecciones a los miembros de las cámaras del parlamento de la nación.

III.1. Textos fundamentales

Constitution du 4 octobre 1958

[…]

Titre I - De la Souveraineté

Art. 3.- La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 4.- Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation

Titre II - Le Président de la République

[…]

Art. 6.- Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Art. 7.- Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

[…]

Art. 12.- Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

[…]

Titre IV - Le Parlement

Art. 24.- Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat

[…]

Titre VII - Le Conseil Constitutionnel

[…]

Art. 58.- Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Art. 59.- Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs

[…]

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

[…]

III.2. Códigos

Code électoral

[Version à venir au 1 janvier 2009]

PARTIE LÉGISLATIVE

LIVRE I: ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS

TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

- CHAPITRE I: Conditions requises pour être électeur (Articles L1 à L7)
- CHAPITRE II: Listes électorales
  - SECTION I: Conditions d'inscription sur une liste électorale (Articles L9 à L15-1)
  - SECTION II: Etablissement et révision des listes électorales (Articles L16 à L29)
  - **SECTION III: Inscription en dehors des périodes de révision (Articles L30 à L35)**
  - **SECTION IV: Contrôle des inscriptions sur les listes électorales (Articles L36 à L40)**
  - SECTION V: Exonération d'impôts et de taxes (Articles L41 à L42)
  - SECTION VI: Cartes électorales (Article L43)
- CHAPITRE III: Conditions d'éligibilité et inéligibilités (Articles L44 à L45)
- CHAPITRE IV: Incompatibilités (Articles L46 à L46-2)
- **CHAPITRE V: Propagande (Articles L47 à L52-3)**
- CHAPITRE V bis: Financement et plafonnement des dépenses électorales (Articles L52-4 à L52-18)
- **CHAPITRE VI: Vote**
  - SECTION I: Opérations préparatoires au scrutin (Article L53)
  - **SECTION II: Opérations de vote (Articles L54 à L70)**
  - **SECTION III: Vote par procuration (Articles L71 à L78)**
  - SECTION V: Commissions de contrôle des opérations de vote (Article L85-1)

CHAPITRE VII: Dispositions pénales (Articles L86 à L117-1)

CHAPITRE VIII: Contentieux (Articles L118 à L118-3)

TITRE II: DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES

CHAPITRE I: Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés (Articles LO119 à LO122)

CHAPITRE II: Mode de scrutin (Articles L123 à L126)

CHAPITRE III: Conditions d'éligibilité et inéligibilités (Articles LO127 à LO136-1)

CHAPITRE IV: Incompatibilités (Articles LO137 à LO153)

CHAPITRE V: Déclarations de candidatures (Articles L154 à L163)

CHAPITRE VI: Propagande (Articles L164 à L171)

CHAPITRE VII: Opérations préparatoires au scrutin (Articles L172 à L173)

CHAPITRE VIII: Opérations de vote (Articles L174 à L175)

CHAPITRE IX: Remplacement des députés (Articles LO176 à L178-1)

CHAPITRE X: Contentieux (Articles LO179 à LO189)

CHAPITRE XI: Conditions d'application (Article L190)

TITRE III: DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX

CHAPITRE I: Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers (Articles L191 à L192)

CHAPITRE II: Mode de scrutin (Article L193)

CHAPITRE III: Conditions d'éligibilité et inéligibilités (Articles L194 à L205)

CHAPITRE IV: Incompatibilités (Articles L206 à L210)

CHAPITRE IV bis: Déclarations de candidature (Article L210-1)

CHAPITRE V: Propagande (Articles L211 à L217)

CHAPITRE VI: Opérations préparatoires au scrutin (Articles L218 à L220)

CHAPITRE VIII: Remplacement des conseillers généraux (Article L221)

CHAPITRE IX: Contentieux (Articles L222 à L223-1)

CHAPITRE X: Conditions d'application (Article L224)

TITRE IV: DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

CHAPITRE I: Dispositions applicables à toutes les communes

SECTION I: Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers (Articles L225 à L227)

SECTION I bis: Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles LO227-1 à LO227-5)

SECTION II: Conditions d'éligibilité et inéligibilités (Articles L228 à LO236-1)

SECTION III: Incompatibilités (Articles L237 à L239)

SECTION IV: Propagande (Articles L240 à L246)

SECTION V: Opérations préparatoires au scrutin (Article L247)

SECTION VI: Opérations de vote (Article LO247-1)

SECTION VII: Contentieux (Articles L248 à L251)

CHAPITRE II: Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants

SECTION I: Mode de scrutin (Articles L252 à L255-1)

SECTION IV: Opérations de vote (Articles L256 à L257)

SECTION V: Remplacement des conseillers municipaux (Articles L258 à L259)

TITRE II: ELECTION DES CONSEILLERS A L'ASSEMBLEE DE CORSE

CHAPITRE I: Composition de l'Assemblée et durée du mandat de ses membres. (Article L364)

CHAPITRE II: Mode de scrutin. (Articles L365 à L366)

CHAPITRE III: Conditions d'éligibilité et inéligibilités. (Article L367)

CHAPITRE IV: Incompatibilités. (Articles L368 à L369)

CHAPITRE V: Déclarations de candidature. (Articles L370 à L374)

CHAPITRE VI: Propagande. (Articles L375 à L377)

CHAPITRE VII: Opérations préparatoires au scrutin. (Article L378)

CHAPITRE VIII: Opérations de vote. (Article L379)

CHAPITRE IX: Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse. (Article L380)

CHAPITRE X: Contentieux. (Articles L381 à L383)

TITRE III: CONDITIONS D'APPLICATION DES TITRE Ier et II (Article L384)

LIVRE V: DISPOSITIONS APPLICABLESA LA NOUVELLE-CALEDONIE, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET AUX ILES WALLIS ET FUTUNA

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (Articles LO384-1 à L393)

TITRE II: ELECTION DES DEPUTES (Articles LO393-1 à L397)

TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONGRES ET DES ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (Articles L398 à L406)

TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (Articles LO406-1 à L416)

TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS ET FUTUNA (Articles L418 à L427-1)

TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE

CHAPITRE I: Nouvelle-Calédonie (Articles L428 à L436)

CHAPITRE II: Polynésie Française (Articles L437 à L438)

TITRE VII: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA (Articles LO438-1 à L448)

TITRE VIII: CONDITIONS D'APPLICATION (Article L449)

LIVRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE Ier: MAYOTTE

CHAPITRE Ier: Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles LO450 à L454)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Article LO455)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux (Articles LO456 à LO470)

CHAPITRE IV: Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux (Articles L471 à L472)

CHAPITRE V: Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte (Articles LO473 à L475)

TITRE II: SAINT-BARTHÉLEMY

CHAPITRE Ier: Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur (Articles LO476 à L477)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Articles L478 à L480)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux (Articles LO481 à LO499)

CHAPITRE IV: Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy (Articles LO500 à L502)

TITRE III: SAINT-MARTIN

CHAPITRE Ier: Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur (Articles LO503 à L504)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Articles L505 à L507)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux (Articles LO508 à LO526)

CHAPITRE IV: Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin (Articles LO527 à L529)

TITRE IV: SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE Ier: Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux (Articles LO530 à L532)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Articles LO533 à L535)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux (Articles LO536 à LO554)

CHAPITRE V: Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles LO555 à L557)

TITRE V: CONDITIONS D'APPLICATION (Article L558)

LIVRE VII: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS ORGANISÉES EN APPLICATION DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION (Articles L559 à L567)

LIVRE VIII: DISPOSITIONS FINALES (Article L568)

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

LIVRE I: ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS

TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE II: Listes électorales

SECTION I: Conditions d'inscription sur une liste électorale (Articles R1 à R4)

SECTION II: Etablissement et révision des listes électorales (Articles R5 à R17-1)

SECTION III: Inscription en dehors des périodes de révision (Article R17-2)

SECTION IV: Contrôle des inscriptions sur les listes électorales (Articles R18 à R22)

SECTION VI: Cartes électorales (Articles R23 à R25)

CHAPITRE V: Propagande (Articles R26 à R39)

CHAPITRE V bis: Financement et plafonnement des dépenses electorales (Articles R39-1 à R39-5)

CHAPITRE VI: Vote

SECTION I: Opérations préparatoires au scrutin (Articles R40 à R41)

SECTION II: Opérations de vote (Articles R42 à R71)

SECTION III: Vote par procuration (Articles R72 à R80)

SECTION V: Commissions de contrôle des opérations de vote (Articles R93-1 à R93-3)

CHAPITRE VII: Dispositions pénales (Articles R94 à R96)

CHAPITRE VIII: Contentieux (Article R97)

TITRE II: DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES

CHAPITRE V: Déclarations de candidatures (Articles R98 à R102)

CHAPITRE VI: Propagande (Article R103)

CHAPITRE VIII: Opérations de vote (Articles R104 à R109)

TITRE III: DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX

CHAPITRE IV bis: Déclarations de candidatures (Articles R109-1 à R109-2)

CHAPITRE V: Propagande (Article R110)

CHAPITRE VII: Opérations de vote (Articles R111 à R112)

CHAPITRE IX: Contentieux (Articles R113 à R117-1)

TITRE IV: DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

CHAPITRE I: Dispositions applicables à toutes les communes

SECTION I bis: Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris (Articles R117-2 à R117-3)SECTION IV: Propagande (Article R117-4)

SECTION VI: Opérations de vote (Article R118)

SECTION VII: Contentieux (Articles R119 à R123)

CHAPITRE II: Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants

SECTION I: Mode de scrutin (Article R124)

SECTION II: Propagande (Article R125)

CHAPITRE III: Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

SECTION I: Mode de scrutin (Article R127-1)

SECTION II: Déclarations de candidature (Articles R127-2 à R128-1)

CHAPITRE IV: Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

SECTION II: Opérations préparatoires au scrutin (Articles R129 à R130)

LIVRE II: ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS

TITRE II: COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL (Article R130-1)

TITRE III: DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX (Articles R131 à R148)

TITRE III bis: DESIGNATION DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE DE CORSE (Articles R148-1 à R148-3)

TITRE IV: ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE IV: Déclarations de candidatures (Articles R149 à R153)

CHAPITRE V: Propagande (Articles R154 à R161)

CHAPITRE VI: Opérations préparatoires au scrutin (Article R162)

CHAPITRE VII: Opérations de vote (Articles R163 à R171)

TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE

CHAPITRE I: Dispositions communes (Article R265)

CHAPITRE II: Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Article R267)

CHAPITRE III: Dispositions particulières à la Polynésie française (Article R270)

TITRE VII: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

CHAPITRE I: Dispositions générales (Articles R271 à R272)

CHAPITRE II: Régime des inéligibilités (Article R**273)

CHAPITRE III: Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (Articles R274 à R276)

CHAPITRE IV: Propagande (Article R277)

CHAPITRE V: Opérations préparatoires au scrutin (Article R278)

CHAPITRE VI: Opérations de vote (Articles R279 à R283)

LIVRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE I: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

CHAPITRE I: Dispositions générales (Articles R284 à R290)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Articles R291 à R292)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte (Articles R293 à R301)

CHAPITRE IV: Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte

CHAPITRE V: Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte (Article R302)

TITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY

CHAPITRE I: Dispositions générales (Articles R303 à R307)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Article R308)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy (Articles R309 à R317)

TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN

CHAPITRE I: Dispositions générales (Articles R318 à R322)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Article R323)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin (Articles R324 à R332)

TITRE IV: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE I: Dispositions générales (Articles R333 à R337)

CHAPITRE II: Dispositions applicables à l'élection du député (Article R338)

CHAPITRE III: Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles R339 à R346)

Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés) (Articles Annexe tableau n° 1 à Annexe tableau n° 1)

Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés) (1). (Article Annexe tableau n° 1)

Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (élection des députés). (Article Annexe tableau n° 1 bis)

Tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris (Article Annexe tableau n° 2)

Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon (Article Annexe tableau n° 3)

Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille. (Article Annexe tableau n° 4)

Répartition des sièges de sénateurs entre les séries (Article Annexe tableau n° 5)

Election des sénateurs.

Nombre de sénateurs représentant les départements (Article Annexe tableau n° 6)

Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats par section départementale. (Article Annexe tableau n° 7)

[…]

SECTION III: Inscription en dehors des périodes de révision (Articles L30 à L35)

Article L30

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision:

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription;

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Article L31

Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Article L32 Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Article L33

Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Article L34

Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Article L35

Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours [*délai*] de leur notification.

SECTION IV: Contrôle des inscriptions sur les listes électorales (Articles L36 à L40)

Article L36

Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Article L37

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article L38

Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article L39

En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Article L40

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

CHAPITRE V: Propagande (Articles L47 à L52-3)

Article L47

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L48

Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L49

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L50

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L50-1

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L51

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Article L52

Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Article L52-1

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Article L52-2

En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Article L52-3

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

[…]

SECTION II: Opérations de vote
(Articles L54 à L70)

Article L54

Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Article L55

Il a lieu un dimanche.

Article L56

En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Article L57

Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Article L57-1

Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes:

- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Article L58

Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Article L59

Le scrutin est secret.

Article L60

Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder

au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Article L61

L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Article L62

Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 9 JORF 11 mai 1969

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs [*nombre*] inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Article L62-1

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L62-2

Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.

Article L63

L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Article L64

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante: "l'électeur ne peut signer lui-même".

Article L65

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante: l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le lit à haute voix; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Article L66

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article L67

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L68

Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

[…]

SECTION III: Vote par procuration
(Articles L71 à L78)

Article L71

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration:

a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune;

b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin;

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

Article L72

Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Article L73

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Article L74

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.

Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L75

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration.

Article L76

Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Article L77

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Article L78

Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

[…]

III.3. Textos legislativos e Informes

III.3.1. Leyes y Decretos

LOI organique no 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution
JORF n° 11 du 14 janvier 2009

LOI no 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés
JORF n° 11 du 14 janvier 2009

Arrêté du 1er février 2008 portant nomination à la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
JORF n°42 du 19 février 2008

Décret n° 2007-76 du 23 janvier 2007 relatif à l'utilisation de papier de qualité écologique pour les documents électoraux
JORF n° 20 du 24 janvier 2007 page 1338

Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
JORF n°27 du 1 février 2007
[Version en vigueur au 9 février 2009]

Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
JORF n°56 du 7 mars 2007
[Article 12]

Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la date de la consultation électorale pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires des services du Premier ministre (service d'information du Gouvernement)
JORF n° 288 du 12 décembre 2007

Décret n° 2007-136 du 1er février 2007 modifiant le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
JORF n°28 du 2 février 2007

Décret n° 2007-91 du 25 janvier 2007 relatif à la tenue de listes électorales consulaires et à l'organisation d'opérations de vote hors de France
JORF n° 22 du 26 janvier 2007

Décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République
JORF n° 45 du 22 février 2007

Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la composition de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral
JORF n° 112 du 15 mai 2007

Arrêté du 9 mars 2007 relatif à la désignation de rapporteurs près la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle
JORF n° 64 du 16 mars 2007

LOI organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République
JORF n° 82 du 6 avril 2006

LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
JORF n° 178 du 3 août 2006

Arrêté du 27 septembre 2006 portant création d'une commission temporaire de la participation électorale des Français établis hors de France
JORF n° 239 du 14 octobre 2006

Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale
JORF n°238 du 13 octobre 2006

Décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 modifiant le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
JORF n° 95 du 22 avril 2006 page 6007

Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
JORF n°298 du 23 décembre 2005

Loi organique n° 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat
JORF n°292 du 16 décembre 2005

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
JORF n° 143 du 22 juin 2004

Arrêté du 30 décembre 2003 fixant les modalités d'attribution d'une indemnité aux secrétaires des commissions locales de contrôle à l'occasion de l'élection du Président de la République
JORF n° 20 du 24 janvier 2004

Arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter
JORF n°274 du 27 novembre 2003

Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat
JORF n°175 du 31 juillet 2003
[Version consolidée au 16 décembre 2005]

Loi n°2002-214 du 19 février 2002 modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
JORF du 20 février 2002

Décret n° 2002-1106 du 30 août 2002 conférant la qualité d'ordonnateur principal au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et modifiant le code électoral
JORF n° 204 du 1 septembre 2002

Décret nº 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
JORF n° 58 du 9 mars 2001

Loi Organique n°2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux qui renforce les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les mandats

locaux et crée une incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et le mandat de représentant au Parlement européen
JORF du 20 février 2000

Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice renforce les incompatibilités entre mandat de représentant au Parlement européen et mandats locaux ou fonctions exécutives locales.
JORF n°82 du 6 avril 2000

Conseil supérieur de l'audiovisuel no 95-147 du 28 avril 1995 fixant le nombre, la durée et les horaires de programmation des émissions des candidats à l'élection du Président de la République sur les antennes des sociétés nationales de programme de radio et de télévision France 2, France 3, Radio France, R.F.O. et Radio France internationale pour le second tour de scrutin
JORF n°101 du 29 avril 1995

Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
JORF du 12 mars 1988
[Version consolidée au 01 février 2007]

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication *Loi Léotard*
JORF du 1 octobre 1986
[Version en vigueur au 9 février 2009]

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi 77 - 808 du 19 juillet 1977
JORF du 26 janvier 1978

Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative a la publication et a la diffusion de certains sondages d'opinion
JORF du 20 juillet 1977
[Version consolidée au 22 février 2007]

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république
[Version consolidée au 6 avril 2006]
JORF du 1 février 1976

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Version consolidée au 22 février 2007
JORF du 7 novembre

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Version consolidée au 22 février 2007
JORF du 9 novembre 1958

Loi n°2007-308 du 5 mars 2007

portant réforme de la protection juridique des majeurs
JORF n°56 du 7 mars 2007

[…]

Article 12

L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé:

«Art. L. 5. - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.»

[En vigueur le 1er janvier 2009]

Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001

portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
JORF n° 58 du 9 mars 2001

[Version consolidée au 2 février 2007]

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58;

Vu le code électoral;

Vu le code général des impôts;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Le Conseil constitutionnel consulté;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Tous les nationaux français inscrits sur une des listes électorales de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon participent à l'élection du Président de la République.

TITRE IER: DÉCLARATIONS ET CANDIDATURES

Article 2

Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées:

1° Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat;

2° Lorsqu'elles émanent de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.

Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Article 3

Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.

Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.

En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

Article 4

La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu'elle émane d'un maire ou d'un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.

Article 5

Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.

Article 6

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.

En aucun cas les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt.

Article 7

Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.

La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 8

Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Article 9

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

TITRE II: CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 10

La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article 11

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Article 12

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 13

Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

Cette commission comprend cinq membres:

- le vice-président du Conseil d'Etat, président;
- le premier président de la Cour de cassation;
- le premier président de la Cour des comptes;
- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Elle est assistée de quatre fonctionnaires:

- un représentant du ministre de l'intérieur;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer;
- un représentant du ministre chargé des postes;
- un représentant du ministre chargé de la communication.

Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

Article 14

La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.

Article 15

A compter de la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 16

Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

Article 17

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat.

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.

La Commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Article 18

Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.

Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé et d'un enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches.

La Commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur.

Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 19

Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 20

Sont pris directement en charge par l'Etat:

- le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18;

- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17;
- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.

Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat.

Article 21

Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

TITRE III: OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 22

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 du code électoral.

Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

Article 23

Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.

Article 24

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement:

- les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

Article 25

Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

Article 26

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Article 27

En savoir plus sur cet article...

Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Article 28

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

Pour chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

Article 29

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

TITRE IV: CONTENTIEUX

Article 30

Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Article 31

Les décisions statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

TITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER

Chapitre Ier: Dispositions applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Article 32

Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code:

1° En Polynésie française, de l'article R. 202;

2° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1;

3° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article R. 172-1;

5° A Mayotte, des articles R. 176-1, R. 176-2 et R. 176-6.

Article 33

Pour l'application du premier alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 34

Pour l'application de l'article 15, lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne électorale radiodiffusées sont retransmises.

En outre, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.

Article 35

Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l'article 28 est déposé aux archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l'Etat.

Chapitre II: Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 36

Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.

Pour l'application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire: "363 600 F CFP", au lieu de: "3 000 euros".

Article 37

Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.

Article 38

Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

Chapitre III: Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Article 39

En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.

Article 39-1

Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.

Article 40

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Loi n°77-808 du 19 juillet 1977

relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
JORF du 20 juillet 1977

[Version consolidée au 22 février 2007]

SECTION I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

SECTION II: DU CONTENU DES SONDAGES

Article 2

La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé:

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage;

Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage;

Le nombre des personnes interrogées;

La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations;

Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.

Article 3

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment:

L'objet du sondage;

La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon;

Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations;

Le texte intégral des questions posées;

La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions;

Les limites d'interprétation des résultats publiés;

S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.

Article 3-1

A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.

Article 4

L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

SECTION III: DE LA COMMISSION DES SONDAGES

Article 5

Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.

Article 6

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

Article 7

Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

Article 8

La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Article 9

Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats [*obligation*] de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Article 10

Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

SECTION IV: DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES EN PÉRIODE ÉLECTORALE

Article 11

La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

SECTION V: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral:

Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus;

Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger;

Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus;

Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus;

Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa;

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus;

Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Article 13

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1er.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement: "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "dans les îles Wallis-et-Futuna", "à Saint-Pierre-et-Miquelon", "à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin" et "à Mayotte" au lieu de: "en métropole".

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976

relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

(Version consolidée au 20 novembre 2008)

Article 1

Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande, exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République conformément aux dispositions de la présente loi organique.

SECTION I: LISTES ÉLECTORALES CONSULAIRES

Article 2

Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.

Les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales consulaires.

Article 3

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires.

Article 4

Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur:

1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande;

2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.

Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique.

Article 5

Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs.

Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.

Article 6

Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit:

1° L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant;

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel; leur mandat prend effet au ler janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le bureau de l'assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.

La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.

Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du second alinéa de l'article 5.

NOTA:
Loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 art. 5: les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans leur rédaction issue de la présente loi organique s'appliqueront après le prochain renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Jusqu'à cette date, les commissions administratives composées en application de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 exercent les compétences des commissions prévues à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans sa rédaction issue de la présente loi organique.

Article 7

Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.

Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

La liste électorale consulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.

Un double de la liste est conservé par la commission électorale.

Article 8

La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste. Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République.

Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernière de leur choix d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République.

Article 9

Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, des articles L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29, ainsi que des articles L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.

L'article L. 30 du code électoral est également applicable; le 3° dudit article s'applique à tout Français qui atteint la condition d'âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été arrêtée.

Le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations des commissions administratives et de la commission électorale s'il estime qu'elles sont irrégulières.

L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti et peut présenter ses observations. Il peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l'inscription ou la radiation d'électeurs omis ou indûment inscrits.

La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi.

Le juge du tribunal précité a compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales consulaires après la clôture des délais d'inscription.

Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique.

Ce décret peut fixer des délais de procédure spécifiques pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

SECTION I: CENTRES DE VOTE ET LISTES DE CENTRES (ABROGÉ)

SECTION II: PROPAGANDE

Article 10

Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception:

1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires;

2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

Article 11

Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger.

SECTION III: VOTE

Article 12

Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du Livre Ier, première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sont applicables à l'exception des articles L. 53 et L. 68.

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Article 13

Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

Article 14

Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7.

Article 15

Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

SECTION IV: DISPOSITIONS PÉNALES

[…]

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962

relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
JORF du 7 novembre 1962

[Version consolidée au 22 février 2007]

Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,
Le Peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 6 novembre 1962 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,

Article 1

A modifié les dispositions suivantes:
Modifie Constitution du 4 octobre 1958 - art. 6 (M)

Article 2

A modifié les dispositions suivantes:
Modifie Constitution du 4 octobre 1958 - art. 7 (M)

Article 3

L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.

I. Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code.

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes:

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 52-12.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article.

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

III. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine

juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour l'examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

IV. Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande.

Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 153000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.

Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement.

NOTA:
Loi organique 2007-223 du 21 février 2007 art. 18 III: Les dispositions du a du 1° de l'article 10 relatives à la présentation des candidats à l'élection de la Présidence de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suit l'élection organisée en avril 2007.

Article 4

Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

III.3.2. Informes y Decisiones

Rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2007)
JORF n°235 du 10 octobre 2007

Déclaration du 25 avril 2007 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
JORF n°98 du 26 avril 2007

Décision n° 2007-142 du 3 avril 2007 fixant la durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en vue du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions
JORF n°81 du 5 avril 2007

Décision du 26 avril 2007 relative à la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République
JORF n°99 du 27 avril 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-281 du 24 avril 2007 relative aux conditions de production et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 6 mai 2007**
JORF n°100 du 28 avril 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-282 du 27 avril 2007 fixant la durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République, portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions et fixant les horaires de programmation de ces émissions sur les antennes des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, RFO (radio et télévision), Radio France (France Inter) et RFI**
JORF n°101 du 29 avril 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-115 du 20 mars 2007 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le premier tour de scrutin le 22 avril 2007**
JORF n° 69 du 22 mars 2007

Recommandation n° 2006-7 du 7 novembre 2006 du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle
JORF n° 262 du 11 novembre 2006

Rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l'élection présidentielle

(scrutins des 22 avril et 6 mai 2007)
JORF n°235 du 10 octobre 2007

L'article 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel prévoit que tous les candidats bénéficient,

de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de cette élection. Instituée à l'origine par l'article 10 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, pris pour l'application de cette loi, et aujourd'hui par l'article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, une Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle est chargée de veiller au respect de ces dispositions.

Cette commission de cinq membres, présidée par M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, comprenant deux autres membres de droit, M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, et M. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ainsi que deux membres désignés par les trois membres de droit, M. Jean-Pierre Ancel, président de chambre à la Cour de cassation, et M. Daniel Houri, conseiller maître à la Cour des comptes, en qualité de titulaires et leurs suppléants Mme Claire Favre, présidente de chambre à la Cour de cassation, et M. Jean-Michel de Mourgues, conseiller maître à la Cour des comptes, a, conformément aux règles fixées par le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 8 mars 2001, été installée le 23 février 2007, soit le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du décret du 21 février 2007 portant convocation des électeurs. Elle a désigné M. Gilles Bachelier, conseiller d'Etat, en qualité de rapporteur général et décidé de s'adjoindre neuf rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Par ailleurs, conjointement avec le Conseil constitutionnel, elle a désigné sept rapporteurs qui ont été délégués outre-mer pour suivre localement le déroulement de la campagne et des opérations électorales.

Elle a bénéficié de l'assistance de Mme Bernadette Malgorn, secrétaire générale, représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Adolphe Colrat, directeur des affaires politiques, administratives et financières, représentant du ministre de l'outre-mer, M. Pascal Faure, vice-président du Conseil général des technologies de l'information, représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et Mme Emmanuelle Bensimon, chargée de la sous-direction de la communication audiovisuelle à la direction du développement des médias, représentante du ministre de la culture et de la communication.

Elle a aussi appelé auprès d'elle M. Serge Mucetti, sous-directeur de l'administration des Français à la direction des Français à l'étranger et des Etrangers en France, en qualité de représentant du ministre des affaires étrangères, dont la présence, bien que non prévue par les textes, lui est apparue nécessaire en raison des attributions conférées à la commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 pris pour son application.

La commission a fixé le calendrier prévisionnel de ses travaux dès la séance ayant suivi son installation et l'a complété en fonction des nécessités. Elle s'est ainsi réunie à treize reprises au cours de la période comprise entre le 23 février 2007 et le 6 mai 2007 en vue d'exercer la mission que les textes lui impartissent. Dans le cadre de ses attributions, qu'elles soient de caractère général ou plus ponctuelles, elle s'est attachée, comme par le passé, à faire prévaloir le respect du principe de l'égalité entre les candidats et la loyauté du débat politique.

La commission a guidé son action en prenant appui sur les enseignements tirés de son expérience au cours des campagnes électorales antérieures mais elle a dû également résoudre nombre de questions nouvelles. En effet, la campagne pour l'élection présidentielle des 22 avril et du 6 mai 2007 s'est déroulée dans un cadre renouvelé, par rapport à celui du précédent scrutin des 21 avril et 5 mai 2002, tant en raison des modifications apportées à la réglementation que de la place prise désormais par le recours aux procédés de communication électronique et, notamment, à l'internet.

Le présent rapport expose les relations de la commission avec les autres institutions appelées à intervenir dans la campagne électorale et rend compte de son activité en la regroupant autour de certains thèmes afin de mettre l'accent sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée et qui, si elles ne nécessitent pas toutes une modification des textes, la conduisent à formuler diverses propositions.

PREMIÈRE PARTIE
LES RELATIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS PRÉSENTES DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Quatre institutions sont, outre la Commission nationale de contrôle, appelées à intervenir dans le cadre de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel y occupe une place prééminente mais sont aussi concernées trois autorités administratives indépendantes: le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la commission des sondages et, depuis la modification apportée à la loi organique du 6 novembre 1962 par la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il en résulte nécessairement des questions de répartition des compétences qui, pour n'être pas nouvelles dans la plupart des cas, se retrouvent posées de manière récurrente à chaque élection. Du point de vue de la commission, ces questions ont été maîtrisées de manière très satisfaisante.

1. Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel veille, en vertu de l'article 58 de la Constitution, à la régularité de l'élection et le III de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 le charge de «veiller à la régularité des opérations». Ces dispositions fondent l'exercice par ses soins d'un contrôle général de régularité antérieurement au scrutin.

Pour autant et comme par le passé, la répartition des compétences entre le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de contrôle n'a soulevé aucune difficulté. Les relations informelles et continues entre les deux institutions et la confiance réciproque ont, à l'évidence, contribué à ce constat déjà effectué dans le précédent rapport. Il revient à la commission de prendre les initiatives qui s'imposent pour tout ce qui se rapporte directement à la campagne électorale ou à la propagande électorale (affiches, déclarations, propagande, campagne dans la presse, sites internet...). Le Conseil constitutionnel a laissé à la commission le soin de traiter les questions dont il avait pu être saisi et relatives au déroulement de la campagne électorale. Pour sa part, la commission lui a renvoyé systématiquement toutes les affaires relatives au déroulement des opérations de vote.

Cette répartition des attributions peut être illustrée par l'exemple suivant relatif au recours au vote électronique. La commission a statué sur une demande d'une commission locale de contrôle portant sur le point de savoir si celle-ci pouvait assurer l'envoi aux électeurs d'une commune, en même temps que les professions de foi des candidats, d'un document représentant la planche des candidats du premier tour devant être affichée sur l'écran des machines à voter utilisées pour la première fois dans cette commune. Cette question relative à l'envoi du matériel électoral aux électeurs relevait de sa compétence. Dès lors que cette pratique permet de familiariser les électeurs avec cette technique nouvelle, elle a émis un avis très favorable à cette demande, qu'elle a toutefois subordonnée au respect d'une double exigence. D'une part, la présentation des candidats sur ce document, lequel doit être soumis au préalable à la commission locale de contrôle, ne doit pas porter atteinte à l'égalité entre eux, ce qui implique de respecter l'ordre des candidats résultant du tirage au sort opéré par le Conseil constitutionnel et une présentation identique de chacun d'entre eux. D'autre part, la commission locale doit donner son accord pour procéder à un tel envoi. Pour sa part, le

Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les questions relatives à l'utilisation des machines à voter et qui se rattachaient à l'organisation du vote relevant de sa compétence exclusive.

De même, compte tenu de l'intervention du Conseil constitutionnel, la Commission nationale de contrôle n'a pas eu à rappeler que les maires, responsables de l'organisation de l'élection dans leur commune, devaient veiller au respect de l'interdiction de l'affichage de tout message à caractère politique, quel qu'en soit le support, aux abords des bureaux de vote et que, pendant les heures d'ouverture du scrutin, les présidents des bureaux de vote, chargés de la police de ceux-ci, devaient prendre immédiatement les mesures nécessaires afin que le respect de cette interdiction soit à tout moment garanti.

Par ailleurs, la commission a rendu son avis sur les propositions de décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatives aux émissions de la campagne «officielle» et à la durée de ces émissions prévues, pour chacun des deux tours de scrutin, par l'article 15 du décret du 8 mars 2001, et elle a immédiatement transmis ses observations au Conseil constitutionnel qui, comme cela va de soi compte tenu de la mission générale qui lui est impartie, s'est prononcé en dernier lieu sur l'examen de ces propositions. Au demeurant, force est de constater que les quelques observations de la commission ont toutes été partagées par le Conseil constitutionnel.

2. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel

En vertu de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de fixer les règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 de cette loi sont tenues de produire et de programmer. Il lui appartient aussi d'adresser des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de cette loi. Ces recommandations s'imposent à leurs destinataires. La recommandation n° 2006-7 du 7 novembre 2006 et le guide d'application qui y était annexé ont fixé les règles applicables pour l'élection présidentielle de 2007. L'article 15 du décret du 8 mars 2001 précise, pour l'élection présidentielle, les modalités d'exercice de cette mission.

Pour autant, la Commission nationale de contrôle se doit de remplir à son niveau son rôle de garant du principe de l'égalité de traitement entre les candidats et l'article 13 du décret du 8 mars 2001 lui commanderait d'intervenir, le cas échéant, auprès de cette autorité comme de toute autre autorité compétente pour que soient prises les mesures susceptibles d'assurer cette égalité. Elle a donc souhaité pouvoir être informée régulièrement des activités du CSA. Elle a perpétué l'habitude, prise depuis le scrutin de 1995, de concrétiser la collaboration étroite entre les deux institutions par l'invitation du président du CSA, ou de son représentant, à participer à la première partie de chacune des séances de la commission consacrée à l'examen des questions ayant trait à la campagne télévisée et radiodiffusée.

Comme en 1995 et en 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a répondu volontiers à cette invitation. Un des membres du CSA chargé du dossier de l'élection présidentielle, le directeur général ou le directeur général adjoint des services du conseil, a ainsi apporté aux membres de la commission toutes les informations utiles sur le déroulement de cette campagne et a répondu à leurs demandes d'éclaircissements.

Pour sa part, la commission s'est prononcée notamment sur la question que le CSA lui a transmise de la possibilité pour les chaînes de télévision ou de radiodiffusion de mettre à la disposition du public sur leur site internet les émissions de la «campagne officielle». Elle a estimé que, dans la mesure où le code de la propriété intellectuelle ne ferait pas obstacle à

une telle mise à disposition, celle-ci devra, afin de garantir l'effectivité du principe d'égalité entre tous les candidats, respecter l'ensemble des règles suivantes:

- les émissions ne pourront être mises sur le site internet qu'après leur première diffusion sur la chaîne concernée. Chaque émission pourra l'être dès cette diffusion;
- toutes les émissions de tous les candidats devront être mises à la disposition du public;
- à chaque tour de scrutin, toutes les émissions de tous les candidats se rapportant à ce tour de scrutin devront, pour l'ensemble du territoire national, être maintenues sur le site jusqu'à la date de clôture de la campagne électorale jusqu'au vendredi 20 avril à minuit pour le premier tour et jusqu'au vendredi 4 mai à minuit pour le second tour. A partir de l'une et l'autre de ces dates, les chaînes devront retirer au même moment l'ensemble de ces émissions.

La commission entend souligner la grande utilité de ces concours réciproques et souhaite qu'ils puissent être réitérés à chaque élection présidentielle sans qu'il soit nécessaire d'en formaliser le principe dans un texte.

3. La Commission des sondages

La commission des sondages dispose, en vertu de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour son application, d'une compétence bien délimitée de sorte qu'en principe les attributions respectives de cette commission et de la Commission nationale de contrôle ne se recouvrent pas.

Mais la commission a notamment partagé avec la commission des sondages une préoccupation commune tirée de l'existence, pour la première fois en 2007, de dates de scrutin différentes, d'une part, dans certains départements et certaines collectivités d'outre-mer et, d'autre part, dans les autres parties du territoire national. Les questions posées par cette réforme, qui sont examinées dans la seconde partie du rapport, portaient notamment sur l'interdiction, prévue par l'article 11 de cette loi, de la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage réalisé à la sortie des urnes et rejoignaient, sur le plan des principes applicables, celles relatives à la diffusion de résultats partiels ou d'estimation de résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Le président de la commission des sondages ou le secrétaire général de cette autorité administrative indépendante a assisté à deux réunions de la commission à l'issue desquelles il a été décidé de procéder à la publication de deux communiqués communs.

4. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

La loi organique du 5 avril 2006 a modifié les dispositions de la loi du 6 novembre 1962 et confie désormais à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le soin d'approuver, de réformer ou de rejeter les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle. Ses décisions font l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel.

Là encore, les attributions respectives de cette commission et de la Commission nationale de contrôle ne se recouvrent pas. Ainsi il n'entre pas dans les compétences de la commission de prendre position sur le point de savoir si telle ou telle dépense exposée par un candidat doit être inscrite ou non au compte de campagne de ce candidat.

Néanmoins, les relations entre ces deux organismes sont nécessaires. Le président de cette autorité administrative indépendante a assisté à la plupart des réunions de la Commission nationale de contrôle. Celle-ci doit, en vertu de l'article 13 du décret du 8 mars 2001,

transmettre d'office à cette commission les irrégularités portées à sa connaissance et susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats. Compte tenu de la position qu'elle a adoptée sur la propagande à l'étranger des candidats à l'élection présidentielle, d'une part, ou des faits portés à sa connaissance, d'autre part, elle n'a pas eu à mettre en oeuvre ces dispositions.

Au cours de ses séances, la commission a débattu de l'obligation faite aux candidats par l'article R. 39 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-76 du 26 janvier 2007, de recourir au papier de qualité écologique pour l'impression de leurs professions de foi. Elle a avisé cette autorité de sa décision de dispenser M. Gérard Schivardi de cette obligation dès lors qu'il avait pu justifier être dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés à cet article.

SECONDE PARTIE
L'EXERCICE PAR LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DE SES ATTRIBUTIONS

1. Les attributions de la Commission nationale de contrôle

Le décret du 8 mars 2001, qui a repris pour l'essentiel les dispositions du décret du 14 mars 1964, confère à la commission certaines prérogatives particulières, énoncées aux articles 17 à 20 et destinées à assurer le respect des dispositions en vigueur en matière d'affichage et d'envoi de déclarations («professions de foi») ainsi que, pour la première fois en 2007, d'enregistrement sonore.

Le décret lui confie aussi le soin de veiller, de manière générale, à ce que les candidats bénéficient des mêmes facilités de la part de l'Etat pour la campagne électorale et lui confère ainsi un pouvoir général d'intervention pour assurer l'égalité entre les candidats. A ce titre, elle est attentive aux conditions dans lesquelles se déroulent les réunions publiques, la campagne par voie de presse et la campagne audiovisuelle (art. 14 et 15) et il lui revient également de s'assurer de l'absence de toute diffusion de résultats partiels ou d'estimations de résultats avant la clôture du scrutin.

La composition même de la Commission nationale de contrôle garantit son impartialité et, en conséquence, sa crédibilité à l'égard des candidats eux-mêmes et de tous ceux qui interviennent dans le débat public: les organes de presse, les responsables des sites internet, les instituts de sondages, mais aussi les pouvoirs publics en ce qu'ils sont chargés d'organiser la campagne et le scrutin. Elle ne dispose pas de pouvoirs de sanction, mais elle exerce une magistrature morale pour faire respecter les dispositions particulières prévues par la réglementation et le principe d'égalité. Celle-ci est d'ailleurs généralement parfaitement comprise. De ce point de vue, les relations avec les mandataires désignés par les candidats auprès d'elle n'ont pas soulevé dans l'ensemble de difficultés. Ces mandataires ont pu, à tout moment, recueillir auprès de la commission l'information qu'ils souhaitaient ou le conseil qu'ils sollicitaient sur tel ou tel aspect de la campagne électorale ou sur la possibilité, au regard de la réglementation, de prendre certaines initiatives.

Néanmoins, il convient de relever que, par le passé, ses interventions n'avaient jamais été contestées ni par les candidats à l'élection présidentielle, ni par les émetteurs d'émissions radiophoniques ou audiovisuelles, ni par les électeurs. Cette année, une décision de la commission prise au titre de ses prérogatives particulières a été contestée tant devant le Conseil d'Etat que devant le Conseil constitutionnel et deux de ses communiqués en date des 26 mars et 18 avril 2007 ont également fait l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat.

A cet égard, la commission estime qu'il serait opportun que, pour des raisons évidentes de lisibilité de la norme de droit, les textes consacrent explicitement le pouvoir d'homologation de

l'affiche, de la profession de foi et de l'enregistrement sonore qu'ils lui reconnaissent dans l'exercice de ses prérogatives particulières. Les textes devraient également déterminer les modalités d'exercice de ce pouvoir en mentionnant les motifs pour lesquels l'homologation peut être refusée et tenant notamment à la présence de tout élément qui serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ils devraient enfin organiser la procédure applicable au cas où elle envisagerait de refuser l'homologation.

2. L'homologation des moyens de propagande

Les articles 17 à 20 du décret du 8 mars 2001 confient à la commission la mission traditionnelle d'homologuer les affiches et les déclarations des candidats. Deux attributions nouvelles lui ont été confiées par les décrets n° 2006-459 du 21 avril 2006 et n° 2007-136 du 1er février 2007, portant modification de ce décret, et sont relatives respectivement à l'homologation de l'enregistrement sonore et à l'impossibilité de recourir au papier de qualité écologique.

2.1. Les affiches et les déclarations des candidats

La commission a procédé à la vérification de la conformité des affiches énonçant les déclarations du candidat. Le texte de cette affiche doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République (art. 17 du décret de 2001) et il en va de même de la déclaration adressée aux électeurs (art. 18). Les modèles homologués sont ensuite envoyés à chaque préfet ou représentant de l'Etat par la commission, qui reçoit par ailleurs des candidats les affiches et déclarations qu'ils ont fait imprimer. Après vérification par le représentant de l'Etat de la conformité de ces dernières au modèle homologué, les commissions locales de contrôle, placées sous l'autorité de la commission, assurent l'envoi des imprimés aux électeurs. Chacune de ces phases appelle des observations de même que le calendrier de l'ensemble des opérations.

2.1.1. L'homologation des affiches et des déclarations

Le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 rend applicables à l'élection présidentielle les prescriptions de droit commun prévues par le code électoral et relatives à la propagande électorale (art. L. 48 à L. 52-2). Le code électoral et le décret du 8 mars 2001, qui contient des dispositions spécifiques, fixent les règles applicables aux affiches et aux déclarations des candidats.

La mise en oeuvre de ces dispositions appelle cinq observations, étant précisé qu'en réponse aux questions dont elle a été saisie, la commission a indiqué que les candidats pouvaient faire mention de leur site internet sur leur affiche ou leur déclaration

En premier lieu, aucune affiche ou déclaration n'a été en infraction aux règles relatives aux dimensions, prévues de manière très précise, respectivement par l'article 17 du décret susvisé et par l'article R. 29 du code électoral. La commission a toléré des écarts inférieurs à 5 millimètres, tant dans les modèles qui lui étaient soumis que lors de leur distribution au plan local, lorsque son attention a été appelée sur l'existence de dimensions différentes à celles homologuées. Il s'agissait là non d'ignorances des prescriptions en vigueur, mais d'approximations inévitables du travail d'impression. Par ailleurs, elle s'est assurée que les candidats avaient bien respecté les dispositions relatives au grammage de la circulaire pouvant être adressée aux électeurs, tel qu'il est défini par l'article R. 29 du code électoral.

En deuxième lieu, l'article R. 27 du code électoral prohibe l'emploi d'une «combinaison des trois couleurs: bleu, blanc et rouge». Cette interdiction traditionnelle a été rappelée à un candidat qui avait manifesté l'intention d'être photographié muni de son écharpe tricolore.

Mais la commission a dû prendre position sur une question nouvelle. En effet, un décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 modifie cette disposition et déroge à cette règle dans la seule hypothèse où un candidat reproduit sur une affiche ou sur une circulaire, ayant un but ou un caractère électoral, l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique. Cette disposition nouvelle a soulevé une double difficulté pour sa mise en oeuvre.

D'une part, la commission a relevé que l'emblème, placé sur l'affiche et la profession de foi de M. Jean-Marie Le Pen, comprenait une combinaison des trois couleurs nationales alors qu'en l'état des informations portées à sa connaissance cet emblème ne correspondait pas à la reproduction de celui d'un parti ou d'un groupement politique. A cet égard, elle a précisé que l'association de financement électoral d'un candidat ne saurait en droit être regardée comme ayant le caractère d'un parti ou d'un groupement politique. D'autre part, elle a relevé qu'eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 27 du code électoral l'utilisation de cette dérogation ne devait pas, en pratique, avoir pour effet de priver de toute portée la règle générale d'interdiction d'utilisation des trois couleurs. Elle a donc estimé que la reproduction de l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique devait être de taille modeste. Compte tenu des justifications qui lui ont ultérieurement été transmises, elle a finalement homologué le matériel électoral de ce candidat.

La commission estime que l'adjonction, apportée à l'article R. 27 du code électoral par le décret du 11 octobre 2006, soulève des difficultés sérieuses liées notamment à la définition de parti ou de groupement politique et est source de contentieux. Elle recommande que cette disposition cesse d'être applicable à l'élection présidentielle.

En troisième lieu, les mentions portées sur la déclaration des candidats ont donné lieu à plusieurs remarques. D'une part, la commission a demandé à un candidat qu'il justifie de l'autorisation délivrée par deux personnalités afin que soient reproduits des extraits de leurs propos sur sa déclaration. D'autre part, elle a avisé un autre candidat que la pré-maquette de sa déclaration qui lui avait été adressée ne pouvait faire mention nommément d'un chef d'entreprise, totalement étranger à la polémique électorale, et faisant référence à son patrimoine. Enfin, et surtout, elle a estimé qu'elle ne pouvait homologuer l'affiche et la déclaration de M. Gérard Schivardi. En effet, elle a estimé que la mention «candidat des maires», qui révélait une appropriation par le candidat d'un soutien de la généralité des maires des communes de France, était de nature à induire en erreur les électeurs sur le soutien dont il bénéficiait effectivement à ce titre.

La suspension de l'exécution de cette décision a été demandée au juge des référés du Conseil d'Etat, dans le cadre d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif que la commission ne pouvait refuser d'homologuer que les documents non conformes aux prescriptions des articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 ainsi que des articles R. 27 et R. 29 du code électoral et qu'elle avait excédé ses pouvoirs en examinant le contenu de la déclaration en cause. Par ordonnance du 2 avril 2007, le juge des référés du Conseil d'Etat a reconnu la juridiction administrative compétente et a rejeté la requête aux motifs qu'eu égard aux caractéristiques de l'élection présidentielle et aux garanties qui résultent de la composition de la Commission nationale de contrôle les dispositions de l'article 13 du décret du 8 mars 2001 ne sauraient être regardées comme limitant le contrôle qu'elle est chargée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage des documents soumis à son examen, en excluant tout contrôle des éléments de leur contenu, notamment des mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat et qui seraient matériellement inexacts et de nature à altérer la sincérité du scrutin.

En quatrième lieu, la commission a été confrontée à une difficulté tenant à la mention de la date du scrutin sur l'affiche et sur la déclaration adressée aux électeurs dès lors que ces

documents doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de la République en vertu des articles 17 et 18 du décret de 2001, alors que les dates de scrutin étaient, selon les parties du territoire, fixées, pour le premier tour, au samedi 21 ou au dimanche 22 avril et, pour le second tour, au samedi 5 ou au dimanche 6 mai (cf. ci-après point 3.5). Elle a estimé que, si la référence au premier ou au second tour de scrutin ne faisait pas problème, elle ne pouvait, à la date où elle en a été saisie, accéder au souhait d'un candidat de mentionner sur ses documents des dates différentes en fonction du lieu où se déroulaient les opérations électorales. Une telle faculté aurait dû être offerte à tous les candidats afin de respecter le principe d'égalité. Au surplus, elle a considéré que la mention de la date du scrutin correspondant au dimanche n'était pas manifestement susceptible de créer une confusion pour les électeurs votant le samedi.

Cependant, la commission recommande qu'il soit permis de déroger à la règle de l'uniformité, sur l'ensemble du territoire de la République, de l'affiche et de la déclaration du candidat en autorisant l'inscription de dates différentes du scrutin selon les lieux où sont diffusés ces documents.

En cinquième et dernier lieu, la commission a vérifié la conformité des déclarations et des affiches en allemand et en tahitien qui lui ont été présentées avec les mêmes textes en français. Elle l'a fait aisément dans le premier cas en recourant à l'aide d'un traducteur assermenté. Lors du premier tour, neuf candidats ont utilisé la possibilité d'envoyer une déclaration en allemand aux électeurs, deux candidats ayant simultanément eu recours à une affiche en allemand. Les deux candidats du second tour ont fait parvenir aux électeurs une déclaration dans cette même langue. Dans le second cas, faute de pouvoir trouver en métropole un traducteur présentant les mêmes garanties, elle a recouru à un expert en Polynésie française par l'intermédiaire du président du tribunal administratif de Papeete et avec l'aide très précieuse de la commission locale de contrôle. Lors du premier tour, deux candidats ont eu simultanément recours à l'envoi d'une affiche et d'une déclaration, et deux autres candidats, à l'envoi d'une déclaration. Au second tour, un seul candidat a eu recours à une affiche en tahitien et les deux candidats ont fait parvenir aux électeurs une déclaration dans cette même langue.

2.1.2. La distribution des affiches et des déclarations

Cette question appelle les remarques suivantes:

En premier lieu, les plis contenant les affiches et les professions de foi homologuées par la commission ont été remis sans délai à la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour les Français à l'étranger. Ils ont été remis par voie postale à la totalité des préfectures de la métropole avant la date limite fixée par le mémento du candidat à l'élection présidentielle pour la livraison des documents électoraux que chacun des candidats a fait imprimer. Pour les départements et collectivités d'outre-mer, 50 % des plis étaient arrivés à destination à cette date et l'autre moitié est parvenue dans des délais compatibles avec la mise sous pli des documents électoraux.

L'expédition par voie postale n'est plus justifiée compte tenu des procédés de transmission électronique aujourd'hui disponibles et des garanties qu'apporte la signature électronique. Pour le second tour de scrutin et avec l'accord des deux candidats, la commission a transmis par voie électronique leur affiche et leur déclaration. Le gain de temps et les économies budgétaires susceptibles d'être ainsi réalisées commandent de généraliser ce procédé et de le rendre effectif dès le premier tour de scrutin.

A cette fin, la commission propose de modifier la réglementation afin que l'affiche et la déclaration des candidats lui soient adressées également sous forme électronique.

En deuxième lieu, la livraison par les candidats des professions de foi s'est effectuée globalement dans les délais prévus par un arrêté du représentant de l'Etat. Le mémento à l'usage des candidats précisait que la livraison des imprimés devait être faite auprès des représentants de l'Etat au plus tard, pour le premier tour, le mardi 10 avril, à 12 heures et, pour le second tour, le lundi 30 avril, à 12 heures.

La Commission nationale de contrôle a été saisie par plusieurs commissions locales de contrôle des difficultés susceptibles de se poser en cas de livraison tardive des imprimés des candidats. Ces commissions mettaient l'accent sur la nécessité d'effectuer la mise sous un même pli des professions de foi de l'ensemble des candidats et des bulletins de vote dans un délai permettant de garantir sa distribution effective aux électeurs avant le scrutin.

Le dernier alinéa de l'article 18 du décret du 8 mars 2001, issu du décret du 21 avril 2006, dispose que les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat. Par ces dispositions, le pouvoir réglementaire a ainsi enserré dans un calendrier précis la date limite de remise de ces documents.

Afin de garantir un traitement uniforme, sur l'ensemble du territoire de la République, la Commission nationale de contrôle a décidé de retenir les règles suivantes. D'une part, les imprimés de chaque candidat devaient être livrés avant l'expiration de la date et de l'heure fixées par l'arrêté du représentant de l'Etat. Il appartenait à chaque commission locale de rappeler cette exigence aux représentants départementaux des candidats. En effet, le respect des délais par tous les candidats est le garant de la bonne fin, dans leur intérêt même, de l'opération de mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote ainsi que de la distribution des enveloppes aux électeurs. D'autre part, et en application des termes mêmes de l'article 18 du décret de 2001, si elles étaient saisies d'imprimés remis postérieurement à cette heure limite, les commissions locales de contrôle conservaient naturellement la faculté de joindre la propagande arrivée tardivement à celle des autres candidats et d'en assurer ainsi l'envoi. Enfin et en tout état de cause, si une commission locale de contrôle envisageait de ne pas accepter l'envoi de la profession de foi d'un candidat en raison d'une réception tardive au regard des prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat, il lui appartenait, avant toute décision, d'en référer immédiatement à la Commission nationale de contrôle. Celle-ci aurait alors apprécié, au vu des éléments circonstanciés portés à sa connaissance, si, compte tenu des délais compatibles avec la possibilité d'assurer une distribution effective des plis, il y avait lieu ou non, pour la commission locale, de procéder à cet envoi.

Le Conseil constitutionnel ainsi que tous les mandataires des candidats et les représentants de l'Etat avaient été avisés de cette position dont la mise en oeuvre n'a pas soulevé dans l'ensemble de difficultés particulières. Aucune commission locale de contrôle n'a refusé de distribuer les déclarations arrivées peu après l'expiration de l'heure fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat. La commission n'a pas eu à prendre position sur des cas de dépôt trop tardif.

En troisième et dernier lieu et d'une part, il a été porté à la connaissance de la commission l'existence de divergences, signalées par certaines commissions locales de contrôle, entre le modèle homologué et les imprimés livrés par certains candidats. Cette pratique, pour limitée qu'elle soit, révèle, de leur part, un refus de respecter l'autorité des décisions d'homologation, ce qui est nouveau par rapport à ce qui s'était passé lors des élections présidentielles de 1995 et 2002 et est d'autant plus regrettable que la commission a examiné les déclarations des candidats selon un calendrier répondant à leurs demandes. Toutefois, compte tenu de la nature ou de l'objet de ces différences ainsi que de leur portée très limitée qui n'affectait pas le contenu des professions de foi, le choix d'autoriser leur distribution a été validé.

D'autre part, la commission a été saisie par certains candidats de plusieurs réclamations relatives aux imperfections relevées dans la mise sous pli. Des plis sont parvenus incomplets au domicile de certains électeurs. Ces imperfections sont demeurées extrêmement limitées alors que plus de 45 millions de plis devaient être distribués et elles sont d'origine accidentelle. A chaque fois que cela a été nécessaire, la commission a, en liaison avec l'administration locale et la commission locale de contrôle, pris les mesures pour que soit compensé au mieux le préjudice résultant de ces envois incomplets (dépôt en mairie des déclarations du candidat et information des électeurs par communiqué publié par la presse écrite et diffusé sur les antennes de la télévision régionale).

2.1.3. L'apposition des affiches sur les panneaux électoraux

Contrairement à ce qui s'est passé en 2002, il n'incombait pas aux commissions locales de contrôle de faire réaliser l'apposition des affiches des candidats sur les emplacements réservés à cet effet dans les communes. En vertu de l'article 17 du décret du 8 mars 2001, modifié par le décret du 21 avril 2006, les affiches sont apposées par les soins de chaque candidat ou de ses représentants. Il lui appartient également de remplacer, le cas échéant, les affiches détériorées.

L'application de ces nouvelles dispositions a donné lieu à une difficulté tenant à une grève des salariés de la société à laquelle tous les candidats avaient demandé d'apposer leurs affiches sur les panneaux électoraux. Toutefois, le litige a pu être résolu à temps.

2.1.4. Le calendrier des opérations relatives aux affiches et aux déclarations

La réglementation (articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001) a fixé le délai du dépôt des affiches et des déclarations par les candidats à la commission au plus tard le dimanche 8 avril 2007 à 20 heures pour le premier tour, et le samedi 28 avril 2007 à 20 heures. Eu égard à la date limite rappelée ci-dessus de dépôt au niveau local des documents imprimés (soit respectivement les mardi 10 avril et lundi 30 avril à 12 heures), il est clair que, pour que ces délais soient respectés, les candidats, et surtout ceux qui ont recours à des imprimeurs ayant une capacité limitée, ont pris le risque de donner l'ordre de tirage de l'affiche et de la déclaration alors que ces documents n'étaient pas encore homologués par la commission. Les questions examinées au niveau de la pré-maquette entre le rapporteur désigné par la commission et le mandataire du candidat ne correspondent qu'à une phrase préparatoire et les réponses apportées ne sauraient préjuger de la décision finale. M. Schivardi avait ainsi donné l'ordre de tirage de l'affiche et de la déclaration qui n'ont pas été homologuées. Les nouveaux documents présentés ont reçu une telle homologation mais les documents déjà imprimés ont dû être détruits.

Ces délais apparaissent ainsi beaucoup trop contraignants tant pour les candidats que pour les services chargés au plan local de la mise sous pli de la propagande électorale. Un délai plus approprié doit être fixé au moins lorsque l'élection intervient à son échéance normale. Ce délai pourrait, dans cette hypothèse, être doublé pour le premier tour de scrutin. Par ailleurs, la date limite de dépôt auprès de la commission de l'affiche et de la déclaration devrait correspondre à un jour ouvrable.

Ainsi, la commission considère qu'il serait souhaitable de distinguer dans le calendrier de l'élection présidentielle la situation correspondant à l'échéance normale et celle résultant d'une élection anticipée. Elle recommande, en présence d'une élection organisée à son échéance normale, de fixer la date limite de dépôt auprès d'elle des modèles des affiches et des déclarations non plus au deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin ou au deuxième samedi précédant le second tour mais au quatrième jeudi précédant le premier tour

de scrutin et au deuxième vendredi précédant le second tour. Cette recommandation implique d'avancer du troisième au cinquième vendredi précédant le scrutin la date limite de publication au Journal officiel de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel.

2.2. L'enregistrement sonore

L'article 18 du décret du 8 mars 2001, dans sa rédaction issue du décret du 21 avril 2006, dispose que le texte sur feuillet double de ses déclarations que chaque candidat peut faire envoyer aux électeurs doit être déposé dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'affiche, sous la forme d'un texte imprimé et d'un enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. En vertu du dernier alinéa de ce même article, il incombait à celle-ci de vérifier la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé. Ces éléments ont été mis en ligne sous forme textuelle et sonore sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur. Il s'agit du site de la commission (cnccep.fr) ouvert le 23 février 2007. Ces éléments ont été mis en ligne le 9 avril 2007, jour de l'ouverture de la «campagne officielle». La déclaration devait être déposée sous la forme d'un fichier au format PDF signé et verrouillé et d'un enregistrement sonore au format MP3.

Cette disposition nouvelle, prise notamment dans l'intérêt des personnes mal voyantes mais aussi des Français à l'étranger, nécessitait de dégager des lignes directrices afin de mettre les candidats en mesure de préparer leur enregistrement. La commission a arrêté le 9 mars 2007 les dispositions suivantes qui ont été portées à la connaissance des candidats. Elles n'ont pas suscité d'observations de leur part.

Au préalable, si, en dépit des démarches réitérées de la commission, aucun enregistrement sonore n'avait été déposé par un candidat, la mention suivante aurait été portée sur le site internet de la commission sous le lien «Ecouter» propre à ce candidat: «Contrairement aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, et en dépit des invitations de la Commission nationale de contrôle, le candidat n'a pas déposé un enregistrement sonore de sa déclaration» et le Conseil constitutionnel en aurait été avisé. Tous les candidats ont adressé, parfois avec retard, leur enregistrement sonore à la commission, qui a pu les homologuer et les mettre en temps voulu sur son site internet. Cette règle n'a donc pas reçu application.

Les lignes directrices sont les suivantes. En premier lieu, l'enregistrement sonore doit porter sur l'intégralité du texte imprimé. La commission a décidé de ne pas regarder comme un texte imprimé au sens de l'article 18 du décret de 2001 les photographies, les graphiques, les logos ou les emblèmes d'un parti ou groupement politique. En deuxième lieu, il appartenait au candidat de procéder personnellement à l'enregistrement sonore de sa déclaration. Toutefois, il lui était loisible de recourir en tout ou partie à un ou plusieurs tiers à la condition que la lecture de la déclaration par ces intervenants soit effectuée exclusivement par des voix non identifiables par le public. Cette faculté a été utilisée par plusieurs candidats. En troisième lieu, le candidat pouvait, s'il le souhaitait, accompagner l'enregistrement sonore de sa déclaration d'un fond musical à l'exclusion des hymnes nationaux et de l'hymne européen ainsi que, le cas échéant, des «hymnes régionaux». Enfin, si le candidat faisait usage de la faculté de faire traduire en allemand et/ou en tahitien ses déclarations, ces traductions étant homologuées par la Commission nationale de contrôle, il lui appartenait également de procéder à un enregistrement sonore de sa déclaration dans ces langues. Le candidat pouvait procéder lui-même à cet enregistrement ou avoir recours en tout ou partie à un tiers.

La commission n'a pas été saisie par les candidats de difficultés de mise en oeuvre de ces dispositions. Elle a seulement demandé que toute mention relative à la traduction en langue des signes française sur des fichiers vidéo soit retirée d'un document édité par un organisme

afin de favoriser l'accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées. En effet, les dispositions applicables au site internet de la commission ne prévoyaient pas que la lecture des professions de foi de l'ensemble des candidats serait accompagnée d'une telle traduction. Néanmoins une telle possibilité serait opportune.

La commission recommande de prévoir la lecture, sur le site internet dédié à l'élection présidentielle, des professions de foi de l'ensemble des candidats en accompagnant sur des fichiers vidéo leurs déclarations d'une traduction en langue des signes française.

2.3. L'utilisation de papier de qualité écologique

L'article 20 du décret du 8 mars 2001, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-136 du 1er février 2007, prévoit que l'Etat prend directement en charge notamment le coût du papier et l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18. Toutefois, cette prise en charge est subordonnée à la condition que les déclarations soient produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral, dont la rédaction résulte sur ce point du décret n° 2007-76 du 23 janvier 2007. Pour regrettable qu'elle soit, la publication tardive de ces deux décrets ne semble pas avoir soulevé de difficultés particulières, les imprimeurs ayant été avisés de cette exigence dès le mois d'octobre 2006. Les candidats ont justifié avoir respecté ces dispositions en tout ou, pour l'un d'eux, en partie.

Le dernier alinéa de cet article 20 a prévu que, lorsqu'un candidat s'était trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères, la commission pouvait décider que les dispositions précitées ne s'appliqueraient pas à ce candidat. Elle a été saisie par M. Schivardi d'une demande en ce sens. En effet, compte tenu de l'invalidation par la commission de sa profession de foi, les documents qu'il avait déjà imprimés à partir de papier de qualité écologique ne pouvaient être utilisés et le candidat a fait état de ses difficultés à s'approvisionner dans les délais requis dans un papier de cette qualité pour procéder à l'impression de la déclaration homologuée. La preuve des démarches effectuées auprès des papetiers et des imprimeurs ayant été apportée et plusieurs justificatifs relatifs à l'impossibilité d'un tel approvisionnement et émanant d'entreprises différentes lui ayant été fourni, la commission a décidé d'accepter cette demande et, ainsi qu'il a été indiqué, en a avisé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

3. Le déroulement de la campagne électorale

La Commission nationale de contrôle souhaite présenter plusieurs observations au titre successivement de l'examen de la question de la durée de la campagne, puis du déroulement de celle-ci dans la presse, dans l'audiovisuel, sur internet, dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger.

3.1. La durée de la campagne électorale

L'article 10 du décret du 8 mars 2001, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006, prévoit que la campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin (soit en 2007 le 9 avril) et prend fin la veille du scrutin à zéro heure (soit le samedi 21 avril à zéro heure). En cas de second tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter et prend fin la veille du scrutin à zéro heure (soit en 2007 le samedi 5 mai à zéro heure).

L'article L. 49 du code électoral, applicable à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, interdit la distribution des bulletins, des circulaires et autres

documents le jour du scrutin et prévoit qu'il est interdit à partir de la veille du scrutin à zéro heure de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Il résulte de ces dispositions que la distribution de tracts, la tenue de réunions publiques ou des manifestations publiques diverses sont autorisées la veille du scrutin. Cet article a été rendu applicable à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962.

L'articulation de ces dispositions et de l'article 10 du décret met en lumière un défaut de cohérence de la réglementation applicable. Le Conseil constitutionnel et la commission ont interprété l'article 10 du décret comme ne visant pas seulement la clôture de la campagne audio-visuelle mais comme interdisant la veille et le jour du scrutin toute réunion électorale, toute distribution de tracts, toute publication par un quotidien d'un entretien avec un candidat, toute modification des sites internet des candidats. En effet et ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé (13), le législateur a, par le V de l'article 3 de la loi organique de 1962 (14) renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des dispositions de cette loi, conféré au Gouvernement les pouvoirs les plus larges pour prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour en assurer l'application. Il s'agit donc d'une disposition spéciale qui s'explique notamment par le fait que, pour l'élection présidentielle, aucune campagne, sous quelque forme que ce soit, n'a lieu traditionnellement la veille du scrutin. La veille de chaque tour de scrutin est une «journée blanche». La commission estime que cette spécificité doit être maintenue. Au surplus, une lecture différente de la réglementation aboutirait à ce paradoxe qu'une partie de l'outre-mer votant le samedi commencerait à exprimer son suffrage, alors que la distribution de tracts, la publication d'entretiens dans la presse, la tenue de réunions publiques ou de manifestations publiques diverses pourraient se poursuivre en métropole.

La commission relève que l'interdiction résultant de l'application de l'article 10 du décret n'a pas toujours été respectée lors de la dernière élection. Elle a ainsi été informée de la distribution de tracts ou de réunions la veille du scrutin. De même, elle a dû intervenir auprès du mandataire d'un candidat afin de rappeler cette interdiction alors que l'interview que ce candidat avait donné à un quotidien devait être publiée par ce journal la veille du second tour et alors même que le même journal avait publié la veille l'interview de son concurrent. Elle est aussi intervenue auprès du mandataire de celui-ci compte tenu du non-respect de cette exigence par un journal publié dans une collectivité outre-mer.

La commission recommande de mettre en cohérence l'état du droit par une modification appropriée de la loi organique du 6 novembre 1962 et de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 pris pour son application (15) afin que soit clairement explicitée l'interdiction, pour tout candidat à l'élection présidentielle, de faire campagne, sous quelque forme que ce soit, après la date de clôture de celle-ci fixée par voie réglementaire. Il conviendrait aussi d'assortir d'une sanction toute infraction à cette interdiction.

3.2. La campagne électorale dans la presse

La commission n'avait pas à connaître des questions relatives aux prises de position de la presse au cours de la campagne électorale. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans la campagne électorale. Ce principe est tempéré par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relative au droit de réponse (art. 13) et, bien entendu, celles définissant le délit de diffamation (art. 29).

Si la commission avait dû intervenir en 2002 pour faire respecter, dans les journaux, la prohibition, issue de l'article L. 52-1 du code électoral, de l'utilisation à des fins de propagande

électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, elle n'a pas identifié en 2007 de manquements à cette réglementation et les commissions locales de contrôle n'ont pas non plus signalé de faits requérant son intervention.

3.3. La campagne électorale dans l'audiovisuel

La campagne électorale dans l'audiovisuel présente deux aspects distincts: d'une part, les émissions de la «campagne officielle» et, d'autre part, le traitement de la campagne des différents candidats par les moyens de communication audiovisuelle.

3.3.1. Les émissions de la «campagne officielle»

La «campagne officielle», prévue par l'article 15 du décret du 8 mars 2001, permet aux candidats de disposer, sur les antennes des chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision, d'une série identique d'émissions, pendant lesquelles ils peuvent en toute liberté faire connaître leurs points de vue et leurs propositions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en assure à la fois l'encadrement réglementaire pour chaque tour de l'élection et le contrôle. La Commission nationale de contrôle a, comme il a déjà été indiqué, été consultée sur les décisions du CSA relatives respectivement aux conditions de production et aux horaires de programmation des émissions, à la durée globale accordée à chacun des candidats et à la répartition des émissions sur chaque chaîne, enfin aux dates et aux ordres de passage de ces dernières.

Le dispositif retenu, fondé sur un strict respect de l'égalité entre les candidats, est tout à fait pertinent et il a été pleinement respecté. Il n'appelle pas d'observations particulières

3.3.2. Le traitement de la campagne par les moyens de communication audiovisuelle

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est là encore investi de responsabilités particulières. Sa recommandation du 7 novembre 2006 a opéré une distinction entre trois périodes:

- une période préliminaire, allant du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, pendant laquelle les services de radio et de télévision devaient appliquer un principe d'équité des temps de parole et d'antenne des candidats déclarés ou présumés;
- une période intermédiaire, allant de la publication de cette liste, soit le 20 mars 2007, jusqu'à la veille de l'ouverture de la «campagne officielle» soit jusqu'au dimanche 8 avril, pendant laquelle ces services devaient appliquer un principe d'égalité pour le temps de parole des candidats figurant sur cette liste et d'équité pour leur temps d'antenne;
- et enfin la période correspondant à la «campagne officielle» commençant le lundi 9 avril 2007, pendant laquelle ils devaient appliquer, dans des conditions de programmation comparable, un principe d'égalité pour le temps de parole et pour le temps d'antenne des candidats.

La période intermédiaire constituait une innovation par rapport à l'élection présidentielle de 2002. Sa création a été motivée principalement par l'avancement de la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel afin de fixer les règles applicables à ces candidats avant le début de la «campagne officielle».

Les enseignements à tirer de ce découpage en trois périodes et des relevés effectués relèvent, en premier chef, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois et pour sa part, la commission, qui n'a été saisie directement d'aucune plainte présentée par un candidat, estime qu'il convient de distinguer la période antérieure au premier tour et la période postérieure à celui-ci et elle entend faire les remarques suivantes.

Pour cette seconde période, où seuls deux candidats s'affrontent pour le second tour de scrutin, la règle de la stricte égalité de traitement, que ce soit pour le temps d'antenne ou le temps de parole, est parfaitement justifiée et a été respectée. Elle n'appelle pas d'observation.

En revanche, la commission s'interroge sur la pertinence du dispositif retenu pendant la période ayant précédé le premier tour.

La période préliminaire est, dans son principe, parfaitement justifiée. Le CSA a pu mettre en place un contrôle pertinent en veillant à un traitement équitable des candidats sur la base des deux critères d'appréciation fixés par lui: leur représentativité et leur capacité à manifester concrètement leur intention par une campagne active. La règle de l'équité a permis aux chaînes de télévision et de radio d'assurer la diffusion de tous les courants de pensée tout en respectant le poids relatif de ces divers courants. Au demeurant, force est de constater que c'est pendant cette période que les chaînes de télévision recueillant l'audience la plus importante ont organisé des débats avec les candidats bénéficiant d'une notoriété plus importante. Pour autant, le format de certains de ces débats faisant intervenir un échantillon supposé représentatif de l'opinion prête à interrogation. Il n'est pas certain qu'il soit très éclairant sur le choix de société auquel l'électeur est invité à procéder.

La période intermédiaire soulève des interrogations très sérieuses qui résultent de son régime même et non de son application concrète au printemps 2007. La règle de l'égalité du temps de parole entre les candidats a en effet été privilégiée au détriment de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Cette règle ne faisait certes pas obligation aux chaînes de télévision ou de radiodiffusion d'accorder les mêmes conditions d'exposition à tous les candidats lors des émissions d'information, des débats ou des soirées qu'elles entendaient consacrer au traitement de l'actualité électorale. Elle s'appliquait par conséquent tous créneaux horaires confondus, les candidats pouvant dès lors avoir accès à l'antenne à des horaires et sous des formes différentes.

Cependant, cette règle a enfermé l'information dans des contraintes excessives et a notamment contribué à l'impossibilité, pendant cette période, d'organiser tout débat entre les candidats bénéficiant d'une notoriété plus importante. Elle a également pu conduire ces organes d'information à donner la priorité au traitement d'autres sujets d'actualité. Elle prête d'autant plus à débat que le développement de l'offre de services audiovisuels, notamment grâce à la diffusion numérique, a permis de rompre avec la situation de quasi-monopole ou d'oligopole très fermé qui a longtemps prévalu.

La question de la pertinence, pendant cette période, de la règle d'égalité du temps de parole des candidats est aussi posée du fait que cette règle est susceptible d'engendrer des inégalités de fait. Elle peut en effet aboutir à une sur-représentation dans les médias de courants de pensée très proches les uns des autres du fait de la multiplication des candidatures se rattachant à ces courants, alors que ceux-ci ne représenteraient qu'une très faible partie de l'opinion du corps électoral.

La commission considère qu'une régulation de l'information audiovisuelle entre la publication de la liste des candidats et l'ouverture de la campagne est nécessaire mais qu'une réglementation privilégiant exclusivement la règle de l'égalité et n'assurant pas ainsi la conciliation nécessaire de cette règle avec la liberté de communication n'est pas satisfaisante.

Pour la troisième période allant du 9 au 20 avril 2007, la commission est consciente des contraintes que fait peser sur la liberté de communication la double règle d'égalité des temps d'antenne et de parole entre des candidats dont l'audience est fondamentalement différente.

Elle note toutefois que cette règle a été globalement respectée par les chaînes de télévision et de radiodiffusion. Les résultats sont plus contrastés pour les chaînes internationales.

La commission recommande par conséquent qu'une réflexion soit engagée sur la pertinence de la répartition en trois périodes de la campagne audiovisuelle ainsi que sur la durée de ces périodes et sur les principes applicables à chacune d'elles. Cette réflexion doit permettre de mieux concilier l'ensemble des principes juridiques applicables et des intérêts généraux en présence. En tout état de cause, la commission recommande la suppression de la période intermédiaire, dont le régime ne lui apparaît manifestement pas satisfaisant.

3.4. La campagne électorale sur l'internet

La campagne électorale sur l'internet a eu, en 2007, une ampleur inégalée. Elle s'est située dans un cadre juridique différent de celui en vigueur lors de l'élection présidentielle de 2002 et elle a profité du développement de nouveaux moyens de communication et de propagande par voie électronique («blogs» et réseaux de «blogs»). Même si son effet est difficilement appréciable parce que la fréquentation et ses différentes composantes (militants d'un côté, simples électeurs de l'autre) sont peu mesurables, la campagne sur le réseau internet a pris une part significative dans le débat électoral.

L'examen du recours à l'internet pendant la campagne de l'élection présidentielle implique de distinguer le site de la commission, les sites officiels des candidats et les autres sites. Les sites des candidats ne représentent qu'un faible pourcentage des 1 300 sites répertoriés comme étant liés à la campagne présidentielle. La commission a également été appelée à se prononcer sur la nature de la propagande électorale adressée aux électeurs sur leur messagerie électronique. Enfin, et indépendamment des questions particulières liées à la diffusion le jour du scrutin de «sondages sortie des urnes» ou d'estimations de résultats ou de résultats partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote (cf. ci-après au point 4), le recours à internet modifie assez profondément les données des campagnes électorales. Or la réglementation applicable aux élections n'a pas suivi ces évolutions technologiques qu'elle n'a que très partiellement et très insuffisamment intégrées.

3.4.1. Le site internet de la commission

Les déclarations de chaque candidat ont été mises en ligne sous forme textuelle (format PDF) et sonore (format MP3) sur le site internet de la commission. Pour la mise en oeuvre de cette disposition nouvelle, il a été décidé de prévoir aussi en page d'accueil, outre la page concernant les candidats, des rubriques relatives respectivement à la commission, à la réglementation et aux communiqués. Les internautes pouvaient aussi trouver sur son site les coordonnées des commissions locales de contrôle.

Les potentialités offertes par un tel site permettent d'envisager à l'avenir son utilisation pour faciliter l'accès à la campagne électorale de diverses catégories de personnes souffrant d'un handicap. Le site constitue, par ailleurs, un vecteur privilégié d'information pour les électeurs français établis à l'étranger.

Il conviendrait aussi de développer l'information sur l'existence de ce site auprès du grand public, de la presse et des autres médias ainsi que des administrations intéressées.

3.4.2. Les sites internet des candidats

L'utilisation de l'internet par les candidats à des fins de communication politique doit se faire dans le respect de ces règles du droit commun de la communication.

Celles-ci ont été précisées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'article 1er de cette loi dispose que la communication au public par

voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale par les exigences du service public, par les contraintes techniques aux moyens de communication ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Cette loi est venue modifier les qualifications juridiques des services de la communication par voie électronique en distinguant deux types de services: d'une part, les services de communication au public en ligne qui se définissent comme la transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur (un site internet) et, d'autre part, les services audiovisuels qui recouvrent toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et mettant à la disposition du public ou d'une catégorie du public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores.

Mais l'utilisation de ces services n'échappe pas à l'application des règles encadrant la propagande édictées par le code électoral. Les abus de propagande ou les manoeuvres peuvent ainsi être sanctionnés par le juge de l'élection.

La commission a été attentive au contenu de chacun des sites des candidats (20). Elle est intervenue à trois niveaux.

En premier lieu, si, dans l'ensemble, les sites n'ont paru nécessiter aucune observation particulière tant en raison de leur forme ou de leur contenu que de leur utilisation, la commission a dû intervenir pour que soit modifié sans délai le contenu d'un site donnant, en violation flagrante des prescriptions du code électoral et de la jurisprudence, des indications aux partisans de ce candidat pour accompagner des électeurs dans les bureaux de vote.

En deuxième lieu, la commission a confirmé le parti qu'elle avait pris en 2002 sur l'utilisation des sites des candidats dans les jours précédant le scrutin, eu égard aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui prohibe, comme on l'a indiqué, d'une part, la distribution de «tracts» le jour du scrutin et, d'autre part, tout message audiovisuel de propagande électorale. Elle a autorisé les candidats à maintenir leurs sites ouverts, y compris le jour du scrutin de sorte que les électeurs ont pu se connecter à ces sites afin d'y obtenir les données dont ils auraient besoin pour déterminer leur choix mais elle a subordonné cette faculté à la condition que, afin d'éviter toute rupture d'égalité et conformément à une jurisprudence traditionnelle du juge de l'élection, les candidats s'abstiennent d'en modifier le contenu postérieurement à la clôture de la campagne. Elle leur a recommandé aussi d'y faire cesser toute activité interactive, notamment sous forme de dialogue en direct avec les internautes. Compte tenu de l'existence de jours de scrutin différents sur l'ensemble du territoire de la République, elle a décidé de retenir comme date de clôture de la campagne, pour le premier tour de scrutin, le vendredi 20 avril à minuit, que les opérations électorales se déroulent le samedi 21 avril ou le dimanche 22 avril, et, pour le second tour, le vendredi 4 mai à minuit, que ces opérations aient lieu le samedi 5 mai ou le dimanche 6 mai.

En troisième et dernier lieu, la commission a également demandé aux candidats de désactiver les dispositifs éventuels de mise à jour automatique de leur site internet grâce à l'utilisation de liens avec d'autres sites lorsque ceux-ci étaient susceptibles de diffuser des sondages pendant la période d'interdiction prévue par la loi du 19 juillet 1977, modifiée par la loi du 19 février 2002, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Elle a aussi souhaité appeler l'attention des responsables des sites internet des candidats sur les risques

de prise de contrôle à distance de leur serveur et elle leur a recommandé de faire preuve de la plus extrême vigilance et de veiller, dans une telle hypothèse, à procéder immédiatement aux corrections qui s'imposaient.

3.4.3. Les autres sites internet

Les sites extérieurs aux candidats ne sont pas d'une nature différente des précédents. La commission s'en est remis en 2007 aux instruments usuels (essentiellement le juge pénal) pour réprimer d'éventuels excès (diffamation,...).

Deux faits dignes d'attention lui ont été signalés. D'une part, le site officiel d'un candidat a fait l'objet d'un détournement par un site pirate qui se présentait, à tous égards, comme le site de ce candidat mais avait, sur certains points, un contenu différent. La commission a averti le mandataire de ce candidat de cette situation afin qu'il y soit donné les suites qu'il estimerait opportunes. D'autre part, informée du contenu d'un site dénigrant un candidat et deux membres de son entourage, la commission s'est assurée que ce site n'était lié à aucun candidat. Elle a indiqué à ce candidat qu'il lui était loisible d'agir en référé pour obtenir la fermeture de ce site internet.

3.4.4. La propagande électorale sur la messagerie électronique des électeurs

Le ministère des affaires étrangères a saisi la commission de la question de l'envoi par certains candidats à des Français établis à l'étranger d'un message revêtant un caractère de propagande électorale qu'ils ont reçu sur leur messagerie électronique et de la conformité de cette pratique aux dispositions de l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 qui interdisent une telle propagande dans des pays où ces Français sont installés.

La commission a constaté que, et ainsi que l'autorise l'article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005, chaque candidat avait reçu communication d'une copie de l'ensemble des listes électorales consulaires des Français établis hors de France. Ces listes comportent la mention de l'adresse électronique personnelle des électeurs lorsque ceux-ci l'ont communiquée.

Elle a relevé que le IV de l'article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique réservait expressément le régime de la communication au public par voie électronique à la seule mise à disposition du public de messages qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. Le second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, dans sa rédaction résultant du V de l'article 2 de la même loi, interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

La commission a, sous réserve de l'appréciation susceptible d'être portée par le Conseil constitutionnel après l'élection, estimé que les messages à caractère électoral, adressés sous une forme électronique sur les messageries personnelles des électeurs, présentaient le caractère d'une correspondance privée et ne pouvaient ainsi être regardés comme relevant de la propagande électorale au sens de ces dispositions.

3.4.5. La prise en compte des spécificités de l'internet

Force est de constater que les dispositions du code électoral n'ont pas intégré l'ensemble des questions nouvelles que pose l'utilisation de l'internet dans une campagne électorale. Trois exemples, qui ne rendent pas compte de l'exhaustivité des questions, permettent de prendre la mesure de la nécessité de leur mise à jour.

Ainsi, le recours, sur le site internet d'un candidat, au service permettant à un internaute d'établir une liaison vocale avec un opérateur et de dialoguer avec lui pendant qu'il visite ce

site fournit une information à caractère électoral à cet internaute, sans que celui-ci ait à en supporter le coût de télécommunication. Ce service s'apparente à un numéro vert gratuit mais il s'en distingue par l'absence de communication d'un numéro à appeler. L'article L. 50-1 du code électoral interdit, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, la mise en place de services gratuits de téléphonie, tels des numéros verts par ou au profit des candidats (24), mais il ne prévoit pas le cas inverse de l'appel émis par les équipes de campagne sur demande d'un visiteur du site ou l'utilisation d'un système de voix.

De même, la seule circonstance que le site d'un candidat soit mentionné dans des moteurs de recherche n'équivaut pas, à elle seule, à une méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant toute publicité commerciale à des fins de propagande électorale (25). Pour autant, si ce site fait usage de procédés publicitaires (publicité par bannières publicitaires, bandeaux défilants...), ces publicités doivent être soumises à une telle interdiction. Une application littérale de cet article, qui n'a pas été modifié, ferait échapper à la prohibition qu'il prévoit la quasi-totalité des procédés publicitaires disponibles sur l'internet.

Enfin, antérieurement à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le web était inclus dans le périmètre de l'interdiction édictée par ce même article car il relevait alors de la communication audiovisuelle. La loi nouvelle ayant modifié la qualification du web en l'excluant du champ de la communication audiovisuelle, les procédés publicitaires ne se trouvent donc plus formellement visés par une telle interdiction. Le régime applicable à l'utilisation, par des candidats ou leurs soutiens et des partis politiques, des espaces publicitaires sur des sites tiers dans le cadre de leurs activités de propagande électorale, est par conséquent incertain au regard des dispositions de l'article L. 52-1.

Dans ce contexte, la commission s'est appuyée sur la recommandation émanant du Forum des droits sur l'internet, à l'élaboration de laquelle le Conseil constitutionnel et le ministère de l'intérieur ont été associés en qualité d'observateurs des pouvoirs publics. En effet, ses propositions sont généralement regardées par les divers interlocuteurs comme posant les principes à suivre par les candidats à une élection politique. Elle a donc invité ceux-ci à s'y référer. Cette invitation a été bien comprise.

A cet égard, la commission recommande, à tout le moins pour l'élection présidentielle, de mettre à jour les dispositions relatives à la propagande électorale afin d'intégrer dans le droit positif les spécificités résultant de la propagande par l'internet.

3.5. La campagne électorale outre-mer

Les particularités géographiques de nombre de départements et collectivités d'outre-mer rendent plus complexe l'organisation des élections. Les observations des précédents rapports de la commission conservent toute leur pertinence. Les rapports des délégués, désignés en commun avec le Conseil constitutionnel et envoyés sur place pour les deux tours de scrutin, rejoignent en tous points ces observations. La campagne électorale n'a pas donné lieu à des faits marquants qui mériteraient d'être mentionnés dans le présent rapport.

Cependant, l'avancement de la date du scrutin, organisé non le dimanche mais le samedi - soit pour le premier tour le 21 avril et, pour le second tour, le samedi 5 mai - en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, a constitué un net progrès par rapport aux élections présidentielles antérieures. Pour des raisons exclusivement géographiques, les électeurs de ces départements et collectivités votaient plus tardivement qu'en métropole de sorte qu'avant cette réforme, mise en oeuvre pour la première fois en 2007, leur droit de suffrage y était en pratique gravement

affecté par la diffusion des résultats de la métropole, lesquels étaient aisément extrapolables au plan national. Cette situation expliquait au moins en partie la faiblesse du taux de participation. De ce point de vue, la modification de la date du scrutin a eu un effet très positif.

Elle a toutefois soulevé des difficultés de deux ordres. Les unes étaient relatives à l'interdiction de diffusion des sondages et relevaient d'abord des attributions de la commission des sondages mais elles concernaient aussi la commission. Les autres concernaient la diffusion des émissions de la «campagne officielle» et se rapportaient à la décision du CSA.

3.5.1. L'interdiction de la diffusion des sondages

La campagne électorale était close le vendredi 20 avril à zéro heure et le vendredi 4 mai à zéro heure sur les parties du territoire où le vote avait lieu le samedi alors que, lorsque le scrutin avait lieu le dimanche, elle était close le samedi 21 avril à zéro heure et le samedi 5 mai à zéro heure.

Dès lors, il convenait d'apprécier si l'existence de ces deux dates de scrutin avait une incidence sur la date de prise d'effet, pour l'élection ayant lieu le dimanche, de l'interdiction de rendre publics des sondages, interdiction qui joue à partir de la veille de chaque tour de scrutin en vertu de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée notamment par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002.

Trois solutions étaient envisageables: interdire, pour l'ensemble du territoire national, la publication et la diffusion des sondages à partir du jeudi à minuit, en raison du vote prévu le samedi ou appliquer littéralement cet article et fixer cette interdiction soit le jeudi à minuit soit le vendredi à minuit selon la date du scrutin ou enfin prévoir une telle interdiction pour l'ensemble du territoire national à partir du vendredi minuit.

La commission et la commission des sondages ont arrêté une position commune rendue publique par un communiqué en date du 26 mars 2007 et fondée sur des motifs de droit tenant au respect du principe d'égalité. Elles ont retenu la troisième option. Des considérations d'opportunité militaient aussi en faveur de cette solution. Cette interdiction a pris effet, pour l'ensemble du territoire de la République, pour le premier tour le vendredi 20 avril 2007 à minuit et jusqu'à la clôture du scrutin le dimanche 22 avril 2007 à 20 heures et, pour le second tour, le vendredi 4 mai 2007 à minuit et jusqu'à la clôture du scrutin le dimanche 6 mai 2007 à 20 heures.

La première option, qui aurait eu pour effet de faire passer l'interdiction de 24 heures à 48 heures dans les parties du territoire où le scrutin avait lieu le dimanche, méconnaissait les termes mêmes de la loi. La deuxième option aurait eu pour conséquence d'introduire une discrimination entre les médias procédant à la diffusion des sondages et notamment des éditeurs de journaux selon qu'ils sont éditeur local ou éditeur national diffusé localement et elle aurait, en outre, été difficile à mettre en oeuvre en pratique.

Il est vrai que le scrutin est anticipé dans ces départements et ces collectivités et qu'aucune conséquence n'a pu en être tirée au regard de l'interdiction de diffusion des sondages. Mais cette situation était inévitable en l'état de la réglementation et ses inconvénients doivent être mis en rapport avec l'amélioration substantielle résultant de ce décalage du calendrier qui permet aux électeurs de ces collectivités d'outre-mer d'exprimer désormais leur suffrage dans l'ignorance des résultats de l'élection compte tenu du décalage horaire avec la métropole.

Cette position commune des commissions a été contestée devant le juge des référés du Conseil d'Etat par un électeur qui a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ce communiqué au motif qu'un même délai de

réflexion sans propagande ni diffusion de sondages devait être reconnu à tous les citoyens quel que soit leur lieu de vote. Le juge des référés n'a pas accueilli ce recours. Il a jugé que les deux commissions avaient recherché, compte tenu tant de la répartition du corps électoral entre les bureaux de vote métropolitains et les autres que des caractéristiques particulières de la législation relative aux sondages d'opinion, un équilibre entre les différents impératifs qu'il leur incombait de concilier et il a estimé que la mesure contestée ne paraissait pas, en l'état de son instruction, contraire aux impératifs de libre expression de suffrage et de sincérité du scrutin.

La commission recommande, dans un souci d'intelligibilité de la loi, d'inscrire dans la législation applicable à l'élection présidentielle que l'interdiction de la diffusion des sondages s'applique au même moment sur l'ensemble du territoire de la République.

3.5.2. La diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait fixé des règles particulières pour les émissions de la «campagne officielle» diffusées notamment dans les départements et les collectivités d'outre-mer où le scrutin avait lieu le samedi. Par ailleurs et concernant le traitement de l'actualité électorale, il avait, par un communiqué, rappelé les termes de sa recommandation du 7 novembre 2006 avançant du samedi à zéro heure au vendredi à zéro heure les effets de l'interdiction prévue par l'article L. 49 du code électoral pour les programmes diffusés sur le continent américain et dans les départements ou collectivités d'outre-mer où le scrutin était organisé le samedi.

Ces décisions ont également été contestées devant le juge des référés du Conseil d'Etat par un électeur qui, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en a demandé la suspension. Ce recours a été rejeté. Le juge des référés a considéré qu'en édictant de telles mesures spécifiques en fonction de la date du scrutin le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait mis en oeuvre les dispositions législatives qu'il avait à appliquer sans en altérer la portée.

3.6. La campagne électorale à l'étranger

Les Français établis à l'étranger représentaient 380 000 électeurs en 2002. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales s'est, en 2007, élevé à 850 000 électeurs. Si ces électeurs étaient regroupés dans une même collectivité, celle-ci se situerait au 11e rang par ordre d'importance du nombre d'électeurs. Cette situation explique que plusieurs candidats soient allés à leur rencontre à l'occasion de déplacements à des fins électorales dans les pays correspondants.

Lors de l'élection présidentielle de 2002, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République interdisait toute propagande électorale à l'étranger.

Avant la loi organique du 20 juillet 2005, le Conseil d'Etat avait jugé que cette interdiction était compatible avec les articles 19, 21, 22 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ainsi qu'avec les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du premier protocole additionnel à cette convention eu égard, d'une part, à l'ensemble des mesures édictées par la loi afin de garantir le libre choix des électeurs et, d'autre part, aux contraintes particulières auxquelles sont soumises les élections organisées à l'étranger

Cette disposition a été modifiée par le 1° de l'article 3 de la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005. Le législateur a en effet estimé que la rédaction antérieure de la loi organique était

incompatible avec les traités communautaires et la Convention européenne des droits de l'homme. Il a donc introduit une distinction entre les pays, selon qu'ils relèvent ou non de l'Union européenne et plus largement de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le premier cas, la propagande électorale à l'étranger est autorisée et, dans le second, elle demeure interdite.

La commission a ainsi été conduite à prendre position sur la portée de ces dispositions. Elle s'est attachée à en déterminer le cadre temporel et géographique et a immédiatement porté à la connaissance des candidats, déclarés ou présumés, sa position arrêtée dès le 14 mars 2007.

Sur le premier point, elle a considéré que la période concernée par l'interdiction de toute propagande électorale visée par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 s'entendait seulement de celle correspondant à la campagne électorale dont la durée est déterminée par l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Pour l'élection présidentielle de 2007, cette interdiction s'appliquait ainsi à partir du 9 avril 2007 pour le premier tour et, pour le second tour, à partir du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Pour la période antérieure à l'ouverture de la campagne électorale, toute propagande électorale n'était donc pas interdite, quel que soit le pays où elle était effectuée, sous réserve naturellement de la législation de ce pays et de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 janvier 1976 précitée.

Sur le second point, la commission a relevé que, par les dispositions de l'article 10, éclairées par les travaux préparatoires, le législateur avait entendu instituer un régime différent, selon que le pays en cause appartient à l'un ou l'autre des deux groupes suivants:

- si le pays est membre de l'Union européenne ou partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la propagande électorale est, sous les mêmes réserves énoncées ci-dessus, autorisée pendant la période précitée;
- si le pays ne relève pas de ce groupe, toute propagande est interdite pendant cette période.

Toutefois, la commission s'est fortement interrogée sur le respect par la France de ses engagements internationaux. Elle nourrit à cet égard les doutes les plus sérieux. En effet, la modification de la loi, introduite en 2005 et effectuant la distinction entre ces deux groupes de pays, a été justifiée par le fait que la législation antérieure restreignait l'exercice de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Or cette liberté ne se divise pas et un tel motif pourrait être invoqué pour faire échec à l'application de l'article 10 de la loi de 1976 modifié, quel que soit le pays où le candidat entendrait faire campagne. Autrement dit, le respect de l'exercice de la liberté d'expression, garanti par cet article de la Convention européenne des droits de l'homme, commande d'autoriser la propagande à l'étranger sans discrimination entre les pays tout en tenant compte naturellement des contraintes particulières inhérentes à la législation de chaque pays où des Français sont établis.

En conséquence, la commission propose que l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 soit modifié et prévoie l'autorisation de la propagande électorale à l'étranger sans aucune discrimination entre les pays, sous réserve naturellement que la législation du pays en cause autorise sur son territoire une telle propagande.

4. La communication au public et à la presse des résultats

Chaque électeur doit être libre de son comportement, en décidant de se rendre ou non au bureau de vote, et de son choix en faveur de tel ou tel candidat. Une annonce prématurée de résultats est de nature à modifier l'un ou l'autre ou les deux. Il convient donc de conjurer le

risque de voir certains électeurs renoncer à voter parce que le résultat serait prématurément présenté comme acquis ou de voir leur vote influencé par des informations diffusées illégalement et dont l'ensemble du corps électoral n'aurait pu disposer.

Ce principe se justifie par l'absolue nécessité de préserver de toute interférence extérieure le droit de chaque citoyen à la libre expression de son suffrage. Deux séries de dispositions visent à en garantir l'effectivité.

D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, interdisent le jour du scrutin la diffusion et le commentaire par quelque moyen que ce soit de tout sondage. Cette disposition s'applique aux éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs.

D'autre part, en vertu de l'article L. 52-2 du code électoral, «en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés». Cet article est applicable dans les autres collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) en application des dispositions combinées du II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 et de l'article L. 388 du code électoral.

La commission a veillé au respect de ces dispositions à un double titre: en prenant les initiatives nécessaires pour éviter une diffusion prématurée des résultats du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote et en demandant qu'aucune diffusion des résultats obtenus dans les collectivités d'outre-mer ayant voté le samedi n'intervienne avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.

4.1. La diffusion prématurée des résultats du scrutin

Le risque d'une diffusion prématurée d'indications sur l'issue du scrutin alors que l'ensemble des bureaux de vote n'était pas fermé, déjà présent en 2002, a pris en 2007 une ampleur inégalée. Des personnalités du monde des médias ou de l'internet annonçaient à l'envi qu'elles diffuseraient sur leur site internet ou sur leur «blog» les résultats de sondages sortis des urnes ou les estimations de résultat.

La commission a entrepris une action déterminée afin que le libre choix des électeurs puisse ainsi être garanti et de ce fait également la sincérité du scrutin.

En premier lieu, elle a publié deux communiqués, communs avec la commission des sondages, en date du 18 avril 2007, pour le premier tour de scrutin, et du 3 mai 2007, pour le second tour, par lesquels elle a rappelé la portée que ces deux organismes ont donnée à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977. Elle a estimé que cet article interdisait, jusqu'à la fermeture, le dimanche, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l'ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit, des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi ou le dimanche 6 mai ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin. Elle a aussi indiqué que ces dispositions interdisaient également qu'il fût publiquement fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations. Elle a, par ailleurs, rappelé que la méconnaissance de ces prescriptions constituait une infraction pénale susceptible, en vertu de l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977 et de l'article L. 90-1 du code électoral, d'être punie d'une amende de 75 000 euros par infraction

constatée. La commission avait averti que tout fait répréhensible serait immédiatement porté à la connaissance du procureur de la République. La commission a expliqué de manière résolue sur les divers supports des médias (presse écrite, radio, télévision) le sens de sa position et manifesté ainsi sa détermination.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Conseil constitutionnel ont pris position dans le même sens. Finalement, nombre des initiatives annoncées ne se sont pas concrétisées.

En deuxième lieu, elle a appelé l'attention des fournisseurs d'accès et des hébergeurs des sites internet sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Cet article permet, dans les conditions qu'il prévoit, d'engager la responsabilité des fournisseurs d'accès ou des hébergeurs de site s'ils ont eu effectivement connaissance du caractère illicite d'une information mise à la disposition du public à la demande d'un destinataire de services de communication au public. L'information, dont la diffusion est prohibée en vertu de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, présentant un caractère illicite au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, la commission a tenu à en faire part, par courrier, au fournisseur d'accès ou à l'hébergeur dans l'hypothèse où un site pour lequel il aurait cette qualité serait susceptible de contenir une telle information. Elle a invité le destinataire de ces correspondances à prendre sans délai les mesures s'imposant pour éviter la diffusion au public d'informations illicites. Cette demande a été suivie d'effet.

Enfin, la commission a mis en place un dispositif de suivi de nombreux sites internet pour chacun des deux tours de scrutin. Par ailleurs, elle a décidé de se réunir le dimanche 22 avril à partir de 18 heures.

Pour le premier tour de scrutin, des indications sur les résultats de l'élection ont, certes, pu être accessibles dès 18 heures à des internautes ayant réussi à se connecter à des sites francophones situés à l'étranger. En revanche, les règles légales ont généralement été respectées sur le territoire français. Sans doute, des indications assez précises ont-elles pu être obtenues à partir de 19 h 30 au vu des images des quartiers de campagne diffusées par les chaînes de télévision. Mais, pour regrettable qu'elle soit, cette situation n'a pas affecté la sincérité des opérations électorales.

En revanche, pour le second tour, des sites internet de la presse francophone, situés dans des pays riverains de la France, ont diffusé dès 17 h 30 des résultats des sondages réalisés à la sortie des urnes puis, après 18 heures, des estimations des résultats effectuées à partir du dépouillement des bulletins dans des bureaux présélectionnés. Le résultat prévisible du scrutin a également été annoncé dès 18 h 15 sur de nombreux sites d'organes d'information français.

La commission considère que ces difficultés pourraient, en grande partie, être surmontées si la fermeture des bureaux de vote en métropole intervenait à la même heure. Le décalage de deux heures entre la fermeture des premiers bureaux de vote à 18 heures (concernant 75 % du corps électoral) et celle des derniers bureaux à 20 heures (représentant 20 % des électeurs) est propice à la divulgation des estimations du résultat final réalisées à partir des résultats obtenus dans des petits bureaux dont le dépouillement est achevé moins d'un quart d'heure après la fermeture du bureau de vote à 18 heures. Par ailleurs, il conviendrait que l'interdiction, avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole, de la diffusion par tout moyen des sondages «sortie des urnes» ou des estimations de résultats soit assortie de sanctions effectivement dissuasives afin qu'en soit garantie l'effectivité.

Ainsi et afin de préserver jusqu'à son terme la sincérité du scrutin, la commission recommande de fixer en métropole un horaire unique de fermeture des bureaux de vote et de renforcer de manière significative les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction de diffusion, avant cette fermeture, des sondages «sortie des urnes» ou des estimations de résultats.

4.2. La diffusion des résultats du scruti ayant eu lieu le samedi

Le déroulement du scrutin le samedi dans certains départements et certaines collectivités d'outre-mer a posé une difficulté d'interprétation de l'article L. 52-2 du code électoral (35). Ces dispositions ont pour objet et pour finalité de garantir la sincérité du scrutin en écartant tout risque de pression ou d'influence sur les électeurs. Leur mise en oeuvre ne soulève pas de difficultés particulières en cas d'élections générales, que ce soit à l'occasion des élections législatives, des élections cantonales ou élections municipales. Dans chacune de ces hypothèses, le scrutin est organisé dans une multitude de circonscriptions différentes.

Cet article a été rendu applicable à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 modifiée. Or cette élection se caractérise par une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République et par un scrutin qui, en 2007, s'étalait en pratique sur une durée de 32 heures.

Mais l'article L. 52-2 n'a pas fait l'objet des adaptations nécessaires afin de tenir compte de cette particularité de l'élection présidentielle. Ainsi que le second alinéa de cet article le précise, en cas d'élection partielle dans une circonscription, aucun résultat partiel ne peut être communiqué au public jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de cette circonscription.

La commission a donc estimé que l'article L. 52-2 devrait être interprété comme interdisant, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, toute diffusion des résultats obtenus dans les départements et les collectivités d'outre-mer lors du scrutin se déroulant le samedi. Elle a d'ailleurs demandé que les représentants de l'Etat maintiennent sous embargo ces résultats jusqu'au dimanche 20 heures, heure de Paris, y compris vis-à-vis des médias locaux.

La décision de la commission, qui résulte des communiqués des 18 avril et 3 mai précités, ainsi que celle du CSA ayant la même portée, ont été contestées par une société de télévision devant le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le recours a été rejeté. Le juge des référés a relevé dans son ordonnance (36) que compte tenu, d'une part, de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs, d'autre part, de la nature du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui ne donne lieu qu'à une seule opération sur l'ensemble du territoire de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'avait pas méconnu la portée de l'article L. 52-2 du code électoral en précisant que les dispositions de cet article exigeaient qu'aucun résultat ne fût rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.

Cette interdiction de la diffusion locale de résultats locaux avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole prive les électeurs concernés d'une «soirée électorale» sur les moyens de communication audiovisuelle alors qu'une telle émission était habituelle. Mais cette interdiction a été assez bien comprise. Ce désagrément, lié à la règle même de l'avancement de la date du scrutin dans ces départements et collectivités d'outre-mer, doit être relativisé. Il est sans commune mesure avec les graves inconvénients qui résultaient de l'application d'une date unique de scrutin sur l'ensemble du territoire de la République. La commission estime que, dans la balance des intérêts qu'il lui appartenait de prendre en compte, sa position était et demeure pertinente.

La commission recommande par conséquent que l'interdiction de la diffusion des résultats d'outre-mer jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole soit inscrite dans la législation applicable à l'élection présidentielle.

La Commission nationale de contrôle a, en liaison permanente avec les autres institutions présentes dans la campagne électorale, pris toute sa part au bon déroulement de l'élection présidentielle. Garante de l'égalité entre les candidats, elle s'est efforcée, dans la limite de ses attributions, d'accomplir sa mission avec le double souci d'assurer le respect, par toutes les parties prenantes, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de remplir auprès des candidats ou de toutes les autorités appelées à intervenir dans le déroulement des opérations électorales un rôle de conseil dans la mise en oeuvre de ces dispositions et de les appliquer. Elle s'est aussi attachée à ce que le processus électoral puisse se dérouler dans des conditions normales jusqu'à son terme et, à cette fin, elle s'est fortement impliquée afin de contenir le risque de la diffusion de résultats partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Il lui semble que le scrutin des 22 avril et 6 mai 2007 s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes.

Pour autant, et sans que doivent être remis en cause les principes de l'organisation de la campagne de l'élection présidentielle, elle a constaté que la réglementation en vigueur mais aussi les comportements nécessitaient encore des ajustements. Ce constat a nourri ses observations.

Les recommandations de la commission font l'objet ci-après d'un résumé dans l'ordre chronologique de leur présentation dans le présent rapport:

- ajouter un représentant du ministre des affaires étrangères à la liste des fonctionnaires chargés d'assister la Commission nationale de contrôle;
- consacrer explicitement le pouvoir d'homologation de l'affiche, de la profession de foi et de l'enregistrement sonore que les textes lui reconnaissent et déterminer les modalités d'exercice de ce pouvoir: devraient être mentionnés les motifs pour lesquels l'homologation peut être refusée et tenant notamment à la présence de tout élément qui serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En outre, la procédure applicable au cas où elle envisagerait de refuser l'homologation devrait être précisée;
- exclure l'application à l'élection présidentielle de la disposition de l'article R. 27 du code électoral permettant de déroger à l'interdiction de l'emploi d'une «combinaison des trois couleurs: bleu, blanc et rouge» dans le cas où le candidat reproduit sur une affiche ou sur une circulaire, ayant un but ou un caractère électoral, l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique;
- permettre l'inscription, sur l'affiche et la déclaration du candidat, de dates de scrutin différentes selon les lieux où sont diffusés ces documents;
- prévoir que l'affiche et la déclaration des candidats soient adressées à la commission également sous forme électronique;
- avancer, dans le cas où l'élection est organisée à son échéance normale, la date limite de dépôt auprès de la commission des modèles des affiches et des déclarations des candidats au quatrième jeudi précédant le premier tour de scrutin et au deuxième vendredi précédant le second tour;
- prévoir la lecture, sur le site internet dédié à l'élection présidentielle, des professions de foi de l'ensemble des candidats en accompagnant, sur des fichiers vidéo, leurs déclarations d'une traduction en langue des signes française;
- mettre en cohérence l'état du droit par une modification appropriée de la loi organique du 6 novembre 1962 et de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 pris pour son application (39) afin que soit clairement explicitée l'interdiction, pour tout candidat à l'élection présidentielle, de faire campagne, sous quelque forme que ce soit, après la date de clôture de celle-ci et assortir d'une sanction toute infraction à cette interdiction;

- engager une réflexion sur la répartition en trois périodes de la campagne audiovisuelle et sur les principes applicables à chacune d'elles et, en tout état de cause, supprimer le régime de la période dite intermédiaire;
- mettre à jour les dispositions relatives à la propagande électorale afin d'intégrer dans le droit positif les spécificités résultant de la propagande par l'internet;
- prévoir d'inscrire, dans la législation applicable à l'élection présidentielle, que l'interdiction de la diffusion des sondages s'applique au même moment sur l'ensemble du territoire de la République;
- modifier l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République afin de prévoir l'autorisation de la propagande électorale à l'étranger sans aucune discrimination entre les pays, sous réserve naturellement que la législation du pays en cause autorise sur son territoire une telle propagande;
- fixer en métropole un horaire unique de fermeture des bureaux de vote et renforcer de manière significative les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction de diffusion, avant cette fermeture, des sondages «sortie des urnes» ou des estimations de résultats;
- inscrire dans la législation applicable à l'élection présidentielle l'interdiction de la diffusion des résultats outre-mer jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-281 du 24 avril 2007**

relative aux conditions de production et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 6 mai 2007
JORF n°100 du 28 avril 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle rendu le 4 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 5 avril 2007;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Article 1

Les candidats à l'élection du Président de la République figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel de la République française font connaître

au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le mercredi 25 avril 2007, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 2

Dès la publication de la liste des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte ceux-ci sur la durée des émissions télévisées et des émissions radiodiffusées de la campagne officielle.

Article 3

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, au plus tard le samedi 28 avril 2007, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des candidats, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour le second tour du scrutin.

Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 4

Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Article 5

Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses membres désigné pour le représenter.

TITRE IER: PRODUCTION

Chapitre Ier: Généralités

Article 6

La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production.

Le coordonnateur remet aux candidats bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Article 7

Les moyens mis à la disposition de chaque candidat par la société France 3 sont identiques.

Ils sont mis, à compter du lundi 23 avril 2007, à la disposition des candidats remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée.

Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur mentionné à l'article 6. Ces dates et horaires sont établis en tenant compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les candidats.

Article 8

Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001: «Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.»

Il résulte de cette disposition que le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

Sont qualifiés d'intervenants dans la présente décision le candidat et, le cas échéant, les autres participants désignés par lui.

Article 9

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur:

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre:

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que de toute autre personne publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels;
- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire;
- faire usage de l'emblème européen ou national ou de drapeaux régionaux;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen ou les hymnes régionaux;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 10

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes:

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral;
- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 11

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne aux dispositions de la présente décision.

Article 12

Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre candidat.

Article 13

Si un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres candidats, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 14

Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont il a précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui lui sont attribuées.

CHAPITRE II: EMISSIONS TÉLÉVISÉES

Section 1: Enregistrement

Article 15

Les émissions télévisées sont composées au choix des candidats en intégralité ou en partie:

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes:

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 24.

Chaque candidat indique de manière précise au coordonnateur mentionné à l'article 6, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 3, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.

Sous-section 1: Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition: tournages

Article 16

Une équipe technique et des moyens (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les candidats.

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique visé à l'article 6. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 17

La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures, soit pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes, soit pour le tournage d'une émission d'une durée supérieure à deux minutes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes ne peut être dissocié.

Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Le temps de transport n'est pas compris dans la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.

Article 18

Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les candidats en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 9. Ils sont agréés par le coordonnateur désigné à

l'article 6, qui peut demander aux candidats de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

Les candidats s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des candidats. Ce coût devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.

Article 19

Les candidats qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 20

La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique est soit de quatre heures, pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes, soit de quatre heures pour le tournage d'une émission d'une durée supérieure à deux minutes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes ne peut être dissocié.

Article 21

Le réalisateur est choisi par le candidat. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 22

Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Article 23

A la fin de chaque tournage, un représentant du candidat signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 28.

Sous-section 2: Eléments réalisés aux frais des candidats

Article 24

Les candidats peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.

Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50% du temps d'émission utilisé par chaque candidat pour la totalité de la campagne pour le premier tour.

Doivent être également décomptés à ce titre:

- le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les candidats;
- l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.

Les documents sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné au deuxième alinéa.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 6.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

Le coût de ces documents devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.

Section 2: Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition: station infographique

Article 25

Il est mis à la disposition des candidats deux cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Article 26

Une cellule est mise à la disposition des candidats à concurrence de:

- une heure pour chaque émission d'une durée égale ou inférieure à deux minutes;
- deux heures pour chaque émission d'une durée supérieure à deux minutes.

Les candidats envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur désigné à l'article 6, vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Les candidats ont en outre la possibilité de donner au coordonnateur des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % définis à l'article 24.

Section 3: Post-production des émissions

Article 27

Trois cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Article 28

Pour les émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures.

Pour les émissions d'une durée supérieure à deux minutes, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de huit heures.

Le montage final d'une émission, sous-titrage et incrustation de la traduction en langue des signes inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Article 29

A la fin du montage des émissions et une fois celles-ci sous-titrées et incrustées de la traduction en langue des signes, le représentant du candidat signe sur place le bon à diffuser des émissions. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.

Ce bon à diffuser est validé par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission télévisée enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser.

Article 30

Les émissions diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités techniques du sous-titrage sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 6.

Article 31

Le candidat qui le souhaite peut également utiliser, pour les émissions de son choix diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision), la traduction en langue des signes en association avec le sous-titrage mentionné à l'article 30. Les modalités techniques de cette traduction sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 6.

CHAPITRE III: LES ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES

Article 32

Les candidats peuvent:

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de 45 minutes pour l'enregistrement et 30 minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes; 60 minutes pour l'enregistrement et 45 minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée supérieure à deux minutes;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de 30 minutes pour le montage final des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes et 45 minutes pour le montage final des émissions d'une durée supérieure à deux minutes;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux candidats.

Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33

Les candidats ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le candidat au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 34

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du candidat. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au candidat.

A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 35

En cas d'incident technique non imputable aux candidats, les temps prévus aux articles 17, 20, 26, 28 et 32 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 36

Les enregistrements des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France 3.

TITRE II: DIFFUSION

Article 37

France 2, France 3, France 4, France 5, RFO (télévision et radio), France Inter et RFI veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne.

Article 38

En cas d'incident de diffusion, l'éditeur concerné en informe immédiatement et précisément le coordonnateur.

Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en formation plénière.

Article 39

Les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Radio France Internationale sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-282 du 27 avril 2007**

fixant la durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République, portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions et fixant les horaires de programmation de ces émissions sur les antennes des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, RFO (radio et télévision), Radio France (France Inter) et RFI

JORF n°101 du 29 avril 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-281 du 24 avril 2007 relative aux conditions de production et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 6 mai 2007;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 26 avril 2007 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection présidentielle et publiée au Journal officiel du 27 avril 2007;

Les candidats ayant été consultés;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle du 26 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel du 26 avril 2007;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Article 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne officielle radiotélévisée en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions:

- sur France 2, France 3, France 4, France 5, RFO et France Inter: soixante minutes, y compris les rediffusions;
- sur RFI: dix minutes.

Article 2

Pour chaque candidat, la durée énoncée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante:

Sur France 2, France 3, France 4, France 5, RFO et France Inter:

- cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes;
- cinq émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois.

Sur RFI: cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes.

Article 3

Les émissions sont programmées du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2007.

Les émissions de petit et grand format programmées le vendredi 4 mai en métropole sont programmées sur les antennes télévisées de RFO (premier réseau) et sur les antennes radiophoniques de RFO (programme radiophonique propre) le jeudi 3 mai après les émissions du même jour en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.

Les émissions programmées le vendredi 4 mai en métropole sont programmées le jeudi 3 mai sur les antennes de RFI diffusées sur le continent américain et dans les Caraïbes.

Les émissions doivent être mentionnées dans les avantprogrammes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.

Article 4

Sur les antennes métropolitaines:

Les émissions de petit format sont programmées:

- sur France 2, avant le journal de 20 heures;
- sur France 3, vers 17 h 55;
- sur France 4, vers 16 heures;
- sur France 5, vers 17 h 44 immédiatement avant «C dans l'air»;
- sur France Inter, vers 14 h 50.

Les émissions de grand format sont programmées:

- sur France 2, vers 8 h 45 après «Télématin» et rediffusées le même jour vers 13 h 45 après la météo;
- sur France 3, vers 11 h 25 avant le «12/13» et rediffusées le même jour vers 22 h 55 immédiatement avant «Soir 3»;
- sur France 4, vers 9 h 30 et rediffusées le même jour vers minuit du lundi au jeudi et à 23 h 10 le vendredi 4 mai;
- sur France 5, vers 6 h 35 et rediffusées le même jour vers 13 h 30;
- sur France Inter vers 20 h 08 et rediffusées le même jour vers 23 h 16.

Article 5

Sur les antennes de RFO, la programmation est la suivante:

Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les antennes télévisées de RFO (premier réseau) dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale:

- les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 20 heures en Guadeloupe, vers 19 h 55 en Guyane, vers 19 h 55 en Martinique, vers 20 h 10 à La Réunion, vers 20 heures à Mayotte, vers 19 h 15 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 20 heures à Wallis-et-Futuna, vers 19 h 50 en Polynésie française et vers 19 h 50 en Nouvelle-Calédonie;
- les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 7 h 30 en Guadeloupe, vers 7 h 50 en Guyane, vers 7 h 30 en Martinique, vers 7 h 40 à La Réunion, vers 6 h 45 à Mayotte, vers 7 h 50 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 13 h 15 à Wallis-et-Futuna, vers 13 h 35 en Polynésie française et vers 13 h 15 en Nouvelle-Calédonie;
- les émissions de grand format sont rediffusées le même jour qu'en métropole: vers 11 h 45 en Guadeloupe, vers 13 h 06 en Guyane, vers 13 h 55 en Martinique, vers 12 h 15 à La Réunion, vers 14 h 35 à Mayotte, vers 13 h 25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 21 h 30 à Wallis-et-Futuna, vers 21 h 30 en Polynésie française et vers 21 h 30 en Nouvelle-Calédonie.

Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les antennes radiophoniques de RFO (programme radiophonique propre) dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale:

- les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 13 h 45 en Guadeloupe, vers 14 h 07 en Guyane, vers 13 h 20 en Martinique, vers 12 h 30 à La Réunion, vers 13 h 15 à Mayotte, vers 12 h 40 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 20 h 10 à Wallis-et-Futuna, vers 13 h 05 en Polynésie française et vers 18 h 15 en Nouvelle-Calédonie;

- les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 7 h 45 en Guadeloupe, vers 8 h 10 en Guyane, vers 8 h 10 en Martinique, vers 8 h 15 à La Réunion, vers 7 h 15 à Mayotte, vers 8 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 19 h 30 à Wallis-et-Futuna, vers 7 h 15 en Polynésie française et vers 13 heures en Nouvelle-Calédonie;
- les émissions de grand format sont rediffusées le même jour qu'en métropole vers 19 h 45 en Guadeloupe, vers 19 h 07 en Guyane, vers 19 h 30 en Martinique, vers 19 h 10 à La Réunion, vers 19 h 15 à Mayotte, vers 18 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 21 h 10 à Wallis-et-Futuna, vers 18 h 05 en Polynésie française et vers 19 heures en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Sur les antennes de RFI, les émissions de petit format de la campagne officielle sont diffusées sur l'ensemble du réseau mondial de RFI le même jour qu'en métropole à 11 h 10 TU (13 h 10, heure de Paris), sauf en Chine, dans la péninsule coréenne et en Asie du Sud-Est, où elles sont diffusées à 15 h 10 TU (17 h 10, heure de Paris).

Article 7

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2007

Décision [Conseil supérieur de l'audiovisuel] **n° 2007-115 du 20 mars 2007**

relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le premier tour de scrutin le 22 avril 2007
JORF n°69 du 22 mars 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle rendu le 9 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 15 mars 2007;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Article 1

Les candidats à l'élection du Président de la République figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel de la République française font connaître

au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le vendredi 23 mars, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 2

Dès la publication de la liste des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte ceux-ci sur la durée des émissions télévisées et des émissions radiodiffusées de la campagne officielle.

Article 3

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera au plus tard le samedi 7 avril 2007, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des candidats, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour le premier tour du scrutin.

Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 4

Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Article 5

Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses membres désigné pour le représenter.

TITRE IER: PRODUCTION

CHAPITRE IER: GÉNÉRALITÉS

Article 6

La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production (1).

Le coordonnateur remet aux candidats bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Article 7

Les moyens mis à la disposition de chaque candidat par la société France 3 sont identiques.

Ils sont mis, à compter du 2 avril 2007, à la disposition des candidats remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée.

Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur mentionné à l'article 6. Ces dates et horaires sont établis en tenant compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les candidats.

Article 8

Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001: «Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.»

Il résulte de cette disposition que le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

Sont qualifiés d'intervenants dans la présente décision le candidat et, le cas échéant, les autres participants désignés par lui.

Article 9

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur:

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre:

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autre candidats ou leurs représentants;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que de toute autre personne publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels;
- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire;
- faire usage de l'emblème européen ou national ou de drapeaux régionaux;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen ou les hymnes régionaux;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 10

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes:

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral;
- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 11

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne aux dispositions de la présente décision.

Article 12

Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre candidat.

Article 13

Si un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres candidats, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 14

Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont il a précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui lui sont attribuées.

CHAPITRE II: EMISSIONS TÉLÉVISÉES

Section 1: Enregistrement

Article 15

Les émissions télévisées sont composées au choix des candidats en intégralité ou en partie:

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ces éléments peuvent être de trois sortes:

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 24.

Chaque candidat indique de manière précise au coordonnateur mentionné à l'article 6, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 3, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.

Sous-section 1: Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition: tournages

Article 16

Une équipe technique et des moyens (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les candidats.

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique visé à l'article 6. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 17

La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures, soit pour le tournage de deux émissions de petit format, soit pour le tournage d'une émission de format moyen, soit pour le tournage d'une émission de grand format. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions de petit format ne peut être dissocié.

Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Le temps de transport n'est pas compris dans la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.

Article 18

Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les candidats en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 9. Ils sont agréés par le coordonnateur désigné à

l'article 6, qui peut demander aux candidats de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

Les candidats s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des candidats. Ce coût devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.

Article 19

Les candidats qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 20

La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique est soit de quatre heures, pour le tournage de deux émissions de petit format, soit de quatre heures pour le tournage de deux émissions de format moyen, soit de quatre heures pour le tournage d'une émission de grand format. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions de petit format ou d'une série de deux émissions de format moyen ne peut être dissocié.

Article 21

Le réalisateur est choisi par le candidat. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 22

Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Article 23

A la fin de chaque tournage, un représentant du candidat signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 28.

Sous-section 2: Eléments réalisés aux frais des candidats

Article 24

Les candidats peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.

Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque candidat pour la totalité de la campagne pour le premier tour.

Doivent être également décomptés à ce titre:

- le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les candidats;
- l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.

Les documents sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans décompte mentionné au deuxième alinéa.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 6.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

Le coût de ces documents devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.

Section 2: Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition: station infographique

Article 25

Il est mis à la disposition des candidats quatre cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Article 26

Une cellule est mise à la disposition des candidats à concurrence de:

- une heure pour chaque émission de petit format;
- deux heures pour chaque émission de format moyen;
- deux heures pour chaque émission de grand format.

Les candidats envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur désigné à l'article 6, vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Les candidats ont en outre la possibilité de donner au coordonnateur des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % définis à l'article 24.

Section 3: Post-production des émissions

Article 27

Onze cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Article 28

Pour les émissions de petit format, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures.

Pour les émissions de format moyen, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de huit heures.

Pour les émissions de grand format, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de huit heures.

Le montage final d'une émission, sous-titrage et incrustation de la traduction en langue des signes inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Article 29

A la fin du montage des émissions et une fois celles-ci sous-titrées et incrustées de la traduction en langue des signes, le représentant du candidat signe sur place le bon à diffuser

des émissions. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Ce bon à diffuser est validé par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission télévisée enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser.

Article 30

Les émissions diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités techniques du sous-titrage sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 6.

Article 31

Le candidat qui le souhaite peut également utiliser, pour les émissions de son choix diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision), la traduction en langue des signes en association avec le sous-titrage mentionné à l'article 30. Les modalités techniques de cette traduction sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 6.

CHAPITRE III: LES ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES

Article 32

Les candidats peuvent:

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de postproduction. Ils disposent de 45 minutes pour l'enregistrement et 30 minutes pour le montage et le mixage des émissions de petit format, 60 minutes pour l'enregistrement et 45 minutes pour le montage et le mixage des émissions de format moyen; 60 minutes pour l'enregistrement et 45 minutes pour le montage et le mixage des émissions de grand format;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de 30 minutes pour le montage final des émissions de petit format, 45 minutes pour le montage final des émissions de format moyen et 45 minutes pour le montage final des émissions de grand format;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux candidats.

Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33

Les candidats ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le candidat au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 34

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du candidat. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au candidat. A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 35

En cas d'incident technique non imputable aux candidats, les temps prévus aux articles 17, 20, 26, 28 et 32 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 36

Les enregistrements des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France 3.

TITRE II: PROGRAMMATION

Article 37

Les émissions sont programmées du lundi 9 avril au samedi 14 avril 2007 et du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2007.

Les émissions de petit, moyen ou grand format programmées le vendredi 20 avril en métropole sont programmées sur les antennes télévisées de RFO (premier réseau) et sur les antennes radiophoniques de RFO (programme radiophonique propre) le jeudi 19 avril après les émissions du même jour en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.

Les émissions programmées le vendredi 20 avril en métropole sont programmées le jeudi 19 avril sur les antennes de RFI diffusées sur le continent américain et dans les Caraïbes.

Article 38

Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Article 39

Les émissions diffusées sont de trois types:

- des émissions de petit format, d'une durée de 1 minute;
- des émissions de format moyen, d'une durée de 2 minutes 30 secondes;
- des émissions de grand format, d'une durée d'environ 5 minutes 30 secondes.

Section 1: Télévision

Article 40

Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants:

- sur France 2, vers 19 h 40 avant le journal de 20 heures;
- sur France 3, vers 17 h 45 et vers 18 heures le samedi 14 avril;
- sur France 4, vers minuit du lundi au jeudi, vers 23 h 15 le vendredi, et vers 22 h 45 le samedi 14 avril;
- sur France 5, vers 17 h 30 immédiatement avant «C dans l'air» et vers 17 h 35 le samedi 14 avril.

Article 41

Les horaires de diffusion des émissions de format moyen sont les suivants:

- sur France 2, vers 13 h 45 après la météo;
- sur France 3, vers 22 h 45 immédiatement avant «Soir 3»;
- sur France 4, vers 16 heures et le samedi 14 avril vers 15 h 55;
- sur France 5, vers 13 h 10 du lundi au vendredi et vers 13 heures le samedi 14 avril.

Article 42

Les horaires de diffusion des émissions de grand format sont les suivants:

- sur France 2, vers 8 h 45 après «Télématin» et vers 10 h 45 le samedi 14 avril;
- sur France 3, vers 11 heures avant le «12/13» et vers 10 h 30 le samedi 14 avril avant les émissions régionales;
- sur France 4, vers 9 h 30 et le samedi 14 avril vers 10 h 30;
- sur France 5, vers 6 h 05 du lundi au vendredi et vers 6 h 25 le samedi 14 avril.

Section 2: Radio

Article 43

Sur France Inter:

- les émissions de petit format sont programmées vers 14 h 50;
- les émissions de format moyen sont programmées vers 20 h 08;
- les émissions de grand format sont programmées vers 23 h 16.

Section 1: Télévision

Article 44

Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les antennes télévisées de RFO (premier réseau) dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale:

a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 20 heures en Guadeloupe, vers 19 h 56 en Guyane, vers 19 h 55 en Martinique, vers 20 h 10 à La Réunion, vers 20 heures à Mayotte, vers 19 h 15 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 20 heures à Wallis et Futuna, vers 19 h 50 en Polynésie française et vers 19 h 50 en Nouvelle-Calédonie;

b) Les émissions de format moyen sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 11 h 45 en Guadeloupe, vers 13 h 06 en Guyane, vers 13 h 55 en Martinique, vers 12 h 15 à La Réunion, vers 14 h 35 à Mayotte, vers 13 h 25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 21 h 30 à Wallis et Futuna, vers 21 h 30 en Polynésie française et vers 21 heures en Nouvelle-Calédonie;

c) Les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 7 h 30 en Guadeloupe, vers 7 h 50 en Guyane, vers 7 h 30 en Martinique, vers 7 h 30 à La Réunion, vers 7 h 30 à Mayotte, vers 7 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 13 h 30 à Wallis et Futuna, vers 13 h 40 en Polynésie française et vers 13 heures en Nouvelle-Calédonie.

Section 2: Radio

Article 45

Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les antennes radiophoniques de RFO (programme radiophonique propre) dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale:

a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 7 h 45 en Guadeloupe, vers 8 h 10 en Guyane, vers 8 h 10 en Martinique, vers 8 h 15 à La Réunion, vers 7 h 15 à Mayotte, vers 12 h 40 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 19 h 30 à Wallis et Futuna, vers 7 h 15 en Polynésie française et vers 18 h 15 en Nouvelle-Calédonie;

b) Les émissions de format moyen sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 13 h 45 en Guadeloupe, vers 14 h 07 en Guyane, vers 13 h 20 en Martinique, vers 12 h 30 à La Réunion, vers 19 h 15 à Mayotte, vers 8 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 20 h 10 à Wallis et Futuna, vers 13 h 05 en Polynésie française et vers 19 heures en Nouvelle-Calédonie;

c) Les émissions de grand format sont programmées le même jour qu'en métropole: vers 19 h 45 en Guadeloupe, vers 19 h 07 en Guyane, vers 19 h 30 en Martinique, vers 19 h 10 à La Réunion, vers 13 h 15 à Mayotte, vers 18 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 21 h 10 à Wallis et Futuna, vers 18 h 05 en Polynésie française et vers 13 heures en Nouvelle-Calédonie.

Article 46

Les émissions de petit format de la campagne officielle sont programmées sur l'ensemble du réseau mondial de RFI le même jour qu'en métropole à 11 h 10 TU (13 h 10 heure de Paris), sauf en Chine, dans la péninsule coréenne et en Asie du Sud-Est où elles sont diffusées à 15 h 10 TU (17 h 10 heure de Paris).

Article 47

Les éditeurs mentionnés aux articles 40, 43, 44, 45 et 46 veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne.

Article 48

En cas d'incident de diffusion, l'éditeur concerné en informe immédiatement et précisément le coordonnateur.

Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en formation plénière.

Article 49

Les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Radio France Internationale sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Recommandation n° 2006-7 du 7 novembre 2006

du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle
JORF n° 262 du 11 novembre 2006

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée, et notamment son article 11;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 6;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 26 octobre 2006;

Après en avoir délibéré,

En application des articles 13 et 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 1er décembre 2006 et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle.

Toutefois, la recommandation ne s'applique pas aux services de télévision et de radio:

qui sont exclusivement accessibles par internet en dehors d'un bouquet de services de télévision ou de radio;

et qui sont dédiés spécifiquement à la propagande électorale des candidats ou des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

1. REGLES APPLICABLES AU TRAITEMENT DE L'ACTUALITE ELECTORALE

1.1. Définitions et principes généraux

Conformément au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, la campagne en vue de l'élection du Président de la République française est ouverte, pour le premier tour, à compter du deuxième lundi précédant le premier tour du scrutin et, pour le second tour à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter pour le second tour.

Préalablement à la période de campagne, la recommandation prévoit:

- une période dite "préliminaire" allant du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel;
- une période dite "intermédiaire" allant de la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne.

1.1.1. La notion de candidat

a) Durant la période préliminaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par:

- candidat déclaré: toute personne ayant manifesté publiquement sa volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de sa candidature à l'agrément d'un parti politique; pour être prise en compte, la déclaration de candidature doit s'accompagner d'actes de campagne significatifs attestant du sérieux de celle-ci.
- candidat présumé: toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens publics et significatifs à sa candidature.

b) Durant la période intermédiaire et la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par candidat toute personne figurant sur la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel.

c) Interventions de candidats investis de fonctions officielles

Les propos tenus par les candidats investis de fonctions officielles sont comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un bilan de l'action passée, à exposer les éléments d'un programme ou s'ils peuvent avoir un impact direct et significatif sur le scrutin en excédant manifestement le champ de compétence de ces fonctions officielles.

Cette répartition s'applique également aux personnes apportant leur soutien à une candidature.

1.1.2. Définition du temps de parole et du temps d'antenne

Le temps de parole comprend toutes les interventions d'un candidat ou de ses soutiens.

Le temps d'antenne comprend le temps de parole et l'ensemble des éléments éditoriaux consacrés à un candidat et à ses soutiens, tels que précisés dans le guide d'application joint en annexe.

1.1.3. Accès et présentation à l'antenne

a) Pendant la période préliminaire, les services de radio et de télévision veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent.

L'équité s'applique au temps d'antenne et au temps de parole.

L'équité entre candidats devra être appréciée au regard d'un ensemble d'éléments précisés dans le guide d'application joint en annexe.

b) Pendant la période intermédiaire, les services de radio et de télévision veillent à appliquer aux candidats et à leurs soutiens:

- le principe d'équité en ce qui concerne le temps d'antenne,
- le principe d'égalité en ce qui concerne le temps de parole.

Ce principe d'égalité implique que les temps de parole des candidats et de leurs soutiens soient égaux.

c) Pendant la période de campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel applique le principe d'égalité à tous les candidats et à ceux qui les soutiennent.

Ce principe d'égalité implique que les temps de parole et temps d'antenne consacrés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables.

d) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d'honnêteté et ne doivent défavoriser aucune des candidatures.

Elles veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.

Les services de télévision et de radio veillent en particulier à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique:

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

1.2. Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio de veiller aux dispositions suivantes

1.2.1. En ce qui concerne les programmes d'information (journaux ou émissions d'information quotidiennes, magazines ou émissions spéciales d'information)

a) Pendant la période préliminaire, l'équité concernant l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de leurs soutiens doit être respectée à la fois en temps cumulé à compter du 1er décembre 2006 et:

- pour l'ensemble de la période allant du 1er décembre 2006 au 29 décembre 2006;
- par période bimensuelle du 30 décembre 2006 jusqu'au vendredi 2 mars 2007,
- par période hebdomadaire à compter du 3 mars 2007.

b) pendant la période intermédiaire, le principe d'égalité applicable au temps de parole et le principe d'équité applicable au temps d'antenne doivent être respectés en temps cumulé et par période hebdomadaire sur l'ensemble de cette période.

c) Pendant la période de campagne, l'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables.

Cette égalité doit être respectée, pour le premier tour de scrutin, sur l'ensemble de la campagne.

Pour le second tour, elle doit être respectée, d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et, d'autre part, du lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.

1.2.2. En ce qui concerne les autres émissions du programme

Dans cette catégorie de programmes, les services devront respecter, pour les seuls temps de parole :

- pendant l'ensemble de la période préliminaire, le principe d'équité;
- pendant l'ensemble de la période intermédiaire, le principe d'égalité;
- pendant la campagne:
  - pour le premier tour de scrutin, le principe d'égalité sur l'ensemble de la campagne;
  - pour le second tour, le principe d'égalité d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et d'autre part, du lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.

Si ces principes ne peuvent être respectés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats ou de ceux qui les soutiennent dans ces émissions.

1.3. Relevés des interventions des candidats et de ceux qui les soutiennent

a) Relevés effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit un décompte des temps de parole et des temps d'antenne consacrés aux candidats et à leurs soutiens relevés sur les antennes des services suivants:

- TF1;
- France 2;
- France 3 pour son programme national;
- Canal+ pour ses programmes en clair;
- M6 pour son programme national.

b) Relevés effectués par les éditeurs de services de télévision

Les éditeurs de service de télévision suivants transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des candidats et de leurs soutiens sur leur antenne selon un calendrier détaillé dans le guide d'application joint en annexe à la présente recommandation:

- France 4;
- France 5 pour l'ensemble de son programme;
- Réseau France Outremer pour ses programmes régionaux et pour France;
- France 3 pour ses programmes régionaux ou locaux;
- Métropole Télévision (M6) pour ses programmes locaux;
- LCI;
- I-Télé;
- BFM TV;
- Euronews;
- NT1;
- Direct 8;
- TMC;
- Canal+ et ses déclinaisons pour ses programmes cryptés;
- TV5 pour ses programmes propres;
- France 24.

Les autres services de télévision communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des candidats et de leurs soutiens.

c) Relevés effectués par les services de radio

Les éditeurs de service de radio suivants transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des candidats et de leurs soutiens sur leur antenne selon un calendrier détaillé dans le guide d'application joint en annexe à la présente recommandation:

- Réseau France Outremer;
- Radio France (France Info, France Inter, France Culture, France Musique et les antennes régionales de France Bleu);
- RFI;
- Europe 1;
- RTL;
- BFM;
- RMC Info;
- Radio Classique.

Les autres services de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.

d) Transmission d'autres éléments d'information

Tous les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées.

Toutes les sociétés mentionnées aux b) et c) gardent à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les enregistrements vidéo ou audio des émissions concernées pendant la période couverte par la recommandation.

1.4. Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes

Les sociétés visées au a) du 1.3. veillent à favoriser l'accès (par sous-titrage et/ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité électorale diffusés aux heures de grande écoute.

1.5. Emissions d'expression directe

La programmation des émissions d'expression directe est suspendue à compter du 1er janvier 2007 jusqu'à la date du scrutin où l'élection est acquise pour les formations politiques et les organisations professionnelles et syndicales.

2. ACTUALITE NON LIEE A L'ELECTION PRESIDENTIELLE

a) En ce qui concerne l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, dans des conditions de programmation comparables.

En outre, les services de télévision et de radio continuent de veiller à assurer un temps d'intervention équitable:

- aux personnalités appartenant à des formations parlementaires ne se rattachant ni à la majorité, ni à l'opposition;
- aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.

Conformément à la pratique constante du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les interventions du Président de la République ne sont pas prises en compte dès lors qu'elles ne sont pas effectuées à titre de candidat ou de soutien à un candidat.

b) Dans leurs programmes locaux, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.

3. RAPPEL D'OBLIGATIONS LEGALES

3.1. Publicité

Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou aux conséquences éventuelles du scrutin.

Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection présidentielle, ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.

3.2. Propagande électorale

Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'ensemble des services de radio et de télévision concernés de ne pas diffuser de message ayant le caractère de propagande électorale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française à partir de la veille du scrutin à 0 heure (heures locales) sur le territoire des collectivités concernées.

Conformément à l'article L.52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du 6e mois précédant celui-ci.

Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'ensemble des services de radio et de télévision de ne pas diffuser de résultats partiels ou définitifs du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote dans le territoire concerné (métropole ou collectivité située en outre-mer).

Les services de radio et de télévision diffusant sur le territoire métropolitain s'abstiennent de faire connaître avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, non seulement les résultats métropolitains, mais encore ceux enregistrés dans des collectivités situées en outre-mer ou dans des centres de vote à l'étranger.

Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.

Les services de télévision traitant de l'actualité électorale le jour du scrutin sur le territoire métropolitain sont invités, au plus tard cinq minutes avant la clôture du dernier bureau de vote, à incruster à l'écran l'heure, à la seconde près.

3.3. Sondages

Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

3.4. Droit de réponse

Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.

3.5. Jurisprudence du juge de l'élection

Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.

Ils veillent en particulier à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2006

III.4. Jurisprudencia

III.4.1. Conseil Constitutionnel

Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 sur la Loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution (Non conformité partielle)
JORF n° 11 du 14 janvier 2009

Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 sur la Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (Non conformité partielle)
JORF n° 11 du 14 janvier 2009

Décision ELEC.Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007
JORF nº 129 du 4 juin 2008

Décision du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
JORF nº 109 du 11 mai 2007

Décision. Déclaration du 25 avril 2007 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
JORF nº 98 du 26 avril 2007

Décision du 19 avril 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Jean-Claude Galland
JORF nº 95 du 22 avril 2007

Décision du 5 avril 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Gérard Schivardi
JORF nº 83 du 7 avril 2007

Décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle
JORF nº 67 du 20 mars 2007

Décision du 07 juin 2007 Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007
JORF nº 137 du 12 juin 2007

Décision du 3 mai 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Pascal JAN
JORF nº104 du 4 mai 2007

III.5. Otros documentos

Recommandation du Forum des droits sur l'internet «Internet et communication électoral»
Publié le 20 octobre 2006
Le Forum des droits sur l'internet
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-ice-20061017.pdf

Recommandation du Forum des droits sur l'internet «Le vote électronique et la modernisation du processus électoral: les machines à voter»
Publié le 1er septembre 2008
http://www.foruminternet.org/IMG/pdf/reco-vote-electronique20080630.pdf

III.6. Bibliografía

1. ALEXANDER, Gerard: "France: reform-mongering between majority runoff and proportionality", en Josep. M. Colomer (ed.): *Handbook of Electoral System Choice.* Houndmills (Basingstoke): Palgrave Macmillan, 2004; pp.209-221.

2. AROMATORIO, Sylvano: "L'absence traditionnelle du mode de scrutin dans la Constitution française: cause de l'instabilité chronique des modes de scrutin législatifs", en *Revue Française de Droit Constitutionnel,* nº 71, juil., 2007; pp.601-622.

3. BALINSKI, Michel: *Le suffrage universel inachevé.* Paris: Belin, [2004]. (Débats).

4. BENESSIANO, William: "Le vote obligatoire", en *Revue Française de Droit Constitutionnel,* nº 61, janvier, 2005; pp.73-115.

5. BENUCCI, Carlo: "Dal rosso al nero?: i mutamenti di voto nella banlieue parigina", en *Quaderni dell'Osservatorio Elettorale,* nº 53, giugno, 2005; pp.63-114.

6. BLAIS, André: "Mode de scrutin et système de partis: les deux tours dans une perspective comparative", en A. Laurent y P. Delfosse (dirs.): *Les Systèmes Électoraux: permanences et innovations.* Paris [etc.]: L'Hartmattan, 2004; pp.47-70.

7. BOSC, Marc: "Réformer un parlement", en *Informations Constitutionnelles et Parlementaires,* nº 192, 2006; pp.3-24.

8. BRÉCHON, Pierre: "Campagnes électorales d'hier à aujourd'hui", en Regards sur l'Actualité, nº 329, mars, 2007; pp.5-16.

9. ——: "Les élections présidentielles dans le système politique français", en *Les Études de la Documentation Française,* nº 5266-5267, 2008; pp.9-19.

10. CANTOS PADILLA, Isabel María: "Elecciones presidenciales en Francia, abril-mayo 2007", en *Revista de Derecho Político,* nº 70, sept.-dic., 2007; pp.289-321.

11. ——: "Las elecciones presidenciales y legislativas de 2002 en Francia", en *Revista de Derecho Político,* nº 55-56, 2002; pp.473-544.

12. CASELLA, Rino: "La riforma del calendario elettorale e le nuove prospettive della quinta reppublica", en *Quaderni Costituzionali,* nº 3, dic., 2001; pp.557-566.

13. COLLIARD, Jean-Claude: "Le système de partis ou la Constitution politique de la Ve République", en *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger,* nº especial, 1998; pp.1611-1624.

14. DEBARD, Thierry y ROBBE, François, (dirs.): *Le caractère équitable de la représentation publique.* Paris [etc.]: L'Hartmattan, [2004]. (Questions contemporaines).

15. DOLEZ, Bernard: "L'équation voix: sièges et le scrutin majoritaire à deux tourd: l'exemple de la France", en A. Laurent y P. Delfosse (dirs.): *Les Systèmes Électoraux: permanences et innovations*. Paris[etc.]: L`Hartmann, 2004; pp.93-105.

16. DOW, Jay K.: "A comparative spatial analysis of majoritarian and proportional elections", en *Electoral Studies: An International Journal*, v. 20, nº 1, march, 2001; pp.109-125.

17. DUVAL, Jean-Marc: "La sanction des comportements irréguliers relevés au cours des opérations électorales", en *Revue Française de Droit Constitutionnel,* nº 48, oct.-déc., 2001; pp.825-846.

18. ELGIE, Robert: “France: stacking the deck”, en Michael Gallagher y Paul Mitchell (eds.): *The Politics of Electoral Systems.* Oxford: Oxford University Press, 2005; pp.119-136.

19. FANSTEN, Michel: “L’indice de Condorcet: représentation et analyse des comportements électoraux”, en *Revue Française de Science Politique,* v. 56, nº 4, août, 2006; pp.653-709.

20. FRAISSEIX, Michel: “Propos iconoclastes sur l’avenir de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct”, en *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger,* nº 6, nov.-déc., 2001; pp.1749-1777.

21. FRANCIA. SÉNAT. COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, de Législation du Suffrage Universel du Réglement et d’Administration Générale: “Rapport sur le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée Nationale, relatif à l’élection du Président de la République”, en Hugues Portelli (ponente): *Les Rapports du Sénat,* nº 274, 2005
También accesible en: http://www.senat.fr/rap/105-274/105-274.html.

22. FRANCIA. SÉNAT. DÉLEGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LE HOMMES ET LES FEMMES: “Rapport d’information sur la proposition de loi nº 313 (2002-2003) portant réforme de l’élection des sénateurs”, en Gisèle Gautier (ponente): *Les Rapports du Sénat,* nº 324, 2002

23. FRANCIA. SÉNAT. DIVISION DE ÉTUDES DE LÉGISLATION COMPARÉE: “L’inscription sur les listes électorales”, en *Les Documents de Travail du Sénat,* nº 161, mars, 2006

24. GÁLVEZ MUÑOZ, Luis: “Un hito en la lucha contra la prohibición temporal de publicar encuestas electorales: la sentencia 5302, de 4 de septiembre de 2001, de la Corte de Casación francesa”, en Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, nº 14, 2002; pp.171-193.

25. GHEVONTIAN, Richard: “Constitution et élections”, en *Annuaire International de Justice Constitutionnelle,* 2003; pp.161-178.

26. GROSIEUX, Patrick: “Le parrainage des prétendants à l’élection présidentielle: simple formalité juridique”, en *Revue Française de Droit Constitutionnel,* nº 59, juillet, 2004; pp.567-594.

27. GUILLÉN LÓPEZ, Enrique: “Los procesos electorales en Francia: apuntes de un constitucionalista español sobre las últimas elecciones presidenciales y legislativas en Francia”, en Miguel A. García Herrera (ed.): *Constitución y Democracia: 25 años de Constitución y democracia en España: actas del congreso celebrado en Bilbao los días 19 a 21 de noviembre de 2003.* Bilbao: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, v. I, [2005]; pp.521-530.

28. HÉRIN, Jean Louis: “Les exclus du droit de vote”, en *Pouvoirs,* nº 120, 2006; pp.95-107.

29. JÉRÔME, Bruno; JÉRÔME-SPEZIARI, V., y LEWIS-BECK, M. S.: “Reordering the Frech election calendar: forecasting the consequences for 2002”, en *European Journal of Political Research,* v. 42, nº 3, may, 2003; pp.425-440.

30. KERROUCHE, Eric: “Appréhender le rôle des parlementaires: étude comparative des recherches menées et perspectives”, en Oliver Costa; Eric Kerrouche, y Paul Magnette (eds.): *Vers un Renouveau du Parlementarisme en Europe?* Bruxelles: Université de Bruxelles, [2004]; pp.35-55.

31. LE NAOUR, Jean-Yves: *La famille doit voter: le suffrage familial contre le vote individuel.* Paris: Hachette Littératures, [2005].

32. LEWIS-BECK, Michael S., (ed.): *How France votes.* New York [etc.]: Chatham House, 2000.

33. MARTIN, Pierre: “Les modes de scrutin aux élections en France et leurs conséquences politiques”, en *Regards sur l’Actualité,* nº 329, mars, 2007; pp.17-25.

34. MAYER, Ingrid Alice: “Gleichstellung von Frauen und Männern auf der Kandidaten-Ebene im Wahlrecht Frankreichs”, en *Europäische Grundrechte Zeitschrift,* nº 1-3, feb., 2005; pp.17-22.

35. MAYER, Nonna, (dir.): *Les modeles explicatifs du vote.* Paris [etc.]: L’Harmattan, 1997. (Logiques politiques).

36. MOSSUZ-LAVAU, Janine: “Les françaises et la politique: de la citoyenneté à la parité”, en *Regards sur l’Actualité,* nº 236, déc., 1997; pp.3-14.

37. OWEN, Bernard, (dir.): *Processus électoral: permanences et évolutions: réflexions à partir des actes du colloque réuni au Sénat le 22 novembre 2005.* Levallois: Studyrama, [2006]. (Panorama du droit; 415. Recherche).

38. PERRAUDEAU, Éric: “Le système des partis sous la Ve République”, en *Pouvoirs,* nº 99, 2001; pp.101-115.

39. PERRIN, Bernard: “2001, trois scrutins, quelles réformes?”, en *La Revue Administrative,* nº 311, sept.-oct., 1999; pp.499-502.

40. REDONDO RODELAS, Javier: *Estructuras electorales, conflictos de división y representación política en las democracias avanzadas [recurso electrónico]: tesis doctoral.* Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2004.

41. REYDELLET, Michel: “Le bicaméralisme a-t-il un avenir en France?”, en *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger,* nº 6, nov.-déc., 2001; pp.1779-1842.

42. SAINTENY, Guillaume: “La règle électorale comme moyen de protection contre les nouveaux acteurs politiques: l’exemple français”, en *Canadian Journal of Political Science = Revue Canadienne de Science Politique,* v. 37, nº 1, march, 2004; pp.95-115.

43. SÁNCHEZ NAVARRO, Ángel: “Actualidad constitucional francesa”, en *Teoría y Realidad Constitucional,* nº 7, 2001; pp.283-297.

44. SERMET, Laurent: “Comment obtenir la révision de la carte des circonscriptions législatives?”, en *L’Actualité Juridique Droit Administratif,* nº 43, 2007; pp.2357-2364.

45. SUBILEAU, Françoise: “L’abstention: participation, représentativité, legitimité”, en *Regards sur l’Actualité,* nº 287, janv., 2003; pp.5-16.

46. THIÉBAULT, Jean-Louis: “France: delegation and accountability in the Fifth Republic”, en Kaare Strom; Wolfgang C. Müller, y Totbjörn Bergman (eds.): *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies.* Oxford: Oxford University Press, 2003; pp.325-346.

47. TORRES VELA, Javier: *Una propuesta de reforma del sistema electoral.* Barcelona: Institut de Ciéncies Polítiques i Socials, 2003. (Working papers; 217).

III.7. Direcciones web

Le service public de la difusion du droit
http://www.legifrance.gouv.fr/

Conseil Constitutionel
http://www.conseil-constitutionnel.fr

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
http://www.csa.fr

Ministère des affaires étrangères et européennes
France diplomatie
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

Ministère de l'Intérieur
http://www.interieur.gouv.fr

Le portail de l`administration française
http://www.service-public.gouv.fr/

Société de l'information
http://www.internet.gouv.fr/

Le Forum des droits sur l'internet
http://www.foruminternet.org/institution/

Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM
Biblioteca Jurídica Virtual
http://www.bibliojuridica.org

Portail du droit français
http://www.droit.org/

Red de conocimientos electorales ACE
http://aceproject.org/

Recursos Electorales en la Internet /
http://electionresources.org

BBC
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/

Web Francia en América Latina
http://www.webfrancia.com

Union Interparlementaire
http://www.ipu.org
http://www.liberalismo.org/
http://www.transparency.org

IV. Italia

IV.1. Normativa sobre Elecciones a la "Cámara de diputados"

IV.1.1. **Constitución de la República Italiana** (1947)

Artículos: 48–49; 51; 55-58; 60-61; 65-66; 84; 87-88; 104; 122; 135

L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, Modifiche agli articoli 56 e57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (art. 3)

IV.1.2. Legislación

Normas fundamentales:

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Legge. 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Reglamento de la Cámara de Diputados. (Texto aprobado por la Cámara el 18 de enero de 1971): CAPÍTULO IV.- De las Juntas

Regolamento della Giunta delle elezioni. (Aprovato con deliberazione dell'Assemblea del 6 ottobre 1998)

Normas de desarrollo:

Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.

Legge 22 Febbraio 2000, n.28
Disposizioni per la parita" di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Legge 04 Aprile 1956, n.212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003

IV.2. Jurisprudencia

Ordinanza 384/2004
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato camera di consiglio del 07/07/2004 Decisione del 01/12/2004

Ordinanza 195/2003
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato camera di consiglio del 23/05/2003 Decisione del 23/05/2003

Constitución de la República Italiana en el *Título I El Parlamento,* en la Sección I "La Cámara" establece que la "Cámara de Diputados" se elige por sufragio universal y directo. Puede ser elegido diputado cualquier elector que haya cumplido los 25 años edad. Los diputados son elegidos para un periodo máximo de 5 años.

La norma que regula el sistema de elección a Cámara de Diputados es el D.R.P. de 30 de marzo de 1957 nº 361, que, debido a su antigüedad, ha sufrido numerosas modificaciones, fundamentalmente las introducidas por la Ley de 21 de diciembre de 2005, nº 270, que ha renovado el sistema para la elección de diputados modificando varios artículos del texto originario del D.R.P. y por el Decreto-Ley de 8 de marzo de 2006, nº 75, convertido, con modificaciones, en la Ley de 20 de marzo de 2006, nº 121.

De acuerdo con la ley de 21 de diciembre 2005, nº 270 la Cámara es elegida mediante un sistema proporcional y ha introducido el "premio de mayoría" a favor de la lista más votada.

La Cámara está compuesta por 630 miembros, que proceden de las siguientes circunscripciones:

- 617 diputados corresponden a las 26 circunscripciones en que se divide el territorio nacional.
- 1 diputado, elegido por sistema mayoritario uninominal, procede del Valle d'Aosta, que constituye una circunscripción única.
- 12 diputados que vienen de la circunscripción del extranjero conforme a lo establecido en la Ley nº 459 de 2001 y el Reglamento de actuación D.P.R. nº 104 de 2003.

La circunscripción del extranjero se divide en: Europa; América meridional; América septentrional y central; y África, Asia, Oceanía y Antártica.

IV.1. Normativa relativa a las Elecciones de la "Cámara de Diputados"

IV.1.1. Constitución de la República Italiana (1947)

Artículos: 48–49; 51; 55-58; 60-61; 65-66; 84; 87-88; 104; 122; 135

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (*).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

[…]

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini (*).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(*) L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.

[...]

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56 (*)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e, in seguito, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

Articolo 57 (*)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una

seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

[…]

Articolo 60 (*)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

[…]

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

[…]

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

[…]

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difusa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (*).

(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

[…]

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente Della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale Della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono inmediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 122 (*)

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.(**)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinión espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:
"1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente."

[…]

Articolo 135 (*)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuevamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (art. 3).

Pubblicata in: G.U. 24.01.2001 N. 19

[…]

Art. 3
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

[…]

IV.1.2. Legislación

NORMAS FUNDAMENTALES

Legge 20 Gennaio 1948, n.6
Norme per l'elezione della camera dei deputati
Pubblicata in: G.U. 26.01.1948 N. 20 Suppl. Ord.

Legge 6 Febbraio 1948 , n. 29
Norme per la elezione del Senato della Repubblica
Pubblicata in: G.U. 7 febbraio 1948, Supplemento ordinario N. 31

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Pubblicata in: G.U. 03.06.1957 N. 139 Suppl. Ord.

Legge 4 agosto 1993, n. 276
Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Pubblicata in: G.U. 6 agosto 1993 N.183

Legge 04 Agosto 1993, n. 277
Nuove norme per l'elezione della camera dei deputati.
Pubblicata in: G.U. 06.08.1993 N. 183

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del senato della repubblica.
Pubblicata in: G.U. 27.12.1993 N. 302 Suppl. Ord.

Decreto del Presidente della Repubblica 05 gennaio 1994, n.14
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della camera dei deputati
Pubblicata in: G.U. 11.01.1994 N. 7

Legge. 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
Pubblicata in: G.U. 05.01.2002 N. 4

Decreto del Presidente Della Repubblica 02 Aprile 2003, n.104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
Pubblicata in: G.U. 13.05.2003 N. 109

Legge 21 Dicembre 2005, n.270
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Pubblicata in: G.U. 30.12.2005 N. 303 Suppl. Ord.

Reglamento de la Cámara de Diputados. (Texto aprobado por la Cámara el 18 de enero de 1971): CAPÍTULO IV.- De las Juntas

Regolamento della Giunta delle elezioni. (Aprovato con deliberazione dell'Assemblea del 6 ottobre 1998)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.1

El D.P.R de 30 marzo 1957, n.361 ha sido modificado por: Legge 21 de dicembre 2005, nº 270; Decreto-legge 8 marzo 2006, nº 75; Legge 20 marzo 2006, nº 121.

Debido a que no hay un texto unificado del D.P.R. de 30 marzo 1957, n.361, recogemos a continuación el publicado en "*Manuale elettorale: Le norme per le elezioni politiche",* en el que figuran en negrita las modificaciones introducidas en el D.P.R por las mormas citadas.

TITOLO I.- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, **attribuito a liste di candidati concorrenti.**

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella

A allegata al presente testo unico. **Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,** la ripartizione dei seggi **è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza,** a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

Art. 2

1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Art. 3

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporáneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 4

1. Il voto è un **dovere civico e** un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

TITOLO II. - ELETTORATO

Capo I.- Elettorato attivo

Art. 5

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

---

* Fuente: Manuale elettorale: Le norme per le elezioni politiche.- Camera dei deputati, Servizio studi. 11 marzo 2008. www.camera.it/norme/leggi elettorali/manuale elettorale.

Capo II. - Eleggibilità

Art. 6

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 7

Non sono eleggibili:

[a) *Si omette la lettera a) ("i deputati regionali o consiglieri regionali"), della quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (sent. 344/1993)….]*

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima Della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, **che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,** le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - , anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono

trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedente la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10

Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Statu nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

TITOLO III. - DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 11

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 12

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Art. 13

Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei

comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

Art. 14

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, **elementi e diciture, o solo alcuni di essi,** usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento **anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.**

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 14-bis

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome Della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo Della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni,

provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gaceta ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

Art. 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo **14** deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositante delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli tai all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 17

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà inmediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

[Art. 18 *è stato abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005,* n. 270.]

Art. 18-bis

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti

nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. **In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.**

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Art. 19

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. **A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contextúale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.**

Art. 20

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in tai separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché i il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Art. 21

La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 22

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi **e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis;**

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) *abrogato [legge 21 dicembre 2005 nº 270]*

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno sucesivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Art. 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 24

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) *abrogato [legge 21 dicembre 2005 nº 270]*

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati **di lista**, il numero d'ordine da **assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;**

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste **ammesse**, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di **esse** ai sindaci dei comuni **della circoscrizione** per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale

circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle

sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 29

La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Art. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 40

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

TITOLO IV.- DELLA VOTAZIONE

Art. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. **L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile** a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordenanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore Otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione.

I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono améis al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero Della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero

dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed míese nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 55

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato voluntariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia suelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione

elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspecto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, aponiendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae **dalla caseta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata** insieme alla matita copiativa.

L'elettore, **senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.** Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare **la scheda** secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a

chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, aponiendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

[…] (derogado por la Legge 21 decembre 2005, nº 270)

Art. 59

Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

Art. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare **l'urna e la scatola** recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno Della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono améis a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V.- DELLO SCRUTINIO

Art. 67

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste **nella cassetta** e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

[1...] *(derogado por la Legge 21 decembre 2005, nº 270)*

[2...] *(derogado por la Legge 21 decembre 2005, nº 270)*

3. Compiute le operazioni **di cui all'articolo 67**, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. […] *(derogado por D.Lgs. 20 decembre 1993, nº 534)*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed expresa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

Art. 71

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere inmediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

[…]*(derogado por la Legge 21 decembre 2005, nº 270)*

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria Della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì sucesivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni **della circoscrizione** e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Art. 74

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in

un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano inmediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché **della cassetta**, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

[…]*(derogado por D.Lgs. 20 decembre 1993, nº 534)*

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedente sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in coniformita dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'arte. 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

Art. 77

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.

Art. 79

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste **della circoscrizione**.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 81

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

[…]*(derogado porLegge 4 agosto 1993, nº 277)*

[…]*(derogado por D.Lgs. 20 decembre 1993, nº 534)*

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

[…]*(derogado por D.Lgs. 20 decembre 1993, nº 534)*

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Art. 82

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura Della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 83

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è datadalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste **non collegate** che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi **e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate exclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate exclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;**

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna **di esse**. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali **di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3)** per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna **coalizione di liste o singola lista** per tale quoziente. La parte intera del quoziente così **ottenuta** rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna **coalizione di liste o singola** lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle **coalizioni di liste o singole** liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate exclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al reparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4).

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie **coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3).**

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi

spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile far riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di lista o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di lista o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quinde all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime división hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiamo conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 84

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-**uffici territoriali del Governo**, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 85

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza Della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.

Art. 86

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, **commi 2, 3 e 4.**

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

Art. 87

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

TITOLO VI. – DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO "VALLE D'AOSTA"

Art. 92

L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera

dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto Della metà;

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge.

L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 93

Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

TITOLO VII.- DISPOSIZIONI PENALI

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per acordó con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di

una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Art. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è comeos da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 nel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000.

Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi I rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena Della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione Della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO VIII. - DISPOSIZIONI FINALI

[…]

TITOLO IX. - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 121

Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro eficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

Legge. 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Debido a que no hay un texto unificado de la Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recogemos a continuación el publicado en *"Manuale elettorale: Le norme per le elezioni politiche",* en el que figuran en negrita las modificaciones introducidas en el texto por la **Legge 17 febbrario 2008, nº 30**.

Art. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

[…]

Art. 6

1. Nell'àmbito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

[…]

Art. 8

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

[…]

Art. 11

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad

ogni contrassegno, nell'àmbito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

Art. 12

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, **con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità** agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto [**il testo della presente legge**] e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta.

Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un Sergio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residente all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decretolegge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, **dal segretario** e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente **[e uno quelle di segretario]. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.**

Art. 14

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, **[appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed]** enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 15

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'àmbito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale àmbito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

Art. 16

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'àmbito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

Art. 17

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lengua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai princìpi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

[…]

Art. 22

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'arti colo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

[…]

Reglamento de la Cámara de Diputados

Texto aprobado por la Cámara el 18 de enero de 1971 y publicado en la "Gazzetta Ufficiale" nº 53 del día 1 de marzo de 1971 y modificaciones posteriores.

Se recoge el índice y el articulado del "CAPÍTULO IV.- De las Juntas", el texto completo se puede consultar en : http://www.camera.it/cost_reg_funz/663/copertina.asp

PRIMERA PARTE: DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA

CAPÍTULO I.	Disposiciones preliminares
CAPÍTULO II.	Del Presidente, de la Mesa y de la Conferencia de Presidentes de Grupo
CAPÍTULO III.	De los Grupos parlamentarios
CAPÍTULO IV.	**De las Juntas**
CAPÍTULO V.	De las Comisiones Permanentes
CAPÍTULO VI.	De la organización de los trabajos y del orden del día del Pleno y de las Comisiones

CAPÍTULO VII.	De las sesiones del Pleno, de las Comisiones y del Parlamento en reunión de ambas Cámaras
CAPÍTULO VIII.	De los debates
CAPÍTULO IX.	Del quórum y de los acuerdos
CAPÍTULO X.	De las votaciones
CAPÍTULO XI.	Del orden en las sesiones
CAPÍTULO XII.	De la publicidad de los trabajos
CAPÍTULO XIII.	Del presupuesto de la Cámara
CAPÍTULO XIV.	De las dependencias de la Cámara

SEGUNDA PARTE: DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

CAPÍTULO XV.	De la presentación y tramitación de los proyectos de ley
CAPÍTULO XVI.	Del examen en fase de dictamen
CAPÍTULO XVII.	Del examen en el Pleno
CAPÍTULO XVIII.	Del examen en Comisión con competencia legislativa plena
CAPÍTULO XIX.	Del examen en Comisión de redacción
CAPÍTULO XIX-bis.	De los proyectos de ley de conversión de decretos-leyes
CAPÍTULO XIX-ter.	Del examen de los esquemas de documentos normativos del Gobierno
CAPÍTULO XX.	De los proyectos de leyes constitucionales
CAPÍTULO XXI.	De los Presupuestos Generales y de la cuenta general del Estado
CAPÍTULO XXII.	De los procedimientos en materia de cuestiones regionales
CAPÍTULO XXIII.	De los proyectos de ley ya examinados en la legislatura precedente
CAPÍTULO XXIV.	Del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional
CAPÍTULO XXV.	De las peticiones

TERCERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE ORIENTACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN

CAPÍTULO XXVI.	De las mociones y resoluciones
CAPÍTULO XXVII.	Del examen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, de los Presupuestos, de la cuenta general del Estado, de los documentos de política económica y financiera y de las memorias del Gobierno
CAPÍTULO XXVIII.	De los procedimientos de relación con la actividad de organismos comunitarios e internacionales
CAPÍTULO XXIX.	De las preguntas
CAPÍTULO XXX.	De las interpelaciones
CAPÍTULO XXXI.	De las disposiciones comunes a mociones, interpelaciones y preguntas
CAPÍTULO XXXII.	De las investigaciones parlamentarias
CAPÍTULO XXXIII.	De los procedimientos de investigación, información y control en Comisión
CAPÍTULO XXXIV.	De las relaciones con el Consejo Nacional de Economía y Trabajo (CNEL)
CAPÍTULO XXXV.	De las relaciones con el Tribunal de Cuentas

CUARTA PARTE: DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO XXXVI.	Entrada en vigor

[…]

CAPÍTULO IV.- De las Juntas

Artículo 16

1. La Junta para el Reglamento de la Cámara estará compuesta de diez diputados nombrados por el Presidente en cuanto se hayan constituido los Grupos parlamentarios. Estará presidida por el propio Presidente de la Cámara, quien, oído el parecer de la Junta misma, podrá complementar su composición para una representatividad más adecuada basándose, dentro de lo posible, en criterios de proporcionalidad entre los Grupos.

2. Se encomendarán a la Junta el estudio de cualesquiera propuestas referentes al Reglamento, los dictámenes consultivos sobre cuestiones de interpretación del propio Reglamento y la solución de los conflictos de competencias entre las Comisiones en los casos previstos en el apartado 4 del artículo 72 y en el apartado 4 del artículo 93.

3. La Junta propondrá a la Cámara en Pleno las modificaciones y añadiduras al Reglamento que resulten necesarias a la luz de la experiencia.

3-bis. Toda propuesta de la Junta se discutirá conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII. En el transcurso de la discusión podrá cada diputado presentar una propuesta con principios y criterios directores para la reformulación del texto de la Junta, y al final de la discusión las propuestas podrán ser expuestas por no más de diez minutos cada una y se someterán a votación previa explicación del voto por un diputado de cada grupo durante cinco minutos como máximo cada uno. El Presidente concederá la palabra a los diputados que se propongan emitir un voto distinto del anunciado por su grupo, fijando al mismo tiempo la forma y los límites de tiempo. Será admisible la solicitud de votación por partes separadas sobre principios concretos y criterios directores.

3-ter. En caso de que se hayan rechazado todas las propuestas de principios y criterios directores, se pasará a votar la propuesta de la Junta, previa formulación de las explicaciones de voto. Si se aprobaran una o más de éstas propuestas, presentará la Junta un nuevo texto que contenga los principios y los criterios directores aprobados por el Pleno. En el supuesto de que un presidente de Grupo o veinte diputados expresen disconformidad con la forma en que se hayan recogido los acuerdos del Pleno, podrán presentar propuestas que sustituyan completamente el texto de la Junta en el sentido que ellos consideren ajustado a los principios y criterios directores aprobados. Será aplicable el artículo 89 en cuanto a la admisibilidad de las propuestas.

4. El texto de la Junta será aprobado por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución. De no aprobarse dicho texto, se someterá a votación, del mismo modo, las propuestas sustitutivas a que se refiere el apartado 3 ter, empezando por la que más se acerque al texto de la Junta, admitiéndose una explicación del voto por un diputado de cada Grupo. No se admitirá la votación por partes separadas.

4-bis. Las peticiones de votación nominal o de votación secreta deberán presentarse, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 51, antes del comienzo de la discusión. Si no se hubiere pedido votación de tipo especial, se procederá a una votación nominal cuando fuere necesario comprobar que se da la mayoría a que se refiere el artículo 64 de la Constitución.

5. Se publicarán en el Boletín Oficial cualesquiera normas de modificación o de añadidura al Reglamento.

Art. 16-bis

1. El Comité de Legislación estará compuesto de diez diputados elegidos por el Presidente de la Cámara de tal modo que quede asegurada la representación a partes iguales de la mayoría y de las oposiciones.

2. El Comité será presidido por turnos por uno de sus miembros durante seis meses cada uno.

3. El Comité emitirá opinión consultiva para las Comisiones sobre los proyectos de ley examinados por éstas, conforme a lo que se prevé en el apartado 4. La opinión se formulará en los plazos indicados en el artículo 73, apartado 2, a partir del día de la petición hecha por la Comisión competente. Participarán en el examen en el seno del Comité el ponente del proyecto y el representante del Gobierno.

4. Cuando lo haya pedido un quinto, por lo menos, de sus miembros, las Comisiones transmitirán al Comité los proyectos de ley para que éste emita parecer sobre la calidad de los textos en lo relativo a su homogeneidad y a la sencillez, claridad y propiedad de su formulación, así como a la eficacia de aquéllos para la simplificación y la reordenación de la legislación vigente. El parecer no se pedirá, sin embargo, antes de que se haya elegido el texto aprobado como base para la prosecución del examen, y la petición deberá ser presentada dentro de un plazo compatible con la programación de trabajos de la Comisión y del Pleno en cuanto al proyecto de ley a que se refiera la petición, y no implicará en ningún caso modificaciones en el calendario de los trabajos del Pleno o de la Comisión. Finalizado su examen, el Comité emitirá parecer sobre la base de los criterios y de los requisitos técnicos definidos en las normas constitucionales y ordinarias y en el Reglamento.

5. El parecer consultivo emitido por el Comité para las Comisiones dictaminadoras será impreso y acompañará como anexo al dictamen dirigido al Pleno. Si así lo piden uno o más miembros del Comité que hayan formulado votos particulares, el parecer consultivo dejará constancia de éstos y de sus motivos.

6. Si la Comisión que actúa en función dictaminadora no tuviere intención de ajustar el texto del proyecto de ley a las condiciones expuestas en el parecer del Comité, deberá indicar sus razones en su dictamen al Pleno. Cuando el proyecto de ley esté siendo debatido con competencia legislativa plena o bien con fines redaccionales, se aplicarán respectivamente el apartado 3 del artículo 93 o el apartado 4 del artículo 96.

6-bis. Las Comisiones transmitirán al Comité - tras haber procedido a la elección del texto adoptado como base para el examen sucesivo, o bien en su defecto, como conclusión del examen preliminar mencionado en el artículo 79, apartado 2 - aquellos proyectos de ley que reflejen leyes de delegación legislativa o preceptos que tengan por objeto trasladar a la potestad reglamentaria del Gobierno u otras partes materias que ya estén disciplinadas por ley. El Comité expresará su parecer de acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 y con los efectos previstos por el apartado 6.

7. Podrá el Presidente de la Cámara, cuando lo juzgue necesario, convocar conjuntamente el Comité de Legislación y la Junta de Reglamentos.

Artículo 17

1. La Junta Electoral estará compuesta de treinta diputados nombrados por el Presidente en cuanto se hayan constituido los Grupos parlamentarios, y elevará informe al Pleno a los dieciocho meses, como máximo, de las elecciones, sobre la regularidad de las operaciones electorales, sobre las actas de elección de los diputados y sobre las causas de inelegibilidad, de incompatibilidad y de pérdida del mandato previstas por la ley, formulando las propuestas correspondientes de convalidación, anulación o privación del mandato.

2. La Junta elegirá en su primera reunión un presidente, dos vicepresidentes y tres secretarios, y ejercerá sus funciones conforme a un reglamento interior que, previo examen de la Junta del Reglamento, deberá ser aprobado por la Cámara del modo previsto en el apartado 4 del artículo 16. En el procedimiento ante la Junta Electoral deberá garantizarse en todas sus fases el principio contradictorio y, en la fase de resolución sobre las impugnaciones, el principio de publicidad.

3. Los diputados que compongan la Junta Electoral no podrán negarse a ser nombrados ni presentar la dimisión, y si llegare a presentarse ésta, el Presidente de la Cámara no la notificará al Pleno. Podrán, sin embargo, ser sustituidos a petición propia los diputados que fueren llamados a formar parte del Gobierno o bien a asumir la presidencia de un órgano parlamentario.

4. Cuando la Junta no responda por un mes a una convocatoria reiterada de su presidente, o no sea posible alcanzar el quórum durante ese lapso, procederá el Presidente de la Cámara a renovar la Junta.

Artículo 17-bis

1. Cuando una propuesta de la Junta Electoral en materia de examen de credenciales resulte exclusivamente de comprobaciones numéricas, no se procederá en el Pleno a votación alguna y se considerará aprobada la propuesta, salvo que, antes de que finalice la discusión, veinte diputados pidan, mediante moción razonada, que la Junta proceda a comprobaciones adicionales. Si el Pleno rechaza la moción, se tendrá por aprobada la propuesta de la Junta.

2. El Presidente comunicará a la Cámara en Pleno, la cual tomará nota sin proceder a votación alguna, las renuncias al mandato parlamentario motivadas por la intención de optar a un cargo o a un puesto incompatible con aquél.

3. En caso de que un escaño quede vacante por cualquier causa y de que la ley electoral no prevea que se asigne mediante elección supletoria, el Presidente de la Cámara proclamará electo al candidato que siga inmediatamente al último electo en el orden comprobado como correcto por la Junta Electoral.

4. La Cámara podrá ser convocada incluso tras su disolución para adoptar acuerdos sobre propuestas formuladas por la Junta Electoral.

Artículo 18

1. La Junta para las autorizaciones que se pidan al amparo del artículo 68 de la Constitución estará compuesta de veintiún diputados nombrados por el Presidente de la Cámara en cuanto se hubieren constituido los Grupos parlamentarios, y elevará dictamen al Pleno, en el plazo taxativo de treinta días desde la transmisión efectuada por el Presidente de la Cámara, sobre los suplicatorios de autorización de enjuiciamiento criminal y sobre medidas restrictivas, en su caso, de la libertad personal o domiciliaria contra diputados. En cada caso la Junta formulará, con su dictamen, una propuesta de concesión o de negativa del suplicatorio, si bien deberá, antes de adoptar acuerdo alguno, invitar al diputado interesado a que ofrezca las aclaraciones que estime necesarias.

2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 sin que se haya elevado dictamen ni la Junta haya pedido prórroga, el Presidente de la Cámara nombrará entre los miembros de la Junta un ponente, a quien autorizará para informar oralmente, e incluirá sin más trámite el suplicatorio en el primer punto del orden del día en la segunda sesión plenaria siguiente a aquella en que haya expirado el plazo.

2-bis. Mientras no haya finalizado el debate en el Pleno, podrán veinte diputados formular propuestas razonadas que disientan de las conclusiones de la Junta. En caso de que la Junta haya propuesto la concesión del suplicatorio y no se hayan presentado propuestas de signo distinto, no procederá el Pleno a votación alguna, entendiéndose aprobadas automáticamente las condiciones de la Junta. El Pleno será llamado en todo caso a pronunciarse sobre cualesquiera medidas limitativas de la libertad personal o domiciliaria.

3. Se aplicará asimismo el procedimiento de los apartados precedentes cuando el suplicatorio tenga por objeto el delito de desacato a las Cámaras legislativas. Podrá en tal caso la Junta

encargar a uno o más de sus miembros un examen previo conjunto con mandatarios de la Junta competente del Senado.

4. La Junta elegirá en su primera reunión un presidente, dos vicepresidentes y tres secretarios y ejercitará sus funciones conforme a un reglamento interno que, previo examen por la Junta del Reglamento, deberá ser aprobado por la Cámara del modo previsto en el apartado 4 del artículo 16.

Artículo 18-bis

1. El Presidente de la Cámara enviará inmediatamente a la Junta a que se refiere el artículo 18 los documentos transmitidos por las autoridades judiciales para la adopción de los acuerdos sobre suplicatorios previstos por la Ley Constitucional de 16 de Enero de 1989, nº 1.

Artículo 18-ter

1. La Junta prevista en el artículo 18 dictaminará por escrito dirigido al Pleno, en el plazo taxativo e improrrogable de treinta días desde la transmisión de los documentos por el Presidente de la Cámara, sobre los suplicatorios de enjuiciamiento criminal relativos a los delitos a que se refiere el artículo 96 de la Constitución. Antes de adoptar acuerdo, la Junta invitará al interesado a facilitar las aclaraciones que considere oportunas, autorizándole asimismo, sí el propio interesado lo pidiere, a tomar vista de los documentos del expediente.

2. Cuando la Junta estime que no compete a la Cámara pronunciarse sobre un suplicatorio del tipo previsto en el artículo 5º de la Ley Constitucional de 16 de Enero de 1989, nº 1, propondrá que se devuelvan los autos a la autoridad judicial.

3. Fuera del caso previsto en el apartado 2, la Junta propondrá, con sendas referencias a los imputados, la concesión o, en su caso, la denegación del suplicatorio.

4. El suplicatorio se incluirá en principio como punto primero del orden del día del segundo Pleno siguiente a la fecha en que se presente el dictamen por la Junta y con observancia en todo caso de lo dispuesto en el apartado 5 a continuación. Si hubiere transcurrido el plazo previsto en el apartado 1, sin que se haya presentado el dictamen, el Presidente de la Cámara designará entre los miembros de la Junta a un ponente, autorizándolo a informar verbalmente ante el Pleno, e incluirá en principio el suplicatorio en el primer punto del orden del día de la segunda sesión siguiente a la fecha en que haya expirado el plazo, y con observancia en todo caso de lo dispuesto en el apartado 5 a continuación.

5. Cuando no resulte posible, procediendo conforme al apartado 4, asegurar la observancia del plazo establecido en el artículo 9º, apartado 3, de la Ley Constitucional de 16 de Enero de 1989, nº 1, la Cámara será convocada dentro de dicho plazo para resolver sobre el suplicatorio.

6. Antes de que finalice el debate en el Pleno, podrán veinte diputados o uno o más presidentes de Grupos que separada o conjuntamente sean, como mínimo, de la misma entidad numérica, formular votos particulares respecto a las conclusiones de la Junta, presentando las correspondientes mociones razonadas.

7. El Pleno será llamado a votar en primer lugar sobre las propuestas a que se refiere el apartado 2. En caso de que se rechacen éstas últimas y no se hayan formulado votos particulares, se suspenderá la sesión para que la Junta pueda presentar conclusiones adicionales. Se pondrán, en consecuencia, en votación las propuestas de rechazo del suplicatorio, que se considerarán rechazadas cuando no hayan obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Se considerará como acuerdo de concesión del suplicatorio el rechazo de aquéllas.

8. Si la Junta hubiere propuesto conceder el suplicatorio y no se hubieren formulado votos particulares, no se procederá en el Pleno a votación alguna, entendiéndose aprobadas automáticamente las conclusiones de la Junta.

9. Cuando se haya enviado suplicatorio contra varias personas imputadas como concurrentes en el mismo delito, el Pleno resolverá por separado sobre cada uno.

Artículo 18-quater

1. La Junta a que se refiere el artículo 18 elevará dictamen al Pleno en el plazo taxativo e improrrogable de cinco días desde la transmisión de los autos por el Presidente de la Cámara, sobre los suplicatorios presentados al amparo del artículo 10º, apartado 1, de la Ley Constitucional de 16 de Enero de 1989, nº 1, si bien, antes de tomar acuerdo alguno, la Junta invitará al interesado a facilitar las aclaraciones que considere oportunas o que la propia Junta estime convenientes.

2. Cuando la Junta considere que no compete a la Cámara resolver sobre un suplicatorio del tipo especificado en el artículo 10°, apartados 1 y 5, de la Ley Constitucional de 16 de Enero de 1989, nº 1, propondrá que se devuelvan los autos a la autoridad judicial. En cualquier otro caso la Junta formulará mediante dictamen una propuesta de concesión o denegación del suplicatorio.

3. Para la inclusión del suplicatorio en el orden del día del Pleno, se observará lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 ter. Si no resultare posible asegurar de éste modo el respeto del plazo del artículo 10º, apartado 3, de la Ley Constitucional de 16 de enero de 1989, nº 1, se convocará el Pleno dentro de dicho plazo para resolver el suplicatorio.

4. La Cámara en Pleno será llamada a votar sobre las conclusiones formuladas por la Junta. Si se rechaza la propuesta de devolver los autos a la autoridad judicial a que se refiere el apartado 2 anterior, se suspenderá la sesión para que la Junta pueda formular otras conclusiones.

[…]

Regolamento della Giunta delle elezioni

Aprovato con deliberazione dell’Assemblea del 6 ottobre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998.

(http://www.camera.it/cost_reg_funz/664/1600/1601/listaarticoli.asp)

Capo I: funzioni, organi e poteri della giunta: Funzioni, organi e poteri della Giunta

Art. 1

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina del suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d’età.

2. Nell’elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati che

abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica a comma 2.

Art. 2

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti, Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica del poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunziata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.

Art. 3

1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.

Art. 4

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

Art. 5

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per d tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione del deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

Art. 6

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

2. la cui ostensibilità è limitata ai componenti della Delle riunioni della Giunta è redatto verbale stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibera di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

Art. 7

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del Regolamento della Camera.

Capo II: Procedimento per la verifica dei risultati elettorali

Art. 8

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e del ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

Art. 9

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre distintamente per ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

Art. 10

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

Art. 11

Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione, procede:

a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;

b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, í tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il Comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

3. il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro í successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e í soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

5. Le parti e í soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali, le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal Comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

9. Il relatore rimette all'apposito Comitato, di cui all'articolo 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, d Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

Art. 12

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nel procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di

ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

Art. 13

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e, quindi, di replicare per una volta.

5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure e i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non siano stati presenti alla prima seduta.

10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

11. E' ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

Art. 14

1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

Capo III: procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza

Art. 15

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

Art. 16

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, ineleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso, All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

Art. 17

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

Capo IV: Proclamazione di deputati subentrati in corso di legislatura

Art. 18

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'esito degli accertamenti di cui al comma I è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per í fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

Capo V: Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV legislatura.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del Regolamento stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Camera.

NORMAS DE DESARROLLO

Año 2008

Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica
Pubblicato nella G. U. 6 febbraio 2008, n. 31/L, S.O.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati
Pubblicato nella G. U. 6 febbraio 2008, n. 31/L, S.O.

Decreto-legge 15 Febbraio 2008, n. 24
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008. Testo del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008».
Pubblicata in: G.U. 29.02.2008 N. 51

Legge 27 Febbraio 2008, n. 30
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
Pubblicata in: G.U. 29.02.2008 N. 51

Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
Pubblicata in: G.U. 04.04.2008 N. 80

Legge 30 Maggio 2008, n.96
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.
Pubblicata in: G.U. 03.06.2008 N. 128

Año 2006

Decreto-legge 03 Gennaio 2006, n.1
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.
Testo del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8), recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche».
Pubblicata in: G.U. 28.01.2006 N. 23

Legge 27 Gennaio 2006, n.22
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.
Pubblicata in: G.U. 28.01.2006 N. 23

Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2006
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.
Pubblicata in: G.U. 13.02.2006 N. 36

Decreto-Legge 08 Marzo 2006, n.75
Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Testo del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2006, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 36), recante: «Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalita' di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' disposizioni finanziarie».
Pubblicata in: G.U. 09.03.2006 N. 57

Legge 20 marzo 2006, n. 121
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"
Pubblicata in G. U. 27 marzo 2006 N. 72

Año 2005

Decreto-legge 26 Aprile 2005, n.64
Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 110 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12), recante: «Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
Pubblicata in: G.U. 25.06.2005 N. 146

Año 2003

Legge 05 Febbraio 2003, n.17
Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita'.
Pubblicata in: G.U. 10.02.2003 N. 33

Legge 23 Ottobre 2003, n.286
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
Pubblicata in: G.U. 27.10.2003 N. 250

Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2003, n.395
Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero
Pubblicata in: G.U. 25.02.2004 N. 46

Año 2002

Legge 16 Aprile 2002, n.62
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.
Pubblicata in: G.U. 16.04.2002 N. 89

Legge 27 Maggio 2002, n.104
Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Pubblicata in: G.U. 01.06.2002 N. 127

Año 2001

Legge 06 Luglio 2001, n.271
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
Pubblicata in: G.U. 10.07.2001 N. 158

Año 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre2000, n.299
Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Pubblicata in: G.U. 24.10.2000 N. 249

Año 1996

Decreto-legge 12 Marzo 1996, n.121
Disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.
Pubblicata in: G.U. 13.03.1996 N. 61

Decreto-legge 25 Marzo 1996, n.157
Rinvio della data delle elezioni dei comitati degli italiani all'estero.
Pubblicata in: G.U. 26.03.1996 N. 72

Decreto-legge 10 Maggio 1996, n.257
Ddisposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica. testo del Ddecreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, coordinato con la legge di conversione 8 luglio 1996, n. 368, recante: "disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Ssenato della Repubblica". pubblicata in: g.u. 12.07.1996 n. 162

Legge 08 Luglio 1996, n.368
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Pubblicata in: G.U. 12.07.1996 N. 162

Año 1992

Legge 16 gennaio 1992, n.15
Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Pubblicata in: G.U. 22.01.1992 N. 17

Legge 05 febbraio 1992, n.104
Legge-quadro per l"assistenza, l"integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Pubblicata in: G.U. 17.02.1992 N. 39 Suppl. Ord.

Año 1991

Legge 15 gennaio 1991, n.15
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
Pubblicata in: G.U. 19.01.1991 N. 16

Año 1990

Legge 21 Marzo 1990, n.53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
Pubblicata in: G.U. 22.03.1990 N. 68

Legge 12 Aprile 1990, n.74
Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura
Pubblicata in: G.U. 12.04.1990 N. 86

Año 1979

Legge 07 febbraio 1979, n.40
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.
Pubblicata in: G.U. 16.02.1979 N. 47

Año 1976

Legge 23 Aprile 1976, n.136
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.
Pubblicata in: G.U. 24.04.1976 N. 108

Decreto-legge 03 Maggio 1976, n.161
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche,regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.
Pubblicata in: G.U. 04.05.1976 N. 116

Legge 08 marzo 1975, n.39
Attribuzione della maggiore eta" ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita" di agire al diritto di elettorato.
Pubblicata in: G.U. 10.03.1975 N. 67

Año 1967

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1967, n.223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell"elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Pubblicata in: G.U. 28.04.1967 N. 106

Año 1953

Legge 15 Febbraio 1953, n.60
Incompatibilita' parlamentari
Pubblicata in: G.U. 02.03.1953 N. 51

Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008 Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale e' stata determinata la popolazione legale Della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresi', il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 31 gennaio 2008, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale e' indicato altresi' il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. [...]

TABELLA A: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI		POPOLAZIONE 2001	QUOZIENTE: 92.226		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
I	Piemonte 1	2.165.619	23	44.421*	24
II	Piemonte 2	2.049.058	22	20.086	22
III	Lombardia 1	3.707.210	40	18.170	40
IV	Lombardia 2	3.920.190	42	46.698*	43
V	Lombardia 3	1.405.154	15	21.784	15
VI	Trentino-Alto Acige	940.016	10	17.756	10
VII	Veneto 1	2.713.294	29	38.740	29
VIII	Veneto 2	1.814.400	19	82.106*	20
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	12	77.052*	13
X	Liguria	1.571.783	17	3.941	17
XI	Emilia-Romagna	3.983.346	43	17.628	43
XII	Toscana	3.497.806	37	85.444*	38
XIII	Umbria	825.826	8	88.018*	9
XIV	Marche	1.470.581	15	87.191*	16
XV	Lazio 1	3.700.424	40	11.384	40
XVI	Lazio 2	1.411.989	15	28.599	15
XVII	Abruzzo	1.282.892	13	63.454*	14
XVIII	Molise	320.601	3	43.923	3
XIX	Campania 1	3.059.196	33	15.738	33
XX	Campania 2	2.642.735	28	60.407*	29
XXI	Puglia	4.020.707	43	54.989*	44
XXII	Basilicata	597.768	6	44.412	6
XXIII	Calabria	2.011.466	21	74.720*	22
XXIV	Sicilia 1	2.383.132	25	77.482*	26
XXV	Sicilia 2	2.585.859	28	3.531	28
XXVI	Sardegna	1.631.880	17	84.038*	18
XVII	Valle d'Aosta	119.548	1	27.322	1
	ITALIA	56.995.744	605		618

N.B. Il quoziente (92.226) ai fini dell'art 56, quarto comma, della Costituzione è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618 numero corrispondente o quello dei deputati da sieggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alle circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti de un asterisco i resti più alti che in numero compressivo di 13 danno titolo ali assegnazione alle relative circoscrizione di un seggio in più.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONI ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RIPARTIZIONI	**CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO** (elenco aggiornato ex art. 5 comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	**SEGGI ASSEGNATI** (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	**QUOZIENTE: 456.172**		**TOTALE SEGGI SPETTANTI**
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.072.410	1	4	247.722*	6
AMERICA MERIDIONALE	1.017.776	1	2	106.432	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	359.852	1	0	359.852*	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	199.339	1	0	199.339	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	**3.649.377**	**4**	**6**		**12**

N.B. Il quoziente intero (456.172) ai fini dell'art 6. comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo ali assegnazione all'assegnazione alle relative ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: AMATO

CAMPAÑA ELECTORAL

Decreto legislativo 31 Luglio 2005, n.177
Testo unico della radiotelevisione.
Pubblicata in: G.U. 07.09.2005 N. 208 Suppl. Ord.

Decreto 08 Aprile 2004
Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell"art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313
Pubblicata in: G.U. 15.04.2004 N. 88

Legge 06 Novembre 2003, n.313
Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Pubblicata in: G.U. 18.11.2003 N. 268

Legge 22 Febbraio 2000, n.28
Disposizioni per la parita" di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Pubblicata in: G.U. 22.02.2000 N. 43

Legge 31 Luglio 1997, n.249
Istituzione dell"Autorita" per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
Pubblicata in: G.U. 31.07.1997 N. 177 Suppl. Ord.

Decreto-legge 17 Maggio 1996, n.266
Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Pubblicata in: G.U. 18.05.1996 N. 115

Decreto-legge 19 Marzo 1996, n.129
Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Pubblicata in: G.U. 19.03.1996 N. 66

Decreto-legge 16 Gennaio 1996, n.19
Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Pubblicata in: G.U. 18.01.1996 N. 14

Decreto-legge 18 novembre 1995, n.488
Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Pubblicata in: G.U. 18.11.1995 N. 270

Decreto-legge 18 Settembre1995, n.386
Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Pubblicata in: G.U. 19.09.1995 N. 219

Legge 10 Dicembre 1993, n.515
Disciplina delle campagne elettorali per l"elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Pubblicata in: G.U. 14.12.1993 N. 292 Suppl. Ord.

Legge 04 Febbraio 1985, n.10
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.
Pubblicata in: G.U. 05.02.1985 N. 30

Decreto-legge 06 Dicembre 1984, n.807
Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.
Pubblicata in: G.U. 06.12.1984 N. 336

Legge 05 Luglio 1982, n.441
Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.
Pubblicata in: G.U. 16.07.1982 N. 194

Legge 14 Aprile 1975, n.103
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
Pubblicata in: G.U. 17.04.1975 N. 102

Legge 24 Aprile 1975, n.130
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche" dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali,provinciali e comunali.
Pubblicata in: G.U. 30.04.1975 N. 113

Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n.639
Imposta comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni.
Pubblicata in: G.U. 11.11.1972 N. 292 Suppl. Ord.

Legge 04 Aprile 1956, n.212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale
Pubblicata in: G.U. 11.04.1956 N. 87

Legge 22 Febbraio 2000, n.28
Disposizioni per la parita" di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Capo I.- Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durantele campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

[L'intitolazione "Capo I" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

In merito all'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo, l'art. 11-septies della presente legge, inserito dal citato articolo 1 delle legge n. 313 del 2003, ha stabilito che esse cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (cioè dal 16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali (contenuto nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88).]

Art. 1.- Finalità e àmbito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referéndum.

Art. 2.- Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (4).

---

(4) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Deliberazione della Commissione di vigilanza Rai del 21 giugno 2000 (integralmente sostituita dalla Deliberazione del 18 dicembre 2002, integrata a sua volta dalla Del. 29 ottobre 2003) e con Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP e del 1 febbraio 2006, n. 22/06/CSP.

Art. 3.- Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati "messaggi"(5).

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento publicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'àmbito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un máximo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'àmbito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente] (6).

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e] l'indicazione del soggetto committente (7).

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie] (8).

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'àmbito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (9).

---

(5) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(6) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(8) il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(9) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Deliberazione della Commissione di vigilanza Rai del 21 giugno 2000 (integralmente sostituita dalla Deliberazione del 18 dicembre 2002, integrata a sua volta dalla Del. 29 ottobre 2003) e con Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP e del 1 febbraio 2006, n. 22/06/CSP.

Art. 4.- Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'àmbito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, letrera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il reparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi] (11).

7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'àmbito della medesima settimana, a quello alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito] (12).

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo (13).

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono l'àmbito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

---

(11) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(12) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(13) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

Art. 5.- Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferente di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole:

"A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Art. 6.- Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti (13/a).

(13/a) Si riporta il comma 2 dell'art. 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67:

"2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9; viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 (17), per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi".

Art. 7.- Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8.- Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli

orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1 (13/b).

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contextualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

(13/b) Si veda il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003.

Art. 9.- Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10. - Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (14):

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche(15);

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inercia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del

termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

(14) Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(15) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

Art. 11.- Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (15/b).

(15/b) In merito all'efficacia delle disposizioni del presente articolo e di tutto il Capo I, l'art. 11-septies della presente legge, inserito dall'articolo 1 delle legge n. 313 del 2003, ha stabilito che esse cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (cioè dal 16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali (contenuto nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88).

Capo II.- Disposizioni particolari per le emittenti locali (16)

Art. 11-bis.- Àmbito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in àmbito nazionale.

(16) Il Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-ter.- Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale;

b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di

programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater.- Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo debe comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ámese per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tetenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni (19).

(19) Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

Art. 11-quinquies.- Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmisión dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-sexies.- Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies.- Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gaceta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater (22), cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

(22) Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

Capo III.– Disposizioni finali (23)

Art. 12.- Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(23) L'intitolazione "Capo III" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 13.- Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Legge 04 Aprile 1956, n.212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (2).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (3).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (3/a).

---

(3) Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 1-quater del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito dalla L. 13 luglio 1999, n. 225.

Art. 3

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (4).

---

(4) Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 4

La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (5).

---

(5) Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (5).

(5) Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (6).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (6/a).

(6) Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Sucesivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(6/a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 482, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e sucesivamente abrogato dall'art. 1, comma 176, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (7).

(7) Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (8). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (9).

(8) Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura della multa e dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 482, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 176, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10).

(10) Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 24 aprile 1975, n. 130. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Sucesivamente il comma 17 dell'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

OTRAS DISPOSICIONES

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Provvedimento 20 febbraio 2008. Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Deliberazione 21 febbraio 2008.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature. (Deliberazione n. 33/08/CSP)

Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento 28 febbraio 2008.
Propaganda elettorale esonero dell'informativa

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Provvedimento 28 febbraio 2008. Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonchè per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Deliberazione 4 marzo 2008.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature. (Deliberazione n. 42/08/CSP)

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 (1)

(1) Allegato alla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 dicembre 2003, n. 285

Art. 1.- Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

"sondaggio": ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento;

il metodo di individuazione delle unità che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale;

"inchiesta" una rilevazione non rappresentativa che prevede una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi statistici adeguati, il cui risultato non può essere generalizzato;

"committente": ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

"acquirente": ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

"soggetto realizzatore": ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di altri;

"intervista": ogni forma di contatto diretto o indiretto tra intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del sondaggio;

"mezzo di comunicazione di massa": ogni mezzo di comunicazione o diffusione,

quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l'editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici;

"documento": ogni descrizione e specificazione in forma di testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la realizzazione di un sondaggio.

Art. 2.- Modalità di pubblicazione e diffusione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa". Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il "soggetto realizzatore" del sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell'acquirente;

c) il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli "intervistati" e il tipo di campione, specificando che si tratta di un "sondaggio" rappresentativo;

d) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.);

e) la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

f) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

g) il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;

h) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il "documento" completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo articolo 3.

In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere evidenziata in un apposito riquadro.

In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggi.

In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa", come definita al comma 1, viene letta al pubblico.

Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

Art. 3.- Modalità di documentazione

Il "documento" completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all'articolo 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella

sua integrità da parte del "soggetto realizzatore" nell'apposito sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (http://www.agcom.it), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio.

Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) tipo e oggetto del sondaggio (opinioni etc.), universo o collettivo di riferimento, unità intervistate, tipo di campionamento e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;

d) estensione territoriale del sondaggio, con la precisa indicazione dei luoghi dove é stata effettuata la rilevazione (regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);

e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;

f) metodo di raccolta delle informazioni;

g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;

h) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;

l) "rappresentatività" dei risultati, in termini di "margine di errore", al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori assoluti, medie, percentuali, etc.) per le variabili più importanti con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti interpretativi dei risultati più analitici contenuti nelle tabelle pubblicate e diffuse.

Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità al fine di effettuare ulteriori verifiche.

2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.

Art. 3-bis.- Attività di verifica

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza Della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo

3-ter, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonché una informativa circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del sucesivo articolo 3-quater.

Art. 3-ter.- Termini del procedimento

Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 4, comma 2, è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

Entro il termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno oportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.

Art. 3-quarter.- Adeguamento spontaneo

Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne dà tempestiva comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti all'avvenuto adeguamento.

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

Art. 3-quinquies.- Conclusione dell'istruttoria

Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

Art. 3-sexies.- Comunicazione dei provvedimenti

Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente articolo 3-quinquies, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 4.- Sanzioni

Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorità provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 3-quinquies, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

IV.2. Jurisprudencia*

Ordinanza 384/2004
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
camera di consiglio del 07/07/2004 Decisione del 01/12/2004
Deposito del 14/12/2004 Pubblicazione in G.U. 22/12/2004

(Elezioni - Elettorato attivo - Elettori residenti stabilmente all'estero - Esercizio del voto per corrispondenza - Disciplina legislativa e regolamentare - Conflitto di attribuzione su ricorso di promotori di 'referendum' abrogativo, nei confronti del parlamento, del governo e della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Prospettato cattivo uso del potere normativo esercitato, con violazione del principio di segretezza del voto - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Insussistenza dei requisiti prescritti - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento dell'istanza di sospensiva.)

Ordinanza 195/2003
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
camera di consiglio del 23/05/2003 Decisione del 23/05/2003
Deposito del 04/06/2003 Pubblicazione in G.U. 11/06/2003

(Elezioni - Elettorato attivo - Elettori residenti stabilmente all'estero - Esercizio del voto per corrispondenza - Disciplina legislativa e regolamentare - Conflitto di attribuzione su ricorso di promotori di referendum abrogativo, nei confronti del parlamento, del governo e della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Prospettato cattivo uso del potere normativo esercitato, con violazione del principio di segretezza del voto - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Insussistenza dei requisiti prescritti - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento dell'istanza di sospensiva.)

Ordinanza 512/2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
camera di consiglio del 24/05/2000 Decisione del 13/11/2000
Deposito del 20/11/2000 Pubblicazione in G.U. 29/11/2000

(Elezioni politiche - Procedimento elettorale - Opposizione al provvedimento ministeriale di ricusazione di un contrassegno elettorale - Attribuzione della decisione all'ufficio centrale nazionale (presso la corte di cassazione) - Esclusione di un giudice e della possibilità di azione giudiziaria - Conseguente, lamentata, limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Prospettazione di una questione di costituzionalità eccedente i compiti della corte - Manifesta inammissibilita'.) http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/filtro.asp

* Fuente: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/filtro.asp

Ordinanza 120/1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
camera di consiglio del 24/02/1993 Decisione del 24/03/1993
Deposito del 26/03/1993 Pubblicazione in G.U. 31/03/1993

(Ord. 120/93 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - giudice 'a quo' - competenza a decidere - difetto evidente - inammissibilita' della questione - fattispecie.)

(Ord. 120/93 b. elezioni - elettorato attivo - perdita della capacita' elettorale in caso di fallimento - cancellazione del fallito dalle liste elettorali - previsione correlata alla dichiarazione di fallimento (anziche' al passaggio in giudicato della relativa sentenza) - asserita violazione del principio di eguaglianza - manifesta inammissibilita' DELLA questione (per palese difetto di competenza del giudice 'a quo').)

Sentenza 17/2008
Giudizio sull'ammissibilita' di referéndum
Camera di Consiglio del Decisione del 16/01/2008
Deposito del 30/01/2008 Pubblicazione in G.U. 05/02/2008

(Norme impugnate: - Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive intitolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati")…

Sentenza 15/2008
Giudizio sull'ammissibilita' de referendum
Camera di Consiglio del Decisione del 16/01/2008
Deposito del 30/01/2008 Pubblicazione in G.U. 05/02/2008

(Norme impugnate: - Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati")…

Sentenza 236/2007
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello statu
Udienza Pubblica del 08/05/2007 Decisione del 18/06/2007
Deposito del 26/06/2007 Pubblicazione in G.U. 04/07/2007

(Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei Deputati 18/10/2001.)

Sentenza 303/1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
camera di consiglio del 15/04/1987 Decisione del 22/05/1987
Deposito del 30/09/1987 Pubblicazione in G.U. 07/10/1987

(elezioni - elettorato attivo - diritto - attribuzione agli interdetti per totale infermita' di mente - difetto di rilevanza - inammissibilita' della questione.)

Sentenza 26/1970
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
Udienza pubblica del 14/01/1970 Decisione del 12/02/1970
Deposito del 23/02/1970 Pubblicazione in G. U.

(Sent. 26/70 a. elezioni - elezioni politiche - d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, quinto comma - inapplicabilita' ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della

pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale - asserita violazione dell'art. 3 della costituzione - identita' con altra questione gia' decisa - esclusione di illegittimita' costituzionale.)

(Sent. 26/70 b. elezioni - elezioni politiche - d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, quinto comma - inapplicabilita' ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale - identita' con l'art. 102, quinto comma, del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, in materia di elezioni amministrative.)

IV.3. Documentos

Elezione della Camera dei deputati / Elezione del Senato della Repubblica
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

(Elezioni politiche Pubblicazione n. 6)
MINISTERO DELL'INTERNO. - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Roma – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – 2008

Documento que contiene las instrucciones para el desarrollo las elecciones y la normativa que le afecta. Se puede consultar en: http://politiche.interno.it/pubb_06_politiche_2008.pdf

Con el fin de informar sobre su contenido se recoge el índice:

Istruzioni per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

(Elezioni Politiche (Pubblicazione n. 8)
MINISTERO DELL'INTERNO .-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Roma – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – 2008

Este documento recoge toda la normativa sobre el derecho de voto de los ciudadanos italianos residentes en el extranjero y las circunscripciones electorales. Se puede consultar en:
http://web.consiglioveneto.it/elezioni2008/pages/documentazione/istruzionicentraleestero.pdf

Elezione Politiche del 13-14 aprile 2008

Informazioni agli utenti del sito per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Contiene la información sobre las elecciones del 13-14 de abril de 2008. Se puede consultar en: http://politiche.interno.it/info_politiche.htm

IV.4. Bibliografía

1. AGUILERA DE PRAT, Césareo R. y MARTÍNEZ, Rafael: *Sistemas de gobierno, partidos y territorio.* Madrid: Tecnos, 2000. (Semilla y surco. Serie de ciencia política).

2. AMIRANTE, Carlo: *Costituzionalismo e costituzione nel nuevo contesto europeo.* Torino: Giappichelli, 2003.

3. AMIRANTE, Carlo y SACCOMANNO, Albino: "Sistema electoral y reforma constitucional", en Gerardo Ruiz-Rico Ruiz y Silvio Gambino (coords.): *Formas de Gobierno y Sistemas Electorales: la experiencia italiana y española.* Valencia: Tirant lo Blanch, 1997; pp.89-128.

4. "Sistema elettorale e revisione costituzionale", en *Forme di Governo, Sistemi Elettorali, Partiti Politici : Spagna e Italia.* Rimini: Maggioli, 1996; pp.47-76.

5. ASTRID: *La riforma elettorale.* Bagno a Ripoli (Firenze): Passigli, 2007.

6. BALDASSARRI, Delia y SCHADEE, Hans: "Il fascino della coalizione: come e perché le alleanze elettorali influenzano il modo in cui gli elettori interpretano la politica", en *Rivista Italiana di Scienza Politica,* nº 2, agosto, 2004; pp.249-276.

7. BALDINI, Gianfranco y PAPPALARDO, Adriano: *Sistemi elettorali e partiti nelle democrazie contemporàneo.* Roma: Laterza, 2004. (Libri del tempo Laterza; 353).

8. BARBERA, Augusto y GUZZETTA, Giovanni, (eds.): *Il governo dei cittadini: referendum elettorali e riforma della politica.* Soveria Mannelli: Rubbettino, [2007].

9. BARDI, Luciano: "Arena elettortale e dinamiche parlamentari nel cambiamento del sistema partitico italiano", en *Partiti e Sistemi di Partito: il cartel party e oltre.* Bologna: Il Mulino, 2006; pp.265-286.

10. BASILICA, Federico, (ed.): *Prospettive di riforma del sistema elettorale italiano.* Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, [2004].

11. BETTINELLI, Ernesto: "La lunga marcia del voto elettronico in Italia", en *Quaderni dell'Osservatorio Elettorale,* nº 46, diciembre, 2001; pp.5-48.

12. CACIAGLI, Mario: *¡Hasta la última papeleta! : las elecciones italianas del 9 y 10 de abril de 2006.* Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2006. (Working papers; 254).

13. CACOPARDO, Paolo: "I profili procedurali del'iter di approvazione della nuova legge elettorale: un'occasione per riflettere sul nodo gordiano dell'obbligatorietà del preventivo esame in commissione", en *Rassegna Parlamentare,* nº 4, ott.-dic., 2006; pp.1003-1012.

14. CALINDRO, Luisa: "Sistema elettorale maggioritario e maggioranze parlamentari", en *Parlamento: Rivista di Vita Politica e Parlamentare,* nº 8-9-10, ag.-sett.-ott., 1996; pp.11-14.

15. CAPOTOSTI, Pier Alberto: "Riforma elettorale e assetti di governo nella transizione", en *Studi in Onore di Leopoldo Elia.* Milano: A. Giuffrè, v. I, 1999; pp.191-211.

16. CECCANTI, Stefano: "Riforma elettorale: una sfida per la politica", en *Federalismi.it.,* nº 22, nov., 2007; p.10.
    Accesible en: http://www.federalismi.it./federalismo/document/20112007114503.pdf.

17. CERMEL, Maurizio: "Dalle primarie alle liste bloccate, le ritorno? : riflessioni sulla nuova legge elettorale e sulle elezioni primarie", en *Teoria Politica,* nº 1, 2007; pp.99-121.

18. COTTURRI, Giuseppe: "Governabilità e rappresentanza alla prova del maggioritario", en *Democrazia e Diritto,* nº 3-4, lug.-dic., 1995; pp.67-81.

19. COX, Karen E. y SCHOPPA, Leonard J.: "Interaction effects in mixed-member electoral systems: theory and evidence from Germany, Japan, and Italy", en *Comparative Political Studies,* v. 35, nº 9, nov., 2002; pp.1027-1053.

20. CHIARA, Giuseppe: *Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza.* Milano: Giuffrè, 2004. (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Nuova serie ; 196).

21. CHIARAMONTE, Alessandro: "Le nouveau système électoral italien et l'interminable transition", en Pascal Dewit et Jean-Michel de Waele (eds.): *Le Mode de Scrutin Fait-il L'élection?* Bruxelles: Universitè de Bruxelles, 2000; pp.71-86.

22. ——: *Tra maggioritario e proporzionale: l'universo dei sistemi elettorali misti.* Bologna: Il Mulino, [2005]. (Ricerca).

23. CHIARAMONTE, Alessandro y DI VIRGILIO, Aldo: "Da una riforma elettorale all'altra: partiti, coalizioni e processi di apprendimento", en *Rivista Italiana di Scienza Politica,* nº 3, dic., 2006; pp.363-391.

24. CHIARAMONTE, Alessandro y VASALLO, Salvatore: "Consolidare il bipolarismo limitado la frammentazioni: sobri suggerimenti sul sistema elettorale", en *Le Istituzioni del Federalismo: Regione e Governo Locale,* nº 1, genn.-febb., 2001; pp.57-84.

25. D'ALIMONTE, Roberto: "I rischi di una nuova riforme elettorale: in difesa del mattarellum", en *Quaderni Costituzionali,* nº 3, sett., 2004; pp.497-521.

26. "Italy: a case of fragmented bipolarism", en Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds.): *The Politics of Electoral Systems.* Oxford; New York: Oxford University Press, 2005; pp.253-276.

27. "Una riforma elettorale come si può", en *Il Mulino: Rivista Trimestrale di Cultura e di Politica,* nº 428, nov.-dic., 2006; pp.1183-1187.

28. D'ALIMONTE, Roberto y CHIARAMONTE, Alessandro: "Proporzione ma non solo: la riforma elettorale della casa delle libertà", en *Il Mulino: Rivista Bimestrale di Cultura e di Politica,* nº 423, genn.-febb., 2006; pp.34-35.

29. DI CESARE, Rosella: "Nuove tendenze nella formazione dei gruppi parlamentari", en *Quaderni Costituzionali,* nº 1, mar., 2007; pp.79-92.

30. FALCON, Giandomenico: "Riflettento su legge elettorale e bicameralismo", en *Le Regioni,* nº 1, feb., 2007; pp.5-9.

31. FERIOLI, Elena: "La disciplina delle campagne elettorali e referendarie", en Roberto Nania y Paolo Ridola (eds.): *I Diritti Costituzionali.* Torino: G. Giappichelli, v. II, 2001; pp.603-640.

32. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso (et al.): "Monográfico sobre el sistema electoral", en *Revista Española de Derecho Político,* nº 52, 2001; pp.7-409.

33. FRANCANZANI, Marcello Maria: *Il problema della rappresentanza nella dottrina dello stato.* Padova: Cedam, 2000. (Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova ; 145).

34. FROSINI, Tommaso Edoardo: “Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?”, en *Rassegna Parlamentare,* nº 1, genn.-mar., 2006; pp.45-70.

35. ——: *Le votazioni.* Roma: Laterza, 2002. (Universale Laterza; 812).

36. FUSARO, Carlo: “La disciplina delle campagne elettorali nella prospettiva comparata: l’omaggio che il vizio rende alla virtù?”, en *Quaderni dell’Osservatorio Elettorale,* nº 51, giug., 2004; pp.5-52.

37. FUSARO, Carlo y RUBECHI, Massimo: “Le nuove leggi elettorali e i nuovi statuti”, en *Le Istituzioni del Federalismo: Regione e Governo Locale,* nº 6, nov.-dic., 2005; pp.1007-1043.

38. GAMBETTA, Diego y WARNER, Steven: “Italy: lofty ambitions and unintended consequences”, en Josep M. Colomer (ed.): *Handbook of Electoral System Choice.* Houndmills; New York: Palgrave Macmillan, 2004; pp.237-252.

39. GAMBINO, Silvio: “Novelle costituzionali in materia di parità uomo-donna e di pari oportunità nell’accesso alle cariche elettive”, en *Civitas Europa,* nº 17, déc., 2007; pp.217-254.

40. GIANNETTI, Daniela: “Party system dynamics and the making and breaking of Italian governments”, en *Electoral Studies: An International Journal,* v. 20, nº 4, dec., 2001; pp.529-553.

41. GRATTERI, Andrea: *Il valore del voto : nuove tecnologie e partecipazione elettorale.* Padova: Cedam, 2005. (Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali; 113).

42. HONORATO, Benedetto: “El derecho de voto en Italia y su ejercicio por algunas categorías de eletores”, en *Colectivos con Dificultades para el Ejercicio del Derecho de Sufragio.* Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior: Dykinson, 2003; pp.177-190.

43. LABRIOLA, Silvano: “Il principio maggioritario e la Costituzione repubblicana: rilettura in termini di attualità”, en *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale,* nº 107, 1995; pp.51-72.

44. LANCHESTER, Fulco: “El sistema electoral italiano y la innovación del artículo 122 de la Constitución”, en *Revista de Derecho Político,* nº 52, 2001; pp.309-321.

45. “I sistemi elettorali tedesco e spagnolo”, en *Federalismi.it,* nº 22, Nov., 2007
Accesible en: http://www.federalimi.it/federalim/document/20112007104336.pdf.

46. “La propaganda elettorale e referendaria in Italia tra continuità sregolata e difficile rinnovamento”, en *Quaderni Costituzionali,* nº 3, dic., 1996; pp.383-406.

47. “Regime, partiti e sistema elettorale in Giuseppe Maranini”, en *Il Politico,* nº 1, genn.-apr., 2003; pp.5-37.

48. LANEVE, Giuseppe y STERPA, Alessandro: “La proposta Veltroni per la nuova legge elettorale: spunti di riflessione ed ipotesi di funzionamento”, en *Federalismi.it.,* nº 22, nov., 2007
Accesible en: http://www.federalismi.it/federalismi/document/20112007093331,pdf.

49. LEGNANTE, Guido: “La personalizzazione del voto: come la vedono i parlamentari italiani”, en *Quaderni dell’Osservatorio Elettorale,* nº 50, dic., 2003; pp.9-38.

50. MALINCONICO, Gabriele: “La giunta delle elezioni”, en *Rassegna Parlamentare,* nº 1, genn.-mar., 2001; pp.153-199.

51. MANCINO, Nicola: *La costituzione lacerata: riflessioni sulla riforma elettorale.* Avellino: Elio Sellino, 2006.

52. MECURIO, Vincenzo y SCOLARO, Sereno: *La nuova legge elettorale: come cambiano le modaliltà per l'elezione della Camera e del Senato dopo la legge 21 dicembre 2005, n. 270.* Romagna (Rimini): Maggioli, [2006]. (Progettoentelocale ; 49).

53. MERLONI, Francesco: “Dalla controriforma costituzionale alla riforma elettorale”, en Franco Bassanini (ed.): C*ostituzione una Riforma Sbagliata : il parere di sessantatre costituzionalisti.* Firenze: Passigli, [2004]; pp.385-389.

54. MORRONE, Andrea: “Promemoria per la repubblica che verrà”, en *Il Mulino: Rivista Bimestrale di Cultura e di Politica,* nº 423, genn.-febb., 2006; pp.46-55.

55. PACINI, Maria Chiara: “La coalizione elettorale: un nuovo soggetto nel sistema politico italiano?”, en *Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari : Seminario 2002.* Torino: G. Giappichelli, 2003; pp.127-134.

56. PAGANO, Lucia: “Le nuove regole della campagna elettorale”, en *Bollettino di Informazioni Costituzionali e Parlamentari,* nº 1, 1994; pp.83-124.

57. ——: “La riforma delle leggi elettorali”, en *Bollettino di Informazioni Costituzionali e Parlamentari,* nº 1/3, 1995; pp.185-198.

58. PAPPALARDO, Adriano: “La nueva ley electoral en Italia”, en *Revista de Estudios Políticos,* nº 89, jul.-sept., 1995; pp.61-80.

59. PASQUINO, Gianfranco: *I sistemi elettorali.* Bologna: Il Mulino, 2006. (Introduzioni. Scienza politica).

60. ——: “Parlamento e governo nell'Italia repubblicana”, en *Rivista Italiana di Scienza Politica,* nº 1, apr., 2007; pp.3-24.

61. PASQUINO, Pasquale: “Les transformations du système politique 1992-2000 en Italie”, en *Notes et Études Documentaires,* nº 5130, mars, 2001; pp.35-51.

62. PETRILLO, Pier Luigi: “La perenne campagna elettorale dell'opposizione parlamentare in Italia e in Gran Bretagna”, en *Quaderni dell'Osservatorio Elettorale,* nº 51, giug., 2004; pp.81-118.

63. PRESNO LINERA, Miguel Ángel: “La reforma electoral en Italia: comentario a las Leyes núms. 276 y 277, de 4 de agosto de 1993, sobre elección del Senado de la República y para elección de la Cámara de Diputados, respectivamente; y la Ley núm. 81, de 25 de marzo de 1993, sobre elección directa del alcalde, del presidente de la provincia, del consejo comunal y del consejo provincial”, en *Revista Española de Derecho Constitucional,* nº 40, ene.-abr., 1994; pp.133-159.

64. RINALDI, Fioravante: “Riflessioni sull'uso delle affissioni fuori dal periodo elettorale”, en *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, nº 136-137, 2002; pp.99-110.

65. RONZA, Rocco W.: “Dalle appartenenze subculturali al mercato elettorale: il dibatitto sui paradigmi interpretativi del comportamento di voto in Italia, Sudafrica e Canada”, en *Rivista Italiana di Scienza Politica,* nº 2, agosto, 2007; pp.175-205.

66. RUSSO, Alberto: "Irragionevolezza del sistema proporzionale puro?: un caso emblemático", en Quaderni Costituzionali, nº 2, giug., 2002; pp.309-333.

67. SANI, Giacomo (et al.): "Elezioni, competizione, consenso : l'Italia da una riforma elettorale all'altra", en *Rivista Italiana di Scienza Politica,* nº 3, dic., monográfico, 2006; pp.345-503.

68. SCIORTINO, Antonella: *Conflitto di interessi e cariche di governo: profili evolutivi delle ineleggibilità e delle incompatibilità.* Torino: Giappichelli, 1999. (Università degli Studi di Palermo, Dipartamento di Diritto Pubblico).

69. SEGATTI, Paolo: "I programmi elettorali e il ruolo dei mass media", en *Rivista Italiana di Scienza Politica,* nº 3, 1994; pp.465-491.

70. SEGATTI, Paolo; BELLUCCI, Paolo, y MARAFFI, Marco: *Stable voters in an unstable party environment: continuity and change in Italian electoral behaviour.* Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1999. (Estudios = Working papers / Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales; 1999/139).

71. SICARDI, Stefano: *Maggioranza, minoranze e opposizione nel sistema costituzionale italiano.* Milano: A. Giuffrè, 1984. (Università di Torino. Memorie dell'Istituto Giuridico. Serie III ; 23).

72. SORGE, Giuseppe: "Le manifestazioni di volontà degli elettori, le autenticazioni di firme e le trasmigrazioni degli eletti", en *Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza ,* nº 3, feb., 1999; pp.283-288.

73. SPADACINI, Lorenzo: *Regole elettorali e integrità numerica delle Camere: la mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura.* Brescia: Promodis Italia, 2003. (Università degli Studi di Brescia. Quaderni brevi del Dipartimento di Scienze Giuridiche; 8).

74. STERPA, Alessandro y SCOPPOLA, Francesco: "Liste, coalizioni ed alleanze: le regole del gioco per le elezioni politiche 2008", en *Federalismi.it.,* nº 6, mar., 2008
Accesible en : http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath =document&file =19032008152003.

75. STORINI, Claudia y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard J.: "Italia: nueva ley electoral y nuevo parlamento", en *Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol,* nº 6, 1994; pp.137-153.

76. TAMBURRINO, Antonio: "Grandi lavori italiani", en *Il Mulino: Rivista Bimestrale di Cultura e di Politica,* v. 408, lug.-ag., nº 4, 2003; pp.689-698.

77. TARLI BARBIERI, Giovanni: "I molti vizi e le poche virtù della nuova legge elettorale", en *Democrazia e Diritto,* nº 1, 2006; pp.29-52.

78. URIARTE TORREALDAY, Roberto: "El nuevo sistema electoral italiano y su inmediata incidencia en el sistema de partidos", en *Revista Vasca de Administración Pública,* nº 40, 1994; pp.273-287.

79. VALASTRO, Alesandra: "Principi comuni a livello europeo in materia di propaganda elettorale televisiva", en *Quaderni Costituzionali,* nº 1, abr., 1997; pp.109-129.

80. VALENZA, Vittorio: *In difesa del proporzionale: riforme e controriforme elettorali tra cronaca e storia.* Milano: M & B, 1997.

81. VEGAS, Giuseppe: *Il nuovo sistema elettorale: un proporzionale a maggioranza garantita.* Milano: Oscar Mondadori, 2006.

82. VENTURINO, Fulvio: *Riforma elettorale e cambiamento partitico: un ' analisi delle elezioni maggioritarie in Italia.* Milano: Franco Angeli, 2004. (Il punto; 50).

83. VERZICHELLI, Luca: "Italy: delegation and accountability in a changing parliamentary democracy", en Kaare Strom y Wolfgang C. (eds.): *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies.* Oxford: Oxford University Press, 2003; pp.445-473.

84. VOLPI, Mauro: *Democrazia, costituzione, equilibrio tra i poteri.* Torino: G. Giappechelli, [2005].

85. ZAMPINI, Florence: "Un exemple italien : mode de scrutin et referendum", en Thierry Debard et François Robbe (dir.): *Le Caractère Équitable de la Représentation Politique.* Paris ; Budapest ; Torino: L'Harmattan, [2004]; pp.193-227.

IV.5. Direcciones web

Camara
http://www.camera.it/index.asp >>

Senado
http://www.senato.it/senato.htm >>

Ministero dell'Interno.- Elezioni e referendum
http://elezioni.interno.it/

Ministerio de Justicia
http://www.giustizia.it

Norme in rete (NIR).- Servidor oficial del Gobierno italiano que permite acceder a la documentación legislativa y jurídica publicada por las Instituciones Públicas.
http://www.nir.it >>

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
http://www2.agcom.it/

Sito ufficiale dei Sondaggi politici ed elettorali
http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/

La Corte costituzionale
http://www.cortecostituzionale.it/

La Corte di Cassazione
http://www.cortedicassazione.it/home.asp

V. Reino Unido

La Cámara de los Comunes (House of Commons) nace en el siglo XIV, habiendo cambiado su naturaleza numerosas veces a lo largo de los años.

Las primeras leyes del Parlamento ***(Parliament Act 1911)*** que regulan las relaciones entre sus dos Cámaras: Cámara Alta o de los Lores y Cámara Baja o de los Comunes, son de 1911, y fijan la duración máxima del mandato parlamentario en cinco años, en lugar de los siete que regían desde 1715.

Con la Ley de 16 de diciembre de 1949 ***(Parliament Act 1949)*** la Cámara de los Comunes aumenta sus poderes y elimina el derecho de veto de los Lores sobre los proyectos de ley, conservando sólo la potestad de modificación.

Desde 1948 cada escaño en el Parlamento representa un distrito electoral. Actualmente el Reino Unido se divide en 646 distritos electorales: 529 en Inglaterra, 40 en Gales, 59 en Escocia y 18 en Irlanda del Norte.

La Ley de Representación del pueblo de 1983 ***(Representation of the People Act 1983)*** establece las reglas básicas para las elecciones generales al parlamento.

La Ley de Representación del pueblo de 2000 ***(Representation of the People Act 2000)*** regula la inscripción de votantes hospitalizados y de las personas discapacitadas para las elecciones parlamentarias y locales.

La Comisión electoral se crea por la Ley de partidos políticos, elecciones y referéndums del 2000 ***(Political Parties, Elections an d Referendums Act 2000).*** Se establece como órgano independiente para supervisar y controlar las donaciones a los partidos políticos y la financiación de las campañas electorales por parte de los mismos. También tiene la misión de revisar las leyes electorales, y garantizar la transparencia y publicidad de los procesos electorales.

Por último, la Ley de Administración Electoral de 2006 ***(Electoral Administration Act 2006)*** introduce cambios importantes en el sistema electoral del Reino Unido. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de los Comunes el 11 de octubre de 2005, y fue sancionado el 11 de julio de 2006.

Esta ley tiene por objeto mejorar el acceso y la participación en el sistema democrático, creando el registro de electores, mejorando el procedimiento electoral y dando más transparencia a la financiación de los partidos políticos.

Identifica dos nuevos delitos electorales en un intento de disuadir el fraude electoral: suministro de información falsa en la Oficina de Registro Electoral en cualquier momento y falseamiento del voto por correo. Introduce nuevas medidas para la recogida de identificaciones personales (firmas y fechas de nacimiento) para los electores ausentes, establecimiento de una acreditación para el registro de electores, similar a la que se usa actualmente para las mesas electorales al emitir el voto, control de las autoridades locales de colegios electorales y los distritos electorales, ampliación de los días de inscripción del elector en las elecciones, reducción de la edad de la candidatos de 21 a 18 años de edad, mejora de la información a disposición del público, permitiendo a los administradores electorales proporcionar los datos en varios idiomas y formatos y acceder al Registro de Electores (CORE), con carácter nacional, coordinando todos los registros locales.

V.1. Legislación

Statutor Instruments 2008 Nº1316 (C.55)
The Electoral Administration Act 2006 (Commencement No.7) Order 2008
Representation of the people. - The Electoral Administration Act 2006

Electoral Administration Act 2006

Comunications Act 2003

Election Publications Act 2001

Representation of the People Act 2000

Political Parties, Elections and Referendums Act 2000

Representation of the People Act 1983

Parliament Act 1911

V.1.1. Statutor Instruments 2008 Nº1316 (C.55)

The Electoral Administration Act 2006 (Commencement No.7) Order 2008 Representation of the people. - The Electoral Administration Act 2006

Made - - - -
13th May 2008

The Secretary of State, in exercise of the powers conferred by section 77(2) and (3) of the Electoral Administration Act 2006(a), makes the following Order:
http://www.opsi.gov.uk/si/si2008/uksi_20081316_en_1

Citation and interpretation

1.—(1) This Order may be cited as the Electoral Administration Act 2006 (Commencement No.7) Order 2008.

(2) In this Order “the Act” means the Electoral Administration Act 2006.

Commencement of provisions of the Electoral Administration Act 2006

2.—(1) The provisions of the Act listed in article 3 shall come into force on the day after the day on which this Order is made in so far as they extend to Northern Ireland.

(2) The provisions of the Act listed in article 4 shall come into force on 1st July 2008 in so far as they extend to Northern Ireland.

(3) The provisions of the Act listed in article 5 shall come into force on 1st July 2008.

3. The provisions referred to in article 2(1) are—

(a) section 12 (Determinations by registration officers and objections);

(b) section 13(1) (Registration of voters with service qualification);

(c) section 31(2) (Replacement of counterfoils);

(d) section 37 (Documents relating to postal voting);

(e) section 41(1) to (6), (8) and (9) (Control of documents after parliamentary election);

(f) section 42 (Access to other election documents) and section 47 (Miscellaneous amendments to the 1983 Act), in each case for the purposes of the provisions referred in to in paragraph (g);

(g) in Schedule 1, paragraphs 70 and 109.

4. The provisions referred to in article 2(2) are—

(a) section 16 (Review of polling places);

(b) section 18 (Certain Commonwealth citizens);

(c) section 19 (Nomination procedures);

(d) section 20 (Omission of references to Maundy Thursday);

(e) section 21 (Use of candidates’ common names);

(f) section 22 (Candidate not to stand in more than one constituency);

(g) section 23 (Offences as to false statements in nomination papers), to the extent that it is not already in force;

(h) section 24 (Death of candidate);

(i) section 26 (Return as to election expenses);

(j) section 28 (Discretion to report on certain elections);

(k) section 29 (Observation of proceedings and working practices);

(l) section 30 (Ballot paper design);

(m) section 31(1), (3) and (5) to (9)(Replacement of counterfoils);

(n) section 31(4)(b) and (c);

(o) section 36 (Translations etc. of certain documents);

(p) section 38(1) to (3) and (6) (Tendered votes);

(q) sections 43 and 44 (Access to other election documents) for the purposes of general elections to the Northern Ireland Assembly;

(r) section 45 (Marked postal voters list);

(s) section 46 (Returning officers: correction of procedural errors);

(t) section 47 (Miscellaneous amendments to the 1983 Act) for the purposes of the provisions specified in paragraph (z)(iii);

(u) section 52(4) to (6) (Time for registration of parties fielding candidates) for the purposes of local elections in Northern Ireland within the meaning of section 22(5)(g) of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000(2);

(v) section 66 (Details to appear on referendum and election material);

(w) section 68 (Funding of services and expenses of returning officers);

(x) section 73(1) and (2) (Abolition of common law incapacity: mental state);

(y) section 74 (Miscellaneous amendments and repeals) for the purposes of the provisions specified in paragraph (z) (iv) to (vi) and (aa);

(z) in Schedule 1—

(i) paragraphs 41 to 46;

(ii) paragraphs 49 to 52 and 54;

(iii) paragraphs 69, 72, 73, 74 (except to the extent that it relates to question 3 in the table set out in rule 35(1) as substituted by that provision), 76 to 81, 82 to 85, 86 to 89, 91 to 94 and 96;

(iv) paragraphs 113 to 115;

(v) paragraphs 105, 106, 108, 109, 128, 132, and 136; and

(vi) paragraphs 129 to 131;

(aa) in Schedule 2, the entries relating to—

(i) the British Nationality Act 1981(3);

(ii) sections 29(4), (4A) and (4B), 40(1), 81, 119(2) and 202(1) of, and rules 2(1)(b), 6(3)(a), 19(2)(d), 29(3)(b), 43(1)(e), 45(1B)(b), and 55 of the rules in Schedule 1 to, the 1983 Act and the Appendix to those rules;

(iii) section 77(9)(a) of, and Schedule 18 to, the 2000 Act; and

(iv) paragraph 85(2), (3) and (5) of Schedule 27 to the Civil Partnership Act 2004(4).

5. The provisions referred to in article 2(3) are—

(a) section 38(4) and (5)(Tendered votes);

(b) section 41(7)(Control of documents after parliamentary election);

(c) section 47 (Miscellaneous amendments of the 1983 Act) for the purposes of the provisions specified in paragraph (f)(iii);

(d) section 73(3) (Abolition of common law incapacity: mental state);

(e) section 74 (Miscellaneous amendments and repeals) for the purposes of the provisions specified in paragraphs (f)(iv) and (g);

(f) in Schedule 1—

(i) paragraph 47;

(ii) paragraph 48;

(iii) paragraphs 55 to 62, 63 to 64, 65 to 68, 90 and 95;

(iv) paragraphs 110, 134 and 135;

(g) in Schedule 2, the entries relating to—

(i) the Electoral Law Act (Northern Ireland) 1962(5);

(ii) Schedule 1 to the Representation of the People Act 1985(6);

(iii) the Elected Authorities (Northern Ireland) Act 1989(7);

(iv) the Electoral Fraud (Northern Ireland) Act 2002(8).

Paul Goggins
Minister of State
Northern Ireland Office
13th May 2008

V.1.2. Electoral Administration Act 2006

2006 CHAPTER 22

An Act to make provision in relation to the registration of electors and the keeping of electoral registration information; standing for election; the administration and conduct of elections and referendums; and the regulation of political parties.

[11th July 2006]

http://www.dca.gov.uk/legist/electadmin.htm
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060022_en_1

CONTENTS

PART 2
REGISTRATION OF ELECTORS

9 Registration officers: duty to take necessary steps

10 Anonymous registration

11 Alterations of registers: pending elections

12 Determinations by registration officers and objections

13 Registration of voters with service qualification

PART 3
ANTI-FRAUD MEASURES

14 Absent voting: personal identifiers

15 Offences as to false registration information

Electoral Administration Act 2006 (c. 22) ii

PART 4
REVIEW OF POLLING PLACES

16 Review of polling places

PART 5
STANDING FOR ELECTION

17 Minimum age

18 Certain Commonwealth citizens

19 Nomination procedures

PART 6
CONDUCT OF ELECTIONS ETC.

Election timetables

20 Omission of references to Maundy Thursday

Nomination

21 Use of candidates' common names

22 Candidate not to stand in more than one constituency

23 Offences as to false statements in nomination papers

Death of candidate

24 Death of candidate

Election expenses

25 Amount of expenses which may be incurred by third party

26 Return as to election expenses

27 Meaning of election expenses for purposes of the 1983 Act

Observation of elections etc.

28 Discretion to report on certain elections

29 Observation of proceedings and working practices

Ballot papers

30 Ballot paper design
31 Replacement of counterfoils
32 Photographs on ballot papers: piloting
33 Evaluation of pilots under section 32
34 Revision of electoral provisions in the light of pilot schemes

Voting in person

35 Certain voters entitled to vote in person

Certain electoral documents

36 Translations etc. of certain documents
37 Documents relating to postal voting

Circumstances in which votes may be tendered

38 Tendered votes

Offences related to voting

39 Undue influence
40 Offences relating to applications for postal and proxy votes

Access to election documents

41 Control of documents after parliamentary election
42 Access to other election documents
43 Access to other election documents: contravention of regulations
44 Access to other election documents: supplementary
45 Marked postal voters list

Correction of procedural errors

46 Returning officers: correction of procedural errors

Miscellaneous amendments

47 Miscellaneous amendments of the 1983 Act

PART 7
REGULATION OF PARTIES

Registration of parties

48 Registered names of parties
49 Political party descriptions
50 Confirmation of registered particulars
51 Removal from register of registered parties
52 Time for registration of parties fielding candidates

Accounting requirements

53 Requirements as to statements of account
54 Time for delivery of unaudited accounts to Electoral Commission

Control of donations

55 Policy development grants to be donations
56 Exemption from requirement to prepare quarterly donation reports
57 Repeal of section 68 of the 2000 Act
58 Register of donations to include details of nature of donation
59 Reporting donations to holders of certain elective offices
60 Northern Ireland: disapplication of Part 4 of the 2000 Act

Regulation of loans etc.

61 Regulation of loans etc.
62 Regulation of loans: power to make provision for candidates, third parties and referendums
63 Regulation of loans etc: Northern Ireland

Campaign expenditure

64 Campaign expenditure: standing for more than one party
65 Time limit for claims in respect of campaign expenditure

Referendum and election material

66 Details to appear on referendum and election material

PART 8
MISCELLANEOUS

Election services

67 Performance of local authorities in relation to elections etc.
68 Funding of services and expenses of returning officers

Encouraging electoral participation

69 Encouraging electoral participation

Criminal proceedings

70 Time limit for prosecutions
71 Restriction on powers of arrest by persons other than constables

Pre-consolidation amendments

72 Pre-consolidation amendments

Legal incapacity to vote

73 Abolition of common law incapacity: mental state

PART 9
GENERAL

74 Miscellaneous amendments and repeals
75 Financial provision
76 Interpretation
77 Commencement
78 Extent
79 Short title

2006 CHAPTER 22

An Act to make provision in relation to the registration of electors and the keeping of electoral registration information; standing for election; the administration and conduct of elections and referendums; and the regulation of political parties.

[11th July 2006]

E IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

PART 1
CO-ORDINATED ON-LINE RECORD OF ELECTORS

1 CORE schemes: establishment

(1) The Secretary of State may by order make provision for the establishment of one or more schemes (CORE schemes) in connection with the keeping and use of specified electoral registration information by a person designated by a scheme (the CORE keeper).

(2) The electoral registration officer (ERO) who acts for an area specified in a scheme must provide the CORE keeper with the specified electoral registration information relating to the area.

(3) A scheme must require the ERO—

(a) to provide the CORE keeper with the information, and

(b) to update the information, at such times and in such manner as is provided for by the scheme.

(4) In particular, a scheme may require the ERO to provide the information and update it in a specified electronic form.

(5) The CORE keeper must keep the information in such form and by such means as is specified by or under the scheme.

(6) In particular, a scheme may—

(a) require the CORE keeper to maintain the information in a specified electronic form;

(b) specify how other information required (by or under any enactment) tobe kept in connection with the information is to be recorded and storedin that form.

(7) The area for which an ERO acts must not be specified in more than one schemeat the same time.

(8) The Secretary of State may by order vary a scheme—

(a) by specifying a new area;

(b) by removing the specification of an area;

(c) in such other respects as he thinks appropriate.

(9) The Secretary of State may by order terminate a CORE scheme and an order under this subsection may make such provision as the Secretary of State thinks necessary or expedient in connection with the termination of the scheme.

(10) The person designated as a CORE keeper must be a public authority.

(11) Specified electoral registration information is a copy of such of the following information as is specified in the CORE scheme—

(a) the register of electors for any election;

(b) any list or other record relating to such a register which the ERO is required or authorised to keep under or by virtue of any enactment;

(c) any other information relating to a person who has an entry on such a register which is required for electoral purposes or in connection with jury service;

(d) such other information as the Secretary of State specifies being information which he thinks is necessary or expedient to facilitate the effective operation of the scheme.

2 Use of CORE information

(1) A CORE scheme may authorise or require a CORE keeper to take such steps as are specified in the scheme in relation to information kept by him in pursuance of the scheme.

(2) Regulations under—

(a) section 53(4) of the 1983 Act,

(b) paragraphs 10A to 11A of Schedule 2 to that Act, and

(c) paragraph 13 of that Schedule, so far as relating to paragraphs 10A to 11A, have effect in relation to a CORE keeper and any information kept by him in pursuance of a CORE scheme as they have effect in relation to an ERO and any registers he is required to maintain under that Act.

(3) A CORE scheme may make such modifications of the regulations mentioned in subsection (2) in their application to a CORE keeper or the information kept by him as the Secretary of State thinks appropriate.

(4) Section 42 applies to a CORE keeper as if—

(a) he were a relevant officer (within the meaning of section 44), and

(b) the information kept by him which consists in copies of relevant election documents (within the meaning of that section) were documents relating to an election which he is required by or under any enactment to retain for any period.

(5) The CORE keeper must, in accordance with the scheme, inform an ERO if he thinks that any of the circumstances mentioned in subsection (6) have arisen in in relation to—

(a) a person who is registered in respect of an address on a register which the ERO is required to maintain, or

(b) an address in relation to which there is an entry on such a register.

(6) These are the circumstances—

(a) a person who is registered in respect of an address on a register which the ERO is required to maintain is also registered on a register in respect of another address (whether on the same or a different register);

(b) more than such number of postal votes as is specified in the scheme is requested for the same redirection address;

(c) the same person acts as proxy for more than two electors;

(d) a person votes more than once (other than as proxy) at the same election.

(7) The CORE keeper—

(a) must provide the ERO with other information of such description as is specified in the scheme relating to a person mentioned in subsection (5)(a);

(b) may provide the ERO with such other information relating to the person as he thinks is relevant to the exercise by the ERO of his functions.

(8) If a CORE scheme makes provision which allows an elector to have access toinformation relating to him which is kept by the CORE keeper, the scheme must also make provision to enable the elector to request any changes to the information.

(9) The CORE keeper must pass any such request to every ERO whose register hethinks may fall to be altered in consequence of the request.

(10) A CORE scheme—

(a) must not permit an elector to request a change to information relatingto any other elector, but

(b) may permit an elector who is resident at the same address as anotherelector to confirm for the purposes of an annual canvass under section10 of the 1983 Act that the information relating to the other elector is correct.

(11) Except for the purposes of subsections (5) to (7) and (9), a CORE scheme mustnot authorise an ERO to have access to information provided to the COREkeeper by a different ERO.

(12) In subsections (5) to (7) and (9) an ERO includes an ERO who acts for an areawhich is not specified in a CORE scheme.

(13) A redirection address is an address in respect of which the person is not registered.

3 CORE scheme grants

(1) The Secretary of State may pay grant to a CORE keeper towards expenditure incurred or to be incurred by him in connection with the exercise of his functions under the scheme.

(2) The amount of such a grant and the manner of its payment are to be such as the Secretary of State decides.

(3) Such a grant may be paid subject to such conditions as the Secretary of State decides.

(4) The conditions may include conditions as to the circumstances in which the whole or any part of the grant is to be repaid.

4 Electoral Commission

(1) After section 20 of the 2000 Act (transfer of functions of Local Government Boundary Commission for Wales) insert—

“Commission’s functions relating to CORE

20A Commission as CORE keeper

The Commission may be designated as a CORE keeper for the purposes of section 1 of the Electoral Administration Act 2006.”

(2) If the Secretary of State designates the Electoral Commission as a CORE keeper, any grant which is paid to the Commission in pursuance of section 3 above must be treated as income received by the Commission for the purposes of paragraph 14(1) of Schedule 1 to the 2000 Act.

5 CORE schemes: supplemental

(1) A CORE scheme may make provision as to circumstances in which a payment is to be made—

(a) by the CORE keeper to an ERO whose area is specified in the scheme;

(b) by such an ERO to the CORE keeper.

(2) A CORE scheme may make provision—

(a) as to circumstances in which the CORE keeper and such an ERO may agree that functions of one of them may be exercised by the other;

(b) for functions of the CORE keeper to be exercised by such an ERO;

(c) for functions of such an ERO to be exercised by the CORE keeper.

(3) A CORE scheme may make provision as to—

(a) the circumstances in which the CORE keeper may make a charge for the provision of services or information to any person;

(b) the level of any such charge.

(4) A CORE scheme may make provision as to the steps to be taken by the CORE keeper in circumstances where a constituency is not wholly situated in the area for which an ERO whose area is specified in the scheme acts.

(5) Provision under subsection (4) may—

(a) apply with such modifications as are specified in the scheme regulations made in pursuance of paragraph 1(1) of Schedule 2 to the 1983 Act, or

(b) make provision as to the arrangements to be made in relation to the exercise by the CORE keeper of his functions under the scheme in the circumstances mentioned in that subsection.

(6) If a CORE keeper obtains any information which an ERO is required or authorised to obtain for the purposes of any provision of—

(a) section 10, 10A or 13A of the 1983 Act (maintenance of registers), or

(b) Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (c. 2) (absent voting), the CORE scheme may provide that any requirement of that provision for a person to provide a personal identifier in the form of the person's signature is to be treated for the purposes of that information as a requirement to provide such other evidence of identity as is specified in the scheme.

(7) Any provision of a CORE scheme which authorises or requires the CORE keeper to supply information to another person may specify the form and manner in which the information is to be supplied.

(8) The Secretary of State may provide to a CORE keeper such facilities and equipment as he thinks are necessary or expedient to enable the keeper to carry out his functions under the scheme.

(9) The Secretary of State may make the provision of such facilities and equipment subject to such conditions (including conditions as to the circumstances in which the facilities or equipment must be returned to the Secretary of State) as he thinks fit.

(10) Subject to anything in the CORE scheme in respect of which he is designated, a CORE keeper may make such arrangements as he thinks appropriate with any other person for the provision of any service relating to the exercise of his functions under this Part or the CORE scheme.

6 CORE schemes: procedure

(1) The power to make an order under section 1 is exercisable by statutoryinstrument.

(2) Such an order must not be made unless a draft of the order has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(3) Such an order may make different provision for different purposes.

(4) An order establishing or varying a CORE scheme must not be made unless the Secretary of State first consults—

(a) the Electoral Commission;

(b) the Information Commissioner;

(c) the ERO who acts for each area proposed to be specified in the scheme;

(d) the ERO who acts for an area the specification of which the Secretary of State proposes to remove from the scheme.

(5) Subsection (4) does not apply if the effect of a variation is only to terminate any aspect of the scheme (other than the removal of the specification of an area in pursuance of section 1(8)(b)).

7 Amendment of the 1983 Act

In section 63 of the 1983 Act (breach of official duty), in subsection (3) after paragraph (b) insert—

"(ba) a CORE keeper (within the meaning of Part 1 of the Electoral Administration Act 2006),".

8 Interpretation of Part

(1) This section has effect for the purposes of this Part.

(2) A CORE scheme is a scheme established under section 1.

(3) A CORE keeper is a person designated for the purposes of such a scheme.

(4) "ERO" means an electoral registration officer.

PART 2
REGISTRATION OF ELECTORS

9 Registration officers: duty to take necessary steps

(1) After section 9 of the 1983 Act (registers of electors) insert—

"9A Registration officers: duty to take necessary steps

(1) Each registration officer must take all steps that are necessary for the purpose of complying with his duty to maintain the registers under section 9 above.

(2) The steps include—

(a) sending more than once to any address the form to be used for the canvass under section 10 below;

(b) making on one or more occasions house to house inquiries under subsection (5) of that section;

(c) making contact by such other means as the registration officer thinks appropriate with persons who do not have an entry in a register;

(d) inspecting any records held by any person which he is permitted to inspect under or by virtue of any enactment or rule of law;

(e) providing training to persons under his direction or control in connection with the carrying out of the duty.

(3) Regulations made by the Secretary of State may amend subsection (2) by—

(a) varying any of the paragraphs in that subsection;

(b) inserting any paragraph;

(c) repealing any paragraph."

(2) Subsection (6) of section 9 of that Act is omitted.

10 Anonymous registration

(1) After section 9A of the 1983 Act (inserted by section 9(1) above) insert—

"9B Anonymous registration

(1) This section applies if an application for registration in a register of parliamentary electors or local government electors is made in accordance with the requirements prescribed for the purposes of section 10A(1)(a) below and is accompanied by—

(a) an application under this section made in accordance with prescribed requirements (an application for an anonymous entry),

(b) a declaration made in accordance with such requirements for the purposes of this section, and

(c) such evidence in support of the application for an anonymous entry as may be prescribed.

(2) If the registration officer determines that the person is entitled to be registered, he must also determine whether the safety test is satisfied.

(3) If the registration officer determines that the safety test is satisfied—

(a) section 9(2) above does not apply in relation to the person; and

(b) the person's entry in the register shall instead contain letters in the prescribed form and his electoral number.

(4) An entry containing the matters mentioned in subsection (3)(b) above is referred to in this Act as an anonymous entry.

(5) If an anonymous entry is made in respect of a person, the registration officer shall remove any other entry in the register for that person.

(6) If the registration officer does not determine that the safety test is satisfied, no entry is to be made in respect of him in the register (whether an anonymous entry or otherwise).

(7) Subsection (6) above does not affect—

(a) any other entry in the register for the person;

(b) the determination of any further application for registration which is made by the person (including an application which is treated as having been made by him by virtue of section 10A(2) below).

(8) Any communication sent by a registration officer or the returning officer for any election to a person who has an anonymous entry (A) must be sent in an envelope or other form of covering so as not to disclose to any other person that A has an anonymous entry.

(9) Subsection (8) does not apply to a communication relating only to a local government election in Scotland.

(10) The safety test is satisfied if the safety of the applicant for an anonymous entry or that of any other person of the same household would be at risk if the register contains the name of the applicant or his qualifying address.

(11) In this section, "determines" means determines in accordance with regulations.

9C Removal of anonymous entry

(1) If a person has an anonymous entry in a register, his entitlement to remain registered in pursuance of the application for registration mentioned in section 9B(1) terminates—

(a) at the end of the period of 12 months beginning with the date when the entry in the register first takes effect, or

(b) if the declaration made for the purposes of section 9B is cancelled at any time before the expiry of that 12 month period, at the time when the declaration is cancelled.

(2) Subsection (1) above does not affect the application of any other provision of this Act or of the Representation of the People Act 1985 which has the effect that the person's entitlement to registration terminates before the expiry of the 12 month period mentioned in subsection (1) or before the cancellation of the declaration made for the purposes of section 9B.

(3) If a person's entitlement to remain registered terminates by virtue of subsection (1) above, the registration officer concerned shall remove his entry from the register, unless he is entitled to remain registered with an anonymous entry in pursuance of a further application for registration accompanied by a further application under section 9B."

(2) Part 1 of Schedule 1 (which makes further provision in connection with anonymous registration) has effect.

11 Alterations of registers: pending elections

(1) Section 13B of the 1983 Act (alteration of registers: pending elections) is amended in accordance with subsections (2) to (4).

(2) For subsection (1) substitute—

"(1) If, by virtue of section 13A(2) above, an alteration in a published version of a register is to take effect after the fifth day before the date of the poll for an election to which this section applies, the alteration does not have effect for the purposes of the election."

(3) For subsection (2) substitute—

"(2) Subsection (3) below applies where—

(a) at any time before the appropriate publication date in the case of an election to which this section applies, section 13A above applies to a registration officer, by virtue of subsection (1) of that section, in connection with a determination, requirement or decision falling within any of paragraphs (a) to (d) of that subsection;

(b) in consequence of the determination, requirement or decision an entry relating to a person falls to be made in (or removed from) the register in respect of an address in the relevant election area; and

(c) no alteration made in consequence of the determination, requirement or decision—

(i) has already taken effect, or

(ii) is due to take effect, under subsection (2) of that section on or before the fifth day before the date of the poll."

(4) After subsection (3) insert—

"(3A) Subsection (3B) below applies where—

(a) at any time on or after the appropriate publication date in the case of an election to which this section applies but before the prescribed time on the day of the poll, section 13A above applies to a registration officer, by virtue of subsection (1) of that section, in connection with a notification mentioned in paragraph (c) of that subsection; and

(b) in consequence of the notification—

(i) an entry relating to that person falls to be made in the register in respect of an address in the relevant election area, or

(ii) his entry in the register requires to be altered.

(3B) In such a case the registration officer shall issue, in the prescribed manner, a notice specifying the appropriate alteration in the register; and—

(a) the notice shall be so issued by him when he receives the notification; and

(b) the alteration shall take effect as from the beginning of the day on which the notice is issued.

(3C) Subsection (3D) below applies where—

(a) at any time on or after the appropriate publication date in the case of an election to which this section applies but before the prescribed time on the day of the poll, section 13A above applies to a registration officer, by virtue of subsection (1) of that section, in connection with a determination falling within paragraph (d) of that subsection;

(b) the determination was made following a representation made by or on behalf of a person to the registration officer; and

(c) in consequence of the determination—

(i) an entry relating to that person falls to be made in the register in respect of an address in the relevant election area, or

(ii) his entry in the register requires to be altered.

(3D) In such a case the registration officer shall issue, in the prescribed manner, a notice specifying the appropriate alteration in the register; and—

(a) the notice shall be so issued by him when he makes the determination; and

(b) the alteration shall take effect as from the beginning of the day on which the notice is issued.

(3E) In subsection (3C)(b) above, "representation" means a representation made in accordance with prescribed requirements to the effect that the register contains a clerical error."

(5) In section 56 of the 1983 Act (registration appeals), in subsection (4A) for the words from "13B(3) above" to "returning officer" substitute "13B(3) or (3B) above on or before the date of the poll".

(6) Part 2 of Schedule 1 (which contains further amendments of the 1983 Act relating to the alteration of registers) has effect.

12 Determinations by registration officers and objections

(1) In section 7 of the 1983 Act (residence: patients in mental hospitals who are not detained offenders or on remand), after subsection (3)(a) insert—

"(aa) the registration officer determines in accordance with regulations that the person was not entitled to be registered, or".

(2) In section 7A of that Act (residence: persons remanded in custody etc.), after subsection (3)(a) insert—

"(aa) the registration officer determines in accordance with regulations that the person was not entitled to be registered, or".

(3) In section 7C of that Act (effect of declaration of local connection), after subsection (2)(a) insert—

"(aa) the registration officer determines in accordance with regulations that the person was not entitled to be registered,".

(4) In section 10A of that Act (maintenance of registers: registration of electors) after subsection (3) insert—

"(3A) Subsection (3) above applies to an objection to a person's registration whether the objection is made before or after the person is registered in the register."

(5) In that section, in subsection (5)—

(a) omit the word "duly";

(b) for paragraph (b) substitute—

"(b) determines that the elector was not entitled to be registered in respect of that address or that he has ceased to be resident at that address or has otherwise ceased to satisfy the conditions for registration set out in section 4 above."

(6) In that section, after subsection (5A) insert—

"(5B) A registration officer may, for the purpose of obtaining any information relevant to a determination under subsection (5)(b) above, make such house to house inquiries as he thinks fit."

(7) In section 15 of that Act (service declaration), after subsection (2)(a) insert—

"(aa) the registration officer determines in accordance with regulations that the person was not entitled to be registered,".

(8) In section 56 of that Act (registration appeals), after subsection (1)(a) insert—

"(aa) from any decision under this Act of the registration officer (other than on an application for registration or objection to a person's registration) that a person registered in respect of any address was not entitled to be registered in respect of that address or that he has ceased to be resident at that address or has otherwise ceased to satisfy the conditions for registration set out in section 4 above,".

(9) In section 2 of the Representation of the People Act 1985 (c. 50) (registration of British citizens overseas), after subsection (2)(a) insert—

"(aa) the registration officer determines in accordance with regulations that the person was not entitled to be registered,".

13 Registration of voters with service qualification

(1) In section 15 of the 1983 Act (service declaration), after subsection (8) insert—

"(9) The Secretary of State may by order provide that, in relation to the persons mentioned in section 14(1)(a) and (d), subsection (2)(a) above has effect as if for the period of 12 months there were substituted such other period (not exceeding five years) as he thinks appropriate.

(10) The power to make an order under subsection (9) is exercisable by statutory instrument, which may contain such incidental or consequential provision as the Secretary of State thinks appropriate.

(11) No order may be made under subsection (9) unless—

(a) the Secretary of State first consults the Electoral Commission, and

(b) a draft of the instrument containing the order is laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(12) If the period substituted by an order under subsection (9) is longer than the period for the time being in force, the longer period has effect in relation to any person who immediately before the order was made was entitled to remain in a register by virtue of subsection (2).”

(2) In section 59 of that Act (supplemental provisions as to members of forces and service voters), for subsection (3) substitute—

“(3) Arrangements must be made by the appropriate government department for securing that every person having a service qualification by virtue of paragraph (a) or (b) of section 14(1) above has (so far as circumstances permit) an effective opportunity of exercising from time to time as occasion may require the rights conferred on him by this Act in relation to—

(a) registration in a register of electors (and in particular in relation to the making and cancellation of service declarations);

(b) the making and cancellation of appointments of a proxy;

(c) voting in person, by post or by proxy.

(3A) Arrangements must be made by the appropriate government department for securing that every such person receives such instructions as to the effect of this Act and any regulations made under it, and such other assistance, as may be reasonably sufficient in connection with the exercise by that person and any spouse or civil partner of that person of any rights conferred on them as mentioned above.

(3B) In subsections (3) and (3A) “the appropriate government department” means, in relation to members of the forces, the Ministry of Defence, and in relation to any other person means the government department under which he is employed in the employment giving the service qualification.

(3C) The Ministry of Defence must maintain, in relation to each member of the forces who provides information relating to his registration as an elector, a record of such information.

(3D) The Ministry of Defence must make arrangements to enable each member of the forces to update annually the information recorded under subsection (3C).”

(3) In section 59(4) of that Act, for “subsection (3)” substitute “subsections (3) and (3A)”.

PART 3
ANTI-FRAUD MEASURES

14 Absent voting: personal identifiers

(1) In paragraph 3 of Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (c. 2) (application for absent vote for definite or indefinite period)—

(a) in sub-paragraph (1)(b), after “application” insert “contains the applicant’s signature and date of birth and”;

(b) in sub-paragraph (2)(c), after “application” insert “contains the applicant’s signature and date of birth and”;

(c) after sub-paragraph (7) insert—

“(8) The registration officer may dispense with the requirement under sub-paragraph (1)(b) or (2)(c) for the applicant to provide a signature if he is satisfied that the applicant is unable—

(a) to provide a signature because of any disability the applicant has,

(b) to provide a signature because the applicant is unable to read or write, or

(c) to sign in a consistent and distinctive way because of any such disability or inability.

(9) The registration officer must also keep a record in relation to those whose applications under this paragraph have been granted showing—

(a) their dates of birth;

(b) except in cases where the registration officer in pursuance of sub-paragraph (8) has dispensed with the requirement to provide a signature, their signatures.

(10) The record kept under sub-paragraph (9) must be retained by the registration officer for the prescribed period."

(2) In paragraph 4 of that Schedule (application for absent vote at particular election)—

(a) in sub-paragraph (1)(b), after "application" insert "contains the applicant's signature and date of birth and";

(b) in sub-paragraph (2)(c), after "application" insert "contains the applicant's signature and date of birth and";

(c) after sub-paragraph (4) insert—

"(5) The registration officer may dispense with the requirement under sub-paragraph (1)(b) or (2)(c) for the applicant to provide a signature if he is satisfied that the applicant is unable—

(a) to provide a signature because of any disability the applicant has,

(b) to provide a signature because the applicant is unable to read or write, or

(c) to sign in a consistent and distinctive way because of any such disability or inability.

(6) The registration officer must keep a record of those whose applications under this paragraph have been granted showing—

(a) their dates of birth;

(b) except in cases where the registration officer in pursuance of sub-paragraph (5) has dispensed with the requirement to provide a signature, their signatures.

(7) The record kept under sub-paragraph (6) must be retained by the registration officer for the prescribed period."

(3) In paragraph 7 of that Schedule (application for proxy postal vote)—

(a) in sub-paragraph (5)(c), after "application" insert "contains the applicant's signature and date of birth and";

(b) after sub-paragraph (10) (as inserted by section 38(6)(b) of this Act) insert—

"(11) The registration officer may dispense with the requirement under sub-paragraph (5)(c) for the applicant to provide a signature if he is satisfied that the applicant is unable—

(a) to provide a signature because of any disability the applicant has,

(b) to provide a signature because the applicant is unable to read or write, or

(c) to sign in a consistent and distinctive way because of any such disability or inability."

(12) The registration officer must also keep a record in relation to those whose applications under sub-paragraph (4)(a) or (b) have been granted showing—

(a) their dates of birth;

(b) except in cases where the registration officer in pursuance of sub-paragraph (11) has dispensed with the requirement to provide a signature, their signatures.

(13) The record kept under sub-paragraph (12) must be retained by the registration officer for the prescribed period."

(4) After paragraph 7 of that Schedule insert—

"Provision of fresh signatures

7A (1) A person who remains on the record kept under paragraph 3(4) or 7(6) may, at any time, provide the registration officer with a fresh signature.

(2) Anything required or authorised to be done for the purposes of any enactment in relation to a signature required to be provided in pursuance of this Schedule must be done in relation to a signature provided as mentioned in sub-paragraph (1) instead of in relation to a signature provided on any earlier occasion

7B Regulations may make provision as to—

(a) circumstances in which a registration officer may require a person who remains on the record kept under paragraph 3(4) or 7(6) to provide a fresh signature;

(b) the consequences of a person refusing or failing to comply with a requirement to provide a fresh signature.

Use of personal identifier information

7C The registration officer must either —

(a) provide the returning officer for an election with a copy of the information contained in records kept by the registration officer in pursuance of paragraphs 3(9), 4(6) and 7(12) in relation to electors at the election, or

(b) give the returning officer access to such information.

7D Information contained in records kept by a registration officer in pursuance of paragraph 3(9), 4(6) or 7(12) may be disclosed by him (subject to any prescribed conditions) to—

(a) any other registration officer if he thinks that to do so will assist the other registration officer in the performance of his duties;

(b) any person exercising functions in relation to the preparation or conduct of legal proceedings under the Representation of the People Acts;

(c) such other persons for such other purposes relating to elections as may be prescribed."

(5) The Secretary of State may by regulations make provision—

(a) enabling the registration officer to require an existing absent voter to provide the registration officer with a signature and date of birth;

(b) as to the consequences of an existing absent voter refusing or failing in such circumstances as are prescribed to provide a signature and date of birth.

(6) An existing absent voter is a person whose application under any of the following provisions of that Schedule has been granted before this section comes into force—
paragraph 3(1) or (2);
paragraph 4(1) or (2);
paragraph 7(4).

(7) The regulations—

(a) may make different provision for different purposes;

(b) must be made by statutory instrument subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(8) Nothing in this section or the amendments made by it has effect in relation to anything which is done only for the purposes of a local government election in Scotland.

15 Offences as to false registration information

(1) Section 13D of the 1983 Act (provision of false information) is amended in accordance with subsections (2) to (8).

(2) For subsection (1) substitute—

“(1) A person who for any purpose connected with the registration of electors provides to a registration officer any false information is guilty of an offence.”

(3) After subsection (1) (as substituted by subsection (2) above) insert—

“(1A) A person who provides false information in connection with an application (other than an application relating only to a local government election in Scotland) to which any of the following provisions of Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (applications relating to absent voting) applies is guilty of an offence—

(a) paragraph 3(1) or (2);

(b) paragraph 4(1) or (2);

(c) paragraph 7(4).”

(4) In subsection (3) after “subsection (1)” insert “or (1A)”.

(5) In subsection (4) after “subsection (1)” insert “or (1A)”.

(6) In subsection (6)(a) for “six months” substitute “51 weeks”.

(7) After subsection (6) insert—

“(7) In the application of subsection (6)(a) to Scotland and Northern Ireland, the reference to 51 weeks must be taken to be a reference to six months.

(8) In relation to an offence committed before the commencement of section 281(5) of the Criminal Justice Act 2003, the reference in subsection (6)(a) to 51 weeks must be taken to be a reference to six months.”

(8) With effect from the commencement of this section, section 13D of the 1983 Act extends to the whole of the United Kingdom.

(9) In section 8 of the Electoral Fraud (Northern Ireland) Act 2002 (c. 13) (short title, interpretation, commencement and extent), in subsection (5) after “Act” insert “(except section 7)”.

PART 4
REVIEW OF POLLING PLACES

16 Review of polling places

(1) For section 18 of the 1983 Act (polling districts and places at parliamentary elections) substitute—

“18A Polling districts at parliamentary elections

(1) Every constituency is to be divided into polling districts.

(2) A relevant authority must—

(a) divide its area into polling districts for the purpose of parliamentary elections for so much of any constituency as is situated in its area, and

(b) keep the polling districts under review.

(3) The following rules apply—

(a) the authority must seek to ensure that all electors in a constituency in its area have such reasonable facilities for voting as are practicable in the circumstances;

(b) in England, each parish is to be a separate polling district;

(c) in Wales, each community is to be a separate polling district;

(d) in Scotland, each electoral ward (within the meaning of section 1 of the Local Governance (Scotland) Act 2004) is to be divided into two or more separate polling districts.

(4) Subsection (3)(b) to (d) does not apply if, in any case, there are special circumstances.

(5) If an alteration of polling districts in an area is made under this section—

(a) the registration officer who acts for the area must make such adaptations of his register of parliamentary electors as are necessary to take account of the alteration, and

(b) the alteration is effective on the date on which the registration officer publishes a notice stating that the adaptations have been made by him.

18B Polling places at parliamentary elections

(1) A polling place is to be designated for each polling district in a constituency.

(2) But subsection (1) does not apply if the size or other circumstances of a polling district are such that the situation of the polling stations does not materially affect the convenience of the electors or any body of them.

(3) A relevant authority must—

(a) designate the polling places for the polling districts in its area, and

(b) keep the polling places in its area under review.

(4) The following rules apply—

(a) the authority must seek to ensure that all electors in a constituency in its area have such reasonable facilities for voting as are practicable in the circumstances;

(b) the authority must seek to ensure that so far as is reasonable and practicable every polling place for which it is responsible is accessible to electors who are disabled;

(c) the authority must have regard to the accessibility to disabled persons of potential polling stations in any place which it is considering designating as a polling place or the designation of which as a polling place it is reviewing;

(d) the polling place for a polling district must be an area in the district, unless special circumstances make it desirable to designate an area wholly or partly outside the district;

(e) the polling place for a polling district must be small enough to indicate to electors in different parts of the district how they will be able to reach the polling station.

(5) If no polling place is designated for a polling district the polling district is to be taken to be the polling place.

18C Review of polling districts and places

(1) Each relevant authority must complete a review under sections 18A and 18B of all of the polling districts and polling places in its area before the end of the period of 12 months starting with the date on which section 16 of the Electoral Administration Act 2006 comes into force.

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a polling district or polling place (as the case may be) which is designated for the first time during that period.

(3) In such a case, the first review of the polling district or polling place must be completed before the end of the period of four years starting with the date on which that designation is made.

(4) The authority must complete a further review of each polling district and polling place in its area before the end of the period of four years starting with the completion of the previous such review.

(5) Subsections (1) to (4) do not prevent a relevant authority carrying out at any time a review of a particular polling district or polling place.

(6) Schedule A1 has effect in relation to a review.

18D Review of polling districts and places: representations to Electoral Commission

(1) This section applies if in relation to a constituency in the area of a relevant authority a relevant representation is made to the Electoral Commission by—

(a) an interested authority in England and Wales;

(b) not less than 30 electors in the constituency;

(c) a person (other than the returning officer) who has made representations under Schedule A1;

(d) a person who is not an elector in a constituency in the authority's area but who the Commission think has sufficient interest in the accessibility of disabled persons to polling places in the area or has particular expertise in relation to the access to premises or facilities of disabled persons.

(2) A relevant representation is a representation that a review under section 18A or 18B has not been conducted by a relevant authority so as to—

(a) meet the reasonable requirements of the electors in the constituency or any body of those electors, or

(b) take sufficient account of the accessibility to disabled persons of polling stations within a designated polling place.

(3) The returning officer for the constituency may make observations on representations made under this section.

(4) The Electoral Commission must consider such representations and observations and may, if they think fit—

(a) direct the relevant authority to make any alterations to the polling places designated by the review which the Commission think necessary in the circumstances;

(b) if the authority fails to make the alterations before the end of the period of two months starting on the day the direction is given, make the alterations themselves.

(5) Alterations made by the Electoral Commission under subsection (4) have effect as if they had been made by the relevant authority.

(6) An interested authority in relation to a constituency in England and Wales is—

(a) in England, the council of a parish, or where there is no such council the parish meeting of a parish, which is wholly or partly situated within the constituency;

(b) in Wales, the council of a community which is so situated.

(7) The reference in subsection (1)(b) to electors does not include persons who have an anonymous entry in the register of parliamentary electors or local government electors.

18E Sections 18A to 18D: supplemental

(1) This section applies for the purposes of sections 18A to 18D.

(2) No election is to be questioned by reason of—

(a) any non-compliance with the provisions of those sections, or

(b) any informality relative to polling districts or polling places.

(3) Each of the following is a relevant authority—

(a) in relation to England, the council of a district or London borough;

(b) in relation to Scotland, a local authority;

(c) in relation to Wales, the council of a county or county borough.

(4) The following do not apply to Northern Ireland—

(a) section 18A(2) to (5);

(b) section 18B(2) to (5);

(c) sections 18C and 18D, and in Northern Ireland the polling districts and polling places are those for the time being established under the law relating to local elections within the meaning of section 130 of the Electoral Law Act (Northern Ireland) 1962."

(2) Before Schedule 1 to that Act (parliamentary elections rules) insert—

"SCHEDULE A1
Section 18C
REVIEW OF POLLING DISTRICTS AND POLLING PLACES

1 The relevant authority must publish notice of the holding of a review.

2 The authority must consult the returning officer for every parliamentary election held in a constituency which is wholly or partly in its area.

3 (1) Every such returning officer must make representations to the authority.

(2) The representations must include information as to the location of polling stations (existing or proposed) within polling places (existing or proposed).

(3) The representations must be published in such manner as is prescribed.

4 (1) The authority must seek representations from such persons as it thinks have particular expertise in relation to access to premises or facilities for persons who have different forms of disability.

(2) Such persons must have an opportunity—

(a) to make representations;

(b) to comment on the returning officer's representations.

5 Any elector in a constituency situated in whole or in part in the

authority's area may make representations.

6 Representations made by any person in connection with a review of polling places may include proposals for specified alternative polling places.

7 On completion of a review the authority must—

(a) give reasons for its decisions in the review;

(b) publish such other information as is prescribed."

PART 5
STANDING FOR ELECTION

17 Minimum age

(1) A person is disqualified for membership of the House of Commons if, on the day on which he is nominated as a candidate, he has not attained the age of 18.

(2) Subject to an order made by the House of Commons under section 6(2) of the House of Commons Disqualification Act 1975 (c. 24) as applied by subsection (3), if a person disqualified by subsection (1) for membership of that House is elected as a member of that House his election is void.

(3) Sections 6(2) to (4) and 7 of that Act apply in the case of a person disqualified by subsection (1) as they apply in the case of a person disqualified by that Act, and references

in those sections to a person disqualified by that Act must be construed as including references to a person disqualified by subsection (1).

(4) In section 79(1) of the Local Government Act 1972 (c. 70) (qualifications for election and holding office as a member of a local authority) for "twenty-one" substitute "eighteen".

(5) In section 20(3) of the Greater London Authority Act 1999 (c. 29) (minimum age for election as Mayor or Assembly member) for "21" substitute "18".

(6) In section 3(1) of the Local Government Act (Northern Ireland) 1972 (C. 9) (qualifications for election and holding office as a councillor) for "twenty-one" substitute "eighteen".

(7) The following enactments (which disqualify a person who has not attained the age of 21 for election as a Member of Parliament), so far as not previously repealed, cease to have effect—

(a) section 7 of the Parliamentary Elections Act 1695 (c. 25);

(b) the Election Act 1707 (cap. 8);

(c) section 74 of the Parliamentary Elections (Ireland) Act 1823 (c. 55).

(8) In section 6 of the Union with Scotland Act 1706 (c. 11) the words "It is always hereby expressly provided and declared that none shall be capable to elect or be elected for any of the said estates but such as are twenty one years complete" do not apply for the purpose of fixing the minimum age at which a person may be elected as a member of the House of Commons.

18 Certain Commonwealth citizens

(1) In section 3 of the Act of Settlement (1700 c. 2), the words from "That after the said limitation shall take effect" to "in trust for him." (which impose certain disqualifications) do not apply (so far as they relate to membership of the House of Commons) to a person who is—

(a) a qualifying Commonwealth citizen, or

(b) a citizen of the Republic of Ireland.

(2) For the purposes of subsection (1), a person is a qualifying Commonwealth citizen if he is a Commonwealth citizen who either—

(a) is not a person who requires leave under the Immigration Act 1971 (c. 77) to enter or remain in the United Kingdom, or

(b) is such a person but for the time being has (or is, by virtue of any enactment, to be treated as having) indefinite leave to remain within the meaning of that Act.

(3) But a person is not a qualifying Commonwealth citizen by virtue of subsection (2)(a) if he does not require leave to enter or remain in the United Kingdom by virtue only of section 8 of the Immigration Act 1971 (exceptions to requirement for leave in special cases).

(4) Subject to an order made by the House of Commons under section 6(2) of the House of Commons Disqualification Act 1975 (c. 24) as applied by subsection (5)—

(a) if a person disqualified for membership of that House by virtue of section 3 of the Act of Settlement (1700 c. 2) as modified by this section is elected as a member of that House his election is void;

(b) if a person being a member of that House becomes so disqualified for membership his seat is vacated.

(5) Sections 6(2) to (4) and 7 of the House of Commons Disqualification Act 1975 apply in the case of a person disqualified as mentioned in subsection (4) as they apply in the case of a person disqualified by that Act, and references in those sections to a person disqualified by

that Act must be construed as including references to a person disqualified as mentioned in subsection (4).

(6) Part 3 of Schedule 1 (which contains further amendments relating to standing for election) has effect.

(7) In Schedule 7 to the British Nationality Act 1981 (c. 61), the entry relating to the Act of Settlement is omitted.

19 Nomination procedures

(1) Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) is amended as follows.

(2) In rule 1 (timetable), in the entry in the second column in respect of "Publication of statement of persons nominated", for the words from "at the close of" to the end substitute "—

(a) if no objections to nomination papers are made, at the close of the time for doing so, or

(b) if any such objections are made, not before they are disposed of but not later than 24 hours after the last time for delivery of nomination papers."

(3) In rule 5 (notice of election), after paragraph (1) insert—

"(1A) The notice of election must also state the arrangements which apply for the payment of the deposit required by rule 9 below to be made by means of the electronic transfer of funds."

(4) In rule 6 (nomination of candidates), in paragraph (3)(a)—

(a) the words "(of not more than 6 words in length)" are omitted;

(b) after "rule 6A(1)" insert "or (1B)".

(5) In rule 9 (deposit), in paragraph (2)(c) after "manner" insert "(including by means of a debit or credit card or the electronic transfer of funds)".

(6) In rule 12 (validity of nomination papers), in paragraph (3) for the words from "as soon as practicable" to the end substitute "—

(a) as soon as practicable after it is made, and

(b) in any event, before the end of the period of 24 hours starting with the close of the period for delivery of nomination papers set out in the Table in rule 1."

(7) In that rule, in paragraph (3A) for the words from "as soon as practicable" to the end substitute "—

(a) as soon as practicable after delivery of the nomination paper, and

(b) in any event, before the end of the period of 24 hours starting with the close of the period for delivery of nomination papers set out in the Table in rule 1."

(8) After rule 14 insert—

"Correction of minor errors 14A (1) A returning officer may, if he thinks fit, at any time before the publication under rule 14 above of the statement of persons nominated, correct minor errors in a nomination paper.

(2) Errors which may be corrected include—

(a) errors as to a person's electoral number;

(b) obvious errors of spelling in relation to the details of a candidate.

(3) Anything done by a returning officer in pursuance of this rule must not be questioned in any proceedings other than proceedings on an election petition.

(4) A returning officer must have regard to any guidance issued by the Electoral Commission for the purposes of this rule."

PART 6
CONDUCT OF ELECTIONS ETC.
Election timetables

20 Omission of references to Maundy Thursday

Part 4 of Schedule 1 contains amendments which omit the words "Maundy Thursday" from certain enactments specifying the days which are to be disregarded for the purposes of election timetables and the computation of periods relating to elections.

Nomination

21 Use of candidates' common names

(1) Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) is amended as follows.

(2) In rule 6 (nomination of candidates), after paragraph (2) insert—

"(2A) If a candidate commonly uses—

(a) a surname which is different from any other surname he has, or

(b) a forename which is different from any other forename he has, the nomination paper may state the commonly used surname or forename in addition to the other name."

(3) In rule 14 (publication of statement of persons nominated), after paragraph (2) insert—

"(2A) If a person's nomination paper gives a commonly used surname or forename in addition to another name, the statement shall show the person's commonly used surname or forename (as the case may be) instead of any other name.

(2B) Paragraph (2A) above does not apply if the returning officer thinks—

(a) that the use of the person's commonly used name may be likely to mislead or confuse electors, or

(b) that the commonly used name is obscene or offensive.

(2C) If paragraph (2B) above applies, the returning officer must give notice in writing to the candidate of his reasons for refusing to allow the use of a commonly used name."

(4) In the Appendix of forms, in the Form of nomination paper, for the first table following the words "candidate at the said election" substitute—

(5) In the Appendix of forms, in the Note following the Form of nomination paper, after paragraph 2 insert—

"2A Where a candidate commonly uses a name which is different from any other name he has, the commonly used name may also appear on the nomination paper, but if it does so, the commonly used name (instead of any other name) will appear on the ballot paper.

2B But the ballot paper will show the other name if the returning officer thinks—

(a) that the use of the commonly used name may be likely to mislead or confuse electors, or

(b) that the commonly used name is obscene or offensive."

22 Candidate not to stand in more than one constituency

In Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules), in rule 8(3) (candidate's consent to nomination), after paragraph (b) insert—

"(c) shall state that he is not a candidate at an election for any other constituency the poll for which is to be held on the same day as that for the election to which the consent relates,".

23 Offences as to false statements in nomination papers

(1) Section 65A of the 1983 Act (false statements in nomination papers) is amended as follows.

(2) In subsection (1), after paragraph (b) insert "or

(c) a certificate authorising for the purposes of rule 6A of the parliamentary elections rules the use by a candidate of a description if he knows that the candidate is standing at an election in another constituency in which the poll is to be held on the same day as the poll at the election to which the certificate relates."

(3) After subsection (1) insert—

"(1A) A person is guilty of a corrupt practice if, in the case of any relevant election, he makes in any document in which he gives his consent to his nomination as a candidate—

(a) a statement of his date of birth,

(b) a statement as to his qualification for being elected at that election, or

(c) a statement that he is not a candidate at an election for any other constituency the poll for which is to be held on the same day as the poll at the election to which the consent relates, which he knows to be false in any particular.

(1B) For the purposes of subsection (1A), a statement as to a candidate's qualification is a statement—

(a) that he is qualified for being elected,

(b) that he will be qualified for being elected, or

(c) that to the best of his knowledge and belief he is not disqualified for being elected."

(4) In subsection (2)(b) at the beginning insert "except for the purposes of subsections (1)(c) and (1A)(c),".

Death of candidate

24 Death of candidate

In Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) for rule 60 (countermand or abandonment of poll on death of candidate) and the crossheading preceding it substitute—
"Independent candidate

60 (1) This rule applies if at a contested election proof is given to the returning officer's satisfaction before the result of the election is declared that one of the persons named or to be named in the ballot papers as an independent candidate has died.

(2) Subject to this rule and rules 61 and 62, these rules apply to the election as if the candidate had not died.

(3) The following provisions of these rules do not apply in relation to the deceased candidate—

(a) rule 32(1)(c) and (d) (admission to polling station);

(b) rule 44(2)(b) to (d) (attendance at count);

(c) rule 53(4) (forfeiture of deposit).

(4) If only two persons are shown as standing nominated in the statement of persons nominated the returning officer must—

(a) if polling has not begun, countermand the notice of poll;

(b) if polling has begun, direct that the poll is abandoned;

(c) subject to rule 65, treat the election as an uncontested election.

(5) For the purposes of this rule a person is named or to be named on the ballot papers as an independent candidate if the description (if any) on his nomination paper is not authorised as mentioned in rule 6A(1) or (1B).

Deceased independent candidate wins

61 (1) This rule applies if at an election mentioned in rule 60(1) the majority of votes is given to the deceased candidate.

(2) Rule 50(1) (declaration of result) does not apply but the returning officer must—

(a) declare that the majority of votes has been given to the deceased candidate,

(b) declare that no member is returned, and

(c) give public notice of the total number of votes given for each candidate together with the number of rejected ballot papers under each head shown in the statement of rejected ballot papers.

(3) Rule 53 (return or forfeiture of candidate's deposit) does not apply in relation to the remaining candidates.

(4) The returning officer must not return the writ and the proceedings with reference to the election must be commenced afresh subject to the following provisions of this rule.

(5) The writ for the election must be taken to have been received on the first working day after the end of the period of seven days starting on the day of the election mentioned in rule 60(1).

(6) No fresh nomination is necessary in the case of a person shown in the statement of persons nominated as standing nominated, and no other nomination may be made.

(7) The last day on which a notice of withdrawal of candidature by a person who stands nominated by virtue of paragraph (6) may be delivered is the seventh working day after the day on which the writ is taken to be received.

(8) Rule 9 (deposit) does not apply.

(9) The poll must be held on a day in the period which starts 15 working days after the day on which the writ is taken to have been received and ends 19 working days after that day.

(10) For the purposes of this rule a working day is a day which is not a day specified in rule 2(1)(a) to (c).

Deceased independent candidate with equality of votes

62 In an election mentioned in rule 60(1), if—

(a) rule 49 applies (equality of votes), and

(b) any of the candidates to whom that rule applies is a deceasedcandidate, the deceased candidate must be ignored.

Party candidate

63 (1) This rule applies if—

(a) at a contested election proof is given to the returning officer's satisfaction before the result of the election is declared that one of the persons named or to be named as a candidate in the ballot paper has died, and

(b) that person is standing in the name of a registered political party.

(2) The returning officer must—

(a) countermand notice of the poll, or

(b) if polling has begun, direct that the poll be abandoned.

(3) The proceedings with reference to the election must be commenced afresh subject to the following provisions of this rule.

(4) The writ for the election must be taken to have been received on the first working day after the end of the period of seven days starting on the day the proof is given to the returning officer.

(5) No fresh nomination is necessary in the case of a person shown in the statement of persons nominated as standing nominated.

(6) No other nomination may be made except for a person standing in the name of the same registered political party in whose name the deceased candidate was standing.

(7) The last day on which a nomination mentioned in paragraph (6) may be delivered is the seventh working day after the day on which the writ is taken to be received.

(8) The last day on which a notice of withdrawal of candidature by a person who stands nominated by virtue of paragraph (5) or in pursuance of paragraph (6) may be delivered is the seventh working day after the day on which the writ is taken to be received.

(9) The poll must be held on a day in the period which starts 15 working days after the day on which the writ is taken to have been received and ends 19 working days after that day.

(10) For the purposes of this rule—

(a) a person stands in the name of a registered political party if his nomination paper contains a description which is authorised as mentioned in rule 6A(1) or (1B);

(b) a registered political party is a party which is registered under Part 2 of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000;

(c) a working day is a day which is not a day specified in rule 2(1)(a) to (c).

Speaker of the House of Commons seeking re-election

64 (1) This rule applies if at a contested election—

(a) one of the candidates is the Speaker of the House of Commons seeking re-election, and

(b) proof is given to the returning officer's satisfaction before the result of the election is declared that that candidate has died.

(2) The returning officer must—

(a) countermand notice of the poll, or

(b) if polling has begun, direct that the poll be abandoned.

(3) The proceedings with reference to the election must be commenced afresh subject to the following provisions of this rule.

(4) The writ for the election must be taken to have been received on the first working day after the end of the period of seven days starting on the day the proof is given to the returning officer.

(5) The last day on which—

(a) nominations, or

(b) notice of withdrawal of candidature, may be delivered is the seventh working day after the day on which the writ is taken to be received.

(6) The poll must be held on a day in the period which starts 15 working days after the day on which the writ is taken to have been received and ends 19 working days after that day.

(7) For the purposes of this rule a working day is a day which is not a day specified in rule 2(1)(a) to (c).

Abandoned poll

65 (1) This rule applies to—

(a) a poll which is abandoned in pursuance of rule 60(4)(b) as if it were a poll at a contested election;

(b) a poll which is abandoned in pursuance of rule 63(2)(b) or 64(2)(b).

(2) The presiding officer at a polling station must take the like steps (so far as not already taken) for the delivery to the returning officer of ballot boxes and of ballot papers and other documents as he is required to take on the close of the poll.

(3) The returning officer must dispose of ballot papers and other documents in his possession as is he required to do on the completion of the counting of the votes.

(4) It is not necessary for a ballot paper account to be prepared or verified.

(5) No step or further step is to be taken for the counting of the ballot papers or of the votes.

(6) The returning officer must seal up all the ballot papers (whether the votes on them have been counted or not) and it is not necessary to seal up counted and rejected ballot papers in separate packets.

(7) The provisions of these rules as to the inspection, production, retention and destruction of ballot papers and other documents relating to a poll at an election apply subject to paragraphs (8) and (9).

(8) Ballot papers on which the votes were neither counted nor rejected must be treated as counted ballot papers.

(9) No order is to be made for—

(a) the production or inspection of any ballot papers, or

(b) the opening of a sealed packet of the completed corresponding number lists or of certificates as to employment on the day of the poll, unless the order is made by a court with reference to a prosecution."

Election expenses

25 Amount of expenses which may be incurred by third party

(1) Section 75 of the 1983 Act (prohibition of expenses not authorised by election agent) is amended as follows.

(2) In subsection (1)—

(a) after "be incurred" insert "after he becomes a candidate at that election";

(b) omit from "but paragraph (c) or (d) of" to the end.

(3) After subsection (1) insert—

"(1ZZA) Paragraph (c) or (d) of subsection (1) above does not restrict the publication of any matter relating to the election in—

(a) a newspaper or other periodical,

(b) a broadcast made by the British Broadcasting Corporation or by Sianel Pedwar Cymru, or

(c) a programme included in any service licensed under Part 1 or 3 of the Broadcasting Act 1990 or Part 1 or 2 of the Broadcasting Act 1996.

(1ZZB) Subsection (1) above does not apply to any expenses incurred by any person—

(a) which do not exceed in the aggregate the permitted sum (and are not incurred by that person as part of a concerted plan of action), or

(b) in travelling or in living away from home or similar personal expenses."

(4) In subsection (1ZA) for “subsection (1)(ii)” in each place where it occurs substitute “subsection (1ZZB)(a)”.

(5) After subsection (7) insert—

“(8) For the purposes of subsection (1), expenditure incurred before the date when a person becomes a candidate at the election is to be treated as having been incurred after that date if it is incurred in connection with any thing which is used or takes place after that date.”

(6) The amendments made by this section (except subsections (2)(a) and (5)) must be taken to have had effect from 16 February 2001 (the date of coming into force of section 131 of the 2000 Act).

(7) This section does not apply to local government elections in Scotland (within the meaning of the 1983 Act).

26 Return as to election expenses

(1) In section 81 of the 1983 Act (returns as to election expenses), omit subsection

(3) and insert—

“(3A) The return shall also contain as respects that candidate—

(a) a statement relating to such other expenses in connection with which provision is made by this Part as the Electoral Commission provide in regulations;

(b) a statement relating to such claims (whether paid, unpaid or disputed) in connection with such election expenses or such other expenses mentioned in paragraph (a) as the Electoral Commission so provide;

(c) a statement relating to such other matters as is prescribed.”

(2) This section does not apply to local government elections in Scotland (within the meaning of the 1983 Act).

27 Meaning of election expenses for purposes of the 1983 Act

(1) The 1983 Act is amended as follows.

(2) After section 90 (election expenses at elections where election agent not required) insert—

“90ZA Meaning of “election expenses”

(1) In this Part of this Act “election expenses” in relation to a candidate at an election means (subject to subsection (2) below and section 90C below) any expenses incurred at any time in respect of any matter specified in Part 1 of Schedule 4A which is used for the purposes of the candidate’s election after the date when he becomes a candidate at the election.

(2) No election expenses are to be regarded as incurred by virtue of subsection (1) above or section 90C below in respect of any matter specified in Part 2 of Schedule 4A.

(3) In this section and in section 90C below, “for the purposes of the candidate’s election” means with a view to, or otherwise in connection with, promoting or procuring the candidate’s election at the election.

(4) For the purposes of this Part of this Act, election expenses are incurred by or on behalf of a candidate at an election if they are incurred —

(a) by the candidate or his election agent, or

(b) by any person authorised by the candidate or his election agent to incur expenses.

(5) In this Part of this Act, any reference to election expenses incurred by or on behalf of a candidate at an election includes expenses—

(a) which are incurred as mentioned in subsection (1) above before the date when he becomes a candidate at the election, but

(b) which by virtue of that subsection fall to be regarded as election expenses.

(6) In this Part and in Part 3 of this Act, any reference (in whatever terms) to promoting or procuring a candidate's election at an election includes doing so by prejudicing the electoral prospects of another candidate at the election.

(7) Schedule 4A has effect.

(8) This section does not apply to a local government election in Scotland."

(3) Omit sections 90A and 90B.

(4) The repeal of sections 90A and 90B by subsection (3) does not extend to those sections as they apply to local government elections in Scotland (within the meaning of the 1983 Act).

(5) After Schedule 4 (election expenses at certain local elections in England and Wales) insert—

"SCHEDULE 4A
Section 90ZA
ELECTION EXPENSES
PART 1
LIST OF MATTERS

1 Advertising of any nature (whatever the medium used).

Expenses in respect of such advertising include agency fees, design costs and other costs in connection with preparing, producing, distributing or otherwise disseminating such advertising or anything incorporating such advertising and intended to be distributed for the purpose of disseminating it.

2 Unsolicited material addressed to electors (whether addressed to them by name or intended for delivery to households within any particular area).

Expenses in respect of such material include design costs and other costs in connection with preparing, producing or distributing such material (including the cost of postage).

3 Transport (by any means) of persons to any place.

Expenses in respect of the transport of such persons include the costs of hiring a means of transport for a particular period.

4 Public meetings (of any kind).

Expenses in respect of such meetings include costs incurred in connection with the attendance of persons at such meetings, the hire of premises for the purposes of such meetings or the provision of goods, services or facilities at them.

5 The services of an election agent or any other person whose services are engaged in connection with the candidate's election.

6 Accommodation and administrative costs.

PART 2
GENERAL EXCLUSIONS

7 The payment of any deposit required by rule 9 of Schedule 1 to this Act.

8 The publication of any matter, other than an advertisement, relating to the election in—

(a) a newspaper or periodical;

(b) a broadcast made by the British Broadcasting Corporation or by Sianel Pedwar Cymru;

(c) a programme included in any service licensed under Part 1 or 3 of the Broadcasting Act 1990 or Part 1 or 2 of the Broadcasting Act 1996.

9 The provision of any facilities provided in pursuance of any right conferred on candidates at an election by this Act other than facilities in respect of which expenses fall to be defrayed by virtue of sections 95(4) and 96(4) above.

10 The provision by an individual of his own services which he provides voluntarily in his own time and free of charge.

11 (1) Accommodation which is the candidate's sole or main residence.

(2) The provision by any other individual of accommodation which is his sole or main residence if the provision is made free of charge.

12 (1) Transport by a means of transport which was acquired by the candidate principally for his own personal use.

(2) Transport provided free of charge by any other individual if the means of transport was acquired by him principally for his own personal use.

13 (1) Computing or printing equipment which was acquired by the candidate principally for his own personal use.

(2) The provision by any other individual of computing or printing equipment which was acquired by the individual principally for his own personal use if the provision is made free of charge.

PART 3
SUPPLEMENTAL
Guidance by Commission

14 (1) The Electoral Commission ("the Commission") may prepare, and from time to time revise, a code of practice giving guidance as to the matters which do, or do not, fall within Part 1 or 2 of this Schedule.

(2) Once the Commission have prepared a draft code under this paragraph, they must submit it to the Secretary of State for his approval.

(3) The Secretary of State may approve a draft code either without modification or with such modifications as he may determine.

(4) Once the Secretary of State has approved a draft code he shall lay a copy of the draft, whether—

(a) in its original form, or

(b) in a form which incorporates any modifications determined under sub-paragraph (3), before each House of Parliament.

(5) If the draft incorporates any such modifications, the Secretary of State must at the same time lay before each House a statement of his reasons for making them.

(6) If, within the 40-day period, either House resolves not to approve the draft, the Secretary of State must take no further steps in relation to the draft code.

(7) If no such resolution is made within the 40-day period—

(a) the Secretary of State must issue the code in the form of the draft laid before Parliament, and

(b) the code is to come into force on such date as the Secretary of State may by order appoint, and the Commission must arrange for it to be published in such manner as they think appropriate.

(8) Sub-paragraph (6) does not prevent a new draft code from being laid before Parliament.

(9) In this paragraph, "the 40-day period", in relation to a draft code, means—

(a) if the draft is laid before one House on a day later than the day on which it is laid before the other House, the period of 40 days beginning with the later of the two days, and

(b) in any other case, the period of 40 days beginning with the day on which the draft is laid before each House,no account being taken of any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both Houses are adjourned for more than four days.

(10) In this paragraph references to a draft code include a revised draft code.

Power to amend Parts 1 and 2

15 (1) The Secretary of State may by order made by statutory instrument make such amendments of Part 1 or 2 of this Schedule as he considers appropriate.

(2) An order under sub-paragraph (1) shall not be made unless a draft of the statutory instrument containing the order has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(3) The Secretary of State may make such an order either—

(a) where the order gives effect to a recommendation of the Electoral Commission; or

(b) after consultation with the Electoral Commission."

Observation of elections etc.

28 Discretion to report on certain elections

In section 5 of the 2000 Act (reports on elections and referendums), after subsection (2) insert—

"(2A) After—

(a) a parliamentary by-election,

(b) an election held under section 9 of the Scotland Act 1998 (election for the Scottish Parliament in the case of a constituency vacancy), or

(c) an election held under section 8 of the Government of Wales Act 1998 (election for the National Assembly for Wales in the case of a constituency vacancy), the Commission may prepare and publish (in such manner as the Commission may determine) a report on the administration of the election."

29 Observation of proceedings and working practices

After section 6 of the 2000 Act (reviews of electoral and political matters), insert—

"6A Attendance of representatives of Commission at elections etc.

(1) A representative of the Commission may attend—

(a) proceedings relating to an election specified in subsection (5) which are the responsibility of the returning officer for the election;

(b) proceedings relating to a referendum to which Part 7 applies which are the responsibility of the relevant counting officer.

(2) The right conferred on a representative of the Commission by this section is subject to any enactment which regulates attendance at the proceedings in question.

(3) In this section, "representative of the Commission" means any of the following—

(a) a member of the Commission;
(b) a member of staff of the Commission;
(c) a person appointed by the Commission for the purposes of this section.

(4) A reference to the relevant counting officer must be construed—
(a) if the area to which the proceedings relates is in Great Britain, in accordance with section 128(3);
(b) if the area to which the proceedings relates is Northern Ireland, as a reference to the Chief Electoral Officer for Northern Ireland.

(5) The elections specified in this subsection are—
(a) an election mentioned in section 5(2);
(b) a parliamentary by-election;
(c) an election under section 9 of the Scotland Act 1998 (constituency vacancies);
(d) an election under section 8 of the Government of Wales Act 1998 (vacancies in constituency seats);
(e) a local government election in England or Wales;
(f) a local election in Northern Ireland.

6B Observation of working practices by representatives of Commission

(1) A representative of the Commission may observe the working practices of any of the following—
(a) an electoral registration officer;
(b) a returning officer;
(c) a relevant counting officer;
(d) any person acting under the direction of a person mentioned in paragraphs (a) to (c).

(2) In this section—
(a) "relevant counting officer", and
(b) "representative of the Commission", must be construed in accordance with section 6A.

(3) This section does not permit the observation of working practices which relate only to a local government election in Scotland.

6C Accredited observers: individuals

(1) A person who is aged 16 or over may apply to the Commission to be an accredited observer at any of the following proceedings relating to an election specified in subsection (5) of section 6A or a referendum to which Part 7 applies—
(a) proceedings at the issue or receipt of postal ballot papers;
(b) proceedings at the poll;
(c) proceedings at the counting of votes.

(2) If the Commission grant the application, the accredited observer may attend the proceedings in question.

(3) An application under subsection (1) must be made in the manner specified in the code of practice issued under section 6F.

(4) The Commission may at any time revoke the grant of an application under subsection (1).

(5) If the Commission—

(a) refuse an application under subsection (1), or

(b) revoke the grant of any such application, they must give their decision in writing and must at the same time give reasons in writing for the refusal or revocation.

(6) The right conferred on an accredited observer by this section is subject to any enactment which regulates attendance at the proceedings in question.

6D Accredited observers: organisations

(1) An organisation may apply to the Commission to be accredited for the purpose of nominating observers at any of the following proceedings relating to an election specified in subsection (5) of section 6A or a referendum to which Part 7 applies—

(a) proceedings at the issue or receipt of postal ballot papers;

(b) proceedings at the poll;

(c) proceedings at the counting of votes.

(2) If the Commission grant the application the organisation may nominate members who may attend the proceedings in question.

(3) The Commission, in granting an application under this section, may specify a limit on the number of observers nominated by the organisation who may attend, at the same time, specified proceedings by virtue of this section.

(4) An application under subsection (1) must be made in the manner

specified in the code of practice issued under section 6F.

(5) The Commission may at any time revoke the grant of an application under subsection (1).

(6) If the Commission—

(a) refuse an application under subsection (1), or

(b) revoke the grant of any such application, they must give their decision in writing and must at the same time give reasons in writing for the refusal or revocation.

(7) The right conferred by this section is subject to any enactment which regulates attendance at the proceedings in question.

6E Attendance and conduct of observers

(1) A relevant officer may limit the number of persons who may be present at any proceedings at the same time in pursuance of section 6C or 6D.

(2) If a person who is entitled to attend any proceedings by virtue of section 6C or 6D misconducts himself while attending the proceedings, the relevant officer may cancel the person's entitlement.

(3) Subsection (2) does not affect any power a relevant officer has by virtue of any enactment or rule of law to remove a person from any place.

(4) A relevant officer is—

(a) in the case of proceedings at a polling station, the presiding officer;

(b) in the case of any other proceedings at an election, the returning officer;

(c) in the case of any other proceedings at a referendum, the relevant counting officer (within the meaning of section 6A);

(d) such other person as a person mentioned in paragraph (a), (b) or (c) authorises for the purposes of the proceedings mentioned in that paragraph.

6F Code of practice on attendance of observers at elections etc.

(1) The Commission must prepare a code of practice on the attendance of—

(a) representatives of the Commission,

(b) accredited observers, and

(c) nominated members of accredited organisations, at elections specified in subsection (5) of section 6A and referendums to which Part 7 applies.

(2) The code must in particular—

(a) specify the manner in which applications under sections 6C(1) and 6D(1) are to be made to the Commission;

(b) specify the criteria to be taken into account by the Commission in determining such applications;

(c) give guidance to relevant officers (within the meaning of section 6E) as to the exercise of the power conferred by subsection (1) of that section;

(d) give guidance to such officers as to the exercise of the power mentioned in subsection (2) of that section as it relates to a person having the permission mentioned in subsection (1) of that section;

(e) give guidance to such officers as to the exercise of any power under any enactment to control the number of persons present at any proceedings relating to an election or referendum as it relates to a person having such permission;

(f) give guidance to representatives of the Commission, accredited observers and nominated members of accredited organisations on the exercise of the rights conferred by sections 6A, 6B, 6C and 6D.

(3) The code may make different provision for different purposes.

(4) Before preparing the code, the Commission must consult the Secretary of State.

(5) The Commission must lay the code before each House of Parliament.

(6) The Commission must publish the code (in such manner as the Commission may determine).

(7) The following persons must have regard to the code in exercising any function conferred by section 6A, 6B, 6C, 6D or 6E—

(a) the Commission;

(b) representatives of the Commission;

(c) relevant officers (within the meaning of section 6E);

(d) relevant counting officers.

(8) The Commission may at any time revise the code.

(9) Subsections (4) to (7) apply in relation to a revision of the code as they apply in relation to the code.

(10) In this section—

(a) "accredited observer" must be construed in accordance with section 6C;

(b) "accredited organisation" must be construed in accordance with section 6D, and "nominated member" must be construed accordingly;

(c) "relevant counting officer" must be construed in accordance with section 6A;

(d) "representative of the Commission" has the same meaning as in section 6A."

Ballot papers

30 Ballot paper design

(1) Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) is amended as follows.

(2) In rule 19 (the ballot papers)—

(a) in paragraph (2), omit sub-paragraph (d);

(b) after paragraph (3) insert—

"(4) The Secretary of State may in regulations—

(a) prescribe a different form of ballot paper from that in the Appendix;

(b) amend or replace the directions as to printing the ballot paper in the Appendix;

(c) in consequence of anything done for the purposes of paragraph (a) or (b), amend or replace the Form of directions for the guidance of the voters in voting in the Appendix."

(3) In the Appendix of forms, in the Directions as to printing the ballot paper, after paragraph 2A insert—

"2B Nothing in paragraph 2 prohibits the face of the ballot paper containing more than one column of numbers, candidates particulars and spaces where the vote is to be marked if the returning officer thinks it is appropriate for the ballot paper to be printed with more than one column, but in such a case each column must be separated by a

31 Replacement of counterfoils

(1) Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) is amended as follows.

(2) After rule 19 insert—

"Corresponding number list

19A (1) The returning officer must prepare a list containing the numbers and other unique identifying marks of all of the ballot papers to be issued by him in pursuance of rule 24(1) or provided by him in pursuance of rule 29(1).

(2) The list shall be in such form as the Secretary of State in regulations prescribes."

(3) In rule 29 (equipment of polling stations), in paragraph (3), after subparagraph (d) insert—

"(e) a list consisting of that part of the list prepared under rule 19A which contains the numbers (but not the other unique identifying marks) corresponding to those on the ballot papers provided to the presiding officer of the polling station."

(4) In rule 43 (procedure on close of poll)—

(a) in paragraph (1), after sub-paragraph (d) insert— "(da) the lists prepared under rule 19A, including the parts which were completed in accordance with rule 37(1)(b) and (d) (together referred to in these rules as "the completed corresponding number lists");";

(b) in paragraph (1)(e) omit "the counterfoils of the used ballot papers and";

(c) in paragraph (2) for "counterfoils of the used ballot papers and" substitute "completed corresponding number lists or".

(5) In rule 54 (sealing up of ballot papers), for paragraph (2) substitute—

"(2) The returning officer shall not open the sealed packets of—

(a) tendered ballot papers,

(b) the completed corresponding number lists,

(c) certificates as to employment on duty on the day of the poll, or

(d) marked copies of the register of electors (including any marked copy notices issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act) and lists of proxies."

(6) In rule 55 (delivery of documents), in paragraph (1)—

(a) after sub-paragraph (c) insert— "(ca) the packets of the completed corresponding number lists,";

(b) in sub-paragraph (d) omit "counterfoils and".

56 (orders for production of documents)—

(a) in paragraph (1)(b) for "counterfoils and" substitute "the completed corresponding number lists or of";

(b) in paragraph (2) for "counterfoils and" substitute "the completed corresponding number lists or of";

(c) in paragraph (3) for "counterfoils and" substitute "the completed corresponding number lists or of";

(d) for paragraph (7) substitute—

"(7) The production from proper custody of—

(a) a ballot paper purporting to have been used at any election, and

(b) a completed corresponding number list with a number marked in writing beside the number of the ballot paper, shall be prima facie evidence that the elector whose vote was given by that ballot paper was the person whose entry in the register of electors (or on a notice issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act) at the time of the election contained the same number as the number written as mentioned in sub-paragraph (b).";

(e) in paragraph (8) for "counterfoils and" substitute "the completed corresponding number lists or of".

(8) In rule 57 (retention and public inspection of documents), for paragraph (2) substitute—
"(2) The documents mentioned in paragraphs (1) and (1A) except—

(a) ballot papers,

(b) the completed corresponding number lists,

(c) certificates as to employment on duty on the day of the poll, shall be open to public inspection."

(9) In the Appendix of forms—

(a) in the Form of Front of Ballot Paper omit "Counterfoil No. The counterfoil is to have a number to correspond with that on the back of the ballot paper";

(b) in the Form of Back of Ballot Paper omit "Note.— The number on the ballot paper is to correspond with that on the counterfoil".

32 Photographs on ballot papers: piloting

(1) This section applies if a local authority makes a proposal that an order be made under subsection (2) applying to particular local government elections held in its area.

(2) The Secretary of State may by order (a pilot order) make provision for the purposes of enabling ballot papers issued at such local government elections as are specified in the order to contain photographs of the candidates.

(3) A pilot order may include such provision modifying or disapplying any enactment as the Secretary of State thinks is necessary or expedient for the purposes of the order.

(4) The Secretary of State must not make a pilot order unless he first consults the Electoral Commission.

(5) A pilot order may make provision implementing the local authority's proposal—

(a) without modification, or

(b) with such modifications as the Secretary of State and the local autharity agree between them.

(6) If the Secretary of State makes a pilot order—

(a) he must send a copy of it to the local authority and to the Electoral Commission, and

(b) the local authority must publish the order in their area in such manner as they think fit.

(7) A pilot order may be amended or revoked by a further order.

(8) The Secretary of State may reimburse a returning officer for any expenditure necessarily incurred by him in consequence of the making of a pilot order.

(9) A local authority is—

(a) in England, a county council, a district council, a London borough council or the Greater London Authority;

(b) in Wales, a county council or a county borough council.

(10) In this section—

(a) "local government election" must be construed in accordance with section 203(1) of the 1983 Act;

(b) a reference to the area of a local authority must be construed in accordance with the definition of "local government area" in that subsection.

33 Evaluation of pilots under section 32

(1) After any elections specified in a pilot order have taken place, the Electoral Commission must prepare a report on the operation of the order.

(2) The report must contain, in particular—

(a) a description of the way in which the provision made by the order differed from the provisions which would otherwise have applied to the election or elections;

(b) a copy of the order;

(c) an assessment of the success or otherwise of the order in assisting voters to make informed decisions at the election or elections in question;

(d) an assessment of the success or otherwise of the order in encouraging voting at the election or elections in question;

(e) an assessment of whether the procedures provided for in the order operated satisfactorily.

(3) An assessment under subsection (2)(c) must include a statement of whether, in the opinion of the Commission, the inclusion of photographs on the ballot paper—

Electoral Administration Act 2006 (c. 22)

(a) assisted voters in marking their papers with a vote for a candidate (or with votes for candidates) for whom they had decided to vote on grounds other than the candidates' appearance;

(b) resulted in voters being influenced (or more influenced) by the appearance of candidates in deciding for whom to vote.

(4) An assessment under subsection (2)(d) must include a statement of whether, in the opinion of the Commission, the turnout of voters was higher than it would have been if the order had not applied.

(5) An assessment under subsection (2)(e) must include a statement of—

(a) whether the candidates and their agents found the procedures provided for in the order easy to use;

(b) whether the returning officer found those procedures easy to administer;

(c) whether those procedures had any effect on the incidence of malpractice (whether or not amounting to an offence) in connection with elections;

(d) the amount of any increase attributable to those procedures in the resources applied by the authority concerned to the election or elections.

(6) In making an assessment under subsection (2)(c), (d) or (e), the Commission must also apply such other criteria as are specified in the order in relation to that assessment.

(7) The local authority must give the Commission such assistance as the Commission may reasonably require in connection with the preparation of the report.

(8) The assistance may include—

(a) making arrangements for ascertaining the views of electors about the operation of the provisions of the order;

(b) reporting to the Commission allegations of electoral offences or other malpractice.

(9) The Commission must, before the end of the period of three months beginning with the date of the declaration of the result of the election or elections in question, send a copy of the report—

(a) to the Secretary of State, and

(b) to the local authority.

(10) The local authority must publish the report in their area in such manner as they think fit.

(11) In this section "pilot order" and "the local authority" must be construed in accordance with section 32.

34 Revision of electoral provisions in the light of pilot schemes

(1) This section applies if the Secretary of State thinks, in the light of a report made under section 33 on the operation of a pilot order under section 32, that it would be desirable for provision similar to that made by the order to apply generally, and on a permanent basis, in relation to—

(a) parliamentary elections;

(b) local government elections in England and Wales;

(c) any description of election falling within paragraph (a) or (b).

(2) The Secretary of State may by order make provision for the purposes of enabling ballot papers issued at such elections (mentioned in subsection (1)) as are specified in the order to contain photographs of the candidates.

(3) The Secretary of State must not make an order under subsection (2) unless he first consults the Electoral Commission.

(4) An order under subsection (2) may—

(a) include such provision modifying or disapplying any enactment as the Secretary of State thinks is necessary or expedient for the purposes of the order;

(b) create or extend the application of an offence.

(5) An order under subsection (2) must not create an offence punishable—

(a) on conviction on indictment, with imprisonment for a term exceeding one year;

(b) on summary conviction, with imprisonment for a term exceeding 51 weeks or with a fine exceeding the statutory maximum.

(6) The power to make an order under subsection (2) is exercisable by statutory instrument, but no such order may be made unless a draft of the instrument containing the order has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(7) The reference to local government elections must be construed in accordance with section 32.

(8) If an order under subsection (2) is made before the date of commencement of section 281(5) of the Criminal Justice Act 2003, then in relation to any offence committed before that date the reference in subsection (5)(b) to 51 weeks must be taken to be a reference to six months.

(9) In its application to Scotland and Northern Ireland, the reference in subsection (5)(b) to 51 weeks must be taken to be a reference to six months.

Voting in person

35 Certain voters entitled to vote in person

(1) Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (c. 2) (absent voting in Great Britain) is amended as follows.

(2) After paragraph 2(5) insert—

"(5A) Nothing in the preceding provisions of this paragraph applies to a person to whom section 7 of the 1983 Act (mental patients who are not detained offenders) applies and who is liable, by virtue of any enactment, to be detained in the mental hospital in question, whether he is registered by virtue of that provision or not; and such a person may vote—

(a) in person (where he is granted permission to be absent from the hospital and voting in person does not breach any condition attached to that permission), or

(b) by post or by proxy (where he is entitled as an elector to vote by post or, as the case may be, by proxy at the election)."

(3) In paragraph 2(6), omit paragraph (a) and the "or" following it.

(4) This section does not apply to local government elections in Scotland (within the meaning of the 1983 Act).

Certain electoral documents

36 Translations etc. of certain documents

In the 1983 Act, in Part 5, before section 200 (public notices and declarations) insert—

"199BTranslations etc of certain documents

(1) Subsections (2) and (3) below apply to any document which under or by virtue of this Act is required or authorised to be given to voters or displayed in any place for the purposes of a parliamentary or local government election.

(2) The person who is required or authorised to give or display the document must, as he thinks appropriate, give or display or otherwise make available in such form as he thinks appropriate—

(a) the document in Braille;

(b) the document in languages other than English;

(c) graphical representations of the information contained in the document;

(d) other means of making the information contained in the document accessible to persons who might not otherwise have reasonable access to the information.

(3) The person required or authorised to give or display the document must also, as he thinks appropriate, make available the information contained in the document in such audible form as he thinks appropriate.

(4) Subsections (2) and (3) above do not apply to—

(a) the nomination paper;

(b) the ballot paper.

(5) The returning officer at a parliamentary election or a local government election may cause to be displayed at every polling station in the election an enlarged sample copy of the ballot paper.

(6) The sample copy mentioned in subsection (5) above—

(a) in the case of a parliamentary election or a local government election where only one candidate is to be elected, must have printed the words "VOTE FOR ONE CANDIDATE ONLY" both at the top and immediately below the list of candidates,

(b) in the case of a local government election where more than one candidate is to be elected, must have printed the words "VOTE FOR NO MORE THAN [here insert the maximum number of candidates to be elected] CANDIDATES" both at the top and immediately below the list of candidates, and

(c) in each case, below the second occurrence of those words, may include a translation of those words into such other languages as the returning officer thinks appropriate.

(7) The returning officer at a parliamentary election or a local government election must provide at every polling station in the election an enlarged hand-held sample copy of the ballot paper for the assistance of voters who are partially sighted.

(8) The sample copy mentioned in subsection (7) above must be clearly marked as a specimen provided only for the guidance of voters.

(9) In the application of subsection (2)(b) to Northern Ireland any question as to whether a person is to give or display or otherwise make available a document in a language other than English is to be decided by the returning officer.

(10) This section does not apply to a local government election in Scotland." 37 Documents relating to postal voting In Schedule 1 to the 1983 Act, for rule 24 (postal ballot papers) substitute—

"24 (1) The returning officer shall, in accordance with regulations, issue to those entitled to vote by post—

(a) a ballot paper;

(b) at an election held in England and Wales or Scotland, a postal voting statement in the prescribed form;

(c) at an election held in Northern Ireland, a declaration of identity in the prescribed form;

together with such envelopes for their return as may be prescribed.

(2) The returning officer must also issue to those entitled to vote by post such information as he thinks appropriate about how to obtain—

(a) translations into languages other than English of any directions to or guidance for voters sent with the ballot paper;

(b) a translation into Braille of such directions or guidance;

(c) graphical representations of such directions or guidance;

(d) the directions or guidance in any other form (including any audible form).

(3) The prescribed form shall include provision for the form to be signed and for stating the date of birth of the elector or proxy (as the case may be).

(4) In the case of a ballot paper issued to a person resident in the United Kingdom, the returning officer must ensure that the return of the ballot paper and postal voting statement or declaration of identity is free of charge to the voter.

(5) In any other case, regulations may provide that the returning officer must so ensure."

Circumstances in which votes may be tendered

38 Tendered votes

(1) In Schedule 1 to the 1983 Act, in rule 40 (tendered ballot papers), afterparagraph (1) insert—

"(1ZA) Paragraph (1ZC) applies if —

(a) a person applies for a ballot paper representing himself to be a particular elector named on the register,

(b) he is also named in the postal voters list, and

(c) he claims that he did not make an application to vote by post at the election.

(1ZB) Paragraph (1ZC) also applies if—

(a) a person applies for a ballot paper representing himself to be a particular person named as a proxy in the list of proxies,

(b) he is also named in the proxy postal voters list, and

(c) he claims that he did not make an application to vote by post as proxy.

(1ZC) The person shall, on satisfactorily answering the questions permitted by law to be asked at the poll, be entitled, subject to the following provisions of this rule, to mark a ballot paper (in these rules referred to as a "tendered ballot paper") in the same manner as any other voter."

(2) After paragraph (1ZC) of that rule (inserted by subsection (1) above) insert—

"(1ZD) Paragraph (1ZE) applies if before the close of the poll but after the last time at which a person may apply for a replacement postal ballot paper, a person represents himself to be—

(a) a particular elector named on the register and who is also named in the postal voters list, or

(b) a particular person named as a proxy in the list of proxies and who is also named in the proxy postal voters list, and claims that he has lost or has not received his postal ballot paper.

(1ZE) The person shall, on satisfactorily answering the questions permitted by law to be asked at the poll, be entitled, subject to the following provisions of this rule, to mark a ballot paper (in these rules referred to as a "tendered ballot paper") in the same manner as any other voter."

(3) In section 61 of that Act (certain voting offences), after subsection (6) insert— "(6A) A person is not guilty of an offence under subsection (2)(b) or (3)(b) above only by reason of his having marked a tendered ballot paper in pursuance of rule 40(1ZC) or (1ZE) of the parliamentary elections rules."

(4) In section 5 of the Representation of the People Act 1985 (c. 50) (absent voting in Northern Ireland) after subsection (5A) insert—

"(5B) Subsection (2) above does not prevent a person, at the polling station allotted to him, marking a tendered ballot paper in pursuance of rule 40(1ZC) or (1ZE) of the parliamentary elections rules."

(5) In section 9 of that Act (voting as proxy in Northern Ireland) after subsection Electoral

(11) insert—

“(11A) Subsection (2) above does not prevent a person, at the polling station allotted to him, marking a tendered ballot paper in pursuance of rule 40(1ZC) or (1ZE) of the parliamentary elections rules.”

(6) In Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (c. 2) (absent voting in Great Britain)—

(a) in paragraph 2 (manner of voting at parliamentary or local government elections) after sub-paragraph (6) insert—

“(6A) Sub-paragraph (2) above does not prevent a person, at the polling station allotted to him, marking a tendered ballot paper in pursuance of rule 40(1ZC) or (1ZE) of the parliamentary elections rules.”;

(b) in paragraph 7 (voting as proxy) after sub-paragraph (9) insert—

“(10) Sub-paragraph (2) above does not prevent a person, at the polling station allotted to him, marking a tendered ballot paper in pursuance of rule 40(1ZC) or (1ZE) of the parliamentary elections rules.”

Offences related to voting

39 Undue influence

(1) In section 115 of the 1983 Act (offence of undue influence), in subsection (2)(b)—

(a) after “prevents” insert “, or intends to impede or prevent,”;

(b) after “prevails upon” insert “, or intends so to compel, induce or prevail upon,”.

(2) This section does not have effect in relation to a local government election in Scotland.

40 Offences relating to applications for postal and proxy votes

After section 62 of the 1983 Act (offences as to declarations) insert—

“62A Offences relating to applications for postal and proxy votes

(1) A person commits an offence if he—

(a) engages in an act specified in subsection (2) at a parliamentary or local government election, and

(b) intends, by doing so, to deprive another of an opportunity to vote or to make for himself or another a gain of a vote to which he or the other is not otherwise entitled or a gain of money or property.

(2) These are the acts—

(a) applying for a postal or proxy vote as some other person (whether that other person is living or dead or is a fictitious person);

(b) otherwise making a false statement in, or in connection with, an application for a postal or proxy vote;

(c) inducing the registration officer or returning officer to send a postal ballot paper or any communication relating to a postal or proxy vote to an address which has not been agreed to by the person entitled to the vote;

(d) causing a communication relating to a postal or proxy vote or containing a postal ballot paper not to be delivered to the intended recipient.

(3) In subsection (1)(b), property includes any description of property.

(4) In subsection (2) a reference to a postal vote or a postal ballot paper includes a reference to a proxy postal vote or a proxy postal ballot paper (as the case may be).

(5) A person who commits an offence under subsection (1) or who aids, abets, counsels or procures the commission of such an offence is guilty of a corrupt practice.

(6) This section does not apply to anything done at a local government election in Scotland.”

Access to election documents

41 Control of documents after parliamentary election

(1) Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) is amended in accordance with subsections (2) to (7).

(2) In the heading to rule 55 (delivery of documents after poll) for “Clerk of the Crown” substitute “registration officer”.

(3) In that rule—

(a) in paragraph (1) for “Clerk of the Crown” substitute “relevant registration officer”;

(b) after paragraph (1) insert—

“(1A) In this rule and in rules 56 and 57 references to the relevant registration officer are to—

(a) the registration officer of the local authority in whose area the constituency is situated, or

(b) if the constituency comprises any part of the area of more than one local authority, the registration officer of the local authority in whose area the greater or greatest (as the case may be) number of electors is registered.”;

(c) omit paragraphs (2) to (4).

(4) In rule 56 (orders for production of documents)—

(a) in each of paragraphs (1), (6) and (8) for “Clerk of the Crown” substitute “relevant registration officer”;

(b) in paragraph (2) for “Clerk of the Crown’s” substitute “relevant registration officer’s”;

(5) In rule 57 (retention and public inspection of documents)—

(a) in paragraph (1) for “Clerk of the Crown” substitute “relevant registration officer”;

(b) for paragraph (3) substitute—

“(3) The relevant registration officer or the Chief Electoral Officer for Northern Ireland (as the case may be) must, on request, supply to any person copies of or extracts from such description of the documents open to public inspection as is prescribed by regulations.”;

(c) after paragraph (3) insert—

“(4) Each of the following must, on request, be supplied with a copy of the marked copies of the register, the postal voters list, the list of proxies and the proxy postal voters list—

(a) a registered party within the meaning of Part 2 of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000;

(b) a person who was a candidate at the election in relation to the constituency for which he was a candidate.

(5) Regulations may impose conditions in relation to—

(a) the inspection of any document in pursuance of paragraph (2);

(b) the supply of any document or part of a document in pursuance of paragraph (3);

(c) the supply of any document or part of a document in pursuance of paragraph (4).

(6) Regulations may also make provision—

(a) as to the form in which any such document or part is supplied;

(b) for the payment of a fee in respect of the supply of a document or part.

(7) Conditions which may be imposed for the purposes of paragraph (5)(a) or (b) include conditions as to—

(a) whether a person may take any copy of a document he is permitted to inspect;

(b) the manner in which any such copy is to be taken;

(c) the purposes for which information contained in any document or part of a document which is inspected or supplied in pursuance of paragraph (2) or (3) may be used.

(8) Conditions which may be imposed for the purposes of paragraph (5)(b) or (c) include conditions as to the extent to which a person to whom a document or part of a document has been supplied may—

(a) supply that document or part to any other person;

(b) disclose to any other person any information contained in the document or part;

(c) use any such information for a purpose other than that for which the document or part was supplied to him.

(9) Regulations may also impose conditions corresponding to those mentioned in paragraph (8) in respect of persons who have obtained a document or part of a document mentioned in paragraph (4)—

(a) which was supplied to another person in pursuance of paragraph (4), or

(b) otherwise than in accordance with regulations under this section."

(6) For rule 58 (documents in Scotland) substitute—

"58 (1) In the application of rules 55 to 57 to elections in Scotland, the references to the relevant registration officer shall be taken to be references to the relevant sheriff clerk.

(2) For the purposes of rule 55 as it applies to elections in Scotland—

(a) the documents to be forwarded in accordance with that rule may be forwarded by being—

(i) delivered to the relevant sheriff clerk by the returning officer or his agent, or

(ii) sent to the relevant sheriff clerk by recorded delivery post,

(b) on forwarding the documents, the returning officer must deliver or send to the relevant sheriff clerk along with the documents a letter specifying the number and descriptions of the documents forwarded, and

(c) where the documents are forwarded by delivery under subparagraph (a)(i) above, the relevant sheriff clerk must, on receipt of the documents, provide the person delivering them with a signed receipt showing the date and time of receipt.

(3) In this rule, "relevant sheriff clerk" means—

(a) the sheriff clerk of the sheriff court district in which the constituency is situated, or

(b) if the constituency comprises any part of the area of more than one sheriff court district, the sheriff clerk of such one of those districts as the Secretary of State may by order appoint."

(7) For rule 59 (documents in Northern Ireland) substitute— "59 In the application of rules 55 to 57 to elections for a constituency in Northern Ireland, the references to the relevant registration officer shall be taken to be references to the Clerk of the Crown for Northern Ireland."

(8) In section 63 of that Act (breach of official duty), in subsection (3)(c) after "responsible after a" insert "parliamentary or".

(9) After section 66A of that Act (prohibition on publication of exit polls) insert—

"66B Failure to comply with conditions relating to supply etc. of certain documents

(1) A person is guilty of an offence—

(a) if he fails to comply with any conditions imposed in pursuance of regulations under rule 57 of the parliamentary elections rules, or

(b) if he is an appropriate supervisor of a person (P) who fails to comply with such a condition and he failed to take appropriate steps.

(2) P is not guilty of an offence under subsection (1) if—

(a) he has an appropriate supervisor, and

(b) he has complied with all the requirements imposed on him by his appropriate supervisor.

(3) A person who is not P or an appropriate supervisor is not guilty of an offence under subsection (1) if he takes all reasonable steps to ensure that he complies with the conditions.

(4) In subsections (1)(b) and (2)—

(a) an appropriate supervisor is a person who is a director of a company or concerned in the management of an organisation in which P is employed or under whose direction or control P is;

(b) appropriate steps are such steps as it was reasonable for the appropriate supervisor to take to secure the operation of procedures designed to prevent, so far as reasonably practicable, the occurrence of a failure to comply with the conditions.

(5) A person guilty of an offence as mentioned in subsection (1) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale."

42 Access to other election documents

(1) The relevant officer must—

(a) make relevant election documents available for inspection by members of the public;

(b) supply, on request, copies of or extracts from such description of relevant election documents as is prescribed by regulations.

(2) In the case of an election other than a parliamentary election, a local government election in Scotland or a local election in Northern Ireland, each of the following must, on request, be supplied with a copy of the marked copies of the register, the postal voters list, the list of proxies and the proxy postal voters list—

(a) a registered party;

(b) a person who was a candidate at the election in relation to the electoral area for which he was a candidate;

(c) in the case of an election at which a registered party submits a list of candidates, a person who was appointed as an agent for the candidates on the party's list.

(3) The Secretary of State may by regulations impose conditions in relation to—

(a) the inspection of any document in pursuance of subsection (1)(a);

(b) the supply of any document or part of a document in pursuance of subsection (1)(b);

(c) the supply of any document or part of a document in pursuance of subsection (2).

(4) Regulations may also make provision—

(a) as to the form in which any such document or part is supplied;

(b) for the payment of a fee in respect of the supply of a document or part.

(5) Conditions which may be imposed for the purposes of subsection (3)(a) or (b) include conditions as to—

(a) whether a person may take any copy of a document he is permitted to inspect;

(b) the manner in which any such copy is to be taken;

(c) the purposes for which information contained in any document or part of a document which is inspected or supplied in pursuance of subsection (1) may be used.

(6) Conditions which may be imposed for the purposes of subsection (3)(b) or (c) include conditions as to the extent to which a person to whom a document or part of a document has been supplied may—

(a) supply that document or part to any other person;

(b) disclose to any other person any information contained in the document or part;

(c) use any such information for a purpose other than that for which the document or part was supplied to him.

(7) Regulations may also impose conditions corresponding to those mentioned in subsection (6) in respect of persons who have obtained a document or part of a document mentioned in subsection (2)—

(a) which was supplied to another person in pursuance of subsection (2), or

(b) otherwise than in accordance with regulations under this section.

(8) The power to make regulations under this section—

(a) is exercisable by the Secretary of State by statutory instrument;

(b) includes power to make different provision for different purposes.

(9) The Secretary of State must not make regulations under this section unless he first consults the Electoral Commission.

(10) No regulations may be made under this section unless a draft of the statutory instrument containing the regulations has been laid before, and approved by resolution of, each House of Parliament.

43 Access to other election documents: contravention of regulations

(1) A person is guilty of an offence—

(a) if he fails to comply with any conditions imposed in pursuance of regulations under section 42, or

(b) if he is an appropriate supervisor of a person (P) who fails to comply with such a condition and he failed to take appropriate steps.

(2) P is not guilty of an offence under subsection (1) if—

(a) he has an appropriate supervisor, and

(b) he has complied with all the requirements imposed on him by his appropriate supervisor.

(3) A person who is not P or an appropriate supervisor is not guilty of an offence under subsection (1) if he takes all reasonable steps to ensure that he complies with the conditions.

(4) In subsections (1)(b) and (2)—

(a) an appropriate supervisor is a person who is a director of a company or concerned in the management of an organisation in which P is employed or under whose direction or control P is;

(b) appropriate steps are such steps as it was reasonable for the appropriate supervisor to take to secure the operation of procedures designed to prevent, so far as reasonably practicable, the occurrence of a failure to comply with the conditions.

(5) A person guilty of an offence as mentioned in subsection (1) is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

44 Access to other election documents: supplementary

(1) This section applies for the purposes of section 42.

(2) The relevant officer is—

(a) in England and Wales, the relevant registration officer;

(b) in Scotland, the relevant sheriff clerk;

(c) in Northern Ireland, the Chief Electoral Officer for Northern Ireland.

(3) The relevant registration officer is—

(a) the registration officer of the local authority in whose area the election is held, or

(b) if the election is held in respect of an electoral area which comprises any part of the area of more than one local authority, such registration officer as the Secretary of State by order appoints.

(4) The relevant sheriff clerk is—

(a) the sheriff clerk of the sheriff court district in which the election is held, or

(b) if the election is held in respect of an electoral area which comprises any part of the area of more than one sheriff court district, the sheriff clerk of such of those districts as the Secretary of State by order appoints.

(5) The relevant election documents are such documents relating to an election (other than a parliamentary election, a local government election in Scotland or a local election in Northern Ireland) as the relevant officer is required by or under any enactment to retain for any period except—

(a) ballot papers;

(b) completed corresponding number lists;

(c) certificates as to employment on the day of the election.

(6) A party is a registered party if it is registered for the purposes of Part 2 of the

2000 Act (registration of political parties).

(7) An electoral area is—

(a) in relation to a local government election, an electoral area within the meaning of section 203(1) of the 1983 Act;

(b) in relation to an election to the National Assembly for Wales, an Assembly constituency or an Assembly electoral region within the meaning of section 2(2) of the Government of Wales Act 1998 (c. 38) (Assembly constituencies and Assembly regions);

(c) in relation to an election to the Scottish Parliament, a constituency or a region within the meaning of Schedule 1 to the Scotland Act 1998 (c. 46) (constituencies, regions and regional members);

(d) in relation to an election to the Northern Ireland Assembly, a constituency for the purposes of section 33 of the Northern Ireland Act 1998 (c. 47) (constituencies and numbers of members);

(e) in relation to an election to the European Parliament, an electoral region within the meaning of section 1 of the European Parliamentary Elections Act 2002 (c. 24) (electoral regions and number of MEPs).

(8) The marked register is the copy of the register of electors marked in accordance with provision corresponding to rule 37(1)(c) of the parliamentary elections rules.

(9) A marked copy of the list of proxies is the copy of that list marked in accordance with provision corresponding to rule 37(1)(e) of the parliamentary elections rules.

(10) A marked copy of the postal voters list or the proxy postal voters list is the copy of that list marked in accordance with provision corresponding to rule 31A(1) of the parliamentary elections rules.

(11) A completed corresponding number list is a list prepared under provision corresponding to rule 19A of the parliamentary elections rules which is completed in accordance with provision corresponding to rule 37(1)(b) and (d) of those rules.

(12) Expressions used in this section or section 42 or 43 and in the 1983 Act must (unless the context otherwise requires) be construed in accordance with that Act.

45 Marked postal voters list

(1) Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) is amended as follows.

(2) After rule 31 (notification of requirement of secrecy) insert—

“Return of postal ballot papers

31A (1) Where—

(a) a postal vote has been returned in respect of a person who is entered on the postal voters list, or

(b) a proxy postal vote has been returned in respect of a proxy who is entered on the proxy postal voters list, the returning officer must mark the list in the prescribed manner.

(2) For the purposes of paragraph (1) above, regulations may prescribe the circumstances in which a postal vote or a proxy postal vote (as the case may be) is or is not to be treated as having been returned.

(3) Rule 45(1B) and (2) below does not apply for the purpose of determining whether, for the purposes of this rule, a postal vote or a proxy postal vote is returned.”

(3) In rule 55 (delivery of documents after poll)—

(a) in paragraph (1)(e) for “of lists of proxies” substitute “of the postal voters list, of lists of proxies and of the proxy postal voters list”;

(b) after paragraph (1)(e) insert—

“(f) such other documents relating to elections as are prescribed,”.

Correction of procedural errors

46 Returning officers: correction of procedural errors

(1) A returning officer for an election to which this section applies may take such steps as he thinks appropriate to remedy any act or omission on his part, or on the part of a relevant person, which—

(a) arises in connection with any function the returning officer or relevant person has in relation to the election, and

(b) is not in accordance with the rules or any other requirements applicable to the election.

(2) But a returning officer may not under subsection (1) re-count the votes given at an election after the result has been declared.

(3) This section applies to—

(a) a parliamentary election;

(b) a local government election in England and Wales (within the meaning of the 1983 Act).

(4) These are the relevant persons—

(a) an electoral registration officer;

(b) a presiding officer;

(c) a person providing goods or services to the returning officer;

(d) a deputy of any person mentioned in paragraph (a) to (c) or a person appointed to assist, or in the course of his employment assisting, such a person in connection with any function he has in relation to the election.

(5) Subsections (1) to (4) must be construed as part of the Representation of the People Acts.

(6) In section 63 of the 1983 Act (breach of official duty), after subsection (3) insert—

"(4) Where—

(a) a returning officer for an election to which section 46 of the Electoral Administration Act 2006 applies is guilty of an act or omission in breach of his official duty, but

(b) he remedies that act or omission in full by taking steps under subsection (1) of that section, he shall not be guilty of an offence under subsection (1) above.

(5) Subsection (4) does not affect any conviction which takes place, or any penalty which is imposed, before the date on which the act or omission is remedied in full."

Miscellaneous amendments

47 Miscellaneous amendments of the 1983 Act

Part 5 of Schedule 1 (which contains miscellaneous amendments of the 1983 Act relating to the conduct of elections) has effect.

PART 7
REGULATION OF PARTIES

Registration of parties

48 Registered names of parties

In section 28 of the 2000 Act (registration of parties), after subsection (4)(d) insert—

"(da) would be likely, were it to appear on a ballot paper issued at an election—

(i) to result in an elector being misled as to the effect of his vote, or

(ii) to contradict, or hinder an elector's understanding of, any directions for his guidance in voting given on the ballot paper or elsewhere,".

49 Political party descriptions

(1) In the 2000 Act after section 28 (registration of parties) insert—

"28A Descriptions

(1) A party's application under section 28 may include a request for the registration of up to 12 descriptions to be used on nomination papers or ballot papers.

(2) Where a request is made by a party under this section in relation to a description, the Commission shall register the description as a description of the party unless it is of more than six words in length or in their opinion it—

(a) would be the same as the name of a party or the registered description of a party which (in either case) is already registered in the register in which that party is applying to be registered,

(b) would be likely to result in electors confusing that party with another party which is already registered in respect of the relevant part of the United Kingdom,

(c) is obscene or offensive,

(d) is of such a character that its publication would be likely to amount to the commission of an offence,

(e) would be likely, were it to appear on a ballot paper issued at an election—

(i) to result in an elector being misled as to the effect of hisvote, or

(ii) to contradict, or hinder an elector's understanding of, any directions for his guidance in voting given on the ballot paper or elsewhere,

(f) includes any script other than Roman script, or

(g) includes a word or expression prohibited by order made by the Secretary of State.

(3) In subsection (2)(b) "already registered in respect of the relevant part of the United Kingdom" has the meaning given by section 28(5).

(4) An order under subsection (2)(g) may except the use of a word or expression from the prohibition in specified circumstances.

(5) In the application of subsection (2) above to a party which has made a declaration falling within section 28(2) which specifies Wales as a part of Great Britain in respect of which it is applying to be registered, for "it is of more than six words in length" substitute "its length exceeds six words in either English or Welsh or, if the description is also expressed in the other of those languages, six words in that other language".

(6) The Secretary of State may, by order, substitute for the number "12" in subsection (1) such other number as he thinks appropriate.

(7) An order under subsection (2)(g) or (6) must not be made unless the Secretary of State first consults the Commission.

28B Joint descriptions

(1) Two or more parties which are registered under section 28 above in the same register may apply to the Commission to register a description for use by a candidate standing in the name of both or all of the parties jointly.

(2) The following provisions of section 28A apply to an application under this section as they apply to an application under that section—

(a) subsections (2) to (5);

(b) subsection (7), so far as it relates to subsection (2)(g).

(3) Subsections (1)(bb), (4A) to (4D) and (6A) of section 30 apply to a description mentioned in subsection (1) above as they apply to a description to which section 28A applies; and for the purposes of such application—

(a) any reference to a party in section 30 (except in relation to an application to remove a description under subsection (1)(bb) of that section) must be construed as a reference to the parties mentioned in subsection (1) above acting jointly,

(b) section 30(4A)(a) must be taken to read "the parties already have a description registered in pursuance of section 28B above", and

(c) the requirement in paragraph 9 of Schedule 4 for an application under section 30 to be signed by the responsible officer of a party must be taken to be a requirement for the application to be signed by a responsible officer of each party which joins in the application."

(2) In section 30 of that Act (changes to the register)—

(a) in subsection (1), after paragraph (ba) insert—

"(bb) the addition, alteration, substitution or removal of a description,";

(b) in subsection (2) for "(6)" substitute "(6A)";

(c) in subsection (4) after paragraph (a) insert "or

"(aa) such confusion in relation to a registered description of the party as is mentioned in paragraph (b) of section 28A(2),";

(d) after subsection (4) insert—

"(4A) The Commission shall refuse an application to add a description if—

(a) the party already has 12 descriptions (or such other maximum number of descriptions as is substituted by order under section 28A(6)),

(b) the length of the description exceeds six words, or

(c) in the Commission's opinion, any of paragraphs (a) to(g) of section 28A(2) apply to the description.

(4B) The Commission shall refuse an application to alter a description if the effect of the alteration—

(a) is that the length of the description as altered will exceed six words, or

(b) in their opinion, is that any of paragraphs (a) to (g) of section 28A(2) will apply to the description as altered.

(4C) The Commission shall refuse to substitute a description if—

(a) the length of the new description will exceed six words, or

(b) in their opinion any of paragraphs (a) to (g) of section

28A(2) apply to the new description.

(4D) In the application of subsection (4A)(b), (4B)(a) or (4C)(a) above to a party which has made a declaration falling within section

28(2) which specifies Wales as a part of Great Britain in respect of which it is registered, for "six words" substitute "six words in either English or Welsh or, if the description is also expressed in the other of those languages, six words in that other language".";

(e) after subsection (6) insert— "(6A) If an application under this section for the substitution or removal of a description is granted at any time between—

(a) the date of publication of the notice of election at an election in which there are one or more candidates standing in the name of the party, and

(b) the poll at the election, the change does not take effect until the day following the poll."

(f) in subsection (7), after "subsection (3)" insert "(4A), (4B), (4C),";

(g) in subsection (7), after paragraph (a) insert "or

(aa) section 28A(2)(a) and section 28(5) as it applies by virtue of section 28A(3), or

(ab) section 28A(2)(a) as it applies by virtue of section 28B(2),".

(3) In Schedule 1 to the 1983 Act (parliamentary elections rules) in rule 6A, after paragraph (1) insert—

"(1A) In paragraph (1) above an authorised description may be either—

(a) the name of the party registered under section 28 of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, or

(b) a description of the party registered under section 28A of that Act.

(1B) A nomination paper may not include a description of a candidate which is likely to lead electors to associate the candidate with two or more registered political parties unless the parties are each qualifying parties in relation to the constituency and the description is a registered description authorised by a certificate—

(a) issued by or on behalf of the registered nominating officer of each of the parties, and

(b) received by the returning officer at some time during the period for delivery of nomination papers set out in the Table in rule 1.

(1C) For the purposes of paragraph (1B), a description is a registered description if it is a description registered for use by the parties under section 28B of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000."

50 Confirmation of registered particulars

(1) Section 32 of the 2000 Act (confirmation of registered particulars) is amended as follows.

(2) In subsection (1), for the words from "at the time when" to "Part III" substitute "within the specified period".

(3) After that subsection insert—

"(1A) In subsection (1), "the specified period" means the period—

(a) beginning on the first day of the period within which the statement of accounts for any financial year of the party is required to be delivered to the Commission by virtue of section 45, and

(b) ending six months after the last day of that period."

51 Removal from register of registered parties

(1) Section 33 of the 2000 Act (party ceasing to be registered) is amended as follows.

(2) In subsection (1) after "subsection (2)" insert "or (2A)".

(3) After subsection (2) insert—

"(2A) Where the Commission does not receive a notification required by virtue of section 32(1) or 34(3) on or before the specified day, the Commission shall remove the party's entry from the register.

(2B) In subsection (2A) "the specified day" means—

(a) in relation to a notification required by virtue of section 32(1), the last day of the specified period for the purposes of that subsection;

(b) in relation to a notification required by virtue of section 34(3), the day which falls six months after the relevant anniversary of the party's inclusion in the register.

(2C) In subsection (2B)(b), "relevant anniversary" means the anniversary in relation to which the notification is required to be given by virtue of section 34(3)."

(4) In subsection (3) for "the party's entry from the register" substitute "a party's entry from the register by virtue of subsection (2) or (2A)".

(5) In subsection (4) for the words from "the end" to the first reference to "the register" substitute "the relevant time".

(6) After subsection (4) insert—

"(4A) In subsection (4), "the relevant time" means—

(a) if—

(i) the party's entry is removed by virtue of subsection (2), and

(ii) its gross income or total expenditure in its financial year preceding the year in which the entry is removed is £25,000 or more, the end of the financial year of the party which follows that in which the entry is removed;

(b) otherwise, the end of the financial year of the party in which the entry is removed."

(7) In subsection (5) for "under this section" substitute "under subsection (2)".

52 Time for registration of parties fielding candidates

(1) In Schedule 1 to the 1983 Act, rule 6A (nomination papers: name of registered political party) is amended in accordance with subsections (2) and (3).

(2) In paragraph (3)—

(a) in sub-paragraph (a), for the words from "at the time" to the end substitute "on the day ("the relevant day") which is two days before the last day for the delivery of nomination papers at the election;";

(b) in sub-paragraph (b), for "at the relevant time" (in both places) substitute "on the relevant day".

(3) After paragraph (3) insert—

"(4) For the purposes of paragraph (3)(a) any day falling within rule 2(1) shall be disregarded."

(4) Section 22 of the 2000 Act (parties to be registered in order to field candidates at elections) is amended in accordance with subsections (5) and (6).

(5) In subsection (2)—

(a) in paragraph (a), for "on the last day for publication of notice of the election" substitute "on the day ("the relevant day") which is two daysbefore the last day for the delivery of nomination papers at that election";

(b) in paragraph (b), for "on that day" substitute "on the relevant day".

(6) After that subsection insert—

"(2A) For the purposes of subsection (2) any day falling within rule 2(1) of the parliamentary elections rules in Schedule 1 to the Representation of the People Act 1983 shall be disregarded."

Accounting requirements

53 Requirements as to statements of account

(1) Section 42 of the 2000 Act (annual statement of accounts) is amended as follows.

(2) In subsection (4) for paragraph (a) substitute—

"(a) according to which of the following bands the gross income or total expenditure of a party falls within—

(i) not exceeding £25,000;

(ii) exceeding £25,000 but not £100,000;

(iii) exceeding £100,000 but not £250,000;

(iv) exceeding £250,000;".

(3) After that subsection insert—

"(4A) The Secretary of State may by order amend subsection (4)(a) by varying the number of bands set out in it.

(4B) The Secretary of State may not make an order under subsection (4A) except to give effect to a recommendation of the Commission."

(4) The amendments made by this section have effect in relation to any financial year of a registered party which ends after the coming into force of this section.

54 Time for delivery of unaudited accounts to Electoral Commission

In section 45 of the 2000 Act (delivery of statement of accounts etc. to Commission), in subsection (1) for "3 months" substitute "4 months".

Control of donations

55 Policy development grants to be donations

In section 52 of the 2000 Act (payments, services etc. not to be regarded as donations), in subsection (1) omit paragraph (a).

56 Exemption from requirement to prepare quarterly donation reports

(1) After section 62 of the 2000 Act (quarterly donation reports) insert—

"62A Exemption from requirement to prepare quarterly reports

(1) This section applies if each of four consecutive donation reports prepared by the treasurer of a registered party in pursuance of subsection (1) of section 62 contains—

(a) in the case of a party without accounting units, a statement under subsection (10) of that section, or

(b) in the case of a party with accounting units, statements under subsection (10) of that section in relation to the central organisation of the party and each of its accounting units.

(2) The treasurer is not required to prepare any further donation reports in pursuance of subsection (1) of that section until a recordable donation—

(a) is accepted by the registered party, or

(b) is dealt with by the registered party in accordance with section 56(2).

(3) A recordable donation is a donation which is required to be recorded by virtue of any of subsections (4) to (9) of section 62 (including those subsections as applied by subsection (11) of that section).

(4) If a recordable donation is accepted or (as the case may be) dealt with in accordance with section 56(2), nothing in this section affects the operation of section 62 in relation to—

(a) the reporting period in which the recordable donation is so accepted or dealt with, or

(b) any subsequent reporting period which falls before the time (if any) when this section again applies in relation to the party.

(5) In this section, "donation report" and "reporting period" have the same meaning as in section 62."

(2) Section 62A of the 2000 Act (as inserted by subsection (1) above) applies only if the last of the reports mentioned in subsection (1) of that section relates to a period which falls wholly or partly after the commencement of this section (but it is immaterial whether any of the other reports relate to such a period).

57 Repeal of section 68 of the 2000 Act

Section 68 of the 2000 Act (reporting of multiple small donations) is omitted.

58 Register of donations to include details of nature of donation

In section 69 of the 2000 Act (register of recordable donations), in subsection (2), after paragraph (a) insert—

"(aa) whether the donation is in the form of sponsorship (within the meaning of section 51);".

59 Reporting donations to holders of certain elective offices

(1) Schedule 7 (control of donations to individuals and members associations) to the 2000 Act is amended as follows.

(2) In paragraph 10, after sub-paragraph (7) insert—

"(8) This paragraph does not apply to a donation received by a holder of a relevant elective office unless he is not a member of a registered party and is either—

(a) a member of the Scottish Parliament, or

(b) a member of a local authority in Scotland.

(9) For the purposes of sub-paragraph (8), it is immaterial whether the donation is made to the holder of the relevant elective office in that capacity or in his capacity as a member of a registered party."

(3) In Part 5 of the Schedule, after paragraph 15 insert—

"Donations to holders of certain elective offices

15A (1) This paragraph applies in relation to donations received by a holder of a relevant elective office if—

(a) the relevant body has in place arrangements requiring the holder of the office to report such donations, and

(b) the Commission think that the arrangements correspond to the requirements of paragraph 10.

(2) The Commission must make such arrangements as they think appropriate corresponding to section 69 as modified in pursuance of paragraph 15(3) to maintain a register of such information as they receive relating to such donations.

(3) In sub-paragraph (1)(a) a relevant body is—

(a) if the holder of a relevant elective office is a member of a body mentioned in paragraphs (a) to (f) of paragraph 1(8), that body;

(b) if the holder of a relevant elective office is the Mayor of London, the London Assembly;

(c) if the holder of a relevant elective office is an elected mayor within the meaning of Part 2 of the Local Government Act 2000, the local authority of which he is the mayor."

(4) The Secretary of State must not make an order under section 77 for the purposes of this section as it applies to the holders of a relevant elective office unless he is informed by the Commission that they are satisfied that they will receive the information mentioned in paragraph 15A(2) of that Schedule (as inserted by subsection (3) above) in relation to such holders of relevant elective office.

(5) In subsection (4) references to the holder of a relevant elective office must be construed in accordance with Schedule 7 to the 2000 Act.

60 Northern Ireland: disapplication of Part 4 of the 2000 Act

Any reference in the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (Disapplication of Part 4 for Northern Ireland Parties, etc) Order 2005 (S.I. 2005/299) to a provision of the 2000 Act which is amended by sections 55 to 58 must be construed as a reference to that provision as so amended.

Regulation of loans etc.

61 Regulation of loans etc.

(1) After Part 4 of the 2000 Act (control of donations to registered parties and their members) insert—

"PART 4A
REGULATION OF LOANS AND RELATED TRANSACTIONS

71F Regulated transactions

(1) In this Part, a reference to a regulated transaction must be construed in accordance with this section.

(2) An agreement between a registered party and another person by which the other person makes a loan of money to the party is a regulated transaction.

(3) An agreement between a registered party and another person by which the other person provides a credit facility to the party is a regulated transaction.

(4) Where—

(a) a registered party and another person (A) enter into a regulated transaction of a description mentioned in subsection (2) or (3) or a transaction under which any property, services or facilities are provided for the use or benefit of the party (including the services of any person), and

(b) A also enters into an arrangement whereby another person (B) gives any form of security (whether real or personal) for a sum owed to A by the party under the transaction mentioned in paragraph (a), the arrangement is a regulated transaction.

(5) An agreement or arrangement is also a regulated transaction if—

(a) the terms of the agreement or arrangement as first entered into do not constitute a regulated transaction by virtue of subsection (2), (3) or (4), but

(b) the terms are subsequently varied in such a way that the agreement or arrangement becomes a regulated transaction.

(6) References in subsections (2) and (3) to a registered party include references to an officer, member, trustee or agent of the party if he makes the agreement as such.

(7) References in subsection (4) to a registered party include references to an officer, member, trustee or agent of the party if the property, services or facilities are provided to him, or the sum is owed by him, as such.

(8) Except so far as the contrary intention appears, references to a registered party in the context of—

(a) the making of a loan to a registered party,

(b) the provision of a credit facility to a registered party, or

(c) a sum being owed by a registered party, must, in the case of a party with accounting units, be construed as references to the central organisation of the party or any of its accounting units.

(9) A reference to a connected transaction is a reference to the transaction mentioned in subsection (4)(b).

(10) In this section a reference to anything being done by or in relation to a party or a person includes a reference to its being done directly or indirectly through a third person.

(11) A credit facility is an agreement whereby a registered party is enabled to receive from time to time from another party to the agreement a loan of money not exceeding such amount (taking account of any repayments made by the registered party) as is specified in or determined in accordance with the agreement.

(12) An agreement or arrangement is not a regulated transaction—

(a) to the extent that, in accordance with any enactment, a payment made in pursuance of the agreement or arrangement falls to be included in a return as to election expenses in respect of a candidate or candidates at a particular election, or

(b) if its value is not more than £200.

(13) The Secretary of State may, by order, specify circumstances or any description of circumstances in which an agreement or arrangement falling within any of subsections (2) to (5) is not a regulated transaction.

71G Valuation of regulated transaction

(1) The value of a regulated transaction which is a loan is the value of the total amount to be lent under the loan agreement.

(2) The value of a regulated transaction which is a credit facility is the maximum amount which may be borrowed under the agreement for the facility.

(3) The value of a regulated transaction which is an arrangement by which any form of security is given is the contingent liability under the security provided.

(4) For the purposes of subsections (1) and (2), no account is to be taken of the effect of any provision contained in a loan agreement or an agreement for a credit facility at the time it is entered into which enables outstanding interest to be added to any sum for the time being owed in respect of the loan or credit facility, whether or not any such interest has been so added.

71H Authorised participants

(1) A registered party must not—

(a) be a party to a regulated transaction to which any of the other parties is not an authorised participant;

(b) derive a benefit in consequence of a connected transaction if any of the parties to that transaction is not an authorised participant.

(2) This section does not apply to a regulated transaction if it was entered into before the commencement of section 61 of the Electoral Administration Act 2006.

(3) In this Part, an authorised participant is a person who is a permissible donor within the meaning of section 54(2).

(4) The Secretary of State may, by order, specify circumstances or any description of circumstances in which a person who is not a permissible donor is to be treated as an authorised participant.

71I Regulated transaction involving unauthorised participant

(1) This section applies if a registered party is a party to a regulated transaction in which another participant is not an authorised participant.

(2) The transaction is void.

(3) Despite subsection (2)—

(a) any money received by the registered party by virtue of the transaction must be repaid by the treasurer of the party to the person from whom it was received, along with interest at such rate as is determined in accordance with an order made by the Secretary of State;

(b) that person is entitled to recover the money, along with such interest.

(4) If—

(a) the money is not (for whatever reason) repaid as mentioned in subsection (3)(a), or

(b) the person entitled to recover the money refuses or fails to do so, the Commission may apply to the court to make such order as it thinks fit to restore (so far as is possible) the parties to the transaction to the position they would have been in if the transaction had not been entered into.

(5) An order under subsection (4) may in particular—

(a) where the transaction is a loan or credit facility, require that any amount owed by the registered party be repaid (and that no further sums be advanced under it);

(b) where any form of security is given for a sum owed under the transaction, require that security to be discharged.

(6) In the case of a regulated transaction where a party other than a registered party—

(a) at the time the registered party enters into the transaction, is an authorised participant, but

(b) subsequently, for whatever reason, ceases to be an authorised participant, the transaction is void and subsections (3) to (5) apply with effect from the time when the other party ceased to be an authorised participant.

(7) This section does not apply to a regulated transaction if it was entered into before the commencement of section 61 of the Electoral

71J Guarantees and securities: unauthorised participants

(1) This section applies if—

(a) a registered party and another person (A) enter into a transaction of a description mentioned in section 71F(4)(a),

(b) A is party to a regulated transaction of a description mentioned in section 71F(4)(b) (“the connected transaction”) with another person (B), and

(c) B is not an authorised participant.

(2) Section 71I(2) to (5) applies to the transaction mentioned in subsection(1)(a).

(3) The connected transaction is void.

(4) Subsection (5) applies if (but only if) A is unable to recover from the party the whole of the money mentioned in section 71I(3)(a) (as applied by subsection (2) above), along with such interest as is there mentioned.

(5) Despite subsection (3), A is entitled to recover from B any part of that money (and such interest) that is not recovered from the party.

(6) Subsection (5) does not entitle A to recover more than the contingent liability under the security provided by virtue of the connected transaction.

(7) In the case of a connected transaction where B—

(a) at the time A enters into the transaction, is an authorised participant, but

(b) subsequently, for whatever reason, ceases to be an authorised participant, subsections (2) to (6) apply with effect from the time when B ceased to be an authorised participant.

(8) This section does not apply to a regulated transaction if it was entered into before the commencement of section 61 of the Electoral Administration Act 2006.

(9) If the transaction mentioned in section 71F(4)(a) is not a regulated transaction of a description mentioned in section 71F(2) or (3), references in this section and section 71I(2) to (5) (as applied by subsection (2) above) to the repayment or recovery of money must be construed as references to (as the case may be)—

(a) the return or recovery of any property provided under the transaction,

(b) to the extent that such property is incapable of being returned or recovered or its market value has diminished since the time the transaction was entered into, the repayment or recovery of the market value at that time, or

(c) the market value (at that time) of any facilities or services provided under the transaction.

71K Transfer to unauthorised participant invalid If an authorised participant purports to transfer his interest in a regulated transaction to a person who is not an authorised participant the purported transfer is of no effect.

71L Offences relating to regulated transactions

(1) A registered party commits an offence if—

(a) it enters into a regulated transaction of a description mentioned in section 71F(2) or (3) in which another participant is not an authorised participant, and

(b) an officer of the party knew or ought reasonably to have known of the matters mentioned in paragraph (a).

(2) A person commits an offence if—

(a) he is the treasurer of a registered party,

(b) the party enters into a regulated transaction of a description mentioned in section 71F(2) or (3) in which another participant is not an authorised participant, and

(c) he knew or ought reasonably to have known of the matters mentioned in paragraph (b).

(3) A registered party commits an offence if—

(a) it enters into a regulated transaction of a description mentioned in section 71F(2) or (3) in which another participant is not an authorised participant,

(b) no officer of the party knew or ought reasonably to have known that the other participant is not an authorised participant, and

(c) as soon as practicable after knowledge of the matters mentioned in paragraph (a) comes to the treasurer of the party he fails to take all reasonable steps to repay any money which the party has received by virtue of the transaction.

(4) A person who is the treasurer of a registered party commits an offenceif—

(a) the party enters into a regulated transaction of a description mentioned in section 71F(2) or (3) in which another participant is not an authorised participant,

(b) subsection (2)(c) does not apply to him, and

(c) as soon as practicable after knowledge of the matters mentioned in paragraph (a) comes to him he fails to take all reasonable steps to repay any money which the party has received by virtue of the transaction.

(5) A registered party commits an offence if—

(a) it benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant, and

(b) an officer of the party knew or ought reasonably to have known of the matters mentioned in paragraph (a).

(6) A person commits an offence if—

(a) he is the treasurer of a registered party,

(b) the party benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant, and

(c) he knew or ought reasonably to have known of the matters mentioned in paragraph (b).

(7) A registered party commits an offence if—

(a) it is a party to a transaction of a description mentioned in section 71F(4)(a),

(b) it benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant,

(c) no officer of the party knew or ought reasonably to have known of the matters mentioned in paragraphs (a) and (b), and

(d) as soon as practicable after knowledge of the matters mentioned in paragraphs (a) and (b) comes to the treasurer of the party he fails to take all reasonable steps to pay to any person who has provided the party with any benefit in consequence of the connected transaction the value of the benefit.

(8) A person who is the treasurer of a registered party commits an offence if—

(a) the party is a party to a transaction of a description mentioned in section 71F(4)(a),

(b) the party benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant,

(c) subsection (6)(c) does not apply to him, and

(d) as soon as practicable after knowledge of the matters mentioned in paragraphs (a) and (b) comes to him he fails to take all reasonable steps to pay to any person who has provided the party with any benefit in consequence of the connected transaction the value of the benefit.

(9) A person commits an offence if he—

(a) knowingly enters into, or

(b) knowingly does any act in furtherance of, any arrangement which facilitates or is likely to facilitate, whether by means of concealment or disguise or otherwise, the participation by a registered party in a regulated transaction with a person other than an authorised participant.

(10) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (2) to prove that he took all reasonable steps to prevent the registered party centering the transaction.

(11) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (6) to prove that he took all reasonable steps to prevent the registered party benefiting in consequence of the connected transaction.

(12) A reference to a registered party entering into a regulated transaction includes a reference to any circumstances in which the terms of a regulated transaction are varied so as to increase the amount of money to which the party is entitled in consequence of the transaction.

(13) A reference to a registered party entering into a transaction in which another participant is not an authorised participant includes a reference to any circumstances in which another

party to the transaction who is an authorised participant ceases (for whatever reason) to be an authorised participant.

(14) This section does not apply to a transaction which is entered into before the commencement of section 61 of the Electoral Administration Act 2006.

71M Quarterly reports of regulated transactions

(1) The treasurer of a registered party must, in the case of each year, prepare a report under this subsection in respect of each of the following periods—

(a) January to March;

(b) April to June;

(c) July to September;

(d) October to December.

(2) The reports prepared under subsection (1) for any year must, in the case of each authorised participant who enters into or is party to a regulated transaction with the party in that year, comply with—

(a) the following provisions of this section so far as they require any such transaction to be recorded in such a report;

(b) section 71N so far as it requires any changes in relation to any such transaction to be so recorded.

(3) In this section— "transaction report" means a report prepared under subsection(1); reporting period", in relation to such a report, means the period mentioned in any of paragraphs (a) to (d) of that subsection to which the report relates; "relevant transaction", in relation to an authorised participant and a year, means a regulated transaction entered into by the participant and the registered party in that year; "relevant benefit", in relation to any person and any year, means—

(a) a relevant donation within the meaning of section 62(3) accepted by the party from that person as a donor, or

(b) a relevant transaction entered into by the party and that person as a participant, and a relevant benefit accrues when it is accepted (if it is a donation) or entered into (if it is a transaction).

(4) Where no previous relevant benefit or benefits has or have been required to be recorded under this subsection or section 62(4), a relevant transaction must be recorded—

(a) if the value of the transaction is more than £5,000, or

(b) if the aggregate amount of it and any other relevant benefit or benefits is more than £5,000.

(5) A transaction to which subsection (4) applies must—

(a) if it falls within paragraph (a) of that subsection, be recorded in the transaction report for the reporting period in which the transaction is entered into, or

(b) if it falls within paragraph (b) of that subsection, be recorded (together with any other relevant transaction or transactions included in the aggregate amount mentioned in that paragraph) in the transaction report for the reporting period in which the benefit which causes that aggregate to be more than £5,000 accrues.

(6) Where any previous relevant benefit or benefits has or have been required to be recorded under subsection (4) or section 62(4), a relevant transaction must be recorded at the point when a relevant transaction falling within subsection (7) has been entered into—

(a) since the benefit or benefits required to be recorded under that provision, or

(b) if any relevant benefit or benefits has or have previously been required to be recorded under this subsection or section 62(6), since the benefit or benefits last required to be so recorded.

(7) A relevant transaction falls within this subsection—

(a) if the value of the transaction is more than £1,000, or

(b) if, when it is added to any other relevant benefit or benefits accruing since the time mentioned in subsection (6)(a) or (b), the aggregate amount of the benefits is more than £1,000.

(8) A transaction to which subsection (6) applies on any occasion must—

(a) if it is the only benefit required to be recorded on that occasion, be recorded in the transaction report for the reporting period in which it is entered into, or (b) in any other case, be recorded (together with any other relevant transaction or transactions included in the aggregate amount mentioned in subsection (7)) in the transaction report for the reporting period in which the benefit which causes that aggregate amount to be more than £1,000 accrues.

(9) A transaction report must also record any regulated transaction which is entered into by the party and a person who is not an authorised participant and is dealt with during the reporting period in accordance with section 71I or 71J.

(10) If during any reporting period no transactions have been entered into by the party which, by virtue of the preceding provisions of this section, are required to be recorded in the transaction report for that period, the report must contain a statement to that effect.

(11) Where a registered party is a party with accounting units, subsections (2) to (10) apply separately in relation to the central organisation of the party and each of its accounting units—

(a) as if any reference to the party were a reference to the central organisation or (as the case may be) to such an accounting unit; but

(b) with the substitution, in relation to such an accounting unit, of "£1,000" for "£5,000" in each place where it occurs in subsections (4) and (5).

(12) However, for the purposes of subsections (2) to (9) in their application to the central organisation and any year by virtue of subsection (11), any transaction—

(a) which is entered into by an authorised participant and any of the accounting units during that year, but

(b) which is not required to be recorded under subsection (4) or (6) (as they apply by virtue of subsection (11)) as a transaction entered into by the accounting unit, must be treated as a transaction entered into by the authorised participant and the central organisation.

(13) Schedule 6A has effect with respect to the information to be given in transaction reports.

71N Changes to be recorded in quarterly reports

(1) If during any reporting period, in the case of any recorded transaction—

(a) another authorised participant becomes party to the transaction (whether in place of or in addition to any existing participant),

(b) there is any change in the details given in relation to the transaction in pursuance of paragraph 5, 6 or 7 of Schedule 6A, or

(c) the transaction comes to an end, the change must be recorded in the transaction report for that period.

(2) For the purposes of subsection (1)(c), a loan comes to an end if—

(a) the whole debt (or all the remaining debt) is repaid;

(b) the creditor releases the whole debt (or all the remaining debt); and in such a case the transaction report must state how the loan has come to an end.

(3) A transaction report must also record any change by which a person who is not an authorised participant becomes party to the transaction (whether in place of or in addition to any existing participant) and in consequence of which the transaction is dealt with in accordance with section 71I or 71J.

(4) If during any reporting period there have been no changes (as mentioned in subsection (1) or (3)) to any recorded transaction, the report must contain a statement to that effect.

(5) A recorded transaction, in relation to a reporting period, is a regulated transaction which is or has been recorded in a transaction report for that or a previous reporting period.

(6) Where a registered party is a party with accounting units, subsections (1) to (5) apply separately in relation to the central organisation of the party and each of its accounting units; and the reference in subsection (5) to a transaction report for a previous reporting period is a reference to a report prepared in relation the central organisation or accounting unit, as the case may be.

(7) In this section, "reporting period" and "transaction report" have the meanings given in section 71M.

71O Existing transactions

(1) This section applies in relation to the first report prepared under section 71M(1) by the treasurer of a party which, at the date on which that section comes into force, is a registered party.

(2) Sections 71M and 71N have effect, in the case of a person (whether or not an authorised participant) who is a party to an existing transaction, as if—

(a) that transaction had been entered into in the reporting period to which the report relates;

(b) any change (as mentioned in section 71N(1) or (3)) to the transaction had occurred during that period;

(c) references in section 71M to a relevant benefit did not include references to a relevant donation.

(3) An existing transaction is a regulated transaction which, at the date on which section 71M comes into force, has not come to an end for the purposes of section 71N(1)(c).

71P Exemption from requirement to prepare quarterly reports

(1) This section applies if each of four consecutive transaction reports prepared by the treasurer of a registered party in pursuance of subsection (1) of section 71M contains—

(a) in the case of a party without accounting units, a statement under subsection (10) of that section and a statement under subsection (4) of section 71N, or

(b) in the case of a party with accounting units, statements under each of those subsections in relation to the central organisation of the party and each of its accounting units.

(2) The treasurer is not required to prepare any further transaction reports in pursuance of subsection (1) of section 71M until—

(a) a recordable transaction is entered into by the registered party, or

(b) a recordable change is made to a recorded transaction.

(3) A recordable transaction is a transaction which is required to be recorded by virtue of any of subsections (4) to (9) of section 71M (including those subsections as applied by subsection (11) of that section).

(4) A recordable change is a change which is required to be recorded by virtue of subsection (1) of section 71N (including that subsection as applied by subsection (6) of that section).

(5) If a recordable transaction is entered into or a recordable change is made, nothing in this section affects the operation of section 71M or 71N in relation to—

(a) the reporting period in which the recordable transaction is entered into or the recordable change is made, or

(b) any subsequent reporting period which falls before the time (if any) when this section again applies in relation to the party.

(6) In this section—“transaction report” and “reporting period” have the same meaning as in section 71M;“recorded transaction” has the same meaning as in section 71N.

71Q Weekly transaction reports during general election periods

(1) Subject to section 71R, the treasurer of a registered party must, in the case of any general election period, prepare a report under this subsection in respect of each of the following periods—

(a) the period of seven days beginning with the first day of the general election period,

(b) each succeeding period of seven days falling within the general election period, and

(c) any final period of less than seven days falling within that period.

(2) In this section— “weekly report” means a report prepared under subsection (1); “reporting period”, in relation to such a report, means the period mentioned in any of paragraphs (a) to (c) of that subsection to which the report relates.

(3) The weekly report for any reporting period must record each regulated transaction which has a value of more than £5,000 entered into during that period—

(a) by the party (if it is not a party with accounting units), or

(b) by the central organisation of the party (if it is a party with accounting units).

(4) If during any reporting period no transactions falling within subsection (3) have been entered into as mentioned in that subsection, the weekly report for that period must contain a statement to that effect.

(5) Schedule 6A has effect with respect to the information to be given in weekly reports.

(6) The weekly report for any reporting period must also record any change (as mentioned in section 71N(1) or (3)) during that period to a regulated transaction recorded—

(a) by the party (if it is not a party with accounting units), or

(b) by the central organisation of the party (if it is a party with accounting units).

(7) For the purposes of subsection (6), a transaction is recorded by a party or the central organisation of a party if it is or has been recorded in—

(a) a transaction report prepared under section 71M(1), or

(b) a weekly report prepared for that or a previous reporting period falling within the general election period.

(8) If during any reporting period there have been no changes falling within subsection (6), the weekly report for that period must contain a statement to that effect.

(9) In this section and section 71R “general election period” has the meaning given in section 63.

71R Exemptions from section 71Q

(1) Section 71Q(1) does not apply in relation to a registered party in respect of a general election period if the party has made an exemption declaration under section 64 which covers the general election in question.

(2) In its application (in accordance with subsection (1)) in relation to section 71Q, section 64 is to be read subject to the following modifications—

(a) the reference in subsection (5) to section 63 is to be read as a reference to section 71Q;

(b) subsection (6) is omitted.

71S Submission of transaction reports to Commission

(1) A transaction report under section 71M must be delivered to the Commission by the treasurer of the party in question within the period of 30 days beginning with the end of the reporting period to which it relates.

(2) A transaction report under section 71Q must be delivered to the Commission by the treasurer of the party in question—

(a) within the period of 7 days beginning with the end of the reporting period to which it relates, or

(b) if that is not possible in the case of any party to which section71Q applies by virtue of section 64(5) (as applied by section 71R), within the period of 7 days beginning with the first day on which the party has a candidate at the election in question.

(3) If a transaction report under section 71M or 71Q states that the registered party has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that an individual participant has an anonymous entry in the electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983), the report must be accompanied by a copy of the evidence.

(4) The treasurer of a registered party commits an offence if he fails to comply with the requirements of subsection (1) or (2) in relation to a transaction report.

(5) The treasurer of a registered party also commits an offence if he delivers a transaction report to the Commission which does not comply with any requirements of this Part as regards the recording of transactions, or changes to transactions, in such a report.

(6) Where a person is charged with an offence under this section, it shall be a defence to prove that he took all reasonable steps, and exercised all due diligence, to ensure that any such requirements were complied with in relation to transactions entered into by the party, or changes to transactions made, during the relevant reporting period.

(7) Where the court is satisfied, on an application made by the Commission, that any failure to comply with any such requirements in relation to—

(a) any transaction entered into by a registered party, or

(b) any change made to a transaction to which the registered party is a party, was attributable to an intention on the part of any person to conceal the existence or true value of the transaction, the court may make such order as it thinks fit to restore (so far as is possible) the parties to the transaction to the position they would have been in if the transaction had not been entered into.

(8) An order under subsection (7) may in particular—

(a) where the transaction is a loan or credit facility, require that any amount owed by the registered party be repaid (and that no further sums be advanced under it);

(b) where any form of security is given for a sum owed under the transaction, or the transaction is an arrangement by which any form of security is given, require that the security be discharged.

(9) The reference in subsection (2) to a party having a candidate at an election must be construed in accordance with section 64(9).

71T Declaration by treasurer in transaction report

(1) Each transaction report under section 71M or 71Q must, when delivered to the Commission, be accompanied by a declaration made by the treasurer which complies with subsection (2), (3) or (4).

(2) In the case of a report under section 71M (other than one making a nil return), the declaration must state that, to the best of the treasurer's knowledge and belief—

(a) all the transactions recorded in the report were entered into by the party with authorised participants,

(b) during the reporting period no transaction has been entered into by the party which is required to be recorded in the report but is not so recorded,

(c) during the reporting period no change has been made to a regulated transaction which is required to be recorded in the report but is not so recorded, and

(d) during the reporting period the party has not entered into any regulated transaction with a person or body other than an authorised participant.

(3) For the purposes of subsection (2) a return under section 71M makes a nil return if it contains such a statement as is mentioned in subsection (10) of that section and a statement as is mentioned in subsection (4) of section 71N; and in the case of such a report the declaration must state that, to the best of the treasurer's knowledge and belief—

(a) those statements are accurate, and

(b) during the reporting period the party has not entered into any regulated transaction with a person or body other than an authorised participant.

(4) In the case of a report under section 71Q, the declaration must state that, to the best of the treasurer's knowledge and belief—

(a) no transaction has been entered into by the party, or (if section 71Q(3)(b) applies) by its central organisation, during the reporting period which is required to be recorded in the report but is not so recorded, and

(b) no change has been made to a regulated transaction during the reporting period which is required to be recorded in the report but is not so recorded.

(5) A person commits an offence if he knowingly or recklessly makes a false declaration under this section.

71U Weekly donation reports in connection with elections other than general elections

(1) The Secretary of State may, after consulting the Commission and all registered parties, by order make provision for—

(a) sections 71Q and 71R, together with Schedule 6A,

(b) sections 71S and 71T, and

(c) section 147 so far as applying in relation to section 71S(1) or (2), to apply in relation to the specified election period in the case of one or more relevant elections with such modifications as are specified in the order.

(2) In this section "specified election period" and "relevant election" have the meanings given in section 67.

71V Register of recordable transactions

(1) The Commission must maintain a register of all transactions (and all changes) reported to them under this Part.

(2) The register must be maintained by the Commission in such form as they may determine and must contain the following details in the case of each such transaction—

(a) the value of the transaction;

(b) (subject to subsection (3)) such other details as have been given in relation to the transaction in pursuance of any of paragraphs 2 to 7 of Schedule 6A;

(c) the relevant date for the transaction within the meaning of paragraph 8 of that Schedule.

(3) The details required by virtue of subsection (2) do not include, in the case of any transaction entered into by an authorised participant who is an individual, the individual's address.

(4) Where—

(a) any transaction or transactions is or are reported to the Commission under this Part, or

(b) any change or changes is or are so reported to them, they must cause the details mentioned in subsection (2) to be entered or, as the case may be, changed in the register in respect of the transaction or transactions as soon as is reasonably practicable.

71W Proceedings under sections 71I and 71S

(1) This section has effect in relation to proceedings on applications under sections 71I(4) and 71S(7).

(2) The court is—

(a) in England and Wales, the county court;

(b) in Scotland, the sheriff, and the proceedings are civil proceedings;

(c) in Northern Ireland, the county court.

(3) The standard of proof is that applicable to civil proceedings.

(4) An order may be made whether or not proceedings are brought against any person for an offence under section 71L, 71S or 71T.

(5) An appeal against an order made by the sheriff may be made to the Court of Session.

(6) Rules of court may make provision—

(a) with respect to applications or appeals from proceedings on such applications;

(b) for the giving of notice of such applications or appeals to persons affected;

(c) for the joinder, or in Scotland sisting, of such persons as parties;

(d) generally with respect to procedure in such applications or appeals.

(7) Subsection (6) does not affect any existing power to make rules. 71X Construction of Part 4A

(1) In this Part— "authorised participant" must be construed in accordance with section 71H; "connected transaction" has the meaning given by section 71F(9); "credit facility" has the meaning given by section 71F(11); "regulated transaction" must be construed in accordance with section 71F.

(2) For the purposes of any provision relating to the reporting of transactions, anything required to be done by a registered party in consequence of its being a party to a regulated

transaction must also be done by it, if it is a party to a transaction of a description mentioned in section 71F(4)(a), as if it were a party to the connected transaction."

(2) In section 147 of that Act (civil penalty for failure to deliver documents etc), after subsection (1)(c) insert— "(ca) the requirements of section 71S(1) or (2) are not complied with in relation to any transaction report relating to a registered party;".

(3) In section 149 of that Act (inspection of Commission's registers etc), after subsection (1)(b) insert— "(ba) section 71V;".

(4) In section 156(4) of that Act (provision about subordinate legislation)—

(a) after paragraph (d) insert—

"(da) section 71F(13),

(db) section 71H(4),

(dc) section 71U(1),";

(b) after paragraph (h) insert— "(ha) paragraph 9 of Schedule 6A,".

(5) After Schedule 6 to that Act (details to be given in donation reports) insert—

"SCHEDULE 6A
DETAILS TO BE GIVEN IN TRANSACTION REPORTS

Preliminary

1 (1) In this Schedule—

(a) "quarterly report" means a report required to be prepared by virtue of section 71M;

(b) "weekly report" means a report required to be prepared by virtue of section 71Q; and "recordable transaction", in relation to a quarterly or weekly report, means a transaction required to be recorded in that report.

(2) References in this Schedule to a registered party must, in the case of a party with accounting units, be read as references to the central organisation of the party.

Identity of authorised participants: quarterly reports

2 (1) In relation to each recordable transaction, a quarterly report must give the following information about each authorised participant (other than the registered party deriving the benefit of the transaction) that is required by any of sub-paragraphs (2) to (10).

(2) In the case of an individual the report must give his full name and—

(a) if his address is, at the date the transaction is entered into, shown in an electoral register (within the meaning of section 54), that address, and

(b) otherwise, his home address (whether in the United Kingdom or elsewhere).

(3) Sub-paragraph (2) applies in the case of an individual who has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983) as if for paragraphs (a) and (b) there were substituted "state that the registered party has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the individual has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983)".

(4) In the case of a company falling within section 54(2)(b) the report must give—

(a) the company's registered name,

(b) the address of its registered office, and

(c) the number with which it is registered.

(5) In the case of a registered party the report must give—

(a) the party's registered name, and

(b) the address of its registered headquarters.

(6) In the case of trade union falling within section 54(2)(d) the report must give—

(a) the name of the union, and

(b) the address of its head or main office, as shown in the list kept under the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 or the Industrial Relations (Northern Ireland) Order 1992.

(7) In the case of a building society within the meaning of the Building Societies Act 1986 the report must give—

(a) the name of the society, and

(b) the address of its principal office.

(8) In the case of a limited liability partnership falling within section 54(2)(f) the report must give—

(a) the partnership's registered name, and (b) the address of its registered office.

(9) In the case of a friendly or other registered society falling within section 54(2)(g) the report must give—

(a) the name of the society, and

(b) the address of its registered office.

(10) In the case of an unincorporated association falling within section 54(2)(h) the report must give—

(a) the name of the association, and

(b) the address of its main office in the United Kingdom.

Identity of authorised participants: weekly reports

3 (1) In relation to each recordable transaction, a weekly report must give all such details of the name and address of each authorised participant (other than the registered party deriving the benefit from the transaction) as are for the time being known to the party.

(2) In the case of a participant who is an individual having an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983) instead of giving details of the address of the individual the party must state that it has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the individual has such an entry.

Identity of unauthorised participants

4 In relation to each recordable transaction to which a person who is not an authorised participant is a party, a quarterly or weekly report must give—

(a) the name and address of the person;

(b) the date when, and the manner in which, the transaction was dealt with in accordance with subsections (3) to (5) of section 71I or those subsections as applied by section 71I(6) or 71J(2).

Details of transaction

5 (1) In relation to each recordable transaction a report must give the following details about the transaction.

(2) A quarterly or weekly report must give the nature of the transaction (that is to say, whether it is a loan, a credit facility or an arrangement by which any form of security is given).

(3) A quarterly or weekly report must give the value of the transaction (determined in accordance with section 71G) or, in the case of a credit facility or security to which no limit is specified, a statement to that effect.

(4) A quarterly or weekly report must give the relevant date for the transaction (determined in accordance with paragraph 8).

(5) If the requirement to record the transaction arises only because the value of the transaction has, for the purposes of section 71M(4) or (7), been aggregated with the value of any relevant donation or donations (within the meaning of section 62), a quarterly report must contain a statement to that effect.

(6) A quarterly report must—

(a) state whether the transaction was entered into by the registered party or any accounting unit of the party, or

(b) in the case of a transaction to which section 71M(12) applies, indicate that it is a transaction which falls to be treated as made to the party by virtue of that provision.

6 (1) In relation to each recordable transaction of a description mentioned in section 71F(2) or (3), a quarterly or weekly report must give the following details about the transaction.

(2) The report must give—

(a) the date when the loan is to be repaid or the facility is to end (or a statement that the loan or facility is indefinite), or

(b) where that date is to be determined under the agreement, a statement of how it is to be so determined.

(3) The report must give—

(a) the rate of interest payable on the loan or on sums advanced under the facility (or a statement that no interest is payable), or

(b) where that rate is to be determined under the agreement, a statement of how it is to be so determined.

(4) The report must state whether the agreement contains a provision which enables outstanding interest to be added to any sum for the time being owed in respect of the loan or credit facility.

(5) The report must state whether any form of security is given in respect of the loan or the sums advanced under the facility.

7 (1) In relation to each recordable transaction of a description mentioned in section 71F(4)(b), a quarterly or weekly report must give the following details about the transaction.

(2) The report must—

(a) if the transaction mentioned in section 71F(4)(a) is a regulated transaction, identify that transaction by reference to the transaction report in which it is recorded;

(b) in any other case, give a description of the principal features of that transaction.

(3) Where the security given consists in or includes rights over any property, the report must state the nature of that property.

(4) The report must—

(a) if the person giving the security receives from the registered party any consideration for giving the security, give a statement of that consideration;

(b) in any other case, state that no such consideration is received.

8 (1) For the purposes of paragraph 5(4) as it applies to a quarterly report, the relevant date for a transaction is—

(a) if the transaction is within section 71M(4)(a) or (7)(a), the date when the transaction was entered into by the party or the accounting unit;

(b) if the transaction is within section 71M(4)(b) or (7)(b), the date when the party or the accounting unit entered into the transaction which caused the aggregate amount in question to be more than the limit specified in that provision.

(2) For the purposes of paragraph 5(4) as it applies to a weekly report, the relevant date for a transaction is the date when the transaction was entered into by the party or its central organisation as mentioned in section 71Q(3).

Other details

9 (1) The Secretary of State may by order amend paragraphs 2 to 7 so as to vary the details which a quarterly or weekly report must give about a transaction.

(2) The Secretary of State must not make an order under sub-paragraph (1) unless he first consults the Commission."

(6) In Schedule 20 to that Act (penalties), after the entry relating to section 71E(5) (as inserted by paragraph 2 of Schedule 1 to the Northern Ireland (Miscellaneous Provisions) Act 2006) insert—

"Section 71L(1) (registered party entering into regulated transaction with unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum
On indictment: fine

"Section 71L(2) (treasurer of party entering into regulated transaction with unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Section 71L(3) (party liable if treasurer fails to repay money obtained under regulated transaction with unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum
On indictment: fine

Section 71L(4) (treasurer failing to repay money obtained under regulated transaction with unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Section 71L(5) (party benefiting from connected transaction to which an unauthorised participant is a party)

On summary conviction: statutory maximum
On indictment: fine

Section 71L(6) (treasurer of registered party which benefits from connected transaction to which an unauthorised participant is a party)

On summary conviction: statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Section 71L(7) (party liable if treasurer fails to repay benefit obtained in consequence of security given by unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum
On indictment: fine

Section 71L(8) (treasurer failing to repay benefit obtained in consequence of security given by unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Section 71L(9) (facilitating a regulated transaction involving unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

(7) Part 6 of Schedule 1 amends the 2000 Act for the purpose of controlling loans and certain other transactions involving individuals and members associations.

62 Regulation of loans: power to make provision for candidates, third parties and referendums

(1) The Secretary of State may by order make in relation to a relevant matter such provision as he thinks appropriate which corresponds to or is similar to any provision of Part 4A of or Schedule 7A to the 2000 Act (the relevant transaction provisions).

(2) A relevant matter is a loan, credit facility or any form of security (whether real or personal) which benefits—

(a) a candidate at an election;
(b) a recognised third party;
(c) a permitted participant in a referendum.

(3) An order under this section may—

(a) amend or repeal any enactment (whenever passed);
(b) create an offence corresponding or similar to any offence created by the relevant transaction provisions;
(c) confer power on the Secretary of State to make provision by order corresponding to any such power in the relevant transaction provisions;
(d) make different provision for different purposes;
(e) make such supplemental, incidental, consequential, transitional or savings provision as the Secretary of State thinks necessary or expedient in connection with the order.

(4) An order under this section which confers power to make an order by virtue of subsection (3)(c) must require the order—

(a) to be made by statutory instrument;
(b) not to be made unless a draft of the instrument containing the order has been laid before and approved by resolution of each House of Parliament.

(5) Subsection (4) does not apply to any power to make provision determining a rate of interest.

(6) The power to make an order under this section is exercisable by statutory instrument.

(7) No such order may be made unless a draft of the instrument containing the order has been laid before and approved by resolution of each House of Parliament.

(8) In this section— “candidate” has the same meaning as in Part 2 of the 1983 Act; “credit facility” must be construed in accordance with section 71F(11) of the 2000 Act; “election” has the same meaning as in section 202 of the 1983 Act; “permitted participant” has the same meaning as in Part 7 of the 2000 Act; “recognised third party” has the same meaning as in Part 6 of that Act.

(9) An order under this section must not make provision which is within the legislative competence of the Scottish Parliament.

(10) Subsection (9) does not apply to provision made by virtue of subsection (3)(e).

63 Regulation of loans etc: Northern Ireland

(1) The Secretary of State may, after consulting the Electoral Commission, by order make provision relating to regulated transactions, controlled transactions or relevant matters which corresponds to or is similar to any provision ("relevant provision") relating to donations for political purposes which is made by, or which may be made under, the Northern Ireland (Miscellaneous Provisions) Act 2006 ("the 2006 Act").

(2) But if a relevant provision has effect, or would have effect, subject to a temporal limitation, a provision of an order under this section which corresponds to or is similar to the relevant provision must be subject to the same temporal limitation.

(3) An order under this section may in particular—

(a) amend, repeal or revoke any provision made by or under an Act of Parliament or Northern Ireland legislation (whenever passed or made);

(b) create an offence corresponding or similar to any offence relating to donations for political purposes created by the 2006 Act;

(c) confer power on the Secretary of State to make provision by order corresponding or similar to any such power relating to donations for political purposes conferred by the 2006 Act;

(d) make different provision for different purposes;

(e) make such supplemental, incidental, consequential, transitional or savings provision as the Secretary of State thinks necessary or expedient in connection with the order.

(4) An order under this section which confers power to make an order by virtue of subsection (3)(c) must require the order—

(a) to be made only after consulting the Electoral Commission;

(b) to be made by statutory instrument; and

(c) not to be made unless a draft of the instrument containing the order has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(5) The power to make an order under this section is exercisable by statutory instrument.

(6) No such order may be made unless a draft of the instrument containing the order has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

(7) In this section— "regulated transaction" has the same meaning as in Part 4A of the 2000 Act (see section 71F of that Act); "controlled transaction" has the same meaning as in Schedule 7A to that Act (see paragraphs 1 and 2 of that Schedule); "relevant matter" has the same meaning as in section 62 of this Act (see subsection (2) of that section).

Campaign expenditure

64 Campaign expenditure: standing for more than one party

(1) Schedule 9 to the 2000 Act (limits on campaign expenditure) is amended as follows.

(2) In paragraph 5 (general elections to Scottish Parliament) after sub-paragraph

(2) insert—

"(2A) Sub-paragraph (2B) applies to a registered party in a case where at the election a candidate stands for election in any constituency in the name of that party and one or more other registered parties.

(2B) In such a case, the amount applying to the party in respect of the constituency under sub-paragraph (2)(a) shall, instead of being the amount specified in that sub-paragraph, be that amount divided by the number of registered parties in whose name the candidate stands for election as mentioned in sub-paragraph (2A).”

(3) In paragraph 6 (ordinary elections to National Assembly for Wales) after subparagraph (2) insert—

“(2A) Sub-paragraph (2B) applies to a registered party in a case where at the election a candidate stands for election in any constituency in the name of that party and one or more other registered parties.

(2B) In such a case, the amount applying to the party in respect of the constituency under sub-paragraph (2)(a) shall, instead of being the amount specified in that sub-paragraph, be that amount divided by the number of registered parties in whose name the candidate stands for election as mentioned in sub-paragraph (2A).”

(4) In paragraph 7 (general elections to Northern Ireland Assembly) after subparagraph (2) insert—

“(2A) Sub-paragraph (2B) applies to a registered party in a case where at the election a candidate stands for election in any constituency in the name of that party and one or more other registered parties.

(2B) In such a case, the amount applying to the party in respect of the constituency under sub-paragraph (2) shall, instead of being the amount specified in that sub-paragraph, be that amount divided by the number of registered parties in whose name the candidate stands for election as mentioned in sub-paragraph (2A).”

65 Time limit for claims in respect of campaign expenditure

(1) In section 77 of the 2000 Act (restriction on making claims in respect of campaign expenditure)—

(a) in subsection (1), for “21 days” substitute “30 days”;

(b) in subsection (2), for “42 days” substitute “60 days”.

(2) In section 92 of that Act (restriction on making claims in respect of certain expenditure by third parties)—

(a) in subsection (1), for “21 days” substitute “30 days”;

(b) in subsection (2), for “42 days” substitute “60 days”.

(3) In section 115 of that Act (restriction on making claims in respect of referendum expenditure)—

(a) in subsection (1), for “21 days” substitute “30 days”;

(b) in subsection (2), for “42 days” substitute “60 days”.

Referendum and election material

66 Details to appear on referendum and election material

(1) In section 126 of the 2000 Act (details to appear on referendum material), after subsection (10) insert—

“(10A) Subsection (1) does not apply to any material published for the purposes of a referendum if the publication is required under or by virtue of any enactment.”

(2) In section 143 of the 2000 Act (details to appear on election material), after subsection (2) insert—

"(2A) For the purposes of subsection (2)(c), election material to which subsection (2B) applies—

(a) is not to be regarded as being published on behalf of a candidate merely because it can be regarded as promoting, procuring or enhancing his electoral success or standing, but

(b) may be regarded as being published on behalf of the party mentioned in subsection (2B).

(2B) This subsection applies to election material which can be reasonably regarded as promoting, procuring or enhancing the electoral success or standing of two or more candidates standing in the name of a party or included in a list of candidates submitted by the party in connection with the election."

PART 8
MISCELLANEOUS

Election services

67 Performance of local authorities in relation to elections etc.

After section 9 of the 2000 Act insert—

"9A Setting of performance standards

(1) The Commission may from time to time—

(a) determine standards of performance for relevant officers, and

(b) publish, in such form and in such manner as they consider appropriate, the standards so determined.

(2) The standards of performance are such standards as the Commission think ought to be achieved by—

(a) electoral registration officers in the performance of their functions;

(b) returning officers in the administration of the elections specified in subsection (6);

(c) counting officers in the administration of the referendums specified in subsection (7).

(3) Before determining standards under subsection (1), the Commission must consult—

(a) the Secretary of State, and

(b) any other person they think appropriate.

(4) The Commission may determine different standards for different descriptions of relevant officers.

(5) When the Commission publish standards under subsection (1) they must send a copy of the published standards to the Secretary of State who must lay a copy of the published standards before each House of Parliament.

(6) The elections specified in this subsection are—

(a) an election mentioned in section 5(2);

(b) a parliamentary by-election;

(c) an election under section 9 of the Scotland Act 1998 (constituency vacancies);

(d) an election under section 8 of the Government of Wales Act 1998 (vacancies in constituency seats);

(e) a local government election in England or Wales.

(7) The referendums specified in this subsection are—

(a) a referendum to which Part 7 applies;

(b) a referendum under Part 2 of the Local Government Act 2000.

(8) For the purposes of this section and sections 9B and 9C, the relevant officers are—

(a) electoral registration officers;

(b) in relation to elections within subsection (6), returning officers;

(c) in relation to referendums within subsection (7), counting officers.

9B Returns and reports on performance standards

(1) The Commission may from time to time issue directions to relevant officers to provide the Commission with such reports regarding their level of performance against the standards determined under section 9A(1) as may be specified in the direction.

(2) A direction under subsection (1)—

(a) must specify the relevant officer or officers to whom it is issued (and may specify a description or descriptions of relevant officers),

(b) may require the report or reports to relate to such elections or referendums (or both) as may be specified in the direction, and

(c) may require the report or reports to be provided in a form specified in the direction.

(3) A report provided to the Commission in pursuance of subsection (1) may be published by the relevant officer to whom it relates.

(4) The Commission shall from time to time prepare and publish (in such manner as the Commission may determine) assessments of the level of performance by relevant officers against the standards determined under section 9A(1).

(5) An assessment under subsection (4)—

(a) must specify the relevant officer or officers to whom it relates;

(b) must specify the period to which it relates;

(c) may specify the elections or referendums (or both) to which it relates.

(6) The Commission must not prepare an assessment under subsection (4) unless they have received reports in pursuance of subsection (1) from the relevant officer or officers for the matters to which the assessment relates.

(7) Before publishing an assessment under subsection (4), the Commission shall—

(a) provide to each relevant officer a copy of those parts of the assessment which relate to him;

(b) have regard to any comments made by him regarding the factual accuracy of the assessment.

9C Provision of information about expenditure on elections etc.

(1) The Commission may by notice in writing direct a relevant officer to provide the Commission with such expenditure information as may be specified in the direction.

(2) Expenditure information is information relating to—

(a) in the case of an electoral registration officer, expenditure in connection with the performance of his functions;

(b) in the case of a returning officer, expenditure in connection with the election or elections specified in section 9A(6) for which he is appointed or otherwise holds office;

(c) in the case of a counting officer, expenditure in connection with the referendum or referendums specified in section 9A(7) for which he is appointed.

(3) A direction under subsection (1)—

(a) may require the information to relate to such elections or (as the case may be) referendums as may be specified in the direction;

(b) may require the information to be provided in a form specified in the direction;

(c) may specify the time within which the information must be provided.

(4) This section does not affect any other power of the Commission to request information.”

68 Funding of services and expenses of returning officers

(1) Section 29 of the 1983 Act (payments by and to returning officer) is amended as follows.

(2) For subsections (3) to (4B) substitute—

“(3) A returning officer shall be entitled to recover his charges in respect of services rendered, or expenses incurred, for or in connection with a parliamentary election if—

(a) the services were necessarily rendered, or the expenses were necessarily incurred, for the efficient and effective conduct of the election; and

(b) the total of his charges does not exceed the amount (“the overall maximum recoverable amount”) specified in, or determined in accordance with, an order made by the Secretary of State for the purposes of this subsection.

(3A) An order under subsection (3) may specify, or make provision for determining in accordance with the order, a maximum recoverable amount for services or expenses of any specified description and, subject to subsection (3B) below, the returning officer may not recover more than that amount in respect of any such services or expenses.

(3B) The Secretary of State may, in a particular case, authorise the payment of—

(a) more than the overall maximum recoverable amount, or

(b) more than the specified maximum recoverable amount for any specified services or expenses, if he is satisfied that the conditions in subsection (3C) are met.

(3C) The conditions referred to in subsection (3B) are—

(a) that it was reasonable for the returning officer concerned to render the services or incur the expenses, and

(b) that the charges in question are reasonable.”

(3) In subsection (9), for “subsections (3) and (4)” substitute “subsection (3)”.

(4) This section ceases to have effect if, before it is brought into force, paragraph 6(3) of Schedule 21 to the 2000 Act is brought into force.

Encouraging electoral participation

69 Encouraging electoral participation

(1) A local electoral officer must take such steps as he thinks appropriate to encourage the participation by electors in the electoral process in the area for which he acts.

(2) A local electoral officer must have regard to any guidance issued by the Electoral Commission for the purposes of this section.

(3) This section does not permit an electoral registration officer to undertake any activity in relation to a local government election in Scotland unless the activity relates to a matter falling within Section B3 (elections) of Schedule 5 to the Scotland Act 1998 (c. 46) (reserved matters).

(4) The Secretary of State may reimburse a local electoral officer in respect of any expenditure incurred by the officer for the purposes of this section.

(5) The amount paid under subsection (4) must not in any year exceed such amount as is determined in accordance with regulations made by the Secretary of State.

(6) The power to make regulations under subsection (5) is exercisable by statutory instrument subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(7) The regulations may make different provision for different purposes.

(8) A local electoral officer is—

(a) an electoral registration officer;

(b) a returning officer for an election mentioned in subsection (9).

(9) These are the elections—

(a) parliamentary elections;

(b) local government elections in England and Wales and Northern Ireland;

(c) European Parliamentary elections;

(d) elections to the Scottish Parliament;

(e) elections to the Northern Ireland Assembly;

(f) elections to the National Assembly for Wales.

(10) References to a local government election must be construed in accordance with the 1983 Act.

Criminal proceedings

70 Time limit for prosecutions

(1) In section 176 of the 1983 Act (time limit for prosecution of offences) subsection (2) insert—

"(2A) A magistrates' court in England and Wales may act under subsection

(2B) if it is satisfied on an application by a constable or Crown Prosecutor—

(a) that there are exceptional circumstances which justify the granting of the application, and

(b) that there has been no undue delay in the investigation of the offence to which the application relates.

(2B) The magistrates' court may extend the time within which proceedings must be commenced in pursuance of subsection (1) above to not more than 24 months after the offence was committed.

(2C) If the magistrates' court acts under subsection (2B), it may also make an order under subsection (2D) if it is satisfied, on an application by a constable or Crown Prosecutor, that documents retained by the relevant registration officer in pursuance of rule 57 of the parliamentary elections rules may provide evidence relating to the offence.

(2D) An order under this subsection is an order—

(a) directing the relevant registration officer not to cause the documents to be destroyed at the expiry of the period of one year mentioned in rule 57, and

(b) extending the period for which he is required to retain them under that rule by such further period not exceeding 12 months as is specified in the order.

(2E) The making of an order under subsection (2D) does not affect any other power to require the retention of the documents.

(2F) An application under this section must be made not more than one year after the offence was committed.

(2G) Any party to—

(a) an application under subsection (2A), or

(b) an application under subsection (2C), who is aggrieved by the refusal of the magistrates' court to act under subsection (2B) or to make an order under subsection (2D) (as the case may be) may appeal to the Crown Court."

(2) In Schedule 1 to that Act, in rule 57(1) (retention and public inspection of documents) for "or the High Court" substitute ", the High Court, the Crown Court or a magistrates' court".

71 Restriction on powers of arrest by persons other than constables

Section 24A of the Police and Criminal Evidence Act 1984 (c. 60) (arrest without warrant: other persons) does not permit a person other than a constable to arrest inside a polling station a person who commits or is suspected of committing an offence under section 60 of the 1983 Act (personation).

Pre-consolidation amendments

72 Pre-consolidation amendments

(1) The Secretary of State may by order make such amendments of the enactments relating to the representation of the people as in his opinion facilitate or are otherwise desirable in connection with the consolidation of some or all of those enactments.

(2) The enactments relating to the representation of the people are—

(a) the Representation of the People Act 1983 (c. 2);

(b) the Representation of the People Act 1985 (c. 50);

(c) the Representation of the People Act 1989 (c. 28);

(d) the Representation of the People Act 1993 (c. 29);

(e) the Representation of the People Act 2000 (c. 2);

(f) the Electoral Administration Act 2006;

(g) the Elections (Northern Ireland) Act 1985 (c. 2);

(h) the Electoral Fraud (Northern Ireland) Act 2002 (c. 13);

(i) the Northern Ireland (Miscellaneous Provisions) Act 2006;

(j) an enactment referring to any enactment falling within paragraphs (a) to (i).

(3) An order under this section must not come into force unless an Act consolidating the enactments amended by the order (with or without other enactments relating to the representation of the people) has been passed.

(4) An order under this section must not come into force until immediately before that Act comes into force.

(5) Subsection (6) applies if the provisions of that Act come into force at different times.

(6) So much of an order under this section as amends an enactment repealed and re-enacted by a provision of that Act comes into force immediately before that provision.

(7) An order under this section must not be made unless the Secretary of State first consults the Electoral Commission.

(8) An order under this section must be made by statutory instrument, but no such order may be made unless a draft of the statutory instrument containing the order has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.

(9) An order under this section must not make any provision which would, if it were included in an Act of the Scottish Parliament, be within the legislative competence of that Parliament.

Legal incapacity to vote

73 Abolition of common law incapacity: mental state

(1) Any rule of the common law which provides that a person is subject to a legal incapacity to vote by reason of his mental state is abolished.

(2) Accordingly, in section 202(1) of the 1983 Act (general provisions as to interpretation), in the definition of "legal incapacity" after "addition" insert ", where applicable,".

(3) And in section 10(1) of the Elected Authorities (Northern Ireland) Act 1989 (c. 3) (interpretation), in the definition of "legal incapacity" omit the words "or of any subsisting provision of the common law".

PART 9
GENERAL

74 Miscellaneous amendments and repeals

(1) Part 7 of Schedule 1 contains miscellaneous amendments.

(2) Schedule 2 contains repeals.

75 Financial provision

(1) There shall be paid out of money provided by Parliament—

(a) any expenses incurred by the Secretary of State in consequence of this Act, and

(b) any increase attributable to this Act in the sums which under any other Act are payable out of money so provided.

(2) There shall be paid out of the Consolidated Fund any increase attributable to this Act in the sums which under any other Act are payable out of that Fund.

76 Interpretation

(1) "The 1983 Act" means the Representation of the People Act 1983 (c. 2).

(2) "The 2000 Act" means the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (c. 41).

77 Commencement

(1) The following provisions come into force on the day on which this Act is passed—

(a) section 1 (except subsections (2) and (5));

(b) section 2 (except subsections (2), (4) to (9) and (12));

(c) section 3;

(d) section 4;

(e) section 5 (except subsection (10));

(f) section 6;

(g) section 8;

(h) section 75;

(i) section 76;

(j) this section;

(k) section 78;

(l) section 79.

(2) Otherwise, this Act comes into force on such day as the Secretary of State may by order made by statutory instrument appoint.

(3) Different days may be appointed for different purposes.

(4) An order under subsection (2) may make—

(a) any supplementary, incidental or consequential provision, and

(b) any transitory, transitional or saving provision, as the Secretary of State considers necessary or expedient in connection with the order.

78 Extent

(1) Subject to subsections (2) to (5), the extent of any amendment or repeal made by this Act is the same as that of the enactment amended or repealed.

(2) The following provisions do not extend to Northern Ireland—

(a) sections 9, 10 and 11;

(b) section 67;

(c) section 70;

(d) Parts 1 and 2 of Schedule 1.

(3) Section 70 does not extend to Scotland.

(4) A repeal of an enactment by Schedule 2 which corresponds to a repeal of that enactment by any other provision of this Act has the same extent as that other provision.

(5) The repeal in Schedule 2 relating to paragraph 86 of Schedule 4 to the Representation of the People Act 1985 (c. 50) does not extend to Northern Ireland.

79 Short title

This Act may be cited as the Electoral Administration Act 2006.

SCHEDULE S
SCHEDULE 1 Sections 10, 11, 18, 20, 47, 61, 74
AMENDMENTS
PART 1
ANONYMOUS REGISTRATION

The Juries Act 1974 (c. 23)

1 In section 3 of the Juries Act 1974 (electoral register as basis of jury selection), after subsection (1) insert—

"(1A) If a register to be delivered under subsection (1) above includes any anonymous entries (within the meaning of that Act of 1983) the registration officer must, at the same time as he delivers the register, also deliver to the designated officer any record prepared in pursuance of provision made as mentioned in paragraph 8A of Schedule 2 to that Act which relates to such anonymous entries."

The 1983 Act

2 The 1983 Act is amended in accordance with paragraphs 3 to 16.

3 In section 4 (entitlement to be registered as parliamentary or local government elector), after subsection (5) insert—

"(5A) If a person entitled to be registered by virtue of subsection (5) above has an anonymous entry in the register, the references in paragraphs (a) and (b) of that subsection to his entry in

the register are to be read as references to his entry in the record of anonymous entries prepared in pursuance of paragraph 8A of Schedule 2 below."

4 (1) Section 9 (registers of electors) is amended as follows.

(2) In subsection (2), for "Each register" substitute "Subject to section 9B(3) below, each register".

(3) In subsection (5), for "names" substitute "entries".

5 In section 10 (maintenance of registers: annual canvass), in subsection (3) after paragraph (b) insert "; or

(c) the registration of persons with anonymous entries in the register."

6 (1) Section 10A (maintenance of the registers: registration of electors) is amended as follows.

Electoral Administration Act 2006 (c. 22)

(2) After subsection (3A) (inserted by section 12(4) of this Act) insert—

"(3B) No objection to a person's registration may be made if the person has an anonymous entry in the register."

(3) In subsection (5) the words "the name of" are omitted.

7 In section 49 (effect of registers), after subsection (4) insert—

"(4A) Subsection (4) applies to an entry in the record of anonymous entries as it applies to an entry in the register of parliamentary or local government electors."

8 In section 56 (registration appeals), in subsection (1) after paragraph

(aa) (inserted by section 12(8) of this Act) insert—

"(ab) from a determination of the registration officer under section 9B(2) above,".

9 (1) Section 62 (offences as to declarations) is amended as follows.

(2) After subsection (1) insert—

"(1A) A person who makes a declaration under section 9B(1)(b) above—

(a) except as permitted by this Act, when he knows that he is subject to a legal incapacity to vote, or

(b) when he knows that it contains a statement which is false, shall be guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale."

(3) In subsection (2) for "the reference in subsection (1) above to a legal incapacity to vote refers" substitute "the references in subsections (1) and (1A) above to a legal incapacity to vote refer".

10 (1) Section 91 (candidate's right to send election address post free) is amended as follows.

(2) After subsection (2) insert—

"(2A) The candidate may require the returning officer to make arrangements with the universal service provider for communications under subsection (1)(b) to be sent to persons who have anonymous entries in the register.

(2B) Arrangements under subsection (2A) shall be such as to ensure that it is not disclosed to any other person that the addressee of such a communication has an anonymous entry."

(3) In subsection (4)(b)—

(a) after "in that register" insert "(or, in the case of a person who has an anonymous entry in the register, in the record of anonymous entries)", and

(b) after "from the register" insert "(or from the record)".

11 In section 121 (presentation and service of parliamentary election petition), after subsection (1) insert—

"(1A) The reference in subsection (1)(a) to a person who voted as an elector at an election or who had the right so to vote does not include a person who had an anonymous entry in the register of electors."

12 In section 128 (presentation of petition questioning local election), after subsection (1) insert—

"(1A) The reference in subsection (1) to a person who voted as an elector at an election or who had the right so to vote does not include a person who had an anonymous entry in the register of electors.

(1B) Subsection (1A) does not apply to a local government election in Scotland."

13 (1) Section 202(1) (general provisions as to interpretation) is amended as follows.

(2) Before the definition of "citizen of the Union" insert—

""anonymous entry", in relation to a register of electors, shall be construed in accordance with section 9B above and "the record of anonymous entries", means the record prepared in pursuance of regulations made by virtue of paragraph 8A of Schedule 2 to this Act;".

(3) In the definition of "elector"—

(a) for "whose name is for the time being" substitute "who has for the time being an entry", and

(b) after "shown in the register" insert "(or, in the case of a person who has an anonymous entry in the register, in the record of anonymous entries)".

14 (1) Schedule 1 (parliamentary elections rules) is amended as follows.

(2) In rule 7 (subscription of nomination paper), after paragraph (6) insert—

"(7) But, in this rule, "elector" does not include a person who has an anonymous entry in the register."

(3) In rule 28 (issue of official poll cards) after paragraph (3) insert—

"(3A) In the case of an elector with an anonymous entry, instead of containing the matter mentioned in paragraph (3)(b) above the polling card shall contain such matter as is prescribed."

(4) In rule 29 (equipment of polling stations), in paragraph (3)(c) for "names of" substitute "entries relating to".

(5) In rule 40 (tendered ballot papers) after paragraph (4) insert—

"(4A) This rule applies to an elector who has an anonymous entry subject to the following modifications—

(a) in paragraphs (2)(b) and (3) the references to the name of the voter must be ignored;

(b) otherwise, a reference to a person named on a register or list must be construed as a reference to a person whose number appears on the register or list (as the case may be)."

15 (1) Schedule 2 (provisions which may be contained in regulations as to registration etc.) is amended as follows.

(2) In paragraph 1(3), for "name" substitute "entry".

(3) After paragraph 2A insert—

“2B Provisions requiring registration officers to remind persons with anonymous entries in registers of the need to make a fresh application and declaration in order for them to remain so registered.”

(4) After paragraph 3A insert—

“3B Provisions as to the form and content of applications for an anonymous entry and declarations to be made in connection with such applications.”

(5) In paragraph 5, after sub-paragraph (1A) insert—

“(1B) Provisions as to the evidence which shall or may be deemed sufficient or conclusive evidence that a person’s safety would be at risk as mentioned in section 9B(10) of this Act.”

(6) After paragraph 8 insert—

“8A Provisions requiring the registration officer to prepare a record of those persons with anonymous entries in the register showing, in relation to each such person, such information as is prescribed.”

(7) In paragraph 10, after sub-paragraph (1) insert—

“(1A) The edited version shall also omit anonymous entries.”

16 In Schedule 2A (control of donations to candidates), the existing text of paragraph 10 becomes sub-paragraph (1) of the paragraph and after subparagraph

(1) insert—

“(2) If the statement states that the candidate’s election agent has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that an individual donor has an anonymous entry in an electoral register, the statement must be accompanied by a copy of the evidence.

(3) Sub-paragraph (2) does not apply to local government elections in Scotland.”

The Representation of the People Act 1985 (c. 50)

17 (1) Section 3 of the Representation of the People Act 1985 is amended as follows.

(2) After subsection (4) insert—

“(4A) For the purposes of subsections (3)(a) and (4)(c) above, a person who has an anonymous entry in a register of parliamentary electors or local government electors is not to be regarded as being included in that register.”

(3) In subsection (7), for “names” substitute “entries”.

The Greater London Authority Act 1999 (c. 29)

18 (1) Section 17A of the Greater London Authority Act 1999 (free delivery of election addresses) is amended as follows.

(2) In subsection (2)(b)—

(a) after “in any such register” insert “(or, in the case of a person who has an anonymous entry in any such register, in the record of anonymous entries for that electoral area)”, and

(b) after “from the register” insert “(or from the record)”.

(3) After subsection (2) insert—

“(2A) In subsection (2)(b), “anonymous entry” and “record of anonymous entries” have the meaning given in section 202(1) of the Representation of the People Act 1983.”

The Representation of the People Act 2000 (c. 2)

19 Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (absent voting) is amended in accordance with paragraphs 20 to 23.

20 (1) Paragraph 3 is amended as follows.

(2) In sub-paragraph (3), after paragraph (a) insert—

"(aa) if he has an anonymous entry in the register of electors for the election,".

(3) After sub-paragraph (3) insert—

"(3A) Sub-paragraph (3)(aa) does not apply to an application to vote by proxy at a local government election in Scotland."

(4) In sub-paragraph (5), after paragraph (a) insert—

"(aa) in the case of a person who is eligible to vote by proxy by virtue of having an anonymous entry, if he ceases to have an anonymous entry,".

21 In paragraph 4, after sub-paragraph (2) insert—

"(2A) Where a person who has an anonymous entry in the register of electors for a parliamentary or local government election applies to the registration officer to vote by proxy at a particular such election the registration officer shall grant the application if it meets the prescribed requirements.

(2B) Sub-paragraph (2A) does not apply to an application to vote by proxy at a local government election in Scotland."

22 In paragraph 5, after sub-paragraph (3) insert—

"(4) In the case of a person who has an anonymous entry in a register the postal voters list or list of proxies (as the case may be) must show in relation to the person only—

(a) his electoral number, and

(b) the period for which the anonymous entry has effect.

(5) Sub-paragraph (4) does not apply to any list kept in respect of a local government election in Scotland."

23 In paragraph 7, after sub-paragraph (8) insert—

"(8A) In the case of a person who has an anonymous entry in a register the special list mentioned in sub-paragraph (8) must contain only—

(a) the person's electoral number, and

(b) the period for which the anonymous entry has effect.

(8B) Sub-paragraph (8A) does not apply to a special list kept in respect of a local government election in Scotland."

The 2000 Act

24 The 2000 Act is amended as follows.

25 In section 65 (submission of donation reports to Commission), after subsection (2) insert—

"(2A) If a donation report under section 62 or 63 states that the registered party has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that an individual donor has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983), the report must be accompanied by a copy of the evidence."

26 In paragraph 2 of Schedule 6 (details to be given in donation reports) after sub-paragraph (3A) insert—

"(3B) Sub-paragraph (2) applies in the case of a donation by a person who has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983), as if for paragraphs (a) and (b) there were substituted "state that the registered party has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the individual has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983)".

(3C) Sub-paragraph (3) applies in the case of a donation in the form of a bequest by a person who either—

(a) at the time of his death, or

(b) at any time in the period of five years ending with the date of his death, had an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983), as if for paragraph (b) there were substituted—

"(b) a statement that the registered party has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the individual had—

(i) at the time of his death, or

(ii) at any time in the period of five years ending with the date of his death, an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983).""

27 The existing text of paragraph 3 of that Schedule becomes sub-paragraph (1) and after sub-paragraph (1) insert—

"(2) In the case of a donation by a person who has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983), instead of giving details of the address of the donor the party must state that it has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the person has such an entry.

(3) In the case of a donation in the form of a bequest by a person who either—

(a) at the time of his death, or

(b) at any time in the period of five years ending at the date of his death, had such an entry, instead of giving details of the address of the donor, the party must state that it has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the person had, at that time, such an entry."

28 In Schedule 7 (control of donations to individuals and members associations), in paragraph 10, after sub-paragraph (4) insert—

"(4A) In the case of a donation made by an individual who has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983), if the report states that the donee has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the individual has such an anonymous entry, the report must be accompanied by a copy of the evidence."

29 In Schedule 11 (control of donations to recognised third parties), in paragraph 10, after sub-paragraph (3) insert—

"(4) In the case of a donation made by an individual who has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983) if the statement states that the recognised third party has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the individual has such an anonymous entry, the statement must be accompanied by a copy of the evidence."

30 In Schedule 15 (control of donations to permitted participants), in paragraph 10, after sub-paragraph (3) insert—

"(4) In the case of a donation made by an individual who has an anonymous entry in an electoral register (within the meaning of the Representation of the People Act 1983) if the statement states that the permitted participant has seen evidence of such description as is prescribed by the Secretary of State in regulations that the individual has such an anonymous entry, the statement must be accompanied by a copy of the evidence."

PART 2
ALTERATION OF REGISTERS: PENDING ELECTIONS

31 The 1983 Act is amended as follows.

32 In section 13A(4) (alteration of registers), after "section 13B(3)" insert ", (3B) or (3D)".

33 Schedule 1 (parliamentary elections rules) is amended as follows.

34 In rule 29 (equipment of polling stations) after paragraph (5) insert—

"(6) The reference in paragraph (3)(c) to the copies of the registers of electors includes a reference to copies of any notices issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act in respect of alterations to the register."

35 In rule 38 (votes marked by presiding officer), after paragraph (2) insert—

"(3) In the case of a person in respect of whom a notice has been issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act, paragraph (2) above applies as if for "on the register of electors of every voter" there were substituted "relating to every voter in respect of whom a notice has been issued under section 13B(3B) or (3D)"."

36 In rule 39 (voting by person with disabilities), after paragraph (4) insert—

"(4A) In the case of a person in respect of whom a notice has been issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act, paragraph (4) above applies as if for "in the register of electors of every voter" there were substituted "relating to every voter in respect of whom a notice has been issued under section 13B(3B) or (3D)"."

37 In rule 40 (tendered ballot papers), after paragraph (4A) (inserted by paragraph 14(5) above) insert—

"(4B) This rule applies in the case of a person in respect of whom a notice has been issued under section 13B(3B) or (3D) as if—

(a) in paragraphs (1)(a), (1ZA)(a) and (1ZD)(a) for "named on the register" there were substituted "in respect of whom a notice under section 13B(3B) or (3D) of this Act has been issued";

(b) in paragraph (2)(b) for "his number in the register of electors" there were substituted "the number relating to him on a notice issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act";

(c) in paragraph (3) for "his number on the register of electors" there were substituted "the number relating to him on a notice issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act"."

38 After rule 41 (spoilt ballot papers) insert—

"Correction of errors on day of poll 41A The presiding officer shall keep a list of persons to whom ballot papers are delivered in consequence of an alteration to the register made by virtue of section 13B(3B) or (3D) of this Act which takes effect on the day of the poll."

39 In rule 43 (procedure on close of poll)—

(a) in paragraph (1)(d), after "electors" insert "(including any marked copy notices issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act)";

(b) in paragraph (1)(f) after ""unable to read"," insert "the list maintained under rule 41A,".

40 In rule 55 (delivery of documents to Clerk of the Crown)—

(a) in paragraph (1)(c) after "and the related statements," insert "the lists maintained under rule 41A,";

(b) in paragraph (1)(e) after "registers" insert "(including any marked copy notices issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act)".

PART 3
STANDING FOR ELECTION

European Parliament

41 (1) Section 10 of the European Parliamentary Elections Act 2002 (c. 24) (disqualifications) is amended as follows.

(2) In subsection (3) for "Commonwealth" substitute "qualifying Commonwealth citizens".

(3) After subsection (3) insert—

"(3A) A Commonwealth citizen who is resident in Gibraltar and who—

(a) does not, under the law of Gibraltar, require a permit or certificate to enter or remain there, or

(b) for the time being has (or is by virtue of any provision of the law of Gibraltar to be treated as having) a certificate of permanent residence issued under the Immigration Control Ordinance, is not disqualified for the office of MEP under subsection (1)(a) merely because he is disqualified for membership of the House of Commons under section 3 of the Act of Settlement (12&13 Will 3 c. 2) (disqualification of persons, other than qualifying Commonwealth citizens and Republic of Ireland citizens, who are born outside Great Britain and Ireland and the dominions).

(3B) But subsection (3A)(a) does not cause a person to be qualified for the office of MEP if he does not require a permit or certificate to enter Gibraltar by virtue only of section 14(1) of the Immigration Control Ordinance (certain exemptions from requirement of permit or certificate)."

(4) In subsection (4A) for "provide" substitute "make such other provision as he thinks appropriate".

(5) After subsection (7) insert—

"(7A) In this section "the Immigration Control Ordinance" means the Gibraltar Ordinance of that name (Ord. 1962 No. 12).

(7B) The Secretary of State may by regulations amend this section if he considers it necessary or expedient to do so in consequence of developments in the law of Gibraltar relating to immigration control.

(7C) Such regulations may—

(a) make transitional or saving provision;

(b) make provision extending or applying to (or extending or applying only to) Gibraltar or any part of the United Kingdom."

Greater London Authority

42 (1) Section 20 of the Greater London Authority Act 1999 (c. 29) (qualification to be Mayor or Assembly member) is amended as follows.

(2) In subsection (2)(a) before “Commonwealth” insert “qualifying”.

(3) After subsection (7) insert—

“(7A) For the purposes of this section, a person is a qualifying Commonwealth citizen if he is a Commonwealth citizen who either—

(a) is not a person who requires leave under the Immigration Act 1971 to enter or remain in the United Kingdom, or

(b) is such a person but for the time being has (or is, by virtue of any enactment, to be treated as having) indefinite leave to remain within the meaning of that Act.

(7B) But a person is not a qualifying Commonwealth citizen by virtue of subsection (7A)(a) if he does not require leave to enter or remain in the United Kingdom by virtue only of section 8 of the Immigration Act 1971 (exceptions to requirement for leave in special cases).”

(4) In subsection (8), in paragraph (a) of the definition of “relevant citizen of the Union” before “Commonwealth” insert “qualifying”.

Local authorities in England and Wales

43 (1) Section 79 of the Local Government Act 1972 (c. 70) (qualifications for election and holding office as a member of a local authority) is amended as follows.

(2) In subsection (1) for “British subject” substitute “qualifying Commonwealth citizen”.

(3) In subsection (2A) before “Commonwealth” insert “qualifying”.

(4) After subsection (2A) insert—

“(2B) For the purposes of this section, a person is a qualifying Commonwealth citizen if he is a Commonwealth citizen who either—

(a) is not a person who requires leave under the Immigration Act 1971 to enter or remain in the United Kingdom, or

(b) is such a person but for the time being has (or is, by virtue of any enactment, to be treated as having) indefinite leave to remain within the meaning of that Act.

(2C) But a person is not a qualifying Commonwealth citizen by virtue of subsection (2B)(a) if he does not require leave to enter or remain in the United Kingdom by virtue only of section 8 of the Immigration Act 1971 (exceptions to requirement for leave in special cases).”

National Assembly for Wales

44 In section 13(2) of the Government of Wales Act 1998 (c. 38) (exceptions and relief from disqualification) before “Commonwealth” insert “certain”.

Scottish Parliament

45 In section 16(2) of the Scotland Act 1998 (c. 46) (exceptions and relief from disqualification) before “Commonwealth” insert “certain”.

Local authorities in Scotland

46 (1) Section 29 of the Local Government (Scotland) Act 1973 (c. 65) (qualifications for nomination, election and holding office as a member of a local authority in Scotland) is amended as follows.

(2) In subsection (1) for "British subject" substitute "qualifying Commonwealth citizen".

(3) In subsection (2) before "Commonwealth" insert "qualifying".

(4) After subsection (2) insert—

"(3) For the purposes of this section, a person is a qualifying Commonwealth citizen if he is a Commonwealth citizen who either—

(a) is not a person who requires leave under the Immigration Act 1971 to enter or remain in the United Kingdom, or

(b) is such a person but for the time being has (or is, by virtue of any enactment, to be treated as having) indefinite leave to remain within the meaning of that Act.

(4) But a person is not a qualifying Commonwealth citizen by virtue of subsection (3)(a) if he does not require leave to enter or remain in the United Kingdom by virtue only of section 8 of the Immigration Act 1971 (exceptions to requirement for leave in special cases)."

Councillors in Northern Ireland

47 (1) Section 3 of the Local Government Act (Northern Ireland) 1972 (C.9)(qualifications for nomination, election and holding office as a councillor in Northern Ireland) is amended as follows.

(2) In subsection (1) for "British subject" substitute "qualifying Commonwealth citizen".

(3) In subsection (2) before Commonwealth insert "qualifying".

(4) After subsection (3) insert—

"(4) For the purposes of this section, a person is a qualifying Commonwealth citizen if he is a Commonwealth citizen who either—

(a) is not a person who requires leave under the Immigration Act 1971 to enter or remain in the United Kingdom, or

(b) is such a person but for the time being has (or is, by virtue of any enactment, to be treated as having) indefinite leave to remain within the meaning of that Act.

(5) But a person is not a qualifying Commonwealth citizen by virtue of subsection (4)(a) if he does not require leave to enter or remain in the United Kingdom by virtue only of section 8 of the Immigration Act 1971 (exceptions to requirement for leave in special cases)."

PART 4
OMISSION OF REFERENCES TO MAUNDY THURSDAY

The Electoral Law Act (Northern Ireland) 1962 (C. 14)

48 In Schedule 5 to the Electoral Law Act (Northern Ireland) 1962 (local elections rules), in rule 2 (computation of time) omit the words "Maundy Thursday".

The 1983 Act

49 The 1983 Act is amended in accordance with paragraphs 50 to 52.

50 In section 40(1) (timing as to local elections in England and Wales), omit the words "Maundy Thursday,".

51 (1) In section 119(2) (computation of time for purposes of Part 2), omit the words "Maundy Thursday,".

(2) The amendment made by sub-paragraph (1) does not have effect so far as it relates to a local government election in Scotland.

52 In rule 2(1) of Schedule 1 (computation of time for purposes of parliamentary elections rules), in paragraph (b), omit the words “Maundy Thursday,”.

The Representation of the People Act 1985 (c. 50)

53 In section 19(6) of the Representation of the People Act 1985 (amendments and modifications of the Local Government Act 1972), in paragraph (b) (which modifies the rules about computation of time in section 243(4) of the 1972 Act), omit the words “Maundy Thursday,”.

The 2000 Act

54 In section 77(9) of the 2000 Act (computation of time for purposes of making claims in respect of campaign expenditure), in paragraph (a), omit the words “Maundy Thursday,”.

PART 5
CONDUCT OF ELECTIONS
THE ELECTORAL LAW ACT (NORTHERN IRELAND) 1962

55 The Electoral Law Act (Northern Ireland) 1962 (C. 14) is amended in accordance with paragraphs 56 to 68.

Attendance at election proceedings

56 In Schedule 5 (local elections rules), in rule 9 (right to attend nomination)—

(a) in paragraph (1), after paragraph (b) insert “or

(c) a person who is entitled to attend by virtue of section 6A or 6B of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000,”;

(b) after paragraph (3) insert—

“(4) Paragraph (3) does not apply to a person mentioned in paragraph (1)(c).”

57 In rule 29 of that Schedule (admission to polling station) for paragraph (1) substitute—

“(1) The presiding officer shall exclude all persons from the polling station except—

(a) voters;

(b) persons under the age of 18 who accompany voters to the polling station;

(c) the candidates and their election agents;

(d) the polling agents appointed to attend at the polling station;

(e) the clerks appointed to attend at the polling station;

(f) persons who are entitled to attend by virtue of any of sections 6A to 6D of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000;

(g) the constables on duty; and

(h) the companions of voters with disabilities.

(1A) The presiding officer shall regulate the total number of voters and persons under the age of 18 who accompany them to be admitted to the polling station at the same time.”

58 In rule 44 of that Schedule (attendance at counting of votes) in paragraph (1), after sub-paragraph (e) insert—

“(f) a person who is entitled to attend by virtue of any of sections 6A to 6D of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000.”

Identifying marks and security markings on ballot papers etc.

59 (1) Rule 16 of that Schedule (ballot papers) is amended as follows.

(2) In paragraph (2)(c) after “number” insert “and other unique identifying mark”.

(3) In paragraph (2)(d) after “number” insert “and other unique identifying mark”.

60 (1) Rule 17 of that Schedule (the official mark) is amended as follows.

(2) For paragraph (1) substitute—

“(1) Every ballot paper must contain an appropriate security marking (the official mark).”

(3) For paragraph (3) substitute—

“(3) The returning officer may use a different official mark for different purposes at the same election.”

61 (1) The Appendix of forms of that Schedule is amended as follows.

(2) In the Form of Front of Ballot Paper omit “Counterfoil No. The counterfoil is to have a number to correspond with that on the back of the ballot paper”.

(3) In the Directions as to printing the ballot paper omit paragraph 3(e).

(4) In the Declaration of identity Front of form omit “Ballot Paper No.....”.

(5) In the Directions for the guidance of voters in voting—

(a) omit paragraph 1;

(b) in paragraph 6 omit “holding the paper so that the presiding officer can see the official mark on the back of it”.

62 (1) Paragraph 27 of Schedule 9 (electoral misdemeanours) is amended as follows.

(2) In sub-paragraph (2)(a) after “number” insert “or other unique identifying mark”.

(3) In sub-paragraph (3)(c) after “number” insert “or other unique identifying mark”.

(4) In sub-paragraph (4)(b) and (c) after “number” insert “or other unique identifying mark”.

Tendered votes in certain circumstances

63 (1) In rule 37 of Schedule 5 (tendered ballot papers) after paragraph (1) insert—

“(1A) Paragraph (1C) applies if —

(a) a person applies for a ballot paper representing himself to be a particular elector named on the register,

(b) he is also named in the absent voters list in pursuance of paragraph 2(4)(a) of Schedule 2 to the Local Elections (Northern Ireland) Order 1985 as a person entitled to vote by post, and

(c) he claims that he did not make an application to vote by post at the election.

(1B) Paragraph (1C) also applies if—

(a) a person applies for a ballot paper representing himself to be a particular person named as a proxy in the list of proxies,

(b) he is also named in the absent voters list in pursuance of paragraph 2(4)(b) of Schedule 2 to that Order as a person entitled to vote by post as proxy, and

(c) he claims that he did not make an application to vote by post as proxy.

(1C) The person shall, on satisfactorily answering the questions permitted by law to be asked at the poll, be entitled, subject to the following provisions of this rule, to mark a ballot paper (in these rules referred to as a “tendered ballot paper”) in the same manner as any other voter.”

(2) After paragraph (1C) of that rule (inserted by sub-paragraph (1) above) insert—

"(1D) Paragraph (1E) applies if before the close of the poll but after the last time at which a person may apply for a replacement postal ballot paper, a person represents himself to be—

(a) a particular elector named on the register who is also named in the absent voters list in pursuance of paragraph 2(4)(a) of Schedule 2 to that Order as a person entitled to vote by post, or

(b) a particular person named as a proxy in the list of proxies and who is also named in the absent voters list in pursuance of paragraph 2(4)(b) of Schedule 2 to that Order as a person entitled to vote by post as proxy, and claims that he has lost or has not received his postal ballot paper.

(1E) The person shall, on satisfactorily answering the questions permitted by law to be asked at the poll, be entitled, subject to the following provisions of this rule, to mark a ballot paper (in these rules referred to as a "tendered ballot paper") in the same manner as any other voter."

64 In rule 32 of that Schedule (questions to be put to voters) after paragraph (1A) insert—

"(1B) In the case of a person applying as an elector who is named in the absent voters list in pursuance of paragraph 2(4)(a) of Schedule 2 to the Local Elections (Northern Ireland) Order 1985 as a person entitled to vote by post, the presiding officer may put either or both of the following additional questions—

(a) "Did you apply to vote by post?";

(b) "Why have you not voted by post?".

(1C) In the case of a person applying as proxy who is named in the absent voters list in pursuance of paragraph 2(4)(b) of Schedule 2 to that Order as a person entitled to vote by post as proxy, the presiding officer may put either or both of the following additional questions—

(a) "Did you apply to vote by post as proxy?";

(b) "Why have you not voted by post as proxy?"."

Assistance for persons with disabilities

65 In rule 35 of Schedule 5 (votes marked by presiding officer)—

(a) in paragraph (1)(a) for "physical cause" substitute "disability";

(b) after paragraph (5) insert—

"(6) In this rule and in rule 36, reference to disability, in relation to voting, includes a short term inability to vote."

66 In rule 36 of that Schedule (voting by persons with disabilities), in paragraph (1)—

(a) in sub-paragraph (a) for "physical incapacity" substitute "disability";

(b) for "other incapacity" substitute "other disability".

67 In rule 41 of that Schedule (procedure on close of poll), in paragraph (1)(f) for ""physical incapacity"" substitute ""disability"".

68 In the Appendix of Forms in that Schedule, in Note number 2 to the Form of declaration to be made by the companion of a voter with disabilities for "incapacity" substitute "disability".

THE 1983 ACT

69 The 1983 Act is amended in accordance with paragraphs 70 to 96.

Official poll cards

70 (1) Rule 28 of Schedule 1 (issue of official poll cards) is amended as follows.

(2) For paragraph (1) substitute—

"(1) The returning officer shall as soon as practicable after the publication of notice of the election send to electors and their proxies an official poll card.

(1A) An official poll card shall not be sent to a person registered, or to be registered, in pursuance of an overseas elector's declaration."

(3) In paragraph (3) after sub-paragraph (c) insert—

"(d) such other information as is prescribed;

(e) such other information as the returning officer thinks appropriate, and different information may be provided in pursuance of subparagraph (d) and (e) to different electors or descriptions of elector."

Election expenses

71 In section 76(1B) (limitation of election expenses) for "above" (in both places) substitute "below".

Postal voting statement

72 In section 65 (tampering with nomination papers, ballot papers etc.) in subsection (1)(b) after "or any" insert "postal voting statement or".

73 (1) Rule 45 of Schedule 1 (the count at parliamentary elections) is amended as follows.

(2) In paragraph (1B)(b)—

(a) for "the declaration of identity" substitute "the postal voting statement";

(b) omit the words "and authenticated".

(3) In paragraph (1B)—

(a) omit "and" after paragraph (a);

(b) after sub-paragraph (b) insert—

"(c) the postal voting statement also states the date of birth of the elector or proxy (as the case may be), and

(d) in a case where steps for verifying the date of birth and signature of an elector or proxy have been prescribed, the returning officer (having taken such steps) verifies the date of birth and signature of the elector or proxy (as the case may be)."

Questions to be put to voters

74 For rule 35 of that Schedule (questions to be put to voters) substitute—

"35 (1) At the time of the application (but not afterwards), the questions specified in the second column of the following table—

(a) may be put by the presiding officer to a person who is mentioned in the first column, and

(b) shall be put if the letter "R" appears after the question and the candidate or his election or polling agent requires the question to be put:

Person applying for ballot paper	Questions
1 A person applying as an elector.	a) "Are you the person registered in the register of parliamentary electors for this election as follows (read out the whole entryfrom the register)?"[R] (b) "Have you already voted, here or elsewhere, at this election,otherwise than as proxy for someother person?" [R] (c) At an election held in NorthernIreland, "What is your date of birth?"
2 A person applying asproxy.	(a) "Are you the person whose name appears as A.B. in the list of proxies for this election as entitled to vote as proxy on behalf of C.D.?" [R] (b) "Have you already voted here or elsewhere at this election, as proxy on behalf of C.D.?" [R] (c) "Are you the spouse, civil partner, parent, grandparent,brother/sister, child or grandchild of C.D.?" [R]
3 A person applying as proxy for an elector with an anonymous entry (instead of the questions at entry 2 above).	(a) "Are you the person entitled to vote as proxy on behalf of the elector whose number on the register of electors is (read out the number from the register)?" [R] (b) "Have you already voted here or elsewhere as proxy on behalf of the elector whose number on the register of electors is (read out the number from the register)?" [R] (c) "Are you the spouse, civil partner, parent, grandparent, brother/sister, child or grandchild of the person whose number on the register of electors is (read out the number from the register)?" [R]
4 Person applying asproxy if the question at entry 2(c) or 3(c) is not answered in the affirmative.	"Have you at this election already voted in this constituency on behalf of two persons of whom you are not the spouse, civil partner, parent, grandparent, brother/sister, child or grandchild?" [R]
5 A person applying as an elector in relation to whom there is an entry in the postal voters list.	(a) "Did you apply to vote by post?" (b) "Why have you not voted by post?"
6 A person applying as proxy who is named in the proxy postal voters list.	(a) "Did you apply to vote by post as proxy?" (b) "Why have you not voted by post as proxy?"

(2) In the case of an elector in respect of whom a notice has been issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act, the references in the questions at entries 1(a) and 3(a), (b) and

(c) to reading from the register must be taken as references to reading from the notice issued under section 13B(3B) or (3D).

(3) A ballot paper shall not be delivered to any person required to answer any of the above questions unless he has answered each question satisfactorily.

(4) Except as authorised by this rule, no inquiry shall be permitted as to the right of any person to vote."

Voting procedure

75 (1) For rule 37 of that Schedule (voting procedure) substitute—

"37 (1) A ballot paper shall be delivered to a voter who applies for one, and immediately before delivery—

(a) the number and (unless paragraph (2) applies) name of the elector as stated in the copy of the register of electors shall be called out;

(b) the number of the elector shall be marked on the list mentioned in rule 29(3)(e) beside the number of the ballot paper to be issued to him;

(c) a mark shall be placed in the register of electors against the number of the elector to note that a ballot paper has been received but without showing the particular ballot paper which has been received;

(d) the voter shall sign the list mentioned in rule 29(3)(e) beside the number of the elector marked on the list in accordance with sub-paragraph (b) above; and

(e) in the case of a person applying for a ballot paper as proxy, a mark shall also be placed against his name in the list of proxies.

(2) In the case of an elector who has an anonymous entry, he must show the presiding officer his official poll card and only his number shall be called out in pursuance of paragraph (1)(a).

(3) In the case of an elector who is added to the register in pursuance of a notice issued under section 13B(3B) or (3D), paragraph (1) above is modified as follows—

(a) in sub-paragraph (a), for "copy of the register of electors" substitute "copy of the notice issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act";

(b) in sub-paragraph (c), for "in the register of electors" substitute "on the copy of the notice issued under section 13B(3B) or (3D) of this Act".

(4) Paragraph (1)(d) above does not apply to a voter to whom rule 38 or 39 applies.

(5) The voter, on receiving the ballot paper, shall forthwith proceed into one of the compartments in the polling station and there secretly mark his paper and fold it up so as to conceal his vote, and shall then show to the presiding officer the back of the paper, so as to disclose the number and other unique identifying mark, and put the ballot paper so folded up into the ballot box in the presiding officer's presence.

(6) The voter shall vote without undue delay, and shall leave the polling station as soon as he has put his ballot paper into the ballot box."

(2) This paragraph does not extend to Northern Ireland.

Assistance for persons with disabilities

76 In section 202 (general provisions as to interpretation), in subsection (1) after the definition of "Common Council" insert—

""disability", in relation to doing a thing, includes a short term inability to do it;".

77 In rule 38 of Schedule 1 (votes marked by presiding officer), in paragraph (1)(a) for "physical cause" substitute "disability".

78 In rule 39 of that Schedule (voting by persons with disabilities), in paragraph (1)—

(a) in sub-paragraph (a) for "physical incapacity" substitute "disability";

(b) for "other incapacity" substitute "other disability".

79 In rule 43 of that Schedule (procedure on close of poll), in paragraph (1)(f) for ""physical incapacity"" substitute ""disability"".

80 In the Appendix of Forms in that Schedule, in Note number 2 to the Form of declaration to be made by the companion of a voter with disabilities for "incapacity" substitute "disability".

Tendered ballot papers

81 (1) Rule 40 of that Schedule (tendered ballot papers) is amended as follows.

(2) After paragraph (1ZE) (inserted by section 38(2)) insert—

"(1ZF) A person to whom a ballot paper is not delivered under paragraph (3) of rule 35 following his unsatisfactory answer to the question at entry 1(c) in the table in paragraph (1) of that rule shall, if he satisfactorily answers any other questions permitted by law to be asked at the poll, nevertheless be entitled, subject to the following provisions of this rule, to mark a ballot paper (in these rules referred to as "a tendered ballot paper") in the same manner as any other voter."

(3) In paragraph (3) at the end insert "and the voter must sign the list opposite the entry relating to him".

Attendance at election proceedings 82 In section 66(1) (requirement of secrecy) after paragraph (b) insert—

"(c) every person so attending by virtue of any of sections 6A to 6D of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000,".

83 (1) Rule 11 of Schedule 1 (right to attend nomination) is amended as follows.

(2) In paragraph (1), after sub-paragraph (b) insert "or

(c) a person who is entitled to attend by virtue of section 6A or 6B of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000,".

(3) After paragraph (3) insert—

"(3A) Paragraph (3) does not apply to a person mentioned in paragraph (1)(c)."

(4) In paragraph (4) for "A candidate's spouse or civil partner" substitute "One other person chosen by the candidate".

84 In rule 32 of that Schedule (admission to polling station) for paragraph (1) substitute—

"(1) The presiding officer shall exclude all persons from the polling station except—

(a) voters;

(b) persons under the age of 18 who accompany voters to the polling station;

(c) the candidates and their election agents;

(d) the polling agents appointed to attend at the polling station;

(e) the clerks appointed to attend at the polling station;

(f) persons who are entitled to attend by virtue of any of sections 6A to 6D of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000;

(g) the constables on duty; and

(h) the companions of voters with disabilities.

(1A) The presiding officer shall regulate the total number of voters and persons under the age of 18 who accompany them to be admitted to the polling station at the same time."

85 (1) Rule 44 of that Schedule (attendance at counting of votes) is amended as follows.

(2) In paragraph (2)(b) for "their spouses or civil partners" substitute "one other person chosen by each of them".

(3) After paragraph (2)(d) insert—

"(e) persons who are entitled to attend by virtue of any of sections 6A to 6D of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000."

Identifying marks and security markings on ballot papers etc.

86 In section 66 (requirement of secrecy), in each of the following provisions, after "number" insert "or other unique identifying mark"—

(a) subsection (2)(a);

(b) subsection (3)(c);

(c) subsection (4)(b) and (c);

(d) subsection (5).

87 In rule 19 of Schedule 1 (ballot papers at parliamentary elections), in paragraph (2)(c) after "number" insert "and other unique identifying mark".

88 (1) Rule 20 of that Schedule (the official mark at parliamentary elections) is amended as follows.

(2) For paragraph (1) substitute—

"(1) Every ballot paper must contain an appropriate security marking (the official mark)."

(3) For paragraph (3) substitute—

"(3) The returning officer may use a different official mark for different purposes at the same election."

89 In rule 29 of that Schedule (equipment of polling stations at parliamentary elections), in paragraph (3), sub-paragraph (b) is omitted.

90 (1) Rule 37 of that Schedule (voting procedure at parliamentary elections) is amended as follows.

(2) In paragraph (1)—

(a) sub-paragraph (a) is omitted;

(b) in sub-paragraph (c) for "the counterfoil" substitute "the list mentioned in rule 29(3)(e) beside the number of the ballot paper to be issued to him".

(3) In paragraph (2) for "the official mark" substitute "the number and other unique identifying mark".

(4) This paragraph extends only to Northern Ireland.

91 In rule 45 of that Schedule (the count), in paragraph (4) after "numbers" insert "or other unique identifying marks".

92 In rule 47 of that Schedule (rejected ballot papers at parliamentary elections), in paragraph (1)(c) after "number" insert "and other unique identifying mark".

93 (1) The Appendix of forms in that Schedule is amended as follows.

(2) In the Directions as to printing the ballot paper, for paragraph 4 substitute—

"4 The number and other unique identifying mark may be printed close to each other on the back of the ballot paper."

(3) For the Form of directions for the guidance of the voters in voting substitute—

"Form of directions for the guidance of the voters in voting
GUIDANCE FOR VOTERS

1 When you are given a ballot paper go to one of the compartments. Mark a cross (X) in the box on the right hand side of the ballot paper opposite the name of the candidate you are voting for.

2 Vote for one candidate only. Put no other mark on the ballot paper, or your vote may not be counted. Do not let anyone see your vote.

3 Fold the ballot paper in two. Show the back of the ballot paper to the presiding officer so as to disclose the number and other unique identifying mark. Put the ballot paper in the ballot box and leave the polling station.

4 If by mistake you spoil a ballot paper, show it to the presiding officer and ask for another one."

Cancellation of postal ballot papers

94 In Schedule 2 (provisions which may be contained in regulations as to registration etc), in paragraph 12 after sub-paragraph (a) insert—

"(aa) authorising the cancellation or removal of ballot papers in any prescribed circumstances;".

Control of documents after parliamentary election: Northern Ireland

95 (1) Schedule 1 (parliamentary elections rules) is amended as follows.

(2) In rule 55 (delivery of documents after poll) after paragraph (1A) (inserted by section 41(3)(b)) insert—

"(1B) Paragraph (1)(e) does not apply to an election for a constituency in Northern Ireland, but the returning officer shall endorse on each packet containing—

(a) marked copies of the registers,

(b) the postal voters list,

(c) the proxy postal voters list, and

(d) lists of proxies, a description of its contents, the date of the election to which it relates and the name of the constituency for which the election was held."

(3) In rule 57 (retention and public inspection of documents) after paragraph (1) insert—

"(1A) The Chief Electoral Officer for Northern Ireland shall retain for a year the documents mentioned in rule 55(1B), and then, unless otherwise directed by order of the House of Commons or the High Court, shall cause them to be destroyed."

(4) This paragraph extends only to Northern Ireland. Local government elections in Scotland

96 The amendments made by paragraphs 72, 86 and 94 do not apply to a local government election in Scotland.

PART 6
CONTROL OF LOANS ETC. TO INDIVIDUALS AND MEMBERS ASSOCIATIONS

97 The 2000 Act is amended in accordance with paragraphs 98 to 102.

98 After section 71X (inserted by section 61 of this Act) insert— "71Y Control of loans etc: individuals and members associations Schedule 7A, which makes provisions for controlling loans and certain other transactions to individual members of registered parties, associations of such members, and certain elected office holders, shall have effect."

99 After Schedule 7 insert—

"SCHEDULE 7A
CONTROL OF LOANS ETC TO INDIVIDUALS AND MEMBERS ASSOCIATIONS

Operation and construction of Schedule

1 (1) This Schedule has effect for controlling loans and certain other transactions where one of the parties to the transaction is—

(a) a member of a registered party,

(b) a members association, or

(c) the holder of a relevant elective office.

(2) The following provisions have effect for the purposes of this Schedule.

(3) References to a controlled transaction must be construed in accordance with paragraph 2.

(4) A reference to a connected transaction is a reference to a controlled transaction falling within paragraph 2(3)(b).

(5) A regulated participant is—

(a) a member of a registered party;

(b) a members association;

(c) the holder of a relevant elective office, whether or not he is a member of a registered party.

(6) A credit facility is an agreement whereby a regulated participant is enabled to receive from time to time from another party to the agreement a loan of money not exceeding such amount (taking account of any repayments made by the regulated participant) as is specified in or determined in accordance with the agreement.

(7) References to each of the following must be construed in accordance with Schedule 7—

(a) the political activities of a party member or a members association;

(b) members association;

(c) relevant elective office;

(d) the responsible person (in relation to a members association), as if for the reference in paragraph 1(9)(b) of that Schedule to donations there were a reference to receipts from controlled transactions.

(8) This Schedule does not have effect in relation to—

(a) a member of the Scottish Parliament, or

(b) a member of a local authority in Scotland, if he is not also a member of a registered party.

Controlled transaction

2 (1) An agreement between a regulated participant and another person by which the other person makes a loan of money to the regulated participant is a controlled transaction if the use condition is satisfied.

(2) An agreement between a regulated participant and another person by which the other person provides a credit facility to the regulated participant is a controlled transaction if the use condition is satisfied.

(3) Where—

(a) a regulated participant and another person (A) enter into a controlled transaction of a description mentioned in subparagraph (1) or (2) or a transaction under which any

property, services or facilities are provided for the use or benefit of the regulated participant (including the services of any person),

(b) A also enters into an arrangement where a third person gives any form of security (whether real or personal) for a sum owed to A by the regulated participant under the transaction mentioned in paragraph (a), and

(c) the use condition is satisfied, the arrangement is a controlled transaction.

(4) An agreement or arrangement is not a controlled transaction—

(a) to the extent that in accordance with any enactment a payment made in pursuance of the agreement or arrangement falls to be included in a return as to election expenses in respect of a candidate or candidates at a particular election, or

(b) if its value is not more than £200.

(5) Anything given or transferred to an officer, member, trustee or agent of a members association in his capacity as such (and not for his own use or benefit) is to be regarded as given or transferred to the association (and references to money or any other benefit received by a regulated participant accordingly include, in the case of a members association, money or any other benefit so given or transferred).

(6) The use condition is that the regulated participant intends at the time he enters into a transaction mentioned in sub-paragraph (1), (2) or (3)(a) to use any money or benefit obtained in consequence of the transaction in connection with relevant political activities.

(7) For the purposes of sub-paragraph (6), it is immaterial that only part of the money or benefit is intended to be used in connection with relevant political activities.

(8) Relevant political activities are—

(a) if the regulated participant is a member of a registered party, any of his political activities as a member of the party;

(b) if the regulated participant is a members association, any of its political activities;

(c) if the regulated participant is a holder of a relevant elective office, any of his political activities.

(9) The Secretary of State may, by order, specify circumstances or any description of circumstances in which an agreement or arrangement falling within any of sub-paragraphs (1) to (3) is not a controlled transaction.

Valuation of controlled transactions

3 (1) The value of a controlled transaction which is a loan is the value of the total amount to be lent under the loan agreement.

(2) The value of a controlled transaction which is a credit facility is the maximum amount which may be borrowed under the agreement for the facility.

(3) The value of a controlled transaction which is an arrangement by which any form of security is given is the contingent liability under the security provided.

(4) For the purposes of sub-paragraphs (1) and (2), no account is to be taken of the effect of any provision contained in a loan agreement or an agreement for a credit facility at the time it is entered into which enables outstanding interest to be added to any sum for the time being owed in respect of the loan or credit facility, whether or not any such interest has been so added.

Authorised participants

4 (1) A regulated participant must not—

(a) be a party to a controlled transaction to which any of the other parties is not an authorised participant;

(b) derive a benefit in consequence of a connected transaction if any of the parties to that transaction is not an authorised participant.

(2) This paragraph does not apply to a controlled transaction if it was entered into before the commencement of section 61 of the Electoral Administration Act 2006.

(3) In this Schedule, an authorised participant is a person who is a permissible donor within the meaning of section 54(2).

(4) The Secretary of State may, by order, specify circumstances or any description of circumstances in which a person who is not a permissible donor is to be treated as an authorised participant.

Controlled transaction involving unauthorised participant

5 (1) This paragraph applies if a regulated participant is a party to a controlled transaction in which another participant is not an authorised participant.

(2) The transaction is void.

(3) Despite sub-paragraph (2)—

(a) any money received by the regulated participant by virtue of the transaction must be repaid by the regulated participant to the person from whom it was received, along with interest at such rate as is determined in accordance with an order made by the Secretary of State;

(b) that person is entitled to recover the money, along with such interest.

(4) If—

(a) the money is not (for whatever reason) repaid as mentioned in sub-paragraph (3)(a), or

(b) the person entitled to recover the money refuses or fails to do so, he Commission may apply to the court to make such order as it thinks fit to restore (so far as is possible) the parties to the transaction to the position they would have been in if the transaction had not been entered into.

(5) In the case of a controlled transaction where a party other than a regulated participant—

(a) at the time the regulated participant enters into the transaction, is an authorised participant, but

(b) subsequently, for whatever reason, ceases to be an authorised participant, the transaction is void and sub-paragraphs (3) and (4) apply with effect from the time when the other party ceased to be an authorised participant.

(6) This paragraph does not apply to a controlled transaction if it was entered into before the commencement of section 61 of the Electoral Administration Act 2006.

Guarantees and securities: unauthorised participants

6 (1) This paragraph applies if—

(a) a regulated participant and another person (A) enter into a transaction of a description mentioned in paragraph 2(3)(a),

(b) A is party to a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(3)(b) (“the connected transaction”) with another person (B), and

(c) B is not an authorised participant.

(2) Paragraph 5(2) to (4) applies to the transaction mentioned in subparagraph (1)(a).

(3) The connected transaction is void.

(4) Sub-paragraph (5) applies if (but only if) A is unable to recover from the regulated participant the whole of the money mentioned in paragraph 5(3)(a) (as applied by sub-paragraph (2) above), along with such interest as is there mentioned.

(5) Despite sub-paragraph (3), A is entitled to recover from B any part of that money (and such interest) that is not recovered from the regulated participant.

(6) Sub-paragraph (5) does not entitle A to recover more than the contingent liability under the security provided by virtue of the connected transaction.

(7) In the case of a connected transaction where B—

(a) at the time A enters into the transaction, is an authorised participant, but

(b) subsequently, for whatever reason, ceases to be an authorised participant, sub-paragraphs (2) to (6) apply with effect from the time when B ceased to be an authorised participant.

(8) This paragraph does not apply to a regulated transaction if it was entered into before the commencement of section 61 of the Electoral Administration Act 2006.

(9) If the transaction mentioned in paragraph 2(3)(a) is not a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(1) or (2), references in this paragraph and paragraph 5(2) to (4) (as applied by sub-paragraph (2) above) to the repayment or recovery of money must be construed as references to (as the case may be)—

(a) the return or recovery of any property provided under the transaction,

(b) to the extent that such is incapable of being returned or recovered or its market value has diminished since the time the transaction was entered into, the repayment or recovery of the market value at that time, or

(c) the market value (at that time) of any facilities or services provided under the transaction.

Transfer to unauthorised participant invalid 7 If an authorised participant purports to transfer his interest in a controlled transaction to a person who is not an authorised participant the purported transfer is of no effect

Offences

8 (1) An individual who is a regulated participant commits an offence if—

(a) he enters into a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(1) or (2) in which another participant is not an authorised participant, and (b) he knew or ought reasonably to have known that the other participant was not an authorised participant.

(2) A responsible person of a members association commits an offence if—

(a) the association enters into a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(1) or (2) in which another participant is not an authorised participant, and

(b) he knew or ought reasonably to have known of the matters mentioned in paragraph (a).

(3) An individual who is a regulated participant commits an offence if—

(a) he enters into a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(1) or (2) in which another participant is not an authorised participant,

(b) sub-paragraph (1)(b) does not apply to him, and

(c) as soon as practicable after knowledge that the other participant is not an authorised participant comes to him he fails to take all reasonable steps to repay any money which he has received by virtue of the transaction.

(4) A responsible person of a members association commits an offence if—

(a) the association enters into a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(1) or (2) in which another participant is not an authorised participant,

(b) sub-paragraph (2)(b) does not apply to him, and

(c) as soon as practicable after knowledge of the matters mentioned in paragraph (a) comes to him he fails to take all reasonable steps to repay any money which the association has received by virtue of the transaction.

(5) An individual who is a regulated participant commits an offence if—

(a) he benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant, and

(b) he knew or ought reasonably to have known that one of the other parties was not an authorised participant.

(6) A responsible person of a members association commits an offence if—

(a) the association benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant, and

(b) he knew or ought reasonably to have known of the matters mentioned in paragraph (a).

(7) An individual who is a regulated participant commits an offence if—

(a) he is a party to a transaction of a description mentioned in paragraph 2(3)(a),

(b) he benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant,

(c) sub-paragraph (5)(b) does not apply to him, and (d) as soon as practicable after knowledge comes to him that one of the parties to the connected transaction is not an authorised participant he fails to take all reasonable steps to repay to any person who has provided him with any benefit in consequence of the connected transaction the value of the benefit.

(8) A responsible person of a members association commits an offence if—

(a) the association is a party to a transaction of a description mentioned in paragraph 2(3)(a),

(b) the association benefits from or falls to benefit in consequence of a connected transaction to which any of the parties is not an authorised participant,

(c) sub-paragraph (6)(b) does not apply to him, and

(d) as soon as practicable after knowledge comes to him that one of the parties to the connected transaction is not an authorised participant he fails to take all reasonable steps to repay to any person who has provided the association with any benefit in consequence of the connected transaction the value of the benefit.

(9) A person commits an offence if he—

(a) knowingly enters into, or

(b) knowingly does any act in furtherance of, any arrangement which facilitates or is likely to facilitate, whether by means of concealment or disguise or otherwise, the participation by a regulated participant in a controlled transaction with a person other than an authorised participant.

(10) It is a defence for a person charged with an offence under subparagraph (2) to prove that he took all reasonable steps to prevent the members association entering into the transaction.

(11) It is a defence for a person charged with an offence under subparagraph (6) to prove that he took all reasonable steps to prevent the members association benefiting in consequence of the connected transaction.

(12) A reference to a regulated participant entering into a controlled transaction includes a reference to any circumstances in which the terms of a controlled transaction are varied so as to increase the amount of money to which the regulated participant is entitled in consequence of the transaction.

(13) A reference to a regulated participant entering into a transaction in which another participant is not an authorised participant includes a reference to any circumstances in which another party to the transaction who is an authorised participant ceases (for whatever reason) to be an authorised participant.

(14) This paragraph does not apply to a transaction which is entered into before the commencement of section 61 of the Electoral Administration Act 2006.

Transaction reports: transactions with authorised participants

9 (1) A regulated participant must prepare a report under this paragraph in respect of each controlled transaction entered into by him which is a recordable transaction.

(2) For the purposes of this paragraph a controlled transaction is a recordable transaction—

(a) if the value of the transaction is more than £5,000 (where the regulated participant is a members association) or £1,000 (in any other case), or

(b) if the aggregate value of it and any other controlled benefit or benefits accruing to the regulated participant—

(i) from the same person and in the same calendar year, and

(ii) in respect of which no report has been previously made under this paragraph, is more than £5,000 (where the regulated participant is a members association) or £1,000 (in any other case).

(3) A controlled benefit is—

(a) a controlled donation within the meaning of paragraph 1(3) of Schedule 7;

(b) a controlled transaction.

(4) A controlled benefit which is a controlled donation accrues—

(a) from the permissible donor (within the meaning of section 54(2)) who made it, and

(b) when it is accepted by the donee.

(5) A controlled benefit which is a controlled transaction accrues—

(a) from any authorised participant who is a party to it, and

(b) when it is entered into.

(6) For the purposes of this paragraph, if—

(a) the value of a controlled transaction as first entered into is such that it is not a recordable transaction, but

(b) the terms of the transaction are subsequently varied in such a way that it becomes a recordable transaction, the regulated participant must be treated as having entered into a recordable transaction on the date when the variation takes effect.

(7) A regulated participant must deliver the report prepared in accordance with sub-paragraph (1) to the Commission within the period of 30 days beginning with—

(a) if sub-paragraph (2)(a) applies, the date on which the transaction is entered into;

(b) if sub-paragraph (2)(b) applies, the date on which the benefit which causes the aggregate amount to exceed £5,000 or (as the case may be) £1,000 accrues.

(8) Each report prepared in accordance with sub-paragraph (1) must—

(a) give the name and address of the regulated participant, and

(b) if he is the holder of a relevant elective office, specify the office in question.

(9) Each such report must also give—

(a) such information as is required to be given, in the case of a report prepared in accordance with section 71M, by virtue of paragraphs 2 and 5(2) and (3) of Schedule 6A; to a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(1) or (2) above, such information as is required to be given, in the case of a report prepared in accordance with that section, by virtue of paragraph 6 of that Schedule;

(c) in relation to a controlled transaction of a description mentioned in paragraph 2(3)(b) above, such information as is required to be given, in the case of a report prepared in accordance with that section, by virtue of paragraph 7 of that Schedule;

(d) the date on which the transaction is entered into;

(e) such other information as is required by regulations made by the Commission.

(10) In the application of paragraphs 2, 5(2) and (3), 6 and 7 of Schedule 6A in accordance with sub-paragraph (9) above—

(a) any reference to a recordable transaction within the meaning of that Schedule must be construed as a reference to a recordable transaction within the meaning of this paragraph;

(b) any reference to section 71G or section 71F(4)(a) must be construed as a reference to paragraph 3 above or paragraph 2(3)(a) above;

(c) any reference to a regulated transaction or a registered party within the meaning of that Schedule must be construed as a reference to a controlled transaction or a regulated participant within the meaning of this paragraph;

(d) any reference to a transaction report within the meaning of that Schedule must be construed as a reference to a report under this paragraph.

Transaction reports: transactions with unauthorised participants

10 (1) A regulated participant must—

(a) prepare a report under this paragraph in respect of each controlled transaction entered into by him and falling within paragraph 5 or 6(1)(b), and

(b) deliver the report to the Commission within the period of 30 days beginning with the date when the transaction was dealt with in accordance with that paragraph.

(2) Each such report must—

(a) give the name and address of the regulated participant;

(b) if he is the holder of a relevant elective office, specify the office in question.

(3) Each such report in respect of a transaction falling within paragraph 5 must also give—

(a) the name and address of the unauthorised participant;

(b) the nature of the transaction (that is to say, whether it is a loan or a credit facility);

(c) the value of the transaction or, in the case of a credit facilit y to which no limit is specified, a statement to that effect;

(d) the date on which the transaction was entered into and the date when, and manner in which, it was dealt with in accordance with paragraph 5;

(e) such other information as is required by regulations made by the Commission.

(4) Each such report in respect of a transaction falling within paragraph 6(1)(b) must also give—

(a) the name and address of the unauthorised participant;

(b) the value of the transaction or, in the case of a security to which no limit is specified, a statement to that effect;

(c) a description of the principal features of the transaction mentioned in paragraph 6(1)(a);

(d) where the security given consists in or includes rights over any property, the nature of that property;

(e) the date on which the transaction was entered into and the date when, and manner in which, it was dealt with in accordance with paragraph 6;

(f) such other information as is required by regulations made by the Commission.

Transaction reports: changes to recorded transactions

11 (1) A regulated participant must—

(a) prepare a report under this paragraph in respect of each change to a recorded transaction; and

(b) deliver the report to the Commission within the period of 30 days beginning with the date on which the change takes effect.

(2) A recorded transaction is a transaction recorded in a report under paragraph 9.

(3) There is a change to a recorded transaction if—

(a) another authorised participant becomes party to the transaction (whether in place of or in addition to any existing participant),

(b) there is any change in the details given in relation to the transaction in pursuance of paragraph 9(9), or

(c) the transaction comes to an end.

(4) For the purposes of sub-paragraph (3)(c), a loan comes to an end if—

(a) the whole debt (or all the remaining debt) is repaid;

(b) the creditor releases the whole debt (or all the remaining debt).

(5) There is also a change to a recorded transaction if a person who is not an authorised participant becomes party to the transaction (whether in place of or in addition to any existing participant).

(6) Each report prepared in accordance with sub-paragraph (1) must—

(a) give the name and address of the regulated participant; and

(b) if he is the holder of a relevant elective office, specify the office in question.

(7) Each such report must also give—

(a) details of the change;

(b) the date on which the change takes effect;

(c) in the case of a change falling within sub-paragraph (5), the date when and the manner in which the transaction was dealt with in accordance with paragraph 5 or 6;

(d) such other information as is required by regulations made by the Commission.

Offence of failing to deliver transaction report

12 (1) Where a report required to be delivered to the Commission under paragraph 9(1), 10(1) or 11(1) is not delivered by the end of the period of 30 days mentioned in paragraph 9(7),

10(1) or 11(1)—

(a) the regulated participant, or

(b) (if a members association) the responsible person, is guilty of an offence.

(2) If such a report is delivered to the Commission which does not comply with any requirements of paragraph 9, 10 or 11 as regards the information to be given in such a report—

(a) the regulated participant, or

(b) (if a members association) the responsible person, is guilty of an offence.

(3) Where a person is charged with an offence under this paragraph, it shall be a defence to prove that he took all reasonable steps, and exercised all due diligence, to ensure that any requirements—

(a) as regards the preparation and delivery of a report in respect of the transaction in question, or

(b) as regards the information to be given in the report in question, as the case may be, were complied with in relation to that transaction or report.

(4) Where the court is satisfied, on an application made by the Commission, that any failure to comply with any such requirements in relation to any transaction entered into by a regulated participant was attributable to an intention on the part of any person to conceal the existence or true value of the transaction, the court may make such order as it thinks fit to restore (so far as is possible) the parties to the transaction to the position they would have been in if the transaction had not been entered into.

(5) An order under sub-paragraph (4) may in particular—

(a) where the transaction is a loan or credit facility, require that any amount owed by the regulated participant be repaid (and that no further sums be advanced under it);

(b) where any form of security is given for a sum owed under the transaction, or the transaction is an arrangement by which any form of security is given, require that the security be discharged.

Declaration in transaction report

13 (1) Each report under paragraph 9 or 10 must, when delivered to the Commission, be accompanied by a declaration made by—

(a) the regulated participant, or

(b) (if a members association) the responsible person, which complies with sub-paragraph (2) or (3).

(2) In the case of a report under paragraph 9, the declaration must state that, to the best of the declarant's knowledge and belief, any transaction recorded in the report as having been entered into by the regulated participant was entered into with an authorised participant.

(3) In the case of a report under paragraph 10, the declaration must state that, to the best of the declarant's knowledge and belief, the transaction recorded in the report as having been entered into by the regulated participant has been dealt with in accordance with paragraph 5 or 6.

(4) A person commits an offence if he knowingly or recklessly makes a false declaration under this paragraph.

Existing transactions

14 (1) Paragraphs 9 to 11 have effect in relation to existing transactions as they have effect in relation to transactions entered into after the date on which those paragraphs come into force,

except that—

(a) references in paragraph 9 to a controlled benefit do not include references to a controlled donation;

(b) in paragraph 9(2)(b)(i) the words "and in the same calendar year" are omitted;

(c) the requirement in paragraph 9(7), 10(1)(b) or 11(1)(b) is a requirement to deliver the report within the period of 60 days beginning with the date on which that provision comes into force.

(2) An existing transaction is a controlled transaction which, at the date on which paragraphs 9 to 11 come into force, has not come to an end for the purposes of paragraph 11(3)(c).

Register of recordable transactions

15 (1) Section 71V applies in relation to transactions reported to the Commission under this Schedule ("relevant transactions") as it applies to transactions reported to them under Part 4A of this Act.

(2) But in its application in accordance with sub-paragraph (1), section 71V(2) has effect in relation to a relevant transaction as if (instead of requiring the register to contain the details mentioned in paragraphs (a) to (c) of that subsection) it required the registerto contain such details as have been given in relation to the transaction in pursuance of paragraph 9(8) and (9), 10(2), (3) and(4) or 11(6) and (7).

16 (1) Paragraph 9 does not apply to holders of a relevant elective office.

(2) Sub-paragraph (3) applies in relation to transactions in which a holder of a relevant elective office is a participant if—

(a) the relevant body has in place arrangements requiring the holder of the office to report such transactions, and

(b) the Commission think that the arrangements correspond to the requirements of paragraph 9.

(3) The Commission must make such arrangements as they think appropriate corresponding to section 71V (subject to such modifications as may be prescribed by the Secretary of State in regulations) to maintain a register of such information as they receive relating to such transactions.

(4) In sub-paragraph (2)(a) a relevant body is—

(a) if the holder of a relevant elective office is a member of a body mentioned in paragraphs (a) to (f) of paragraph 1(8) of Schedule 7, that body;

(b) if the holder of a relevant elective office is the Mayor of London, the London Assembly;

(c) if the holder of a relevant elective office is an elected mayor within the meaning of Part 2 of the Local Government Act 2000, the local authority of which he is the mayor.

(5) For the purposes of sub-paragraph (1) it is immaterial whether the transaction is entered into by the holder of the office in that capacity or in his capacity as a member of a registered party.

Proceedings under paragraphs 5 and 12

17 (1) This paragraph has effect in relation to proceedings on applications under paragraphs 5(4) and 12(4).

(2) The court is—

(a) in England and Wales, the county court;

(b) in Scotland, the sheriff, and the proceedings are civil proceedings;

(c) in Northern Ireland, the county court.

(3) The standard of proof is that applicable to civil proceedings.

(4) An order may be made whether or not proceedings are brought against any person for an offence under paragraph 8 or 12(1) or (2).

(5) An appeal against an order made by the sheriff may be made to the Court of Session.

(6) Rules of court may make provision—

(a) with respect to applications or appeals from proceedings on such applications;

(b) for the giving of notice of such applications or appeals to persons affected;

(c) for the joinder, or in Scotland sisting, of such persons as parties;

(d) generally with respect to procedure in such applications or appeals.

(7) Sub-paragraph (6) does not affect any existing power to make rules.”

100 In section 156(4) (provision about subordinate legislation), after paragraph (i) insert—

“(ia) paragraph 2(9) or 4(4) of Schedule 7A,”.

101 In Schedule 20 (penalties), after the entry relating to paragraph 14(5) of Schedule 7 insert—

“Paragraph 8(1) of Schedule 7A (individual regulated participant knowingly enters controlled transaction with unauthorised participant)

On summary conviction:statutory maximum or 12 Months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(2) of Schedule 7A (responsible person of members association which enters controlled transaction with unauthorised participant)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(3) of Schedule 7A (individual regulated participant failing to repay money obtained under controlled transaction with unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(4) of Schedule 7A (responsible person failing to repay money obtained by members association under controlled transaction with unauthorised participant)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(5) of Schedule 7A (individual regulated participant knowingly benefits from connected transaction involving unauthorised participant)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(6) of Schedule 7A (responsible person of members association which knowingly benefits from connected transaction involving unauthorised participant)

On summary conviction: statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(7) of Schedule7A (individual regulated participant failing to repayvalue of benefit obtained in consequence of connectedtransaction involving unauthorised participant)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(8) of Schedule7A (responsible person failing to repay value of benefitobtained by members association in consequence ofconnected transaction involving unauthorised participant)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 8(9) of Schedule 7A (facilitating controlled transaction involving unauthorised participant)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 12(1) of Schedule 7A (failure to deliver transaction report to Commission within time limit)

On summary conviction: Level 5

Paragraph 12(2) of Schedule 7A (failure to comply with requirements for recording transactions on transaction reports)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year

Paragraph 13(4) of Schedule 7A (making a false declaration about a transaction report)

On summary conviction:statutory maximum or 12 months
On indictment: fine or 1 year"

102 (1) The Secretary of State must not make an order under section 77 for the purposes of paragraph 16 of Schedule 7A to the 2000 Act (as inserted by paragraph 99) as it applies to the holders of a relevant elective office unless he is informed by the Commission that they are satisfied that they will receive the information mentioned in paragraph 16(3) of that Schedule (as so inserted) in relation to such holders of relevant elective office.

(2) In sub-paragraph (1) references to the holder of a relevant elective office must be construed in accordance with Schedule 7 to the 2000 Act.

PART 7
MISCELLANEOUS

The Family Law Reform Act 1969 (c. 46)

103 In Schedule 2 to the Family Law Reform Act 1969 (provisions unaffected by section 1 to that Act), in paragraph 2, the words “section 7 of the Parliamentary Elections Act 1695” are omitted.

The 1983 Act

104 The 1983 Act is amended in accordance with paragraphs 105 to 133.

105 In section 10 (maintenance of registers: annual canvass), in subsection (4B) for “any incapacity” substitute “blindness or any other disability”.

106 In section 10A (maintenance of registers: registration of electors), in subsection (1B) for “any incapacity” substitute “blindness or any other disability”.

107 (1) Section 29 (payments by and to returning officer), as proposed to be amended by paragraph 6(3) of Schedule 21 to the 2000 Act, is amended as follows.

(2) For subsections (3) to (6) substitute—

"(3) A returning officer shall be entitled to recover his charges in respect of services rendered, or expenses incurred, for or in connection with a parliamentary election if—

(a) the services were necessarily rendered, or the expenses were necessarily incurred, for the efficient and effective conduct of the election; and

(b) the total of his charges does not exceed the amount ("the overall maximum recoverable amount") specified in, or determined in accordance with, regulations made by the Commission, with the consent of the Treasury, for the purposes of this subsection.

(4) Regulations under subsection (3) may specify, or make provision for determining in accordance with the regulations, a maximum recoverable amount for services or expenses of any specified description and, subject to subsection (5) below, the returning officer may not recover more than that amount in respect of any such services or expenses.

(5) In a particular case the Commission may, with the consent of theTreasury, authorise the payment of—

(a) more than the overall maximum recoverable amount, or

(b) more than the specified maximum recoverable amount for any specified services or expenses, if the Commission are satisfied that the conditions in subsection (6) are met.

(6) The conditions referred to in subsection (5) are—

(a) that it was reasonable for the returning officer concerned to render the services or incur the expenses, and

(b) that the charges in question are reasonable."

108 In section 31(2) (polling districts at local government elections in Scotland), for "section 18" substitute "section 18A".

109 In section 53 (power to make regulations as to registration etc.), after subsection (3) insert—

"(4) Provision may also be made by regulations—

(a) for the supply of any such record or special list as is mentioned in subsection (1) above to such persons as are prescribed;

(b) with respect to any conditions subject to which the supply is made;

(c) making it an offence (punishable on summary conviction by a fine not exceeding level 5 on the standard scale) for a person to fail to comply with any such condition."

110 In section 58 (registration appeals: Northern Ireland), in subsection (1), after "except" insert "subsection (1)(aa) and (ab),".

111 In section 73 (payment of expenses through election agent), in subsection (5)(d) for "section 90A(5)(b)" substitute "section 90ZA(5)".

112 (1) In section 74A (expenses incurred otherwise than for election purposes) is amended as follows.

(2) In subsection (1)(b) for "section 90A(1)" substitute "section 90ZA(1)".

(3) In subsection (2) omit "(determined in accordance with section 90B below)".

(4) In subsection (3) for "sections 90A to" substitute "sections 90ZA and".

113 In section 75 (prohibition of expenses not authorised by election agent), for subsection (4) substitute—

"(4) A copy of every return and declaration made under subsection (2) above in relation to a parliamentary election in England, Wales or Northern Ireland must be sent to the relevant officer within 21 days after the day on which the result of the election is declared by the person making the return or declaration.

(4A) The relevant officer is—

(a) in relation to England and Wales, the returning officer;

(b) in relation to Northern Ireland, the Clerk of the Crown for Northern Ireland.

(4B) The returning officer must forward to the relevant registration officer (within the meaning of rule 55 of the parliamentary elections rules) every document sent to him in pursuance of subsection (4) above.

(4C) Rule 57 of those rules applies to any documents sent under this section to—

(a) the relevant registration officer, or

(b) the Clerk of the Crown for Northern Ireland."

114 In section 81(9) (returns as to election expenses)—

(a) for "subsection (3)" substitute "subsection (3A)", and

(b) the words "of each such matter" are omitted.

115 In section 89(1A) (inspection of return containing statement of donations), for "section 81(3)(e) above" substitute "paragraph 10 of Schedule 2A to this Act".

116 In section 90 (election expenses at elections where election agent not required), in subsection (1)(a) for "sections 90A(5)" substitute "sections 90ZA(4)".

117 In section 90C (property, goods and services provided free of charge or at a discount), in subsection (2) for "section 90A(3) above" substitute "Part 2 of Schedule 4A to this Act".

118 (1) Section 90D (modification of election expenses provisions relating to election of London Assembly members) is amended as follows.

(2) In the title, for "sections 90A to" substitute "sections 90ZA and".

(3) In subsection (1) for "Sections 90A to" substitute "Sections 90ZA and".

(4) In subsection (2)(b) for "section 90A(4)" substitute "section 90ZA(3)".

(5) In subsection (3)—

(a) for "section 90A" substitute "section 90ZA";

(b) for "subsection (5)" substitute "subsection (6)";

(c) the substituted subsection there set out is renumbered as subsection (6).

119 In section 118 (interpretation of Part 2), in the definition of "election expenses" for "sections 90A" substitute "sections 90ZA".

120 (1) Section 160 (persons reported personally guilty of corrupt or illegal practices) is amended as follows.

(2) In subsection (4A) after "section 60" insert "or 62A".

(3) In subsection (5A) after "Subject" insert "to subsection (5B) below and".

(4) After subsection (5A) insert—

"(5B) Subsection (5A) above, in its application to a candidate or other person reported personally guilty of a corrupt practice under section 62A above, has effect as if the references in it to public office did not include references to the office of councillor for a local government area in Scotland."

121 In section 168 (prosecutions for corrupt practice), in subsection (1)(a)(i) after "section 60" insert "or 62A".

122 In section 173 (incapacities on conviction of corrupt or illegal practice), in subsection (2) after "section 60" insert "or 62A".

123 (1) Section 173A (incapacity to hold public or judicial office in Scotland) is amended as follows.

(2) In subsection (1) after “Subject” insert “to subsection (3) and”.

(3) After subsection (2) insert—

“(3) Subsection (1) above, in its application to a person convicted of a corrupt practice under section 62A above, has effect as if the references in it to public office did not include references to the office of councillor for a local government area in Scotland.”

124 In section 187 (application of Act to certain local elections) in subsection (1)(a) after “60” insert “, 62A”.

125 In section 191 (municipal elections in the City), in subsection (1)(a) for “and 61” substitute “, 61 and 62A”.

126 In section 193 (personation and other voting offences), in paragraph (a) for “and 61” substitute “, 61 and 62A”.

127 In section 197 (candidate’s expenses: ward, and liverymen in common hall, elections), in subsection (3) for the words from “An order under this subsection” to the end substitute—

“The power to make an order under this subsection is exercisable by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.”

128 (1) Section 202(1) (general interpretation) is amended as follows.

(2) Omit the definition of “absent voters list”.

(3) After the definition of “parliamentary election petition” insert—

““the postal voters list” means—

(a) in relation to England and Wales and Scotland, the list of persons kept in pursuance of paragraph 5(2) of Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (persons whose applications to vote by post have been granted);

(b) in relation to Northern Ireland, the list of persons kept in pursuance of section 7(4)(a) of the Representation of the People Act 1985 (persons whose applications to vote by post have been granted); “the proxy postal voters list” means—

(a) in relation to England and Wales and Scotland, the list of persons kept in pursuance of paragraph 7(8) of Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (persons whose applications to vote by post as proxy have been granted);

(b) in relation to Northern Ireland, the list of persons kept in pursuance of section 9(9) of the Representation of the People Act 1985 (persons whose applications to vote by post as proxy have been granted).”

129 (1) Rule 6A of Schedule 1 (nomination papers: registered political parties) is amended as follows.

(2) In paragraph (1) for “voters” substitute “electors”.

(3) In paragraph (2) after “paragraph (1)” insert “or (1B)”.

130 In rule 12(3A) of that Schedule (decisions as to validity of nomination papers) after “rule 6A(1)” insert “or (1B)”.

131 In rule 14(5) of that Schedule (statement of persons nominated: documents to be sent to Electoral Commission) after “rule 6A” insert “(1) or (1B)”.

132 For rule 36 of that Schedule (challenge of voter) substitute—

"36 A person shall not be prevented from voting by reason only that—

(a) a candidate or his election or polling agent declares that he has reasonable cause to believe that the person has committed an offence of personation, or

(b) the person is arrested on the grounds that he is suspected of committing or of being about to commit such an offence."

133 The amendments made by paragraphs 111, 112, 114, 117 and 119 do not apply to a local government election in Scotland.

The Representation of the People Act 1985 (c. 50)

134 In section 6 of the Representation of the People Act 1985 (absent vote at parliamentary elections for an indefinite period), in subsection (2)(b) for "physical incapacity" substitute "disability".

135 (1) Schedule 1 to that Act (special polling stations in Northern Ireland) is amended as follows.

(2) In paragraph 1(6) (right to vote at special polling stations) for "section 18" substitute "section 18A".

(3) Paragraph 7(2) (application of rules regarding ballot papers after election) is omitted.

The Caldey Island Act 1990 (c. 44)

136 In section 4(1) of the Caldey Island Act 1990 (savings) for "sections 18" substitute "sections 18A".

The Representation of the People Act 2000 (c. 2)

137 (1) Schedule 4 to the Representation of the People Act 2000 (absent voting in Great Britain) is amended as follows.

(2) In paragraph 1(1) omit the definition of "absent voters list".

(3) In paragraph 2—

(a) in sub-paragraph (7), for the words from "if he is shown" to "as so entitled" substitute "if sub-paragraph (8) or (9) (as the case may be) applies to him in relation to the election";

(b) after sub-paragraph (7) insert—

"(8) This sub-paragraph applies to a person who is shown in the postal voters list mentioned in paragraph 5(2) below as entitled to vote by post at an election.

(9) This sub-paragraph applies to a person who is shown in the list of proxies mentioned in paragraph 5(3) below as entitled to vote by proxy at an election."

(4) In paragraph 3(3)(b) after "by reason of" insert "blindness or other disability or, in the case of local government elections in Scotland, by reason of".

(5) In paragraph 5(1) for "a special list ("the absent voters list") consisting of the two" substitute "the two special".

(6) In paragraph 5(2) after "list" insert "("the postal voters list")".

(7) In paragraph 7(8) after "list" insert "("the proxy postal voters list")".

The 2000 Act

138 The 2000 Act is amended as follows.

139 In section 3 (appointment of Electoral Commissioners and Commission chairman), in subsection (4)(d) after sub-paragraph (iii) insert ", or (iv) been named as a participant in the register of recordable transactions reported under Part 4A."

140 In section 24 (office-holders to be registered), in subsection (4), for paragraph

(a) substitute—

"(a) with the provisions of Parts 3, 4 and 4A (accounting requirements and control of donations, loans and certain other transactions)".

141 In section 27 (financial structure of registered parties: accounting units), in subsection (2)(a) for "Parts III and IV" substitute "Parts 3, 4 and 4A".

142 In section 29 (registration of party emblems), in subsection (2) after paragraph (c) insert—

"(ca) would be likely, were it to appear on a ballot paper issued at an election—

(i) to result in an elector being misled as to the effect of his vote, or

(ii) to contradict, or hinder an elector's understanding of, any directions for his guidance in voting given on the ballot paper or elsewhere,".

143 (1) Section 34 (registration of minor parties) is amended as follows.

(2) In subsection (3) for "three months" substitute "six months".

(3) In subsection (8), in paragraph (c)(i), after "sections 28(4) to (8)" insert ", 28A".

144 (1) Section 50 (definition of donations for the purposes of Part 4) is amended as follows.

(2) In subsection (2), omit paragraph (e).

(3) In subsection (4)—

(a) omit paragraph (a);

(b) in the words following paragraph (b), omit "the loan or".

145 In section 52 (payments, services etc. not to be regarded as donations), in subsection (2)(b) omit "except for the purposes of section 68,".

146 (1) Section 53(4) (value of donations) is amended as follows.

(2) For "section 50(2)(e) or (f)" substitute "section 50(2)(f)".

(3) In paragraph (a)—

(a) omit "the loan or";

(b) omit sub-paragraph (i) and the "or" following it.

147 In section 55(2) (payments from public funds to be treated as donations received from a permissible donor), for "section 52(1)(a) and (b)" substitute "section 52(1)(b)".

148 (1) Section 62 (quarterly donation reports) is amended as follows.

(2) After subsection (3) insert—

"(3A) "Relevant benefit", in relation to any person and any year, means—

(a) a relevant donation accepted by the party from that person as a donor, or

(b) a relevant transaction within the meaning of section 71M(3) entered into by the party and that person as a participant, and a relevant benefit accrues when it is accepted (if it is a donation) or entered into (if it is a transaction)."

(3) In subsection (4)—

(a) for "donation or donations" (in both places) substitute "benefit or benefits";

(b) after "this subsection" insert "or section 71M(4)";

(c) in paragraph (b) for "donations" substitute "benefits".

(4) In subsection (5), in paragraph (b)—

(a) for "as part of" substitute "together with any other relevant donation or donations included in";

(b) for "donation" (in the second place) substitute "benefit";

(c) for "is accepted" substitute "accrues".

(5) In subsection (6)—

(a) for "donation or donations" (in the first four places) substitute "benefit or benefits";

(b) after "subsection (4)" (in the first place) insert "or section 71M(4)";

(c) in paragraph (a), for "subsection (4)" substitute "that provision";

(d) in paragraph (b), after "this subsection" insert "or section 71M(6)";

(e) for the words following paragraph (b) substitute "any relevant donation falling within subsection (6A)".

(6) After subsection (6) insert—

"(6A) A relevant donation falls within this subsection—

(a) if it is a donation of more than £1,000, or

(b) if, when it is added to any other relevant benefit or benefits accruing since the time mentioned in subsection (6)(a) or (b), the aggregate amount of the benefits is more than £1,000."

(7) In subsection (7)(a), for "donation" (in the first place) substitute "benefit".

(8) In subsection (7)(b)—

(a) for "as part of" substitute "together with any other relevant donation or donations included in";

(b) for "that subsection" substitute "subsection (6A)";

(c) for "donation" (in the second place) substitute "benefit";

(d) for "is accepted" substitute "accrues".

149 In section 69 (register of recordable donations)—

(a) omit subsection (3), and

(b) in each of subsections (4) and (5), omit "or (3)".

150 (1) Section 146 (supervisory powers of Commission) is amended as follows.

(2) In subsection (7) after paragraph (a) (before "or") insert—

"(aa) a regulated participant (or former regulated participant),".

(3) In subsection (8), after paragraph (a) (before "or") insert—

"(aa) such information or explanations relating to the income and expenditure of regulated participants in connection with the political activities as the Commission reasonably require for the purpose of monitoring compliance on the part of regulated participants with the requirements imposed on them by or by virtue of Schedule 7A,".

(4) In subsection (9), after the definition of "regulated donee" insert—

"regulated participant" and "political activities" in relation to a regulated participant must be construed in accordance with Schedule 7A;".

151 (1) Section 148(6) (general offences) is amended as follows.

(2) In paragraph (a), after "donee" insert "regulated participant".

(3) In paragraph (b), after sub-paragraph (ii) insert—

"(iia) a regulated participant which is a members association,".

(4) In paragraph (c), after sub-paragraph (iii) insert—

"(iiia) in relation to a regulated participant which is a members association, the person responsible for the purposes of Schedule 7A,".

(5) After paragraph (d) insert—

"(da) "regulated participant" has the same meaning as in Schedule 7A;".

152 In Schedule 1 (the Electoral Commission), in paragraph 3(3) (term of office etc of Electoral Commissioners) after paragraph (c) insert—

"(ca) he is named as a participant in the register of recordable transactions reported under Part 4A;".

153 In Schedule 6, after paragraph 5 insert—

"Application of reporting requirement

5A If the requirement to record the donation arises only because the value of the donation has, for the purposes of section 62(4) or (6), been aggregated with the value of any relevant transaction or transactions (within the meaning of section 71M), a quarterly report must contain a statement to that effect."

154 (1) Schedule 7 (donations to individuals and members associations by donors) is amended as follows.

(2) In paragraph 2—

(a) in sub-paragraph (1), omit paragraph (d);

(b) in sub-paragraph (3), omit paragraph (a);

(c) in sub-paragraph (3) omit "the loan or".

(3) In paragraph 4(3)(b), omit the words "except for the purposes of paragraph 14,".

(4) In paragraph 5(4)—

(a) for "2(1)(d) or (e)" substitute "2(1)(e)";

(b) in paragraph (a) omit "the loan or";

(c) in paragraph (a) omit sub-paragraph (i) and "or" following it.

(5) In paragraph 10, for sub-paragraphs (1) and (2) substitute—

"(1) A regulated donee must prepare a report under this paragraph in respect of each controlled donation accepted by the donee which is a recordable donation.

(1A) For the purposes of this paragraph a controlled donation is a recordable donation—

(a) if it is a donation of more than £5,000 (where the donee is a members association) or £1,000 (in any other case);

(b) if, when it is added to any other controlled benefit or benefits accruing to the donee—

(i) from the same person and in the same calendar year, and

(ii) in respect of which no report has been previously made under this paragraph, the aggregate amount of the benefits is more than £5,000 (where the donee is a members association) or £1,000 (in any other case).

(1B) A controlled benefit is—

(a) a controlled donation;

(b) a controlled transaction within the meaning of paragraph 2 of Schedule 7A.

(1C) A controlled benefit which is a controlled donation accrues—

(a) from the permissible donor who made it, and

(b) when it is accepted by the donee.

(1D) A controlled benefit which is a controlled transaction accrues—

(a) from any authorised participant (within the meaning of paragraph 4(3) of Schedule 7A) who is a party to it, and

(b) when it is entered into; and paragraph 9(6) of Schedule 7A applies for the purposes of paragraph (b) above.

(2) A regulated donee must deliver the report prepared by virtue of sub-paragraph (1) to the Commission within the period of 30 days beginning with—

(a) if sub-paragraph (1A)(a) applies, the date of acceptance of the donation;

(b) if sub-paragraph (1A)(b) applies, the date on which the benefit which causes the aggregate amount to exceed £5,000 or (as the case may be) £1,000 accrues."

(6) In that paragraph, in each of sub-paragraphs (6) and (7)—

(a) after "In the case of" insert "a controlled benefit which is";

(b) for "sub-paragraph (2)(b)" substitute "sub-paragraph (1A)(b)";

(c) for "by the same permissible donor" substitute "from the same person".

(7) In paragraph 12(1), for "that provision" substitute "paragraph 10(2) or 11(1)".

(8) Omit Part 4 (reporting of donations by donors).

(9) In paragraph 15 (register of recordable donations), omit sub-paragraph (3)(b).

155 In Schedule 20 (penalties), omit the entries relating to section 68(5) and paragraph 14(5) of Schedule 7.

European Parliament (Representation) Act 2003 (c. 7)

156 In section 12 of the European Parliament (Representation) Act 2003—

(a) in subsection (3) after paragraph (b) insert—

"(ba) the regulation of loans or credit facilities which benefit, or any form of security (whether real or personal) which benefits, registered parties in Gibraltar or their members or officers;";

(b) in subsection (4), before the definition of "donation" insert—

""credit facilities" must be construed in accordance with section 71F(11) of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000;".

SCHEDULE 2 Section 74(2)
REPEALS

Short title and chapter	**Extent of repeal**
Parliamentary Elections Act 1695 (c. 25)	Section 7.
Election Act 1707 (cap. 8)	The whole Act.
Parliamentary Elections (Ireland) Act 1823 (c. 55)	Section 74.
Electoral Law Act (Northern Ireland) 1962 (c. 14)	In Schedule 5, in rule 2 the words "MaundyThursday".In Schedule 5, in the Appendix to the rules— (a) in the Form of Front of Ballot Paper, thewords "Counterfoil No. The counterfoilis to have a number to correspond with that on the back of the ballot paper"

	(b) in the Directions as to printing the ballot paper, paragraph 3(e) (c) in the Declaration of identity Front of form the words "Ballot Paper No........" (d) in the Directions for the guidance ofvoters in voting, paragraph 1 and in paragraph 6 the words "holding the paper so that the presiding officer can see the official mark on the back of it".
Family Law Reform Act 1969 (c. 46)	In Schedule 2, in paragraph 2, the words "section 7 of the Parliamentary Elections Act1695".
British Nationality Act 1981 (c. 61)	In Schedule 7, the entry relating to the Act of Settlement.
Representation of the People Act 1983 (c. 2)	Section 9(6). In section 10A(5), the words "the name of" and"duly". Section 18. Section 29(4), (4A) and (4B). In section 40(1), the words "Maundy Thursday,". In section 74A(2), the words "(determined in accordance with section 90B below)". In section 75(1), the words from "but paragraph (c) or (d) of" to the end. In section 81, subsection (3) and in subsection (9), the words "of each such matter". Sections 90A and 90B. In section 119(2), the words "Maundy Thursday,". In section 202(1), the definition of "absent voters list". In Schedule 1, in rule 2(1)(b) the words "Maundy Thursday,".
Representation of the People Act 1983 (c. 2)—cont.	In Schedule 1, in rule 6(3)(a) the words "(of not more than 6 words in length)". In Schedule 1, rule 19(2)(d). In Schedule 1, rule 29(3)(b). In Schedule 1, rule 37(1)(a). In Schedule 1, rule 40(1B)(a). In Schedule 1, in rule 43(1)(e), the words "the counterfoils of the used ballot papers and".

	In Schedule 1, in rule 45(1B)(b), the words “and authenticated”.
	In Schedule 1, in rule 55— (a) in paragraph (1)(d), the words “counterfoils and”; (b) paragraphs (2) to (4).
	In Schedule 1, in the Appendix to the rules— (a) in the Form of Front of Ballot Paper, the words “Counterfoil No. The counterfoil is to have a number to correspond with that on the back of the ballot paper”; (b) in the Form of Back of Ballot Paper, the words “Note.— The number on the ballot paper is to correspond with that on the counterfoil”.
Police and Criminal Evidence Act 1984 (c. 60)	In Schedule 2, the entry relating to the Representation of the People Act 1983.
Representation of the People Act 1985 (c. 50)	In section 19(6)(b) the words “Maundy Thursday,”.
	Section 25(1).
	In Schedule 1, paragraph 7(2).
	In Schedule 4, paragraph 86.
Elected Authorities (Northern Ireland) Act 1989 (c. 3)	In section 10(1), in the definition of “legal incapacity”, the words “or of any subsisting provision of the common law”.
Representation of the People Act 2000 (c. 2)	In Schedule 4, in paragraph 1(1), the definition of “absent voters list”.
	In Schedule 4, paragraph 2(6)(a) and “or” following it.
Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (c. 41)	Section 50(2)(e).
	In section 50(4), paragraph (a) and the words “the loan or”.
	Section 52(1)(a).
	In section 52(2)(b), the words “except for the purposes of section 68,”.
	In section 53(4)(a), the words “the loan or”, subparagraph (i) and the “or” following that subparagraph.
	Section 68.

	In section 69, subsection (3) and in subsections (4) and (5), the words "or (3)". In section 77(9)(a) the words "Maundy Thursday,".
Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (c. 41)—cont. In Schedule 7—	(a) in paragraph 2, sub-paragraph (1)(d), sub-paragraph (3)(a) and, in subparagraph (3), the words "the loan or"; (b) in paragraph 4(3)(b) the words "except for the purposes of paragraph 14,"; (c) in paragraph 5(4)(a), the words "the loan or", sub-paragraph (i) and the "or" following it; (d) Part 4; (e) paragraph 15(3)(b). In Schedule 18, paragraph 7(4). In Schedule 20, the entries relating to section68(5) and paragraph 14(5) of Schedule 7
Electoral Fraud (Northern Ireland) Act 2002 (c. 13)	Section 2(2). Section 3(4)(a) and (b).
Civil Partnership Act 2004 (c. 33)	In Schedule 27, paragraph 85(2) to (5).
This Act	Section 68.

Note: The repeals relating to sections 74A(2), 75(1), 81, 90A, 90B and 119(2) of the 1983 Act do not have effect in relation to those provisions as they apply to a local government election in Scotland.

V.1.3. Otras normas sobre material electoral

Communications Act 2003
2003 Chapter 21

An Act to confer functions on the Office of Communications; to make provision about the regulation of the provision of electronic communications networks and services and of the use of the electro-magnetic spectrum; to make provision about the regulation of broadcasting and of the provision of television and radio services; to make provision about mergers involving newspaper and other media enterprises and, in that connection, to amend the Enterprise Act 2002; and for connected purposes.

[17th July 2003
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2003/ukpga_20030021_en_1

Election Publications Act 2001
2001 CHAPTER 5

An Act to make provision for postponing the operation of certain enactments relating to election publications; and for connected purposes. [10th April 2001)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/ukpga_20010005_en_1

Representation of the People Act 2000
2000 CHAPTER 2

An Act to make new provision with respect to the registration of voters for the purposes of parliamentary and local government elections; to make other provision in relation to voting at such elections; and for connected purposes. [9th March 2000]

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000002_en_1#Legislation-Preamble

Political Parties, Elections and Referendums Act 2000
2000 CHAPTER 41

An Act to establish an Electoral Commission; to make provision about the registration and finances of political parties; to make provision about donations and expenditure for political purposes; to make provision about election and referendum campaigns and the conduct of referendums; to make provision about election petitions and other legal proceedings in connection with elections; to reduce the qualifying periods set out in sections 1 and 3 of the Representation of the People Act 1985; to make pre-consolidation amendments relating to European Parliamentary Elections; and for connected purposes.

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000041_en_1

Representation of the People Act 1983 (c. 2)

An Act to consolidate the Representation of the People Acts of 1949, 1969, 1977, 1978 and 1980, the Electoral Registers Acts of 1949 and 1953, the Elections (Welsh Forms) Act 1964, Part III of the Local Government Act 1972, sections 6 to 10 of the Local Government

(Scotland) Act 1973, the Representation of the People (Armed Forces) Act 1976, the Returning Officers (Scotland) Act 1977, section 3 of the Representation of the People Act 1981, section 62 of and Schedule 2 to the Mental Health (Amendment) Act 1982, and connected provisions; and to repeal as obsolete the Representation of the People Act 1979 and other enactments related to the Representation of thePeople Acts.

[8th February 1983]

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1983a

Parliament Act 1949
1949 CHAPTER 103 12_13_and_14_Geo_6

An Act to amend the Parliament Act 1911. [16th December 1949]

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1949/cukpga_19490103_en_1

Parliament Act 1911
1911 c.13 1_and_2_Geo_5

An Act to make provision with respect to the powers of the House of Lords in relation to those of the House of Commons, and to limit the duration of Parliament.

[18th August 1911]

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?ActiveTextDocId=1069329

V.2. Documentos

The Government's response to the Electoral Commission's recommendations on the May 2007 electoral pilot schemes

Introduction

The Government is grateful for the hard work of the Electoral Commission throughout the whole of the pilots process including their involvement in the Pilots Project Board, pre-selection assessment of proposed pilots, and for their evaluations of the 12 pilot schemes which took place at the May 2007 local elections.

Our responses to the Commission's key recommendations should be viewed in the context of: –The findings emerging from the Gould Report (which was published on 22 October 2007)

Ron Gould's independent review of the Scottish Elections contains a number of important findings which will need to be built on in improving the conduct of future elections.

The evaluations of the May 2007 pilots and the findings in the Gould report will inform the Government's approach to improving the electoral system and in developing its strategy for Electoral Modernisation. These improvements will focus on: –

§ Ensuring that the conduct of elections is secure, transparent and accountable; § Improving participation - ensuring the voting process is universally accessible for all eligible people; § Making the voting process more convenient and responsive to the needs of voters; § Improving the reputation and credibility of systems being used (e.g. remote e-voting and e-counting); § Increasing integrity in the electoral process.

'The Governance of Britain' Green Paper 1

The Green Paper supports investigating the modernisation of voting methods, as well as explicitly supporting the continued investigation into the benefits of electronic voting including remote electronic voting. The Government believes this will necessitate further piloting in future.

1 The Green Paper seeks to enhance the democratic engagement between citizens and the state.

The Government's responses to the key recommendations from the Electoral Commission's evaluations

Set out below are the Government's specific responses to the key recommendations from the Electoral Commission evaluations of the 2007 electoral pilot schemes.

E-voting

Recommendation

While from an operational point of view the 2007 e-voting pilots generally worked, the level of risk placed on the availability and integrity of the electoral process was unacceptable. There are clearly wider issues associated with the underlying security and transparency of these e-voting solutions and their impact on the electoral process, together with the cost effectiveness of the technology, which need to be addressed.

Response

All the pilots supported successful elections. The Government is not aware of any instances of alleged fraud during the elections and does not believe that the pilots increased the risk of

electoral fraud. We do not agree that the level of risk placed on accessibility and integrity was unacceptable. We do, however, acknowledge that there were some operational problems around access to e-voting in some situations, but would stress that all pilots had comprehensive contingency plans in place to ensure that electors were not disenfranchised and retained their option of a paper ballot.

The pilots are a mechanism for Government to identify and address the wider issues associated with changes to traditional electoral practice and the Government will seek to continue piloting as a sensible and proportionate method of gathering important evidence about how best to improve the electoral system. They also help to produce evidence for how greater value for money could be achieved in future and the scale of implementation required to reduce costs.

Recommendation

The Commission has stated previously that an electoral modernisation strategy is required to ensure that the benefits of piloting are maximised. The absence of this strategy and other programme governance is now critical and has significantly reduced the value of these pilots.

Response

The Government does not agree that the value of these pilots has been reduced by the absence of a published strategy. The Pilots prospectus which was published in October 2006, in conjunction with the Commission, set out the strategic fit of the pilots programme as well as the drivers and potential benefits of e-voting.

Overall the Government believes that these pilots, which included the first substantial instances of e-voting in a pilot since May 2003 (aside from one e-voting by-election in Swindon in 2004), have produced a significant amount of useful information, particularly in the development phase. This was their stated purpose, and will be invaluable in informing the future direction of the modernisation programme.

As the Commission is aware we have been developing and refining a strategy and will continue to engage with the Commission on this. The learning process of piloting has been a vital element in developing and refining a draft strategy. Key elements such as strategic fit of pilots and key benefits were published in the prospectus issued to local authorities in 2006.

Future governance structures will be considered in light of a developing strategy and we will be happy to continue engaging the Commission in discussion about this.

Recommendation

The Commission recommends that no further e-voting pilots are undertaken until the following three elements are in place:

There must be a comprehensive electoral modernisation framework covering the role of e-voting, including a clear vision, strategy and effective planning. The strategy must outline how the important issues of transparency and public trust will be addressed and should outline the process by which a more cost-effective deployment of the technology can be achieved.

Response

The Government believes that the development of the strategy for electoral modernisation is in part dependent on a process of practical information gathering of which piloting has been a vital part.

Piloting is an incremental and cautious process of establishing what works and what does not, and we do not agree with the Commission that no further e-voting pilots should be undertaken

until these elements are finalised. As required by statute, we will view any application to pilot e-voting on a case-by-case basis with regards to the overall objectives of the modernisation programme. We believe that further pilots will be necessary to test capacity and scalability issues for e-voting solutions if this is to be pursued.

The Government will continue to consult with stakeholders over the implementation of a published strategy and agrees that issues around transparency, public trust and cost effectiveness should be laid out clearly.

We also note that the Commission recommends, in their Key Issues and Conclusions document, that individual registration should be a precondition to e-voting pilots. The Government understands the Electoral Commission's continued position on introducing a system of individual registration and appreciates the potential benefits such a system might bring. However, this has been debated by Parliament and has been rejected. In respect of the recommendation in relation to e-voting, we do not think that the identifiers commonly proposed for individual registration, namely a signature and date of birth, are the appropriate ones and it is not something that is needed to underpin e-voting.

In May 2007 we acknowledged concerns about fraud and, based on a consideration of what had been done for postal voting, required a system of pre-registration for e-voting. This made use of two pass codes, one generated by the elector and one by the administrator. We believe this added significant security beyond that previously used for e-voting in the UK, and in many other countries.

Despite the requirement to pre-register a significant number of people signed up for e-voting.

Recommendation

A central process must be implemented to ensure that tested and approved e-voting solutions can be selected by local authorities. This could be achieved either through an accreditation and certification process or through a more robust procurement framework than is currently in place. This process must be used to enforce the required levels of security and transparency.

Response

In 2007 the Government introduced a framework of approved suppliers for e-voting and e-counting pilots. The process for selecting framework authorities was rigorous and followed strict EU procurement procedures. The Government believes that the current framework provides local authorities with a sound basis from which to make choices about working with suppliers, in the context of pilots and development of processes. Nevertheless, the framework, and the process for operating it needs to be upgraded drawing on the experience of this year's pilots and other improvements in the management of Government IT projects.

If a decision is made in future to allow e-voting in elections other than in pilots then the Government agrees that accreditation or certification of systems may be desirable. This will be one approach among a range of options that will need to be considered. However, we believe that we have not yet reached the stage where decisions around procurement can be taken and further testing, whether in statutory election pilots or developed outside such elections, is required before a move to accreditation of e-voting systems, or other options can be considered.

Recommendation

Sufficient time must be allocated for planning e-voting pilots. This should be approximately six months between the time the supplier contract is awarded and the elections.

Response

The Government agrees that an extended implementation period would be desirable, and would prefer to ensure greater system security testing, quality assurance and accessibility testing take place in future pilot schemes.

Recommendation

We cannot support any further e-voting pilots in the absence of a framework incorporating these recommendations.

The electoral modernisation framework should be accompanied by an e-voting blueprint, which should describe the envisaged future situation, covering legislative, process and technology aspects. The blueprint should define the current best practice that has been identified through piloting and other electoral modernisation projects. It is natural that many areas of the blueprint will be undefined and/or unclear at this stage.

This will highlight those areas that need further refinement, either by piloting or other measures. The blueprint will be an evolving document that will be shaped by the electoral modernisation process and the technology marketplace. As the process and technology mature, the blueprint should evolve into standard legislation and best practice guidance that can be provided to local authorities and suppliers.

Response

The Government would be happy to work with the Commission and local authorities to develop any programme documentation to support implementation of a modernisation strategy.

Recommendation

It is recommended that once the vision, strategy and initial blueprint have been developed, they should be published and open to public consultation. This will be an important step in ensuring that stakeholders are involved in the debate about the role of e-voting in the overall electoral modernisation process.

Response

The Government is happy to work with the Commission and other stakeholders on public consultation.

Electronic Counting

Recommendation

The Commission believes that the piloting process has largely achieved its objective for e-counting. The circumstances and practices that lead to successful e-counting have already been learned, although many of these were not applied for this round of pilots. Any further e-counting projects- both pilots and others-need to take full account of these.

Response

In its evaluation of the May 2006 local election pilots, the Commission noted that the provision of e-counting systems and solutions remains specialised, and that there is currently limited capacity in the supplier base to support widespread rollout. The Commission further noted that there is potential for other approaches to be adopted such as the use of standard commercial technology.

The Government is therefore surprised by the Commission's belief following the May 2007 pilots that the piloting process for e-counting has largely achieved its objective. The

Government feels this is rather premature and that there are likely to be lessons still to be learned from further testing of the processes. The Government is concerned to avoid raising expectations as to change and is keen to ensure that the lessons learned about scale and further piloting in respect of e-counting are taken account of before any rollout.

In the Government `s view further testing needs to focus on particular aspects. For example, we need more information about the use of proprietary machines, off - the –shelf solutions, auto-adjudication of ballots and the use of e-counting at different types of elections. The Government accepts that all e-counting pilots need to take into account lessons previously learned. The experience of the Scottish elections in May 2007 suggests that further piloting is required before e-counting can be considered to be a reliable and transparent solution on a national scale.

Recommendation

Substantial testing must be undertaken, either through an accreditation and certification process or through a detailed and thorough procurement process. This procurement process will need to be substantially more detailed than that undertaken for the framework agreement put in place by the MoJ for these pilots.

Response

The Government agrees that more testing must be undertaken to further refine e-counting systems, and believes that pilots may be the most appropriate way of achieving this. It is too early in the e-counting process to say whether setting up an accreditation and certification framework is the best option for the future.

In 2006 we instigated a rigorous procurement process, which was commented on by suppliers as one of the most demanding procurements they had engaged in. We believe that it has reduced the burden on local authorities where previously they were required to run the entire process independently.

Recommendation

Sufficient time must be allowed for the development of e-counting projects. The amount of time needed will depend on a number of factors, including the experience of the local authority and the suppliers, whether there is an accreditation scheme in place and the nature of any procurement. But we recommend a minimum lead-in time of six months.

Response

The Government accepts this recommendation and will continue to work with local authorities and suppliers to ensure that there is continued development of the e-counting process.

Recommendation

Measures must be in place to ensure that current best practice is adopted.

Response

The Government is looking at current best practice around e-counting on the basis of experience gained through piloting. This will be made available for local authorities that are considering piloting e-counting.

Recommendation

The Commission questions the value of undertaking further small scale pilots of the kind that were run at the May 2007 elections and would not recommend their further implementation.

Response

The Government disagrees with this recommendation. We pilot on a small scale to continue learning about systems and processes, which will inform policy and potential accreditation, and to increase the technical knowledge base amongst local authorities.

Recommendation

Issues relating to the transparency of the e-counting process continue to be important. While some of the concerns raised can be addressed through the deployment of best practice, there is nevertheless scope for innovations to increase transparency.

Response

The Government agrees that transparency of the e-counting process is important. The purpose of pilots is to learn these lessons, and future pilots will continue to explore innovations around increasing transparency in general, and around processes at the count in particular. This is why we believe further piloting in a live environment is essential.

Advance voting

Recommendation

As part of its wider electoral modernisation strategy, the Commission recommends that the Government should come to a decision on whether advance voting should be mandatory, optional or discontinued. In developing that policy, we further recommend that the Government should consult widely on the implications of each of these options.

Response

The Government notes the Commission's recommendations.

We agree that we have gained significant information through the planning of advance voting pilots over recent years to make a decision on advance voting in a stand alone context. However, we may need to consider it further in light of work around any consideration of weekend voting, which is mooted in `The Governance of Britain `Green Paper.

Recommendations

The choice of times and locations for advance voting facilities are key factors in determining convenience, turnout and value for money. Any advance voting arrangements should be designed to maximise value in all these areas. In particular, repeated advance voting opportunities in the same areas are likely to increase familiarity and take-up.

Any advance voting arrangements should include a disability access assessment of proposed advance voting locations.

Any advance voting arrangements should include comprehensive and properly resourced communication plans for ensuring wide public awareness of the availability of advance voting. Advance voting stations should have clear and appropriate signage in order to attract passers-by to vote.

A more accurate assessment of the number of staff required for advance voting stations should be possible in future, based on an estimation of expected demand informed by the Commission's individual evaluation reports and taking into account local circumstances.

If the locations used for advance voting stations are not used exclusively for electoral purposes, they should be set out in such a way as to ensure the secrecy of the vote.

A marked register of advance voters should not be supplied to political parties, candidates and agents until after the close of poll, although candidates and election agents should be given opportunities to observe the advance voting process, as is the case on polling day.

Response

The Government notes these recommendations, and will consider these issues in the context of its consultation on weekend voting.

Signing for ballot papers

Recommendation

The Commission recommends that there should be no further piloting of signing for ballot papers at polling stations. We continue to question the overall deterrent value of requiring electors to sign for ballot papers unless the provisions are linked to a system of individual registration, which would enable meaningful checking to take place if this proved necessary.

Response

The Government - with the express support of Parliament -is committed to the full implementation of requiring signatures in polling stations at all elections, as and when Parliamentary time allows. Until such time as the measure can be fully rolled out, we may continue to seek to use opportunities such as election pilots as a means by which practical implementation issues can be identified and addressed before full implementation.

The Government is pleased to see that the public opinion research undertaken for the Commission indicates that requiring electors to sign ballot papers in polling stations does have a positive impact on levels of public confidence.

Recommendation

In 2006 the Commission identified a number of good practice learning points which it believes still stand and which should be highlighted through effective guidance and training prior to full implementation. These include:

- ensuring that appropriate space is provided for electors to sign on corresponding number lists
- requiring that electors sign with a pen, to ensure that a signature cannot be altered
- ensuring that electors signatures are covered up once they have been provided, to address any concerns about secrecy and identity theft

Response

The Government endorses these good practice points and will take them into account prior to full implementation of these regulations.

Conclusion

The Government welcomes and is appreciative of the input which the Electoral Commission have provided through their evaluation and reports on the electoral pilot schemes in 2007. The evaluations have supplied the Government with an invaluable amount of knowledge and expertise which can be used to:- § Further develop our electoral modernisation strategy; § Inform any future pilots and research which needs to be undertaken; § Achieve a future voting process that promotes a convenient range of choices to eligible people and maximum effectiveness and efficiency, without compromising accessibility and security.

V.3. Bibliografía

1. AGUILAR DE PRAT, Cesáreo R. y MARTÍNEZ, Rafael: *Sistemas de gobierno, partidos y territorio.* Madrid: Tecnos, 2000. (Semilla y surco. Serie de ciencia política).
2. AGUILAR FERNÁNDEZ, Susana y CHULIÁ RODRIGO, Elisa: *Identidad y opción : dos formas de entender la política.* Madrid: Alianza Editorial, [2007].
3. ALDERMAN, Keith: "The conservative leadership election of 1997", en *Parliamentary Affairs,* v. 51, nº 1, jan., 1998; pp.1-16.
4. ÁLVAREZ, R. Michael; BOEHMKE, Frederick J., y NAGLER, Jonathan: "Strategic voting in British elections", en *Electoral Studies,* v. 25, nº 1, mar., 2006; pp.1-19.
5. ANDERSEN, Robert: "Do newspapers enlighten preferences? : personal ideology, party choice and the electoral cycle : the United Kingdom, 1992-1997 ", en *Canadian Journal of Political Science = Revue Canadienne de Science Politique,* v. 36, nº 3, jul.-aug., 2003; pp.601-619.
6. ASPINWALL, Mark: *Rethinking Britain and Europe : plurality elections, party management and British policy on European integration.* Manchester [etc.]: Manchester University, 2004.
7. BLACKBURN, Robert: *The electoral system in Britain.* New York: St. Martin's Press, 1995.
8. BLAU, Adrian: "Fairness and electoral reform", en *The British Journal of Politics and International Relations ,* v. 65, nº 2, may, 2005; pp.165-179.
9. ——-: "A quadruple whammy for first-past-the-post", en Electoral Studies, v. 23, nº 3, sept., 2004; pp.431-453.
10. BOGDANOR, Vernon: "The Constitution and the party system in the twentieth century", en Parliamentary Affairs, v. 57, nº 4, oct., 2004; pp.717-733.
11. BUDGE, Ian, (et al.): The new British politics. Harlow: Longman, 2001.
12. BUTLER, David: "Elections : legislation and litigation", en David Butler; Vernon Bogdanor, y Robert Summers (eds.): The Law, Politics, and the Constitution : essays in honour of Geoffrey Marshall. Oxford: Oxford University Press, 1999; pp.172-184.
13. ——: "Electoral reform", en Parliamentary Affairs, v. 57, nº 4, oct., 2004; pp.734-743.
14. ——: "Reflections on British elections and their study", en Annual Review of Political Science, v. 1, 1998; pp.451-464.
15. CLARKE, Harold D. (et al.): "Britain not at the polls, 2001", en PS : Political Science and Politics, v. 36, nº 1, jan., 2003; pp.59-64.
16. ——, (et al.): Political choice in Britain. Oxford: Oxford University Press, 2004.
17. COLE, Michael: "Adversary politics and proportional representation", en The Political Quarterly, v. 70, nº 2, apr.-jun., 1999; pp.166-174.
18. COSULICH, Matteo: "Riforma elettorale e governo parlamentare nella costituzione inglese, tra estensione del suffragio e proposta ultra-democratiche", en Giuseppe Di Gaspare (ed.): Walter Bagehot e la Costituzione Inglese : atti del seminario di studio, Roma, 14 dicembre 1998. Milano: Giuffrè, 2001; pp.73-99.

19. CURTICE, John: “The electoral system”, en Vernon Bogdanor (ed.): The British Constitution in the Twentieth Century. Oxford: Published by Oxford University Press for The British Academy, 2003; pp.483-520.

20. DENVER, David: Elections and voters in Britain. Houndmills [etc.]: Palgrave Macmillan, 2003. (Contemporary political studies).

21. ——: “Elections and voting behaviour”, en Half a Century of British Politics. Manchester [etc.]: Manchester University Press, 1997; pp.128-143.

22. ——: “Labour’s targeted constituency campaigning : nationally directed or locally produced?”, en Electoral Studies, v. 23, nº 4, dec., 2004; pp.709-726.

23. DUNLEAVY, Patrick: “Elections and party politics”, en Patrick Dunleavy (ed.): Developments in British politics. Houndmills (Basingstoke): Palgrave, 2002; pp.127-150.

24. DUNLEAVY, Patrick y MARGETTS, Helen: “The impact of UK electoral systems”, en Parliamentary Affairs, v. 58, nº 4, oct., 2005; pp.854-870.

25. ——: “The United Kingdom : reforming the Westminster model”, en Josep M. Colomer (ed.): *Handbook of Electoral System Choice.* Houndmills (Basingstoke): Palgrave Macmillan, 2004; pp.294-306.

26. EVANS, Geoffrey y NORRIS, Pippa, (eds.): *Critical elections : British parties and voters in long-term perspective.* London [etc.]: Sage, 1999.

27. EWING, Keith: “Transparency, accountability and equality : the political parties, elections and referendums act 2000”, en *Public Law,* 2001; pp.542-570.

28. EWING, Keith D.: “Promoting political equality : spending limits in British electoral law”, en *Election Law Journal,* v. 2, nº 4, 2003; pp.499-524.

29. FARRELL, David M.: “La réforme hésitante du système électoral de la Chambre des Communes”, en *Pouvoirs*, nº 93, 2000; pp.53-65.

30. FAUCHER, Florence: “Le système électoral britannique”, en Pascal Delwit y Jean-Michel De Waele (eds.): *Le Mode de Scrutin Fait-il l’Élection.* Bruxelles: Université de Bruxelles, 2000; pp.51-70.

31. FISHER, Justin: “Party expenditure and electoral prospects : a national level analysis of Britain”, en E*lectoral Studies : An International Journal,* v. 18, nº 4, dec., 1999; pp.519-532.

32. GIAMMUSSO, Valeria: *Par condicio : disciplina della communicazione politica ed elettorale sui mass-media in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e in altri paesi.* Roma: Servizio Studi del Senato della Repubblica, 1995. (Quaderni di documentazione ; 28).

33. GIBSON, Rachel K. (et al.): “Election campaigning on the www in the USA and UK : a comparative analysis”, en *Party Politics,* v. 9, nº 1, jan., 2003; pp.47-75.

34. HEATH, Anthony F.; JOWELL, Roger, y CURTICE, John: *How Britain votes.* Oxford [etc.]: Pergamon Press, 1985.

35. HOUGH, Dan y JEFFREY, Charlie, (eds.): *Devolution and electoral politics.* Manchester [etc.]: Manchester University Press, 2006. (Devolution series).

36. JOHNSTON, R. J. y PATTIE, Charles: "Inconsistent individual attitudes within consistent attitudinal structures : comments on an important issue raised by John Bartle's paper on causal modelling of voting in Britain", en *British Journal of Political Science,* v. 30, nº 2, apr., 2000; pp.361-374.

37. JOHNSTON, Ron (et al.): "Spatial scale and the neighbourhood effect : multinominal models of voting at two recent British general elections", en *British Journal of Political Science,* v. 35, nº 3, jul., 2005; pp.487-514.

38. JOHNSTON, Ron y MCLEAN, Iain: "Choosing between impossible alternatives : creating a new constituency map for Wales 2004 ", en *The Political Quarterly,* v. 76, nº 1, jan.-mar., 2005; pp.67-81.

39. KAVANAGH, Dennis: "Changes in electoral behaviour and the party systems", en *Parliamentary Affairs,* nº 4, 1994; pp.598-612.

40. ——: *Election campaigning : the new marketing of politics.* Oxford [etc.]: Blackwell, 1995.

41. KOTLER-BERKOWITZ, Laurence A.: "Religion and voting behaviour in Great Britain : a reassessment", en *British Journal of Political Science,* v. 31, nº 3, jul., 2001; pp.523-554.

42. LUNDBERG, Thomas Carl: "Electoral system reviews in New Zealand, Britain and Canada: a critical comparison", en *Government and Opposition,* v. 42, nº 4, aut., 2007; pp.471-490.

43. ——: *Proportional representation and the constituency role in Britain.* Houndmills [etc.]: Palgrave Macmillan, 2007.

44. ——: "Second-class representatives? : mixed-member proportional representation in Britain", en *Parliamentarty Affairs,* v. 59, nº 1, jan., 2006; pp.60-77.

45. MARSHALL, Ben y STEWART, Douglas: "Electoral registration : time for change", en *The Political Quarterly,* v. 76, nº 4, oct.-dec., 2005; pp.477-481.

46. MCMILLAN, Alistair: "La gestion du changement électoral au Royaume-Uni", en A. Laurent y P. Delfosse (dirs.): *Les Systèmes Électoraux : permanences et innovations.* Paris [etc.]: L'Hartmann, 2004; pp.217-240.

47. MILLER, William L.: "Electoral systems, elections and public opinion", en Jack Hayward; Brian Barry, y Archie Brown (eds.): *The British Study of Politics in the Twentieth Century.* New York: Oxford University Press, 1999; pp.223-255.

48. MILLER, William L.; SONNTAN, N., y BROUGHTON, D.: "Television in the 1987 British election campaign : its content and influence", en *Political Studies,* nº 4, 1989; pp.626-658.

49. MITCHELL, Paul: "The United Kingdom : plurality rule under siege", en Michael Gallagher y Paul Mitchell (eds.): *The Politics of Electoral Systems.* Oxford: Oxford University Press, 2005; pp.157-184.

50. MORGENSTERN, Scott y POTTHOFF, Richard F.: "The components of elections : distric effects distric heterogenity, and volatility", en BCN : *Political Science Debates,* nº 2, 2003; pp.29-71.

51. NADEAU, Richard; NIEMI, R. G., y AMATO, T.: "Elite economic forecasts, economic news, mass economic expectations, and voting intentions in Great Britain ", en *European Journal of Political Research,* v. 38, nº 1, aug., 2000; pp.135-170.

52. NORRIS, Pippa: “The twilight of Westminster? : electoral reform and its consequences”, en *Political Studies,* v. 49, nº 5, dec., 2001; pp.877-900.

53. PATTIE, C. J. y JOHNSTON, R. J.: “Civic literacy and falling electoral turnout : the United Kingdom 1992-1997”, en *Canadian Journal of Political Science = Revue Canadienne de Science Politique,* v. 36, nº 3, jul.-aug., 2003; pp.579-599.

54. PATTIE, Charles; JOHNSTON, Ron, y SANDERS, David: “On babies and bathwater : a comment on evans economic and politics revisited “, en *Political Studies,* v. 47, nº 5, dec., 1999; pp.918-932.

55. PAUNER CHULVI, Cristina: “El sistema electoral de Westminster y su proyectada reforma : el fin de la fórmula mayoritartia”, en *Revista de las Cortes Generales,* nº 50, 2000; pp.221-254.

56. PEARSE, Hilary: “Geographic representation and electoral reform”, en *Canadien Parlamentary Review,* v. 28, nº 3, aut., 2005; pp.26-32.

57. PETRILLO, Pier Luigi: “La perenne campagna elettorale dell’opposizione parlamentare in Italia e in Gran Bretagna”, en *Quaderni dell’Osservatorio Elettorale,* nº 51, giug., 2004; pp.81-118.

58. QUINN, Kevin M.; MARTIN, Andrew D., y WHITFORD, Andrrew B.: “Voter choice in multy-party democracies : a test of competing theories and models”, en *American Journal of Political Science,* v. 43, nº 4, oct., 1999; pp.1231-1247.

59. RANDALL, Ed: “Careless with our democracy : group think and voting reform”, en *The Political Quarterly,* v. 76, nº 3, jul.-sept., 2005; pp.402-413.

60. ROSSITER, D. J.; JOHNSTON, R. J., y PATTIE, C. J.: *The boundary commissions : redrawing the UK’s map of parliamentary constituencies.* Manchester: Manchester University Press, 1999.

61. ——: “Estimating the partisan impact of redistricting in Great Britain “, en *British Journal of Political Science,* v. 27, nº 2, apr., 1997; pp.319-330.

62. ——: “Redistrictind and electoral bias in Great Britain”, en *British Journal of Political Science,* v. 27, nº 3, jul., 1997; pp.466-472.

63. SAALFELD, Thomas: “The United Kingdom : still a single chain of comman? : the hollowing out of the Westminster model”, en Kaare Strom; Wolfgang C. Müller, y Totbjörn Bergman (eds.): *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies.* Oxford: Oxford University Press, 2003; pp.620-648.

64. SANDERS, David: “Electoral competition in contemporary Britain”, en Colin Hay (ed.): *British Politics Today.* Cambridge: Polity Press, 2002; pp.79-100.

65. SCARBROUGH, Elinor: “The British election study and electoral research”, en *Political Studies,* v. 48, nº 1, mar., 2000; pp.391-414.

66. SCHOFIELD, Norman: “A valence model of political competition in Britain : 1992-1997”, en *Electoral Studies,* v. 24, nº 3, sept., 2005; pp.347-370.

67. SCHOFIELD, Norman y SENED, Itai: “Modeling the interaction of parties, activists and voters : why is the political center so empty?”, en *European Journal of Political Research,* v. 44, nº 3, may, 2005; pp.355-390.

68. SEYD, Ben: “Electoral systems and party funding”, en Jeffrey Jowell y Dawn Oliver (eds.): *The Changing Constitution.* Oxford: Oxford University Press, 2000; pp.292-318.

69. STUBAGER, Rune: “Preference-shaping : an empirial test”, en *Political Studies,* v. 51, nº 2, jun., 2003; pp.241-261.

70. TAK, Wing Chan y CLAYTON, Matthew: “Should the voting age be lowered to sixteen? : normative and empirical considerations “, en *Political Studies,* v. 54, nº 3, oct., 2006; pp.533-558.

71. TONGE, Jonathan: “Is politics still class based?”, en *Debates in British Politics Today.* Manchester [etc.]: Manchester University, 2000; pp.218-233.

72. VALASTRO, Alesandra: “Principi comuni a livello europeo in material di propaganda elettorale televisiva”, en *Quaderni Costituzionali,* v. 1, apr., 1997; pp.109-129.

73. WATT, Bob: *UK election law : a critical examination.* London [etc.]: Glass House Press, 2006. (Contemporary issues in public policy).

74. WEBB, Paul: “Parties and party systems : modernisation, regulation and diversity”, en *Parliamentary Affairs,* v. 54, nº 2, apr., 2001; pp.308-321.

75. ——: “Political parties : adapting to the electoral market”, en Patrick Dunleavy (et al.): *Developments in British Politics.* Houndmills (Basingstoke): Palgrave, 2002; pp.151-168.

76. ——: “La presidenzializzazione e l’erosione del governo di partido nei sistemi parlamentari: il caso del Regno Unito”, en *Rivista Italiana di Scienza Politica,* nº 3, dic., 2004; pp.347-377.

77. WRIGHT, Tony, (ed.): *The British political process : an introduction.* London [etc.]: Routledge, 2000.

78. ZUCKERMAN, A. S.; KOTLER-BERKOWITZ, A. A., y SWAINE, L. A.: “Anchoring political preferences : the estructural bases of stable electoral decisions and political attitudes in Britain”, en *European Journal of Political Research,* v. 33, nº 3, apr., 1998; pp.285-321.

V.4. Direcciones web

Electoral Commission
http://www.electoralcommission.org.uk/

Department for Constitutional Affairs
http://www.dca.gov.uk/elections/legs.htm

Justice Govennement
justice.gov.uk/guidance/localandregional.htm

Office of Public Sector Information
http://www.opsi.gov.uk/acts.htm

Parliament
http://www.parliament.uk/about/how/elections/general.cfm

Statute law
http://www.statutelaw.gov.uk/SearchResults.aspx?TYPE=QS&Title=elections&Year=&Number=&LegType=All+Legislation